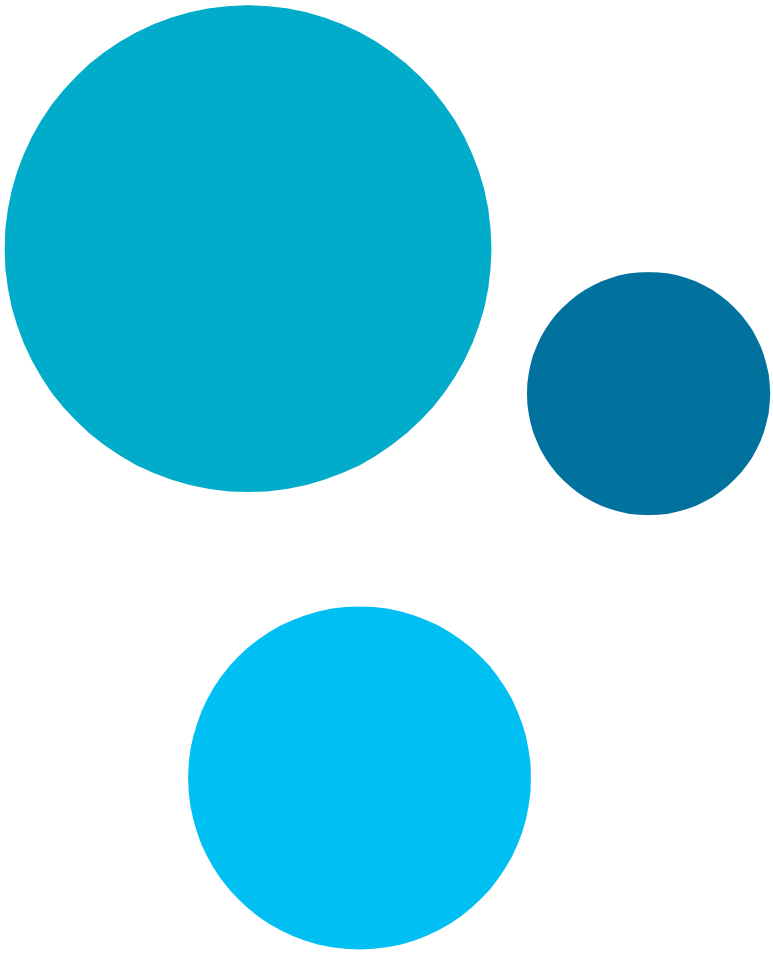
el Justicia de Aragón

INFORME
ESPECIAL **2016**

INFORME SOBRE EL ESTADO DE OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARAGONÉS



RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONFLICTOS DE COMPETENCIA INTERPUESTOS, EN TRAMITACIÓN Y RESUELTOS DURANTE 2016 • 4

1. Recursos de inconstitucionalidad • 5

1.1. Interpuestos por el Gobierno de la Nación, Comunidades Autónomas y otros. • 5

1.2. Interpuestos por el Gobierno de Aragón o por las Cortes de Aragón. • 14

2. Cuestiones de inconstitucionalidad • 45

3. Conflictos de competencia • 45

ESTADO DE OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN 2016 • 3

1. Observancia y aplicación del Derecho Civil Aragonés • 47

1.1. Resumen por Juzgados y Tribunales - Año 2015 • 47

1.2. Resumen por Juzgados y Tribunales - periodo 1990/2016 • 48

1.3. Listado de la Jurisprudencia Civil aragonesa, por fechas y por materias • 50

2. Interpretación de Derecho Civil Aragonés • 168

2.1. Interpretación judicial • 168

2.2. Interpretación doctrinal • 539

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS • 544

1. Sentencias dictadas durante 2016 en las que se declara la nulidad total o parcial de normas de derecho público aragonés • 546

2. Interpretación doctrinal del Derecho Público Aragonés • 588

ACTUACIONES CONDUCENTES A LA DIFUSIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARAGONÉS • 589

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONFLICTOS DE COMPETENCIA INTERPUESTOS, EN TRAMITACIÓN Y RESUELTOS DURANTE 2016

1. RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD

1.1. Interpuestos por el Gobierno de la Nación, Comunidades Autónomas y otros.

A) Recursos interpuestos en 2016.

- Recurso de inconstitucionalidad nº 2374-2016, contra el artículo 5 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuanto a las modificaciones introducidas en el artículo 82, apartados 5 y 6, la disposición adicional séptima, apartados tres, cuatro, seis (salvo el título de la disposición adicional y su último párrafo, el quinto, que no se impugnan) y ocho, y la disposición transitoria sexta de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de aguas y ríos de Aragón.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 7 de junio de 2016, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad reseñado, promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Mixto contra los preceptos indicados de la mencionada Ley.

- Recurso de inconstitucionalidad nº 4952-2016, contra los artículos 1, 9 y 12; las disposiciones transitorias segunda y tercera y la disposición adicional cuarta del Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 4 de octubre de 2016, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad reseñado, promovido por el Presidente del Gobierno contra los preceptos indicados de la mencionada Ley. En la misma resolución se dejó constancia de que estos mismos artículos quedaban suspendidos de vigencia y aplicación al haber invocado el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución desde la fecha de interposición del recurso -19 de septiembre de 2016-, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el BOE, para terceros.

- Recurso de inconstitucionalidad nº 5724-2016, contra el inciso final del apartado Uno del artículo 49 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, que modifica el artículo 5 de la Ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de noviembre de 2016, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad reseñado, promovido por el Presidente del Gobierno contra los preceptos indicados de la mencionada Ley. En la misma resolución se dejó constancia de que estos mismos artículos quedaban suspendidos de vigencia y aplicación al haber invocado el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución desde la fecha de interposición del recurso -3 de noviembre de 2016-, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el BOE, para terceros.

B) Recursos interpuestos en anteriores años y que continúan en tramitación en 2016.

- Recurso de inconstitucionalidad nº 4682-2015, contra los artículos 1.2b), c) y d); 4 a); 5 a) y p); 7.1; 8, en cuanto a presas y embalses; 12.2 b) y 4; 15.1 b), c) y n); 19.2 a) 1º, c) 2º y c) 3º; 50; 67; 69 a), d) y f) 1º; 70 a) y c); 71.3; 72; y 76.3; y disposición transitoria primera de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de septiembre de 2015, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad reseñado, promovido por el Presidente del Gobierno contra los preceptos indicados de la mencionada Ley. En la misma resolución se dejó constancia de que estos mismos artículos quedaban suspendidos de vigencia y aplicación al haber invocado el Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución (BOE nº 222, de 16 de septiembre de 2015). Posteriormente, esta suspensión se levantó en virtud de auto del Pleno del Tribunal Constitucional de 15 de diciembre de 2015 (BOE nº 303, de 19 de diciembre de 2015).

- Recurso de inconstitucionalidad nº 2037-2014, en relación con la Disposición Adicional Sexta del Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Aragón.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de mayo de 2014, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado, promovido por la Presidenta del Gobierno en funciones contra la Disposición Adicional Sexta de la mencionada Ley.

- Recurso de inconstitucionalidad nº 6868-2011, contra la disposición adicional sexta de la Ley 5/2011, de 10 de marzo, del Patrimonio de Aragón.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de enero de 2012, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado, promovido por el Presidente del Gobierno contra la disposición adicional sexta de la mencionada Ley.

C) Sentencias dictadas en 2016.

- Sentencia 56/2016, de 17 de marzo de 2016 Recurso de inconstitucionalidad nº 4980-2013, en relación con los artículos 2.2, 5, 6, 7, 8 y 16 de la Ley de Cortes de Aragón 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 24 de septiembre de 2013, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado, promovido por más de cincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, IU, ICV-EUIA, CHA, La Izquierda Plural, Catalán (Convergència i Unió) y Mixto contra varios preceptos de la mencionada Ley.

Se presentan en la sentencia, en síntesis, los siguientes motivos de inconstitucionalidad por parte de los recurrentes:

"El primero y más general, se refiere a la inadecuación de la nueva regulación al marco constitucional de las lenguas y es la base para la impugnación de los arts. 2.2, 5, 7 y 8 de la Ley. El segundo, dirigido contra los arts. 5 y 6 de la Ley, denuncia la desregulación y deslegalización de aspectos esenciales del régimen jurídico de las lenguas propias de Aragón con infracción del principio de reserva de ley. El tercero, que se proyecta sobre el artículo 16, trata de la discriminación de facto que se causa a los hablantes de las lenguas propias minoritarias de Aragón."

En este caso, el Tribunal Constitucional desestima íntegramente el recurso,

Se transcriben, ahora, los Fundamentos Jurídicos de la sentencia:

"1. El presente recurso de inconstitucionalidad ha sido promovido por más de

cincuenta Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios Socialista, IU, ICV-EUIA, CHA, La Izquierda Plural, Catalán (Convergència i Unió) y Mixto y se dirige contra los arts. 2.2, 5, 6, 7, 8 y 16 de la Ley de Cortes de Aragón 3/2013 de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Los Diputados impulsores del recurso, según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, sostienen que la regulación contenida en los preceptos impugnados no se adecua al marco constitucional de regulación del pluralismo lingüístico (art. 3.2 y 3.3 CE), que con estos preceptos se ha operado una merma del estatus y garantía del

aragonés y catalán como lenguas de uso tradicional en ciertas zonas de Aragón, así como una pérdida de derechos para los hablantes de estas lenguas minoritarias (art. 9.3 CE), quienes resultan discriminados por una legislación que no tiene en cuenta su singularidad y no establece medidas específicamente adaptadas a la misma (art. 14 CE), ignorando las obligaciones asumidas por el Estado español al ratificar la Carta Europea de lenguas regionales y minoritarias. Denuncian asimismo que la Ley impugnada, al encomendar al ejecutivo autonómico la tarea de delimitar las zonas de empleo predominante de las lenguas propias, infringe la reserva de ley prevista en el Estatuto de Autonomía de Aragón (art. 7.2 EAAr). El recurso se cierra con una reflexión crítica a propósito de la falta de medidas legales concretas consecuentes con la realidad plurilingüe de Aragón que hace que, pese al reconocimiento de esta realidad en el Estatuto, su régimen jurídico sea indistinguible del de las Comunidades monolingües.

Tanto las Cortes como el Gobierno de Aragón consideran el recurso infundado. Sus alegaciones coinciden en calificar de errada la interpretación que los recurrentes hacen del marco regulador, constitucional y estatutario, y sostienen que los presuntos motivos de inconstitucionalidad no son otra cosa más que el desacuerdo de los recurrentes con una legítima opción legislativa que cuenta con respaldo estatutario y constitucional.

2. Antes de entrar en el examen de las impugnaciones concretas y para precisar su exacto alcance convendrá, como también han hecho los personados en este procedimiento en sus escritos, situar en contexto las normas impugnadas con una breve referencia al marco regulador y un somero repaso de las vicisitudes de la legislación sobre lenguas en la Comunidad de Aragón.

En la configuración del estatuto de las lenguas españolas distintas del castellano la Constitución deja un importante espacio a la regulación por los Estatutos y las leyes de las Comunidades Autónomas. En el artículo 3 del texto constitucional se fijaron los acuerdos básicos que actúan como premisa para cualquier desarrollo normativo en este ámbito sin que se imponga un único modelo de regulación y gestión del pluralismo lingüístico. Según este Tribunal advirtió tempranamente, «la Constitución de 1978 reconoce la realidad plurilingüe de la Nación española y, viendo en ella un valor cultural no sólo asumible, sino también digno de ser promovido, obtiene de dicha realidad una serie de consecuencias jurídicas en orden a la posible atribución de carácter oficial a las diversas lenguas españolas, a la protección efectiva de todas ellas y a la configuración de derechos y deberes individuales en materia lingüística» (STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2). En cuanto a la «posible atribución de carácter oficial», el art. 3.2 de la Constitución remite a los Estatutos de Autonomía la decisión sobre el reconocimiento de las lenguas propias como lenguas oficiales y la determinación, en cada caso, del alcance de la cooficialidad.

Para lo demás, tanto en lo que se refiere a las medidas de protección como a la

configuración de los derechos y deberes individuales en materia lingüística, habrá que estar a lo que dispongan Estado y Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia, pues, como también se afirma en la sentencia antes citada, «no cabe contraponer el castellano en cuanto lengua española oficial del Estado, y las 'demás lenguas españolas' en cuanto cooficiales en las distintas Comunidades, como asuntos privativos respectivamente del Estado en sentido estricto y de las Comunidades Autónomas individualmente consideradas» (STC 82/1986, FJ 4) y la garantía constitucional del pluralismo lingüístico, en los términos del art. 3.3 de la Constitución, incumbe por igual al Estado y a las Comunidades Autónomas.

La Ley de la que proceden los preceptos recurridos –Ley de Cortes de Aragón 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón–, deroga y sustituye a la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón y, como esta, se dicta en desarrollo de lo previsto en el art. 7 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Bajo la rúbrica «Lenguas y modalidades lingüísticas», este artículo dispone lo siguiente:

«1. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento.

2. Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de Aragón, y favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas.

3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.»

La remisión al legislador ya estaba presente en la regulación estatutaria anterior, introducida con la reforma de 1996 del Estatuto (Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por Ley Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, de reforma de dicho Estatuto), aunque era menos pormenorizada y se limitaba a establecer que «[s]e garantizará [la] enseñanza y el derecho de los hablantes [de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón] en la forma que establezca una Ley de Cortes de Aragón para las zonas de utilización predominante de aquéllas». La Ley en cuestión no llegó a dictarse.

Con todo, la modificación de 1996 supuso un cambio significativo respecto de la redacción originaria del art. 7 del Estatuto (Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Aragón) que tan solo disponía que «[l]as diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección, como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico».

seguridad jurídica impone en cualquier estado de Derecho que la sucesión de normas se atenga a ciertas condiciones, entre ellas no se encuentra la interdicción de la reforma peyorativa. El art. 9.3 CE, al tiempo que garantiza la seguridad jurídica, no veda el cambio sino la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y, en relación con estas disposiciones, «lo que el art. 9.3 CE prohíbe es "la incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores, de suerte que la incidencia en los derechos, en cuanto a su proyección hacia el futuro, no pertenece al campo estricto de la irretroactividad"» (STC 49/2015, de 9 de abril, FJ 4, con cita de la STC 42/1986, de 10 de abril). En consecuencia, esta alegación debe ser desestimada.

Los recurrentes sostienen también que los preceptos impugnados, al no denominar a estas lenguas con su nombre tradicional, aragonés y catalán, lesionan la garantía constitucional, que exige especial respeto y protección de las lenguas. Se aduce que la pérdida del nombre tradicional, por el que son comúnmente conocidas, las despoja de identidad o, como se dice en el escrito de interposición, reivindicando la protección de la lengua como una garantía institucional, las priva de un elemento de reconocibilidad. Por ello, los recurrentes entienden que recurrir al circunloquio en los artículos 2.2 y 5 para

evitar deliberadamente toda referencia al aragonés y catalán implica, en definitiva, según esto, una regresión en el estatuto de estas lenguas y la lesión de la confianza legítima de los afectados.

El art. 4.1 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del patrimonio cultural aragonés ha sido, sin embargo, modificado por el art. 35 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta modificación es relevante, pues determina que, en lo relativo a este concreto motivo del recurso, la impugnación haya perdido objeto al producirse la recuperación de la denominación «aragonés» y «catalán» para referirse a las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón que regulan los preceptos legales ahora impugnados. En efecto, según dispone el citado art. 4.1 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del patrimonio cultural aragonés, en la redacción ahora vigente, «[e]l aragonés y el catalán de Aragón, en los que están incluidas sus variedades dialectales, son las lenguas y modalidades lingüísticas propias a que se refieren el art. 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón». Esta reforma legal, aunque no modifica expresamente los preceptos impugnados en este proceso constitucional, incide directamente en la cuestión que ahora se examina, pues, al establecer que el aragonés y el catalán de Aragón son las lenguas y modalidades lingüísticas propias a las que se refiere la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, determina la pérdida de vigencia de la denominación en su día adoptada, en la que los recurrentes han fundamentado la inconstitucionalidad de los artículos 2.2 y 5 por estimarla contraria al principio de respeto y protección de las lenguas. De este modo, versando el enjuiciamiento sobre un recurso de inconstitucionalidad, que tiene por finalidad la depuración objetiva del

ordenamiento jurídico, y habiendo desaparecido el elemento causal que constituye el presupuesto del motivo en el que los recurrentes fundamentan la inconstitucionalidad de estos preceptos, no procede entrar a analizar esta concreta impugnación.

Tampoco procede examinar la impugnación de los artículos 7 y 8. Como ha declarado este Tribunal, entre otras muchas en la STC 152/2014, de 25 de septiembre, FJ 4, «[c]uando lo que se encuentra en juego es la depuración del ordenamiento jurídico resulta carga de los recurrentes, no solo abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también colaborar con la justicia del Tribunal mediante un pormenorizado análisis de las cuestiones que se suscitan, por lo cual, si no se atiende esta exigencia, se falta a la diligencia procesalmente requerida (SSTC 13/2007, de 18 de enero, FJ 1, y 217/2013, de 19 de diciembre, FJ 1, por todas)». En el presente caso los recurrentes no han cumplido la carga alegatoria a la que están obligados, pues se han limitado a aducir que, al unificarse las diferentes Academias propias en una sola (art. 7), se va a establecer una norma lingüística única (art. 8), que puede conllevar la desaparición del aragonés a medio plazo. Esta argumentación no puede fundamentar una pretensión de declaración de inconstitucionalidad de los referidos preceptos, pues se limita a expresar un temor –una mera hipótesis, sobre la que no existe específicamente argumentación alguna–, que, como tal, es inhábil para cumplir la carga alegatoria exigible a quienes pretenden obtener de este Tribunal una declaración de inconstitucionalidad.

4. La segunda impugnación se dirige contra los arts. 5 y 6 de la Ley por estimar que vulneran lo que el recurso denomina «el principio de reserva de ley». Entienden los recurrentes que, contrariando lo previsto en el art. 7.2 EAAr, que contiene una llamada a la Ley de Cortes de Aragón para el establecimiento de las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades lingüísticas propias, los artículos impugnados deslegalizan esta materia, al disponer que será al Gobierno de Aragón, previa audiencia de los municipios afectados, quien declare estas zonas. Según se aduce, la regulación que contienen estos preceptos dejan al arbitrio de las autoridades locales derechos básicos vinculados al ejercicio de derechos fundamentales, y por ello, además de la vulneración de la reserva de ley invocada, se alega también la infracción de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.

Este motivo del recurso tampoco puede prosperar. No hay duda de que las disposiciones del Estatuto, también en lo que se refiere a la llamada a la Ley para la regulación de ciertas materias, deben ser respetadas por el legislador y que la infracción del Estatuto por la Ley autonómica es recurrible ante este Tribunal, en la medida en que el Estatuto es parámetro de validez de la Ley autonómica. Otro entendimiento supondría «privar a los Estatutos de Autonomía de su condición de "norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma" (art. 147.1 CE), a cuyo respeto, en todas sus partes, vienen principalmente obligados los órganos instituidos y regulados, precisamente, por los propios Estatutos de Autonomía» (STC 223/2006, de 6 de julio, FJ 3).

En este caso, sin embargo, no puede apreciarse que el legislador autonómico haya vulnerado la reserva de ley que establece el art. 7.2 EAAr. En lo que ahora interesa, la reserva de ley que contiene este precepto se limita a establecer que «[u]na ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón». Esta previsión estatutaria no puede considerase vulnerada por los preceptos ahora impugnados, pues es el propio legislador el que establece la existencia

de dos zonas de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia y sus modalidades lingüísticas en la Comunidad Autónoma: la de las áreas pirenaica y prepirenaica y la del área oriental (art. 5) y el que establece también el procedimiento para declarar las zonas y municipios que se integran las misma, al atribuir la declaración de las zonas de utilización de estas lenguas al Gobierno, tras oír a los ayuntamientos afectados.

Como ha señalado reiteradamente este Tribunal, la reserva de ley «no excluye, ciertamente, la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en favor del legislador» (STC 83/1984, de 24 de julio en el mimos sentido, SSTC 225/1993, de 8 de julio, FJ 6; 18/2011, de 3 de marzo, FJ 9, y 233/2015, de 5 de

noviembre FJ 3). Esta doctrina, aunque está establecida en relación con materias que están reservadas a la ley por la Constitución, resulta plenamente aplicable al supuesto que ahora nos ocupa, pues, en definitiva, de lo que se trata también en este caso es de garantizar el cumplimiento de la norma estatutaria que establece reserva a la Ley autonómica una determinada materia. En el caso que ahora se examina esta reserva no puede considerarse degradada por la regulación que efectúan los arts. 5 y 6 de la Ley de Cortes de Aragón 3/2013 de 9 de mayo, pues cabe entender que cuando el art. 7.2 EAAr

dispone que «[u]na ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante de las lenguas y modalidades propias de Aragón», no está exigiendo que sea la Ley la que delimite dichas zonas y establezca los municipios concretos que se integran en ellas, sino únicamente que las prevea y regule el modo en el que van a ser delimitadas. Los preceptos impugnados respetan estas exigencias, pues como se ha indicado, el artículo 5 establece las zonas de utilización de las lenguas y modalidades lingüísticas propias y el artículo 6 establece el procedimiento para su delimitación, atribuyendo la competencia para declarar los municipios que integran dichas áreas al Gobierno de Aragón y estableciendo como trámite necesario en ese procedimiento la audiencia de los ayuntamientos afectados.

La regulación que establecen los preceptos impugnados para delimitar las zonas de utilización predominante de las lenguas y modalidades lingüísticas propias no es, ciertamente, la única posible, pero de esto no puede concluirse que la decisión adoptada por el legislador sea contraria al art. 7.2 EAAr, del que no puede derivarse la exigencia,

como parecen sostener los recurrentes, de que la delimitación de estas zonas debe efectuarse en una norma con rango de ley. Como se afirmó en la STC 15/2000, de 20 de enero, FJ 4, «más allá de los límites explícitos que para el legislador autonómico resulten de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía, como norma institucional básica, no cabe configurar para su labor límites o reservas implícitas», y en el presente caso, como acaba de indicarse, ni del Estatuto de Autonomía ni tampoco de la Constitución, determinan que solo por ley pueden delimitarse las zonas de utilización de las lenguas y modalidades lingüísticas propias.

Por otra parte, el riesgo de inestabilidad e inseguridad que los recurrentes atribuyen a la forma en la que los preceptos legales disponen que han de determinarse las zonas de utilización de las lenguas y modalidades lingüísticas propias –consideran que, al hacer depender la determinación de las zonas de decisiones municipales y del ejecutivo autonómico, el resultado podría ser alterado cada vez que se produce un cambio en la composición política de los órganos de gobierno tras las elecciones– no puede conllevar, en sí mismo, la lesión del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) que los recurrentes aducen. Como este Tribunal ha sostenido reiteradamente, ni de este principio de ningún otro se deriva derecho al mantenimiento de un determinado régimen jurídico, pues ello daría lugar a la petrificación del ordenamiento jurídico [SSTC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 17, y 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 9 c), entre otras muchas], por lo que no puede fundamentar una vulneración del referido principio constitucional la mera posibilidad de que la delimitación de estas zonas pueda ser objeto de modificaciones.

5.

La última impugnación tiene por objeto el art. 16 de la Ley que en materia de uso de las lenguas propias y respecto de las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas, que dispone: «Se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a expresarse de forma oral y escrita, además de en castellano, en las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, en sus respectivas zonas de utilización predominante, de acuerdo con lo previsto en la presente ley». La tacha de inconstitucionalidad deriva, según el recurso, no de lo que el precepto dice, sino de lo que no dice. Más específicamente, el reproche que se hace es que puesto que no se precisa ninguna concreta obligación para los poderes públicos, el precepto es una fórmula vacía, que no toma en consideración la situación singular de los hablantes de las lenguas

minoritarias. Lo que se denuncia es, en definitiva, una vulneración de la igualdad por indiferenciación, esto es, por no contemplar la ley un régimen especial y específico para los hablantes de las lenguas propias en su relación con las administraciones local y autonómica.

Esta impugnación también ha de ser desestimada. Como el Tribunal ha declarado reiteradamente, si bien el art. 14 CE proscribe la distinción infundada o discriminatoria, «no consagra un derecho a la desigualdad de trato, ni ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales, no existiendo un derecho subjetivo al trato normativo desigual» (STC 183/2014, de 6 de noviembre de 2014, FJ 3 que cita, por todas, las SSTC

38/2014, de 11 de marzo, FJ 6, y 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 13). Debe indicarse, por otra parte, que la invocación en este punto de la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias, que en su artículo 10 contiene una relación de compromisos que los poderes públicos asumen en relación con el uso de lenguas minoritarias en procedimientos administrativos y en la relación con las autoridades administrativas y los servicios públicos, no altera esta conclusión. La Carta, como tratado válidamente celebrado, se integra desde su ratificación en el «ordenamiento jurídico interno» (art. 96.1 CE), y tiene además el valor interpretativo que le confiere el art. 10.2 CE (ATC 166/2005, de 19 de abril, FJ 4). De ahí que este Tribunal haya declarado que aunque la «Carta no puede erigirse en canon autónomo de validez del precepto legal cuestionado, podemos sin embargo convenir en que la misma proporciona pautas interpretativas del régimen jurídico de la cooficialidad lingüística.» (ATC 166/2005, de 19 de abril, FJ 5). Ahora bien, los criterios hermenéuticos que puede aportar este tratado internacional solo pueden tener la eficacia que la propia Carta determina. En relación con la aplicación de las obligaciones contenidas en la parte III (arts. 8 a 14 relativos a aspectos tales como enseñanza, justicia, autoridades administrativas y servicios públicos o medios de comunicación) la Declaración del Estado español precisa que respecto de las lenguas no oficiales que los Estatutos de Autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan se aplicarán las disposiciones «que puedan razonablemente aplicarse», atendidos los objetivos y principios de la Carta. En consecuencia, no cabe deducir para el caso de las lenguas propias que no tienen la consideración de oficial la aplicabilidad inmediata de las obligaciones de la parte III de la Carta, incluidas las contenidas en el art. 10 de la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias, ni, por tanto, puede reconocerse, en relación con este tipo de lenguas, que dichos preceptos tengan el mismo valor interpretativo que tienen respecto las lenguas que los Estatutos de autonomía reconocen como oficiales.

Por todo ello, no puede apreciarse que al art. 16 de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, al limitarse a reconocer el «derecho a expresarse» en las lenguas propias sin precisar qué concretas obligaciones derivan para las administraciones local y autonómica del ejercicio de este derecho en las zonas de utilización predominante haya vulnerado el principio de igualdad (art. 14 CE) por incurrir en discriminación por indiferenciación, como sostienen los recurrentes, pues, como se ha indicado, de acuerdo con reiterada jurisprudencia el principio de igualdad no garantiza un derecho al trato normativo desigual, ni tampoco puede apreciarse que en el presente caso, en virtud de lo establecido en el art. 10. 2 CE, la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias exija una interpretación distinta del referido principio constitucional.

1.2. Interpuestos por el Gobierno de Aragón o por las Cortes de Aragón.

A) Recursos interpuestos en 2016.

- Recurso de inconstitucionalidad nº2192-2016, contra las disposiciones adicional quinta, transitoria única, derogatoria única y finales primera y

segunda de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de mayo de 2016, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado promovido por el Gobierno de Aragón contra determinados preceptos de la mencionada Ley.

- Recurso de inconstitucionalidad nº4621-2016, contra el artículo 2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario de 2016, en cuanto aprueba créditos para las inversiones que el Estado realizará durante el ejercicio de 2016 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de septiembre de 2016, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado promovido por la Diputación General de Aragón contra el artículo 2 de la mencionada Ley.

En este recurso de inconstitucionalidad, se procedió a dictar sentencia en el mismo año 2016, y así se recoge en el apartado C) ulterior.

B) Recursos interpuestos en anteriores años y que están aún en tramitación.

En el año 2016, los recursos que se encontraban pendientes de años anteriores han sido objeto de resolución, tal y como se recoge en el apartado siguiente.

C) Sentencias y otras resoluciones dictadas en 2016 sobre recursos de inconstitucionalidad.

- Recurso de inconstitucionalidad nº 4948-2013, promovido por la Diputación General de Aragón, en relación con los artículos 2.e) y 7 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en relación con su aplicación al recurso de casación foral aragonés.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 18 de octubre de 2016, acordó declarar la extinción del recurso de inconstitucionalidad indicado, por desaparición sobrevenida de su objeto.

- Sentencia 217/2016, de 15 de diciembre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad nº4621-2016, contra el artículo 2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario de 2016, en cuanto aprueba créditos para las inversiones que el Estado realizará durante el ejercicio de 2016 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 20 de septiembre de 2016, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado promovido por la Diputación General de Aragón contra el artículo 2 de la mencionada Ley.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de abril de 2014, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado, promovido por las Cortes de Aragón contra varios preceptos de la mencionada Ley.

En la sentencia, con fallo desestimatorio, se realiza un examen del principio de cooperación y de las funciones de las comisiones mixtas Estado-Comunidad Autónoma sobre asuntos económico-financieros.

Se transcriben, ahora, los Fundamentos Jurídicos de la sentencia:

"1. En el presente proceso constitucional debemos resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Diputación General de Aragón contra el art. 2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para 2016, en cuanto aprueba créditos para las inversiones que el Estado realizará durante ese ejercicio en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Como se expone en los antecedentes, el Letrado de la Diputación General de Aragón argumenta que se no se han respetado los arts. 88 y 109.2 d) de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón (en adelante, EAAr).

Específicamente se considera vulnerada la función que el art. 109.2 d) EAAr atribuye a la comisión mixta de asuntos económico-financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a «estudiar las inversiones que el Estado realizará en la Comunidad Autónoma de Aragón».

El Abogado del Estado, en los términos expuestos en los antecedentes, ha interesado la desestimación del recurso por entender que no concurre la vulneración estatutaria denunciada.

2. Así formulada la tacha que se imputa a la norma impugnada, y antes de comenzar a resolverla, hay que realizar alguna precisión adicional acerca de la delimitación del objeto del recurso y de la pretensión que en él se formula.

El objeto de este recurso es el art. 2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para 2016, únicamente en cuanto aprueba créditos para las inversiones que el Estado realizará durante el ejercicio de 2016 en la Comunidad Autónoma de Aragón. El recurso denuncia la contravención de una disposición integrada en el bloque de constitucionalidad [art. 28.1 de la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional (LOTC)], como es el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que, en cuanto integrante del mencionado bloque, se erige en parámetro de enjuiciamiento de la validez de las disposiciones normativas con valor de ley dictadas por el Estado [STC 13/2015, FJ 5 c), con cita de la STC 291/2005, de 10 de noviembre, FJ 8].

La pretensión de declaración de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad que se formula se expresa por el Letrado autonómico en los términos siguientes: «los efectos de la nulidad de los créditos presupuestarios que se solicita no se debe extender a todas la inversiones ya realizadas o en fase de ejecución. En este sentido la nulidad que se pretende no es de nulidad absoluta sino de anulabilidad».

Con la expresión «anulabilidad», que no aparece en el art. 39 LOTC, la demanda parece referirse a que, en el caso de que este Tribunal estimase que la previsión impugnada es inconstitucional, deberían modularse los efectos de la declaración de nulidad que esa inconstitucionalidad trae, en principio, consigo en los términos del mencionado art. 39 LOTC. De ese modo en realidad lo que se solicita a este Tribunal es que esa nulidad no afecte a las inversiones del Estado previstas en los presupuestos generales del Estado para 2016 ya realizadas o en fase de ejecución. Por tanto, atendiendo a la pretensión formulada, lo que debemos determinar es si se han infringido las previsiones de los arts. 88 y 109.2 d) EAAr, en cuanto que supondría un vicio de constitucionalidad determinante de la anulación de las partidas presupuestarias relativas a las inversiones del Estado en Aragón, que no hayan sido iniciadas en el momento de dictarse la presente Sentencia.

3. En la resolución de la controversia así delimitada resulta precisa una breve referencia a la doctrina constitucional en torno los principios de cooperación y lealtad institucional que, en los términos que más adelante se expondrán, se entienden aquí vulnerados, así como en relación con órganos bilaterales similares a la Comisión prevista en el art. 109 EAAr, una de cuyas funciones se considera infringida.

El principio de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas está

implícito en el correcto funcionamiento del Estado de las Autonomías. Depende en buena medida de la estricta sujeción de uno y otras a las fórmulas racionales de cooperación, consulta, participación, coordinación, concertación o acuerdo previstas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía (STC 181/1988, de 13 de octubre, FJ 7).

Sobre dicho principio hemos destacado tanto su carácter necesario en un Estado descentralizado como el nuestro, como su relación con la idea de la voluntariedad, frente a la vinculación de la coordinación con la de la imposición u obligatoriedad. (STC 86/2014, de 29 de mayo, FJ 5, por todas). Por otro lado, su instrumentación y puesta en práctica no permite alterar las competencias de los sujetos llamados a cooperar, a través

de cualesquiera técnicas que revistan ese carácter voluntario, sin modificar la titularidad y el ejercicio de las competencias, pues este Tribunal ha venido también reconociendo un margen de discrecionalidad en la determinación de los específicos mecanismos cooperativos (STC 195/2012, de 31 de octubre, FJ 5 in fine).

En suma, el principio de cooperación tiende a garantizar la participación de todos los entes involucrados en la toma de decisiones (STC 101/2016, de 25 de mayo, FJ 9, con cita de otras), pero no puede entenderse en un sentido que sustituya, impida o menoscabe el libre y pleno ejercicio por el Estado de sus propias competencias (STC 162/2012, de 20 de septiembre, FJ 6).

Por otra parte, y acerca del principio de lealtad constitucional y su aplicación a las relaciones financieras entre el Estado y las Comunidades Autónomas nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones, afirmando que éste resulta «esencial en las relaciones entre las diversas instancias de poder territorial» de manera que «constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico cuya observancia resulta obligada» (STC 239/2002, de 11 de diciembre, FJ 11), tratándose de un principio que «tiene una específica proyección en la materia financiera, tal como se recoge en las normas vigentes que integran el bloque de constitucionalidad en esta materia» (STC 109/2011, de 22 de junio, FJ 5). También hemos recalcado la conexión entre este principio y el establecimiento de un sistema adecuado de colaboración entre Administraciones, de manera que «el adecuado funcionamiento del Estado autonómico se sustenta en los principios de cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de éstas entre sí, además de en el establecimiento de un sistema de relaciones presididas por la lealtad constitucional, principios todos ellos que deben hacerse efectivos al margen, incluso, del régimen de distribución competencial» (por todas, STC 109/2011, FJ 5). Finalmente, hemos destacado que lo que el principio de lealtad

constitucional exige es que el Gobierno extreme el celo por llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas, pero no que dichos acuerdos deban ser vinculantes (SSTC 209/1990, de 20 de diciembre, FJ 4; 13/2007, de 18 de enero, FJ 11, y 31/2010, de 28 de junio, FJ 138).

Así, del principio de lealtad deriva un deber de colaboración e información recíproca entre las Administraciones implicadas que debe presidir las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas y que es concreción, a su vez, de un deber general de fidelidad a la Constitución. Por tanto, de la Constitución y de la doctrina de este Tribunal se deduce un principio inherente de colaboración y lealtad constitucional, que postula la adopción de procedimientos de consulta, negociación o, en su caso, la búsqueda del acuerdo previo (STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 8).

En dicho marco se inserta la regulación estatutaria relativa a la Comisión mixta de asuntos económico-financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, la cual, como señalamos ya, en relación con un órgano similar previsto en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, «es un instrumento para propiciar la integración de las posiciones del Estado

y de la Comunidad Autónoma correspondiente, bien porque los asuntos requieran un tratamiento específico, bien porque facilite la preparación de los acuerdos a adoptar en el seno de órganos multilaterales, o bien, incluso, porque permita la deliberación común sobre la aplicación en la Comunidad Autónoma de Cataluña de las decisiones o acuerdos adoptados por el Estado o por los órganos multilaterales competentes al efecto» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 131). Es decir, se trata de un órgano a través del que se materializa un marco bilateral de negociación que complementa, sin cuestionarlo, el modelo general de toma de decisiones en este ámbito, caracterizado, en principio, por la multilateralidad (STC 31/2010, FJ 135 in fine).

4. Expuesto lo anterior, podemos ya comenzar el examen de la cuestión controvertida en el presente recurso.

La demanda entiende infringidos los arts. 88 y 109.2 d) EAAr, si bien la vulneración denunciada se concreta específicamente en lo que se considera un incumplimiento del «mecanismo de colaboración o cooperación para el estudio conjunto entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón de las inversiones que se van a realizar en la Comunidad Autónoma de Aragón» que se regula en el segundo precepto estatutario citado. Ya hemos mencionado que, conforme al art. 109.2 d) EAAr, corresponde a la Comisión mixta de asuntos económicos-financieros «estudiar las inversiones que el Estado realizará en la

Comunidad Autónoma de Aragón». Dicha función es la que se considera infringida por la actuación estatal, tal como se argumenta en el escrito rector de este proceso, pues la queja que se formula se refiere a la falta de participación autonómica en un momento previo a la adopción de una determinada decisión estatal; en concreto, la relativa a las inversiones que van a tener lugar en la Comunidad Autónoma tal como se reflejan en los presupuestos generales del Estado para 2016.

Se argumenta, en suma, que el mecanismo de colaboración que este precepto contempla hubiera debido concretarse en un estudio conjunto, en el seno de la Comisión mixta de asuntos económicos-financieros prevista en el art. 109 EAAr, de las inversiones que se pretendieran aprobar en los mencionados presupuestos generales del Estado correspondientes al año 2016.

Con respecto a tal planteamiento hemos de indicar, en primer lugar, que es evidente que en el juicio de adecuación al orden constitucional de competencias que se nos demanda y al que debemos someter al precepto ahora impugnado, en modo alguno puede erigirse en parámetro de constitucionalidad el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación de 24 de noviembre de 2009, relativo a la creación de un grupo de trabajo permanente para el seguimiento de las inversiones del Estado en infraestructuras de cada ejercicio, pues eso supondría otorgar a ese acuerdo un valor del que carece, en la medida en que dicho parámetro sólo está conformado por las normas del bloque de la constitucionalidad implicadas, esto es, por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Señalado lo anterior han de precisarse, además, dos extremos.

Dadas las evidentes diferencias entre el tenor de los preceptos estatutarios no resulta de aplicación aquí la doctrina acerca del informe o audiencia previos establecidos en el art. 45 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, según el cual el régimen económico-fiscal de Canarias sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera CE, previo informe del Parlamento canario que, para ser favorable, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros; Parlamento que debe ser oído en los proyectos de legislación financiera y tributaria que afecten al régimen económico-fiscal de Canarias. Conforme a la doctrina constitucional (por todas, STC 164/2013, de 26 de septiembre, FJ 4), toda afectación o modificación de ese régimen requiere para su aprobación bien de audiencia, bien que se solicite informe previo del Parlamento canario. Informe y audiencia previa que no resultan vinculantes, pero sí son preceptivos, de manera que la ausencia de su solicitud determina la inconstitucionalidad de la norma que modifique o afecte al régimen económico

y fiscal canario.

El caso que ahora se nos plantea es también distinto del resuelto en la STC 13/2015, de 5 de febrero, en la que se declaró la nulidad de los preceptos legales aprobados sin solicitar la emisión del informe preceptivo, previsto en el art. 72.3 EAAr, respecto de cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte al territorio de la Comunidad Autónoma. Es patente que, en la medida en que los preceptos estatutarios que ahora se entienden vulnerados no exigen expresamente un informe preceptivo, esa doctrina no es de aplicación aquí.

Por tanto, atendiendo a la pretensión deducida en el recurso, lo que debemos resolver es si la falta de estudio previo por la Comisión mixta de asuntos económicos-financieros supone una vulneración del art. 109.2 d) EAAr determinante de la anulación de las partidas presupuestarias relativas a las inversiones del Estado en Aragón previstas en los presupuestos generales del Estado para el año 2016, que no hayan sido iniciadas en el momento de dictarse la presente Sentencia.

5. La referida Comisión mixta de asuntos económicos-financieros es, conforme al art. 109.1 EAAr «el órgano bilateral de relación entre ambas Administraciones en las materias sobre financiación autonómica específicas aragonesas y dentro del marco establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. A tal efecto, le corresponde la concreción, desarrollo, actualización, seguimiento y adopción de medidas de cooperación en relación con el sistema de financiación, así como las relaciones fiscales y financieras entre ambas Administraciones y, especialmente, la adopción de las

medidas previstas en el artículo 107 del presente Estatuto». El apartado 2 del art. 109 relaciona las funciones que dicha Comisión tiene atribuidas, entre las que se encuentra la que ahora se entiende vulnerada. Dichas funciones han de interpretarse en todo caso teniendo en cuenta que el marco general de colaboración en el que se inserta la mencionada Comisión se relaciona más específicamente, atendiendo a su propia definición en el apartado primero, con el sistema de financiación autonómica. De hecho nuestra doctrina ha destacado su papel «en cuanto órganos bilaterales específicamente previstos para concretar la aplicación a cada Comunidad Autónoma de los criterios acordados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera» (STC 13/2007, FJ 8). Se trata, por tanto, de relaciones entre entes públicos que se desarrollan en dos planos, bilateral y multilateral, dentro de un marco de cooperación institucional.

Insertada la función que se entiende vulnerada en el marco que le es propio, debemos tener presente también que no corresponde a este Tribunal determinar cuál deba ser el mejor modo de articular el mecanismo de colaboración previsto en el art. 109 EAAr, pues nuestra función se ciñe a decidir si la norma impugnada excede de lo constitucionalmente previsto. Más en concreto, no se trata tampoco de valorar en qué medida la participación reconocida a la Comunidad Autónoma en la adopción de una decisión estatal satisfaga un hipotético «óptimo constitucional» (STC 47/2005, de 3 de marzo, FJ 10) en cuanto a la intervención autonómica en asuntos que le conciernan, sino de examinar si la misma tiene necesariamente que producirse en los términos reclamados en la demanda. Es decir, hasta qué punto las normas estatutarias que se reputan vulneradas, en particular el art. 109.2 d) EAAr, exigen necesariamente que las inversiones estatales en Aragón se estudien en la Comisión mixta antes de ser aprobadas en los presupuestos generales del Estado de cada año.

Desde este punto de vista las alegaciones contenidas en la demanda no permiten apreciar la inconstitucionalidad denunciada.

Es evidente que, dado el tenor literal del precepto estatutario, su efecto no es el de limitar al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscabar la libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de las inversiones estatales (en un sentido similar, STC 100/2013, de 23 de abril, FJ 3, con cita de la STC 31/2010, FJ 138). La previsión estatutaria tiene un alcance mucho más limitado por cuanto se limita a prescribir que la Comisión mixta estudie, sin mayores concreciones, «las inversiones que el Estado realizará en la Comunidad Autónoma de Aragón». Es, como apunta la demanda, un mecanismo de colaboración articulado a través de un órgano de composición bilateral en un asunto de trascendencia, tanto para el Estado como para la Comunidad Autónoma.

De hecho esta función en la que ahora pretende concretarse ese mecanismo de colaboración se configura por el Estatuto de Autonomía de Aragón de una forma genérica, admitiendo su cumplimiento de diversos modos. En ningún caso impone que haya de hacerse de la forma que se reclama en este proceso, esto es, durante los trámites prelegislativos del proyecto de ley anual de presupuestos. A la concreta pretensión que aquí se articula se contrapone la indeterminación de la función de «estudio» atribuida a

la Comisión mixta, máxime si esa función se pone en relación con la tramitación de una norma como la Ley de presupuestos que tiene una regulación específica, tanto en la Constitución (art. 134), como en otras normas integrantes del bloque de constitucionalidad.

Dicho en otros términos, el precepto estatutario no tiene, ni en su tenor literal ni interpretado sistemáticamente, el sentido unívoco que el recurrente pretende otorgarle y en el que basa su impugnación. Tiene razón el Abogado del Estado cuando indica que la invitación a «estudiar» que contiene la norma estatutaria no implica necesariamente que la elaboración de los presupuestos de cada ejercicio, que, por mandato constitucional, corresponde al Gobierno, no pueda darse por concluida sin su previo estudio en la aludida Comisión mixta. Una previsión de este carácter, por sus evidentes implicaciones en la elaboración y tramitación del presupuesto anual del Estado, debería tener reflejo estatutario expreso o, al menos, hallar un claro fundamento en la regulación del Estatuto de Autonomía. Por el contrario, esa regulación estatutaria presenta un elevado grado de indeterminación tanto respecto a la tarea a acometer («estudio») como al objeto (inversiones, sin mayores especificaciones) o al momento en que esa intervención ha de producirse, sobre el que nada se dice.

El mandato de participación que contiene el precepto ha de ser respetado en cuanto que deriva de una norma, el Estatuto de Autonomía de Aragón, que integra el bloque de constitucionalidad (art. 28.1 LOTC) y constituye un razonable mecanismo de colaboración.

No hay que olvidar que corresponde en última instancia al Estado decidir su política de inversiones, lo que implica destinar los recursos teniendo en cuenta las partidas a dotar en función de las necesidades de cada territorio, entre otros criterios constitucionalmente admisibles, siendo en definitiva el ejercicio de esta opción parte del poder de disposición estatal sobre sus propios recursos, una de cuyas manifestaciones es la ley anual de presupuestos. Tampoco cabe dudar, en fin, que el estudio de las inversiones estatales con carácter previo a la inclusión de los correspondientes créditos en los presupuestos generales del Estado puede ser uno de los modos pertinentes de dar cumplimiento a la regulación estatutaria, aun cuando es notorio que la política de inversiones estatales, si bien tiene concreción presupuestaria, no se define necesariamente en la ley anual de presupuestos.

Ahora bien, dicho mandato puede hacerse efectivo de modos y en momentos diversos, que no corresponde enumerar a este Tribunal. En todo caso, la aprobación de la ley anual de presupuestos con omisión de este trámite no determina, en la medida en que no viene exigido directa y expresamente por el texto estatutario, la inconstitucionalidad de la norma por el motivo denunciado en la demanda.

No es posible afirmar que los mecanismos de cooperación no hayan funcionado y que, por tanto, se hayan infringido los principios de colaboración y de lealtad constitucional, porque la participación no se haya producido en el momento y del modo que la Comunidad Autónoma considera deseable o conveniente. La doctrina sobre la

participación autonómica en la adopción de decisiones estatales ha reiterado que es el Estado el único competente para establecer los casos y los modos en que dicha participación haya de verificarse, por proyectarse la participación en ámbitos que le corresponden constitucionalmente y sin perjuicio de su posible incidencia en competencias o intereses de la Comunidad Autónoma.

Por ello es el Estado el que tiene que determinar los concretos términos, formas y condiciones de la participación de la Comunidad Autónoma que viene exigida por el texto estatutario, debiendo en todo caso quedar a salvo la titularidad de las competencias estatales eventualmente implicadas y la perfecta libertad que en su ejercicio corresponde a los organismos e instituciones del Estado (STC 31/2010, FJ 111 in fine),algo, por lo demás, no impedido por la genérica previsión estatutaria.

La tarea de estudio a la que alude el art. 109.2 d) EAAr debe producirse, pues viene impuesta por el Estatuto de Autonomía de Aragón, al articular un mecanismo de cooperación en virtud del cual el Estado y la Comunidad Autónoma se obligan a estudiar conjuntamente en comisión mixta las inversiones que el Estado va a llevar a cabo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, frente a lo sostenido en la demanda, del art. 109.2 d) no se infiere que dicho estudio conjunto de las inversiones estatales, a ejecutar en la Comunidad Autónoma, haya de ser anual y, en todo caso, anterior a la aprobación de la Ley de presupuestos generales del Estado. Por el contrario hay que entender que, como en otro contexto ya señaló la STC 101/2016, de 25 de mayo, FJ 10, «no es función de las Comunidades Autónomas la de elegir en cada momento cuál es la fórmula de colaboración que mejor se adecúa a sus intereses».

- Sentencia 165/2016, de 6 de octubre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad nº 1870-2011, en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de abril de 2011, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad indicado, promovido por el Gobierno de Aragón contra los arts. 1, apartado 3; 5; 8 apartado 6, segundo párrafo; 9, apartados 6 y 7; 10, apartados 4, 6 y 7; 11, apartados 1, 2 y 3; 26, apartados 1, 3, 4 y 5; 27 y disposiciones transitoria primera y final undécima de la mencionada Ley.

En la sentencia, de fallo desestimatorio del recurso de inconstitucionalidad interpuesto y con un voto particular, se argumenta sobre competencias en materia de ordenación general de la economía, medio ambiente y minas.

A continuación se transcriben los Fundamentos Jurídicos:

"1. La Ley 40/2010, de 29 de diciembre, regula el almacenamiento geológico de

dióxido de carbono. Muchos de sus preceptos han sido impugnados por la Comunidad Autónoma de Aragón, pero desde una perspectiva limitada: En efecto, el recurso no discute la constitucionalidad de la normativa sustantiva establecida por la Ley 40/2010; sólo discrepa de las atribuciones que la Ley ha confiado a la Administración General del Estado para ejecutar los designios legales. La tesis de Aragón es que la ejecución de la legislación en esta materia compete a la Comunidad Autónoma, no a la Administración estatal. El Abogado del Estado, por el contrario, sostiene que existen razones que justifican que la Ley 40/2010 asigne atribuciones ejecutivas a los Ministerios de Industria y de Medio Ambiente, en aplicación de diversos títulos competenciales del Estado. Esa es la cuestión que debemos abordar en esta Sentencia.

Para dar respuesta a esta cuestión, hay que comenzar destacando que el encuadramiento constitucional de la Ley impugnada en el orden constitucional de competencias no resulta sencillo. La Disposición final undécima de la Ley enumera, como títulos competenciales ejercidos por las Cortes Generales, los siguientes:

«Esta ley tiene carácter básico al amparo del artículo 149.1.23 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar la legislación básica en materia de protección del medio ambiente con las siguientes excepciones:

a) Los artículos 10, 11, 13, 14, 15, 24 y 25 se dictan al amparo de las competencias atribuidas en el artículo 149.1.13 de la Constitución Española.

b) Los artículos 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 26 y 27 se dictan al amparo de las competencias atribuidas en el artículo 149.1.25 de la Constitución Española.»

Es decir, el Estado asevera sus competencias para establecer las «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica»; la «legislación básica sobre protección del medio ambiente» y las «bases del régimen minero y energético» (respectivamente, los números 13, 23 y 25 del art. 149.1 CE).

Por su parte, la demanda del Gobierno de Aragón sostiene que los preceptos legales recurridos vulneran distintas normas de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril. Respecto a los primeros, la Comunidad Autónoma sostiene que el Estado no ha respetado las competencias que invoca en la Ley 40/2010: ninguno de los números del art. 149.1 CE justificaría que la Ley asigne a la Administración General del Estado competencias de carácter ejecutivo, como hace en los artículos impugnados. Simultáneamente, esa asunción de facultades ejecutivas vulneraría las competencias asumidas por la Comunidad

en su Estatuto de Autonomía:

a) El artículo 75, apartados 2 y 3, del Estatuto de Autonomía de Aragón (EAAr), que establece que «en el ámbito de las competencias compartidas, la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica que establezca el Estado en normas con rango de Ley, excepto en los casos que se determinen de acuerdo con la Constitución, desarrollando políticas propias. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en las siguientes materias: -apartado 2.º Régimen minero, en especial, la regulación y el régimen de intervención administrativa de las minas y recursos mineros, así como la restauración de los espacios afectados por actividades extractivas. -apartado 3.º Protección del medio ambiente, que, en todo caso, incluye la regulación del sistema de intervención administrativa de los planes, programas, proyectos, instalaciones y actividades susceptibles de afectar al medio ambiente; la regulación de los recursos naturales, la flora y fauna y la biodiversidad, la prevención y corrección de la generación de los residuos, de la contaminación atmosférica, del suelo y del subsuelo, así como el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas».

b) El artículo 70.31 EAAr, que declara: «La Comunidad Autónoma, en los casos en que el objeto de sus competencias tiene un alcance territorial superior al del territorio de los gases a un estado físico, denominado hipercrítico, intermedio entre el gaseoso y el líquido; transportar ese fluido a través de tuberías específicas, o bien en barco, a un emplazamiento seguro y, una vez allí, inyectarlo o confinarlo en estructuras geológicas subterráneas que deben ser seguras y estables, donde el dióxido de carbono debería permanecer indefinidamente. La Unión Europea propugna la utilización comercial de estas

tecnologías de captura, transporte y almacenamiento del carbono lo que ha quedado plasmado en la Directiva 2009/31, que busca hacer posible la explotación ecológicamente racional, segura y fiable de las actividades de captación y almacenamiento del carbono; eliminar los obstáculos no justificados para estas actividades, que se encontraban presentes en la legislación en vigor, y ofrecer incentivos adecuados para fomentarlas, en atención a las ventajas que conllevan para la reducción de los gases de efecto invernadero.

Hay que señalar, igualmente, que el texto de la Directiva de referencia concentra su regulación en la tercera fase de la tecnología que sirve para reducir la emisión de gases de efecto invernadero: el almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Así lo muestra claramente su título y su contenido. La Ley 40/2010, que ha transpuesto la Directiva en el ordenamiento español, sigue la misma pauta, al tiempo que ha incluido modificaciones de la legislación en materia de control de la contaminación, evaluaciones ambientales o responsabilidades por daños, (disposiciones finales segunda a quinta), en la medida necesaria para que las respectivas disposiciones vigentes en esos ámbitos se apliquen a los nuevos procedimientos relativos al dióxido de carbono.

Una última precisión previa ha de añadirse a las anteriores consideraciones, que resulta relevante para el inmediato enjuiciamiento de la controversia competencial que aquí se dilucida. La Disposición final primera de la Ley 40/2010 añade un nuevo apartado

cuatro al artículo 1 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, que excluye de modo expreso del régimen general sujeto a esa última ley «la investigación o explotación de estructuras subterráneas para su utilización como almacenamiento geológico de dióxido de carbono», que, a partir de ese momento, pasa a regirse por la nueva normativa

específica prevista en esta Ley. La Ley 40/2010, en palabras del preámbulo, ha venido a «abordar la transposición [de la Directiva 2009/31] a través de un proyecto de Ley ad hoc, en lugar de reformar otras normas de nuestro ordenamiento, como la Ley de minas, debido a las singulares características de la CAC». El legislador ha justificado la aprobación de un «régimen jurídico propio», para la regulación de una técnica novedosa que, con el objetivo de mitigar el cambio climático, se oriente «fundamentalmente a garantizar la seguridad para el medio ambiente y las personas». Pues bien, el establecimiento de esta regulación específica y propia ha de ser tenida en cuenta para el análisis del conflicto competencial interpuesto, porque recoge la existencia de un planteamiento singular del legislador en el tratamiento normativo de esta materia, que se aparta del régimen general establecido en la Ley 22/1973, de minas, como seguidamente se expondrá.

3. La Ley 40/2010 establece el marco jurídico para el almacenamiento geológico de dióxido de carbono (CO 2), «en condiciones seguras para el medio ambiente, con el fin de contribuir a la lucha contra el cambio climático» (art. 1.1). La Ley declara bienes de dominio público estatal «las formaciones geológicas que formen parte de los lugares de almacenamiento existentes en el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Reino de España» (art. 3).

Congruentemente, supedita la actividad de almacenar dióxido de carbono a la obtención de una concesión de dominio público (art. 10), cuyo régimen jurídico es objeto de los capítulos II y III de la Ley (arts. 10-17 y 18-25). También regula unos permisos de investigación, para cuando resulte necesario realizar trabajos previos con el fin de determinar la capacidad de acopio o la idoneidad de un lugar de almacenamiento determinado (arts. 8 y 9), así como el registro de lugares de almacenamiento (art. 28), la puesta a Disposición del público de toda la información relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono (art. 29, que con el anterior conforma el capítulo V) y un amplio régimen sancionador (cap. VI, que comprende los arts. 30 al 38).

En este conjunto normativo, reviste especial importancia el capítulo III, dedicado a regular el «funcionamiento, cierre y obligaciones tras el cierre» de las instalaciones de inyección y del complejo donde se almacene el dióxido de carbono. La Ley 40/2010, que sigue en este punto las previsiones de la Directiva 2009/31 de la Unión Europea, distingue dos etapas: una primera que tiene lugar mientras esté vigente la concesión de almacenamiento; y otra posterior, que se iniciará a partir del momento en que la concesión quede extinguida. Mientras la concesión esté en vigor, la Ley impone a su titular unas normas sobre la composición de la corriente de dióxido de carbono que inyecta en el yacimiento, unos estrictos deberes de seguimiento e información sobre el lugar, así como tener previstas las medidas que deban ser adoptadas en caso de irregularidades significativas o fugas. Todo ello sometido a inspecciones periódicas y

puntuales por parte de la Administración pública competente en materia de medio ambiente, es decir de las Comunidades Autónomas. Por su parte, el artículo 23 de la Ley rige el cierre de los lugares de almacenamiento: éste puede ser debido al transcurso del plazo de la concesión (cifrado por el art. 10.6 en un máximo de 50 años); a la voluntad de la empresa titular de la concesión (previo el cumplimiento de determinados requisitos legales); o como consecuencia de una resolución adoptada por la Administración, tras revocar una concesión de almacenamiento. El cierre de un lugar de almacenamiento no conlleva un cambio inmediato de su estatuto jurídico: el titular de la concesión sigue siendo responsable de gestionar las instalaciones y de cumplir los deberes correspondientes, mientras sella el lugar de almacenamiento y retira las instalaciones de inyección. La responsabilidad del concesionario no cesa hasta que se produce la transferencia de responsabilidad, que regula el artículo 24 de la Ley 40/2010.

Este precepto dispone que «se transferirán a la Administración General del Estado, a iniciativa de ésta o a petición del titular, todas las obligaciones legales relacionadas con el seguimiento y con las medidas correctoras exigibles con arreglo a esta ley», tras el cierre de un lugar de almacenamiento y una vez asegurado el cumplimiento de todas las obligaciones previstas por la Ley. Como regla general, deben transcurrir al menos veinte años desde el cierre para que la Administración asuma la responsabilidad sobre el lugar de almacenamiento. La «transferencia de responsabilidad se considerará efectiva una vez que todas las pruebas disponibles indiquen que la totalidad del CO2

almacenado permanecerá completa y permanentemente confinado, y una vez que el lugar de almacenamiento haya sido sellado y se hayan retirado las instalaciones de inyección».

Seguidamente, la Ley 40/2010 dedica unos preceptos al acceso, por parte de terceros, a la red de transporte y a los lugares de almacenamiento del dióxido de carbono (arts. 26 y 27, que forman el cap. IV). El texto legal se cierra con cuatro disposiciones adicionales, dos transitorias y quince disposiciones finales. Por su parte, la Disposición final decimocuarta de la Ley 40/2010, bajo la rúbrica de «Supletoriedad», prescribe que «En tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario de esta ley, a los procedimientos de autorización y concesión de almacenamiento geológico de dióxido de carbono tramitados por la Administración General del Estado se les aplicará el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Minería, en lo que no contradiga lo dispuesto en ella».

La normativa de referencia se completa con la Disposición transitoria primera, que regula la acomodación al régimen de la Ley 40/2010 de las autorizaciones obtenidas para el reconocimiento de estructuras subterráneas o para el almacenamiento de dióxido de carbono «con arreglo a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley».

4. Una vez examinados el contenido y finalidad de la Ley 40/2010 objeto de impugnación, podemos proceder a encuadrarla en el orden constitucional de competencias.

Es doctrina constitucional que «cuando inevitablemente las muchas actuaciones de los poderes públicos concernidos inciden al mismo tiempo en dos o más ámbitos categoriales diversos es preciso determinar siempre 'la categoría genérica, de entre las referidas en la Constitución y los Estatutos, a la que primordialmente se reconducen las competencias controvertidas, puesto que es ésta la que fundamentalmente proporciona el criterio para la delimitación competencial, sin perjuicio de que, en su caso, la incidencia de la actividad considerada en otros ámbitos obligue a corregir la conclusión inicial para tomar en consideración títulos competenciales distintos'» (SSTC 80/1985, de 4 de julio, FJ 1; 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 3, y 14/2004, de 13 de febrero, FJ 5. En el mismo sentido, STC 49/2013, de 28 de febrero, FJ 5).

Cuando las instituciones generales del Estado disponen de competencias para adoptar legislación básica en varias materias, como es el caso de ahora, no resulta irrelevante determinar la categoría específica, de entre las varias en liza, «a la que primordialmente se reconducen las competencias controvertidas» (SSTC 80/1985, de 4 de julio, FJ 1; 45/2015, de 5 de marzo, FJ 3). El alcance de las exigencias impuestas al legislador básico puede ser diferente «en función del subsector» de que se trate (SSTC 31/2010, de 28 de junio, FJ 60, y 184/2012, de 17 de octubre, FJ 3).

También, es doctrina constante que, para decidir si la controversia debe encuadrarse en uno u otro de los números del art. 149, apartado 1, CE, que detallan las competencias exclusivas del Estado, la cobertura competencial enunciada por la Ley enjuiciada o la propuesta por las partes durante el proceso constitucional son meramente indicativas y no resultan vinculantes para este Tribunal. Las competencias son «indisponibles e irrenunciables, tanto para el legislador del Estado como para el de las Comunidades Autónomas»; y este Tribunal tiene el deber de velar de oficio por el respeto a la Constitución en los procesos sometidos a su jurisdicción por las partes legitimadas para ello [arts. 27.1 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)]. De ahí se desprende que los títulos competenciales «operan ope Constitutionis, con independencia de que uno u otro legislador hagan invocación explícita de las mismas» o de que éstos incurran en una eventual «selección errónea del título que, por otra parte, en modo alguno puede vincular a este Tribunal» [SSTC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 4; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 4 a), y 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 7]. También se desprende que «el orden de competencias y la definición de las que, en cada caso, se ejerzan, no pueden quedar a merced de las alegaciones de las partes, sino que deben ser determinadas en atención a los criterios objetivos que sobre cada materia establecen la Constitución, los Estatutos de Autonomía y las Leyes a las que éstos y aquélla remitan» (SSTC 69/1988, de 19 de abril, FJ 2, y 175/2011, de 8 de noviembre, FJ 3).

Finalmente, es asimismo doctrina consolidada que la interpretación de los preceptos constitucionales ha de hacerse de modo sistemático, esto es, teniendo siempre en cuenta el contenido íntegro de la Norma fundamental y que la de los preceptos estatutarios ha de hacerse siempre, como la del resto del ordenamiento jurídico, de conformidad con la Constitución (SSTC 18/1982, de 4 de mayo, FJ 1; 252/1988, de 20 de diciembre, FJ 2, y 5/2012, de 17 de enero, FJ 5). Igualmente, que «para llegar a una calificación

competencial correcta» hay que atender, tanto al «sentido o finalidad de los varios títulos competenciales», como al «carácter, sentido y finalidad de las disposiciones traídas al conflicto, es decir, el contenido del precepto controvertido», delimitando así la regla competencial aplicable al caso (SSTC 153/1989, de 5 de octubre, FJ 5; 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 3; 236/2012, de 13 de diciembre, FJ 3, y 45/2015, de 5 de marzo, FJ 3).

5. Atendidos el carácter, sentido y finalidad de las disposiciones que conforman la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, debemos concluir que el título competencial preferente para resolver la controversia competencial trabada en este proceso constitucional es el referido a la materia de minas. En ella, las instituciones generales del Estado tienen reservada competencia sobre las bases del régimen minero (art. 149.1.25 CE); mientras que la Comunidad Autónoma de Aragón ostenta competencia sobre el desarrollo legislativo

y la ejecución de la normativa básica que establezca el Estado por medio de disposiciones con rango de ley (art. 75.2 EAAr).

En efecto, la Ley 40/2010 centra su regulación, como vimos en el anterior fundamento jurídico cuarto, en el almacenamiento del dióxido de carbono. Dicho almacenamiento ha de ser llevado a cabo en el subsuelo, ya sea terrestre o marino: pues las estructuras subterráneas sujetas a la Ley son las situadas en España, «incluyendo su mar territorial, su zona económica exclusiva y su plataforma continental» (art. 2.1 y Disposición adicional

tercera). La finalidad del almacenamiento del flujo de dióxido de carbono consiste en «su confinamiento permanente, en condiciones seguras para el medio ambiente, de manera que se eviten y, cuando no sea posible, se reduzcan al máximo, los efectos negativos o riesgos que pudiera tener dicho almacenamiento, sobre el medio ambiente y la salud humana» (art. 1.2). Con esa finalidad, la Ley 40/2010 establece un régimen jurídico de larga duración:concesiones del dominio público subterráneo de treinta años, prorrogables hasta un total máximo de cincuenta años; cierre de los lugares de almacenamiento una vez transcurridos, al menos, veinte años; y transferencia de responsabilidad del titular de la concesión a la Administración pública que, a partir de ese momento, ha de garantizar la seguridad del almacenamiento por un período de tiempo indefinido. Esa transferencia de responsabilidad es una de las vigas maestras de la regulación establecida por la Directiva 2009/31, en su afán por ofrecer un marco jurídico estable al desarrollo de la nueva tecnología de captación y almacenamiento del dióxido de carbono y de incentivar a las empresas a desarrollarla y asumirla.

El régimen jurídico establecido por la Ley 40/2010 precisa y desarrolla las normas generales de minería que rigen en España a la nueva tecnología que promueve la Unión Europea para almacenar en el subsuelo el dióxido de carbono captado del funcionamiento de las grandes industrias. Su contenido es de un elevado detalle técnico, como lo demuestra, entre otras circunstancias, el conjunto de las definiciones contenidas en el art. 4 de la Ley o en sus anexos, que pormenorizan los criterios de caracterización y de evaluación del complejo de almacenamiento potencial y de la zona circundante

indicados en el art. 10, apartado 2, de la Ley y los criterios para el establecimiento y actualización del

plan de seguimiento contemplado en su artículo 19.2, así como para el seguimiento posterior al cierre de las instalaciones.

Se trata de normas sustantivas sobre el régimen de uso de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos que forman el demanio minero, donde resulta determinante la aplicación de la técnica minera en los trabajos sujetos a la Ley, que deben ejecutarse mediante labores subterráneas o que requieren el empleo de cualquier clase de maquinaria. Lo cual debe llevar a su encuadramiento en la materia de minas, siguiendo los criterios declarados en las Sentencias sobre almacenamiento de residuos nucleares en Aragón (STC 14/2004, de 12 de febrero, FFJJ 9 y 10), sobre los residuos de las industrias extractivas (STC 45/2015, de 5 de marzo, FJ 3) y sobre la declaración de todo el territorio balear como no registrable (STC 235/2015, de 5 de noviembre, FJ 3).

En definitiva, aunque no pueda desconocerse que podrían incardinarse en la materia de «medio ambiente» aquellos aspectos del régimen jurídico de la actividad de almacenamiento de dióxido de carbono que tengan como finalidad directa la protección del entorno, en razón a la peligrosidad potencial de aquella, sin embargo, la norma impugnada atiende fundamentalmente a aquella dimensión vinculada con la gestión y emplazamiento de los yacimientos y demás estructuras subterráneas en los que se inyecta el dióxido de carbono, pues lo que hace la Ley 40/2010 es detallar la normativa sobre uso de las estructuras subterráneas que «por sus características permita retener naturalmente y en profundidad cualquier producto o residuo que en él se vierta o inyecte» [art. 3.1 B) de la Ley de minas de 1973 y art. 5.1 del Reglamento general de la minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto], lo que justifica el encuadramiento competencial realizado.

Por el contrario, resulta irrelevante para el reparto de competencias el mero dato de que los lugares de almacenamiento sean bienes de dominio público (pues, como vimos en el fundamento jurídico 5, la Ley 40/2010 mantiene el carácter demanial, establecido por la legislación preconstitucional, de las estructuras subterráneas que por sus características permiten retener naturalmente y en profundidad cualquier producto o residuo que en él se vierta o inyecte). En efecto, es doctrina constitucional que «la titularidad del dominio público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial», pues «la naturaleza demanial no aísla a la porción del territorio así caracterizado de su entorno, ni la sustrae de las competencias que sobre ese aspecto corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad» (SSTC 77/1984, de 3 de julio, FJ 3; 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 14, y 103/1989, de 8 de junio, FJ 6). Todo ello sin perjuicio de que la titularidad del dominio público estatal (art. 132.2 CE), «si bien no se traduce en ningún título competencial concreto, permite al Estado establecer el régimen jurídico de todos los bienes que lo integran y adoptar las normas generales necesarias para garantizar su protección» [SSTC 149/1991, de 4 de julio, FJ 1 c); 40/1998, de 19 de febrero, FJ 29, y 204/2002, de 31 de octubre, FJ 7], aspectos estos últimos que no son relevantes en este proceso constitucional.

6. La conclusión de que el título competencial preferente para enjuiciar el encaje constitucional de la Ley 40/2010 en el orden constitucional de competencias es el concerniente a la materia régimen minero (núm. 25 del art. 149.1 CE) no se ve contradicho por otras consideraciones.

Es cierto que la Unión Europea ha dictado la Directiva 2009/31 en virtud de su

competencia sobre el medio ambiente [art. 175.1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, versión de Ámsterdam; en la actualidad, art. 192.1 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), versión de Lisboa] que, como es sabido, es una competencia compartida entre la Unión y sus Estados miembros [art. 4.2 e) TFUE]. Sin embargo, como hemos sostenido desde la Sentencia relativa al comercio comunitario de carnes frescas (STC 252/1988, de 20 de diciembre, FJ 2), son «las reglas internas de delimitación competencial las que en todo caso han de fundamentar la respuesta a los conflictos de competencia planteados entre el Estado y las Comunidades Autónomas», pues «el Derecho comunitario no es en sí mismo canon o parámetro directo de constitucionalidad en los procesos constitucionales» [SSTC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 4; 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 12, y 99/2012, de 8 de mayo, FJ 2 b)]. Las normas del Derecho de la Unión Europea, originario o derivado, carecen «de rango y fuerza constitucionales» [SSTC 215/2014, de 18 de diciembre, FJ 3 a), y 232/2015, de 5 de noviembre, FJ 4] y el orden competencial establecido por la Constitución «no resulta alterado ni por el ingreso de España en la Comunidad Europea ni por la promulgación de normas comunitarias» (SSTC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 1, y 96/2002, de 25 de abril, FJ 10).

Por consiguiente, el mero dato de que la Directiva europea que ha sido traspuesta en el ordenamiento español por la Ley impugnada fluya de la competencia de la Unión sobre el medio ambiente no significa, sin más, que la norma española que la traspone deba encuadrarse en un título competencial similar. Por añadidura, existen evidentes diferencias entre el orden de competencias establecido por el artículo 149 y concordantes de la Constitución española y el orden de competencias establecido por los artículos 4 y 5 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 2 a 6 de su Tratado de funcionamiento (versión Lisboa, «Diario Oficial de la Unión Europa» C-202, de 7 de junio de 2016). La Unión Europea carece de competencia en materia de régimen minero o de ordenación general de la economía (núms. 25 y 13 del art. 149.1 CE), que son dos de los títulos competenciales del Estado que han sido sometidos a debate en este proceso constitucional. Y la competencia de la Unión Europea en materia de medio ambiente [arts. 4.2 e) y 191, 192 y 193 TFUE] es distinta, en su alcance y contenido, a la competencia en materia de medio ambiente que la Constitución reserva al Estado mediante su art. 149.1.23, como puede apreciarse leyendo los respectivos preceptos y su aplicación jurisprudencial (por ejemplo, con el cotejo de las SSTJ Comisión contra Consejo –protección penal del medio ambiente, de 13 de septiembre de 2005, C-176/03; Comisión c. Consejo –vertidos en el mar, de 23 de octubre de 2007, C-440/05; Comisión c. Parlamento y Consejo –traslado de residuos, de 8 de septiembre de 2009, C-411/06, con las SSTC 102/1995, de 26 de junio; 13/1998, de 22 de enero; 120/1998, de 15 de junio,

y 161/2014, de 7 de octubre). Por lo que el fundamento competencial o «base jurídica» de la Directiva 2009/31 de la Unión Europea no predetermina, en modo alguno, el fundamento constitucional de la Ley 40/2010 de las Cortes Generales.

7. Tampoco es determinante que la finalidad última de la técnica de captación y almacenamiento de dióxido de carbono consista en luchar contra el cambio climático, reduciendo la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Esta ambiciosa finalidad es de carácter transversal y se busca, por ende, a través de un amplio conjunto de medidas. Aunque todas ellas se encuentran unidas por un objetivo último, consistente en evitar que las actividades humanas perjudiquen de modo irreversible el clima de nuestro planeta, cada una de ellas se despliega en campos distintos con finalidades diversas, tendentes a fomentar las energías renovables, promover una mayor eficacia energética o reducir la emisión de gases contaminantes en plantas industriales y energéticas, vehículos de motor o los edificios. Medidas de lucha contra el cambio climático que la Constitución española y los Estatutos de Autonomía pueden haber repartido entre las instituciones generales y autonómicas del Estado de forma diferenciada, pues atañen a materias tales como industria, energía, transportes y circulación de vehículos a motor, vivienda, etc., además de la protección del medio ambiente en sentido estricto.

Incluso, dentro del conjunto de técnicas que hacen posible la captación, fluidificación, transporte y almacenamiento del carbono, la Unión Europea ha adoptado distintas disposiciones legislativas, que atañen a sectores jurídicos diversos: así, en materia de industria, energía, uso del subsuelo y protección del medio ambiente y la salud humana, sectores éstos que, en Derecho español, son materias sujetas a distintas reglas de reparto competencial, a tenor del art. 149 CE.

Como hace notar nuestra jurisprudencia, las cuestiones atinentes al medio ambiente presentan un carácter complejo y multidisciplinar, que afectan a los más variados sectores del ordenamiento jurídico (STC 64/1982, de 4 de noviembre, FJ 5), «lo que provoca la consiguiente complejidad en el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 3). Ello se traduce en la transversalidad de las competencias sobre el medio ambiente en su configuración constitucional, en cuanto que, como se señala en las SSTC 102/1995, FJ 3; y 306/2000, de 12 de diciembre, FJ 6, incide en otras materias incluidas también, cada una a su manera, en el esquema constitucional de distribución de competencias. Por esa razón, lo ambiental es un factor a considerar en las demás políticas públicas sectoriales con incidencia sobre los diversos recursos naturales (SSTC 102/1995, de 26 de junio, FJ 6, y 13/1998, de 22 de enero, FJ 7), pero tal circunstancia «no puede suponer, sin embargo, una incidencia tal del título relativo al medio ambiente –tanto del estatal como de los autonómicos– sobre otros con los que converge o concurre debido a su transversalidad», que haga disminuir o incluso anular la vigencia y eficacia de otros títulos competenciales; «ello produciría, al socaire de la protección del medio ambiente ínsita en el conjunto de las políticas públicas, la merma en el ejercicio de otras competencias atribuidas al Estado y a las Comunidades Autónomas en virtud de la Constitución y de

los Estatutos de Autonomía» (STC 161/2014, de 7 de octubre, FJ 4). Así, hemos afirmado que «en todos aquellos casos en los que la titularidad competencial se establece por referencia a una 'política' (v. gr.: protección del medio ambiente, protección del usuario, etc.), y no por sectores concretos del ordenamiento o de la actividad pública, tal competencia no puede ser entendida en términos tales que la sola incardinación del fin perseguido por la norma (o por el acto concreto) en tal política permita desconocer la competencia que a otras instancias corresponde si la misma norma o acto son contemplados desde otras perspectivas» [STC 149/1991, de 4 de mayo, FJ 1 b). En el mismo sentido, SSTC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 30, y 161/2014, de 7 de octubre, FJ 4].

Por ese motivo, la jurisprudencia constitucional ha hecho hincapié en que, dentro de la competencia de protección ambiental, han de encuadrarse exclusivamente aquellas actividades encaminadas directamente a la preservación, conservación o mejora de los recursos naturales, «habida cuenta de que éstos son soportes físicos de una pluralidad de actuaciones públicas y privadas en relación con las cuales la Constitución y los Estatutos de Autonomía han deslindado diferentes títulos competenciales (por todas, SSTC 144/1985, de 25 de octubre, FJ 2; 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 13; 243/1993, de 15 de julio, FJ 3; 102/1995, FJ 3; y 40/1998, de 19 de febrero, FJ 29)» (STC 306/2000, de 12 de diciembre, FJ 6). Dijimos en la STC 13/1998, de 22 de enero, FJ 8, en el examen del instrumento de la evaluación de impacto ambiental, que el reparto competencial en materia de medio ambiente «solo resulta determinante respecto a aquellas intervenciones administrativas cuya razón de ser consiste en la protección del medio ambiente: es decir, cuando el acto administrativo tiene como finalidad y efecto la preservación y la restauración del ambiente afectado por la actividad intervenida, como es el caso de la autorización de actividades calificadas. Pero cuando la Administración General del Estado ejerce sus competencias exclusivas en distintos ámbitos materiales, como son administración de justicia, aeropuertos y puertos, ferrocarriles, aguas continentales, instalaciones eléctricas, obras públicas de interés general, minas y energía, patrimonio cultural y seguridad pública, hay que atenerse a la distribución de competencias que efectúan los Estatutos de Autonomía en el marco del art. 149 CE (y, singularmente, de los números 4, 20, 21, 22, 24, 25, 28 y 29 del apartado 1 de ese art. 149)».

Ciertamente, las competencias en materia de medio ambiente pueden condicionar el ejercicio de otras actuaciones con incidencia territorial, pero no pueden invadir el ámbito reservado a las competencias en virtud de las cuales se desarrollan. En sentido inverso, aun en esos supuestos en los que se otorga carácter preferente a la competencia sectorial que ejerce el Estado, debe utilizarla en todo caso sin menoscabar los ámbitos de otras competencias; de modo que lo haga sobre el territorio de una Comunidad Autónoma, «atendiendo los puntos de vista de ésta (SSTC 56/1986, de 13 de mayo; 103/1989, de 8 de junio; 149/1991, de 4 de julio, y 102/1995, de 26 de junio), y cumpliendo el deber de colaboración ínsito a la estructura misma del Estado de las Autonomías» (SSTC 13/1998, de 22 de enero, FJ 9, y 101/2006, de 30 de marzo, FJ 4). Este deber se ha formulado inicialmente con especial energía en un caso de concurrencia competencial sobre

actividades extractivas para proteger el medio ambiente (STC 64/1982, de 4 de noviembre, FJ 8).

Por consiguiente, las competencias sobre medio ambiente entrarían en juego si los emplazamientos previstos para un lugar de almacenamiento de dióxido de carbono afectaran a una zona protegida por razones medioambientales, en los términos que ha analizado la jurisprudencia constitucional (SSTC 56/1986, de 13 de mayo; 46/2007, de 1 de marzo; 82/2012, de 21 de abril; 154/2014, de 25 de septiembre, y 192/2014, de 20 de noviembre), situación que no resulta relevante para resolver el objeto de este proceso.

También, entran en juego en lo relativo a la protección medioambiental de los lugares de almacenamiento del dióxido de carbono, que han sido tenidos en cuenta por el legislador estatal (en los arts. 18-23 de la Ley 40/2010, como vimos en el fundamento jurídico 6) en términos que no han sido discutidos en el presente proceso constitucional.

8. Que el título competencial específico y preferente para enjuiciar el encaje constitucional de la Ley 40/2010 sea el concerniente a la materia «régimen minero» (núm. 25 del art. 149.1 CE) solo aparentemente entra en contradicción con lo declarado por la propia Ley 40/2010, en su Disposición final undécima: dicha Disposición enumera nueve artículos como producto del ejercicio de la competencia estatal en materia de minas, otros siete artículos producto de la competencia de ordenación de la economía y califica al resto de sus preceptos como legislación básica de protección del medio ambiente. Sin embargo, si de este conjunto residual de preceptos en materia de medio ambiente (que suman 21) se deducen los de carácter general (los arts. 1, 2, 4 y 5); el régimen sancionador (los arts. 30-38), que son preceptos instrumentales de la competencia sustantiva ejercida (SSTC 87/1985, de 16 de julio, FJ 8; 168/1993, de 27 de mayo, FJ 8; 124/2003, de 19 de junio, FJ 8, y 218/2013, de 19 de diciembre, FJ 5); y, por igual motivo, las normas sobre registro y publicidad (arts. 28 y 29; SSTC 32/1983, de 28 de abril; 157/1985, de 15 de noviembre, FJ 4, y 11/2015, de 5 de febrero, FJ 6), sólo quedan siete artículos derivados del ejercicio del título competencial sobre el medio ambiente. El contenido de estos artículos, que la Ley 40/2010 declara fruto de la competencia del Estado para proteger el medio ambiente, son tan solo los relativos a la garantía financiera que debe presentar el solicitante de una concesión (art. 12) y los requisitos y obligaciones de funcionamiento de los almacenes de dióxido de carbono (arts. 18 a 23). Preceptos estos últimos cuyo cumplimiento la misma Ley 40/2010 dispone que se encuentra sometido a la supervisión medioambiental de las Comunidades Autónomas.

Y ninguno de los preceptos mencionados ha dado lugar a una impugnación específica por parte de la Comunidad Autónoma recurrente.

En segundo lugar, los mandatos que la propia Ley 40/2010, en su Disposición final undécima, adscribe a la competencia estatal en materia de minas son los que contienen las normas determinantes del régimen jurídico de la Ley y son los que introducen las principales modulaciones a la normativa europea en el momento de transcribirla a nuestro Derecho interno. En efecto, se trata de regular un nuevo uso de los terrenos

subterráneos, sujetos secularmente en España a un régimen de Derecho público como dominio del Estado, que ya venía sometido en términos genéricos a intervención en la Ley de minas de 1973. Lo que hace la Ley 40/2010 es detallar la normativa sobre uso de las estructuras subterráneas que «por sus características permita retener naturalmente y en profundidad cualquier producto o residuo que en él se vierta o inyecte» [art. 3.1 B) de la Ley de minas de 1973 y art. 5.1 del Reglamento general de la minería de 1978] para su uso como almacén de dióxido de carbono, previamente capturado en grandes instalaciones de energía y otras industrias contaminantes, en virtud de la nueva tecnología impulsada por la Unión Europea.

Todas estas razones confirman que la competencia principal que debe regir la controversia competencial sometida a nuestra jurisdicción debe ser la que reparte el régimen minero entre el Estado central y las Comunidades Autónomas, en virtud del número 25 del art. 149.1 CE y los correlativos preceptos de cada Estatuto de Autonomía.

Todo ello sin perjuicio, como es natural, de que «la incidencia de la actividad considerada en otros ámbitos obligue a corregir la conclusión inicial para tomar en consideración títulos competenciales distintos», si fuera preciso (SSTC 80/1985, de 4 de julio, FJ 1; 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 3, y 14/2004, de 13 de febrero, FJ 5, como vimos en el FJ 7).

9. Entrando ya a analizar las distintas impugnaciones que el Gobierno de Aragón dirige en su demanda contra los preceptos de la Ley 40/2010 que otorgan competencia a los Ministerios de la Administración General del Estado, resulta evidente que la principal es la que atañe a la concesión de almacenamiento. En efecto, a tenor del art. 10.1 de la Ley 40/2010: «El almacenamiento de CO2requerirá la obtención de una concesión otorgada con arreglo a este capítulo. Las concesiones de almacenamiento conferirán a su titular el derecho en exclusiva a almacenar CO2en el lugar de almacenamiento». La Comunidad Autónoma sostiene que es ella y no el Estado, la que debería otorgar dichas concesiones del dominio público minero, lo que le lleva a sostener la inconstitucionalidad del art. 11.1 de la Ley («Compete al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo informe del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino el otorgamiento de las

concesiones de almacenamiento») y, por consiguiente, la de una larga lista de atribuciones asociada a esta potestad esencial: la aprobación de las condiciones de la concesión (art. 13), así como sus modificaciones o el cambio de su titular (arts. 11.3, 15.1 y 16); la revisión del otorgamiento de las concesiones o de sus condiciones (art. 15.1 y 2) y la prórroga de su duración (art. 10.6); la revocación de la concesión (art. 15.3); el cierre del lugar de almacenamiento (arts. 15 y 23.1); la decisión sobre la concurrencia de derechos (arts. 6 y 10.4); la comprobación de la solvencia técnica y financiera de las empresas (art. 10.3); la declaración de la utilidad pública para la expropiación forzosa de los terrenos necesarios (art. 10.7); la recepción de los planes de seguimiento y de gestión posterior al cierre (arts. 19.2 y 3, y 23.2 y 3); el acceso a las redes de transporte, las medidas de mejora y la resolución de conflictos (arts. 26 y 27); o la adaptación de los permisos anteriores a la Ley (Disposición transitoria primera). Conjunto de atribuciones que se ven sistematizadas en el art. 5 de la Ley, donde se enumeran las distintas

competencias que los correspondientes artículos de la Ley asignan a los ministerios de la Administración estatal y las funciones que la Ley entiende que corresponden a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

En esencia, la Comunidad aragonesa sostiene que deberían corresponderle a ella todas las facultades administrativas relativas a la concesión de almacenamiento del dióxido de carbono, pues ella es la competente para la ejecución de las bases del régimen minero establecidas por el Estado (art. 75.2 EAAr). Las Comunidades Autónomas han venido gestionando pacíficamente las concesiones de explotación de los recursos de la sección B), en virtud de la Ley de minas de 1973, que han venido incluyendo las estructuras

subterráneas. Y así deberían seguir haciéndolo, sostiene la demanda iniciadora de este proceso, aunque la Ley 40/2010 haya introducido un régimen especial en la normativa minera para aquellas estructuras subterráneas que sean utilizadas como almacenamiento geológico de dióxido de carbono, a tenor del nuevo art. 1.4 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, introducido por la Disposición final 1 de la Ley 40/2010.

10.Esta tesis central de la demanda no puede ser aceptada. Es cierto que la «previsión de que el Estado y las Comunidades Autónomas puedan compartir un ámbito material determinado en el ejercicio de diferentes potestades y funciones es una de las características típicas del modelo territorial del Estado autonómico. El concurso de dichas potestades y funciones sobre una misma materia se ordena en la Constitución, en términos de principio, bien atribuyendo al Estado central la competencia legislativa y permitiendo la atribución a las Comunidades Autónomas de las competencias de ejecución, bien confiando al primero el establecimiento de normas legales básicas y haciendo posible que las Comunidades Autónomas desarrollen legislativamente dichas bases y sean titulares de las correspondientes potestades de reglamentación y ejecución de la legalidad desarrollada». En relación con este último patrón de reparto de competencias, el concepto constitucional de las bases estatales incluye, desde luego, la fijación por las instituciones generales de Estado de los «principios o mínimo común normativo» de una materia en normas con rango de ley; contenido éste que es el que «mejor se acomoda a la función estructural y homogeneizadora de las bases y ésta la forma normativa que, por razones de estabilidad y certeza, le resulta más adecuada» (por todas, SSTC 69/1988, de 19 de abril, FJ 5, y 31/2010, de 28 de junio, FJ 60). Sin embargo, es doctrina constitucional que «también es posible predicar el carácter básico de normas reglamentarias y de actos de ejecución del Estado (STC 235/1999, de 16 de diciembre), y son factibles en las bases un alcance diferente en función del subsector de la materia sobre la que se proyecten e incluso sobre el territorio (SSTC 50/1999, de 6 de abril y 147/1991, de 4 de julio, respectivamente)». Y ello, no como pura excepción al criterio de las bases estatales con un contenido principal o de mínimo normativo y formalizadas mediante ley, sino como elementos de la definición del contenido y alcance de la competencia atribuida al Estado cuando éste es el titular de la potestad de dictar las bases de la disciplina de una materia determinada (por todas, STC 31/2010, FJ 60).

La tesis de que la investigación y explotación de las estructuras subterráneas, con la finalidad de almacenar dióxido de carbono, debe atenerse literalmente a la regla general que es propia del reparto competencial propio de las bases, en virtud de la cual corresponde al Estado fijar un mínimo común denominador normativo y a la Comunidad Autónoma su íntegro desarrollo y ejecución, es una tesis que ignora o hace abstracción de algunos de los rasgos esenciales de la normativa específica que ha introducido la Ley 40/2010, que justifican que esta variedad de uso del dominio público minero consistente en almacenar dióxido de carbono en el subsuelo no quede ya sometida a las normas comunes de la legislación minera, enunciadas por la Ley de minas de 1973, sino a un cuerpo normativo especial, en el que se ha querido explícitamente establecer un régimen específico.

Así, como hemos visto en fundamentos jurídicos anteriores, la Ley 40/2010 establece un marco regulador específico para una tecnología novedosa, que se encuentra en

proceso de experimentación y desarrollo y que ofrece indudables ventajas en la lucha contra el cambio climático y, al mismo tiempo, indudables riesgos para la salud y el medio natural. En su afán por impulsar el desarrollo de esta nueva tecnología, la Directiva 2009/31 de la Unión Europea ha introducido un conjunto de reglas, de entre las cuales destaca aquella que considera que los Estados miembros tienen competencia para decidir las zonas en las que podrán situarse los emplazamientos de almacenamiento; potestad que «incluye el derecho de los Estados miembros a no permitir almacenamiento alguno en partes de su territorio o en la totalidad del mismo» (art. 4.1 de la Directiva 2009/31). A diferencia de otros Estados miembros, el Reino de España ha optado, dentro del margen de libre configuración legislativa que le corresponde, por no establecer prohibiciones de carácter general o zonal en las disposiciones legales, sino de apreciar la posibilidad de autorizar o denegar el uso del territorio español atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto y en función de los estudios que toda empresa interesada deba llevar a cabo (arts. 10.1 y 11.5 de la Ley 40/2010).

Igualmente, señala que uno de los ejes centrales del régimen establecido por la

Directiva 2009/31 y plasmado en nuestro Derecho por la Ley 40/2010 consiste en prever que, cuando la concesión del dominio minero se extinga, los Estados miembros deben asumir directamente la responsabilidad derivada del almacenamiento del dióxido de carbono de manera indefinida. Esa transferencia de responsabilidad, regida por el art. 24 de la Ley 40/2010 (como vimos en el fundamento jurídico 6), no impugnado por la demanda de inconstitucionalidad, hace recaer la responsabilidad por cualquier fuga o daño que pudiera producirse en los lugares de almacenamiento del dióxido de carbono, una vez extinguida la concesión demanial y vencido el plazo de transición posterior, y por un plazo indefinido, directamente sobre el Estado.

La normativa básica estatal ha optado por un modelo de gestión centralizada de las concesiones de almacenamiento y no por un modelo de gestión autonómica. Este modelo se justifica en el hecho de que las concesiones de almacenamiento, que confieren a sus titulares el derecho en exclusiva a almacenar CO2en un concreto lugar, no constituyen

sino la última fase de un proceso más complejo que se pretende promover a través de la implantación de la nueva tecnología regulada, pues, si bien es cierto que la ley impugnada se limita a regular la actividad de almacenamiento geológico de dióxido de carbono y sólo contiene previsiones puntuales en relación con la captura y el transporte de aquel, también lo es que, para tener una visión completa de la nueva tecnología que se pretende desarrollar, es indispensable tomar en consideración la interconexión que se debe producir entre los lugares de almacenamiento, las redes de transporte y las instalaciones de captura. Redes de transporte e instalaciones de captura que pueden tener una clara dimensión supraterritorial, e incluso supranacional, pues recordemos que la Directiva 2009/31 de la Unión Europea reconoce a los Estados miembros el derecho a no permitir almacenamiento alguno en partes de su territorio o en la totalidad del mismo (art. 4.1 de la Directiva 2009/31), no quedando, sin embargo, por ello excluidos tales Estados de la posibilidad de utilizar los lugares de almacenamiento de otro Estado que sí los permita.

La evidente dimensión supraterritorial del fenómeno regulado se refleja, igualmente, en el Preámbulo de la norma impugnada en el que se destaca cómo el establecimiento de grandes instalaciones de combustión –grandes centrales térmicas– de competencia estatal vendrá íntimamente asociado a la obtención de concesiones de almacenamiento.

En la línea referida, este Tribunal, en relación con la ordenación del sector de la energía nuclear y radioactiva, tuvo ya la oportunidad de afirmar la constitucionalidad de aquella normativa básica estatal que había optado por un sistema abierto a todo el territorio nacional y no por un modelo de gestión autonómica de los residuos radioactivos, pues en aquella ocasión consideramos que «corresponde al legislador básico, en razón a las características estructurales de que se pretenda dotar al sector de la energía nuclear, decidir si los residuos generados en una Comunidad Autónoma han de ser necesariamente almacenados en la misma Comunidad, o si, por el contrario, resulta más adecuado distribuir estratégicamente los centros de producción y los almacenes de residuos de esta modalidad de energía, teniendo como referencia el conjunto del territorio nacional, según las pautas que se estimen convenientes» [STC 14/2004, de 13 de febrero, FJ 13].

11. Por lo tanto, estas opciones legislativas, que son sin duda legítimas, porque atienden a la necesidad de establecer un tratamiento unitario frente a los riesgos asociados para la seguridad colectiva, que, al momento presente, representa la aplicación de una tecnología novedosa que permite la captura y almacenamiento del dióxido de carbono, nos sitúan de lleno en aquella situación en que «la preservación de un tratamiento uniforme reclama el complemento reglamentario, y aun el ejecutivo». Por lo que, en este caso, «se justifica la reserva de estas competencias en la medida indispensable» para asegurar «la unidad de tratamiento» (SSTC 57/1983, de 28 de junio, FJ 7; 96/1984, de 19 de octubre, FJ 3; 144/1985, de 25 de octubre, FJ 4, y 182/2013, de 23 de octubre, FJ 4). Pues «lo básico puede tener mayor o menor intensidad dependiendo del ámbito material sobre el que recaiga y así lo afirmamos en la STC 222/2006, de 6 de julio, FJ 3, a cuyo tenor '[e]ste Tribunal ha empleado un concepto de bases que en modo alguno se concreta

en el empleo de una técnica uniforme en todos los sectores del Ordenamiento, sino que presupone fórmulas de intensidad y extensión variables en función de las características del ámbito concretamente afectado. Así, hemos reconocido modalidades muy diferentes de lo básico, desde la posibilidad de que el legislador estatal, excepcionalmente ocupe, prácticamente, toda la función normativa al determinar las bases de determinadas submaterias, hasta la legitimidad constitucional de algunos actos administrativos de carácter eminentemente ejecutivo por parte de la Administración General del Estado, así como el empleo de otras modalidades muy diversas (topes máximos, niveles mínimos tramos, e, incluso, bases diferenciadas por territorios, etc.)'» (STC 24/2013, de 31 de enero, FJ 4).

Estas razones hacen decaer la impugnación principal que la Comunidad Autónoma dirige contra la Ley 40/2010. Que las Cortes Generales, en el actual estado de evolución del Derecho de la Unión Europea, hayan asignado a la Administración General del Estado la atribución de conceder, o de no hacerlo, el derecho al uso exclusivo de determinados lugares del dominio público minero para el almacenamiento de dióxido de carbono no extralimita la competencia estatal sobre las bases del régimen minero (número 25 del art. 149.1 CE). Por consiguiente, no puede estimarse el recurso en lo tocante al esencial art. 11.1 de la Ley 40/2010 ni, por ende, en lo relativo a todas las demás facultades inherentes a la potestad de otorgamiento de la concesión, lo que lleva, asimismo, a sostener la constitucionalidad de los correspondientes

incisos del artículo 5 de la Ley, que se limitan a sistematizar las atribuciones que distintos preceptos de la Ley asignan a la Administración General del Estado en relación con las concesiones demaniales sobre los lugares de almacenamiento del dióxido de carbono.

12. La conclusión alcanzada impide apreciar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados en la demanda presentada por el Gobierno de Aragón. Por consiguiente, carece de sentido entrar a examinar los restantes títulos competenciales aducidos por una y otra parte en este proceso constitucional si bien no hay que dejar de señalar que es jurisprudencia constitucional que el art. 149.1.13 CE debe ser interpretado de forma estricta cuando concurre con una materia o un título competencial más específico (SSTC 164/2001, de 11 dejulio, FJ 9, y 33/2014, de 27 de febrero, FJ 7), como es en este caso el relativo a la materia minera, siguiendo el criterio de la preferencia del título competencial especial sobre el general (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 2; 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 6, y 148/2011, de 28 de septiembre, FFJJ 3 y 6) y el principio de cautela en la interpretación del orden constitucional de competencias, pues no toda norma o medida con incidencia económica puede encontrar cobertura en el número 13 del art. 149.1 CE si no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general (entre otras, SSTC 21/1999, de 25 de febrero, FJ 5; 235/1999, de 20 de diciembre, FJ 3, y 95/2001, de 5 de abril, FJ 3), so pena de vaciar de contenido una materia y un título competencial más específico (SSTC 95/2002, de 25 de abril, FJ 7; 45/2001, de 15 de febrero, FJ 8, y 77/2004, de 29 de abril, FJ 4). Sin que de la invocación del interés general que deben promover las instituciones generales del Estado pueda resultar otra cosa, por cuanto dicho interés general se ha de materializar a través

del orden competencial establecido, excluyéndose así la extensión de los ámbitos competenciales en atención a consideraciones meramente finalísticas (SSTC 124/2003, de 19 de junio, FJ 6; 36/2012, de 15 de marzo, FJ 4, y 33/2014, de 27 de febrero, FJ 7).

En particular, para dar respuesta a la impugnación del Gobierno de Aragón, conviene subrayar que la competencia del Estado sobre los permisos de investigación que tengan ámbito territorial supracomunitario (arts. 5, 8 y 9 de la Ley 40/2010) se justifica en el hecho de que excede el territorio de una comunidad autónoma y se trata de una actividad pública no susceptible de fraccionamiento, en cuanto que se ejerce sobre una estructura geológica que se extiende por el territorio de varias Comunidades Autónomas y que exige un estudio de conjunto. Así, tal como alega el Abogado del Estado, la actuación no puede llevarse a efecto mediante mecanismos de cooperación y coordinación, pues requiere un grado de homogeneidad que sólo puede garantizar su atribución al Estado. La competencia del Estado sobre la adaptación de autorizaciones preexistentes para el reconocimiento de estructuras subterráneas, con el fin de utilizarlas como almacén de dióxido de carbono (Disposición transitoria primera) supone la competencia para determinar la capacidad de almacenamiento o la idoneidad de un lugar de almacenamiento determinado, así como para autorizar la adaptación de títulos obtenidos antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2010 a las previsiones introducidas por ésta, pues son meras atribuciones instrumentales de la competencia principal y que sólo cobran sentido en función de la

potestad para conceder el uso del subsuelo para el almacenamiento de carbono. Lo mismo cabe decir de las potestades relativas a la garantía del acceso de los usuarios potenciales a las redes de transporte y a los lugares de almacenamiento (artículos 5, 26 y 27), pues carecería de sentido otorgar concesiones para almacenar dióxido de carbono si los yacimientos autorizados no pudieran recibir los flujos que deben ser inyectados en el subsuelo, flujos que proceden de las centrales de energía y otras grandes instalaciones donde se capta el carbono para evitar su dispersión en la atmósfera y que no se encuentran situados necesariamente junto a los lugares en que deben ser depositados. La finalidad de los artículos 26 y 27 de la Ley 40/2010 consiste en asegurar que todas las industrias que capten y transformen el dióxido de carbono producido en sus instalaciones tengan acceso a los lugares de almacenamiento en términos transparentes y no discriminatorios, lo que permite apreciar que las competencias de ejecución previstas en esos preceptos están estrechamente vinculadas al mantenimiento y efectividad de las normas de carácter básico establecidas por la Ley. De donde se desprende la constitucionalidad de atribuir dichas facultades a un departamento de la Administración General del Estado, de modo similar a como hemos juzgado en supuestos análogos (SSTC 72/2014, de 8 de mayo, FJ 10, y 32/2016, de 18 de febrero, FJ 10).

13. Es igualmente constitucional que la Ley 40/2010 atribuya a la Administración estatal la facultad de resolver los conflictos que pudieran suscitarse por la concurrencia de derechos al coincidir en una misma área geográfica autorizaciones, permisos o concesiones relativos al almacenamiento de dióxido de carbono y a otras sustancias minerales y demás recursos geológicos (arts. 5 y 6 de la Ley 40/2010). Nuestra

jurisprudencia siempre ha mantenido que, en el caso de confluencia de competencias estatales y autonómicas sobre un mismo espacio físico, es necesario que se produzca una colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones públicas involucradas, pues no en vano el principio de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas está implícito en el correcto funcionamiento del Estado de las Autonomías. Depende en buena medida de la estricta sujeción de uno y otras a las fórmulas racionales de cooperación, consulta, participación, coordinación, concertación o acuerdo previstas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía; pudiendo elegirse, en cada caso, las técnicas que resulten más adecuadas: el mutuo intercambio de información, la emisión de informes previos en los ámbitos de la propia competencia, la creación de órganos de composición mixta, etcétera (SSTC 181/1988, de 13 de octubre, FJ 7; 40/1998, de 18 de febrero, FJ 30; 204/2002, de 31 de octubre, FJ 7, y 20/2016, de 4 de febrero, FJ 2).

Desde este prisma debe ser interpretado el artículo 6 de la Ley 40/2010 impugnada, precepto al que se remiten los párrafos 1 a) y 3 a) de su artículo 5, cuando dispone que «En el caso de que las labores sean incompatibles, definitiva o temporalmente, se determinará motivadamente la sustancia o recurso cuya explotación resulta de mayor interés. En última instancia, en ausencia de un interés prevalente, se dará prioridad al derecho de mayor antigüedad». Ninguna de estas resoluciones puede ser alcanzada por la Administración estatal o la autonómica sin tomar en consideración los intereses públicos que son competencia de la otra Administración ni, por ende, sin contar con el intercambio de información, la emisión de informes o la reunión de órganos conjuntos que resultaren precisos. Sin embargo, si esos cauces de cooperación resultasen infructuosos, la jurisprudencia constitucional también ha afirmado que la decisión final corresponderá al titular de la competencia prevalente, sin que el Estado pueda «verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma» (SSTC 77/1984, de 3 de julio, FJ 3; 56/1986, de 13 de mayo, FJ 3; 204/2002, de 31 de octubre, FJ 7, y 8/2016, de 21 de enero, FJ 2).

Por consiguiente, la previsión legal de que la Administración del Estado debe ser quien dicte la resolución pertinente, en aquellos supuestos de concurrencia de derechos en que se encuentre en cuestión un permiso o concesión otorgado por ella, cuando no sea posible conseguir una solución con la que se muestre conforme la Comunidad Autónoma, no vulnera el orden constitucional de competencias. Todo ello sin perjuicio de que, eventualmente, los tribunales de justicia diriman cuál ha de ser el derecho preferente en atención a los criterios establecidos por la legislación minera en su conjunto.

14. Las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de medio ambiente no llegan al extremo de impedir que el Estado deba velar, asimismo, por la protección medioambiental en el ejercicio de sus competencias. Esta idea elemental ha sido sostenida por la doctrina de este Tribunal en un amplio número de sentencias, cuya doctrina fue condensada por la STC 13/1998, de 22 de enero, cuando afirmó que todas las Administraciones públicas deben proteger el medio ambiente «cuando ejercen sus competencias sobre cualquiera de las obras, instalaciones u otras actividades de su

competencia», por lo que es conforme con el orden constitucional de competencias que la normativa «confíe la evaluación del impacto ambiental a la propia Administración que realiza o autoriza el proyecto de una obra, instalación o actividad que se encuentra sujeta a su competencia, a tenor del bloque de la constitucionalidad». «La Administración estatal ejerce sus propias competencias sustantivas sobre la obra, la instalación o la actividad proyectada, aun cuando preceptivamente deba considerar su impacto medioambiental. No está ejecutando la legislación básica del medio ambiente. Ésta se agota en aprobar la norma que obliga a todas las Administraciones públicas a que, cuando actúan en el ejercicio de cualesquiera de sus competencias, ponderen y evalúen las repercusiones sobre el medio ambiente, minimizando y corrigiendo los daños causados a la población y al medio ambiente natural y cultural del territorio afectado por dicha actuación, cuando no renunciando a llevarla a cabo» (STC 13/1998, de 22 de enero, FFJJ 7 y 8; en el mismo sentido, entre otras muchas, SSTC 245/2012, de 18 de diciembre, FJ 22; 5/2013, de 17 de enero, FJ 3; 202/2013, de 5 de diciembre, FJ 3, y 57/2015, de 18 de marzo, FJ 4). Por ende, resulta constitucional que la Ley 40/2010 exija un informe o una declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente respecto a los permisos o concesiones otorgados por el Ministerio de Industria, sin perjuicio de los informes preceptivos que deben emitir las Comunidades Autónomas cuyo territorio pueda verse afectado por el almacenamiento de dióxido de carbono [artículos 5, párrafos 2 a) y 3 b), 9.6 y 11.6 de la Ley 40/2010, así como su Disposición final segunda].

15. Quedaría, por último, examinar una de las quejas subsidiarias alegadas por la parte recurrente que considera que no son constitucionales las diversas remisiones que la Ley 40/2010 efectúa a un desarrollo reglamentario estatal: concretamente, sobre las condiciones necesarias para el desarrollo de redes auxiliares de transporte (art. 1.3) y de las medidas necesarias para garantizar el acceso de los usuarios potenciales a las redes de transporte y a los lugares de almacenamiento y su régimen retributivo (art. 26.1 y 3).

Para el Consejo de Gobierno de Aragón las bases de competencia del Estado deben ser establecidas en normas con rango de ley, requisito que no se cumple en ninguno de los casos señalados. Por añadidura, aun cuando la jurisprudencia constitucional admita excepcionalmente la existencia de bases con rango reglamentario, resulta excesivo que sean aprobadas, no por el Gobierno de la Nación, sino por una mera orden ministerial, tal y como prevé el artículo 26.3 de la Ley 40/2010 para determinar el régimen retributivo de las redes de transporte.

Para responder a la queja alegada, debemos reiterar nuestra doctrina que establece que si bien el concepto constitucional de las bases estatales incluye, desde luego, la fijación por las instituciones generales de Estado de los «principios o mínimo común normativo» de una materia en normas con rango de ley; contenido éste que es el que «mejor se acomoda a la función estructural y homogeneizadora de las bases y ésta la forma normativa que, por razones de estabilidad y certeza, le resulta más adecuada» (por todas, SSTC 69/1988, de 19 de abril, FJ 5, y 31/2010, FJ 60). Sin embargo, es doctrina constitucional que «también es posible predicar el carácter básico de normas

reglamentarias y de actos de ejecución del Estado (STC 235/1999, de 16 de diciembre), y son factibles en las bases un alcance diferente en función del subsector de la materia sobre la que se proyecten (SSTC 50/1999, de 6 de abril y 147/1991, de 4 de julio, respectivamente)». Así como excepción al principio de ley formal el Gobierno puede hacer uso de la potestad reglamentaria, para regular por norma reglamentaria alguno de los preceptos básicos de una materia, cuando resulten, por la competencia de ésta, complemento necesario para garantizar el fin a que responde la competencia sobre las bases (STC 98/2001, de 5 de abril, FJ 7, con cita de la STC 69/1988, de 19 de abril, FJ5)» (STC 14/2004, de 13 de febrero, FJ 11). En definitiva, se ha aceptado que las normas básicas sean de rango reglamentario siempre que tengan una conexión clara con una norma legal y que la remisión a la norma reglamentaria se justifique por la naturaleza de la materia (STC 8/2012, de 18 de enero, FJ 6).

En el presente supuesto, referido al ejercicio del título sobre las bases del régimen minero (art. 149.1.25 CE), la intervención de la norma reglamentaria se encuentra amparada en la necesidad de completar la regulación de la disciplina básica definida en la norma legal y en el carácter marcadamente técnico de la materia (STC 4/2013, FJ 5), concretamente se trataría de la regulación de las condiciones necesarias para el desarrollo de redes auxiliares de transporte (art. 1.3) y de las medidas necesarias para garantizar el acceso de los usuarios potenciales a las redes de transporte y a los lugares de almacenamiento y su régimen retributivo (art. 26.1 y 3). Así, en el presente supuesto la remisión a las normas reglamentarias para regular materias básicas no puede reputarse sin más inconstitucional.

En lo que se refiere a la constitucionalidad de la atribución al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para que, por vía reglamentaria, pueda establecer las medidas necesarias para garantizar el acceso de los usuarios potenciales a las redes de transporte y a los lugares de almacenamiento, así como al establecimiento del régimen retributivo de las redes de transporte, a que se refieren los apartados 1 y 3 del art. 26 de la Ley 40/2010, cabe afirmar que lo términos en que se realiza la misma no son incondicionados, por lo que a priori tal remisión no se opone a nuestra doctrina; aquellos apartados establecen la cautela de que «reglamentariamente podrán precisarse las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo previsto en este artículo» (apartado 1) y que «el régimen retributivo de las redes de transporte será determinado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de la forma que reglamentariamente se establezca» (apartado 3).

Así, hemos aceptado que, en el ámbito de lo básico, las normas legales que establezcan las bases de la regulación pueden venir complementadas por otras

reglamentarias que resulten necesarias para garantizar el fin al que respondan las competencias que se ejercitan, siempre que guarden una conexión con aquéllas y que la remisión reglamentaria se justifique por razón de la materia.

Pues bien, en los dos apartados del artículo 26 impugnados se contiene la normativa básica, pues en el primero de los casos la remisión a la norma reglamentaria sirve para regular con detalle cómo hayan de ser aquellas medidas que, en cada supuesto específico, regulen el acceso de los usuarios a las diferentes redes de transporte y de almacenamiento, mientras que en el segundo la remisión a una norma reglamentaria se circunscribe a que, por dicha vía normativa, se regule, también de modo detallado, el régimen específico de retribuciones para las diferentes redes de transporte y de almacenamiento que se instalen.

En consecuencia, para ambas situaciones, la remisión a la vía reglamentaria no excede del mero complemento a unos presupuestos básicos fijados en el precepto legal que delimitan el ámbito de actuación de la Administración del Estado; la remisión a la vía reglamentaria no tiene otra finalidad que la de establecer el marco aplicativo para los diferentes sistemas de redes de transporte y de almacenamiento instalados o que puedan instalarse en el territorio nacional.

La alusión que en el recurso se hace a que la remisión a la norma reglamentaria lo pueda ser finalmente y de modo directo a una orden ministerial dictada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, no pasa de ser una mera afirmación que únicamente podrá advertirse en el momento en que se haya producido el completo desarrollo reglamentario de los preceptos ahora impugnados, lo que no ha tenido lugar al tiempo de ser dictada esta sentencia; sólo a partir del momento de la publicación de la hipotética Orden sería posible apreciar el cumplimiento o no de nuestra doctrina. Por tanto, la eventual inconstitucionalidad que pudiera apreciarse por un desarrollo de los mandatos legislativos, mediante una orden ministerial y no a través de un previo real decreto, habría que referirla a esta última Disposición, pero no a las normas legales ahora impugnadas.

Por todo ello, procede desestimar el recurso en lo que se refiere a los apartados 1 y 3 del art. 26 de la Ley 40/2010."

2. CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

A) Cuestiones planteadas en 2016.

No consta cuestión de inconstitucionalidad alguna sobre normativa aragonesa interpuesta en el año 2016.

B) Cuestiones planteadas en anteriores años y que están aún en tramitación.

- Cuestión de inconstitucionalidad nº 1795-2015, en relación con la disposición transitoria segunda, apartados 2 y 3, en relación con los artículos 22, 25 y 26, de la Ley de Aragón 8/2013, de 12 de septiembre, de Coordinación de las Policías Locales de Aragón, por posible vulneración de los artículos 137, 140 y 149.1.18 de la Constitución y 51.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 28 de abril de 2015, admitió a trámite la cuestión de de inconstitucionalidad indicada, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 4 de Zaragoza en relación con el procedimiento abreviado nº 253-2014 respecto de los preceptos indicados de la mencionada Ley (BOE nº 103, de 30 de abril de 2015).

C) Sentencias y autos dictados en 2016 sobre cuestiones de inconstitucionalidad en relación con normativa aragonesa.

No constan.

3. CONFLICTOS DE COMPETENCIA

A) Conflictos planteados en 2016.

- Conflicto positivo de competencia nº 2057-2016, en relación con los artículos 2.2; 3.2, párrafo primero; 10.1, párrafo tercero; 10.2, párrafo primero; 10.3, párrafo primero; disposición transitoria única, punto 3, párrafo segundo; disposición final cuarta, apartado cuarto, y Anexo II, párrafo siguiente al apartado seis, del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se

regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 10 de mayo de 2016, admitió a trámite el conflicto positivo de competencia reseñado, promovido por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con los preceptos indicados de la mencionada Ley.

B) Conflictos planteados en anteriores años y que están aún en tramitación.

No constan.

C) Sentencias dictadas en 2016 sobre conflictos de competencia.

No constan sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional a incluir en este apartado.

ESTADO DE OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO CIVIL ARAGONÉS EN 2016

1. OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DEL DERECHO CIVIL ARAGONÉS

Iniciamos este apartado dando cuenta de las resoluciones, -79 sentencias (S) y 31 autos (A)-, que se han podido recabar en esta Institución durante el año 2016, bien remitidas de forma directa por los Jueces y Tribunales del territorio aragonés, bien localizadas por otros distintos medios.

Agradecemos el interés y atención con que vienen acogiendo nuestras peticiones los jueces aragoneses. Ello nos permite ofrecer una visión más amplia, si bien todavía no completa, de la aplicación del Derecho civil aragonés por Jueces y Tribunales.

Continuamos la vía seguida en anteriores informes ofreciendo listados acumulados de modo cronológico y sistemático de las sentencias reseñadas en los Informes Anuales del Justicia de Aragón a partir de 1990. Confiamos en que la utilización de los índices acumulados de más de veinte años de aplicación judicial del Derecho civil aragonés facilitará el trabajo de todos los profesionales y estudiosos de nuestro Derecho.

1.1. Resumen por Juzgados y Tribunales - Año 2016

El número total de resoluciones judiciales relacionadas con el Derecho Civil aragonés de cuya existencia hemos tenido conocimiento a lo largo de 2016 asciende a 110. De ellas, 79 son Sentencias (S) y 31 son Autos (A). Distinguiendo entre sentencias y autos, el número de las resoluciones aquí analizadas, por cada Tribunal o Juzgado es el siguiente:

Núm. total de Sentencias (S)	
TSJ de Aragón	23
Audiencias Provinciales:	
Huesca	
Teruel	18
Zaragoza	30
Juzgados de Primera Inst.:	8
Núm. total de Autos (A)	
TSJ de Aragón	31
Audiencia Provincial Huesca	
Audiencia Provincial de Teruel	
Audiencia Provincial de Zaragoza	
Juzgados de Primera Instancia	

1.2. Resumen por Juzgados y Tribunales - periodo 1990/2016

El número total de resoluciones judiciales relacionadas con el Derecho Civil Aragonés de cuya existencia hemos tenido conocimiento a lo largo del periodo 1990-2016 asciende a 2.837. De ellas, 2.113 son Sentencias (S) y 724 son Autos (A).

Distinguiendo entre sentencias y autos, el número de las sentencias aquí analizadas, por cada Tribunal o Juzgado es el siguiente:

Núm. total de Sentencias (S):	2.113
Tribunal Supremo	12
TSJ de Aragón	273
TSJ de Madrid	1
Audiencias Provinciales:	
Barcelona	2
Lleida	1
Huesca	329
Teruel	225
Zaragoza	709
Juzgados de Primera Instancia:	
Alcañiz (1)	6
Alcañiz (2)	12
Barbastro	11
Boltaña	8

Calamocha	7
Calatayud (1)	3
Calatayud (2)	25
Caspe	4
Daroca	6
Ejea (1)	89
Ejea (2)	19
Fraga	5
Huesca (1)	4
Huesca (2)	27
Huesca (3)	4
Huesca (4)	
Jaca (1)	2
Jaca (2)	5
La Almunia (1)	19
La Almunia (2)	1
Monzón	14
Monzón (2)	5
Tarazona (1)	1
Tarazona (2)	2
Tarazona	13
Teruel (1)	21
Teruel (2)	22
Zaragoza (1)	2
Zaragoza (2)	17
Zaragoza (3)	12
Zaragoza (4)	4
Zaragoza (6)	40
Zaragoza (7)	1
Zaragoza (9)	2
Zaragoza (10)	3
Zaragoza (12)	12
Zaragoza (13)	12
Zaragoza (14)	59
Zaragoza (15)	2
Zaragoza (16)	2
Zaragoza (17)	25
Zaragoza (19)	1

Juzgado de Violencia sobre la Mujer (1) 13

Y el número total de Autos ha ascendido a 724.

1.3. Listado de la Jurisprudencia Civil aragonesa, por fechas y por materias

En los listados que siguen se ha utilizado como clave de clasificación la diseñada originariamente para la bibliografía de Derecho aragonés en el repertorio publicado en "Primeras Jornadas sobre el Estado de los Estudios sobre Aragón" (Teruel, 1978). Se ha tendido a clasificar cada resolución en un solo apartado (aunque con excepciones).

Se transcribe a continuación la parte de la aludida clasificación que interesa para estos listados:

5. FUENTES. COSTUMBRE. STANDUM EST CHARTAE. CÓDIGO CIVIL.
6. PERSONA Y FAMILIA.
    - 61. En general.
    - 62. Persona. Edad.
    - 63. Ausencia.
    - 64. Relaciones entre ascendientes y descendientes.
    - 65. Tutela, adopción y Junta de Parientes.
    - 66. Régimen económico conyugal.
        - 661. En general.
        - 662. Régimen paccionado.
        - 663. Régimen legal.
    - 67. Comunidad conyugal continuada.
    - 68. Viudedad.
7. DERECHO DE SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE.
    - 71. En general. Normas comunes.
    - 72. Sucesión testamentaria.
    - 73. Sucesión paccionada.
    - 74. Fiducia sucesoria.
    - 75. Legítimas.
    - 76. Sucesión intestada.
8. DERECHO DE BIENES.
9. DERECHO DE OBLIGACIONES.
10. DERECHO TRANSITORIO
0. OTRAS MATERIAS

a') Listado por fechas

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
21/01/1988	S	JD	Teruel	8	144,147
26/06/1989	S	TS	Madrid	68	51,76
03/10/1989	S	TSJ	Zaragoza	74	
08/01/1990	A	JPI	Huesca (2)	76	127,128
12/01/1990	S	AP	Zaragoza (3)	8	144,145,147
15/01/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	68, 52,73,80
22/01/1990	S	TSJ	Zaragoza	9	149,15
06/02/1990	S	AP	Zaragoza (4)	661,663	24,37,48
06/02/1990	S	AP	Zaragoza (4)	9	149,15
06/02/1990	S	TS	Madrid	663	37,4
07/02/1990	S	JPI	Teruel (2)	8	144,145
20/02/1990	S	JPI	Ejea (1)	8	144,145
20/02/1990	S	JPI	Huesca (2)	9	149
21/02/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	48
22/02/1990	A	JPI	Huesca (2)	76	127,128
28/02/1990	S	TS	Madrid	68	76,78
12/03/1990	A	JPI	Zaragoza (6)	64	10
17/03/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	48
31/03/1990	S	JPI	Teruel (2)	8	144
05/04/1990	A	AP	Zaragoza (1)	64	9,1
05/04/1990	S	AP	Zaragoza (4)	9	149,151
10/04/1990	S	TS	Madrid	68,76	3,86
14/04/1990	S	AP	Teruel	8	145,147,148
16/04/1990	S	AP	Zaragoza (4)	68,72	
08/05/1990	S	JPI	Tarazona (2)	8	147
08/05/1990	S	AP	Zaragoza (4)	8	147
08/05/1990	S	AP	Zaragoza (4)	8	147
15/05/1990	S	JPI	Tarazona (2)	8	144,145
25/05/1990	S	JPI	Ejea (1)	8	144
25/05/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	
28/05/1990	S	JPI	Ejea (1)	8	
30/05/1990	S	AP	Teruel	8	144,145
01/06/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	
06/06/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	48
20/06/1990	S	AP	Teruel	5	1,3
27/06/1990	S	AP	Zaragoza (3)	8	144,145
27/06/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	37,38,40
17/07/1990	S	AP	Zaragoza (4)	8	144,145
20/07/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	52
23/07/1990	S	JPI	Ejea (1)	8	144
26/07/1990	S	AP	Teruel	8	147,148
27/07/1990	A	AP	Teruel	8	DT 10
03/09/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
04/09/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	
06/09/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	46
11/09/1990	S	AP	Zaragoza (4)	663	48
03/10/1990	S	AP	Teruel	663	3,51
10/10/1990	S	JPI	Tarazona (1)	71	142
15/10/1990	S	JPI	Ejea (1)	64	9,1
24/10/1990	S	JPI	Ejea (2)	8	144
25/10/1990	S	JPI	Calamocha	9	149
31/10/1990	S	AP	Teruel	8	144
12/11/1990	S	TS	Madrid	71	142,76
14/11/1990	S	AP	Zaragoza (4)	73	DT 6,97
24/11/1990	S	AP	Teruel	76	38,132
27/11/1990	S	AP	Zaragoza (4)	68	80,82
27/11/1990	S	AP	Zaragoza (4)	8	147,148
01/12/1990	S	JPI	Zaragoza (6)	64,65	10,20,21
06/12/1990	S	AP	Zaragoza(3)	8	144
14/12/1990	S	AP	Huesca	68	76
18/12/1990	S	TSJ	Zaragoza	5	1,2,3
19/12/1990	S	JPI	Ejea (1)	9	64
20/12/1990	S	AP	Zaragoza (3)	663,8	38,51
21/12/1990	S	TS	Madrid		75,71, 120,121,141
28/12/1990	S	JM	Teruel	64	
08/01/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
10/01/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
12/01/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	40
12/01/1991	S	JPI	La Almunia	72	94
14/01/1991	S	AP	Huesca	9	149,15
17/01/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	42
18/01/1991	S	AP	Zaragoza (4)	5, 76	9,14 y 16 C.C., 132
23/01/1991	A	JPI	Monzón	76,68	72,79,127,128
25/01/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
01/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
01/02/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	40,48
01/02/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	53
04/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
06/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
07/02/1991	S	AP	Teruel	8	147
12/02/1991	A	JPI	Fraga	76	132,135
12/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
14/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
16/02/1991	S	TSJ	Zaragoza	76	79
15/02/1991	A	JPI	Fraga	76	135
15/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
15/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
21/02/1991	S	JPI	Caspe	8	144
22/02/1991	A	JPI	Fraga	76	132
22/02/1991	A	JPI	Fraga	76,68	78,127,128
26/02/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
26/02/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	68, 48,76
26/02/1991	S	JPI	Fraga	68	73
28/02/1991	A	JPI	Fraga	76,68	86,127,128
01/03/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
01/03/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
07/03/1991	S	AP	Zaragoza (4)	73	103.3
13/03/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
15/03/1991	S	JPI	Alcañiz (1)	8	144,145
21/03/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
10/04/1991	A	JPI	Fraga	76	127.128
17/04/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
17/04/1991	A	JPI	Monzón	76	127,132
18/04/1991	A	JPI	Monzón	68	86
19/04/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	37,38
02/05/1991	A	JPI	Fraga	76	135
05/05/1991	S	AP	Zaragoza (4)	68	76
08/05/1991	A	JPI	Monzón	76	127,135
16/05/1991	A	JPI	Fraga	76	135
17/05/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
18/05/1991	S	AP	Teruel	8	144
18/05/1991	S	JPI	Teruel (2)	9	149
22/05/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
22/05/1991	A	JPI	Monzón	76	108,127,135
24/05/1991	A	AP	Huesca	74	118
29/05/1991	S	TSJ	Zaragoza	72,73	A19,95,108,DT12
08/06/1991	S	JPI	La Almunia	8	147
12/06/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
14/06/1991	S	AP	Zaragoza (4)	68	72
15/06/1991	S	AP	Teruel	71	138
18/06/1991	S	AP	Teruel	5	3
19/06/1991	A	JPI	Fraga	76	132
19/06/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
19/06/1991	A	JPI	Fraga	76,68	86,127,128
20/06/1991	S	JPI	Alcañiz (1)	8	147,148
27/06/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
01/07/1991	A	JPI	Zaragoza (6)	64	10
01/07/1991	S	JPI	Huesca (2)	8	148
01/07/1991	S	JPI	La Almunia	663	40,43
08/07/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
16/07/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
16/07/1991	S	AP	Huesca	68,75	73,125
17/07/1991	A	JPI	Fraga	76	79,86,127,128
17/07/1991	A	JPI	Monzón	76	127,128,135
17/07/1991	S	JPI	La Almunia	8	144
22/07/1991	S	AP	Teruel	8	147,148
23/07/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
23/07/1991	A	JPI	Monzón	76	127,128
23/07/1991	S	AP	Zaragoza (4)	73,74	89

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
31/07/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
31/07/1991	S	JPI	Jaca (1)	662,74	33,114,115
02/09/1991	S	JPI	Zaragoza (7)	75	123
04/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,129,135
05/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
05/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
07/09/1991	A	JPI	Barbastro	72	93
09/09/1991	A	JPI	Fraga	76	132,135
11/09/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
13/09/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
16/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
16/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
17/09/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
17/09/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	38,39,40
18/09/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
19/09/1991	A	JPI	Fraga	76	132
19/09/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
23/09/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
23/09/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
26/09/1991	S	JPI	Daroca	75	119,123,140
27/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
27/09/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
30/09/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
01/10/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
01/10/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
07/10/1991	S	JPI	Teruel (1)	8	147,148
08/10/1991	A	JPI	Monzón	76	72,127,135
09/10/1991	S	AP	Zaragoza (2)	8	144,145,147
10/10/1991	A	JPI	Monzón	76	127,135
16/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
16/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
17/10/1991	A	JPI	Monzón	76	127,128
18/10/1991	S	AP	Teruel	8	147
18/10/1991	S	JPI	La Almunia	663	41,43
19/10/1991	S	AP	Zaragoza(2)	663	42
21/10/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
24/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
18/10/1991	S	JPI	La Almunia	663	41,43
19/10/1991	S	AP	Zaragoza(2)	663	42
21/10/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
24/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
26/10/1991	S	AP	Zaragoza (2)	8	144,147
26/10/1991	S	JPI	Huesca (1)	9	149
29/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
29/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
30/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
30/10/1991	A	JPI	Monzón	76	127,135
30/10/1991	A	JPI	Monzón	76	127,135

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
31/10/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
04/11/1991	S	JPI	Teruel (1)	5	3
05/11/1991	S	AP	Huesca	8	144,145
06/11/1991	A	JPI	Fraga	76	130,135
06/11/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
09/11/1991	S	TSJ	Zaragoza	74	3,99,100,104,107
12/11/1991	S	JPI	Barbastro	8	144,147
13/11/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
13/11/1991	A	JPI	Monzón	76	127,132
21/11/1991	A	JPI	Zaragoza (6)	68	76
21/11/1991	S	AP	Teruel	663	55
26/11/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	41,42,43
27/11/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
02/12/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
02/12/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
05/12/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
07/12/1991	S	AP	Zaragoza (2)	663	37
10/12/1991	S	AP	Zaragoza (2)	663	26,41,43
11/12/1991	S	AP	Zaragoza(4)		
18/12/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
20/12/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
20/12/1991	S	AP	Teruel	8	147
20/12/1991	S	AP	Zaragoza (4)	663	37,4
20/12/1991	A	JPI	Fraga	76	127,128
20/12/1991	A	JPI	Fraga	76,68	79,86,127,128
23/12/1991	S	AP	Zaragoza (4)	64	10
28/12/1991	S	AP	Teruel	64	9
30/12/1991	A	JPI	Daroca	76	79,127,128,135
31/12/1991	S	AP	Teruel	5	3
22/01/1992	S	AP	Teruel	8	147
22/01/1992	S	AP	Teruel	8	147,1.2
05/02/1992	S	AP	Zaragoza (2)	8	144,145
10/02/1992	S	AP	Teruel	5	3,1.2
13/02/1992	S	AP	Teruel	8	147,1.2
13/02/1992	S	TSJ	Zaragoza	663,68	48,51,76
21/02/1992	S	AP	Teruel	5	3
21/02/1992	S	AP	Zaragoza (2)	71,75	14cc, 122,140
22/02/1992	S	AP	Zaragoza (2)	64	156cc,9 ss
29/02/1992	S	AP	Zaragoza (2)	5,7	8,14,16Cc,123
02/03/1992	S	AP	Zaragoza	68	
02/03/1992	S	AP	Huesca	663	37,48,49
05/03/1992	S	AP	Huesca	663	41,42
09/03/1992	S	AP	Teruel	76,68,5	3,72,79,127,128
10/03/1992	S	AP	Zaragoza	8	144
10/03/1992	S	AP	Huesca	5	2,3
11/03/1992	S	AP	Teruel	72	94
16/03/1992	S	AP	Huesca	74	33
18/03/1992	S	AP	Teruel	662,663,5	25,43,3

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
24/03/1992	S	AP	Zaragoza (4)	68	79,84
24/03/1992	S	TS	Madrid	5	
25/03/1992	S	TSJ	Zaragoza	663	1,48
04/04/1992	S	AP	Huesca	9	149,15
04/04/1992	S	AP	Zaragoza (2)	663	58
18/04/1992	S	TS	Madrid	663	26,24,56
21/04/1992	S	AP	Zaragoza (4)	663	26,41,42,56
05/05/1992	S	AP	Teruel	5	3
09/05/1992	S	AP	Zaragoza (2)	76	135
15/05/1992	S	AP	Zaragoza (4)	5	2
27/05/1992	S	AP	Zaragoza (2)	71	141
01/06/1992	S	JPI	Daroca	9	149,15
08/06/1992	S	JPI	Ejea (1)	68	76
11/06/1992	S	AP	Teruel	5	1.2
18/06/1992	S	TSJ	Zaragoza	5,663	3,48.1
24/06/1992	S	AP	Zaragoza (2)	8	145
24/06/1992	S	AP	Zaragoza (2)	68	76
26/06/1992	S	AP	Huesca	8	144
03/07/1992	A	TSJ	Zaragoza	5	3
11/07/1992	S	AP	Huesca	5	1,2,3
11/07/1992	S	AP	Zaragoza (2)	8	144
13/07/1992	S	AP	Zaragoza (4)	7	
27/07/1992	S	AP	Zaragoza (2)	5,663	3,48,51
28/07/1992	S	AP	Huesca	8	144,145
12/09/1992	S	AP	Teruel	5	1.2
25/09/1992	S	AP	Zaragoza (2)	5,73,76	108,132
29/09/1992	S	TSJ	Zaragoza	5,74,662	3,25,33,114,DT7y8
30/09/1992	S	AP	Zaragoza (5)	67,74,663	94,112,60-65,DT1
26/10/1992	S	AP	Zaragoza (4)	8	144,145
30/10/1992	S	AP	Teruel	8	144,145
04/11/1992	S	TSJ	Zaragoza	9	149,15
09/11/1992	S	AP	Zaragoza (2)	663	48
10/11/1992	S	AP	Zaragoza (4)	6	51
11/11/1992	S	AP	Zaragoza (4)	5,661	29,36,52,DT1
11/11/1992	S	AP	Zaragoza (2)	663	37
01/12/1992	S	AP	Zaragoza	663	56,58
03/12/1992	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
10/12/1992	A	AP	Zaragoza (2)	663	54
16/12/1992	S	AP	Zaragoza (4)	663	56
22/12/1992	S	AP	Teruel	663	37 a 40
23/12/1992	S	AP	Zaragoza (2)	8	144
28/12/1992	S	AP	Zaragoza (2)	73	108
12/01/1993	S	AP	Zaragoza (4)	8	144
20/01/1993	S	JPI	Caspe	8	144
21/01/1993	S	AP	Huesca	8	144,145,147
21/01/1993	S	AP	Teruel	5	2
19/02/1993	S	AP	Huesca	73	103
15/03/1993	S	JPI	La Almunia	8	145,147

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
17/03/1993	A	TSJ	Zaragoza	65	1,271
22/03/1993	S	AP	Zaragoza (4)	8	147
23/03/1993	S	TSJ	Zaragoza	663	41,48,55
07/04/1993	S	AP	Zaragoza (2)	8	144
29/04/1993	S	AP	Huesca	8	144
21/05/1993	S	TSJ	Zaragoza	74	110,113
25/05/1993	S	AP	Huesca	663	40,48
31/05/1993	S	AP	Teruel	8	144
02/06/1993	S	AP	Huesca	5	3
03/06/1993	S	JPI	Huesca (2)	64,65	177
03/06/1993	S	JPI	La Almunia	8	144
07/06/1993	S	AP	Huesca	9	149,15
22/06/1993	S	AP	Teruel	5	1
25/06/1993	S	AP	Huesca	75	121
15/07/1993	S	AP	Teruel	8	144
20/07/1993	S	AP	Huesca	64	11
21/07/1993	S	JPI	Zaragoza (13)	8	144
22/07/1993	S	AP	Teruel	8	144,145
28/07/1993	S	JPI	La Almunia	8	144
30/07/1993	S	JPI	Boltaña	5,65,73,74	1,2,20,99,114
30/07/1993	S	JPI	Ejea (2)	73	103
01/09/1993	S	JPI	Boltaña	9	149
01/09/1993	S	AP	Huesca	5	2,3
03/09/1993	S	AP	Teruel	5	1
08/09/1993	S	AP	Zaragoza (4)	72	90
11/09/1993	S	AP	Teruel	5	1
14/09/1993	S	AP	Huesca	64	14
29/09/1993	S	AP	Huesca	8	144
30/09/1993	S	TSJ	Zaragoza	72,75	120,122
09/10/1993	S	TSJ	Zaragoza	71,73	142, 99
11/10/1993	S	AP	Huesca	65	9, 177 C.Civ.
13/10/1993	S	AP	Zaragoza (5)	663	48,49
13/11/1993	S	JPI	La Almunia	68,71,663	37,4
30/11/1993	S	JPI	Huesca (2)	68,72	38,51,76
16/12/1993	S	JPI	Huesca (2)	663	55,56,57,58
22/12/1993	A	TSJ	Zaragoza	662	29,DT1,48Ap
31/12/1993	S	TSJ	Zaragoza	663	38
10/01/1994	S	AP	Teruel	8	147
14/01/1994	S	JPI	Zaragoza (14)	74	110.3
20/01/1994	S	AP	Huesca	663	DT 2ª y 12ª, 49 A
26/01/1994	S	AP	Teruel	8	147
28/01/1994	S	JPI	Zaragoza (13)	8	144.3
21/02/1994	A	AP	Zaragoza	663	46
21/02/1994	S	JPI	Huesca (2)		5, 73, 74
01/03/1994	S	JPI	Calatayud (2)	8	146, 148
02/03/1994	S	AP	Zaragoza (5)	75	120, 123
02/03/1994	S	JPI	Caspe	8	147,148
07/03/1994	S	AP	Zaragoza (2)	68, 75	73
07/03/1994	S	AP	Huesca	8	144, 145

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
09/03/1994	S	JPI	Zaragoza (13)	8	144,145
14/03/1994	S	JPI	Teruel (1)	8	148
23/03/1994	S	AP	Barcelona	68, 74	86
04/04/1994	S	JPI	Huesca (2)	64	
08/04/1994	S	AP	Teruel	8	147
08/04/1994	S	JPI	Zaragoza (14)	8	144,145
15/04/1994	S	JPI	Zaragoza (13)	68	86
20/04/1994	S	AP	Zaragoza (2)	8	144,145
25/04/1994	S	AP	Zaragoza (5)	663	41.5, 42
25/04/1994	S	AP	Huesca	8	147
04/05/1994	S	JPI	Fraga	5	33
06/05/1994	S	AP	Huesca	8	144
09/05/1994	S B270	JPI	Ejea (2)	8	144,147
16/05/1994	S	AP	Teruel	8	144.3
18/05/1994	S	JPI	Zaragoza (2)	663, 72	37, 40, 108
30/05/1994	S	AP	Huesca	8	144
03/06/1994	S	AP	Huesca	9	149
03/06/1994	S	JPI	Ejea (1)	64	10
16/06/1994	S	JPI	Teruel	8	147
28/06/1994	S	AP	Zaragoza (5)	663	46
28/06/1994	S	JPI	Ejea (2)	5, 73	3
09/07/1994	S	AP	Zaragoza (2)	8	145, 541 C.Civ.
11/07/1994	S	AP	Zaragoza (2)	68	76
11/07/1994	S	TSJ	Zaragoza	5, 68	1, 72, 73, 75
12/07/1994	S	JPI	Ejea (1)	8	144, 145
18/07/1994	S	AP	Zaragoza (5)	71	138
23/07/1994	S	AP	Zaragoza (5)	8	147
26/07/1994	S	JPI	Teruel (1)	8	147
26/07/1994	S	AP	Huesca	663	52
30/07/1994	S	AP	Huesca	73, 74, 76	114, 127
01/09/1994	S	JPI	Jaca (2)	663	51
07/09/1994	S	AP	Teruel	8	147
13/09/1994	S	JPI	Teruel (1)	663	41.5
24/09/1994	S	AP	Zaragoza (2)	663	52,2
26/09/1994	S	JPI	Fraga	663	55, 38, 41, 47
05/10/1994	S	JPI	Almunia	8	144, 145
10/10/1994	S	JPI	Zaragoza (14)	8	147
17/10/1994	S	AP	Teruel	8	147
17/10/1994	S	AP	Zaragoza (5)	8	144, 145, 147
18/10/1994	S	AP	Zaragoza (5)	8	144.3
25/10/1994	S	AP	Teruel	8	144
26/10/1994	S	AP	Zaragoza (5)	663, 68	55, 76.4
07/11/1994	S	AP	Teruel	8	147
12/11/1994	S	AP	Huesca	9	149
14/11/1994	S	AP	Zaragoza (2)	663	52,2
14/11/1994	S	JPI	Calatayud (1)	9	149
15/11/1994	S	JPI	Jaca (2)	71	140
23/11/1994	S	JPI	Tarazona (2)	76	128 y ss
07/12/1994	S	JPI	Boltaña	663	38, 53

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
09/12/1994	S	JPI	Tarazona (2)	76	128 y ss
13/12/1994	S	AP	Huesca	663	38, 47
15/12/1994	S	AP	Huesca	62, 663	36
15/12/1994	S	JPI	Teruel (1)	8	144
19/12/1994	S	AP	Zaragoza (5)	663, 72	40, 96
27/12/1994	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
27/12/1994	S	AP	Zaragoza (2)	8	144, 147
27/12/1994	S	TSJ	Zaragoza	8	147, 148
31/12/1994	S	JPI	Teruel (2)	5	3
10/01/1995	A	JPI	Teruel (1)	76	127, 128, 13
12/01/1995	S	AP	Huesca	8	144.2, 145
17/01/1995	S	AP	Lleida (2)	62, 68	72, 86.2
19/01/1995	S	JPI	Zaragoza (13)	5	1.2
31/01/1995	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41.1
03/02/1995	A	JPI	Monzón	76	
04/02/1995	S	AP	Zaragoza (2)	663	46, 52
04/02/1995	S	JPI	La Almunia	8	144
09/02/1995	S	JPI	Teruel (1)	5	3
13/02/1995	S	AP	Huesca	73, 74, 75	123
15/02/1995	S	JPI	Monzón	663	56
17/02/1995	S	JPI	Zaragoza (13)	8	144
18/02/1995	S	TS	Madrid	5, 663	1.2, 51
20/02/1995	S	AP	Huesca	5, 8	1.2, 147
21/02/1995	S	JPI	Zaragoza (6)	663	38
22/02/1995	S	AP	Huesca	5, 61	33, 34
24/02/1995	A	JPI	Huesca (2)	64	11, 13, 14
27/02/1995	S	AP	Huesca	5, 71	1.2, DT 12ª
27/02/1995	S	AP	Teruel	64	9
08/03/1995	S	AP	Huesca	8	144
09/03/1995	S	AP	Huesca	5	
10/03/1995	S	JPI	Zaragoza (3)	5, 663	1.2, 51 Comp. 1967
15/03/1995	S	JPI	Daroca	75	119, 120
21/03/1995	A	TS	Madrid		0
22/03/1995	S	AP	Zaragoza (5)	663	42, 66
28/03/1995	S	JPI	Huesca (2)	9	149
04/04/1995	S	TSJ	Zaragoza	68	76
08/04/1995	S	AP	Zaragoza (2)	64	9.3, 14
10/04/1995	S	TSJ	Zaragoza	663	48
12/04/1995	S	AP	Zaragoza (5)	663	37.2, 38.4
15/04/1995	S	JPI	La Almunia	8	144
19/04/1995	S	AP	Zaragoza (2)	663	57
20/04/1995	S	AP	Barcelona (16)	68	86.2
24/04/1995	S	AP	Huesca	663	46, 47
27/04/1995	S	JPI	Teruel(1)	8	147
27/04/1995	S	JPI	Teruel (1)	65	
03/05/1995	A	JPI	Monzón	76	
07/05/1995	A	JPI	Monzón	76	
10/05/1995	S	JPI	Zaragoza (13)	663	38.1
15/05/1995	A	JPI	Daroca	76	127, 128, 135
17/05/1995	S	AP	Huesca	8	144, 147

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
18/05/1995	S	JPI	Teruel (1)	5	3
23/05/1995	A	AP	Huesca	76	132
24/05/1995	S	TS	Madrid	663	37, 38, 51
25/05/1995	S	AP	Huesca	663	51
30/05/1995	A	JPI	Zaragoza (13)	73, 76	89, 108.3
30/05/1995	A	JPI	Monzón	76	
31/05/1995	A	JPI	Daroca	76	127, 128, 135
13/06/1995	S	TSJ	Zaragoza	5, 663, 74	72.6 Ap
14/06/1995	S	JPI	Teruel (1)	75	120, 123
15/06/1995	S	AP	Teruel	5, 8	1.2, 147, 148
23/06/1995	S	AP	Teruel	5, 8	1.2, 147, 148
27/06/1995	A	JPI	Zaragoza (13)	73, 76	108
05/07/1995	S	TSJ	Zaragoza	5, 61	33, 34
05/07/1995	A	JPI	Monzón	76	
10/07/1995	S	AP	Huesca	663, 68	38.1, 40, 41.5, 84
10/07/1995	S	AP	Huesca	5, 8	1.2, 147
14/07/1995	S	AP	Zaragoza (5)	663	42, 66
19/07/1995	S	JPI	Zaragoza (13)	663	47, 48
20/07/1995	A	JPI	Zaragoza (13)	76	128, 132
26/07/1995	A	JPI	Monzón	76	
13/09/1995	A	JPI	Daroca	76	127, 128, 135
13/09/1995	S	JPI	Huesca (2)	8	143, 144, 145
20/09/1995	A	JPI	Zaragoza (13)	76	128, 132
27/09/1995	A	JPI	Monzón	76	
27/09/1995	A	JPI	Monzón	76	
02/10/1995	A	JPI	Zaragoza (14)	76	127, 128, 132
03/10/1995	S	JPI	Daroca	8	144, 145
05/10/1995	S	AP	Huesca	663, 68	38.1
05/10/1995	A	JPI	Monzón	76	
16/10/1995	S	AP	Teruel	5, 8	1.2, 564 Cc.
17/10/1995	S	JPI	Monzón	71	142
17/10/1995	A	JPI	Zaragoza (13)	73, 76	108.3
17/10/1995	A	JPI	Daroca	76	132
30/10/1995	S	AP	Teruel	73, 76	108.3, 132
03/11/1995	A	JPI	Daroca	76	127, 128, 135
04/11/1995	S	AP	Teruel	8	147, 148
08/11/1995	S	JPI	Teruel (1)	8	147
09/11/1995	A	JPI	Huesca (2)	8	
16/11/1995	A	JPI	Monzón	76	
22/11/1995	S	AP	Teruel	8	147, 148
23/11/1995	S	AP	Teruel	5, 8	1.2, 586 a 588 Cc
24/11/1995	S	JPI	Zaragoza (2)	62, 71, 75	119, 140
01/12/1995	S	JPI	Monzón	76	
02/12/1995	S	AP	Teruel	71	142
05/12/1995	S	AP	Teruel	67	52, 60
14/12/1995	S	AP	Teruel	8	144.2
15/12/1995	A	JPI	Daroca	76	127, 128, 135
15/12/1995	A	JPI	Monzón	76	
16/12/1995	A	AP	Zaragoza (2)	72, 73, 76	95, 108.3
08/01/1996	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41, 42

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
09/01/1996	S	AP	Teruel	8	144, 147
18/01/1996	S	JPI	Zaragoza (13)	5, 663	3, 52.1
19/01/1996	S	AP	Huesca	8	7.2 Cc
24/01/1996	A	AP	Huesca	76	108
25/01/1996	S	AP	Huesca	8	144
07/02/1996	S	AP	Zaragoza (5)	5, 68	3, 76.2
12/02/1996	S	TSJ	Zaragoza	663, 68	DT 1ª y 4ª
16/02/1996	S	TS	Madrid		72
21/02/1996	S	AP	Zaragoza (5)	662	56, 58
26/02/1996	S	JPI	Barbastro	8	144
27/02/1996	S	JPI	Barbastro	8	147
28/02/1996	S	JPI	Huesca (2)	5, 73, 74	3
05/03/1996	S	AP	Huesca	5, 73	99.1
08/03/1996	S	JPI	Zaragoza (13)	663	48.2
14/03/1996	S	JPI	Huesca (3)	74	111
15/03/1996	S	AP	Huesca	663	38.1
21/03/1996	A	JPI	Huesca (2)	663	37, 38
27/03/1996	S	AP	Huesca	8	147
28/03/1996	S	JPI	Huesca (2)	71	
10/04/1996	S	AP	Zaragoza (4)	663	37
16/04/1996	S	JPI	Barbastro	9	150
19/04/1996	S	JPI	Huesca (2)	72	
02/05/1996	S	AP	Zaragoza (5)	663	97 Cc
08/05/1996	S	AP	Teruel	8	144
13/05/1996	S	AP	Huesca	71	142
14/05/1996	S	JPI	Huesca (2)	68	82
23/05/1997	A	AP	Zaragoza (2)	0	
29/05/1996	S	AP	Zaragoza (5)	76	132
03/06/1996	S	JPI	Zaragoza (2)	662	25.2, 29
05/06/1996	S	AP	Zaragoza (5)	8	147, 148
06/06/1996	S	JPI	Zaragoza (2)	9	149
25/06/1996	A	JPI	Zaragoza (13)	76	128
28/06/1996	S	AP	Huesca	76	132
01/07/1996	S	TS	Madrid	0	
08/07/1996	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
12/07/1996	S	JPI	Teruel (1)	663	52
15/07/1996	S	AP	Zaragoza (2)	8	145
25/07/1996	S	AP	Huesca	8	147
31/07/1996	S	JPI	Teruel (1)	663	52
14/09/1996	S	JPI	Zaragoza (2)	75	122
16/09/1996	S	AP	Zaragoza (4)	68, 75	73, 125
20/09/1996	S	AP	Zaragoza (5)	72	122, 620 Cc
02/10/1996	A	AP	Huesca	61	34
07/10/1996	S	JPI	La Almunia	8	147
08/10/1996	S	AP	Teruel	8	144
17/10/1996	S	AP	Huesca	9	149
25/10/1996	S	JPI	Zaragoza (4)	9	149
29/10/1996	S	AP	Huesca	663, 68	38, 51, 76
30/10/1996	S	TSJ	Zaragoza	68	76
30/10/1996	S	AP	Zaragoza (5)	8	144

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
04/11/1996	S	AP	Huesca	8	147
06/11/1996	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
06/11/1996	S	JPI	Barbastro	9	149
12/11/1996	S	JPI	Jaca (2)	8	144, 145
18/11/1996	S	JPI	Zaragoza (14)	663	48.2.1º
18/11/1996	A	JPI	Zaragoza (13)	76	132
25/11/1996	A	JPI	Huesca (2)	76	127
28/11/1996	S	AP	Huesca	663	55, 56
29/11/1996	S	TSJ	Zaragoza	663	38.1, 55
02/12/1996	A	AP	Huesca	73	95, 108
05/12/1996	A	JPI	Huesca (2)	76	127
05/12/1996	A	JPI	Huesca (2)	76	127
05/12/1996	S	JPI	Teruel	8	147
12/12/1996	S	AP	Huesca	8	146
20/12/1996	S	TSJ	Zaragoza	663	42, 46
27/01/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	147
27/01/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144, 145
30/01/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	145
05/02/1997	S	JPI	Calamocha	71	140
07/02/1997	A	JPI	Zaragoza (13)	73, 76	108, 135
14/02/1997	S	AP	Huesca	72, 74	17 y 29 Ap.
14/02/1997	S	AP	Huesca	65	DT 1ª Ley 3/85
15/02/1997	S	JPI	Tarazona	76	127, 132
19/02/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
28/02/1997	A	AP	Zaragoza (4)	0	
04/03/1997	A	JPI	Zaragoza (2)	0	
17/03/1997	S	AP	Zaragoza (5)	9	149
17/03/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
20/03/1997	A	AP	Huesca	71, 76	141
21/03/1997	S	AP	Teruel	75	120
02/04/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	143.2
08/04/1997	S	AP	Teruel	5	1.2
12/04/1997	S	AP	Zaragoza (2)	662, 663	37.3
14/04/1997	A	TSJ	Zaragoza	0	
14/04/1997	S	JPI	Huesca (2)	663	37 y ss.
17/04/1997	S	AP	Huesca	663	40
17/04/1997	S	JPI	Zaragoza (14)	662	40.1
21/04/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144.3
24/04/1997	S	AP	Huesca	8	148
26/04/1997	S	AP	Huesca	64	5
07/05/1997	S	AP	Huesca	663	37, 38, 40
08/05/1997	S	JPI	Zaragoza (13)	8	148
09/05/1997	A	JPI	Tarazona	76	128
12/05/1997	A	AP	Zaragoza (5)	663	41, 42
15/05/1997	S	AP	Huesca	8	147
16/05/1997	S	AP	Teruel	64	
16/05/1997	S	JPI	Tarazona	71	142, DT 12ª
20/05/1997	A	JPI	Tarazona	76	128
21/05/1997	S	AP	Zaragoza (2)	68	85
21/05/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
26/05/1997	S	AP	Huesca	9	72 Ley arag. Caza
26/05/1997	S	AP	Teruel	663	36, 40
28/05/1997	S	AP	Teruel	8	147
04/06/1997	S	AP	Zaragoza (2)	71	138
06/06/1997	S	JPI	Tarazona	8	147, 148
10/06/1997	S	AP	Huesca	663	51
13/06/1997	S	AP	Teruel	8	144, 147
13/06/1997	S	JPI	Zaragoza (14)	663, 68	53.1, 72
14/06/1997	S	AP	Teruel	5, 71	1.2, 140
16/06/1997	S	AP	Huesca	5, 8	1.2, 147
17/06/1997	S	JPI	Tarazona	8	144
18/06/1997	S	JPI	Tarazona	663, 68	52.2, 78
25/06/1997	S	AP	Zaragoza (5)	663	41.1, 43
27/06/1997	A	AP	Zaragoza (5)	76	
30/06/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
30/06/1997	A	AP	Zaragoza (5)	8	144
02/07/1997	S	AP	Teruel	62, 75	122, 848 Cc
11/07/1997	S	AP	Huesca	9	72 Ley arag. Caza
16/07/1997	A	AP	Zaragoza (5)	67	61, 65
17/07/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	147
21/07/1997	S	AP	Teruel	8	144
28/07/1997	S	AP	Teruel	8	144
30/07/1997	S	AP	Huesca	9	72 Ley arag. Caza
31/07/1997	S	AP	Zaragoza (5)	62, 72	
12/09/1997	S	JPI	Calamocha	68	86.5
18/09/1997	S	AP	Huesca	663	41.5
20/09/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	148
20/09/1997	S	AP	Zaragoza (5)	68, 76	79, 128
24/09/1997	S	AP	Zaragoza (5)	0	15.2 Ley Justicia
29/09/1997	A	JPI	Tarazona	71, 76	132, 141
02/10/1997	A	JPI	Tarazona	76	128
02/10/1997	A	JPI	Tarazona	76	128
04/10/1997	A	JPI	Tarazona	71, 76	132, 141
06/10/1997	S	AP	Huesca	8	147
07/10/1997	A	JPI	Tarazona	76	128
08/10/1997	A	JPI	Zaragoza (14)	71, 76	141
27/10/1997	S	AP	Teruel	8	147,148
04/11/1997	A	JPI	Zaragoza (14)	76	127, 135
06/11/1997	S	JPI	Caspe	8	147
07/11/1997	S	AP	Teruel	8	147
10/11/1997	S	AP	Huesca	9	72 Ley arag. Caza
17/11/1997	A	AP	Huesca	73, 76	108.3
18/11/1997	S	JPI	Tarazona	71	142
19/11/1997	A	TSJ	Zaragoza	5, 74, 0	1, 3, 115
01/12/1997	S	AP	Zaragoza (5)	8	144.3
03/12/1997	S	AP	Teruel	8	145, 147
03/12/1997	A	AP	Zaragoza (5)	663	55, 56
05/12/1997	S	JPI	Tarazona	662, 663	29, 43
10/12/1997	S	JPI	Calamocha	8	144
10/12/1997	S	JPI	Calamocha	8	144, 145

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
10/12/1997	S	JPI	Huesca (2)	663	37 y ss.
12/12/1997	S	AP	Huesca	9	149.2
16/12/1997	A	JPI	Zaragoza (14)	72, 76	95, 108.3, 135
26/12/1997	A	JPI	Ejea (1)	663	52
26/12/1997	S	JPI	Ejea (1)	8	144
12/01/1998	S	AP	Zaragoza (5)	68, 72, 74	110
13/01/1998	S	AP	Zaragoza (5)	663	37
19/01/1998	S	AP	Zaragoza (5)	68	76
19/01/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	147, 148
21/01/1998	S	AP	Zaragoza (5)	72	94
28/01/1998	S	AP	Huesca	68	74, 83
02/02/1998	S	AP	Zaragoza (5)	68	72
07/02/1998	S	JPI	Monzón	663	38.1
07/02/1998	A	JPI	Zaragoza (13)	73, 76	108
10/02/1998	S	JPI	Zaragoza (13)	663	55
10/02/1998	A	TS	Madrid		0
11/02/1998	S	AP	Teruel	663	37
11/02/1998	S	AP	Zaragoza (5)	76	128
12/02/1998	S	AP	Huesca	663	37
12/02/1998	A	JPI	Zaragoza (2)	72, 73, 76	95, 108
16/02/1998	S	AP	Zaragoza (5)	68	72
19/02/1998	S	AP	Zaragoza (5)	663	52
19/02/1998	A	JPI	Boltaña	65, 74	20, 117
20/02/1998	S	TS	Madrid	68, 74	74, 110 a 112
24/02/1998	A	TS	Madrid		0
24/02/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41.5
25/02/1998	A	AP	Huesca	68, 76	72, 73, 132
25/02/1998	A	AP	Zaragoza (5)	662	26
07/04/1998	S	AP	Zaragoza (4)	663	46
20/04/1998	S	AP	Huesca	5, 73, 74	110, 114, 116
20/04/1998	A	TSJ	Zaragoza	0	
22/04/1998	S	AP	Huesca	9	33 Ley Caza
27/04/1998	A	AP	Zaragoza (5)	76	108
28/04/1998	S	JPI	Huesca (1)	663,71	55.2
29/04/1998	S	AP	Huesca	9	33 Ley Caza
30/04/1998	S	AP	Huesca	9	33, 72 Ley Caza
04/05/1998	A	AP	Huesca	65, 74	21.3
04/05/1998	A	JPI	Boltaña	76	127, 135
08/05/1998	A	JPI	Boltaña	72	96
11/05/1998	S	AP	Teruel	8	148
11/05/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	148
12/05/1998	S	AP	Huesca	8	147
13/05/1998	S	AP	Huesca	8	144
18/05/1998	A	JPI	Zaragoza (14)	64	10
19/05/1998	A	TS	Madrid	0	
25/05/1998	A	TSJ	Zaragoza	0	
26/05/1998	S	AP	Huesca	663	52
26/05/1998	A	JPI	Zaragoza (14)	68	63.2, 86.1
29/05/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41.5, 43.2
01/06/1998	S	AP	Zaragoza (4)	8	144, 145, 147

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
05/06/1998	A	JPI	Zaragoza (13)	64	9
05/06/1998	A	JPI	Boltaña	76	127, 132
05/06/1998	A	JPI	Boltaña	76	127, 132
09/06/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	8	144
10/06/1998	S	AP	Huesca	661	32, 33
17/06/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	144, 145
22/06/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	147
22/06/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	71	138.1
25/06/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41.5, 46.1
26/06/1998	S	AP	Huesca	8	147, 148
29/06/1998	S	AP	Huesca	8	144
01/07/1998	A	JPI	Zaragoza (13)	64	9
06/07/1998	A	JPI	Boltaña	76	127, 135
14/07/1998	A	TSJ	Zaragoza	0	
17/07/1998	A	JPI	Boltaña	76	127, 135
18/07/1998	A	AP	Huesca	72, 73, 76	108, 132, 133
20/07/1998	S	AP	Teruel	8	147, 148
27/07/1998	S	JPI	La Almunia	663	42
30/07/1998	S	AP	Huesca	68	72, 76, 86
30/07/1998	A	AP	Zaragoza (5)	71, 76	141
08/09/1998	S	JPI	Jaca (1)	8	147
08/09/1998	S	AP	Huesca	9	33 Ley Caza
21/09/1998	S	AP	Zaragoza (2)	8	144
22/09/1998	S	AP	Huesca	9	33 Ley Caza
23/09/1998	A	AP	Zaragoza (3)	71	
24/09/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
28/09/1998	S	TS	Madrid	663, 72	1380 Cc
29/09/1998	S	JPI	Huesca (2)	8	144, 145.3
05/10/1998	S	TSJ	Zaragoza	5	3
14/10/1998	A	AP	Huesca	663	55 ss.
14/10/1998	S	AP	Huesca	8	144.2, 148
22/10/1998	S	AP	Zaragoza (4)	71	142, DT 2ª
24/10/1998	S	AP	Zaragoza (1)	661	
27/10/1998	S	AP	Huesca	5, 662	1.2
27/10/1998	S	AP	Teruel	663	39.1, 55.2
27/10/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	144
27/10/1998	S	JPI	Zaragoza (14)	68, 71	140
28/10/1998	S	AP	Zaragoza (5)	8	148
04/11/1998	S	JPI	Zaragoza (12)	68	79, 88
09/11/1998	S	AP	Zaragoza (4)	61, 663	34, 38, 39
11/11/1998	S	TSJ	Zaragoza	75	119, 120
16/11/1998	S	AP	Huesca	663	52.2
16/11/1998	S	JPI	La Almunia	663	48
19/11/1998	S	AP	Huesca	8	147
23/11/1998	S	AP	Teruel	663	40
25/11/1998	S	TSJ	Zaragoza	663	37, 40, 46, 47
25/11/1998	A	AP	Huesca	65, 74	21, 22, 117, 118
02/12/1998	S	AP	Zaragoza (2)	663	39, 40
11/12/1998	S	JPI	Zaragoza (2)	5,62,663, 68	76

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
14/12/1998	S	AP	Zaragoza (4)	72	97
19/12/1998	S	JPI	Monzón	73	100
22/12/1998	S	AP	Zaragoza (2)	8	144,3
22/12/1998	S	JPI	Jaca (2)	5,662,663	1.2, 23, 25, 54, 55
26/12/1998	S	AP	Teruel	8	145 a 148
28/12/1998	S	JPI	Jaca (2)	5	1.2
28/12/1998	S	AP	Teruel	5, 72, 75	119 y ss.: 1.2
31/12/1998	S	AP	Teruel	8	144
05/01/1999	A	JPI	Boltaña	76	89, 137, 132
07/01/1999	S	JPI	Zaragoza (14)	68	72, 76, 79
13/01/1999	S	AP	Teruel	5	3
26/01/1999	S	JPI	Zaragoza (2)	9	150.1
28/01/1999	S	AP	Huesca	5	3
29/01/1999	S	AP	Huesca	663	41, 42, 43, 52
19/02/1999	A	JPI	Boltaña	76	82, 127, 135
26/02/1999	S	TSJ	ARAGÓN	663	1, 36, 37, 38
26/02/1999	A	JPI	Boltaña	76	82, 127, 135
26/02/1999	S	AP	Huesca	8	15 Apéndice
26/02/1999	S	AP	Huesca	663	55
02/03/1999	A	TS	Madrid		0
04/03/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	72	95, 97, 98, 108
10/03/1999	S	TSJ	ARAGÓN	663	47
10/03/1999	S	JPI	Huesca(1)	9	149
12/03/1999	A	JPI	Boltaña	76	82, 127, 135
16/03/1999	S	AP	Huesca	8	1.2, 143
17/03/1999	S	AP	Huesca	74	142 LS; 110, 112
22/03/1999	A	JPI	Boltaña	76	89, 132, 135
22/03/1999	S	AP	Teruel	663	76
22/03/1999	S	AP	Teruel	8	147
24/03/1999	A	JPI	Huesca(2)	76	95,108,127,128,135
20/04/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	42, 46
21/04/1999	A	AP	Huesca	76	108, 132, 133
30/04/1999	S	AP	Teruel	76	132, 133
30/04/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	71	138
05/05/1999	A	JPI	Huesca(2)	76	DTILS;127,128,132,135
07/05/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663,68	37,40,55,57,59,73
11/05/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	71	138
12/05/1999	A	AP	Zaragoza (5ª)	76	135, 136
20/05/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	48
24/05/1999	S	TSJ	ARAGÓN	663	37
31/05/1999	S	AP	Teruel	663	41.3
03/06/1999	S	JPI	Zaragoza (2)	5, 663	3, 37.1, 39.2
14/06/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	48
16/06/1999	A	AP	Zaragoza (5ª)	76	128 a 133,135,141
16/06/1999	A	AP	Zaragoza (5ª)	76	135
28/06/1999	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	12, 38, 47, 55
05/07/1999	A	TSJ	Zaragoza	0	
06/07/1999	S	AP	Zaragoza (4ª)	68, 71	140
07/07/1999	A	JPI	Huesca(2)	76	5, DT1ªLS;128,135
07/07/1999	A	JPI	Boltaña	76	201, 202, 217 LS

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
15/07/1999	A	AP	Huesca	663	37, 55
20/07/1999	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	41.1
31/07/1999	S	JPI	Huesca(2)	76	132, 133, 135
03/09/1999	S	JPI	Ejea(2)	64	9.1
10/09/1999	S	JPI	Zaragoza (14)	663	43, 55
10/09/1999	S	JPI	Zaragoza (14)	5, 663	37
13/09/1999	S	TSJ	ARAGÓN	5	3
16/09/1999	S	AP	Huesca	8	147
27/09/1999	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	38, 39, 47, 55
29/09/1999	A	JPI	Boltaña	76	2,DT1ª LS; 127,132
30/09/1999	A	JPI	Boltaña	76	2LS;89,127,132,135
06/10/1999	S	TSJ	ARAGÓN	663	1, 37, 41, 47
16/10/1999	S	AP	Huesca	9	149 y ss
25/10/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147, 148
26/10/1999	S	JPI	Zaragoza (2)	68	
27/10/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	42.1
02/11/1999	S	JPI	Zaragoza (14)	663	38, 39
05/11/1999	S	AP	Teruel	8	147
06/11/1999	S	AP	Teruel	68	1.2,72,75,79,85,86.4
16/11/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	48
24/11/1999	S	JPI	Ejea(2)	64	9.1
07/12/1999	S	AP	Huesca	663	55.3
09/12/1999	S	AP	Teruel	663,68	1.3,37,50,79,84,86,88
09/12/1999	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	29
11/12/1999	S	JPI	Huesca(2)	663	38, 51
13/12/1999	S	AP	Huesca	73	141
13/12/1999	S	AP	Teruel	5	41.3
22/12/1999	S	AP	Huesca	8	144.1
18/01/2000	S	AP	Huesca	663	55.2
29/01/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	37 a 40
21/01/2000	S	AP	Teruel	68	39,53,76,79
07/02/2000	S	AP	Teruel	5	
08/02/2000	S	JPI	Zaragoza (14)	663	52, 55
08/02/2000	S	AP	Huesca	67	60 y ss.
14/02/2000	A	JPI	Zaragoza (14)	72	104,108,201-203,217LS
18/02/2000	S	JPI	Fraga	8	145
29-02-00	A	AP	Huesca	71	40 y ss,54,DT5ª.LS
02/03/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	64	41
06/03/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	144.1
07/03/2000	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
13/03/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	144.2
16/03/2000	A	AP	Zaragoza (5ª)	71	138
17/03/2000	S	JPI	Ejea (2)	65,73	99,1
21/03/2000	S	AP	Huesca	68	85,87
22/03/2000	A	AP	Zaragoza	71	138
30/03/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	48
31/03/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	145
03/04/2000	S	JPI	Huesca (1)	74	111,114 a 118
10/04/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	147
11/04/2000	S	AP	Zaragoza (2ª)	5	L 6/1999

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
12/04/2000	S	JPI	Zaragoza (1)	8	147
12/04/2000	A	AP	Huesca	65	
14/04/2000	S	JPI	Huesca (3)	68	111,114 a 118
19/04/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	68	79
24/04/2000	S	AP	Teruel	5	3
28/04/2000	S	AP	Huesca	8	147
04/05/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	144.3
09/05/2000	S	TSJ	Aragón	663	37 y ss.
11/05/2000	S	JPI	Zaragoza (14)	71	40 y 41 LS
19/05/2000	S	JPI	Huesca (3)	8	148
25/05/2000	S	JPI	Huesca (2)	74	109 LS
29/05/2000	S	TSJ	Aragón	5	1,2,3
29/05/2000	S	AP	Huesca	8	147
07/06/2000	S	AP	Teruel	71,76	141
12/06/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	37,39,40,47
13/06/2000	S	AP	Teruel	8	144
19/06/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	145,147
22/06/2000	S	JPI	Ejea (2)	8	147,148
30/06/2000	S	AP	Teruel	8	147,148
03/07/2000	S	AP	Teruel	663	23 y ss.
07/07/2000	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	46
10/07/2000	S	AP	Zaragoza (2ª)	68	16.2 CC
11/07/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	144.3,145
13/07/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	73	108
14/07/2000	S	JPI	Zaragoza (1)	663	37,56
17/07/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	68	72
24/07/2000	S	AP	Teruel	64	
24/07/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	26 y 41 y ss.
25/07/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	147
26/07/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	42
14/09/2000	S	AP	Huesca	8	147
15/09/2000	A	JPI	Zaragoza (14)	65	L 6/1999
22/09/2000	A	TSJ	Aragón	0	29 EAA
02/10/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	41.3
04/10/2000	S	AP	Huesca	8	145
06/10/2000	A	JPI	Zaragoza (10)	76	20,23 LS
06/10/2000	S	TSJ	Aragón	663	36-40
11/10/2000	S	JPI	Huesca (3)	76	40
11/10/2000	A	AP	Huesca	76	141
18/10/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	144,145
18/10/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	76	135,141
18/10/2000	S	AP	Teruel	62	
25/10/2000	S	AP	Huesca	663	
25/10/2000	S	AP	Teruel	64	
27/10/2000	S	JPI	Zaragoza (14)	8	147
30/10/2000	S	AP	Teruel	5	3
15/11/2000	S	JPI	Zaragoza (10)	74	120
20/11/2000	S	AP	Huesca	8	146
21/11/2000	S	AP	Huesca	68	76,79
30/11/2000	S	AP	Huesca	9	Ley Caza

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
04/12/2000	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	37,48
04/12/2000	S	AP	Huesca	8	144.1
11/12/2000	A	AP	Zaragoza	68	83.2
12/12/2000	S	AP	Zaragoza (4ª)	64	5
14/12/2000	S	JPI	Zaragoza (1)	8	144,147
15/12/2000	A	AP	Zaragoza	76	132 y ss.
19/12/2000	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
21/12/2000	S	AP	Huesca	8	144
22/12/2000	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
28/12/2000	S	JPI	Huesca (2)	9	149
18/01/2001	S	AP	Huesca	74	134.1.2º Lsuc
25/01/2001	S	AP	Huesca	74	
25/01/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	143,147,148
25/01/2001	S	JPI	Teruel (2)	8	143.2
29/01/2001	S	JPI	Teruel (2)	62	5,14
05/02/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	41,43,47,55,56
06/02/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	38,39,40
06/02/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
07/02/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	127,135
14/02/2001	A	AP	Zaragoza (5ª)	663	46,53
17/02/2001	S	AP	Huesca	74	110.2
19/02/2001	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
20/02/2001	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
26/02/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	5	3
26/02/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	37.2, 38.2, 38.5
27/02/2001	A	AP	Huesca	64	12
28/02/2001	S	AP	Huesca	663	47
02/03/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147
07/03/2001	A	AP	Zaragoza (5ª)	76	
07/03/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	0	Ley Parejas
07/03/2001	S	JPI	Calatayud (2)	8	144
08/03/2001	S	JPI	Calatayud (2)	68	72 y ss
09/03/2001	S	JPI	Zaragoza (14)	663	37.4, 40.1
07/03/2001	S	JPI	Calatayud (2)	8	144
23/03/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
28/03/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	662,663	26, 58
29/03/2001	S	JPI	Calatayud (2)	8	147,148
31/03/2001	S	AP	Huesca	8	145,147
31/03/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	147
02/04/2001	S	AP	Teruel	8	143-145, 148
09/04/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	144
09/04/2001	A	JPI	Zaragoza (14)	663	41.1, 43
18/04/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	37.2, 55
24/04/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	145
27/04/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	26
30/04/2001	S	AP	Teruel	8	144
30/04/2001	S	AP	Teruel	8	147
08/05/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37.1, 52
09/05/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	
11/05/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,222,217 LS

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
11/05/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	127,132,135
12/05/2001	A	JPI	Ejea (2)	8	144
18/05/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	147
21/05/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	38-40
21/05/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	37
28/05/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
05/06/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	75	171,172,189 LS
07/06/2001	S	AP	Teruel	9	148, 150
15/06/2001	S	AP	Huesca	71	140,99,101;47,68 LS
18/06/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	68,71	73,86
19/06/2001	S	AP	Teruel	5	3
22/06/2001	S	AP	Huesca	663	53
22/06/2001	S	AP	Huesca	68	83,86
22/06/2001	S	AP	Teruel	8	143 a 148
22/06/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	56.1
22/06/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147,148
27/06/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
27/06/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	127,132,135
05/07/2001	S	JPI	Teruel (2)	663	52 y ss.
06/07/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
11/07/2001	S	AP	Huesca	8	144,145
14/07/2001	S	AP	Teruel	5	3
16/07/2001	S	JPI	Calatayud (2)	662	23,52
18/07/2001	S	JPI	Calatayud (2)	8	147,148
19/07/2001	S	AP	Teruel	5	3
20/07/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147
24/07/2001	S	AP	Teruel	68	72
30/07/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	41
30/07/2001	S	JPI	Calatayud (2)	8	147
31/07/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	67,74	60,61,86
31/07/2001	S	JPI	Calatayud (2)	663	36 y ss,55 y ss
31/07/2001	S	JPI	Zaragoza (3)	8	144,145,147,148
01/09/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
01/09/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,219 LS
01/09/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217 LS
06/09/2001	S	AP	Teruel	8	144
06/09/2001	S	AP	Teruel	9	Ley Caza
11/09/2001	S	JPI	Zaragoza (14)	68	40.1LS; 53 y 79ss
14/09/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	9	149,15
17/09/2001	S	AP	Huesca	8	144
24/09/2001	S	AP	Huesca	8	147
29/09/2001	S	TSJ	Aragón	74	111,117,115,143
05/10/2001	S	AP	Teruel	5	3
08/10/2001	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	36,40,23,90
09/10/2001	S	AP	Huesca	663	38.3
24/10/2001	S	JPI	Huesca (2)	663	46,56,58
25/10/2001	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41.1
27/10/2001	S	AP	Teruel	5	3
30/10/2001	S	AP	Teruel	8	144
30/10/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	40,47

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
02/11/2001	S	JPI	Tarazona	8	144,145
05/11/2001	S	TSJ	Aragón	68	72 y ss.,83 y 86
07/11/2001	S	TSJ	Aragón	5,8,0	3, 143
07/11/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	62	48.1, 51
09/11/2001	A	JInstr.	Zaragoza (4)	663	48
12/11/2001	S	JPI	Tarazona	8	144,145,147
13/11/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	
13/11/2001	A	AP	Zaragoza (4ª)	663	67
13/11/2001	S	JPI	Tarazona	8	147,148
13/11/2001	S	JPI	Zaragoza (3)	8	144
15/11/2001	S	JPI	Zaragoza (14)	663,68	72,76,57
16/11/2001	S	AP	Zaragoza (5ª)	9	149, 212.2 LS
21/11/2001	A	JPI	Zaragoza (14)	68	80
26/11/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	38,47
27/11/2001	S	AP	Teruel	9	Ley Caza
27/11/2001	S	AP	Teruel	8	147
28/11/2001	S	AP	Huesca	72	97.3
10/12/2001	S	AP	Zaragoza (4ª)	8	147
20/12/2001	A	JPI	Calatayud (2)	76	201,202,217LS
28/12/2001	S	AP	Huesca	8	144.2,145
03/01/2002	S	JPI	Teruel (2)	8	144,145
04/01/2002	S	JPI	Teruel (2)	8	
15/01/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	144.3, 145
17/01/2002	A	AP	Huesca	663	41.5, 42
18/01/2002	S	JPI	Teruel (2)	8	144
28/01/2002	A	TSJ	Aragón	0	
30/01/2002	S	AP	Huesca	5,662	
14/02/2002	S	AP	Teruel		
18/02/2002	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
20/02/2002	S	AP	Teruel	663	43
21/02/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	144
25/02/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	65,72,73	119, 171 LS
26/02/2002	S	TSJ	Aragón	663	23,38,39
28/02/2002	S	AP	Huesca	8	LPatrimonio
04/03/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	48
05/03/2002	S	AP	Huesca	8	145
07/03/2002	S	AP	Huesca	9	
08/03/2002	S	AP	Huesca	72,661	38.1, 51
18/03/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37,38,47
18/03/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147,148
21/03/2002	S	AP	Huesca	72	142
27/03/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	662,663	10, 41 a 43
08/04/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	143
08/04/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	40,41,43
08/04/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	661	43
13/04/2002	S	AP	Teruel	8	1.2,147,148
16/04/2002	S	AP	Teruel	8	147
26/04/2002	S	TSJ	Aragón	9	149
26/04/2002	S	AP	Huesca	9	Ley Caza
26/04/2002	S	JPI	Teruel (2)	68,71	76,142,58LS,61LS

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
29/04/2002	S	JPI	Calatayud (1)	663	40
30/04/2002	S	AP	Teruel	68	72 a 75
02/05/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	37,41
06/05/2002	S	AP	Huesca	8	147
07/05/2002	S	AP	Teruel	8	143 a 148
07/05/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37.1
15/05/2002	A	TSJ	Aragón	0	
16/05/2002	S	AP	Huesca	8	144
17/05/2002	S	AP	Huesca	8	147, 1.2
20/05/2002	S	JPI	Ejea (1)	8	147
24/05/2002	S	TSJ	Aragón	67,74	60,61,110,1.2
27/05/2002	S	JPI	Teruel (2)	8	144
28/05/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	36, 37.1
03/06/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	63
04/06/2002	S	AP	Teruel	8	147,148
05/06/2002	A	TSJ	Aragón	0	
08/06/2002	S	AP	Teruel	663	52,53,55,67,140
17/06/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37.2, 40, 41
09/07/2002	S	AP	Huesca	8	144
09/07/2002	A	JPI	Zaragoza (14)	663	42
11/07/2002	S	JPI	Ejea (1)	8	147, 1.2
31/07/2002	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	36,38,39,47,55, 56,58
10/09/2002	S	AP	Teruel	68,71	142, 58LS, 61LS
10/09/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	147
16/09/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37.1, 38
25/09/2002	S	JPI	Ejea (1)	8	144
26/09/2002	S	JPI	Zaragoza (14)	71	33.2
30/09/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	147
02/10/2002	S	AP	Teruel	8	144
03/10/2002	S	JPI	Zaragoza (14)	663	48
04/10/2002	S	AP	Teruel	5	3
04/10/2002	S	JPI	Zaragoza (14)	663	37.4
21/10/2002	S	AP	Teruel	8	143,144
21/10/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	5	3
23/10/2002	S	AP	Teruel	8	144.2,145
28/10/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	144
29/10/2002	S	AP	Huesca	663	40.1
30/10/2002	S	AP	Huesca	8	144, 145
14/11/2002	S	JPI	Ejea (2)	8	144
18/11/2002	A	AP	Zaragoza (2ª)	8	145,147
21/11/2002	S	AP	Teruel	8	144
26/11/2002	S	AP	Teruel	8	147
28/11/2002	S	AP	Huesca	72	6 LS, 162 LS
29/11/2002	S	AP	Teruel	5, 8	1.2, 145 y ss
29/11/2002	S	JPI	Calatayud (1)	8	144,145
04/12/2002	S	AP	Teruel	663	38.1
05/12/2002	S	AP	Huesca	8	144
08/12/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	144,145,147
12/12/2002	S	JPI	Teruel (2)	8	144,147
23/12/2002	S	AP	Zaragoza (2ª)	5	663

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
21/01/2003	A	AP	Zaragoza (5ª)	76	58 LS, 142 CDCA
23/01/2003	S	AP	Teruel	8	147
30/01/2003	S	AP	Huesca	8	147
30/01/2003	A	AP	Huesca	663	42
17/02/2003	A	AP	Zaragoza (2ª)	76	127 y ss
17/02/2003	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	37.2
19/02/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147
27/02/2003	S	AP	Huesca	66	
11/03/2003	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	47.1, 56.1
18/03/2003	S	AP	Teruel	8	148
19/03/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	144.2
24/03/2003	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	38
25/03/2003	S	AP	Teruel	8	144.3
27/03/2003	S	AP	Teruel	8	147
28/03/2003	S	JPI	Zaragoza (14)	663	41 a 47
31/03/2003	A	AP	Zaragoza (5ª)	71	141.1
07/04/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	9	LeyCaza
10/04/2003	S	TSJ	Aragón	72	
10/04/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	62,5	1.2, 9, 14
14/04/2003	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	147
30/04/2003	S	JPI	Zaragoza (14)	65	20 CDCA, 202 LS
02/05/2003	A	TSJ	Aragón	0	
15/05/2003	S	AP	Huesca	74	134 LS
15/05/2003	S	AP	Teruel	8	144
16/04/2003	S	AP	Huesca	8	147
16/04/2003	A	AP	Zaragoza (2ª)	64, 65	20.5, 5.2
21/04/2003	A	AP	Zaragoza (4ª)	76	217,218,219 LS
21/04/2003	S	JPI	Tarazona	8	144.3
24/04/2003	S	AP	Huesca	8	147
15/05/2003	S	AP	Huesca	74	134 LS
19/05/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	662	23, 41, 43 CDCA, 24 LS
21/05/2003	S	AP	Huesca	8	144
23/05/2003	S	JPI	Teruel (1)	8	144.1
23/05/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	72	
05/06/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	8	144
09/06/2003	A	AP	Zaragoza (4ª)	663	42,47,56,57,58
09/06/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	144
10/06/2003	S	AP	Huesca	663	37
11/06/2003	S	AP	Teruel	8	144
12/06/2003	S	AP	Huesca	61	LPENC
12/06/2003	S	AP	Huesca	663	41.1
17/06/2003	A	AP	Zaragoza (5ª)	8	144
18/06/2003	S	AP	Teruel	8	147,148
19/06/2003	S	AP	Huesca	8	147
20/06/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	29, 38, 47
25/06/2003	S	JPI	Ejea (2)	8	144.1
28/06/2003	S	AP	Teruel	8	
07/07/2003	S	TSJ	Aragón	663	42
08/07/2003	A	AP	Teruel	5	3
14/07/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	38,39,41,43,45

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
15/07/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	71	7, 171 LS
16/07/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147
17/07/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	663	37.3
22/07/2003	S	JPI	Zaragoza (2)	74	133
28/07/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	9	LeyCaza
30/07/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	38.4, 40, 57
01/09/2003	S	JPI	Teruel (2)	8	144.2
08/09/2003	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	47
19/09/2003	A	TSJ	Aragón	0	
22/09/2003	A	AP	Huesca	61	LPENC
23/09/2003	S	AP	Teruel	5	3
24/09/2003	A	TSJ	Aragón	0	
24/09/2003	S	TSJ	Aragón	68	76.78.79,79,83, 86
24/09/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	8 LREMV
09/10/2003	S	JPI	Zaragoza (17)	663	48.2
18/10/2003	S	AP	Teruel	8	144
22/10/2003	S	JPI	Zaragoza (12)	663	36, 48.2
23/10/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	39.6,40,67,68
24/10/2003	S	AP	Huesca	661	
28/10/2003	S	AP	Huesca	663	37.3, 40,41M53
28/10/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	71	40
28/10/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	144, 179 LS
31/10/2003	S	JPI	Alcañiz (1)	8	147
04/11/2003	S	JPI	Alcañiz (1)	76	212, 213 LS
04/11/2003	S	JPI	Zaragoza (4)	72,68,74	84,85,86
06/11/2003	S	JPI	Calamocha	663	76 y ss LREMV
14/11/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	75	40 CDCA, 171 y
17/11/2003	S	AP	Huesca	8	147
18/11/2003	S	JPI	Zaragoza (2)	663	36 y ss
28/11/2003	S	TSJ	Aragón	68	
28/11/2003	S	AP	Huesca	8	147
05/12/2003	S	JPI	Tarazona	71,5	142 CDCA,DTI58 LS
09/12/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	68	53 y ss,85,86,87
10/12/2003	S	AP	Teruel	5	2.1
12/12/2003	A	TSJ	Aragón	0	
12/12/2003	S	JPI	Ejea (2)	76	38,40,132,149,150
17/12/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	148
26/12/2003	S	AP	Huesca	8	144
26/12/2003	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	
26/12/2003	S	JPI	Ejea (2)	8	144
09/01/2004	S	JPI	Zaragoza(17)	9	30.2
14/01/2004	S	AP	Teruel	5	1.2
21/01/2004	S	AP	Zaragoza	663	55.2,80 LR
26/01/2004	A	AP	Zaragoza	663	37.2,41
02/02/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
02/02/2004	S	AP	Teruel	8	144,145,147
02/02/2004	S	AP	Zaragoza	8	144,145,
04/02/2004	S	TSJ	Aragón	8	144,145,
04/02/2004	S	AP	Zaragoza	663	38.7,29.4LS
06/02/2004	A	AP	Zaragoza	663	52 y ss, 58 LS

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
11/02/2004	S	AP	Zaragoza	663	40,56.1,38
12/02/2004	S	JPI	Zaragoza (17)	75	171 y ss LS
16/02/2004	S	JPI	Ejea (1)	8	144
16/02/2004	S	JPI	Ejea (1)	8	144
18/02/2004	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
18/02/2004	S	AP	Zaragoza	71	79
19/02/2004	S	AP	Zaragoza	663	68 y ss LR
25/02/2004	S	AP	Zaragoza	72	108
10/03/2004	S	AP	Huesca	663	
24/03/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	37, 57 C, 84LR
25/03/2004	S	AP	Zaragoza	663	62.d LR
31/03/2004	S	TSJ	Aragón	8	144
12/04/2004	S	AP	Zaragoza	663	38.5,
22/04/2004	S	JPI	Jaca (1)	9	149,150 C
26/04/2004	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
27/04/2004	S	AP	Zaragoza	8	147,148
28/04/2004	A	JPI	Zaragoza (14)	68	52C,62,76,LR
05/05/2004	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
17/05/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
17/05/2004	S	JPI	Ejea (1)	8	144, 145
18/05/2004	S	AP	Teruel	5	1.2
19/05/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	37-40 C,24LR,
31/05/2004	S	AP	Zaragoza	8	144
01/06/2004	S	JPI	Jaca (1)	663	28LR
01/06/2004	S	JPI	Jaca (1)	8	143
04/06/2004	S	AP	Huesca	8	144
17/06/2004	S	JPI	Teruel(1)	8	143
18/06/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
18/06/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
22/06/2004	S	AP	Teruel	5	3
23/06/2004	S	TSJ	Aragón	662	38,39,72 LS
26/06/2004	S	AP	Huesca	8	147
29/06/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	37,38,57,58
28/06/2004	S	JPI	Calamocha(1)	8	147
29/06/2004	S	JPI	Teruel(2)	8	145
01/07/2004	S	AP	Huesca	68	78,79,84 LR
01/07/2004	S	AP	Zaragoza	74	5,133,10,177LS
06/07/2004	S	JPI	Alcañiz (2)	68	101 LR
06/07/2004	S	AP	Zaragoza	8	144
08/07/2004	S	JPI	Zaragoza(12)	72	102,123,105LS
09/07/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	37 y ss, DT2ª
13/07/2004	s	JPI	Zaragoza(17)	75	171,188,190, LS
14/07/2004	S	AP	Teruel	8	144
19/07/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
01/09/2004	S	JPI	Alcañiz (1)	8	144
03/09/2004	S	JPI	Calamocha(1)	5	1.2,3
13/09/2004	S	JPI	Jaca (1)	8	143,144
13/09/2004	S	AP	Zaragoza	663	80,87 LR,55,59 C
20/09/2004	S	JPI	Calamocha(1)	663	40,35LR
20/09/2004	S	AP	Zaragoza	663	41.5

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
20/09/2004	S	JPI	Zaragoza (14)	72	93.1 LS
30/09/2004	S	AP	Zaragoza	663	41.5
04/10/2004	S	AP	Zaragoza	74	
06/10/2004	S	AP	Zaragoza	8	147
07/10/2004	S	JPI	Zaragoza(12)	72	6,7,9,20,141LS
07/10/2004	S	JPI	Alcañiz (2)	8	147
08/10/2004	S	AP	Huesca	71	6,7 LS
08/10/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
11/10/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	37,38,40 C, 35 LR
15/10/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
18/10/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
19/10/2004	S	JPI	Zaragoza (14)	8	144.3
22/10/2004	S	JPI	Zaragoza(12)	663	36,48.2 C
22/10/2004	S	JPI	Zaragoza(17)	663	68 y ss LR
26/10/2004	S	AP	Zaragoza	663	65 LR,52.2 C
26/10/2004	S	AP	Zaragoza	663	28.2, 35 LR
28/10/2004	S	JPI	Calamocha(1)	663	62,63,65,79;28LR
02/11/2004	S	AP	Zaragoza	663	52
03/11-2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
04/11/2004	A	AP	Zaragoza	663	
04/11/2004	S	JPI	Calamocha(1)	68	89,101,107 LR
09/11/2004	S	JPI	Barbastro	663	
09/11/2004	S	AP	Zaragoza	663	79,DT"º
10/11/2004	S	AP	Huesca	663	58 C, 85 y 88 LR
10/11/2004	S	AP	Zaragoza	71	142,1LS
15/11/2004	S	AP	Zaragoza	663	40,41,58,55 C
16/11/2004	S	AP	Huesca	74	143 LS
19/11/2004	S	AP	Zaragoza	8	144
22/11/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	35,65.2,DTª LR
25/11/2004	S	AP	Zaragoza	663	
30/11/2004	S	AP	Zaragoza	8	47
30/11/2004	S	AP	Zaragoza	8	143 LS
07/12/2004	S	JPI	Zaragoza (17)	8	144, DT ª9ª
10/12/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	35LR,40C,37 y ss
10/12/2004	S	AP	Zaragoza	663	37,38,40,52
13/12/2004	S	JPI	Monzón(2)	663	52,53 LR
13/12/2004	S	AP	Zaragoza	72	78,97C,40,123LS
14/12/2004	S	JPI	Jaca (1)	9	149,150 C
15/12/2004	S	AP	Huesca	8	148
15/12/2004	S	AP	Zaragoza	8	147
15/12/2004	A	AP	Zaragoza	663	
20/12/2004	S	TSJ	Aragón	663	52,58,48
21/12/2004	S	AP	Huesca	8	144
22/12/2004	A	AP	Zaragoza	663	62,68C, 69 LR
22/12/2004	S	JPI	Zaragoza(6)	663	
27/12/2004	S	AP	Zaragoza	663	37,39 C
27/12/2004	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
10/01/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	8	144 C
10/01/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	81,85 y 86 LR
18/01/2005	S	AP	Huesca	662	88 LR

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
19/01/2005	S	AP	Huesca	67	68 LR
24/01/2005	S	TSJ	C-A Secc. 2ª	663	28,47 y 56 C
24/01/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	5,661,662	21 LR
25/01/2005	A	AP	Zaragoza (2ª)	72,76	5 y DTIª LS
01/02/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	35.2 LR
07/02/2005	S	TSJ	C-A Secc. 2ª	663	47 y 56 C
07/02/2005	S	AP	Zaragoza (4ª)	63	48 C
07/02/2005	S	AP	Teruel	5	1.2 C
08/02/2005	S	AP	Teruel	5	1.2 C
08/02/2005	S	JPI	Zaragoza (2)	9	149 C
14/02/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	5,661,662	3 C,28.2.8 y 33 LR
15/02/2005	S	AP	Teruel	8	144 y 145 C
16/02/2005	S	AP	Huesca	73	78 y 86 LS
17/02/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	5,72	3 C y 28 LS
17/02/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	64	59 y 65 L.12/01
17/02/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	661	5 y 11 LR
18/02/2005	S	JPI	Zaragoza (14)	0	14Ley Parej.Estables
22/02/2005	S	JPI	Zaragoza (14)	71	34 y 35 LS
23/02/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	8	144 C
01/03/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	L.9/99 de 26.3
01/03/2005	S	AP	Teruel	8	144 C
03/03/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147 C
04/03/2005	S	AP	Huesca	9	149 C
07/03/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	37.4 y 40 C
07/03/2005	S	AP	Zaragoza(5ª)	68,71,663	85,87 C y 119LR
08/03/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	68	73, 75 y 79 C
15/03/2005	S	AP	Huesca	8	147C
17/03/2005	S	AP	Zaragoza(5ª)	66,663	62 y 65 LR
18/03/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	15 y 35 LR
22/03/2005	S	AP	Zaragoza(5ª)	663	15 y 35 LR
05/04/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	Ley 9/99 de 26.3
05/04/2005	S	AP	Teruel	663	80 y 88 LR
13/04/2005	S	AP	Teruel	8	1.3 C y 7.2 Cód.Cv.
15/04/2005	S	AP	Huesca	8	147 C
15/04/2005	S	JPI	Ejea (1)	8	147 C
18/04/2005	S	AP	Huesca	0	31 L.Parej.Estables
04/05/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	72	108 C y 104 LS
11/05/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	28.2,29.b,29.c,39 LR
12/05/2005	S	AP	Zaragoza(5ª)	8	147 C
16/05/2005	A	JPI	Zaragoza (14)	663	48.3 LR
19/05/2005	S	AP	Huesca	5,663	1.2 C
19/05/2005	A	AP	Zaragoza (4ª)	663	76 y ss LR
20/05/2005	S	AP	Zaragoza (4ª)	5,10, 662	DTIILR y 1.2 C
24/05/2005	S	AP	Huesca	74	144,145,147,148LS
25/05/2005	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	38.2 y 38.5 C
27/05/2005	S	JPI	Ejea (2)	8	144 C
01/06/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	52.2 C y DTII LR
01/06/2005	S	JPI	Zaragoza (14)	8	147C
06/06/2005	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	62 LR
08/06/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	Dº374/2002 de 17.12

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
08/06/2005	S	AP	Huesca	10,68	78 C y DT XII
17/06/2005	S	AP	Teruel	8	144 C
20/06/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	72	28.2,30.1 y 123 LS
21/06/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	73	38, 96, 97 y 99 C
21/06/2005	S	AP	Huesca	8	143 C
28/06/2005	S	AP	Huesca	72	102 LS
01/07/2005	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	36.1.c, 36.2 LR
01/07/2005	S	AP	Huesca	67, 663	76 y ss y 68 y ss C
04/07/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147 y 148 C
05/07/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	71	142 C
06/07/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	8	1.2 y 143 C
08/07/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	28, 35, DTI, DTII LR
08/07/2005	S	AP	Teruel	5	1 C
19/07/2005	S	JPI	Teruel (2)	8	147 y 148 C
22/07/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	5,41 y 42 C
05/09/2005	S	AP	Huesca	8	147 C
15/09/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147 C
21/09/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	37.2 C
21/09/2005	S	AP	Huesca	74	124 LS
27/09/2005	S	JPI	Zaragoza (4)	68,71,75	89,92,94 LR 216 LS
30/09/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	73	108 y 135 C
10/10/2005	A	AP	Zaragoza (5ª)	75	171,172,175 LS
11/10/2005	S	AP	Teruel	5	1 C
17/10/2005	S	AP	Huesca	8	144 C
20/10/2005	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	37.2, 38.2 y 38.5 C
25/10/2005	S	AP	Teruel	5	3 C
25/10/2005	S	AP	Teruel	5	3 C
26/10/2005	S	AP	Huesca	8	147 C
02/11/2005	S	AP	Teruel	8	144 C
09/11/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	38.4 C y 5 LS
14/11/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	9	149 C
17/11/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	28.2.k, 28.2.f , 36 LR
18/11/2005	S	JPI	Alcañiz (2)	8	147 C
18/11/2005	S	JPI	Zaragoza (2)	68	98.3 LR
21/11/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	8	147 C
28/11/2005	S	AP	Huesca	74	141 LS
01/12/2005	S	AP	Teruel	71	48, 58 Apend. 1925
02/12/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	68	74 y 76 C
16/12/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	8	144 y 145 C
21/12/2005	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	68	119.1.f LS
22/12/2005	S	JPI	Zaragoza (17)	10, 71	35, 37 DT IV LS
23/12/2005	S	AP	Huesca	8	147 y 148 C
30/12/2005	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	35 y ss LR
11/01/2006	S	AP	Huesca	8	148 C
12/01/2006	S	AP	Huesca	0	22,47 y 80 Ley 9/1998
13/01/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	41 C
13/01/2006	S	AP	Huesca	8	14 Apéndice 1925
16/01/2006	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	48 Apéndice 1925
18/01/2006	S	AP	Zaragoza (4ª)	64	9 C
23/01/2006	S	AP	Zaragoza (4ª)	71	142 y DT XII C

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
24/01/2006	A	AP	Zaragoza (2ª)	76	108 C
26/01/2006	S	AP	Huesca	8	145 C
27/01/2006	S	AP	Huesca	72	101 LS
31/01/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	30 LR
31/01/2006	S	AP	Huesca	0	22.b Ley 9/1998
01/02/2006	A	AP	Zaragoza (2ª)	71	142 C y 58 LS
01/02/2006	S	AP	Zaragoza (2ª)	663	79 a 81 LR
01/02/2006	A	AP	Zaragoza (2ª)	663	36 LR
02/02/2006	S	AP	Huesca	9	150 C
07/02/2006	S	JPI	Monzón 1	64	9 C
09/02/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	38 y 39 C
09/02/2006	S	JPI	Zaragoza 17	75	179 y 194 LS
13/02/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	74	125,144.2 y 145 LS
14/02/2006	S	AP	Zaragoza (2ª)	68	84 C, 112 y DT II LR
21/02/2006	A	AP	Zaragoza (2ª)	71	40 a 46 y DTV LS
23/02/2006	S	JPI	Ejea (1)	8	144 y 145 C
27/02/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	38,40,47 C DTII LR
27/02/2006	S	AP	Teruel	663	52 C
03/03/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	0	7 Ley 6/1999 de 26-03
08/03/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	8	147 C
10/03/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	71 y 74	136 a 140 y 28 y 30 LS
13/03/2006	S	JPI	Zaragoza (3)	71	40 LS
20/03/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	39 C
20/03/2006	S	AP	Huesca	8	144 C
24/03/2006	S	AP	Teruel	8	147 y 148 C
27/03/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663 y 5	35 y 80 LR
28/03/2006	A	AP	Zaragoza (2ª)	663	41 a 43 LR
29/03/2006	S	AP	Teruel	5	3 C
30/03/2006	S	JPI	Zaragoza 2	72	53 y 141 C
31/03/2006	S	JPI	Monzón 1	64	15 C
03/04/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	80 y 81 LR
05/04/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	30,63,80 y 81 LR
05/04/2006	S	AP	Teruel	5	3 C
10/04/2006	S	AP	Teruel	8	147 C
10/04/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
21/04/2006	S	AP	Teruel	663	40 y 55 C
25/04/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	0	
25/04/2006	S	AP	Huesca	74	129,144,147 y 148 LS
03/05/2006	S	JPI	Monzón 1	64	9 C
12/05/2006	S	JPI	Zaragoza 14	0	7 Ley Parejas Estables
18/05/2006	S	JPI	Zaragoza 17	72	93,103,105,109 y115 LS
19/05/2006	A	JPI	Zaragoza 14	663	36.1.e y 37.2 LR
19/05/2006	S	JPI	Monzón 1	64	9 C
23/05/2006	S	AP	Huesca	9	149 y 150 C
25/05/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	0	36 y 67 Ley 9/1998
25/05/2006	S	AP	Huesca	8	147 C
25/05/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
26/05/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	0	Ley 4/1993 y Dº23/95
31/05/2006	S	AP	Zaragoza (5ª)	663	76 LR

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
01/06/2006	S	JPI	Zaragoza 14	71	40 LS
06/06/2006	S	JPI	Zaragoza 3	9	149 C
08/06/2006	S	JPI	Monzón 1	64 y 663	9 C y 62.b LR
09/06/2006	S	JPI	Ejea 2	8	147 C
16/06/2006	S	AP	Huesca	663 y 72	56 LS y 44 y 85 LR
23/06/2006	S	JPI	Zaragoza	663	79 LR
27/06/2006	S	AP	Huesca	0	23 Ley Coop. Aragón
30/06/2006	S	AP	Huesca	8	144,145 y 147 C
30/06/2006	S	JPI	Teruel (2)	76	201 y 201 LS
03/07/2006	S	AP	Huesca	8	144 C
03/07/2006	S	AP	Huesca	8	147 y 148 C
04/07/2006	S	JPI	Zaragoza	663	24 y ss LR
10/07/2006	S	JPI	Monzón 1	64	9 C
13/07/2006	S	JPI	Ejea 2	663	76 LR
14/07/2006	S	AP	Zaragoza (4ª)	68	76.2 C y 92 LR
15/07/2006	S	JPI	Barbastro	8	144 C
19/07/2006	S	AP	Teruel	663	53 y 54 LR
25/07/2006	S	JPI	Zaragoza 14	71	128 C
01/09/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
05/09/2006	S	AP	Huesca	72	101 LS
08/09/2006	S	AP	Huesca	0	5.3 Ley Parejas Estables
18/09/2006	S	JPI	Barbastro	8	144.3 C
20/09/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
20/09/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
22/09/2006	S	JPI	Monzón 1	64,663 y 68	9 C, 62 LR y 94 LR
27/09/2006	A	JPI	Zaragoza 16	71	33 LS
27/09/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
28/09/2006	A	JPI	Monzón (2)	76	201 y 202 LS
05/10/2006	S	AP	Huesca	68	94 LR
06/10/2006	S	JPI	Zaragoza (2)	72	93,108.2,116 y 164 LS
13/10/2006	S	AP	Huesca	73	108.3 C
20/10/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	37 y 40 C
23/10/2006	A	AP	Huesca	71	5,216.2 y DTI LS
23/10/2006	S	JPI	Ejea 2	663	76 y ss LR
24/10/2006	S	AP	Teruel	663	38 C
31/10/2006	S	JPI	Monzón 1	72 y 76	123 y 216 LS
06/11/2006	S	JPI	Zaragoza 17	75	101,113 y 183 LS
08/11/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	72	90,101 y 159 LS
08/11/2006	S	AP	Huesca	663	38 y 39 C y DTII LR
08/11/2006	S	JPI	Monzón 2	8	147 y 148 C
16/11/2006	S	AP	Teruel	8	147 C
28/11/2006	S	JPI	Zaragoza 17	71	9 LS
30/11/2006	A	AP	Huesca	663	52 LR
30/11/2006	S	JPI	Zaragoza 17	76	202 y 205 LS
11/12/2006	S	TSJ	Aragón (S. Civil)	663	41.5 C
19/12/2006	S	AP	Huesca	663	56.2 y 73 LR
20/12/2006	S	JPI	Monzón 1	8	145 a 148 C
21/12/2006	S	AP	Huesca	0	36 y 42Ley Coop.Aragón
28/12/2006	S	AP	Huesca	8	147 C

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
29/12/2006	S	AP	Huesca	8	147 y 148 C
29/12/2006	S	AP	Huesca	8	145 C
29/12/2006	S	JPI	Barbastro	5	2.2 C
9/01/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	663	48 Apéndice, 28.4 C
9/01/2007	S	AP	Huesca	0	53.d Ley Coop. Aragón
10/01/2007	S	AP	Teruel	72	101 LS
18/01/2007	A	AP	Huesca	76	217.4 y 218.1 LS
23/01/2007	S	AP	Huesca	663	37.2, 38.1, 39, 44, 83 DTII LREMV
25/01/2007	S	JPI	Zaragoza 3	661	13 y ss LREMV
31/01/2007	S	JPI	Zaragoza 2	9	149 y 150 C
2/02/2007	S	JPI	Zaragoza 17	661	5,7,y 27 LREMV
9/02/2007	S	AP	Huesca	73	162 y 164 LS
13/02/2007	S	AP	Huesca	8	144, 145 y 147 C
19/02/2007	A	AP	Huesca	71	33 LS
19/02/2007	S	JPI	Zaragoza 2	75	179.2, 195 b y c, 194.2 y 198 LS
21/02/2007	S	AP (5ª)	Zaragoza	72	98.2, 100.1 y 108 LS
21/02/2007	S	AP	Huesca	0	3.4 Orden de 15 de noviembre de 1984. Reglamento Accidentes de esquí.
28/02/2007	S	AP	Huesca	8	144.2 y 147 C
9/03/2007	S	AP	Huesca	0	22.a y 32.1 Ley Coop. Aragón
12/03/2007	S	JPI	Teruel 2	663	37 C
13/03/2007	A	AP	Huesca	0	18.3 y 24 Ley Coop. Aragón
13/03/2007	S	AP	Teruel	5	3 C
15/03/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	663	1 C y 61.2 LREMV
19/03/2007	S	AP	Huesca	663	13.2 y 62 LREMV
20/03/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	76	212 LS
20/03/2007	A	JPI	Zaragoza 14	71	36 LS
23/03/2007	S	JPI	Teruel 2	8	1 y 145 C
27/03/2007	A	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	68	98.3 LREMV
27/03/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	663	38.1 , 39.4 y DT II LREMV
27/03/2007	S	AP	Teruel	8	147 y 148 C
27/03/2007	S	JPI	Zaragoza 17	0	Dº 58/2004 de 9 de marzo. Ley Aragonesa de Montes 15/2006
29/03/2007	A	AP	Huesca	76	127 y ss C
30/03/2007	S	AP	Huesca	8	144 C
30/03/2007	S	AP	Huesca	72	93 y 108.2 LS
2/04/2007	A	JPI	Zaragoza 14	663	48.c LREMV
10/04/2007	S	JPI	Zaragoza 17	68	108.2 y 119.1.a LREMV
13/04/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	663	30 LREMV
19/04/2007	S	AP	Huesca	71	33 LS
20/04/2007	S	AP	Huesca	661	5 LREMV
2/05/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	663	47 C
3/05/2007	S	JPI	Ejea 2	8	144 C
8/05/207	S	AP	Teruel	8	147 C
8/05/2007	S	JPI	Zaragoza 14	663	48 LREMV
10/05/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	74	DT IV, 36 y 37 LS, 141 C

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
11/05/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	8	147 C
11/05/2007	S	AP	Zaragoza (Sección Cuarta)	71	59 LS
11/05/2007	S	AP	Huesca	64	66.2 Ley Derecho de la Persona
14/05/2007	S	JPI	Zaragoza 14	68	101.1 LREMV y 202.2 LS
15/05/2007	S	AP	Huesca	8	147 C
17/05/2007	S	JPI	Zaragoza 3	68	117 LREMV
21/05/2007	S	AP	Zaragoza (Sección Quinta)	663	48 LREMV
22/05/2007	S	JPI	Zaragoza 14	663	36.1 y 48 LREMV
23/05/2007	S	TSJA	Aragón Sala Civil)	71	141 y 142 C , 5, DT I, II, III, IV, V y VI LS
24 /05/2007	S	JPI	Zaragoza 12	5	1.2 C
25/05/2007	S	JPI	Teruel 2	8	144 C
29/05/2007	S	JPI	Zaragoza 14	68	108.2 LREMV
5/06/2007	S	AP	Zaragoza (Sección Segunda)	0	
5/06/2007	S	JPI	Zaragoza 12	0	14.1 y 15.2 Ley 24/2003 de 26 de diciembre y Dº 80/2004 de 13 de abril
8/06/2007	S	AP	Huesca	8	144 C
19/06/2007	S	AP	Zaragoza (Sección Segunda)	64	Ley 12/2001 de 2 de julio de Infancia y Adolescencia en Aragón
19/06/2007	A	AP	Zaragoza (Sección Segunda)	72	201 LS
25/06/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	76	216.1 LS y 3 C
26/06/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 2ª)	663	28.2.c y 80 LREMV
2/07/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 5ª)	663	29 y 44 LREMV
11/07/2007	S	AP	Huesca	8	147 C
19/97/2007	S	JPI	Zaragoza 12	72	1.2 C y 108 LS
27/07/2007	S	JPI	Monzón 2	64	9 C
30/07/2007	S	AP	Huesca	9	150 C
31/07/2007	S	AP	Huesca	0	5 LREMV y 7 Ley 39/1999 Reguladora de Parejas Estables
31/07/2007	S	JPI	Alcañiz 2	8	144 C
6/09/2007	S	AP	Huesca	663	68.a LREMV
11/09/2007	S	JPI	Monzón 2	8	147 C
12/09/2007	S	JPI	Zaragoza 17	663	38 C y 29.1 LREMV
19/09/2007	S	AP	Teruel	8	144 C
24/09/2007	S	JPI	Calamocha	8	148 C
26/09/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	661	37.1 C
28/09/2007	A	TSJA	Aragón (S. Civil)	661	37.1 C
27/09/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	8	145 C
28/09/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	663	47, 55, 56.1, 38.1, 38.2, 39.6, 83 y DTI LREMV
28/09/2007	S	JPI	Zaragoza 12	72	41,44 LS. 38.7 y 67 C
1/10/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	76	212 LS
4/010/2007	S	JPI	Monzón	64	Ley Derecho de la Persona

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
10/10/207	S	JPI	Teruel 2	71	108.3 C, 202.2, 216.2 y 39 LS
11/10/2007	S	AP	Huesca	0	22.4 Ley 21/1998 de 12 de marzo Colegios Profesionales de Aragón
19/10/2007	S	JPI	Zaragoza 4	9	149 C
23/10/2007	S	AP	Teruel	8	144.2, 144.3 y 147 C
24/10/2007	S	AP	Huesca	8	145 C
25/10/2007	S	AP	Huesca	64	55.2 Ley Derecho de la Persona
29/10/2007	S	AP	Huesca	663	62.b, 68, 28, 35 LREMV
15/11/2007	S	AP	Teruel	76	DTI y 5.1 LS , 133 C
20/11/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 5ª)	0	14.1, 3º, 15 y 44 Ley 24/2003 de 26 de diciembre de Medidas Urgentes de Política de Vivienda protegida
26/11/2007	S	TSJA	Aragón (S. Civil)	663	DT II LREMV y 1380 Código Civil
26/11/2007	S	JPI	Calatayud 2	663	65 C, 80 y 81 LREMV
27/11/07	S	JPI	Daroca	8	147 C
27/11/2007	S	JPI	Monzón 2	8	144 C
28/11/2007	S	JPI	Zaragoza 12	72	101 LS
28/11/2007	S	JPI	Zaragoza 17	72	109, 161 y 206 LS
30/11/2007	S	AP	Zaragoza (Sección 5ª)	8	147 C
10/12/20007	S	AP	Zaragoza (Sección 4ª)	8	145 C
10/12/2007	A	JPI	Zaragoza 14	6	120, 122 y 128 Ley Derecho de la Persona
10/12/2007	S	JPI	Ejea 2	8	144 C
13/12/2007	S	AP	Teruel	8	144 C
18/12/2007	S	AP	Teruel	661	28.2 y 28.2 c LREMV
26/12/2007	S	AP	Huesca	8	145, 144 y 147 C
28/12/2007	S	AP	Huesca		30 y 4 Ley 8 /1997 del Estatuto del Consumidor y el Usuario
8/01/2008	S	JPI	Zaragoza (14)	9	149 y 150 C
9/01/2008	S	AP	Huesca	0	Dº141/1989 Gob. Aragón
10/01/2008	S	AP	Zaragoza (5)	64	66 LDP
14/01/2008	S	AP	Huesca	8	147 C
14/01/2008	S	AP	Huesca	8	144 y 145 C
16/01/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	35,40 C 65 y 64 LREMVL
21/01/2008	S	AP	Zaragoza(5)	72	109 y 139 LS
21/01/2008	S	JPI	Zaragoza (5)	663	35, 40 C, 64 y 65 LREMV
23/01/2008	S	TSJ	Aragón	8	144 y 145 C
25/01/2008	S	AP	Zaragoza (4)	71	58, 59 y 208 LS
28/01/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	35,40 C 65 y 64 LREMVL
28/01/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	72	97 C
29/01/2008	S	AP	Teruel	76	135 C y 34,35 y 39 LS
30/01/2008	S	TSJ	Aragón	75	171,174,184,183 y113 LS
30/01/2008	S	AP	Zaragoza (4)	8	144 C
31/01/2008	S	AP	Huesca	663	53 LREMV
6/02/2008	S	AP	Zaragoza (2)	62	
6/02/2008	A	AP	Zaragoza (2)	62	33 LDP
6/02/2008	A	AP	Huesca	661	3 LERMV
19/02/2008	A	AP	Huesca	73	80.3, 104 y 216.2 LS
20/02/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	35,64,65 LREMV
22/07/2008	S	AP	Teruel	8	144.3 C

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
25/02/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	72	90,98 y 99 . 108LS.
26/02/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	66 LDP
28/02/2008	S	JPI	Zaragoza (12)	71	142 C
29/02/2008	S	AP	Huesca	663	52.2 y 56 C y 80 LREMV
6/03/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	62	35,39 y 41 LDP
10/03/2008	S	AP	Huesca	0	22 Ley 2/1998 de 12-3 Coleg.Profes. Aragón
12/03/2008	A	AP	Huesca	62	33 LDP
13/03/2008	S	AP	Zaragoza (4)	71	108 C y 35 LERMV
13/03/2008	S	AP	Huesca	8	147 C
19/03/2008	S	AP	Zaragoza (2)	62	55 y 56 LDP
26/03/2008	S	AP	Huesca	0	22 Ley 2/1998 de 12-3 Coleg.Profes. Aragón
27/03/2008	S	AP	Huesca	661	12,16,86 LERMV
28/03/2008	S	AP	Huesca	8	144 C
28/03/2008	S	AP	Huesca	76	132,133,137,135 y 141 C
31/03/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	47 C
31/03/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	47 C
2/04/2008	S	JPI	La Almunia (1)	76	101, 211 y 213 LS
2/04/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	62	35,39 y 41 LDP
7/04/2008	S	AP	Teruel	8	144 C
8/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	75	90 ,180 y 171 LS
9/04/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	62	35,39 y 41 LDP
11/04/2008	S	JPI	La Almunia (1)	663	29, 37.2, 37.4 y 40 C
15/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	62	111 y 112 LDP
15/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	62	111 y 112 LDP
18/04/2008	S	AP	Huesca	8	144 C
21/04/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	8	144 C
22/04/2008	S	TSJ	Aragón	8	144,145 y 148 C
22/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	66 LDP
25/04/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
29/04/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	40, 65.2 LREMV y 47 C
30/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	28.2 y 65 LREMV
30/04/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
8/05/2008	S	JPI	Zaragoza (14)	663	36.1, 36.2 ,37.1, 44 LREMV
8/05/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	62	35,39 y 41 LDP
12/05/2008	S	TSJ	Aragón	64	5.3 Ley 6/1999 de 26-3
12/05/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
13/05/2008	S	AP	Huesca	64	57 y 61 LDP
13/05/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
15/05/2008	S	AP	Huesca	8	147 C
20/05/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
20/05/2008	A	AP	Zaragoza (2)	663	76 LREMV
30/05/2008	S	AP	Zaragoza (5)	72	95, 97, 101 y 108 LS
10/06/2008	S	TSJ	Aragón	0	14,15 y 31 Ley 24/2003
10/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	146 LDP
10/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
10/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	4 LREMV
16/06/2008	A	AP	Huesca	76	135 C
16/06/2008	S	AP	Huesca	75	106 C y 177 y DT III, II y IX LS. 147 y 148 LS
17/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
17/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 y 66 LDP

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
20/06/2008	S	JPI	ALcañiz (2)	62	35,39 y 41 LDP
24/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
24/06/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	
24/06/2008	S	AP	Zaragoza (5)	0	Ley 5/1999 Urbanística de Aragón
24/06/2008	S	AP	Huesca	8	144 C
24/06/2008	S	AP	Teruel	663	35 LREMV y 48 Apéndice
30/06/2008	S	AP	Huesca	8	147 C
30/06/2008	A	AP	Huesca	661	3 LREMV
1/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	28.2, 68, 76 y ss LREMV
3/07/2008	A	JPI	Zaragoza (6)	71	40, 76 LS
8/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	80 LREMV
8/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
9/07/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	24 LREMV y 40 C
9/07/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	38,44 y 83 LREMV
10/07/2008	S	AP	Teruel	8	147 C
10/07/2008	S	JPI	Zaragoza (16)	663	
14/07/2008	S	TSJ	Aragón	8	144,145 y 147 C
14/07/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
15/07/2008	S	AP	Zaragoza (5)	8	144 y 145 C
16/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
18/07/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
22/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	663	80 y 81 LREMV
22/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	20, 66,62 y 68 LDP
23/07/2008	S	TSJ	Aragón	75	171 LS y 101 LREMV
25/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
25/07/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	38,41 y 47 C y 30 LREMV
28/07/2008	S	JPI	La Almunia (1)	8	144 C
29/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	62	112 LDP
29/07/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	59 Ley 12/2001 de 2 julio
31/07/2008	S	AP	Huesca	8	144 C
31/07/2008	S	AP	Huesca	0	25 y 26 Ley 7/1999 9 abril
8/09/2008	S	JPI	Zaragoza (14)	72	188, 189 y 190 LS
12/09/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	44 LREMV y 47 C
18/09/2008	S	TSJ	Aragón	68	202,204,214 LS y 101.4 LREMV
23/09/2008	S	AP	Huesca	5	3 C
23/09/2008	S	JPI	Alcañiz (2)	5	3 C
26/09/2008	S	AP	Huesca	9	150 C
26/09/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
30/09/2008	S	AP	Huesca	663	33 y 44 LREMV
2/10/2008	S	AP	Huesca	8	143 C
8/10/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	29 C y 28.2.b LREMV
9/10/2008	S	AP	Huesca	8	147 C
14/10/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	40C, 35,64,65 LREMV
14/10/2008	S	JPI	La Almunia (1)	8	144 C
16/10/2008	S	AP	Teruel	8	144 C
20/10/2008	S	AP	Huesca	74	129, 133, 147, 148, 144, DT III y DT IX LS
4/11/2008	A	AP	Zaragoza (2)	64	62 y 68 LDP
4/11/2008	A	JPI	Zaragoza (14)	663	28, 36, 37y 86 LREMV
5/11/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	45, 64 LREMV
12/11/2008	S	JPI	Alcañiz	62	35, 39 y 41 LDP

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
17/11/2008	S	AP	Huesca	663	28, 29, 44 LREMV
19/11/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
21/11/2008	S	AP	Zaragoza (5)	0	Ley 6/1999 de 26 marzo
25/11/2008	A	AP	Zaragoza (2)	64	61 y 62 LDP
1/12/2008	S	TSJ	Aragón	73	108.3 C DTI LS
3/12/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	40 C, 64 y 65 LREMV
10/12/2008	S	JPI	Zaragoza (6)	663	40 C, 64 y 65 LREMV
16/12/2008	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
19/12/2008	S	AP	Huesca	663	86 y 88 LREMV
9/01/2009	S	AP	Teruel	71	5.1 y 216 LS
09/01/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	663	40 C
13/01/2009	S	AP	Huesca	64	62 LDP
18/01/2009	S	JPI	La Almunia (2)	62 y 71	24,29,38,39,44,103,DTi, DTII LREMV
22/01/2009	S	AP	Zaragoza (5ª)	73	99C
23/01/2009	S	AP	Zaragoza (4ª)	663	DTII LREMV
27/01/2009	S	AP	Zaragoza (2ª)	662	1396 C.Cv.
28/91/2009	S	AP	Huesca	64	57 LDP
29/01/2009	S	AP	Teruel	663	38 C
03/02/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
04/02/2009	S	TSJA	Sala Civil	8	144,145 y 147 C
04/02/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	62 LDP
05/02/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
06/02/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	68 LDP
13/02/2009	S	AP	Zaragoza (4)	8	147 y 148 C
17/02/2009	S	AP	Huesca	64	56 LDP
20/02/2009	S	AP	Teruel	663	108.3 C y 216 LS
20/02/2009	S	JPI	Ejea (1)	8	144 y 145 C
24/02/2009	S	AP	Teruel	8	144 C
26/02/2009	S	TSJA	Sala Civil	72	3,9, 101 y 103 LS
26/02/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
27/02/2009	S	JPI	Ejea (1)	8	147 C
03/03/2009	A	AP	Zaragoza (2)	64	7 y 71 LDP
03/03/2009	S	AP	Zaragoza (2)	663	62 LREMV
10/03/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	71	58,59,202 y 213 LS,142 C
10/03/2009	S	AP	Teruel	663	40 C
11/03/2009	S	AP	Zaragoza	64	57 y 62 LDP
13/03/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP
18/03/2009	S	AP	Huesca	8	147 C
19/03/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	64	69,71,77,78 y 79 LDP
19/03/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	216 LS
25/03/2009	S	JPI	Huesca (2)	663	35 LREMV
26/03/2009	S	AP	Huesca	0	18 Ley Col. Profs. Aragón.
31/03/2009	S	AP	Zaragoza (2)	64	57 y 61 LDP
01/04/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	68 LDP
03/04/2009	S	AP	Huesca	663	36,44,80, 83, 84 LREMV
03/04/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	68 LDP
08/04/2009	S	JPI	Zaragoza (3)	75	174,182,183,184,186 LS
08/04/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP
08/04/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP
13/04/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
13/04/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP
20/04/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
22/04/2009	A	JPI	Huesca (2)	62	34, 111 LDP y 15 L Salud
24/04/2009	S	AP	Huesca	64	62 LDP
28/04/2009	S	AP	Zaragoza (4)	68	83 C y 108 LS
30/04/2009	S	AP	Teruel	8	144 C
05/05/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	
06/05/2009	S	AP	Huesca	8	147 C
06/05/2009	S	AP	Huesca (2)	663	62 LREMV
06/05/2009	S	AP	Zaragoza (2)	64	57 y 62 LDP
06/05/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	64	
07/05/2009	S	AP	Teruel	8	147 y 148 C
07/05/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	661	
12/05/2009	A	AP	Zaragoza (2)	64	57 y 61 LDP
12/05/2009	S	JPI	Ejea (1)	9	71 bis Ley Caza Aragón
13/05/2009	S	JPI	Ejea (1)	9	71 bis Ley Caza Aragón
14/05/2009	S	AP	Teruel	5	3 C
20/05/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	217 C
26/05/2009	S	AP	Huesca	663	76 LREMV
28/05/2009	S	JPI	Ejea (1)	64	60 LDP
08/06/2009	S	AP	Zaragoza (4)	75	47, 49, 71,174,176 LS
09/06/2009	S	AP	Zaragoza (2)	663	28,29,62,77 y 80 LREMV
12/06/2009	S	JPI	Ejea (1)	8	147 C
15/06/2009	S	AP	Zaragoza(5)	663	34 C
22/06/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	76	216,DTI LS, 108, DT XII C
30/06/2009	S	AP	Zaragoza (2)	663	8,44 y 68 LREMV
30/06/2009	S	AP	Huesca	0	71 bis Ley Caza Aragón
03/07/2009	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LDP
06/07/2009	S	JPI	Zaragoza (3)	68	
07/07/2009	S	AP	Zaragoza (2)	663	76 LREMV
09/07/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
14/07/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	663	37,41,42,48,49,59 LRMV
14/07/2009	S	JPI	Ejea (1)	62	35 LDP
15/07/2009	S	AP	Zaragoza (4)	663	51 C
17/07/2009	S	AP	Huesca	9	149 C
20/07/2009	S	JPI	Ejea (1)	9	71 bis Ley Caza Aragón
20/07/2009	S	JPI	Ejea (1)	9	71 bis Ley Caza Aragón
31/07/2009	S	AP	Huesca	71	
02/09/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	64	66 LDP
03/09/2009	S	JPI	Zaragoza (3)	663	28 LREMV
08/09/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	661	
08/09/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
09/09/2009	S	JPI	Zaragoza (6)	663	
11/09/2009	S	AP	Huesca	64	
11/09/2009	S	AP	Teruel	8	144 C
14/09/2009	S	AP	Zaragoza (4)	0	71 bis Ley Caza Aragón
15/09/2009	S	AP	Teruel	8	144 C
15/09/2009	S	JPI	Huesca (2)	662	25 a 35 C
18/09/2009	S	AP	Huesca	64	59 y 62 LDP
21/09/2009	S	AP	Zaragoza (4)	68	89 y 94 LREMV

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
23/09/2009	S	AP	Huesca	8	147 C
24/09/2009	S	JPI	Daroca	663	36 LREMV
29/09/2009	S	AP	Zaragoza (2)	663	76 LREMV
29/09/2009	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LDP
30/09/2009	S	AP	Huesca	8	144 C
05/10/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	72	98 y 108 LS
06/10/2009	A	AP	Zaragoza (2)	64	56 LDP
08/10/2009	S	AP	Zaragoza (4)	8	144 y 145 C
15/10/2009	S	AP	Huesca	663	36 y 37 LREMV
19/10/2009	S	AP	Teruel	8	147 C
20/10/2009	S	JPI	Zaragoza (3)	72	31 LDP, 200,209,213 LS
20/10/2009	S	AP	Zaragoza (5)	663	54,28.102,103.47 LREMV
21/10/2009	S	AP	Huesca	8	147 C
23/10/2009	S	AP	Zaragoza (4)	663	38,47 C,29, 44 LREMV
23/10/2009	S	AP	Huesca	64	62 LDP
28/10/2009	S	AP	Huesca	64	57 LDP
28/10/2009	S	JPI	Huesca (2)	0	31, DAV Ley 2/2009 11-5.
12/11/2009	A	JPI	Huesca (2)	76	217 C
16/11/2009	S	AP	Huesca	8	147 C
17/11/2009	S	AP	Zaragoza (5)	68	83.2 C
18/11/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	68	101,108,117 LREMV
18/11/2009	S	AP	Huesca	8	147 y 148 C
19/11/2009	S	AP	Zaragoza (4)	0	71 bis Ley Caza Aragón
24/11/2009	S	AP	Zaragoza (2)	64	56 LDP
24/11/2009	S	JPI	Ejea (1)	9	71 bis Ley Caza Aragón
25/11/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	8	147 C
30/11/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	8	144.2 C
01/12/2009	S	TSJA	Sala de lo Civil	8	147 C
01/12/2009	S	AP	Zaragoza (2)	73	102 C,73 LS
04/12/2009	S	AP	Zaragoza (4)	8	147 C
17/12/2009	S	AP	Zaragoza (4)	0	71 bis Ley Caza Aragón
21/12/2009	S	AP	Zaragoza (4)	663	55,47,29 C, 80,33 LREMV
23/12/2009	S	AP	Zaragoza (4)	0	71 bis Ley Caza Aragón
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
No consta	S	JPI	Calatayud (2)	8	144, 145 C
04/01/2010	S	TSJ	Zaragoza	665	104 LDP, 56 y 59 Ley 12/2001, 2 de julio
15/01/2010	S	AP	Zaragoza (5)	73	202 LS
19/01/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	65.2 y 81b) LREMV
26/01/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	41 C y 36 LREMV
29/01/2010	A	JPI	Huesca (2)	61	12 y 14 Ley Salud, 8 y 9 Ley autonomia paciente
02/02/2010	S	AP	Teruel	8	144 C
12/02/2010	S	AP	Huesca	0	43.3 Ley Cooperativas A
15/02/2010	S	JPI	Zaragoza (14)	0	1, 9 y 18 Ley 6/1999, de 26 marzo
19/02/2010	S	AP	Zaragoza (4)	663	38 y 40 C
19/02/2010	S	AP	Zaragoza (5)	0	2, 17 a 21 y 36 Ley 2/1998, Cooperativas
23/02/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	62 y 65 LREMV
26/02/2010	S	AP	Zaragoza (5)	9	33, 43 y 71 Ley 5/2002, de Caza
02/03/2010	S	AP	Zaragoza	663	47 C

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
02/03/2010	A	AP	Zaragoza (2)	76	217.4 LS
03/03/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP y 146 CC
10/03/2010	S	AP	Zaragoza (2)	8	147 C
10/03/2010	S	AP	Zaragoza (2)	9	71 bis y 44.4 Ley 5/2002, de Caza
16/03/2010	S	JPI	Zaragoza (14)	663	3 C, 525 CC
17/03/2010	S	AP	Teruel	5	3 C
25/03/2010	S	AP	Huesca	64	7 y 57 LP, 90, 92 a 94 CC, Ley 6/1999, 26 marzo
26/03/2010	S	AP	Huesca	64	7, 57 y 62 LP
26/03/2010	S	JPI	Zaragoza (19)	62	5 y 12 C
30/03/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	LREMV
05/04/2010	S	AP	Zaragoza (5)	8	144 C
06/04/2010	S	AP	Zaragoza (5)	8	144 C, 7 CC
08/04/2010	S	AP	Zaragoza (2)	65	90, 95 y 100 a 102 LP
14/04/2010	S	AP	Huesca	73	70 LS
16/04/2010	A	TSJ	Zaragoza	663	36 LREMV
16/04/2010	A	TSJ	Zaragoza	663	28 d) y f), 30 b) y c) LREMV
21/04/2010	A	AP	Zaragoza (4)	72	80.3 LS
22/04/2010	S	AP	Zaragoza	65	LP, Ley 12/2001 Infancia y Adolescencia, 177.2, 2º CC
22/04/2010	S	AP	Zaragoza (4)	8	144 y 145 C, 594 CC
29/04/2010	S	AP	Zaragoza	663	37.4, 38.1, 40.1 y 47.1 C, Dis. Transitoria 2ª LREMV
30/04/2010	S	JPI	Boltaña	8	147 C, 564 CC
04/05/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	57.1, 61 y 62 C y 146 y 148 CC
04/05/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP y 146 CC
04/05/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP y 90 a 93 CC
11/05/2010	S	AP	Zaragoza (2)	65	102 y 120 LP, 236 CC
11/05/2010	S	AP	Zaragoza (5)	0	7 Ley 6/1999, 26 de marzo
11/05/2010	S	AP	Huesca	663	29 H y 44.5 LREMV
12/05/2010	S	TSJ	Zaragoza	64	66 LP
14/05/2010	S	TSJ	Zaragoza	663	28.2 i) LREMV
14/05/2010	A	TSJ	Zaragoza	663	37 y 38 C y 62, 64 a 66 y 68 LREMV
27/05/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	62.1b) LP, 146 CC
01/06/2010	S	AP	Zaragoza	663	3, 29 y 47 C y 33.2 y 44 LREMV
01/06/2010	A	AP	Zaragoza (2)	65	LP
04/06/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	60 LP, 146 CC
04/06/2010	S	AP	Zaragoza (4)	8	148 C
07/06/2010	S	JPI	Boltaña	8	144 y 147 C, 581, 1902 y 1968.2 CC
08/06/2010	S	AP	Zaragoza (5)	8	348 y 1959 CC
10/06/2010	S	TSJ	Zaragoza	74	28,89,71 y 101 LREMV, 6,133,162 y 163 LS
10/06/2010	A	AP	Zaragoza (4)	663	70 y 72 LREMV, 541 LEC
15/06/2010	A	AP	Zaragoza (2)	64	69 a 78 LP
16/06/2010	S	AP	Teruel	8	144 y 145 C
16/06/2010	A	AP	Zaragoza (2)	65	102 LP, 234 CC
18/06/2010	S	TSJ	Zaragoza	8	147 C, 532 CC
22/06/2010	S	AP	Zaragoza (2)	65	177.2 CC
22/06/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 C, 142 CC
22/06/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	93.2 CC
24/06/2010	S	AP	Huesca	663	31.1 y 35.2 LREMV

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
06/07/2010	A	AP	Zaragoza (2)	64	7 LP
06/07/2010	S	AP	Huesca	73	73 LS, 19 LREMV y 1959 CC
09/07/2010	S	AP	Teruel	8	147 y 148 C
09/07/2010	S	AP	Teruel	8	147 C
09/07/2010	S	JPI	Boltaña	62	35, 101 y ss LP
12/07/2010	A	TSJ	Zaragoza	665	56 y 59 Ley 12/2001, 2 de julio
13/07/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP
20/07/2010	S	AP	Zaragoza (2)	65	35.2 y 102 LP
23/07/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	LP, 90,91 y 100 CC
23/07/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	LP, Ley 12/2001, 90,91 y 100 y 146 CC
23/07/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	LP, Ley 12/2001, 93, 146 y 154 CC
23/07/2010	S	AP	Huesca	64	56 y 77 LP
30/07/2010	S	AP	Huesca	65	95,96,98,101,102,120 y 121 LP
01/09/2010	S	TSJ	Zaragoza	9	71 LCaza
02/09/2010	S	AP	Huesca	9	47.4 y 71bis LCaza
03/09/2010	S	AP	Huesca	61	35.2 y 3 LP
10/09/2010	S	AP	Huesca	8	144 y 145 C
13/09/2010	S	TSJ	Zaragoza	0	2,17 a 21 y 36 Ley 2/1998, Cooperativas
15/09/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	81 LREMV
21/09/2010	S	JPI	Zaragoza (6)	64	Ley 2/2010, 26 de mayo
23/09/2010	S	TSJ	Zaragoza	8	144, 145, 147 y 148 C
30/09/2010	S	JPI	Boltaña	62	35 y 102 LP
04/10/2010	A	TSJ	Zaragoza	665	55, 56, 60, 77 y 79 LDP, 21,26 y 59 Ley 12/2001, 2 de julio
05/10/2010	A	AP	Zaragoza (2)	64	7.1, 62.1c) y 71 LP, 27 Constitución y 21 L.O. 7/1980, libertad religiosa
11/10/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	66 LP
25/10/2010	S	JPI	Boltaña	64	91 CC, Ley 2/2010, 26 mayo
26/10/2010	S	JPI	Zaragoza (9)	74	141 C, 1101 CC
03/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	LP, Ley 12/2001, 90, 91 y 100 CC
03/11/2010	A	AP	Zaragoza (2)	65	LP y Ley 12/2001
03/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	60 LP y 146 CC
03/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	41 y D.T 2ª LREMV
12/11/2010	A	TSJ	Zaragoza	61	35.2 LP
16/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	47 C, 28 y 30 LREMV
16/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	65 LREMV
23/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	21, 56 y 59 LP
24/11/2010	A	TSJ	Zaragoza	9	71 LCaza
30/11/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	DT 2ª Ley 2/2010, 62 LP
03/12/2010	S	TSJ	Zaragoza	663	37 C, 6, 7 y 28 LS, 38 y 40 LH
03/12/2010	S	AP	Zaragoza (4)	73	62, 65 c), 69.2, 71 b), 82 y 83 LS, 3 C
09/12/2010	S	AP	Zaragoza	65	139 y ss LP, 158 y 295CC
09/12/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	66 LP
16/12/2010	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 y ss LP
21/12/2010	S	AP	Zaragoza (2)	663	38 y 39 C
30/12/2010	S	AP	Zaragoza (4)	62	5 y 12 C
No consta	S	JPI	Huesca (2)	9	71.1 y 4 Ley Caza
No consta	S	JPI	Huesca (2)	9	71 y 71 bis Ley Caza
No consta	S	JPI	Fraga	9	71.1 y 4 Ley Caza
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
No consta	A	JPI	Huesca (2)	76	217 LS
03/01/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	Ley 12/2001, 2 julio, LP
03/01/2011	A	AP	Zaragoza (2)	8	144 C
10/01/2011	S	AP	Teruel	8	147 C
11/01/2011	S	AP	Teruel	64	6 Ley 2/2010, 26 mayo
12/01/2011	S	AP	Huesca	64	6.4 Ley 2/2010, 26 mayo
19/01/2011	S	AP	Zaragoza (4)	8	1, 9 y 13 Ley 8/2010, 2 diciembre
19/01/2011	S	AP	Huesca	0	7 Ley 6/1999
27/01/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	74	Apéndice 1925, Compilación 1967, 1940 y ss CC
27/01/2011	S	AP	Huesca	0	20 Ley 22/12/98 Cooperativas
31/01/2011	A	TSJ	Zaragoza	65	LP, Ley 12/2001, 2 julio
31/01/2011	S	AP	Huesca	9	47.4 y 71bis Ley 5/2002, Caza
01/02/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	28.2, 65 y 68a) LREMV
01/02/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	84 LREMV
08/02/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 y ss. LP
10/02/2011	S	JPI	Ejea (1)	64	Ley 2/2010, 26 mayo
22/02/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	60 y 62 LP
23/02/2011	S	AP	Huesca	73	164 a 166 LP, 86b LS
28/02/2011	S	AP	Huesca	8	16,32,33,41 y 42 Ley 8/2010 Dº Patrimonial
01/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	66.1 LP
08/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	6 Ley 2/2010, 26 mayo
08/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	24 LREMV
09/03/2011	S	AP	Teruel	5	3 C
10/03/2011	S	AP	Teruel	8	1.2 y 147 C
21/03/2011	S	JPI	Ejea (1)	65	DT 3ª, 35, 95, 102, 134 y 136 LP
21/03/2011	S	JPI	Ejea (1)	64	6, 7 y 8 Ley 2/2010, 26 mayo
22/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	8	147 C, 32 Ley 8/2010, 2 diciembre
23/03/2011	S	AP	Huesca	9	47.4 y 71bis Ley 5/2002,Caza
29/03/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	0	3,6,7,1261, 1271 y 1391 CC, 32 y 100 LSRL
29/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	62 LP
29/03/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	2 Ley 2/2010, 26 mayo
05/04/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	65	77 y 104 LP, 59 Ley 12/2001, 2 julio, 177.2.2º CC y 283 LEC
12/04/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	5,6 y 62 LIRF
14/04/2011	A	AP	Teruel	8	144 C
19/04/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	57 y 61 y ss LP, 8 LIRF
26/04/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil y Penal	8	75 Ley 15/2006, 28 diciembre, 148 C
27/04/2011	S	AP	Huesca	72	108.3 C
29/04/2011	S	AP	Zaragoza (4)	74	141 y 22 LS
03/05/2011	S	AP	Teruel	64	6 Ley 2/2010, 26 mayo
03/05/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	60 y ss LP
03/05/2011	A	AP	Zaragoza (2)	65	113 y ss LP
03/05/2011	A	AP	Zaragoza (2)	65	LP
05/05/2011	S	AP	Zaragoza (4)	9	550 CDF
10/05/2011	A	AP	Zaragoza (2)	64	3 LP
10/05/2011	S	JPI	Ejea (1)	65	38 y 130 CDF

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
12/05/2011	S	AP	Teruel	0	34 CDF
17/05/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	80.4 y 81.3 CDF
17/05/2011	A	AP	Zaragoza (2)	64	LEC
20/05/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	8	147 C
24/05/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	7.3 LIRF
24/05/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP
25/05/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	65	21, 56 y 59 Ley 12/2001, 2 julio, 749.2 LEC
15/06/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	62	5, 9,12 y 13.2 C
21/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	5 LIRF
21/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	85.2 LREMV
21/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	6, 65, 76, 80 y 82 CDF
21/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LP
21/06/2011	S	AP	Teruel	64	6 Ley 2/2010, 26 mayo
22/06/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	0	20 Ley 9/1998, 22 diciembre
28/06/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil y Penal	72	86.1b) LS
28/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	76.2 y 80.2 CDF
28/06/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	6 LIRF y 80.3 CDF
05/07/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	65 y 82 CDF
05/07/2011	S	AP	Zaragoza (2)	65	35.2 LP
05/07/2011	S	JPI	Ejea (1)	65	35 y 116 LP
12/07/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil y Penal	64	9.4 Ley 2/2010, 26 mayo
13/07/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	6 y 2.2 Ley 2/2010, 26 mayo. 75.2, 76 y 80.2 CFA
20/07/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil	64	LEC
26/07/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	82 CDF
29/07/2011	S	AP	Huesca	663	58 C
29/07/2011	S	AP	Huesca	64	60, 76.2 y 79.2 CFA
22/09/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	72	19, 24, 25,179,195 y 198 LS
27/09/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	65 y 82 CDF
30/09/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	6.2 Ley 2/2010,26 mayo y 76.2 y 80.2 CFA
30/09/2011	S	AP	Zaragoza (2)	8	144 y 145 C, 545 a 550 CDF
30/09/2011	S	AP	Huesca	64	67 CFA
04/10/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	37 y 48 C
05/10/2011	S	AP	Huesca	64	69 CFA
10/10/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil y Penal	64	6 y 8 Ley 2/2010, 26 mayo, 80 y 82 CFA
13/10/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	7 LIRF
13/10/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	2.2 y 6 LIRF, 79 y ss. CDF
14/10/2011	S	AP	Zaragoza (4)	8	Compilación y CC
14/10/2011	S	JPI	Ejea (1)	8	552, 556 a 558, 568, 569 y 580 CDF
02/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	LIRF, 80 CDF
08/11/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil	661	9 Ley 2/2010, 26 mayo
08/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	65.2 LREMV, 37.4 Y 247 CDF
08/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	65	121 CDF
11/11/2011	S	JPI	Zaragoza (14)	8	538 CDF
15/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	210, 217, 247, 250 CDF, 37 Y 47 C
16/11/2011	S	AP	Zaragoza (5)	74	129,133 y 202 LS
17/11/2011	S	AP	Teruel	8	147 C
22/11/2011	S	JPI	Zaragoza (14)	72	69 y 80 LS (384 y 395.3 CDF)

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
22/11/2011	S	JPI	Ejea (1)	65	38, 115,116 y 130 CDF
29/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	68 LIRF, 82 CDF
29/11/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	79 y ss CDF
30/11/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	66 LP
30/11/2011	S	AP	Teruel	75	171 LS y 486 CDF
02/12/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	76.2 CDF
02/12/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	65, 80, 82 y 83 CDF
07/12/2011	S	AP	Teruel	8	144.3 C y 550 CDF
12/12/2011	A	AP	Zaragoza (2)	64	82 CDF
14/12/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	8	147 C, 577.1 CFA
15/12/2011	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	79.5 y 80.2,3 y 5 CFA
15/12/2011	A	TSJ	Sala de lo Civil y Penal	5	3 C
16/12/2011	A	AP	Zaragoza (4)	663	26 y 36 C
20/12/2011	S	AP	Zaragoza (2)	663	37, 38 y 40 C, 35 LREMV y 217 CDF
20/12/2011	S	AP	Zaragoza (2)	64	69, 77 y 82 CDF
21/12/2011	S	JPI	Ejea (1)	64	CDF
27/12/2011	A	AP	Zaragoza (2)	64	74 CDF
30/12/2011	S	AP	Zaragoza (4)	663	29 C
30/12/2011	S	AP	Zaragoza (5)	8	147 y 148 C
11/01/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	83 CDFA
11/01/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	82 CDFA
17/01/2012	S	AP	Zaragoza	64	80.6 CDFA
17/01/2012	S	JPI	Zaragoza	663	210.2b) CDFA
23/01/2012	S	JPI	Ejea	64	80 Y 82 CDFA
23/01/2012	S	JPI	Ejea	64	80 y 82 CDFA
24/01/2012	S	AP	Huesca	64	6, 80.6, 81.2, 82 y D.A. 4ª CDFA
31/01/2012	S	AP	Huesca	65	759 LEC
01/02/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
01/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	65, 81.2 y 3 y 82 CDFA
01/02/2012	S	AP	Zaragoza	65	38.2 CDFA
07/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	83.3 CDFA
07/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	76.2 y 80.1a) CDFA
07/02/2012	A	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
07/02/2012	S	JPI	Calatayud	64	79.5 y 80.2 CDFA
08/02/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
09/02/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
14/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
14/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	80.1 a), d) y e) CDFA
20/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	65 y 82 CDFA
21/02/2012	S	AP	Zaragoza	65	116.2 CDFA
21/02/2012	S	AP	Zaragoza	663	262 CDFA
28/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
28/02/2012	S	AP	Zaragoza	64	75.2, 76, 80.2, 82 y 83 CDFA
29/02/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	663	76,79,80 y 87 LREMV
29/02/2012	S	AP	Huesca	64	81.3 y 4 CDFA
06/03/2012	S	AP	Zaragoza	71	7, 28, 39 y 163 LS
06/03/2012	S	JPI	Ejea	65	38, 115, 116 y 130 CDFA
06/03/2012	S	JPI	Ejea	65	38, 42 a 44, 116 y 134 CDFA
07/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
13/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80 y 82 CDFA
13/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80.2 CDFA
13/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80 y 82 CDFA
20/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
20/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
20/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
21/03/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	69 y 82 CDFA
27/03/2012	S	AP	Zaragoza	663	1061 CC
27/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	80.6 CDFA
30/03/2012	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
09/04/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
11/04/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	83 CDFA
11/04/2012	S	AP	Zaragoza	64	111 CC y 767.4 LEC
11/04/2012	S	AP	Zaragoza	663	81.4 CDFA
12/04/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 y 82 CDFA
13/04/2012	S	AP	Zaragoza	0	20, 55, 84.5 y Disp.Final 1ª Ley 9/1998 Coop
16/04/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	69 CDFA
25/04/2012	S	AP	Zaragoza	64	79.5 y 83 CDFA
26/04/2012	S	JPI	Ejea	71	27.2 y 148 y ss CDFA
27/04/2012	S	AP	Huesca	64	69 CDFA
02/05/2012	S	AP	Zaragoza	64	79.5 CDFA
09/05/2012	S	AP	Zaragoza	65	760 LEC
17/05/2012	S	JPI	Calatayud	64	69 CDFA
22/05/2012	S	AP	Zaragoza	64	81.3 CDFA
24/05/2012	S	AP	Huesca	663	247 CDFA
24/05/2012	S	JPI	Ejea	64	6, 64 y 76 CDFA
30/05/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	74	343 y 448 CDFA
31/05/2012	S	AP	Huesca	64	80.2 y 81.3 CDFA
31/05/2012	S	AP	Huesca	65	218 CC
05/06/2012	A	AP	Zaragoza	64	10 d) CDFA
06/06/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	76.2 y 80 CDFA
08/06/2012	S	AP	Huesca	64	81.1 y 82 CDFA
12/06/2012	S	JPI	Calatayud	5	3 y 270 CDFA
15/06/2012	S	JPI	Calatayud	64	76, 80 y 81 CDFA
19/06/2012	S	AP	Zaragoza	663	218.1b) y 223 CDFA
26/06/2012	A	AP	Zaragoza	64	76 CDFA
26/06/2012	S	AP	Huesca	64	82 y 83 CDFA
04/07/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	69 CDFA
04/07/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	82 CDFA y D.F.16ªLEC
05/07/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
10/07/2012	A	AP	Zaragoza	65	165 y 168 CDFA
11/07/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	8	568 CDFA
12/07/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	62 y D.F.16ª LEC
12/07/2012	S	JPI	Ejea	64	82 y 83 CDFA
13/07/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	77, 79, 81 a 83 CDFA
13/07/2012	A	AP	Zaragoza	76	204.2, 211, 217.4 y 218 LS
19/07/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	80.2 CDFA

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
20/07/2012	S	AP	Zaragoza	72	5.2, 80, 101, 102 LS
24/07/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	76.2b y 80 CDFA
26/07/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	80.2 y 80.3 CDFA
26/07/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	79.5 y 82 CDFA
27/07/2012	S	AP	Huesca	64	81 CDFA
07/09/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	80.2 y 81.3 CDFA
10/09/2012	S	JPI	Calatayud	8	545, 549, 561, 580 y 1.2, CDFA, 586 CC
18/09/2012	S	AP	Zaragoza	64	65 y 82 CDFA
18/09/2012	S	AP	Zaragoza	65	175 a 180 CC
21/09/2012	S	AP	Zaragoza	8	146 y 147 C
24/09/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
25/09/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
28/09/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	60, 75.2, 79.2a y 80 CDFA
04/10/2012	S	JPI	Zaragoza	663	210, 211, 324, 342 y 517 y ss CDFA
05/10/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	9	149 C, 34 LREMV y 212 LS
11/10/2012	S	AP	Zaragoza	64	83 CDFA
16/10/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	59, 60 y 82.1 y 2 CDFA
19/10/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	6, 20 y 80.2 CDFA
24/10/2012	S	JPI	Zaragoza	72	405, 416 Y 467 CDFA
24/10/2012	A	TSJ	Sala de lo Civil	64	81.1, 82.4 y 83.1 CDFA
26/10/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
29/10/2012	A	TSJ	Sala de lo Civil	5	3 CDFA
07/11/2012	S	AP	Zaragoza	65	170 y 172 CC
08/11/2012	S	JPI	Zaragoza	72	318, 405.2 y 416 CDFA
19/11/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	Ley 4/2005, de 14 junio
20/11/2012	S	JPI	Ejea	64	80 a 83 CDFA
22/11/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	663	267 Y 270 CDFA
22/11/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2, 76.3 y 81 CDFA
22/11/2012	A	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
27/11/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
27/11/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	Ley 4/2005, de 14 junio
29/11/2012	S	JPI	Calatayud	64	65.1b), 76 y 80.2 CDFA
29/11/2012	S	JPI	Ejea	8	577 y ss. CDFA
03/12/2012	S	JPI	Calatayud	64	79.5 y 80.2 CDFA
04/12/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	65	118.2 CDFA
04/12/2012	S	JPI	Calatayud	65	15, 116 y 136 CDFA, 271 CC
04/12/2012	S	JPI	Ejea	8	538, 550 y 571 CDFA
04/12/2012	A	JPI	Ejea	8	542 CDFA
12/12/2012	A	AP	Zaragoza	64	79.3 CDFA
17/12/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	76 y 80 CDFA
18/12/2012	S	AP	Zaragoza	64	76.2 y 80 CDFA
19/12/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
19/12/2012	A	TSJ	Sala de lo Civil	65	LEC
20/12/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	79.5 y 82 CDFA
21/12/2012	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
21/12/2012	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	76.2 y 82 CDFA
04/01/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80, 81.3 y 83.1 CDFA
16/01/2013	A	AP	Zaragoza	663	218.1e) y 219.1a) CDFA
18/01/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
18/01/2013	S	JPI	Ejea	64	6, 76.2, 77.3, 80.2c) y 80.4 CDFA
22/01/2013	S	AP	Zaragoza	64	65, 79.5, 80 y 82 CDFA
22/01/2013	S	AP	Teruel	64	80 CDFA
30/01/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	82 CDFA
05/02/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	69 y 82 CDFA
06/02/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	8	568,570 y 571.1c CDFA
07/02/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	81.2 y 3 CDFA
07/02/2013	S	AP	Teruel	8	566, 568 y 570 CDFA
12/02/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
12/02/2013	S	AP	Zaragoza	64	80.2 y 81 CDFA
12/02/2013	S	JPI	Ejea	61	38 y 116 CDFA
15/02/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	663	226 y 265.2 CDFA
18/02/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	72	395.3 y 416 CDFA
19/02/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	8	545.1 y 547.2 CDFA
19/02/2013	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
19/02/2013	S	AP	Teruel	64	80 CDFA
21/02/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	8	568 CDFA
26/02/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	662	23 CA y 1478 CC
26/02/2013	S	AP	Teruel	64	60 CDFA
27/02/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 y 82 CDFA
28/02/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	65	63 y ss. y 90 CDFA
05/03/2013	S	AP	Teruel	8	541 y 566 CDFA
06/03/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	8	561 y 566 CDFA
11/03/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	76.2 y 80 CDFA
12/03/2013	S	AP	Teruel	72	675 CC
13/03/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	Disp.Trans. 6ª Ley 2/2010, 26 mayo y 79.5 CDFA
14/03/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	LEC
19/03/2013	S	JPI	Ejea	61	38, 130 y 141 CDFA
22/03/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	LEC
25/03/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
26/03/2013	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
27/03/2013	S	AP	Zaragoza	72	467 Y 355 CDFA
04/04/2013	S	AP	Zaragoza	72	105,109, 113 y 164 LS
05/04/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
12/04/2013	S	AP	Teruel	8	538 y 550 CDFA
15/04/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
16/04/2013	S	JPI	Zaragoza	9	353 CDFA
26/04/2013	S	JPI	Ejea	64	75.2, 80 y 81 CDFA

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
29/04/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
30/04/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 y 81.3 CDFA
30/04/2013	S	AP	Zaragoza	64	65 y 82 CDFA
06/05/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	80 y 81.3 CDFA
13/05/2013	S	JPI	Zaragoza	9	322.1 y 346.2 CDFA
20/05/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	79.5 y 82.1 CDFA
20/05/2013	S	AP	Teruel	64	81.2 CDFA
04/06/2013	S	AP	Zaragoza	64	65 y 80.2 y 3 CDFA
06/06/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	80 y 82 CDFA
18/06/2013	A	AP	Zaragoza	64	23 y ss CDFA
24/06/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	8	566 y 576 CDFA
25/06/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	83.2 CDFA
26/06/2013	S	AP	Teruel	8	438 y 446 CC
01/07/2013	S	TSJ	Sala Civil y Penal	64	76 y 81 a 83 CDFA
02/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.6 y 82 CDFA
03/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	68	1.2, 283, 285, 299 y 301 CDFA
02/07/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	90 CDFA
04/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 y 82.1 y 2 CDFA
10/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
10/07/2013	S	JPI	Ejea	61	38 y 116 CDFA
11/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	81.1, 3 Y 4 CDFA
12/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
16/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
16/07/2013	S	AP	Teruel	8	568 CDFA
16/07/2013	A	AP	Zaragoza	64	74 CDFA
17/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
18/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
23/07/2013	S	AP	Zaragoza	64	65, 80, 81.2 y 82 CDFA
23/07/2013	S	AP	Zaragoza	64	79.5 y 82 CDFA
23/07/2013	S	AP	Zaragoza	64	79.5 y 82 CDFA
23/07/2013	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
23/07/2013	A	AP	Zaragoza	64	74.1 CDFA
24/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	60 CDFA
25/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
26/07/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	65	118 CDFA y 59 Ley 12/2001
04/09/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 y 3
10/09/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	80 CDFA
12/09/2013	S	AP	Zaragoza	662	209 Y 226.1 CDFA
12/09/2013	A	JPI	Zaragoza (13)	76	516, 517, 526, 531 y 532 CDFA
13/09/2013	S	AP	Zaragoza	8	538 Y 539.4 CDFA
24/09/2013	S	AP	Zaragoza	663	217 LEC
24/09/2013	A	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
27/09/2013	S	JP	Zaragoza	64	81 CDFA
30/09/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
30/09/2013	A	JPI	Zaragoza (13)	61	36 CDFA
03/10/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
08/10/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
09/10/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
11/10/2013	S	AP	Teruel	663	83, 228, 232 Y 241 CDFA
14/10/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
14/10/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	80.2 CDFA
23/10/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	82.2 CDFA
30/10/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
05/11/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	71	265 y 267 CDFA
06/11/2013	A	JPI	Zaragoza (13)	72	395.3 y 419.3 CDFA
13/11/2013	A	JPI	Zaragoza (13)	62	36 CDFA
15/11/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
15/11/2013	S	JPI	Ejea	663	251.1 y 263 b) CDFA
18/11/2013	S	AP	Teruel	64	83.5 CDFA
22/11/2013	S	AP	Zaragoza	8	545 y 547.2 CDFA
22/11/2013	S	AP	Teruel	64	76.2, 80.3 y 6 CDFA
26/11/2013	S	AP	Zaragoza	64	81 y 83 CDFA
26/11/2013	A	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
27/11/2013	S	AP	Zaragoza	64	12.6 CC y 82 CDFA
27/11/2013	S	AP	Teruel	8	537, 545, 550 y 576 CDFA
05/12/2013	A	TSJ	Sala Civil y Penal	64	80.2 CDFA
18/12/2013	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
08/01/2014	S	JPI	Ejea	64	10 y 79 CDFA
10/01/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	76.2 y 80.2 y 4 CDFA
14/01/2014	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
14/01/2014	S	AP	Zaragoza	64	74 CDFA
14/01/2014	A	AP	Zaragoza	64	82.4 CDFA
21/01/2014	S	AP	Zaragoza	64	80 Y 82 CDFA
22/01/2014	S	JPI	Teruel	8	571 CDFA
21/01/2014	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
27/01/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
28/01/2014	S	AP	Zaragoza	65	102, 118 y 122 CDFA
28/01/2014	S	AP	Zaragoza	64	81 y 82 CDFA
05/02/2014	S	AP	Zaragoza	65	90, 118 y 119 CDFA
05/02/2014	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
07/02/2014	S	JPI	Barbastro	8	542 y 550 CDFA
11/02/2014	S	AP	Zaragoza	65	102, 118 Y 122 CDFA
11/02/2014	A	AP	Zaragoza	64	LEC
12/02/2014	S	JPI	Ejea	62	30.2 CDFA
14/02/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
14/02/2014	S	JPI	Zaragoza	72	109.2, 111 y 112 LS
17/02/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	75.2, 80.2 y 80.4 CDFA
24/02/2014	A	JPI	Zaragoza	72	LEC
25/02/2014	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
25/02/2014	S	AP	Zaragoza	64	65 y 82 CDFA
25/02/2014	S	AP	Teruel	64	83 CDFA
28/02/2014	A	TSJ	Sala Civil y	0	LEC

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
			Penal		
03/03/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
04/03/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	76.3 b),80.2 y 3 CDFA
05/03/2014	S	AP	Teruel	64	80 CDFA
10/03/2014	S	AP	Zaragoza	9	299 CDFA
10/03/2014	A	AP	Zaragoza	9	LEC
12/03/2014	S	AP	Zaragoza	64	79.5, 80 Y 82 CDFA
13/03/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
13/03/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
14/03/2014	A	AP	Zaragoza	72	178.2 y 183 LS, 20 LP
14/03/2014	S	AP	Teruel	9	594 CDFA
17/03/2014	A	JPI	Zaragoza	663	219.3 CDFA
18/03/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
18/03/2014	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
18/03/2014	A	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
21/03/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
24/03/2014	S	JPI	Ejea	64	58, 69 y 82 CDFA
25/03/2014	S	AP	Teruel	64	80 CDFA
28/03/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	69 CDFA
08/04/2014	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
15/04/2014	A	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
25/04/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
25/04/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	5	3 CDFA
25/04/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	83 CDFA
25/04/2014	S	AP	Zaragoza	65	106 CDFA
05/05/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
07/05/2014	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
09/05/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	82.1 CDFA
12/05/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
13/05/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	9	537 CDFA
13/05/2014	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
13/05/2014	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
13/05/2014	S	AP	Teruel	8	571 CDFA
14/05/2014	S	JPI	Ejea	65	38 y 130 CDFA
15/05/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.2 CDFA
15/05/2014	S	AP	Zaragoza	663	226 CDFA
16/05/2014	S	AP	Zaragoza	8	543 CDFA
16/05/2014	A	JPI	Zaragoza	71	348 CDFA
17/05/2014	A	JPI	Zaragoza	71	348 CDFA
20/05/2014	S	AP	Teruel	64	80 CDFA
23/05/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	79.5 CDFA
27/05/2014	S	AP	Zaragoza	75	493 CDFA

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
27/05/2014	S	JPI	Ejea	8	571 CDFA
02/06/2014	S	JPI	Ejea	8	542 CDFA
06/06/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	81 CDFA
06/06/2014	S	JPI	Ejea	64	80 CDFA
10/06/2014	S	JPI	Ejea	65	90 y 93.3 CDFA
11/06/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	81 a 83 CDFA
24/06/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80.6 CDFA
27/06/2014	A	TSJ	Sala de lo Civil	64	82 CDFA
30/06/2014	S	AP	Zaragoza	64	81 CDFA
30/06/2014	S	AP	Zaragoza	8	545 Y 550 CDFA
02/07/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	75.2, 76.3 y 79.2ª CDFA
03/07/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
08/07/2014	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
15/07/2014	S	AP	Zaragoza	65	LEC
15/07/2014	S	JPI	Ejea	64	82 CDFA
18/07/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	81.1 y 3 CDFA
22/07/2014	S	AP	Zaragoza	64	80 y 82 CDFA
22/07/2014	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
12/09/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
15/09/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	9	594.4 b) CDFA
16/09/2014	S	AP	Zaragoza	64	6, 76.4 y 81.2 CDFA
16/09/2014	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
22/09/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
29/07/2014	S	AP	Zaragoza	663	210, 217 a 220 y 226 CDFA
30/09/2014	S	AP	Zaragoza	8	560 y 572.2 CDFA
30/09/2014	S	AP	Zaragoza	64	83 CDFA
03/10/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
03/10/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
09/10/2014	S	JPI	Calatayud	75	171 LS
09/10/2014	S	JPI	Calatayud	65	38, 116 y 136 CDFA
09/10/2014	S	AP	Teruel	64	69 CDFA
15/10/2014	S	AP	Teruel	64	81 CDFA
20/10/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
20/10/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
20/10/2014	S	AP	Zaragoza	71	Compilación
20/10/2014	S	JPI	Calatayud	64	79.5 y 82 CDFA
21/10/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	79.5, 81.3 y 82 CDFA
22/10/2014	S	AP	Zaragoza	64	83 CDFA
22/10/2014	S	AP	Zaragoza	64	83.4 y 5 CDFA
27/10/2014	S	JPI	Calatayud	64	69 CDFA
04/11/2014	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
05/11/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	83 CDFA
05/11/2014	S	AP	Teruel	64	80 CDFA

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
06/11/2014	A	TSJ	Sala de lo Civil	0	LEC
06/11/2014	A	TSJ	Sala de lo Civil	0	LEC
07/11/2014	A	AP	Zaragoza	663	261 CDFA
11/11/2014	S	AP	Zaragoza	65	116 CDFA
17/11/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	8	571 CDFA
18/11/2014	S	AP	Teruel	64	80 CDFA
19/11/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	80 CDFA
20/11/2014	S	AP	Zaragoza	8	581 CDFA
25/11/2014	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
26/11/2014	S	AP	Zaragoza	72	423 y ss CDFA
02/12/2014	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
03/12/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
10/12/2014	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
11/12/2014	S	JPI	Calatayud	8	545, 548, 550, 574, 569 CDFA
12/12/2014	A	TSJ	Sala Civil y Penal	0	LEC
15/12/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	76.3a, 79.2a y 80.1 CDFA
16/12/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	0	48, 49 y 55 Ley 9/98 Cooperativas
17/12/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	82 CDFA
17/12/2014	S	AP	Zaragoza	72	423.2 CDFA
19/12/2014	S	AP	Zaragoza	64	76.4 y 6 y 80 CDFA
19/02/2014	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
22/12/2014	S	TSJ	Sala de lo Civil	64	82 y 83 CDFA
14/01/2015	S	TSJ	Zaragoza	663	56 Y 58 Compilación
15/01/2015	S	TSJ	Zaragoza	0	53 L9/98 Cooperativas
19/01/2015	S	TSJ	Zaragoza	75	489 y 495 CDFA
23/01/2015	S	AP	Zaragoza (5ª)	9	218 y 230 c) CDFA
23/01/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	10, 58, 79 y 82 CDFA
23/01/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	58,79, 80.6, 81 y 82 CDFA
27/01/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	80 CDFA
28/01/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	82 CDFA
03/02/2015	S	JPI	Zaragoza	0	283 y ss CDFA y LPH
04/02/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	81.3 CDFA
06/02/2015	S	AP	Zaragoza (5ª)	9	CC
06/02/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	58, 79 y 82 CDFA
06/02/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	77, 79 CDFA
12/02/2015	A	TSJ	Zaragoza	64	83.2 y 4
17/02/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	81.3 CDFA
23/02/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	77 Y 81 CDFA
23/02/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	69 CDFA
24/02/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	74 CDFA
03/03/2015	S	TSJ	Zaragoza	71	226.3a) y 528 CDFA
03/03/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	79.5 CDFA
03/03/2015	S	AP	Teruel	64	69 y 77 CDFA
04/03/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
04/03/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
09/03/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
17/03/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	82 CDFA
24/03/2015	S	AP	Teruel	65	125 y 127 CDFA

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
31/03/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	83 CDFA
31/03/2015	S	AP	Teruel	64	81 CDFA
06/04/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
16/04/2015	S	JPI	Ejea (1)	64	77.3 CDFA
24/03/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	79.5 y 82 CDFA
29/04/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	82 CDFA
29/04/2015	S	AP	Teruel	65	16 Y 18 CDFA
08/05/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	76.3a) y 80.1 CDFA
08/05/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
12/05/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	80 CDFA
18/05/2015	S	JPI	Ejea (1)	64	77.3 CDFA
21/05/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	77 y 85 CDFA
27/05/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
28/05/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
28/05/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
29/05/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
29/05/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
01/06/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
03/06/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
05/06/2015	S	JPI	Zaragoza	71	395, 416, 419, 517 y 519 CDFA
09/06/2015	S	JV	Zaragoza	64	77 y 247 CDFA
16/06/2015	S	AP	Teruel	64	77 y 80 CDFA
22/06/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
23/06/2015	S	JPI	Ejea (1)	64	90 CDFA
24/06/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
24/06/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	58, 78 y 82 CDFA
26/06/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
29/06/2015	S	TSJ	Zaragoza	61	83 CDFA y 97 CC
30/06/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80 CDFA
30/06/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	80 CDFA
01/07/2015	S	AP	Teruel	72	424 y 486 CDFA
02/07/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
03/07/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
07/07/2015	S	JPI	Ejea (1)	64	80 y 82 CDFA
17/07/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	65	CC
29/07/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.1 CDFA
31/07/2015	S	AP	Zaragoza	71	355, 357, 369, 372 y 655 CDFA
02/09/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
04/09/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
10/09/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
15/09/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	79.5 CDFA
15/09/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	77 y 247 CDFA
17/09/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
21/09/2015	S	AP	Zaragoza (5ª)	71	CC
23/09/2015	S	JPI	Ejea (1)	64	77.3 CDFA
01/10/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	82 CDFA
02/10/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80 y 81.3 CDFA
05/10/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
06/10/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	80 y 82 CDFA
07/10/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
06/10/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
07/10/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
08/10/2015	S	TSJ	Zaragoza	61	83 CDFA y 97 CC
08/10/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
08/10/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
09/10/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
14/10/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	79.5, 80 y 81 CDFA
14/10/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	65	34 y 130 y ss CDFA
15/10/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
16/10/2015	S	TSJ	Zaragoza	61	81 CDFA y 96 CC, 83 CDFA y 97 CC
14/10/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
15/10/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
16/10/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
16/10/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
16/10/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	10, 79, 82 CDFA
04/11/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	79.5 CDFA
04/11/2015	S	AP	Teruel	8	577 a 580 CDFA
17/11/2015	A	AP	Zaragoza (4ª)	76	535 CDFA
19/10/2015	S	AP	Teruel	64	79.5 y 80 CDFA
02/12/2015	S	TSJ	Zaragoza	8	310 CDFA
03/12/2015	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
10/12/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	83 CDFA
11/12/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	77 CDFA
15/12/2015	S	JV	Zaragoza (1)	64	79 CDFA
16/12/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2
16/12/2015	S	AP	Zaragoza (2ª)	64	79.5 CDFA
16/12/2015	S	JPI	Ejea (1)	64	80, 81 y 82 CDFA
17/12/2015	S	JPI	Ejea (1)	71	CC
18/12/2015	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2
30/12/2015	S	TSJ	Zaragoza	8	47 Ley Montes
13/01/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	5.4, 60.3, 65.2 y 80.2 CDFA
19/01/2016	S	AP	Zaragoza	64	LEC
19/01/2016	S	AP	Zaragoza	64	Constitución
19/01/2016	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
19/01/2016	S	AP	Zaragoza	64	69 y 82 CDFA
20/01/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	81.3 CDFA
25/01/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
03/02/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
08/02/2016	S	AP	Zaragoza	72	405,406,416,419,421,423 y 495 CDFA
10/02/2016	S	TSJ	Zaragoza	9	589 CDFA
11/02/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	80 y 82 CDFA
15/02/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
17/02/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	79.5 y 80 CDFA
19/02/2016	S	TSJ	Zaragoza	0	42 Ley Cooperativas Aragón
19/02/2016	S	JPI	Ejea	64	80 y 82 CDFA
23/02/2016	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
24/02/2016	S	AP	Teruel	64	60 CDFA
24/02/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
25/02/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
01/03/2016	S	AP	Zaragoza	64	79.5 CDFA

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
01/03/2016	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
01/03/2016	S	AP	Zaragoza	64	79 a 82 CDFA
01/03/2016	S	AP	Teruel	64	75,76,80, 82 Y 310 CDFA
02/03/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	69, 77.3 y 82 CDFA
08/03/2016	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
15/03/2016	S	AP	Zaragoza	64	80 y 82 CDFA
16/03/2016	S	AP	Zaragoza	72	292 CDFA
18/03/2016	S	JPI	Ejea (1)	64	79 a 83 CDFA
18/03/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
31/03/2016	S	AP	Zaragoza	8	7 LPH
06/04/2016	S	AP	Teruel	64	79.5 CDFA
11/04/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
12/04/2016	S	AP	Zaragoza	61	83 CDFA
12/04/2016	S	AP	Teruel	64	80.4 CDFA
22/04/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
26/04/2016	S	AP	Zaragoza	64	81 CDFA
26/04/2016	S	AP	Zaragoza	65	34, 38 y 116 CDFA
04/05/2016	S	AP	Zaragoza	64	82 CDFA
09/05/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
18/05/2016	S	AP	Zaragoza	75	497, 498, 501 y 502 CDFA
03/06/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
06/06/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
09/06/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	79.5 y 80.2 CDFA
09/06/2016	S	JPI	Zaragoza	663	210 y ss. CDFA
10/06/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	80.1 y 2, 83 y 310 CDFA
10/06/2016	S	JPI	Ejea	64	80 a 82 CDFA
10/06/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
16/06/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
27/06/2016	S	TSJ	Zaragoza	61	83.2 CDFA
30/06/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
30/06/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
05/07/2016	S	AP	Zaragoza	64	80 y 89 CDFA
06/07/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
07/07/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
08/07/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
08/07/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
12/07/2016	S	AP	Zaragoza	65	CDFA
19/07/2016	S	AP	Zaragoza	64	83 CDFA
19/07/2016	S	AP	Teruel	64	80 CDFA
22/07/2016	S	AP	Zaragoza	64	80 CDFA
29/07/2016	S	AP	Zaragoza	64	76 y 80.2 CDFA
06/09/2016	S	AP	Teruel	61	83.2 CDFA
07/09/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	79.5 y 80.2 CDFA
08/09/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
14/09/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	79.5 y 80 CDFA
15/09/2016	S	TSJ	Zaragoza	0	1.2 y 581 CDFA
15/09/2016	S	AP	Teruel	8	528 CDFA
15/09/2016	S	AP	Teruel	64	76.3 CDFA
15/09/2016	S	JPI	Zaragoza	72	395 y 419.3 CDFA
20/09/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC

FECHA	R	TRIB.	LOCALIDAD	CLAVE	ARTÍCULO
21/09/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
22/09/2016	S	AP	Teruel	64	80.2 CDFA
23/09/2016	S	JPI	Ejea	64	69, 70 y 77.3 CDFA
30/09/2016	S	AP	Teruel	61	83.4 CDFA
14/10/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	82.2 CDFA
14/10/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	81.3 CDFA
26/10/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
27/10/2016	S	AP	Teruel	663	269 CDFA
28/10/2016	S	JPI	Ejea	64	80 CDFA
28/10/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
28/10/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
03/11/2016	S	AP	Teruel	64	83.5 CDFA
07/11/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
09/11/2016	S	AP	Zaragoza	72	CC
09/11/2016	S	AP	Teruel	64	80 CDFA
09/11/2016	S	AP	Teruel	64	79.5 CDFA
11/11/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
16/11/2016	S	TSJ	Zaragoza	8	561 c) y 566 CDFA
16/11/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
21/11/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
22/11/2016	S	AP	Zaragoza	64	63 y ss CDFA
22/11/2016	S	JPI	Ejea	64	80 a 83 CDFA
23/11/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
25/11/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
01/12/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	79.2 y 5 y 80.1 y 2 CDFA
02/12/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	80.2 CDFA
02712/2016	S	AP	Zaragoza	64	69 CDFA
12/12/2016	A	TSJ	Zaragoza	0	LEC
14/12/2016	S	AP	Teruel	64	83 CDFA
14/12/2016	S	AP	Teruel	64	79.5 y 80 CDFA
14/12/2016	S	AP	Teruel	72	486 y 489 CDFA
19/12/2016	S	AP	Teruel	64	80 CDFA
21/12/2016	S	TSJ	Zaragoza	64	60 y 76.3 CDFA
21/12/2016	S	TSJ	Zaragoza	0	LEC
23/12/2016	S	AP	Zaragoza	65	116 y 134 CDFA
23/12/2016	S	AP	Zaragoza	64	80.6 CDFA

b') Listado por materias

5. Fuentes. Costumbre. Standum est chartae. Código Civil.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	20/06/1990	AP	Teruel	standum est chartae
S	18/12/1990	TSJ	Zaragoza	fuentes.standum est chartae.
S	18/01/1991	AP	Zaragoza (4)	vecindad civil. Dº interregional
S	18/06/1991	AP	Teruel	standum est chartae.
S	04/11/1991	JPI	Teruel (1)	standum est chartae
S	31/12/1991	AP	Teruel	standum est chartae
S	10/02/1992	AP	Teruel	standum est chartae
S	21/01/1992	AP	Teruel	standum est chartae
S	09/03/1992	AP	Teruel	standum est chartae
S	10/03/1992	AP	Huesca	standum est chartae
S	18/03/1992	AP	Teruel	standum est chartae
S	24/03/1992	TS	Madrid	título nobiliario aragonés
S	05/05/1992	AP	Teruel	standum est chartae
S	15/05/1992	AP	Zaragoza (5)	costumbre, medianería
S	11/06/1992	AP	Teruel	fuentes, Código Civil.
S	18/06/1992	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
A	03/07/1992	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	11/07/1992	AP	Huesca	usos locales,aparcería mixta
S	12/09/1992	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	29/09/1992	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	21/01/1993	AP	Teruel	standum est chartae
S	02/06/1993	AP	Huesca	standum est chartae
S	22/06/1993	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	30/07/1993	JPI	Boltaña	costumbre, Junta de Parientes
S	01/09/1993	AP	Huesca	costumbre, standum est chartae
S	03/09/1993	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	11/09/1993	AP	Teruel	C. Civil, standum est chartae
S	21/02/1994	JPI	Huesca (2)	costumbre
S	04/05/1994	JPI	Fraga	dación personal
S	28/06/1994	JPI	Ejea (2)	standum est chartae
S	11/07/1994	TSJ	Zaragoza	fuentes
S	31/12/1994	JPI	Teruel (2)	standum est chartae
S	18/02/1995	TS	Madrid	fuentes
S	20/02/1995	AP	Huesca	fuentes
S	22/02/1995	AP	Huesca	costumbre
S	27/02/1995	AP	Huesca	fuentes
S	09/03/1995	AP	Huesca	costumbre
S	10/03/1995	JPI	Zaragoza (3)	fuentes
S	18/05/1995	JPI	Teruel (1)	standum est chartae
S	13/06/1995	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	15/06/1995	AP	Teruel	fuentes
S	23/06/1995	AP	Teruel	fuentes
S	05/07/1995	TSJ	Zaragoza	standum est chartae

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	10/07/1995	AP	Huesca	fuentes
S	16/10/1995	AP	Teruel	fuentes
S	15/11/1995	JPI	Teruel (1)	standum est chartae
S	23/11/1995	AP	Teruel	fuentes
S	18/01/1996	JPI	Zaragoza (13)	standum est chartae
S	07/02/1996	AP	Zaragoza (5)	standum est chartae
S	28/02/1996	JPI	Huesca (2)	standum est chartae
S	05/03/1996	AP	Huesca	libertad de forma, excepciones
S	08/04/1997	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	14/06/1997	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	16/06/1997	AP	Huesca	fuentes, Código Civil
A	19/11/1997	TSJ	Zaragoza	fuentes, standum est chartae
S	20/04/1998	AP	Huesca	standum est chartae
S	05/10/1998	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	27/10/1998	AP	Huesca	fuentes, Código Civil
S	28/12/1998	JPI	Jaca (2)	fuentes, Código Civil
S	22/12/1998	JPI	Jaca (2)	fuentes, Código Civil, standum
S	11/12/1998	JPI	Zaragoza (2)	standum est chartae
S	28/12/1998	AP	Teruel	fuentes, Código Civil
S	13/01/1999	AP	Teruel	standum est chartae
S	28/01/1999	AP	Huesca	standum est chartae
S	13/12/1999	AP	Teruel	standum est chartae
S	13/09/1999	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	29/05/2000	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	07/02/2000	AP	Teruel	standum est chartae
S	24/04/2000	AP	Teruel	standum est chartae
S	30/10/2000	AP	Teruel	standum est chartae
S	06/10/2000	TSJ	Zaragoza	fuentes, Código Civil
S	19/06/2001	AP	Teruel	standum est chartae
S	26/02/2001	AP	Zaragoza (2)	standum est chartae
S	14/07/2001	AP	Teruel	standum est chartae
S	19/07/2001	AP	Teruel	standum est chartae
S	05/10/2001	AP	Teruel	standum est chartae
S	27/10/2001	AP	Teruel	standum est chartae
S	07/11/2001	TSJ	Zaragoza	standum est chartae
S	30/01/2002	AP	Huesca	standum est chartae
S	04/10/2002	AP	Teruel	standum est chartae
S	21/10/2002	AP	Zaragoza (2)	standum est chartae
S	29/11/2002	AP	Teruel	standum est chartae
S	23/12/2002	AP	Zaragoza (2)	standum est chartae
S	10/04/2003	JPI	Zaragoza (17)	fuentes, Código Civil
A	08/07/2003	AP	Teruel	standum est chartae
S	23/09/2003	AP	Teruel	standum est chartae
S	05/12/2003	JPI	Tarazona	fuentes, DT 1ª LS
S	10/12/2003	AP	Teruel	standum est chartae
S	14/01/2004	JPI	Teruel (1)	fuentes, Código civil.
S	18/05/2004	JPI	Alcañiz (1)	aplicabilidad Código civil
S	22/06/2004	JPI	Alcañiz (2)	standum est chartae
S	03/09/2004	JPI	Calamocha	standum est chartae.
S	24/01/2005	AP	Zaragoza (5ª)	standum est chartae.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	07/02/2005	AP	Teruel	fuentes.Código Civil
S	08/02/2005	AP	Teruel	fuentes.Codigo Civil.
S	14/02/2005	AP	Zaragoza (5ª)	standum est chartae.
S	17/02/2005	AP	Zaragoza (5ª)	standum est chartae.
S	19/05/2005	AP	Huesca	fuentes.Código Civil.
S	20/05/2005	AP	Zaragoza (4ª)	fuentes.Código Civil.
S	08/07/2005	AP	Teruel	costumbre.
S	11/10/2005	AP	Teruel	costumbre.
S	25/10/2005	AP	Teruel	standum est chartae.
S	25/10/2005	AP	Teruel	standum est chartae.
S	27/03/2006	AP	Zaragoza (5ª)	vecindad civil
S	20/03/2006	AP	Teruel	standum est chartae
S	05/04/2006	AP	Teruel	standum est chartae
S	29/12/2006	JPI	Barbastro	costumbre
S	13/03/2007	AP	Teruel	Standum esta chartae
S	24/05/2007	JPI	Zaragoza 12	Fuentes
S	23/09/2008	AP	Huesca	Standum est chartae
S	23/09/2008	JPI	Alcañiz (2)	Standum est chartae
S	14/05/2009	AP	Teruel	Standum est chartae
S	17/03/2010	AP	Teruel	standum est chartae
S	09/03/2011	AP	Teruel	Standum est chartae
A	15/12/2011	TSJ	Zaragoza	Standum est chartae
S	12/06/2012	JPI	Calatayud	Standum est chartae
A	29/10/2012	TSJ	Zaragoza	Standum est chartae
A	25/04/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión de recurso de casación. Standum est chartae

61. Persona y familia. En general.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	22/02/1995	AP	Huesca	inst. fam. consuetud.
S	05/07/1995	TSJ	Zaragoza	inst. fam. consuetud.
A	02/10/1996	AP	Huesca	contrato familiar atípico
S	09/11/1998	AP	Zaragoza (4)	casamiento a sobre bienes
A	10/12/2007	JPI	Zaragoza 14	Supuesto de cotutoría
A	12/11/2010	TSJ	Zaragoza	Modificación capacidad
A	29/01/2010	JPI	Huesca (2)	Consentimiento para intervención quirúrgica.
S	12/02/2013	JPI	Ejea (1)	Incapacitación y tutela
S	19/03/2013	JPI	Ejea (1)	Incapacitación y tutela
S	10/07/2013	JPI	Ejea (1)	Incapacitación y tutela
A	30/09/2013	JPI	Zaragoza (13)	Internamiento involuntario
S	29/06/2015	TSJ	Zaragoza	Pensión compensatoria
S	08/10/2015	TSJ	Zaragoza	Pensión compensatoria
S	16/10/2015	TSJ	Zaragoza	Uso de la vivienda conyugal y pensión compensatoria
S	27/06/2016	TSJ	Zaragoza	Asignación compensatoria
S	06/09/2016	AP	Teruel	Pensión compensatoria
S	30/09/2016	AP	Teruel	Pensión compensatoria

62. Persona. Edad.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/12/1994	AP	Huesca	vecindad civil
S	17/01/1995	AP	Lleida (2)	vecindad civil
S	24/11/1995	JPI	Zaragoza (2)	vecindad civil
S	02/07/1997	AP	Teruel	vecindad civil
S	31/07/1997	AP	Zaragoza (5)	autoridad marital
S	11/12/1998	JPI	Zaragoza (2)	vecindad civil
S	10/03/1999	TSJ	Zaragoza	vecindad civil
S	24/07/2000	AP	Teruel	vecindad civil
S	18/10/2000	AP	Teruel	vecindad civil
S	29/01/2001	AP	Teruel	capacidad procesal menor
S	6/03/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
A	12/03/2008	AP	Zaragoza (2)	Internamiento
S	2/04/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
S	9/04/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
S	8/05/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
S	20/06/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
S	12/11/2008	JPI	Alcañiz (2)	Incapacidad
S	13/03/2009	JPI	Ejea(1)	Incapacidad
S	08/04/2009	JPI	Ejea(1)	Incapacidad
S	08/04/2009	JPI	Ejea(1)	Incapacidad
S	13/04/2009	JPI	Ejea(1)	Incapacidad
A	22/04/2009	JPI	Huesca (2)	Capacidad
S	14/07/2090	JPI	Ejea (1)	Incapacidad
S	26/03/2010	JPI	Zaragoza (19)	Capacidad menor. Actos de disposición
S	09/07/2010	JPI	Boltaña	Incapacitación. Curatela
S	03/09/2010	AP	Huesca	Incapacitación. Curatela
S	30/09/2010	JPI	Boltaña	Incapacitación. Curatela
S	30/12/2010	AP	Zaragoza (4)	Capacidad menor. Actos de disposición
S	15/06/2011	TSJ	Zaragoza	Capacidad de menor mayor de 14 años. Actos de disposición
A	13/11/2013	JPI	Zaragoza (13)	Internamiento psiquiátrico involuntario menor 16 años
S	12/02/2014	JPI	Ejea (1)	Emancipación por concesión de menor mayor de 14 años

64. Relaciones entre ascendientes y descendientes.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	12/03/1990	JPI	Zaragoza (6)	autoridad familiar abuelos
A	05/04/1990	AP	Zaragoza (1)	autoridad familiar otras personas
S	15/10/1990	JPI	Ejea (1)	autoridad familiar
S	01/12/1990	JPI	Zaragoza (6)	aut..fam.,J. de Parientes,abuelos
S	19/12/1990	JPI	Ejea (1)	autoridad familiar
A	01/07/1991	JPI	Zaragoza (6)	autoridad familiar abuelos
S	23/12/1991	AP	Zaragoza (4)	autoridad familiar abuelos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	28/12/1991	AP	Teruel	autoridad familiar
S	03/06/1993	JPI	Huesca (2)	autoridad familiar
S	20/07/1993	AP	Huesca	gastos crianza y educación
S	14/09/1993	AP	Huesca	repr. legal hijo menor 14 años
S	11/10/1993	AP	Huesca	autoridad familiar
S	04/04/1994	JPI	Huesca (2)	autoridad familiar
S	03/06/1994	JPI	Ejea (1)	autoridad familiar abuelos
A	24/02/1995	JPI	Huesca (2)	disposición bienes
S	27/02/1995	AP	Teruel	autoridad familiar
S	08/04/1995	AP	Zaragoza (2)	autoridad familiar
S	26/04/1997	AP	Huesca	autoridad familiar
S	16/05/1997	AP	Teruel	autoridad familiar
A	01/07/1998	JPI	Zaragoza (13)	autoridad familiar rehabilitada
A	05/06/1998	JPI	Zaragoza (13)	autoridad familiar rehabilitada
A	18/05/1998	JPI	Zaragoza (14)	autoridad familiar abuelos
S	03/09/1999	JPI	Ejea (2)	deber de crianza
S	24/11/1999	JPI	Ejea (2)	deber de crianza
S	24/07/2000	AP	Teruel	autoridad familiar
S	25/10/2000	AP	Teruel	autoridad familiar
S	02/03/2000	AP	Zaragoza (4)	alimentos prole extramatrimonial
S	12/12/2000	AP	Zaragoza (4)	Asistencia
A	27/02/2001	AP	Huesca	administración, fianza
S	10/04/2003	JPI	Zaragoza (17)	autoridad familiar
A	16/04/2003	AP	Zaragoza (2)	alimentos, Junta de Parientes
S	17/02/2005	AP	Zaragoza (5ª)	dº de los menores
S	01/03/2005	AP	Zaragoza (2ª)	guarda y custodia
S	18/01/2006	AP	Zaragoza (4ª)	alimentos, deber de crianza
S	07/02/2006	JPI	Monzón 1	deber de crianza
S	31/03/2006	JPI	Monzón 1	relaciones ascend. y descend.
S	03/05/2006	JPI	Monzón 1	relaciones ascend. y descend.
S	19/05/2006	JPI	Monzón 1	relaciones ascend. y descend.
S	08/06/2006	JPI	Monzón 1	relaciones ascend. y descend.
S	10/07/2006	JPI	Monzón 1	relaciones ascend. y descend.
S	22/09/2006	JPI	Monzón 1	deber de crianza
S	11/05/2007	AP	Huesca	Pensión de alimentos
S	5/06/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia menor
S	19/06/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Guarda y custodia
S	27/07/2007	JPI	Monzón 2	Guarda y custodia y alimentos
S	4/10/2007	JPI	Monzón 2	Guarda y custodia y alimentos
S	25/10/2007	AP	Huesca	Alimentos
S	19/03/2008	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	10/01/2008	AP	Zaragoza (5)	Alimentos
S	26/02/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
S	22/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
S	30/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
S	12/05/2008	TSJ	Aragón	Pensión de alimentos
S	13/05/2008	AP	Zaragoza (2)	Dº Visitas
S	13/05/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
S	20/05/2008	AP	Zaragoza (2)	Gastos hijos comunes
S	10/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	10/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Guarda administrativa
S	17/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	17/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	24/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
S	8/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	16/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	22/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	25/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
A	4/11/2008	AP	Zaragoza (2)	Autoridad familiar
A	25/11/2008	AP	Zaragoza (2)	Autoridad familiar
S	16/12/2008	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y rég. visitas
S	13/01/2009	AP	Huesca	Alimentos y régimen de visitas
S	28/01/2009	AP	Huesca	Pº favor filii
S	04/02/2009	JPI	Zaragoza (6)	Alimentos
S	06/02/2009	JPI	Zaragoza (6)	Alimentos
S	17/02/2009	AP	Huesca	Guarda y custodia y régimen visitas
A	03/03/2009	AP	Zaragoza (2)	Elección centro escolar hijos
S	11/03/2009	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y visitas
S	19/03/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Autoridad familiar.Pº favor filii
S	31/03/2009	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y visitas
S	01/04/2009	JPI	Zaragoza (6)	Alimentos y guarda y custodia
S	03/04/2009	JPI	Zaragoza (6)	Régimen visitas
S	13/04/2009	JPI	Ejea (1)	Régimen visitas
S	24/04/2009	AP	Huesca	Alimentos
S	05/05/2009	JPI	Zaragoza (6)	Autoridad familiar
S	06/05/2009	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y guarda y custodia
S	06/05/2009	JPI	Zaragoza (6)	Autoridad familiar
A	12/05/2009	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y visitas
S	28/05/2009	JPI	Ejea (1)	Guarda y custodia y visitas
S	03/07/2009	JPI	Zaragoza (6)	Régimen visitas. Pº favor filii.
S	02/09/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Autoridad familiar
S	11/09/2009	AP	Huesca	Alimentos
S	18/09/2009	AP	Huesca	Pº favor filii.
S	29/09/2009	AP	Zaragoza (2)	Alimentos
A	06/10/2009	AP	Zaragoza (2)	Visitas. Pº favor filii.
S	23/10/2009	AP	Huesca	Alimentos
S	28/10/2009	AP	Huesca	Visitas. Pº favor filii.
S	24/11/2009	AP	Zaragoza (2)	Alimentos y régimen de visitas
S	03/02/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos y visitas
S	25/03/2010	AP	Huesca	Régimen de visitas
S	26/03/2010	AP	Huesca	Pensión de alimentos y visitas
S	04/05/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y alimentos
S	04/05/2010	AP	Zaragoza (2)	Régimen de visitas y alimentos
S	04/05/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	12/05/2010	TSJ	Zaragoza	Pensión de alimentos
S	27/05/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	04/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
A	15/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Gastos extraordinarios
S	22/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	22/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	06/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Tratamiento terapéutico
S	13/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y visitas
S	23/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Régimen de visitas
S	23/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos y visitas
S	23/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y alimentos
S	23/07/2010	AP	Huesca	Privación autoridad familiar
S	21/09/2010	JPI	Zaragoza (6)	Guarda y custodia compartida
A	05/10/2010	AP	Zaragoza (2)	Facultad de decisión prácticas religiosas de hijos menores
S	11/10/2010	AP	Zaragoza (2)	Alimentos provisionales para hijo mayor de edad
S	25/10/2010	JPI	Boltaña	Guarda y custodia compartida
S	03/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia. Visitas
S	03/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia. Visitas. Alimentos
S	30/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia compartida. Pensión de alimentos
S	09/12/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	16/12/2010	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	03/01/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia y gastos extraordinarios
S	11/01/2011	AP	Teruel	Custodia compartida
S	12/01/2011	AP	Huesca	Guarda y custodia. Separación de hermanos
S	08/02/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	10/02/2011	JPI	Ejea (1)	Pacto relaciones familiares
S	22/02/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia y visitas
S	01/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia para hijos mayores de edad
S	08/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia de hermanos
S	21/03/2011	JPI	Ejea (1)	Pensión alimenticia y régimen de comunicaciones
S	29/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	29/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	12/04/2011	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia, alimentos y visitas
S	19/04/2011	AP	Zaragoza (2)	Régimen de visitas y alimentos
S	03/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Privación de autoridad familiar
S	03/05/2011	AP	Teruel	Custodia compartida
A	10/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Audiencia del menor
S	17/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	24/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Uso de vivienda familiar
S	24/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	21/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Régimen de visitas
S	21/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia y alimentos
S	21/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	21/06/2011	AP	Teruel	Custodia compartida
S	28/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	28/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	05/07/2011	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia. Alimentos
A	12/07/2011	TSJ	Zaragoza	Relaciones familiares. Inadmisión recurso casación
S	13/07/2011	TSJ	Zaragoza	Sistema de custodia compartida

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	20/07/2011	TSJ	Zaragoza	Legitimación. Inadmisión recurso casación
S	26/07/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	29/07/2011	AP	Huesca	Motivación cambio progenitor custodio
S	27/09/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	30/09/2011	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida. Superior interés del menor
S	30/09/2011	AP	Huesca	Guarda y custodia y alimentos de menor
S	05/10/2011	AP	Huesca	Pensión alimenticia
A	10/10/2011	TSJ	Zaragoza	Modificación medidas custodia y gastos
S	13/10/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	13/10/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	02/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	29/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	29/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida, pensión alimenticia y compensatoria
S	30/11/2011	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia a hijos mayores de edad
S	02/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos y régimen de visitas
S	02/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida, pensión alimenticia y compensatoria
A	12/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia. Gastos necesarios
S	15/12/2011	TSJ	Zaragoza	Preferencia custodia compartida
S	20/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia y régimen de visitas
S	21/12/2011	JPI	Ejea (1)	Pacto de relaciones familiares
A	27/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Discrepancia entre progenitores
S	11/01/2012	TSJ	Zaragoza	Asignación compensatoria
S	11/01/2012	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia. Gastos extraordinarios
S	17/01/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia, visitas y alimentos
S	23/01/2012	JPI	Ejea (1)	Custodia compartida
S	23/01/2012	JPI	Ejea (1)	Custodia compartida
S	24/01/2012	AP	Huesca	Custodia y alimentos
S	01/02/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	01/02/2012	AP	Zaragoza	Uso del domicilio familiar
S	07/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia y compensatoria
S	07/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
A	07/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Gastos extraordinarios
S	07/02/2012	JPI	Calatayud	Guarda y custodia, visitas y alimentos
S	08/02/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	09/02/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	14/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	14/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	28/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	28/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	29/02/2012	AP	Huesca	Guarda y alimentos
S	07/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	13/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia y alimentos
S	13/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	13/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida y pensión de alimentos
S	20/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Visitas y alimentos
S	20/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	20/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Extinción pensión alimenticia para mayor de edad
S	20/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	21/03/2012	TSJ	Zaragoza	Extinción pensión alimenticia para hijos mayores de edad
S	27/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	30/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión de alimentos
S	09/04/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	11/04/2012	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia para hijo mayor discapacitado
S	11/04/2012	AP	Zaragoza (2)	Reconocimiento de filiación extramatrimonial
S	12/04/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida y gastos extraordinarios
S	16/04/2012	TSJ	Zaragoza	Reclamación de alimentos
S	25/04/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia y compensatoria
S	27/04/2012	AP	Huesca	Pensión alimenticia
S	02/05/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	17/05/2012	JPI	Calatayud	Pensión alimenticia para hija mayor de edad. Pensión compensatoria
S	22/05/2012	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	24/05/2012	JPI	Ejea (1)	Visitas
S	31/05/2012	AP	Huesca	Guarda y alimentos
A	05/06/2012	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	06/06/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	08/06/2012	AP	Huesca	Pensión alimenticia
S	15/06/2012	JPI	Calatayud	Custodia compartida
A	26/06/2012	AP	Zaragoza (2)	Guarda y custodia
S	26/06/2012	AP	Huesca	Pensión de alimentos y compensatoria
S	04/07/2012	TSJ	Zaragoza	Extinción pensión alimenticia
S	05/07/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	12/07/2012	JPI	Ejea (1)	Pensión alimenticia y compensatoria
S	13/07/2012	TSJ	Zaragoza	Régimen de comunicaciones y alimentos. Pensión compensatoria
S	24/07/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	27/07/2012	AP	Huesca	Visitas y alimentos
S	07/09/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	18/09/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia, visitas y alimentos
S	24/09/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	25/09/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	28/09/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	11/10/2012	AP	Zaragoza (2)	Pensión compensatoria
S	16/10/2012	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia y visitas
S	19/10/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida. Derecho del menor a ser oído

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	24/10/2012	TSJ	Zaragoza	Vivienda, gastos y pensión
S	26/10/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	20/11/2012	JPI	Ejea (1)	Atribución domicilio familiar
S	22/11/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	22/11/2012	TSJ	Zaragoza	Guarda y custodia
S	27/11/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	29/11/2012	JPI	Calatayud	Custodia compartida
S	03/12/2012	JPI	Calatayud	Custodia compartida
A	12/12/2012	AP	Zaragoza (2)	Cambio de guarda
A	17/12/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	18/12/2012	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	19/12/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	20/12/2012	TSJ	Zaragoza	Pensión de alimentos
S	21/12/2012	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	21/12/2012	TSJ	Zaragoza	Guarda y custodia. Alimentos
S	04/01/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	18/01/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	18/01/2013	JPI	Ejea (1)	Custodia compartida
S	22/01/2013	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	22/01/2013	AP	Teruel	Custodia compartida
A	30/01/2013	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia
S	05/02/2013	TSJ	Zaragoza	Extinción pensión alimenticia para hijos mayores de edad
S	07/02/2013	TSJ	Zaragoza	Atribución uso domicilio familiar
S	12/02/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	12/02/2013	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida y uso domicilio familiar
S	19/02/2013	AP	Teruel	Custodia compartida
S	26/02/2013	AP	Teruel	Visitas y comunicaciones con abuelos
S	27/02/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	11/03/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	13/03/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	14/03/2013	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia
S	19/03/2013	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	25/03/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	26/03/2013	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
S	26/04/2013	JPI	Ejea (1)	Custodia compartida
S	29/04/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	30/04/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	30/04/2013	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	06/05/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	20/05/2013	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia
S	20/05/2013	AP	Teruel	Guarda y custodia, visitas, domicilio familiar y alimentos
S	04/06/2013	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
A	06/06/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	18/06/2013	AP	Zaragoza (2)	Visitas y comunicaciones
S	25/06/2013	TSJ	Zaragoza	Pensión compensatoria
S	01/07/2013	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia y compensatoria, uso vivienda familiar
S	02/07/2013	TSJ	Zaragoza	Guarda y custodia y alimentos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	02/07/2013	TSJ	Zaragoza	Privación autoridad familiar
S	04/07/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	10/07/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	11/07/2013	TSJ	Zaragoza	Atribución vivienda familiar en custodia compartida
S	12/07/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	16/07/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	16/07/2013	AP	Zaragoza (2)	Discrepancia en ejercicio de autoridad familiar
S	17/07/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	18/07/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	23/07/2013	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida y pensión compensatoria
S	23/07/2013	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	23/07/2013	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	23/07/2013	AP	Zaragoza (2)	Custodia compartida
A	23/07/2013	AP	Zaragoza (2)	Elección de centro escolar
S	24/07/2013	TSJ	Zaragoza	Visitas con abuelo
S	25/07/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	04/09/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	10/09/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	24/09/2013	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia
S	27/09/2013	AP	Zaragoza (2)	Régimen de visitas y uso de domicilio familiar
S	30/09/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	03/10/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	08/10/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	09/10/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	14/10/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	14/10/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	23/10/2013	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia
S	30/10/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	15/11/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	18/11/2013	AP	Teruel	Pensión compensatoria y alimenticia
S	22/11/2013	AP	Teruel	Guarda y custodia
S	26/11/2013	AP	Zaragoza (2)	Pensión compensatoria y uso de domicilio familiar
A	26/11/2013	AP	Zaragoza (2)	Impago pensión alimenticia
S	27/11/2013	AP	Zaragoza (2)	Pensión alimenticia. Normas de conflicto
A	05/12/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	18/12/2013	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	08/01/2014	JPI	Ejea (1)	Visitas y alimentos
S	10/01/2014	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	14/01/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Gastos extraordinarios
S	14/01/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
A	14/01/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Cambio de centro escolar
S	21/01/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	21/01/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida y pensión de alimentos
S	28/01/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Uso de la vivienda habitual y pensión

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
				de alimentos
S	05/02/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Régimen de guarda y visitas
S	11/02/2014	AP	Zaragoza	Ejecución de pacto relaciones familiares
S	17/02/2014	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	25/02/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
S	25/02/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia y visitas
S	25/02/2014	AP	Teruel	Régimen de visitas y pensión compensatoria
S	04/03/2014	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	05/03/2014	AP	Teruel	Custodia compartida
S	13/03/2014	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	18/03/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
A	18/03/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Gastos extraordinarios
S	24/03/2014	JPI	Ejea (1)	Alimentos para hijos mayores
S	25/03/2014	AP	Teruel	Custodia compartida
S	28/03/2014	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia a hijo mayor de edad
S	08/04/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión de alimentos y visitas
A	15/04/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Gastos extraordinarios
S	07/05/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	09/05/2014	TSJ	Zaragoza	Contribución a los gastos de hijo menor
S	13/05/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
S	13/05/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión de alimentos
S	15/05/2014	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	20/05/2014	AP	Teruel	Custodia compartida
S	23/05/2014	TSJ	Zaragoza	Modificación de medidas por alteración de circunstancias
S	06/06/2014	TSJ	Zaragoza	Limitación temporal del uso del domicilio familiar con hijos mayores de edad
S	06/06/2014	JPI	Ejea (1)	Custodia compartida
S	11/06/2014	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia, compensatoria y uso del domicilio familiar
S	24/06/2014	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
A	27/06/2014	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia
S	30/06/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Limite temporal del uso vivienda y pensión alimentos
S	02/07/2014	TSJ	Zaragoza	Régimen de visitas y comunicaciones
S	08/07/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	15/07/2014	JPI	Ejea (1)	Custodia, visitas y alimentos
S	18/07/2014	TSJ	Zaragoza	Uso temporal domicilio familiar
S	22/07/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Visitas, alimentos y uso domicilio
S	16/09/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Uso temporal domicilio familiar
S	16/09/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	30/09/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión compensatoria
S	09/10/2014	AP	Teruel	Pensión alimenticia para hijos mayores de edad
S	15/10/2014	AP	Teruel	Atribución domicilio conyugal sin descendencia
S	20/10/2014	JPI	Calatayud (2)	Pensión alimenticia

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	21/10/2014	TSJ	Zaragoza	Limitación temporal del uso del domicilio familiar con hijos mayores de edad
S	22/10/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia y compensatoria
S	22/10/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión compensatoria
S	27/10/2014	JPI	Calatayud (2)	Extinción pensión alimenticia hijo mayor de edad
S	04/11/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
S	05/11/2014	TSJ	Zaragoza	Pensión compensatoria
S	05/11/2014	AP	Teruel	Custodia compartida
S	18/11/2014	AP	Teruel	Custodia compartida
S	19/11/2014	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	25/11/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	02/12/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	10/12/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
S	15/12/2014	TSJ	Zaragoza	Régimen de visitas
S	17/12/2014	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia
S	19/12/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
S	19/12/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Visitas y alimentos
S	22/12/2014	TSJ	Zaragoza	Pensión de alimentos y compensatoria
S	23/01/2015	JV	Zaragoza (1)	Custodia, visitas y alimentos
S	23/01/2015	JV	Zaragoza (1)	Custodia, visitas, alimentos y uso vivienda familiar
S	27/01/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
S	28/01/2015	TSJ	Zaragoza	Pensión alimenticia
S	04/02/2015	TSJ	Zaragoza	Uso vivienda familiar
S	06/02/2015	JV	Zaragoza (1)	Custodia, visitas y alimentos
S	06/02/2015	JV	Zaragoza (1)	Modificación medidas definitvas
A	12/02/2015	TSJ	Zaragoza	Pensión compensatoria
S	17/02/2015	TSJ	Zaragoza	Uso vivienda familiar
S	23/02/2015	JV	Zaragoza (1)	Custodia, visitas y alimentos
S	23/02/2015	JV	Zaragoza (1)	Alimentos para hijo mayor de edad
A	24/02/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Actos de ejercicio de autoridad familiar
S	03/03/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Visitas y alimentos
S	03/03/2015	AP	Teruel	Pensión alimenticia
S	04/03/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	17/03/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	24/03/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	31/03/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión compensatoria
S	31/03/2015	AP	Teruel	Pensión compensatoria y limitación temporal uso vivienda familiar
S	06/04/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	16/04/2015	JPI	Ejea (1)	Pensión alimenticia
S	29/04/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	08/05/2015	TSJ	Zaragoza	Régimen de visitas
S	12/05/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	18/05/2015	JPI	Ejea (1)	Pensión alimenticia
S	21/05/2015	JV	Zaragoza (1)	Custodia y alimentos
S	27/05/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	28/05/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	16/06/2015	AP	Teruel	Custodia compartida
S	23/06/2015	JPI	Ejea (1)	Privación autoridad familiar
S	24/06/2015	JV	Zaragoza (1)	Custodia, visitas y alimentos
S	30/06/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	30/06/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
S	09/06/2015	JV	Zaragoza (1)	Custodia, visitas y alimentos
S	07/07/2015	JPI	Ejea (1)	Custodia y alimentos
S	29/07/2015	TSJ	Zaragoza	Régimen de visitas
S	15/09/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Régimen de visitas
S	15/09/2015	JV	Zaragoza (1)	Custodia, visitas y alimentos
S	17/09/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	23/09/2015	JPI	Ejea (1)	Pensión alimenticia a hijo mayor de edad y uso vivienda familiar
S	01/10/2015	TSJ	Zaragoza	Pensión de alimentos
S	02/10/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	05/10/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	06/10/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	06/10/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
S	07/10/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	09/10/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	14/10/2015	AP	Zaragoza	Custodia compartida
S	15/10/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	16/10/2015	JV	Zaragoza (1)	Custodia y alimentos
S	19/10/2015	AP	Teruel	Custodia compartida
S	04/11/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Guarda y custodia
S	10/12/2015	TSJ	Zaragoza	Pensión compensatoria
S	15/12/2015	JV	Zaragoza (1)	Privación autoridad familiar
S	16/12/2015	JV	Zaragoza (1)	Custodia, visitas, uso del domicilio familiar y alimentos
S	16/12/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	16/12/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión compensatoria
S	16/12/2015	JPI	Ejea (1)	Pensión alimenticia
S	18/12/2015	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	13/01/2016	TSJ	Zaragoza	Régimen de visitas de menor próximo a mayoría de edad
S	19/01/2016	AP	Zaragoza	Guarda y custodia
S	19/01/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Régimen de custodia con viajes al extranjero
S	19/01/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	19/01/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	20/01/2016	TSJ	Zaragoza	Atribución temporal del uso de la vivienda familiar

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	03/02/2016	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	11/02/2016	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	17/02/2016	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	19/02/2016	JPI	Ejea (1)	Guarda y custodia
S	23/02/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
S	24/02/2016	AP	Teruel	Visitas con abuela
S	01/03/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	01/03/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión de alimentos
S	01/03/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Guarda y custodia, visitas y pensión de alimentos
S	01/03/2016	AP	Teruel	Guarda y custodia, visitas, pensiones alimenticia y compensatoria
S	02/03/2016	TSJ	Zaragoza	Pensión compensatoria y alimenticia para hijos mayores de edad
S	08/03/2016	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	08/03/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión de alimentos
S	15/03/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Guarda y custodia y limite temporal en uso de vivienda
S	18/03/2016	JPI	Ejea (1)	Régimen de visitas y pensión compensatoria
S	06/04/2016	AP	Teruel	Régimen de visitas
S	12/04/2016	AP	Teruel	Guarda y custodia
S	26/04/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia en custodia compartida
S	04/05/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia
S	09/05/2016	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	10/06/2016	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	10/06/2016	JPI	Ejea (1)	Guarda y custodia, pensión alimenticia y visitas
S	30/06/2016	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	05/07/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
S	19/07/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión compensatoria
S	19/07/2016	AP	Teruel	Custodia compartida
S	22/07/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Visitas en centro penitenciario
S	29/07/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida
S	07/09/2016	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	14/09/2016	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	15/09/2016	AP	Teruel	Régimen de visitas
S	22/09/2016	AP	Teruel	Custodia compartida
S	23/09/2016	JPI	Ejea (1)	Pensión de alimentos
S	14/10/2016	TSJ	Zaragoza	Pensión de alimentos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	14/10/2016	TSJ	Zaragoza	Atribución temporal del uso de la vivienda familiar
S	28/10/2016	JPI	Ejea (1)	Custodia compartida
S	03/11/2016	AP	Teruel	Pensión compensatoria
S	09/11/2016	AP	Teruel	Custodia compartida
S	09/11/2016	AP	Teruel	Pensión alimenticia
S	22/11/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Autoridad familiar
S	22/11/2016	JPI	Ejea (1)	Guarda y custodia, pensión alimenticia y asignación compensatoria
S	01/12/2016	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	02/12/2016	TSJ	Zaragoza	Custodia compartida
S	02/12/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Pensión alimenticia a hijo mayor de edad
S	14/12/2016	AP	Teruel	Pensión compensatoria y alimenticia para hija mayor
S	14/12/2016	AP	Teruel	Custodia compartida y pensión alimenticia
S	19/12/2016	AP	Teruel	Custodia compartida
S	21/12/2016	TSJ	Zaragoza	Régimen de visitas
S	23/12/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Custodia compartida

65. Tutela, adopción y Junta de Parientes.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	01/12/1990	JPI	Zaragoza (6)	aut..fam.,J.de Parientes,abuelos
A	17/03/1993	TSJ	Zaragoza	Tutela
S	03/06/1993	JPI	Huesca (2)	Adopción
S	30/07/1993	JPI	Boltaña	Junta de Parientes
S	11/10/1993	AP	Huesca	Adopción
S	30/07/1994	AP	Huesca	Junta de Parientes
S	13/06/1995	TSJ	Zaragoza	Junta de parientes
S	14/02/1997	AP	Huesca	Tutela
A	19/02/1998	JPI	Boltaña	Junta de Parientes
A	04/05/1998	AP	Huesca	Junta de Parientes
A	25/11/1998	AP	Huesca	Junta de Parientes
S	17/03/2000	JPI	Ejea (2)	Junta de Parientes
A	12/04/2000	AP	Huesca	tutela, enajenación bienes
A	15/09/2000	JPI	Zaragoza (14)	tutela, pareja de hecho
S	25/02/2002	AP	Zaragoza (2)	Adopción
A	16/04/2003	AP	Zaragoza (2)	Junta de Parientes
S	30/04/2003	JPI	Zaragoza (14)	Junta de Parientes
S	05/04/2005	AP	Zaragoza (2ª)	privación p.potestad.Adopción.
S	6/02/2008	AP	Zaragoza (2)	Curatela
S	15/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Nombramiento curador

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Nombramiento curador
S	29/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Nombramiento curador
S	29/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Acogimiento preadoptivo
S	04/01/2010	TSJ	Zaragoza	Tutela administrativa ex lege
S	08/04/2010	AP	Zaragoza (2)	Autotutela
S	22/04/2010	AP	Zaragoza (2)	Adopción
S	11/05/2010	AP	Zaragoza (2)	Elección de tutor
A	01/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Acogimiento preadoptivo
A	16/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Tutela
S	22/06/2010	AP	Zaragoza (2)	Adopción
A	12/07/2010	TSJ	Zaragoza	Tutela administrativa ex lege
S	20/07/2010	AP	Zaragoza (2)	Elección de curador
S	30/07/2010	AP	Huesca	Separación de cargos tutelares
A	04/10/2010	TSJ	Zaragoza	Privación autoridad familiar. Adopción
A	03/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Acogimiento preadoptivo
S	23/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Desamparo. Suspensión autoridad familiar
S	09/12/2010	AP	Zaragoza (2)	Tutela.
A	31/01/2011	TSJ	Zaragoza	Privación autoridad familiar. Tutela ex lege. Requisitos acceso a la casación: Interés del menor.
S	21/03/2011	JPI	Ejea (1)	Curatela
S	05/04/2011	TSJ	Zaragoza	Adopción. Necesidad de asentimiento. Denegación de prueba
A	03/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Remoción de tutor
A	03/05/2011	AP	Zaragoza (2)	Competencia seguimiento tutela
S	10/05/2011	JPI	Ejea (1)	Incapacidad
S	25/05/2011	TSJ	Zaragoza	Desamparo. Suspensión autoridad familiar. Intervención Mº Fiscal
S	05/07/2011	AP	Zaragoza (2)	Incapacidad parcial
S	05/07/2011	JPI	Ejea (1)	Incapacidad
S	08/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Desamparo
S	22/11/2011	JPI	Ejea (1)	Incapacidad
A	31/01/2012	AP	Huesca	Incapacitación y tutela. Prueba en el proceso
S	01/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Incapacitación
S	21/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Tutela
S	06/03/2012	JPI	Ejea (1)	Incapacitación
S	06/03/2012	JPI	Ejea (1)	Incapacitación parcial
S	09/05/2012	AP	Zaragoza (2)	Incapacitación. Visitas
S	31/05/2012	AP	Huesca	Curatela. Tratamiento farmacológico
A	10/07/2012	AP	Zaragoza (2)	Acogimiento permanente
A	18/09/2012	AP	Zaragoza (2)	Adopción
S	07/11/2012	AP	Zaragoza (2)	Adopción
S	04/12/2012	TSJ	Zaragoza	Situación de desamparo
S	04/12/2012	JPI	Calatayud	Incapacidad
A	19/12/2012	TSJ	Zaragoza	Desamparo de un menor
S	28/02/2013	TSJ	Zaragoza	Adopción
S	26/07/2013	TSJ	Zaragoza	Desamparo
S	28/01/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Desamparo

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	05/02/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Adopción
S	11/02/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Adopción
S	25/04/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Responsabilidad de tutor
S	14/05/2014	JPI	Ejea (1)	Incapacitación
S	10/06/2014	JPI	Ejea (1)	Privación de autoridad familiar
S	15/07/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Acogimiento no preadoptivo
S	09/10/2014	JPI	Calatayud (2)	Incapacitación y tutela
S	11/11/2014	AP	Zaragoza (2ª)	Tutela
S	24/03/2015	AP	Teruel	Remoción de tutor
S	29/04/2015	AP	Teruel	Nulidad compraventa incapaz
S	17/07/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Asentimiento en adopción
S	14/10/2015	AP	Zaragoza (2ª)	Incapacitación
S	26/04/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Curatela
S	12/07/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Desamparo
S	23/12/2016	AP	Zaragoza (2ª)	Incapacitación y tutela

661. Régimen económico conyugal. En general.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	08/11/2011	TSJ	Zaragoza	Pensión compensatoria

662. Régimen paccionado.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	31/07/1991	JPI	Jaca (1)	consorcio univ. o juntar 2 casas
S	16/03/1992	AP	Huesca	consorcio universal
S	18/03/1992	AP	Teruel	Capitulaciones
S	29/09/1992	TSJ	Zaragoza	consorcio universal
A	22/12/1993	TSJ	Zaragoza	conv. reg. sep.,art. 29 Comp.
S	21/02/1996	AP	Zaragoza (5)	Capitulaciones
S	03/06/1996	JPI	Zaragoza (2)	Capitulaciones
S	12/04/1997	AP	Zaragoza (2)	sep. bs., deudas comunes ant.
S	17/04/1997	JPI	Zaragoza (14)	reg. sep. Bienes
S	05/12/1997	JPI	Tarazona	art. 29 Comp.
S	10/06/1998	AP	Huesca	dación personal, acogimiento
S	27/10/1998	AP	Huesca	Capitulaciones
S	22/12/1998	JPI	Jaca (2)	Capitulaciones
A	25/02/1998	AP	Zaragoza (5)	Capitulaciones
S	20/03/2001	AP	Zaragoza (5)	rescisión capitulaciones
S	16/07/2001	JPI	Calatayud	Capitulaciones
S	30/01/2002	AP	Huesca	interpretación capitulaciones
S	27/03/2002	AP	Zaragoza (5ª)	Capitulaciones
S	19/05/2003	AP	Zaragoza (4ª)	Capitulaciones
S	23/06/2004	TSJ	Zaragoza	capitulaciones (+661)
S	18/01/2005	AP	Huesca	rég. supletorio
S	24/01/2005	AP	Zaragoza (5ª)	rég. separación bienes
S	20/05/2005	AP	Zaragoza (4ª)	rég. separación bienes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	27/01/2009	AP	Zaragoza (2)	Régimen gananciales
S	15/09/2009	JPI	Huesca (2)	Capitulaciones
S	26/02/2013	TSJ	Zaragoza	Asignación compensatoria en régimen matrimonial de separación de bienes
S	12/09/2013	AP	Zaragoza (4)	Enriquecimiento injusto en régimen de separación
S	26/02/2013	TSJ	Zaragoza	Asignación compensatoria en régimen matrimonial de separación de bienes

663. Régimen legal.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/01/1990	AP	Zaragoza (4)	disolución comunidad
S	06/02/1990	AP	Zaragoza (4)	contratación entre cónyuges
S	21/02/1990	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes
S	17/03/1990	AP	Zaragoza (4)	bienes privativos
S	16/04/1990	AP	Zaragoza (4)	litisconsorcio pasivo
S	25/05/1990	AP	Zaragoza (4)	arrend. titularidad conjunta
S	01/06/1990	AP	Zaragoza (4)	arrend. titularidad conjunta
S	06/06/1990	AP	Zaragoza (4)	disp. intervivos cuota-parte
S	27/06/1990	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes, presunción
S	20/07/1990	AP	Zaragoza (4)	disolución comunidad
S	11/09/1990	AP	Zaragoza (4)	Administración
S	03/10/1990	AP	Teruel	enajenación bienes privativos
S	03/11/1990	AP	Zaragoza (4)	Litisconsorcio
S	04/11/1990	AP	Zaragoza (4)	naturaleza jca.deudas privativas
S	04/11/1990	AP	Zaragoza (4)	litisconsorcio pasivo
S	20/12/1990	AP	Zaragoza (3)	disposición bs privativos
S	12/01/1991	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes, presunción
S	17/01/1991	AP	Zaragoza (4)	deudas de gestión
S	01/02/1991	AP	Zaragoza (4)	adm. comunidad disuelta
S	01/02/1991	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes,gestión
S	26/02/1991	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes,disposición
S	19/04/1991	AP	Zaragoza (4)	bienes privativos
S	01/07/1991	JPI	La Almunia	bienes comunes, presunción
S	17/09/1991	AP	Zaragoza (4)	bienes comunes, presunción
S	18/10/1991	JPI	La Almunia	deudas comunes
S	19/10/1991	AP	Zaragoza (2)	deudas comunes
S	21/11/1991	AP	Teruel	liquidación comunidad conyugal
S	26/11/1991	AP	Zaragoza (4)	deud. comunes anteriores. a capítulos separación de bienes
S	07/12/1991	AP	Zaragoza (2)	bienes comunes
S	10/12/1991	AP	Zaragoza (2)	deudas comunes, capítulos
S	20/12/1991	AP	Zaragoza (4)	presunción de bienes comunes
S	13/02/1992	TSJ	Zaragoza	enaj. bien parcialmente común
S	02/03/1992	AP	Huesca	administración bs. Comunes
S	05/03/1992	AP	Huesca	deudas comunes,comerciante
S	18/03/1992	AP	Teruel	capitulaciones,cargas comunes
S	25/03/1992	TSJ	Zaragoza	disposición bienes comunes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	04/04/1992	AP	Zaragoza (2)	liq. y división comunidad,divorcio
S	18/04/1992	TS	Madrid	responsab. por deudas comunes
S	21/04/1992	AP	Zaragoza (4)	deudas comunes, liq. Comunidad
S	18/06/1992	TSJ	Zaragoza	disposición de bienes
S	30/09/1992	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes
S	09/11/1992	AP	Zaragoza (2)	disposición de bienes comunes
S	11/11/1992	AP	Zaragoza (2)	bs comunes,indemniz. Despido
S	01/12/1992	AP	Zaragoza	liquidación y división comunidad
A	10/12/1992	AP	Zaragoza (2)	disolución comunidad
S	16/12/1992	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	22/12/1992	AP	Teruel	bienes comunes y privativos
S	23/03/1993	TSJ	Zaragoza	liquidación comunidad
S	25/05/1993	AP	Huesca	presunción bs. comunes, gestión
S	13/10/1993	AP	Zaragoza (5)	gestión comunidad
S	13/11/1993	JPI	La Almunia	presunción bienes comunes
S	16/12/1993	JPI	Huesca (2)	liquidación y división comunidad
S	31/12/1993	TSJ	Zaragoza	bienes privativos
S	20/01/1994	AP	Huesca	Dº. transitorio. Apéndice
A	21/02/1994	AP	Zaragoza	deudas posteriores privativas
S	25/04/1994	AP	Zaragoza (5)	cargas de la comunidad
S	18/05/1994	JPI	Zaragoza (2)	bienes comunes, liquidación
S	28/06/1994	AP	Zaragoza (5)	deudas posteriores privativas
S	26/07/1994	AP	Huesca	disolución comunidad
S	01/09/1994	JPI	Jaca (2)	disposición vivienda habitual
S	13/09/1994	JPI	Teruel (1)	cargas comunes
S	24/09/1994	AP	Zaragoza (2)	disolución comunidad
S	26/09/1994	JPI	Fraga	disolución comunidad
S	13/10/1994	AP	Zaragoza (5)	gestión comunidad
S	26/10/1994	AP	Zaragoza (5)	Renuncia a liquidac. Comunidad
S	14/11/1994	AP	Zaragoza (2)	disolución comunidad
S	07/12/1994	JPI	Boltaña	bienes privativos, deudas
S	13/12/1994	AP	Huesca	bienes privativos, deudas
S	15/12/1994	AP	Huesca	régimen legal
S	19/12/1994	AP	Zaragoza (5)	presunción comunidad
S	04/02/1995	AP	Zaragoza (2)	deudas posteriores privativas
S	18/02/1995	TS	Madrid	gestión comunidad
S	10/03/1995	JPI	Zaragoza (3)	disposición bienes. Comunes
S	31/01/1995	JPI	Zaragoza (14)	cargas de la comunidad
S	21/02/1995	JPI	Zaragoza (6)	bienes privativos
S	22/03/1995	AP	Zaragoza (5)	gestión, deudas
S	10/04/1995	TSJ	Zaragoza	gestión comunidad
S	12/04/1995	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes y privativos
S	19/04/1995	AP	Zaragoza (2)	Aventajas
S	24/04/1995	AP	Huesca	deudas posteriores privativas
S	10/05/1995	JPI	Zaragoza (13)	bienes privativos
S	24/05/1995	TS	Madrid	gestión comunidad
S	25/05/1995	AP	Huesca	vivienda familiar
S	13/06/1995	TSJ	Zaragoza	disolución, donaciones
S	10/07/1995	AP	Huesca	bienes privativos
S	14/07/1995	AP	Zaragoza (5)	gestión comunidad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	19/07/1995	JPI	Zaragoza (13)	gestión comunidad
S	05/10/1995	AP	Huesca	bienes privativos
S	08/01/1996	JPI	Zaragoza (14)	cargas de la comunidad
S	18/01/1996	JPI	Zaragoza (13)	disolución comunidad
S	12/02/1996	TSJ	Zaragoza	disolución, aplicac. Apéndice
S	08/03/1996	JPI	Zaragoza (13)	gestión comunidad
S	15/03/1996	AP	Huesca	bienes privativos
A	21/03/1996	JPI	Huesca (2)	bienes comunes y privativos
S	10/04/1996	AP	Zaragoza (4)	disolución comunidad
S	02/05/1996	AP	Zaragoza (5)	disoluc., pensión compensat.
S	12/07/1996	JPI	Teruel (1)	disolución comunidad
S	31/07/1996	JPI	Teruel (1)	disolución comunidad
S	29/10/1996	AP	Huesca	bs. privativos, disposic.
S	18/11/1996	JPI	Zaragoza (14)	gestión comunidad
S	28/11/1996	AP	Huesca	disolución comunidad
S	29/11/1996	TSJ	Zaragoza	disolución comunidad
S	20/12/1996	TSJ	Zaragoza	cargas de la comunidad
S	12/04/1997	AP	Zaragoza	cargas de la comunidad
S	14/04/1997	JPI	Huesca (2)	liquidación comunidad
S	17/04/1997	AP	Huesca	presunción comunidad
S	07/05/1997	AP	Huesca	bienes comunes y privativos
A	12/05/1997	AP	Zaragoza (5)	cargas comunidad
S	26/05/1997	AP	Teruel	presunción comunidad
S	10/06/1997	AP	Huesca	gestión comunidad
S	13/06/1997	JPI	Zaragoza (14)	disolución comunidad
S	18/06/1997	JPI	Tarazona	disolución comunidad
S	25/06/1997	AP	Zaragoza (5)	cargas comunidad
S	18/09/1997	AP	Huesca	cargas comunidad
A	03/12/1997	AP	Zaragoza (5)	liquidación comunidad
S	05/12/1997	JPI	Tarazona	cargas comunidad
S	10/12/1997	JPI	Huesca (2)	liquidación comunidad
A	26/12/1997	JPI	Ejea (1)	disolución comunidad
S	13/01/1998	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes
S	07/02/1998	JPI	Monzón	bienes privativos
S	10/02/1998	JPI	Zaragoza (13)	liquidación comunidad
S	12/02/1998	AP	Huesca	bienes comunes y privativos
S	19/02/1998	AP	Zaragoza (5)	disolución comunidad
S	24/02/1998	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes
S	07/04/1998	AP	Zaragoza (4)	deudas posteriores privativas
S	28/04/1998	JPI	Huesca (2)	bienes comunes
S	20/05/1998	AP	Huesca	disolución comunidad
S	29/05/1998	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes, disoluc. com.
S	25/06/1998	JPI	Zaragoza (14)	deudas y bienes privativos
S	27/07/1998	JPI	La Almunia	cargas comunidad
S	28/09/1998	TS	Madrid	disposición bienes comunes
A	14/10/1998	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	27/10/1998	AP	Teruel	liquidación comunidad
S	09/11/1998	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	16/11/1998	AP	Huesca	bienes y deudas privativas
S	16/11/1998	JPI	La Almunia	disposición bienes comunes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	25/11/1998	TSJ	Zaragoza	liquidación comunidad
S	11/12/1998	JPI	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
S	22/12/1998	JPI	Jaca (2)	disolución comunidad
S	23/11/1998	AP	Teruel	liquidación comunidad
S	02/12/1998	AP	Zaragoza (5)	liquidación comunidad
S	29/01/1999	AP	Huesca	disoluc. com.,deudas comunes
S	26/02/1999	TSJ	Zaragoza	bienes comunes
A	26/02/1999	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	22/03/1999	AP	Teruel	disposición bienes comunes
S	20/04/1999	AP	Zaragoza (5ª)	deudas comunes
S	07/05/1999	AP	Zaragoza (5ª)	Ajuar
S	20/05/1999	AP	Zaragoza (5ª)	bienes comunes
S	24/05/1999	TSJ	Zaragoza	bienes comunes
S	31/05/1999	AP	Teruel	bienes comunes
S	03/06/1999	JPI	Zaragoza (2)	bienes comunes
S	14/06/1999	AP	Zaragoza (5ª)	disposición bienes comunes
S	28/06/1999	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
A	15/07/1999	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	20/07/1999	AP	Zaragoza (2ª)	disolución comunidad
S	10/09/1999	JPI	Zaragoza (14)	bienes privativos
S	10/09/1999	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes
S	27/09/1999	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
S	06/10/1999	TSJ	Zaragoza	deudas comunes
S	27/10/1999	AP	Zaragoza (5ª)	deudas comunes
S	02/11/1999	JPI	Zaragoza (14)	bienes comunes
S	16/11/1999	AP	Zaragoza (5ª)	bienes comunes
S	07/12/1999	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	09/12/1999	AP	Teruel	bienes privativos
S	09/12/1999	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes
S	11/12/1999	JPI	Huesca (2)	gestión comunidad
S	18/01/2000	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	19/01/2000	AP	Zaragoza (5)	liquidación comunidad
S	21/01/2000	AP	Teruel	liquidación comunidad
S	08/02/2000	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes
S	30/03/2000	AP	Zaragoza (5)	gestión comunidad
S	09/05/2000	TSJ	Zaragoza	liquidación comunidad
S	12/06/2000	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	03/07/2000	AP	Teruel	deudas comunes, disoluc. com.
S	07/07/2000	AP	Zaragoza (2)	deudas posteriores privativas
S	14/07/2000	JPI	Zaragoza (1)	liquidación comunidad
S	24/07/2000	AP	Zaragoza (4)	deudas comunes
S	26/07/2000	AP	Zaragoza (5)	deudas comunes
S	02/10/2000	AP	Zaragoza (4)	deudas comunes
S	06/10/2000	TSJ	Zaragoza	liquidación comunidad
S	25/10/2000	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	04/12/2000	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes
S	05/02/2001	AP	Zaragoza (4)	impugnación liquidación
S	06/02/2001	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
A	14/02/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación y embargo
S	26/02/2001	AP	Zaragoza (4)	bienes privativos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	28/02/2001	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	09/03/2001	JPI	Zaragoza (14)	presunción comunidad
A	09/04/2001	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes
S	18/04/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	27/04/2001	AP	Zaragoza (5)	deudas comunes
S	08/05/2001	AP	Zaragoza (2)	bienes privativos
S	09/05/2001	AP	Zaragoza (5)	bienes comunes
S	21/05/2001	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
S	21/05/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	22/06/2001	AP	Huesca	liquidación cauce procesal
S	22/06/2001	AP	Zaragoza (5)	Reintegros
S	05/07/2001	JPI	Teruel (2)	liquidación comunidad
S	30/07/2001	AP	Zaragoza (5)	cargas de la comunidad
S	31/07/2001	JPI	Calatayud (2)	liquidación comunidad
S	08/10/2001	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
S	09/10/2001	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	24/10/2001	JPI	Huesca (2)	liquidación comunidad
S	25/10/2001	JPI	Zaragoza (14)	cargas de la comunidad
S	30/10/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
A	13/11/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación cauce procesal
S	13/11/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	15/11/2001	JPI	Zaragoza (14)	liquidación comunidad
S	26/11/2001	AP	Zaragoza (4)	liquidación comunidad
S	17/01/2002	AP	Huesca	deudas comunes
S	08/03/2002	AP	Huesca	disposición bienes privativos
S	27/03/2002	AP	Zaragoza (5)	deudas comunes
S	20/02/2002	AP	Teruel	deudas comunes
S	22/02/2002	TSJ	Aragón	bienes privativos
S	08/03/2002	AP	Zaragoza (2)	deudas comunes
S	18/03/2002	AP	Zaragoza (2)	bien privativo: vivienda
S	08/04/2002	AP	Zaragoza (2)	pasivo comunidad
S	29/04/2002	JPI	Calatayud (1)	presunción comunidad
S	02/05/2002	AP	Zaragoza (5)	pasivo comunidad
S	07/05/2002	AP	Zaragoza (2)	bienes comunes, privativos
S	28/05/2002	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
S	03/06/2002	AP	Zaragoza (2)	bienes privativos
S	08/06/2002	AP	Teruel	liquidación comunidad
S	17/06/2002	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
A	09/07/2002	JPI	Zaragoza (14)	deudas comunes
S	31/07/2002	AP	Zaragoza (5)	liquidación comunidad
S	16/09/2002	AP	Zaragoza (2)	liquidación comunidad
S	03/10/2002	JPI	Zaragoza (14)	gestión comunidad
S	04/10/2002	JPI	Zaragoza (14)	gestión comunidad
S	29/10/2002	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	04/12/2002	AP	Teruel	bienes privativos
A	30/01/2003	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	17/02/2003	AP	Zaragoza (2ª)	liquidación comunidad
S	27/02/2003	AP	Huesca	gestión comunidad
S	11/03/2003	AP	Zaragoza (2ª)	liquidación comunidad
S	24/03/2003	AP	Zaragoza (2ª)	liquidación comunidad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	28/03/2003	JPI	Zaragoza (14)	pasivo comunidad
A	09/06/2003	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
S	10/06/2003	AP	Huesca	liquidación comunidad
S	12/06/2003	AP	Huesca	pasivo comunidad
S	20/06/2003	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
S	07/07/2002	TSJ	Aragón	pasivo comunidad
S	14/07/2003	AP	Zaragoza (5ª)	bienes comunes
S	17/07/2003	JPI	Zaragoza (17)	bienes comunes
S	30/07/2003	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
S	08/09/2003	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación comunidad
S	24/09/2003	AP	Zaragoza (5ª)	bienes comunes
S	09/10/2003	JPI	Zaragoza (17)	gestión comunidad
S	22/10/2003	JPI	Zaragoza (17)	comunidad postconsorcial
S	23/10/2003	AP	Zaragoza (5ª)	liquidación comunidad
S	28/10/2003	AP	Huesca	bienes comunes
S	06/11/2003	JPI	Calamocha	liquidación comunidad
S	18/11/2003	JPI	Zaragoza (2)	bienes comunes
S	26/12/2003	AP	Zaragoza (5ª)	liquidación comunidad
S	21/01/2004	AP	Zaragoza	Liquidación, inventario parcial
A	26/01/2004	JPI	Zaragoza (5)	pasivo comunidad
S	02/02/2004	JPI	Zaragoza (6)	Inventario
S	04/02/2004	JPI	Teruel (1)	bienes privativos
S	06/02/2004	JPI	Teruel (1)	disolución com. Hereditaria
S	11/02/2004	AP	Zaragoza	liquidación inventario
S	18/02/2004	JPI	Zaragoza (6)	liquidación, partición, oposición
S	19/02/2004	AP	Zaragoza	liquidación sociedad
S	10/03/2004	AP	Huesca	Liquidación
S	24/03/2004	JPI	Zaragoza (6)	Inventario
S	25/03/2004	AP	Zaragoza	Liquidación
S	12/04/2004	AP	Zaragoza	liquidación inventario
S	26/04/2004	JPI	Zaragoza (6)	partición oposición
S	05/05/2004	JPI	Zaragoza (6)	Inventario
S	17/05/2004	JPI	Zaragoza (6)	Inventario
S	05/05/2004	JPI	Zaragoza (6)	inventario, liquidación
S	01/06/2004	JPI	Jaca (1)	bienes comunes
S	18/06/2004	JPI	Zaragoza (6)	liquidación, valoración VPO
S	29/06/2004	JPI	Zaragoza (6)	inventario, bienes muebles
S	09/07/2004	JPI	Zaragoza (6)	liquidación, pasivo
S	19/07/2004	JPI	Zaragoza (6)	Inventario
S	13/09/2004	AP	Zaragoza	liquidación dos comunidades
S	20/09/2004	JPI	Calamocha (1)	bienes comunes
S	20/09/2004	AP	Zaragoza	liquidación inventario
S	30/09/2004	AP	Zaragoza	inventario
S	08/10/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	10/11/2004	AP	Huesca	Liquidación
S	11/10/2004	JPI	Zaragoza (6)	
S	15/10/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	18/10/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	22/10/2004	JPI	Zaragoza (12)	comunidad post consorcial
S	26/10/2004	JPI	Zaragoza (17)	comunidad post consorcial

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	26/10/2004	AP	Zaragoza	disolución, retroacción efectos
S	26/10/2004	AP	Zaragoza	Inventario
S	28/10/2004	JPI	Calamocha (1)	Liquidación
S	02/11/2004	AP	Zaragoza	disolución
S	03/11/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
A	04/11/2004	AP	Zaragoza	
S	09/11/2004	JPI	Barbastro	Liquidación
S	09/11/2004	AP	Zaragoza	Inventario
S	15/11/2004	AP	Zaragoza	Liquidación
S	22/11/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	25/11/2004	AP	Zaragoza	
S	10/12/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	10/12/2004	AP	Zaragoza	Liquidación
S	13/12/2004	JPI	Monzón (2)	disposición bienes comunes
A	15/12/2004	AP	Zaragoza	Liquidación
S	20/12/2004	TSJ	Zaragoza	comunidad post matrimonial
A	22/12/2004	AP	Zaragoza	comunidad pasivo
S	22/12/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	27/12/2004	AP	Zaragoza	liquidación inventario
S	28/12/2004	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	10/01/2005	AP	Zaragoza (2ª)	deuda común
S	24/01/2005	TSJ	Aragón C-A S2ª	rel. entre patrimonios
S	01/02/2005	AP	Zaragoza (2ª)	Liquidación
S	07/02/2005	TSJ	Aragón C-A S2ª	rel. entre patrimonios
S	07/02/2005	AP	Zaragoza (4ª)	gestión bienes comunes
S	14/02/2005	AP	Zaragoza (5ª)	b. Comunes.ampliac o restricc.cdad
S	07/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	b. comunes y privativos
S	17/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	liquidación. Vivienda familiar
S	18/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	22/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	05/04/2005	AP	Teruel	Liquidación
S	11/05/2005	TSJ	Aragón (S. Civil)	liquidación. B. comunes y privat.
A	16/05/2005	JPI	Zaragoza (14)	gestión bienes comunes
A	19/05/2005	AP	Zaragoza (4ª)	liquidación y división
S	25/05/2005	AP	Zaragoza (4ª)	b. comunes y privativos
S	01/06/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	b.comunes y privativos
S	06/06/2005	AP	Zaragoza (4ª)	gestión bienes comunes
S	01/07/2005	AP	Zaragoza (2ª)	Liquidación
S	01/07/2005	AP	Huesca	Liquidación
S	08/07/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	Liquidación
S	22/07/2005	AP	Zaragoza (5ª)	cargas comunidad
S	21/09/2005	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	20/10/2005	AP	Zaragoza (4ª)	b. privativos y comunes
S	09/11/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	Liquidación
S	17/11/2005	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	30/12/2005	AP	Zaragoza (5ª)	tercería de dominio
S	13/01/2006	AP	Zaragoza (5ª)	pasivo de la comunidad
S	16/01/2006	AP	Zaragoza (4ª)	b. comunes y privativos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	31/01/2006	AP	Zaragoza (5ª)	inventario y liquidación
S	01/02/2006	AP	Zaragoza (2ª)	Liquidación
A	01/02/2006	AP	Zaragoza (2ª)	pasivo comunidad
S	09/02/2006	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	27/02/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	presunción consorcialidad
S	27/02/2006	AP	Teruel	disolución soc. conyugal
S	20/03/2006	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	27/03/2006	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
A	28/03/2006	AP	Zaragoza (2ª)	pasivo comunidad
S	03/03/2006	AP	Zaragoza (5ª)	división y liquidación soc. conyugal
S	05/04/2006	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	21/04/2006	AP	Teruel	liquidación soc. conyugal
A	19/05/2006	JPI	Zaragoza (14)	pasivo de la comunidad
S	31/05/2006	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación
S	08/06/2006	JPI	Monzón (1)	Disolución
S	16/06/2006	AP	Huesca	b. comunes y privativos
S	23/06/2006	JPI	Zaragoza (2)	inventario, liquidación
S	04/07/2006	JPI	Zaragoza (16)	Inventario,liquidación
S	13/07/2006	JPI	Ejea (2)	Liquidación
S	19/07/2006	AP	Teruel	presunción consorcialidad
S	22/09/2006	JPI	Monzón (1)	Disolución
S	20/10/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	Liquidación
S	23/10/2006	JPI	Ejea (2)	Liquidación
S	24/10/2006	AP	Teruel	b. comunes y privativos
S	08/11/2006	AP	Huesca	b. comunes y privativos
S	30/11/2006	AP	Huesca	gestión b. comunes
S	11/12/2006	TSJ	Aragón (S. Civil)	pasivo de la comunidad
S	19/12/2006	AP	Huesca	división y liquidación
S	22/12/2006	JPI	Teruel (2)	pacto al más viviente
S	18/12/2007	AP	Teruel	Bienes comunes y privativos
S	9/01/2007	TSJA	Aragón	Bienes comunes y privativos
S	23/01/2007	AP	Huesca	Bienes comunes y privativos
S	27/03/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Bienes comunes y privativos
S	13/04/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Bienes comunes y privativos
S	2/05/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Bienes comunes y privativos
S	26/06/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Bienes comunes y privativos
S	12/09/2007	JPI	Zaragoza 17	Bienes comunes y privativos
S	26/09/2007	TSJA	Aragón	Bienes comunes y privativos
S	28/09/2007	TSJA	Aragón	Bienes comunes y privativos
S	26/11/2007	JPI	Calatayud 2	Activo y pasivo de la Cdad. consorcial
S	15/03/2007	TSJA	Aragón	Gestión de la comunidad
A	2/04/2007	JPI	Zaragoza 14	Gestión de los bienes comunes
S	8/05/2007	JPI	Zaragoza 14	Gestión de la comunidad
S	21/05/2007	AP	Zaragoza (5ª)	Gestión de los bienes comunes
S	22/05/2007	JPI	Zaragoza 14	Gestión de los bienes comunes
S	26/011/2007	TSJA	Aragón	Gestión de la Comunidad
S	19/03/2007	AP	Huesca	Disolución de la Comunidad
S	6/09/2007	AP	Huesca	Disolución de la Comunidad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	12/03/2007	JPI	Teruel 2	Liquidación de la comunidad
S	2/07/2007	AP	Zaragoza (5ª)	Liquidación de la Comunidad
S	29/10/2007	AP	Huesca	Liquidación de la Comunidad
S	30/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Bienes comunes y privativos
S	24/06/2008	AP	Teruel	Bienes comunes y privativos
S	29/02/2008	AP	Huesca	Pasivo de la comunidad
S	8/05/2008	JPI	Zaragoza (14)	Pasivo de la comunidad
A	4/11/2008	JPI	Zaragoza (14)	Pasivo de la comunidad
S	31/01/2008	AP	Huesca	Gestión bienes comunes
S	16/01/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	21/01/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	28/01/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	20/02/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	31/03/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	31/03/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	11/04/2008	JPI	La Almunia (1)	Inventario
S	25/04/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	29/04/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	12/05/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
A	20/05/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	10/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	24/06/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	1/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	8/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	9/07/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	9/07/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	10/07/2008	JPI	Zaragoza (16)	Liquidación
S	14/07/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	18/07/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	22/07/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	25/07/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	9/09/2008	AP	Zaragoza (2)	Liquidación
S	12/09/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	26/09/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	30/09/2008	AP	Huesca	Liquidación
S	8/10/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	14/10/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	5/11/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	17/11/2008	AP	Huesca	Liquidación
S	19/11/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	3/12/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	10/12/2008	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación
S	19/12/2008	AP	Huesca	Liquidación
S	29/01/2009	AP	Teruel	Bienes comunes y privativos
S	25/03/2009	JPI	Huesca (2)	Bienes comunes y privativos
S	03/04/2009	AP	Huesca	Bienes comunes y privativos
S	15/07/2009	AP	Zaragoza (4)	Bienes comunes y privativos
S	03/09/2009	JPI	Zaragoza (3)	Bienes comunes y privativos
S	24/09/2009	JPI	Daroca	Bienes comunes y privativos
S	23/10/2009	AP	Zaragoza (4)	Bienes comunes y privativos

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	14/07/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Pasivo de la comunidad
S	15/10/2009	AP	Huesca	Pasivo de la comunidad
S	20/10/2009	AP	Zaragoza (5)	Gestión de los bienes comunes
S	03/02/2009	JPI	Zaragoza (6)	Disolución de la comunidad
S	05/02/2009	JPI	Zaragoza (6)	Disolución de la comunidad
S	03/03/2009	AP	Zaragoza (2)	Disolución de la comunidad
S	06/05/2009	AP	Zaragoza (2)	Disolución de la comunidad
S	08/09/2009	JPI	Zaragoza (6)	Disolución de la comunidad
S	09/01/2009	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación de la comunidad
S	23/01/2009	AP	Zaragoza (4)	Liquidación de la comunidad
S	20/02/2009	AP	Teruel	Liquidación de la comunidad
S	10/03/2009	AP	Teruel	Liquidación de la comunidad
S	26/05/2009	AP	Huesca	Liquidación de la comunidad
S	09/06/2009	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	15/06/2009	AP	Zaragoza (5)	Liquidación de la comunidad
S	30/06/2009	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	07/07/2009	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	09/09/2009	JPI	Zaragoza (6)	Liquidación de la comunidad
S	29/09/2009	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	21/12/2009	AP	Zaragoza (4)	Liquidación de la comunidad
S	19/01/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad.
S	26/01/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
	19/02/2010	AP	Zaragoza (4)	División del patrimonio consorcial
S	23/02/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	02/03/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	16/03/2010	JPI	Zaragoza (14)	Liquidación de la comunidad
S	30/03/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
A	16/04/2010	TSJ	Zaragoza	Cuestión incidental en procedimiento de liquidación régimen económico matrimonial. Resoluciones recurribles en casación
A	16/04/2010	TSJ	Zaragoza	Formación de inventario. Resoluciones recurribles en casación
S	29/04/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de la comunidad
S	11/05/2010	AP	Huesca	Bienes comunes y privativos
S	14/05/2010	TSJ	Zaragoza	Bienes comunes y privativos
A	14/05/2010	TSJ	Zaragoza	Cuestión incidental en procedimiento de liquidación régimen económico matrimonial. Resoluciones recurribles en casación
S	01/06/2010	AP	Zaragoza	Liquidación consorcial. Pasivo del inventario
A	10/06/2010	AP	Zaragoza (4)	Incidente de privaticidad o ganancialidad pasiva
S	24/06/2010	AP	Huesca	Liquidación consorcial. Inventario. Presunción de comunidad
S	15/09/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación consorcial. Formación de inventario
S	03/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación consorcial. Inventario
S	16/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación consorcial. Inventario
S	16/11/2010	AP	Zaragoza (2)	Disolución sociedad conyugal. Inventario

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	03/12/2010	TSJ	Zaragoza	Bienes comunes y privativos
S	21/12/2010	AP	Zaragoza (2)	Liquidación consorcial. Inventario
S	01/02/2011	AP	Zaragoza (2)	Formación de inventario
S	01/02/2011	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de sociedad consorcial
S	08/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de comunidad
S	21/06/2011	AP	Zaragoza (2)	Liquidación régimen consorcial
S	29/07/2011	AP	Huesca	Inventario judicial de sociedad consorcial
S	04/10/2011	AP	Zaragoza (2)	Liquidación sociedad consorcial
S	08/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Liquidación sociedad consorcial. Inventario
S	15/11/2011	AP	Zaragoza (2)	Inventario
S	16/12/2011	AP	Zaragoza (4)	Bienes de la comunidad conyugal
S	20/12/2011	AP	Zaragoza (2)	Inventario
S	30/12/2011	AP	Zaragoza (4)	Pacto extensión de la comunidad
S	17/01/2012	JPI	Zaragoza (14)	Actos de defensa de bien consorcial
S	21/02/2012	AP	Zaragoza (2)	Liquidación sociedad conyugal
S	29/02/2012	TSJ	Zaragoza	Formación y aprobación de inventario
S	27/03/2012	AP	Zaragoza (2)	Liquidación sociedad conyugal
S	11/04/2012	AP	Zaragoza (2)	Liquidación sociedad conyugal
S	24/05/2012	AP	Huesca	Liquidación de sociedad consorcial
S	19/06/2012	AP	Zaragoza (2)	Liquidación de sociedad consorcial
S	04/10/2012	JPI	Zaragoza (14)	Adquisición de inmueble familiar con dinero privativo
S	22/11/2012	TSJ	Zaragoza	Liquidación de sociedad consorcial
A	16/01/2013	AP	Zaragoza (4)	Responsabilidad de bienes comunes por deuda de un cónyuge
A	15/02/2013	TSJ	Zaragoza	Formación de inventario en liquidación consorcial
S	24/09/2013	AP	Zaragoza (5)	Deuda dineraria en disolución de la comunidad
S	11/10/2013	AP	Teruel	Disolución de la comunidad
S	15/11/2013	JPI	Ejea (1)	Formación de inventario en liquidación consorcial
A	17/03/2014	JPI	Zaragoza (14)	Responsabilidad por deudas comunes
S	15/05/2014	AP	Zaragoza (4ª)	Enriquecimiento injusto entre patrimonios
S	29/07/2014	AP	Zaragoza (4ª)	Liquidación de la comunidad
S	07/11/2014	AP	Zaragoza (5)	Liquidación de la comunidad
S	14/01/2015	TSJ	Zaragoza	Disolución y liquidación de régimen económico y comunidad conyugal continuada
S	09/06/2016	JPI	Zaragoza (14)	Bienes privativos o comunes
S	27/10/2016	AP	Teruel	Liquidación de sociedad conyugal

67. Comunidad conyugal continuada.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	30/09/1992	AP	Zaragoza (5)	comunidad conyugal continuada
S	05/12/1995	AP	Teruel	comunidad conyugal continuada
A	16/07/1997	AP	Zaragoza (5)	comunidad conyugal continuada
S	08/02/2000	AP	Huesca	comunidad conyugal continuada
S	31/07/2001	AP	Zaragoza (5)	comunidad conyugal continuada
S	24/05/2002	TSJ	Aragón	comunidad conyugal continuada
S	19/01/2005	AP	Huesca	comunidad post-consorcial
S	01/07/2005	AP	Huesca	comunidad post-consorcial

68. Viudedad.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/01/1990	AP	Zaragoza (4)	Viudedad
S	28/02/1990	TS	Madrid	derecho expectante de viudedad
S	10/04/1990	TS	Madrid	viudedad voluntaria
S	30/04/1990	TS	Madrid	viudedad,transmisión sucesoria
S	27/11/1990	AP	Zaragoza (4)	inventario,fianza,sanc. falta inv.
S	14/12/1990	AP	Huesca	d. expect. de viudedad,renuncia
S	26/02/1991	AP	Zaragoza (4)	derecho expectante de viudedad
S	26/02/1991	JPI	Fraga	viudedad,limitaciones
A	18/04/1991	JPI	Monzón	viudedad,extinción
S	05/05/1991	AP	Zaragoza (4)	expectante,abuso de derecho
S	14/06/1991	AP	Zaragoza (4)	Viudedad
S	16/07/1991	AP	Huesca	viudedad, limitaciones.
A	22/11/1991	JPI	Zaragoza (6)	expectante,extinción judicial
S	13/02/1992	TSJ	Zaragoza	d. expect. de viudedad, renuncia
S	24/03/1992	AP	Zaragoza (4)	viudedad, gastos comunidad
S	08/06/1992	JPI	Ejea (1)	derecho expectante de viudedad
S	24/06/1992	AP	Zaragoza (2)	d. expect. de viudedad, renuncia
S	13/11/1993	JPI	La Almunia	derecho expectante de viudedad
S	30/11/1993	JPI	Huesca (2)	derecho expectante de viudedad
S	07/03/1994	AP	Zaragoza (2)	limitaciones viudedad
S	23/03/1994	AP	Barcelona	renuncia usufructo
S	15/04/1994	JPI	Zaragoza (13)	extinción usufructo vidual
S	11/07/1994	AP	Zaragoza (2)	d. expect. de viudedad, renuncia
S	11/07/1994	TSJ	Zaragoza	viudedad en general
S	26/10/1994	AP	Zaragoza (5)	renuncia viudedad
S	04/04/1995	TSJ	Zaragoza	extinción usufructo vidual
S	20/04/1995	AP	Barcelona (16)	extinción usufructo vidual
S	10/07/1995	AP	Huesca	usufructo vidual
S	05/10/1995	AP	Huesca	bienes excluidos
S	07/02/1996	AP	Zaragoza (5)	renuncia viudedad
S	12/02/1996	TSJ	Zaragoza	viudedad, Apéndice
S	14/05/1996	JPI	Huesca (2)	sanción falta inventario

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	16/09/1996	AP	Zaragoza (4)	limitaciones viudedad
S	29/10/1996	AP	Huesca	derecho expectante de viudedad
S	30/10/1996	TSJ	Zaragoza	d. expect. viudedad, extinción
S	21/05/1997	AP	Zaragoza (2)	intervención nudo-propietarios
S	13/06/1997	JPI	Zaragoza (14)	usufructo vidual
S	18/06/1997	JPI	Tarazona	extinción dº expectante
S	12/09/1997	JPI	Calamocha	extinción usufructo vidual
S	20/09/1997	AP	Zaragoza (5)	usufructo vidual
S	12/01/1998	AP	Zaragoza (5)	usufructo vidual
S	19/12/1998	AP	Zaragoza (5)	derecho expectante de viudedad
S	28/01/1998	AP	Huesca	Inalienabilidad
S	02/02/1998	AP	Zaragoza (5)	usufructo vidual
S	16/02/1998	AP	Zaragoza (5)	usufructo vidual
S	20/02/1998	TS	Madrid	usufructo vidual
A	25/02/1998	AP	Huesca	usufructo vidual
A	26/05/1998	JPI	Zaragoza (14)	usufructo vidual
S	30/07/1998	AP	Huesca	usufructo vidual
S	18/09/1998	TSJ	Aragón	usufructo vidual
S	27/10/1998	JPI	Zaragoza (14)	usufructo vidual
S	11/12/1998	JPI	Zaragoza (2)	extinción expectante
S	04/11/1998	JPI	Zaragoza (12)	usufructo, posesión
S	07/01/1999	JPI	Zaragoza (14)	usufructo vidual
S	07/05/1999	AP	Zaragoza (5ª)	usufructo vidual
S	26/10/1999	JPI	Zaragoza (2)	usufructo vidual
S	06/11/1999	AP	Teruel	extinción usufructo
S	03/01/2000	JPI	Huesca (2)	derecho expectante de viudedad
S	19/04/2000	AP	Zaragoza (5ª)	usufructo vidual
S	21/03/2000	AP	Huesca	usufructo vidual
S	14/04/2000	JPI	Huesca (3)	usufructo vidual
S	10/07/2000	AP	Zaragoza (2ª)	usufructo vidual
S	17/07/2000	AP	Zaragoza (5ª)	usufructo vidual
S	21/11/2000	AP	Huesca	usufructo vidual
S	11/12/2000	AP	Zaragoza (4ª)	usufructo vidual
S	18/06/2001	AP	Zaragoza (5ª)	usufructo vidual
S	22/06/2001	AP	Huesca	usufructo vidual
S	24/07/2001	AP	Teruel	usufructo vidual
S	11/09/2001	JPI	Zaragoza ()	usufructo vidual
A	21/11/2001	JPI	Zaragoza (14)	aval usufructo
S	05/11/2001	TSJ	Aragón	renuncia usufructo
S	26/04/2002	JPI	Teruel (2)	derecho expectante de viudedad
S	30/04/2002	AP	Teruel	extinción usufructo vidual
S	10/09/2002	AP	Teruel	derecho expectante de viudedad
S	24/09/2003	TSJ	Aragón	Extinción
S	04/11/2003	JPI	Zaragoza (4)	extinción usufructo vidual
S	28/11/2003	TSJ	Aragón	usufructo, rec. Revisión
S	09/12/2003	AP	Zaragoza (5)	fianza, extinción
A	28/04/2004	JPI	Zaragoza (14)	Viudedad
S	01/07/2004	AP	Huesca	Viudedad
S	06/07/2004	JPI	Alcañiz (2)	legitimación de usufructuario
S	04/11/2004	JPI	Calamocha (1)	responsabilidad usufructuario

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	07/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	dº expectante de viudedad.extinción
S	08/03/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	usufructo vidual
S	08/06/2005	AP	Huesca	dº expectante de viudedad
S	27/09/2005	JPI	Zaragoza (4)	dº expectante de viudedad
S	18/11/2005	JPI	Zaragoza (2)	Extinción dº expect. Viudedad
S	02/12/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	Renuncia dº expectante viudedad
S	21/12/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	Extinción usufructo viudedad
S	14/02/2006	AP	Zaragoza (2ª)	usufructo vidual
S	14/07/2006	AP	Zaragoza (4ª)	dº expectante de viudedad
S	22/09/2006	JPI	Monzón (1)	dº expectante de viudedad. Extinción
S	05/10/2006	AP	Huesca	dª expectante de viudedad
A	27/03/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Dº expectante de viudedad
S	10/04/2007	JPI	Zaragoza 17	Usufructo vidual
S	14/05/2007	JPI	Zaragoza 14	Usufructo vidual
S	17/05/2007	JPI	Zaragoza 3	Usufructo vidual
S	29/05/2007	JPI	Zaragoza 14	Usufructo vidual
S	28/04/2009	AP	Zaragoza (4)	Viudedad
S	06/07/2009	JPI	Zaragoza (3)	Viudedad
S	21/09/2009	AP	Zaragoza (4)	Viudedad
S	17/11/2009	AP	Zaragoza (5)	Usufructo vidual
S	18/11/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Usufructo vidual
S	03/07/2013	TSJ	Zaragoza	Usufructo vidual

71. Derecho de Sucesiones. Normas comunes.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	10/10/1990	JPI	Tarazona	consorcio foral
S	12/11/1990	TS	Madrid	consorcio foral
S	21/12/1990	TS	Madrid	sustitución legal, Dº transit.
S	15/06/1991	AP	Teruel	responsabilidad de heredero
S	27/05/1992	AP	Zaragoza (2)	Renuncia y sustitución legal
S	30/07/1993	JPI	Boltaña	modos delación hereditaria
S	09/10/1993	TSJ	Zaragoza	consorcio foral
S	13/11/1993	JPI	La Almunia	Sucesión en general
S	18/07/1994	AP	Zaragoza (5)	Beneficio de inventario
S	15/11/1994	JPI	Jaca (2)	Colación
S	27/02/1995	AP	Huesca	Dº. transitorio.
S	24/11/1995	JPI	Zaragoza (2)	Colación
S	02/12/1995	AP	Teruel	consorcio foral
S	28/03/1996	JPI	Huesca (2)	consorcio foral
S	13/05/1996	AP	Huesca	consorcio foral
S	05/02/1997	JPI	Calamocha	Colación
A	20/03/1997	AP	Huesca	sustitución legal
S	16/05/1997	JPI	Tarazona	consorcio foral
S	04/06/1997	AP	Zaragoza (2)	Beneficio de inventario
S	14/06/1997	AP	Teruel	Colación

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	29/09/1997	JPI	Tarazona	sustitución legal
A	04/10/1997	JPI	Tarazona	sustitución legal
A	08/10/1997	JPI	Zaragoza (14)	sustitución legal
S	18/11/1997	JPI	Tarazona	consorcio foral
S	28/04/1998	JPI	Huesca (2)	Inventario
S	22/06/1998	JPI	Zaragoza (14)	Beneficio de inventario
A	30/07/1998	AP	Zaragoza (5)	sustitución legal
S	22/10/1998	AP	Zaragoza (4)	consorcio foral
S	27/10/1998	JPI	Zaragoza (14)	Colación
S	30/04/1999	AP	Zaragoza (5ª)	Beneficio de inventario
S	11/05/1999	AP	Zaragoza (5ª)	Beneficio de inventario
S	06/07/1999	AP	Zaragoza (4ª)	Colación
A	29/02/2000	AP	Huesca	deudas del causante
A	22/03/2000	AP	Zaragoza	deudas del causante
S	25/05/2000	JPI	Huesca (2)	Aventajas
S	11/05/2000	JPI	Zaragoza (14)	gastos funeral y entierro
S	07/06/2000	AP	Teruel	sustitución legal
A	16/03/2000	AP	Zaragoza (5ª)	Beneficio de inventario
S	14/06/2001	AP	Huesca	Colación
S	26/04/2002	JPI	Teruel (2)	consorcio foral
S	10/09/2002	AP	Teruel	consorcio foral
A	26/09/2002	JPI	Zaragoza (14)	aceptación herencia
S	21/03/2002	AP	Huesca	administración herencia
S	15/07/2003	JPI	Zaragoza (17)	aceptación herencia
S	05/12/2003	JPI	Tarazona	consorcio foral
A	31/03/2003	AP	Zaragoza (5)	Renuncia
S	28/10/2003	AP	Zaragoza (5)	deudas del causante
S	18/02/2004	AP	Zaragoza	Partición herencia
S	08/10/2004	AP	Huesca	adquisición herencia
S	10/11/2004	AP	Zaragoza	consorcio foral
S	22/02/2005	JPI	Zaragoza (14)	aceptación tácita de la herencia
S	05/07/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	consorcio foral
S	01/12/2005	AP	Teruel	Sucesión en general
S	22/12/2005	JPI	Zaragoza (17)	aceptación herencia..renuncia.
S	23/01/2006	AP	Zaragoza (4ª)	consorcio foral
A	01/02/2006	AP	Zaragoza (2ª)	consorcio foral
A	21/02/2006	AP	Zaragoza (2ª)	responsabilidad heredero
S	10/03/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	aceptación herencia
S	01/06/2006	JPI	Zaragoza (14)	responsabilidad del heredero
S	13/03/2006	JPI	Zaragoza (3)	responsabilidad del heredero
S	25/07/2006	JPI	Zaragoza (14)	Sucesión a favor descendientes
A	27/09/2006	JPI	Zaragoza (16)	Interpelación aceptación herencia
S	23/10/2006	AP	Huesca	ley aplicable
S	28/11/2006	JPI	Zaragoza (17)	herencia yacente
A	19/02/2007	AP	Huesca	Plazo para aceptar o repudiar la herencia
A	20/03/2007	JPI	Zaragoza 14	Aceptación herencia
S	19/04/2007	AP	Huesca	Aceptación o repudiación
S	11/05/2007	TSJA	Aragón	Consorcio foral

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	23/05/2007	TSJA	Aragón	Consorcio foral
S	10/10/2007	JPI	Teruel 2	Sucesión en favor descendientes
S	13/03/2008	AP	Zaragoza (4)	División de herencia
A	3/07/2008	JPI	Zaragoza (12)	Excepciones
S	25/01/2008	AP	Zaragoza (4)	Consorcio foral
S	28/02/2008	JPI	Zaragoza (12)	Consorcio foral
S	09/01/2009	AP	Teruel	Sucesión cónyuge viudo
S	18/01/2010	JPI	La Almunia (2)	División de le herencia
S	31/07/2009	AP	Huesca	División de la herencia
S	10/03/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Consorcio foral
S	06/03/2012	AP	Zaragoza (5)	Partición de herencia. Inventario
S	26/04/2012	JPI	Ejea (1)	Determinación de masa hereditaria
S	05/11/2013	TSJ	Zaragoza	División de herencia
A	16/05/2014	JPI	Zaragoza (14)	Plazo para aceptación o repudiación de herencia
A	16/05/2014	JPI	Zaragoza (14)	Plazo para aceptación o repudiación de herencia
S	20/10/2014	AP	Zaragoza (4ª)	Renuncia a la herencia
S	03/03/2015	TSJ	Sala de lo Civil	Troncalidad
S	05/06/2015	JPI	Zaragoza (14)	Heredero y legatario
S	31/07/2015	AP	Zaragoza (4ª)	Heredero/Acreedor
S	21/09/2015	AP	Zaragoza (5ª)	Partición de herencia

72. Sucesión testamentaria.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	14/11/1990	AP	Zaragoza (4)	test. mancom.,irretroactividad
S	12/01/1991	JPI	La Almunia	testamento mancomunado
S	29/05/1991	TSJ	Zaragoza	testamento mancomunado
A	07/09/1991	JPI	Barbastro	test. ante capellán, adveración
S	11/03/1992	AP	Teruel	testamento mancomunado
S	08/09/1993	AP	Zaragoza (4)	testamento notarial
S	30/09/1993	TSJ	Zaragoza	testamento notarial
S	30/11/1993	JPI	Huesca (2)	revocación testamento
S	18/05/1994	JPI	Zaragoza (2)	testamento mancomunado
S	19/12/1994	AP	Zaragoza (5)	revocación test. mancomunado
A	16/12/1995	AP	Zaragoza (2)	testamento mancomunado
S	16/02/1996	TS	Madrid	testamento mancomunado
S	19/04/1996	JPI	Huesca (2)	testamento mancomunado
S	20/09/1996	AP	Zaragoza (5)	revocación testamento
S	14/02/1997	AP	Huesca	testamento mancomunado
S	31/07/1997	AP	Zaragoza (5)	condición testamentaria
A	16/12/1997	JPI	Zaragoza (14)	testamento mancomunado
S	12/01/1998	AP	Zaragoza (5)	testamento mancomunado
S	21/01/1998	AP	Zaragoza (5)	testamento mancomunado
A	12/02/1998	JPI	Zaragoza (2)	testamento mancomunado
A	08/05/1998	JPI	Boltaña	testamento mancomunado
S	28/09/1998	TS	Madrid	disposición testam. bs. comunes
A	18/07/1998	AP	Huesca	testamento mancomunado

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	14/12/1998	AP	Zaragoza (4)	testamento mancomunado
S	28/12/1998	AP	Teruel	nulidad parcial
S	04/03/1999	AP	Zaragoza (5)	testamento mancomunado
S	03/01/1998	JPI	Huesca (2)	testamento mancomunado
S	14/04/2000	JPI	Huesca (3)	nulidad parcial
S	25/05/2000	JPI	Huesca (2)	testamento mancomunado
S	28/11/2001	AP	Huesca	testamento mancomunado
S	25/02/2002	AP	Zaragoza (2)	testamento mancomunado
S	28/11/2002	AP	Huesca	prescripción acción
S	23/05/2003	JPI	Zaragoza (17)	Preterición
S	10/04/2003	TSJ	Aragón	nulidad disposiciones
S	25/02/2004	AP	Zaragoza (2)	comunidad hereditaria
S	08/07/2004	JPI	Zaragoza (12)	disposiciones correspectivas
S	20/09/2004	JPI	Zaragoza (14)	capacidad testador
S	07/10/2004	JPI	Zaragoza (12)	testamento mancomunado
S	13/12/2004	JPI	Zaragoza (12)	legado, parejas de hecho
A	25/01/2005	AP	Zaragoza (2ª)	Sucesión pacc.dº de transmisión
S	17/02/2005	AP	Zaragoza (5ª)	efectos aceptación herencia
S	04/05/2005	AP	Zaragoza (5ª)	efectos del pacto al más viviente
S	20/06/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	ineficacia dispos.testa.Aceptación
S	28/06/2005	AP	Huesca	testamento mancomunado
S	27/01/2006	AP	Huesca	interpreta dispos. Testamentarias
S	30/03/2006	JPI	Zaragoza (2)	Renuncia
S	18/05/2006	JPI	Zaragoza (17)	pº capacidad testador
S	16/06/2006	AP	Huesca	responsab. Cohered. después partición
S	05/09/2006	AP	Huesca	interpretación dispos. Testamentarias
S	06/10/2006	JPI	Zaragoza (2)	test. mancomunado;correspectividad
S	31/10/2006	JPI	Monzón (1)	testamento: efectos separación matrim.
S	08/11/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	interpretación dispos. Testamentarias
S	10/01/2007	JPI	Teruel 2	Legado
S	21/02/2007	AP	Zaragoza (5ª)	Testamento nulo
S	30/03/2007	AP	Huesca	Incapacidad del testador
A	19/06/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Llamamiento a legítimos herederos
S	19/07/2007	JPI	Zaragoza 12	Nulidad del testamento
S	28/09/2007	JPI	Zaragoza 12	Liquidación consorcio y división de herencia
S	28/11/2007	JPI	Zaragoza 12	Interpretación del testamento
S	28/11/2007	JPI	Zaragoza 17	Improcedencia nulidad testamento
S	21/01/2008	AP	Zaragoza (5)	Validez del testamento
S	28/01/2008	JPI	Zaragoza (15)	Testamento mancomunado
S	25/02/2008	JPI	Zaragoza (15)	Testamento de ciego
S	30/05/2008	AP	Zaragoza (5)	Claúsula correspectiva
S	8/09/2008	JPI	Zaragoza (14)	Interpretación testamento
A	29/12/2008	AP	Huesca	Validez testamento
S	26/02/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Interpretación testamento
S	05/10/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Validez del testamento
S	20/10/2009	JPI	Zaragoza (3)	Nulidad testamentaria

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/01/2010	AP	Zaragoza (5)	Nulidad testamento abierto. Legitimación. Capacidad
A	21/04/2010	AP	Zaragoza (4)	Sucesión testamentaria recíproca
A	28/06/2011	TSJ	Zaragoza	Incumplimiento obligaciones del instituido. Inadmisión recurso casación
S	27/04/2011	AP	Huesca	Institución mutua y recíproca.Pacto al más viviente
S	22/09/2011	TSJ	Zaragoza	Derechos descendientes de legitimarios preferentes. Sustitución
S	22/11/2011	JPI	Zaragoza	Interpretación disposición testamentaria en supuesto de conmoriencia
S	20/07/2012	AP	Zaragoza (4)	Interpretación de testamento. Comorencia
A	24/10/2012	JPI	Zaragoza (17)	Interpretación de testamento. Existencia de legado
S	08/11/2012	JPI	Zaragoza (14)	Institución mutua y recíproca.Pacto al más viviente
S	18/02/2013	TSJ	Zaragoza	Interpretación de testamento. Pacto al más viviente. Conmoriencia
S	12/03/2013	AP	Teruel	Interpretación de testamento. Cláusula condicional
S	27/03/2013	AP	Zaragoza	Interpretación de testamento. Legatario. Heredero de cosa cierta.
S	04/04/2013	AP	Zaragoza (5)	Naturaleza de legado en testamento mancomunado
A	06/11/2013	JPI	Zaragoza (13)	Fallecimiento instituyente supérstite
S	14/02/2014	JPI	Zaragoza (14)	Nulidad parcial de legado testamentario
A	24/02/2014	JPI	Zaragoza (14)	Recurso de aclaración
S	14/03/2014	AP	Zaragoza (4ª)	Validez disposiciones testamentarias
S	26/11/2014	AP	Zaragoza (4ª)	Nulidad de legado
S	17/12/2014	AP	Zaragoza (4ª)	Nulidad de testamento
S	01/07/2015	AP	Teruel	Nombramiento de heredero
S	08/02/2016	AP	Zaragoza (4ª)	Fideicomiso de residuo
S	16/03/2016	AP	Zaragoza (4ª)	Legado de usufructo
S	15/09/2016	JPI	Zaragoza (14)	Interpretación de cláusula testamentaria
S	09/11/2016	AP	Zaragoza (4ª)	Validez testamento otorgado en el extranjero
S	14/12/2016	AP	Teruel	Nulidad de testamento

73. Sucesión paccionada.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	07/03/1991	AP	Zaragoza (4)	pacto sucesorio, revocación
S	29/05/1991	TSJ	Zaragoza	pacto al más viviente
S	23/07/1991	AP	Zaragoza (4)	pactos sucesorios
S	28/12/1992	AP	Zaragoza (2)	pacto al más viviente
S	19/02/1993	AP	Huesca	inst. contract. heredero.,revocac.
S	30/07/1993	JPI	Boltaña	inst.contractual de.heredero,fiducia

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
				colectiva
S	30/07/1993	JPI	Ejea (2)	pacto al más viviente, revoc.
S	09/10/1993	TSJ	Zaragoza	inst. contractual de heredero
S	21/02/1994	JPI	Huesca (2)	pactos sucesorios
S	28/06/1994	JPI	Ejea (2)	pactos sucesorios
S	13/02/1995	AP	Huesca	pactos sucesorios
A	30/05/1995	JPI	Zaragoza (13)	pacto al más viviente
A	27/06/1995	JPI	Zaragoza (13)	pacto al más viviente
A	17/10/1995	JPI	Zaragoza (13)	pacto al más viviente
S	30/10/1995	AP	Teruel	pacto al más viviente
A	16/12/1995	AP	Zaragoza (2)	pacto al más viviente
S	28/02/1996	JPI	Huesca (2)	pactos sucesorios
S	05/03/1996	AP	Huesca	pactos sucesorios
A	02/12/1996	AP	Huesca	pacto al más viviente
A	07/02/1997	JPI	Zaragoza (13)	pacto al más viviente
A	17/11/1997	AP	Huesca	pacto al más viviente
A	07/02/1998	JPI	Zaragoza (13)	pacto al más viviente
A	12/02/1998	JPI	Zaragoza (2)	pacto al más viviente
S	20/05/1998	AP	Huesca	pactos sucesorios
S	18/07/1998	AP	Huesca	pacto al más viviente
S	19/12/1998	JPI	Monzón	pactos sucesorios
S	13/12/1999	AP	Huesca	pactos sucesorios
A	14/02/2000	JPI	Zaragoza (14)	pacto al más viviente
S	17/03/2000	JPI	Ejea (2)	pactos sucesorios
S	14/04/2000	JPI	Huesca (3)	pactos sucesorios
S	13/07/2000	AP	Zaragoza (5)	pacto al más viviente
S	25/02/2002	AP	Zaragoza (2)	pactos sucesorios
S	16/02/2005	AP	Huesca	dispos. de bienes entre vivos.revoc.
S	21/06/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	incumplim.pacto sucesorio
S	30/09/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	pacto al más viviente
A	24/01/2006	AP	Zaragoza (2ª)	pacto al más viviente
S	13/10/2006	AP	Huesca	pacto al más viviente
S	22/12/2006	JPI	Teruel (2)	pacto al más viviente
S	9/02/2007	AP	Huesca	Legado
A	19/02/2008	AP	Huesca	Pactos sucesorios
S	1/12/2008	TSJ	Aragón	Pacto al más viviente
S	22/01/2009	AP	Zaragoza (5)	Pacto sucesorio
S	01/12/2009	AP	Zaragoza (2)	Pacto sucesorio
S	14/04/2010	AP	Huesca	Pacto sucesorio
S	06/07/2010	AP	Huesca	Pacto sucesorio. Fiducia. *Usucapio*
S	03/12/2010	AP	Zaragoza (4)	Pacto sucesorio. Constitución dº real
S	23/02/2011	AP	Huesca	Incumplimiento obligaciones instituido heredero

74. Fiducia sucesoria.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	03/10/1989	TSJ	Zaragoza	ejercicio sobre bs sin previa liq. de la comunidad disuelta
A	24/05/1991	AP	Huesca	Fijación de plazo
S	23/07/1991	AP	Zaragoza	Fiducia
S	31/07/1991	JPI	Jaca (1)	Fiducia colectiva
S	09/11/1991	TSJ	Zaragoza	casa aragonesa
S	16/03/1992	AP	Huesca	Fiducia colectiva
S	29/09/1992	TSJ	Zaragoza	Fiducia colectiva
S	30/09/1992	AP	Zaragoza (5)	Fiducia sucesoria
S	21/05/1993	TSJ	Zaragoza	Fiducia sucesoria
S	30/07/1993	JPI	Boltaña	Fiducia colectiva
S	14/01/1994	JPI	Zaragoza (14)	extinción fiducia
S	21/02/1994	JPI	Huesca (2)	Fiducia en favor cónyuge
S	23/03/1994	AP	Barcelona	Fiducia en favor cónyuge
S	30/07/1994	AP	Huesca	Fiducia colectiva
S	13/02/1995	AP	Huesca	Fiducia en favor cónyuge
S	13/06/1995	TSJ	Zaragoza	Fiducia colectiva
S	28/02/1996	JPI	Huesca (2)	Fiducia en favor cónyuge
S	14/03/1996	JPI	Huesca (3)	Asignación provisional
S	14/02/1997	AP	Huesca	Fiducia en favor cónyuge
A	19/11/1997	TSJ	Zaragoza	Fiducia colectiva
S	12/01/1998	AP	Zaragoza (5)	Fiducia en favor cónyuge
S	20/02/1998	TS	Madrid	Fiducia en favor cónyuge
A	04/05/1998	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	20/05/1998	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
A	25/11/1998	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	17/03/1999	AP	Huesca	ejecución sin liquidación soc. conyugal
S	25/05/2000	JPI	Huesca (2)	Fiducia sucesoria
S	15/11/2000	JPI	Zaragoza (10)	extinción fiducia
S	03/04/2000	JPI	Huesca (1)	nulidad ejecución fiducia
S	18/01/2001	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	25/01/2001	AP	Huesca	nulidad ejecución fiducia
S	17/02/2001	AP	Huesca	nulidad ejecución fiducia
S	31/07/2001	AP	Zaragoza (5)	Fiducia sucesoria
S	29/09/2001	TSJ	Aragón	nulidad ejecución fiducia
S	24/05/2002	TSJ	Aragón	extinción fiducia
S	04/11/2003	JPI	Zaragoza (4)	extinción fiducia
A	15/05/2003	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	22/07/2003	JPI	Zaragoza (2)	Fiducia sucesoria
S	26/12/2003	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	01/07/2004	AP	Zaragoza	Fiducia
S	04/10/2004	AP	Zaragoza	extinción fiducia y vida marital
S	16/11/2004	AP	Zaragoza	Fiducia irrevocabilidad
S	24/05/2005	AP	Huesca	Fiducia
S	21/09/2005	AP	Huesca	ordenación de la sucesión

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	25/11/2005	AP	Huesca	ejecución de la fiducia
S	13/02/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	ejecución fiducia colectiva
S	10/03/2006	TSJ	Aragón (Sala Civill	fiducia sucesoria
S	25/04/2006	AP	Huesca	fiducia sucesoria
S	10/05/2007	TSJA	Aragón	Ejercicio fiducia colectiva:Otorgamiento E.P. para su cumplimiento. Efectos
S	20/10/2008	AP	Huesca	Fiducia sucesoria
S	10/06/2010	TSJ	Zaragoza	responsabilidad del poseedor frente al fiduciario copropietario
S	26/10/2010	JPI	Zaragoza (9)	Consentimiento fiduciario
S	26/01/2011	TSJ	Zaragoza	Fiducia sucesoria. Institución de heredero en bienes consorciales. Usucapión.
S	29/04/2011	AP	Zaragoza (4)	Fiducia sucesoria
S	16/11/2011	AP	Zaragoza (5)	Plazo fiducia. Delación.
S	30/05/2012	TSJ	Zaragoza	Delación de la herencia. Ejecución o extinción de la fiducia

75. Legítimas.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	21/12/1990	TS	Madrid	Legítimas
S	16/07/1991	AP	Huesca	Intangibilidad
S	02/09/1991	JPI	Zaragoza (7)	Preterición
S	26/09/1991	JPI	Daroca	leg.colect,inoficiosidad,colación
S	25/06/1993	AP	Huesca	Alimentos
S	30/09/1993	TSJ	Zaragoza	Preterición
S	02/03/1994	AP	Zaragoza (5)	mención legitimaria
S	07/03/1994	AP	Zaragoza (2)	legítima y viudedad
S	13/02/1995	AP	Huesca	Preterición
S	15/03/1995	JPI	Daroca	Preterición
S	14/06/1995	JPI	Teruel (1)	Preterición
S	24/11/1995	JPI	Zaragoza (2)	legítima colectiva
S	14/09/1996	JPI	Zaragoza (2)	Preterición
S	16/09/1996	AP	Zaragoza (4)	Intangibilidad
S	21/03/1997	AP	Teruel	Preterición
S	02/07/1997	AP	Teruel	Desheredación
S	11/11/1998	TSJ	Zaragoza	Preterición
S	28/12/1998	AP	Teruel	Desheredación
S	05/06/2001	AP	Zaragoza	cambio vecindad civil
S	14/11/2003	AP	Zaragoza (5)	legítima colectiva
S	12/02/2004	JPI	Zaragoza (17)	legítima intangibilidad
S	13/07/2004	JPI	Zaragoza (17)	legítima
A	10/10/2005	AP	Zaragoza (5ª)	cálculo de legítima
S	09/02/2006	JPI	Zaragoza (17)	causas legales desheredación
S	06/11/2006	JPI	Zaragoza (17)	intangibilidad
S	19/02/2007	JPI	Zaragoza 2	Causa de desheredación no

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
				acreditada
S	30/01/2008	TSJ	Aragón	Acc. protección intengibilidad cualtitativa legítima
S	8/04/2008	AP	Zaragoza (2)	Cálculo de la legítima
S	16/06/2008	AP	Huesca	Renuncia a la legítima
S	23/07/2008	TSJ	Aragón	Derechos de legitimarios
S	08/04/2009	JPI	Zaragoza (3)	Intangibilidad legítima
S	08/06/2009	AP	Zaragoza (4)	Legítima
S	30/11/2011	AP	Teruel	Extensión y cálculo de legítima
S	27/05/2014	AP	Zaragoza	Prescripción de la acción
S	09/10/2014	JPI	Calatayud	Vulneración de legítima
S	19/01/2015	TSJ	Zaragoza	Caudal computable
S	18/05/2016	AP	Zaragoza (5ª)	Intangibilidad

76. Sucesión intestada.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	08/01/1990	JPI	Huesca(2)	sucesión intestada
A	22/02/1990	JPI	Huesca (2)	sucesión intestada
S	10/04/1990	TS	Madrid	Troncalidad
S	24/11/1990	AP	Teruel	sucesión troncal
A	08/01/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	08/01/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	10/01/1991	JPI	Daroca	sucesión intestada, viudedad
A	23/01/1991	JPI	Monzón	Viudedad
A	25/01/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	01/02/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	04/02/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	06/02/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	12/02/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	12/02/1991	JPI	Fraga	Troncalidad
A	14/02/1991	JPI	Fraga	hijos, viudedad
A	15/02/1991	JPI	Fraga	Padres
A	15/02/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	15/02/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	22/02/1991	JPI	Fraga	divorciado,hijos
A	22/02/1991	JPI	Fraga	Troncalidad
A	26/02/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	28/02/1991	JPI	Fraga	hijos,segundas nupcias
A	01/03/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	01/03/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	13/03/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	21/03/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	10/04/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	17/04/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	17/04/1991	JPI	Monzón	Troncalidad
A	02/05/1991	JPI	Fraga	Colaterales
A	08/05/1991	JPI	Monzón	
A	16/05/1991	JPI	Fraga	Colaterales

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	17/05/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	22/05/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	22/05/1991	JPI	Monzón	pacto al más viviente
A	12/06/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	19/06/1991	JPI	Fraga	hijos,renuncia a la viudedad
A	19/06/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	19/06/1991	JPI	Fraga	Troncalidad
A	27/06/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	08/07/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	16/07/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	17/07/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	17/07/1991	JPI	Monzón	sucesión intestada
A	23/07/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	23/07/1991	JPI	Monzón	sucesión intestada
A	31/07/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	04/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	05/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	09/09/1991	JPI	Fraga	troncalidad,viudedad
A	11/09/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	13/09/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	16/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	16/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	17/09/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	18/09/1991	JPI	Fraga	Colaterales
A	19/09/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	19/09/1991	JPI	Fraga	Colaterales
A	23/09/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	23/09/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	27/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	27/09/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	30/09/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	01/10/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	01/10/1991	JPI	Fraga	colaterales,viudedad
A	08/10/1991	JPI	Monzón	Viudedad
A	10/10/1991	JPI	Monzón	sucesión intestada
A	16/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	16/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	17/10/1991	JPI	Monzón	Viudedad
A	17/10/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	24/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	29/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	29/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	30/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	30/10/1991	JPI	Monzón	sucesión intestada
A	30/10/1991	JPI	Monzón	Viudedad
A	31/10/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	06/11/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	06/11/1991	JPI	Fraga	Recobros
A	13/11/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	13/11/1991	JPI	Monzón	Troncalidad

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	26/11/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	02/12/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	02/12/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	05/12/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	18/12/1991	JPI	Daroca	Viudedad
A	20/12/1991	JPI	Fraga	hijos,viudedad
A	20/12/1991	JPI	Fraga	Hijos
A	20/12/1991	JPI	Fraga	hijos,nietos
A	30/12/1991	JPI	Daroca	Viudedad
S	09/03/1992	AP	Teruel	sucesión intestada,viudedad
A	09/05/1992	AP	Zaragoza	sucesión intestada
S	30/07/1994	AP	Huesca	improcedencia suc. intest.
A	10/01/1995	JPI	Teruel (1)	declaración herederos
A	03/02/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	03/05/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	07/05/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	15/05/1995	JPI	Daroca	declaración herederos
A	23/05/1995	AP	Huesca	sucesión troncal
A	30/05/1995	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	30/05/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	31/05/1995	JPI	Daroca	declaración herederos
A	27/06/1995	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	05/07/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	20/07/1995	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	26/07/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	13/09/1995	JPI	Daroca	declaración herederos
A	20/09/1995	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	27/09/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	27/09/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	02/10/1995	JPI	Zaragoza (14)	declaración herederos
A	05/10/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	17/10/1995	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	17/10/1995	JPI	Daroca	sucesión troncal
S	30/10/1995	AP	Teruel	sucesión troncal
A	03/11/1995	JPI	Daroca	declaración herederos
A	16/11/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	01/12/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	15/12/1995	JPI	Daroca	declaración herederos
A	15/12/1995	JPI	Monzón	declaración herederos
A	16/12/1995	AP	Zaragoza (2)	declaración herederos
A	24/01/1996	AP	Huesca	declaración herederos
S	29/05/1996	AP	Zaragoza (5)	sucesión troncal
A	25/06/1996	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
S	28/06/1996	AP	Huesca	sucesión troncal
A	18/11/1996	JPI	Zaragoza (13)	sucesión troncal
A	25/11/1996	JPI	Huesca (2)	declaración herederos
A	05/12/1996	JPI	Huesca (2)	sucesión troncal
A	05/12/1996	JPI	Huesca (2)	declaración herederos
A	07/02/1997	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
S	15/02/1997	JPI	Tarazona	sucesión intestada

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	20/03/1997	AP	Huesca	sustitución legal
A	09/05/1997	JPI	Tarazona	declaración herederos
A	20/05/1997	JPI	Tarazona	declaración herederos
A	27/06/1997	AP	Zaragoza (5)	declaración herederos
A	20/09/1997	AP	Zaragoza (5)	sucesión intestada, viudedad
A	29/09/1997	JPI	Tarazona	sucesión troncal, sustituc. Legal
A	02/10/1997	JPI	Tarazona	declaración herederos
A	02/10/1997	JPI	Tarazona	declaración herederos
A	04/10/1997	JPI	Tarazona	sucesión troncal, sustituc. Legal
A	07/10/1997	JPI	Tarazona	declaración herederos
A	08/10/1997	JPI	Zaragoza (14)	sustitución legal
A	04/11/1997	JPI	Zaragoza (14)	declaración herederos
A	17/11/1997	AP	Huesca	declaración herederos
A	16/12/1997	JPI	Zaragoza (14)	declaración herederos
S	11/01/1998	AP	Zaragoza (5)	sucesión intestada
A	07/02/1998	JPI	Zaragoza (13)	declaración herederos
A	12/02/1998	JPI	Zaragoza (2)	declaración herederos
A	25/02/1998	AP	Huesca	Troncalidad
A	27/04/1998	AP	Zaragoza (5)	sucesión intestada
A	04/05/1998	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	05/06/1998	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	05/06/1998	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	06/07/1998	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	17/07/1998	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	18/07/1998	AP	Huesca	Troncalidad
A	30/07/1998	AP	Zaragoza (5)	sustitución legal
A	05/01/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	19/02/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	26/02/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	12/03/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	22/03/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	24/03/1999	JPI	Huesca (1)	declaración de herederos
A	21/04/1999	AP	Huesca	Troncalidad
A	30/04/1999	AP	Teruel	Troncalidad
A	05/05/1999	JPI	Huesca (1)	bienes troncales
A	12/05/1999	AP	Zaragoza (5)	decl. a favor del Estado
A	16/06/1999	AP	Zaragoza (5)	sustitución legal
A	16/06/1999	AP	Zaragoza (5)	sucesión intestada
A	07/07/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
S	31/07/1999	JPI	Huesca (2)	Troncalidad
A	07/09/1999	JPI	Huesca (1)	declaración de herederos
A	29/09/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
A	30/09/1999	JPI	Boltaña	declaración de herederos
S	07/06/2000	AP	Teruel	sustitución legal
A	06/10/2000	JPI	Zaragoza (10)	sustitución legal
A	11/10/2000	AP	Huesca	sustitución legal
S	11/10/2000	JPI	Huesca (3)	Troncalidad
S	18/10/2000	AP	Zaragoza (5)	sustitución legal
A	18/10/2000	AP	Zaragoza (5)	sucesión intestada
A	07/03/2001	AP	Zaragoza (5)	Administración

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	17/02/2003	AP	Zaragoza (2ª)	declaración herederos
A	21/04/2003	AP	Zaragoza (4ª)	declaración herederos
S	04/11/2003	JPI	Alcañiz (1)	bienes troncales
A	25/01/2005	AP	Zaragoza (2ª)	declaración de herederos
A	10/04/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
A	25/05/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
S	30/06/2006	JPI	Teruel (2)	herederos ab intestato
A	01/09/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
A	20/09/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
A	20/09/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
A	27/09/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
A	28/09/2006	JPI	Monzón (2)	declaración de herederos
S	31/10/2006	JPI	Monzón (1)	suces. a favor cónyuge viudo
S	30/11/2006	JPI	Zaragoza (17)	ineficacia del llamamiento
A	18/01/2007	AP	Huesca	Declaración herederos
S	20/03/2007	AP	Zaragoza (2ª)	Sucesión troncal
A	29/03/2007	AP	Huesca	Sucesión intestada
S	25/06/2007	TSJA	Aragón	Sucesión a favor cónyuge viudo
S	1/10/2007	TSJA	Aragón	Bienes troncales. Sucesión.
S	15/11/2007	AP	Teruel	Bienes troncales. Sucesión.
A	18/12/2007	AP	Huesca	Sucesión troncal
S	29(01/2008	AP	Teruel	Bienes troncales. Sucesión
S	28/03/2008	AP	Huesca	Bienes troncales y no troncales
S	2/04/2008	JPI	La Almunia (1)	Bienes troncales
A	16/06/2008	AP	Huesca	Decl. Hered. Ab intestato
A	26/02/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	12/03/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	20/04/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	20/05/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	22/06/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Sucesión intestada
A	09/07/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	12/11/2009	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Decl.Hered. Ab Intestato
A	02/03/2010	AP	Zaragoza(2)	Declaración de herederos
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Declaración de herederos
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Declaración de herederos
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Declaración de herederos
A	No consta	JPI	Huesca (2)	Declaración de herederos
A	13/07/2012	AP	Zaragoza (2)	Sustitución. Cuotas
A	12/09/2013	JPI	Zaragoza	Herederos abintestato. Bienes troncales y no troncales
A	17/11/2015	AP	Zaragoza	Repudiación de herencia por CA

8. Derecho de bienes.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	12/01/1990	AP	Zaragoza (3)	servidumbre, luces y vistas
S	07/02/1990	JPI	Teruel (2)	serv.,acc. Negat,luces y vistas
S	20/02/1990	JPI	Ejea (1)	serv.,luces y vistas
S	31/03/1990	JPI	Teruel (2)	serv.,luces y vistas,usucapión
S	14/04/1990	AP	Teruel	serv.,acc. Negat,luces y vistas
S	19/04/1990	AP	Teruel	serv. de paso,acción negatoria
S	08/05/1990	JPI	Tarazona	servidumbres,usucapión
S	08/05/1990	AP	Zaragoza (4)	servidumbres,usucapión
S	08/05/1990	AP	Zaragoza (4)	servidumbres,usucapión
S	15/05/1990	JPI	Tarazona	servidumbres,luces y vistas
S	25/05/1990	JPI	Ejea	luces y vistas
S	28/05/1990	JPI	Ejea	derecho de uso
S	30/05/1990	AP	Teruel	servidumbres,luces y vistas
S	27/06/1990	AP	Zaragoza (3)	serv.,luces y vistas,usucapión
S	17/07/1990	AP	Zaragoza (4)	servidumbres,luces y vistas
S	23/07/1990	JPI	Ejea (1)	luces y vistas
S	26/07/1990	AP	Teruel	serv. de paso,usucapión
S	24/10/1990	JPI	Ejea (1)	servidumbres, luces y vistas
S	31/10/1990	AP	Teruel	serv.,acc. Negat.,luces y vistas
S	06/11/1990	AP	Zaragoza (3)	serv.,luces y vistas,usucapión
S	27/11/1990	AP	Zaragoza (4)	servidumbres,usucapión
S	22/12/1990	AP	Zaragoza (3)	Servidumbres
S	07/02/1991	AP	Teruel	servidumbres,usucapión
S	21/02/1991	JPI	Caspe	luces y vistas
S	15/03/1991	JPI	Alcañiz	luces y vistas
S	18/05/1991	AP	Teruel	luces y vistas
S	08/06/1991	JPI	La Almunia	servidumbres,luces y vistas
S	20/06/1991	JPI	Alcañiz (1)	servidumbres,usucapión
S	01/07/1991	JPI	Huesca (2)	servidumbres,usucapión
S	17/07/1991	JPI	La Almunia	luces y vistas
S	22/07/1991	AP	Teruel	servidumbres,usucapión
S	07/10/1991	JPI	Teruel (1)	servidumbres,usucapión
S	09/10/1991	AP	Zaragoza (2)	luces y vistas
S	18/10/1991	AP	Teruel	servidumbres,usucapión
S	26/10/1991	AP	Zaragoza (2)	luces y vistas
S	05/11/1991	AP	Huesca	luces y vistas
S	12/11/1991	JPI	Barbastro	servidumbres,luces y vistas
S	20/12/1991	AP	Teruel	servidumbres,usucapión
S	22/01/1992	AP	Teruel	serv.,usucapión,variación
S	13/02/1992	AP	Teruel	servidumbres,paso,constitución
S	24/06/1992	AP	Zaragoza (2)	servidumbres,luces y vistas
S	26/06/1992	AP	Huesca	luces y vistas
S	28/07/1992	AP	Huesca	luces y vistas
S	30/10/1992	AP	Teruel	luces y vistas
S	03/12/1992	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas
S	23/12/1992	AP	Zaragoza (2)	luces y vistas

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	12/01/1993	AP	Zaragoza (4)	luces y vistas
S	20/01/1993	JPI	Caspe	luces y vistas.relación vecindad
S	21/01/1993	AP	Huesca	luces y vistas, inexist. servid.
S	15/03/1993	JPI	La Almunia	servidumbres, usucapión
S	22/03/1993	AP	Zaragoza (4)	servidumbres, usucapión
S	07/04/1993	AP	Zaragoza (2)	luces y vistas, inexist. servid.
S	29/04/1993	AP	Huesca	luces y vistas, medianería
S	31/05/1993	AP	Teruel	luces y vistas, relación vecindad
S	03/06/1993	JPI	La Almunia	luces y vistas, abuso de derecho
S	15/07/1993	AP	Teruel	luces y vistas, abuso de derecho
S	22/07/1993	AP	Teruel	luces y vistas, inexist. servid.
S	28/07/1993	JPI	La Almunia	luces y vistas, inexist. servid.
S	29/09/1993	AP	Huesca	luces y vistas, medianería
S	21/07/1993	JPI	Zaragoza (13)	régimen normal luces y vistas
S	10/01/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparent..
S	26/01/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparent..
S	28/01/1994	JPI	Zaragoza (13)	régimen normal luces y vistas
S	01/03/1994	JPI	Calatayud (2)	alera foral
S	02/03/1994	JPI	Caspe	usucapión servidumbre de paso
S	07/03/1994	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	09/03/1994	JPI	Zaragoza (13)	servidumbre luces y vistas
S	14/03/1994	JPI	Teruel (1)	usucapión no aparentes
S	08/04/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparent.
S	08/04/1994	JPI	Zaragoza (14)	régimen normal luces y vistas
S	20/04/1994	AP	Zaragoza (2)	régimen normal luces y vistas
S	25/04/1994	AP	Huesca	usucap. servidumbres aparentes
S	06/05/1994	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	09/05/1994	JPI	Ejea (2)	luces y vistas, usucapión
S	16/05/1994	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	30/05/1994	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	16/06/1994	JPI	Teruel (1)	usucap. servidumbres aparentes
S	09/07/1994	AP	Zaragoza (2)	servidumbre luces y vistas
S	12/07/1994	JPI	Ejea (1)	inexistencia servidumbre luces
S	23/07/1994	AP	Zaragoza (5)	usucap. servidumbres aparentes
S	26/07/1994	JPI	Teruel (1)	usucap. servidumbres aparentes
S	07/09/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparentes
S	05/10/1994	JPI	Almunia	régimen normal luces y vistas
S	10/10/1994	JPI	Zaragoza (14)	usucap. servidumbres aparentes
S	17/10/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparentes
S	17/10/1994	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas. usucapión
S	18/10/1994	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	25/10/1994	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	07/11/1994	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparentes
S	15/12/1994	JPI	Teruel (1)	luces y vistas. abuso de derecho
S	27/12/1994	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	27/12/1994	AP	Zaragoza (2)	usucap. servidumbres aparentes
S	27/12/1994	TSJ	Zaragoza	usucapión servidumbre
S	12/01/1995	AP	Huesca	servidumbre de luces y vistas
S	04/02/1995	JPI	La Almunia	régimen normal luces y vistas
S	17/02/1995	JPI	Zaragoza (13)	régimen normal luces y vistas

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	20/02/1995	AP	Huesca	usucap. servidumbres aparentes
S	08/03/1995	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	15/04/1995	JPI	La Almunia	régimen normal luces y vistas
S	27/04/1995	JPI	Teruel (1)	inexist. servidumbre de paso
S	17/05/1995	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	15/06/1995	AP	Teruel	usucapión servidumbre
S	23/06/1995	AP	Teruel	usucapión servidumbre
S	10/07/1995	AP	Huesca	usucap. servidumbre aparentes
S	13/09/1995	JPI	Huesca (2)	servidumbre de luces y vistas
S	03/10/1995	JPI	Daroca	régimen normal luces y vistas
S	16/10/1995	AP	Teruel	servidumbre de paso
S	04/11/1995	AP	Teruel	usucapión servidumbre
S	08/11/1995	JPI	Teruel (1)	servidumbre de desagüe
A	09/11/1995	JPI	Huesca (2)	servidumbre luces y vistas
S	22/11/1995	AP	Teruel	usucap. servidumbres aparentes
S	23/11/1995	AP	Teruel	servidumbre de desagüe
S	14/12/1995	AP	Teruel	inexistencia servid. de luces
S	09/01/1996	AP	Teruel	inexistencia servid. de luces
S	19/01/1996	AP	Huesca	abuso de derecho
S	25/01/1996	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	26/02/1996	JPI	Barbastro	régimen normal luces y vistas
S	27/02/1996	JPI	Barbastro	usucapión servidumbre
S	27/03/1996	AP	Huesca	usucapión servid. de paso
S	08/05/1996	AP	Teruel	inexistencia servid. de luces
S	05/06/1996	AP	Zaragoza (5)	inexistencia servid. de paso
S	08/07/1996	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	15/07/1996	AP	Zaragoza (2)	inexistencia servid. de luces
S	25/07/1996	AP	Huesca	inexistencia servid. de paso
S	07/10/1996	JPI	La Almunia	usucapión servid. de paso
S	08/10/1996	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	30/10/1996	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	04/11/1996	AP	Huesca	inexistencia servid. de paso
S	06/11/1996	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	12/11/1996	JPI	Jaca (2)	inexistencia servid. de luces
S	12/12/1996	AP	Huesca	mancom. pastos y alera foral
S	27/01/1997	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. aparentes
S	27/01/1997	AP	Zaragoza (5)	inexistencia servid. de luces
S	30/01/1997	AP	Zaragoza (5)	servidumbre luces y vistas
S	19/02/1997	AP	Zaragoza (5)	servidumbres desagüe y paso
S	17/03/1997	AP	Zaragoza (5)	inexistencia servid. de luces
S	02/04/1997	AP	Zaragoza (5)	relaciones de vecindad
S	21/04/1997	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	24/04/1997	AP	Huesca	usucapión servid. no aparentes
S	08/05/1997	JPI	Zaragoza (13)	usucapión serv. no aparentes
S	15/05/1997	AP	Huesca	usucapión servid. aparentes
S	21/05/1997	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	28/05/1997	AP	Teruel	usucapión servid. aparentes
S	06/06/1997	JPI	Tarazona	usucapión servidumbres
S	13/06/1997	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	16/06/1997	AP	Huesca	usucapión servid. aparentes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	17/06/1997	JPI	Tarazona	régimen normal luces y vistas
S	30/06/1997	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
A	30/06/1997	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	17/07/1997	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. aparentes
S	21/07/1997	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	28/07/1997	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	20/09/1997	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. no aparentes
S	06/10/1997	AP	Huesca	servid. vertiente de tejado
S	27/10/1997	AP	Teruel	usucapión de servidumbres
S	06/11/1997	JPI	Caspe	usucapión serv. luces y vistas
S	07/11/1997	AP	Teruel	usucapión servid. aparentes
S	01/12/1997	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas, mala fe
S	03/12/1997	AP	Teruel	usucapión servid. aparentes
S	10/10/1997	JPI	Calamocha	régimen normal luces y vistas
S	10/12/1997	JPI	Calamocha	luces y vistas, medianería
S	26/12/1997	JPI	Ejea (1)	régimen normal luces y vistas
S	19/01/1998	AP	Zaragoza (5)	usucapión servidumbres
S	11/05/1998	AP	Teruel	usucapión servid. no aparente
S	11/05/1998	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. medianería
S	12/05/1998	AP	Huesca	usucapión servid. no aparentes
S	13/05/1998	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	01/06/1998	AP	Zaragoza (4)	luces y vistas, inexist. servid.
S	09/06/1998	JPI	Zaragoza (14)	luces y vistas
S	17/06/1998	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas
S	22/06/1998	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. aparentes
S	26/06/1998	AP	Huesca	usucapión servid. no aparentes
S	29/06/1998	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	08/09/1998	JPI	Jaca (1)	usucapión serv. aparentes
S	20/07/1998	AP	Teruel	usucapión servid. no aparentes
S	21/09/1998	AP	Zaragoza (2)	régimen normal luces y vistas
S	24/09/1998	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	29/09/1998	JPI	Huesca (2)	inexistencia serv. luces
S	14/10/1998	AP	Huesca	inexistencia serv. luces
A	27/10/1998	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas
S	28/10/1998	AP	Zaragoza (5)	usucapión servid. no aparentes
S	19/11/1998	AP	Huesca	usucapión servid. no aparentes
S	22/12/1998	AP	Zaragoza (2)	régimen normal luces y vistas
S	26/12/1998	AP	Teruel	serv. de saca de agua y paso
S	31/12/1998	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	26/02/1999	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	16/03/1999	AP	Huesca	inmisión ramas y raíces
S	22/03/1999	AP	Teruel	usucapión serv. de paso
S	16/09/1999	AP	Huesca	usucapión serv. de paso
S	05/11/1999	AP	Teruel	usucapión serv. de paso
S	22/12/1999	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	25/10/1999	AP	Zaragoza (5)	usucapión serv. de paso
S	18/02/2000	JPI	Fraga	serv. luces y vistas
S	06/03/2000	AP	Zaragoza (4)	régimen normal luces y vistas
S	13/03/2000	AP	Zaragoza (4)	régimen normal luces y vistas
S	31/03/2000	AP	Zaragoza (5)	inexistencia voladizo

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	10/04/2000	AP	Zaragoza (4)	usucapión serv. de paso
S	12/04/2000	JPI	Zaragoza (1)	usucapión serv. de paso
S	28/04/2000	AP	Huesca	usucapión serv. de paso
S	04/05/2000	AP	Zaragoza (5)	luces y vistas
S	19/05/2000	JPI	Huesca (3)	serv. de desagüe
S	29/05/2000	AP	Huesca	plazo usucapión
S	13/06/2000	AP	Teruel	régimen normal luces y vistas
S	19/06/2000	AP	Zaragoza (5)	régimen normal luces y vistas
S	22/06/2000	JPI	Ejea (2)	usucapión serv. de paso
S	30/06/2000	AP	Teruel	usucapión serv. de paso
S	11/07/2000	AP	Zaragoza (4)	régimen normal luces y vistas
S	25/07/2000	AP	Zaragoza (4)	usucapión serv. de paso
S	14/09/2000	AP	Huesca	usucapión servidumbres
S	04/10/2000	AP	Huesca	serv. luces y vistas
S	18/10/2000	AP	Zaragoza (4)	luces y vistas: azoteas
S	27/10/2000	JPI	Zaragoza (14)	usucapión serv. de paso
S	20/11/2000	AP	Huesca	serv. de pastos, alera foral
S	04/12/2000	AP	Huesca	Medianería
S	14/12/2000	JPI	Zaragoza (1)	régimen normal luces y vistas
S	21/12/2000	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	25/01/2001	JPI	Teruel	inmisión ramas
S	25/01/2001	AP	Zaragoza (5)	inmisión raíces
S	02/03/2001	AP	Zaragoza (5)	usucapión serv. de paso
S	07/03/2001	JPI	Calatayud (2)	serv. luces y vistas
S	29/03/2001	JPI	Calatayud (2)	usucapión serv. aparentes
S	31/03/2001	AP	Huesca	régimen normal luces y vistas
S	31/03/2001	AP	Zaragoza	usucapión serv. aparentes
S	02/04/2001	AP	Teruel	usuc. serv. luces y vistas
S	09/04/2001	AP	Zaragoza (2)	régimen normal luces y vistas
S	24/04/2001	AP	Zaragoza (5)	serv. luces y vistas
S	30/04/2001	AP	Teruel	inexistencia serv. luces y vistas
S	30/04/2001	AP	Teruel	usucapión serv. salida humos
S	12/05/2001	JPI	Ejea (2)	rég. normal luces y vistas
S	18/05/2001	AP	Zaragoza (4)	inexistencia serv. de paso
S	22/06/2001	AP	Zaragoza (5)	usucapion serv. de paso
S	11/07/2001	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	18/07/2001	JPI	Calatayud (2)	usucapión serv. de paso
S	20/07/2001	AP	Zaragoza (5)	usucapion serv. de paso
S	30/07/2001	JPI	Calatayud (2)	usucapión serv. de paso
S	30/07/2001	JPI	Zaragoza (3)	usucapión serv. de paso
S	06/09/2001	AP	Teruel	serv. luces y vistas
S	17/09/2001	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	24/09/2001	AP	Huesca	usucapión serv. de paso
S	30/10/2001	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	02/11/2001	JPI	Tarazona	rég. normal luces y vistas
S	07/11/2001	TSJ	Zaragoza	inmisión aerogeneradores
S	12/11/2001	JPI	Tarazona	rég. normal luces y vistas
S	13/11/2001	JPI	Tarazona	inexistencia serv. desagüe
S	13/11/2001	JPI	Zaragoza (3)	serv. luces y vistas
S	27/11/2001	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	10/12/2001	AP	Zaragoza (4)	usucapión serv. aparentes
S	28/12/2001	AP	Huesca	inexistencia serv. luces y vistas
S	03/01/2002	AP	Teruel	serv. luces y vistas
S	04/01/2002	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	15/01/2002	AP	Zaragoza (2)	rég. normal luces y vistas
S	18/01/2002	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	21/02/2002	AP	Zaragoza (2)	serv. luces y vistas
S	28/02/2002	AP	Huesca	usucapión dom. Público
S	05/03/2002	AP	Huesca	serv. luces y vistas
S	18/03/2002	AP	Zaragoza (5)	usucapión serv. aparentes
S	08/04/2002	AP	Zaragoza (2)	inmisión ramas
S	13/04/2002	AP	Teruel	usucapión serv. paso
S	16/02/2002	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	06/05/2002	AP	Huesca	usucapión serv. paso
S	07/05/2002	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	16/05/2002	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	17/05/2002	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	20/05/2002	JPI	Ejea (1)	usucapión serv. aparentes
S	27/05/2002	JPI	Teruel (2)	rég. normal luces y vistas
S	04/06/2002	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	09/07/2002	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	11/07/2002	JPI	Ejea (1)	usucapión serv. paso
S	10/09/2002	AP	Zaragoza (2)	usucapión serv. paso
S	25/09/2002	JPI	Ejea (1)	rég. normal luces y vistas
S	30/09/2002	AP	Zaragoza (2)	usucapión serv. aparentes
S	02/10/2002	AP	Teruel	relaciones de vecindad
S	21/10/2002	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	23/10/2002	AP	Teruel	serv. luces y vistas
S	28/10/2002	AP	Zaragoza (2)	rég. normal luces y vistas
S	30/10/2002	AP	Huesca	serv. luces y vistas
S	14/11/2002	JPI	Ejea (2)	rég. normal luces y vistas
A	18/11/2002	AP	Zaragoza (2)	usucapión serv. aparentes
S	21/11/2002	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	26/11/2002	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	29/11/2002	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	29/11/2002	JPI	Calatayud (2)	serv. luces y vistas
S	05/12/2002	AP	Huesca	serv. luces y vistas
S	12/12/2002	AP	Zaragoza (2)	usucapión serv. luces y vistas
S	12/12/2002	JPI	Teruel (2)	usucapión serv. aparentes
S	23/01/2003	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	30/01/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	19/02/2003	AP	Zaragoza (5ª)	usucapión serv. aparentes
S	18/03/2003	AP	Teruel	usucapión serv. no aparentes
S	19/03/2003	AP	Zaragoza (5ª)	luces y vistas
S	25/03/2003	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	27/03/2003	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	14/04/2003	AP	Zaragoza (2ª)	usucapión serv. aparentes
S	16/04/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	21/04/2003	JPI	Tarazona	rég. normal luces y vistas
S	24/04/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/05/2003	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	21/05/2003	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	23/05/2003	JPI	Teruel (1)	rég. normal luces y vistas
S	05/06/2003	JPI	Zaragoza (17)	rég. normal luces y vistas
S	09/06/2003	AP	Zaragoza (5ª)	relaciones vecindad
S	11/06/2003	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
A	17/06/2003	AP	Zaragoza (5ª)	relaciones vecindad
S	18/06/2003	AP	Teruel	serv. acueducto
S	19/06/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	25/06/2003	JPI	Ejea (2)	rég. normal luces y vistas
S	28/06/2003	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	01/09/2003	JPI	Teruel (2)	rég. normal luces y vistas
S	18/10/2003	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas
S	31/10/2003	JPI	Alcañiz (1)	usucapión serv. aparentes
S	17/11/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	28/11/2003	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	17/12/2003	AP	Zaragoza (5ª)	usucapión serv. no aparentes
S	26/12/2003	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	26/12/2003	JPI	Ejea (2)	serv. luces y vistas
S	02/02/2004	JPI	Teruel (2)	rég normal luces y vistas
S	02/02/2004	AP	Zaragoza	luces y vistas, rel. vecindad
S	04/02/2004	TSJ	Zaragoza	serv. luces y vistas
S	16/02/2004	JPI	Ejea (2)	relaciones de vecindad
S	16/02/2004	JPI	Ejea (1)	rég. normal luces y vistas.
S	31/03/2004	TSJ	Zaragoza	rég. normal luces y vistas
S	17/04/2004	AP	Zaragoza	no usucapión, serv. Paso
S	17/05/2004	JPI	Ejea (1)	relaciones de vecindad
S	17/05/2004	JPI	Ejea (1)	rég. normal luces y vistas
S	31/05/2004	AP	Zaragoza	luces y vistas
S	01/06/2004	JPI	Jaca (1)	inmisión ramas
S	04/06/2004	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	17/06/2004	JPI	Teruel (2)	relaciones de vecindad
S	28/06/2004	JPI	Calamocha	usucapión, serv de paso
S	29/06/2004	JPI	Teruel (2)	luces y vistas
S	06/07/2004	AP	Zaragoza	luces y vistas
S	14/07/2004	AP	Teruel	rég. normal luces y vistas.
S	26/07/2004	AP	Huesca	usucapión, serv aparente
S	01/09/2004	JPI	Alcañiz (1)	rég. normal luces y vistas.
S	13/09/2004	JPI	Jaca (1)	rel vecindad
S	06/10/2004	AP	Zaragoza	usucapión, serv aparente
S	07/10/2004	JPI	Zaragoza (14)	rég. normal luces y vistas.
S	19/10/2004	JPI	Alcañiz (2)	serv. paso
S	19/11/2004	AP	Zaragoza	rég. normal luces y vistas.
S	30/11/2004	AP	Zaragoza	usucapión serv. aparentes
S	30/11/2004	AP	Zaragoza	rel. vecindad, inmisión ramas
S	07/12/2004	JPI	Zaragoza (17)	rel. vecindad
S	15/12/2004	AP	Zaragoza	usucapión, extinción por no uso
S	15/12/2004	AP	Huesca	serv. no aparente
S	21/12/2004	AP	Huesca	rel. Vecindad
S	10/01/2005	AP	Zaragoza (2ª)	rég.normal luces y vistas

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/02/2005	AP	Teruel	serv. luces y vistas
S	23/02/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	relaciones de vecindad
S	01/03/2005	AP	Teruel	huecos de tolerancia
S	03/03/2005	AP	Zaragoza (5ª)	serv. de paso
S	15/03/2005	AP	Huesca	serv. Aparentes y no apar.
S	13/04/2005	AP	Teruel	Servidumbres
S	15/04/2005	JPI	Ejea (1)	adquis. servid. por usucapión
S	15/04/2005	AP	Huesca	servid. aparentes y no aparentes.
S	12/05/2005	AP	Zaragoza (5ª)	serv. de desagüe
S	25/05/2005	JPI	Ejea (2)	reg. normal luces y vistas
S	01/06/2005	JPI	Zaragoza (14)	serv. aparentes.Usucapión
S	08/06/2005	AP	Zaragoza (5ª)	relaciones de vecindad
S	17/06/2005	AP	Teruel	luces y vistas
S	21/06/2005	AP	Huesca	relaciones de vecindad
S	06/07/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	relaciones de vecindad
S	14/07/2005	AP	Zaragoza (5ª)	servid. de paso
S	19/07/2005	JPI	Teruel (2)	servid. aparentes y no aparentes
S	05/09/2005	AP	Huesca	Servidumbres
S	15/09/2005	AP	Zaragoza (5ª)	serv. de paso usucapión
S	17/10/2005	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	26/10/2005	AP	Huesca	serv. aparentes y no, usucapión
S	02/11/2005	AP	Teruel	luces y vistas
S	16/12/2005	TSJ	Aragón (Sala Civil)	servidumbre luces y vistas
S	18/11/2005	JPI	Alcañiz (2)	serv. aparentes y no. Usucapión
S	21/11/2005	AP	Zaragoza (5ª)	adquis. serv. por prescripción
S	23/12/2005	AP	Huesca	serv. aparentes y no. Usucapión.
S	11/01/2006	AP	Huesca	usucapión servid. no aparentes
S	13/01/2006	AP	Huesca	servidumbres: apariencia
S	26/01/2006	AP	Huesca	Voladizos
S	23/02/2006	JPI	Ejea (1)	Voladizos
S	08/03/2006	TSJ	Aragón (Sala Civil)	usucapión serv. aparentes
S	20/03/2006	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	24/03/2006	AP	Teruel	usucap.serv. aparentes y no aparentes
S	10/04/2006	AP	Teruel	usucap. servid. aparentes
S	25/05/2006	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes
S	09/06/2006	JPI	Ejea (2)	usucapión serv. aparentes
S	30/06/2006	AP	Huesca	Voladizo
S	03/07/2006	AP	Huesca	rég. normal luces y vistas
S	03/07/2006	AP	Huesca	servidumbres:apariencia
S	15/07/2006	JPI	Barbastro	rég. normal luces y vistas
S	18/09/2006	JPI	Barbastro	rég. normal luces y vistas
S	08/11/2006	JPI	Monzón (2)	usucap.serv. aparentes y no aparentes
S	16/11/2006	AP	Teruel	usucapión serv. aparentes
S	20/12/2006	JPI	Monzón (1)	Servidumbres
S	28/12/2006	AP	Huesca	usucapión serv. aparentes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	29/12/2006	AP	Huesca	usucap. serv. aparentes y no aparentes
S	29/12/2006	AP	Huesca	Voladizo
S	13/02/2007	AP	Huesca	Régimen normal luces y vistas
S	28/02/2007	AP	Huesca	Régimen normal luces y vistas
S	30/03/2007	AP	Huesca	Régimen normal luces y vistas
S	3/05/2007	JPI	Ejea 2	Régimen normal luces y vistas
S	25/05/2007	JPI	Teruel	Régimen normal luces y vistas
S	8/06/2007	AP	Huesca	Régimen normal luces y vistas
S	31/07/2007	JPI	Alcañiz 2	Régimen normal luces y vistas
S	19/09/2007	AP	Teruel	Régimen normal luces y vistas
S	23/10/2007	AP	Teruel	Régimen normal luces y vistas
S	27/11/2007	JPI	Monzón 1	Régimen normal luces y vistas
S	10/012/2007	JPI	Ejea 2	Régimen normal luces y vistas
S	13/12/2007	AP	Teruel	Régimen normal luces y vistas
S	26/12/2007	AP	Huesca	Concepto de voladizo
S	23/03/2007	JPI	Teruel 2	Servidumbre de luces y vistas
S	27/09/2007	TSJA	Aragón	Servidumbre de luces y vistas
S	24/10/2007	AP	Huesca	Concepto de voladizo
S	10/12/2007	AP	Zaragoza (4ª)	Servidumbre de luces y vistas
S	27/03/2007	AP	Teruel	Paso de herradura
S	8/05/2007	AP	Teruel	Usucapión servidumbre aparente
S	11/05/2007	TSJA	Aragón	Servidumbre de paso
S	15/05/2007	AP	Teruel	Usucapión servidumbre aparente
S	11/07/2007	AP	Huesca	Usucapión servidumbre aparente
S	11/09/2007	JPI	Monzón 2	Usucapión servidumbre de paso
S	30/11/2007	AP	Zaragoza (5ª)	Usucapión servidumbre aparente
S	24/09/2007	JPI	Calamocha	Usucapión servidumbre no aparente
S	14/01/2008	AP	Huesca	Relaciones de vecindad
S	23/01/2008	TSJ	Aragón	Relaciones de vecindad
S	22/02/2008	AP	Teruel	Relaciones de vecindad
S	28/03/2008	AP	Huesca	Relaciones de vecindad
S	7/04/2008	AP	Teruel	Relaciones de vecindad
S	22/04/2008	TSJ	Aragón	Relaciones de vecindad
S	14/07/2008	TSJ	Aragón	Relaciones de vecindad
S	2/10/2008	AP	Huesca	Relaciones de vecindad
S	16/10/2008	AP	Teruel	Relaciones de vecindad
S	30/01/2008	AP	Zaragoza (4)	Rég. normal luces y vistas
S	18/04/2008	AP	Huesca	Rég. normal luces y vistas
S	21/04/2008	JPI	Alcañiz (2)	Rég. normal luces y vistas
S	24/06/2008	AP	Huesca	Rég. normal luces y vistas
S	28/07/2008	JPI	La Almunia (1)	Rég. normal luces y vistas
S	31/07/2008	AP	Huesca	Rég. normal luces y vistas
S	14/10/2008	JPI	La Almunia (1)	Rég. normal luces y vistas
S	15/07/2008	AP	Zaragoza (5)	Servidumbre luces y vistas
S	10/07/2008	AP	Teruel	Usucapión servidumbres aparentes
S	13/03/2008	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	15/05/2008	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	30/06/2008	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	9/10/2008	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	14/01/2008	AP	Huesca	Usucapión servid. no aparentes
S	04/02/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Rég. normal luces y vistas
S	24/02/2009	AP	Teruel	Rég. normal luces y vistas
S	24/02/2009	JPI	Ejea (1)	Rég. normal luces y vistas
S	27/02/2009	JPI	Ejea (1)	Rég. normal luces y vistas
S	30/04/2009	AP	Teruel	Rég. normal luces y vistas
S	11/09/2009	AP	Teruel	Rég. normal luces y vistas
S	15/09/2009	AP	Teruel	Rég. normal luces y vistas
S	30/09/2009	AP	Huesca	Rég. normal luces y vistas
S	08/10/2009	AP	Zaragoza (4)	Rég. normal luces y vistas
S	30/11/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Rég. normal luces y vistas
S	No consta	JPI	Calatayud (2)	Rég. normal luces y vistas
S	18/03/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	06/05/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	07/05/2009	AP	Teruel	Usucapión servidumbres aparentes
S	12/06/2009	JPI	Ejea (1)	Usucapión servidumbres aparentes
S	23/09/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	19/10/2009	AP	Teruel	Usucapión servidumbres aparentes
S	21/10/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	16/11/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	18/11/2009	AP	Huesca	Usucapión servidumbres aparentes
S	25/11/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Usucapión servidumbres aparentes
S	01/12/2009	TSJA	Sala de lo Civil	Usucapión servidumbres aparentes
S	04/12/2009	AP	Zaragoza (4)	Usucapión servidumbres aparentes
S	13/02/2009	AP	Zaragoza (4)	Usucap.servidumbres no aparentes
S	02/02/2010	AP	Teruel	Régimen normal de luces y vistas
S	10/03/2010	AP	Zaragoza (2)	Usucapión servidumbre aparente
S	05/04/2010	AP	Zaragoza (5)	Luces y vistas
S	06/04/2010	AP	Zaragoza (5)	Relaciones de vecindad
S	22/04/2010	AP	Zaragoza (4)	Servidumbre de luces y vistas
S	30/04/2010	JPI	Boltaña	Servidumbre legal de paso. Usucapión
S	04/06/2010	AP	Zaragoza (4)	Acción reivindicatoria. Título
S	07/06/2010	JPI	Boltaña	Acción reivindicatoria. Prescripción adquisitiva de servidumbre aparente
S	08/06/2010	AP	Zaragoza (5)	Acción reivindicatoria. Plazo
S	16/06/2010	AP	Teruel	Usucapión servidumbre aparente
S	18/06/2010	TSJ	Zaragoza	Usucapion servidumbre de paso aparente
S	09/07/2010	AP	Teruel	Usucapión servidumbre de paso aparente
S	09/07/2010	AP	Teruel	Usucapión servidumbre
S	10/09/2010	AP	Huesca	Servidumbre luces y vistas.
S	23/09/2010	TSJ	Zaragoza	Usucapión servidumbres aparentes
A	03/01/2011	AP	Zaragoza (2)	Relaciones de vecindad
S	10/01/2011	AP	Teruel	Servidumbre de paso
S	19/01/2011	AP	Zaragoza (4)	Relaciones de vecindad
S	28/02/2011	AP	Huesca	Servidumbre de paso
S	22/03/2011	AP	Zaragoza (2)	Servidumbre de paso
S	10/03/2011	AP	Teruel	Servidumbre de paso
A	14/04/2011	AP	Teruel	Servidumbre negativa de luces y

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
				vistas
A	26/04/2011	TSJ	Zaragoza	Servidumbre en montes privados. Interés casacional
S	20/05/2011	TSJ	Zaragoza	Usucapion de servidumbre
S	30/09/2011	AP	Zaragoza (2)	Relaciones de vecindad
S	14/10/2011	AP	Zaragoza (4)	Aprovechamientos sobre monte público
S	14/10/2011	JPI	Ejea (1)	Usucapion de servidumbre
S	11/11/2011	JPI	Zaragoza	Relaciones de vecindad
S	17/11/2011	AP	Teruel	Servidumbre de paso
S	07/12/2011	AP	Teruel	Relaciones de vecindad
S	14/12/2011	TSJ	Zaragoza	Usucapion de servidumbre de paso
S	30/12/2011	AP	Zaragoza (5)	Usucapión de servidumbre de paso discontinua.
S	11/07/2012	TSJ	Zaragoza	Usucapión de servidumbre aparente
S	10/09/2012	JPI	Calatayud	Acción negatoria servidumbre de paso y obligación de hacer
S	21/09/2012	AP	Zaragoza (5)	Relaciones de vecindad
S	29/11/2012	JPI	Ejea (1)	Servidumbre de paso
S	04/12/2012	JPI	Ejea (1)	Relaciones de vecindad
A	04/12/2012	JPI	Ejea (1)	Relaciones de vecindad
S	06/02/2013	TSJ	Zaragoza	Servidumbre de paso
S	07/02/2013	AP	Zaragoza	Servidumbre de paso
S	19/02/2013	TSJ	Zaragoza	Medianería
S	21/02/2013	TSJ	Zaragoza	Servidumbre de paso
S	05/03/2013	AP	Teruel	Servidumbre de paso
A	06/03/2013	TSJ	Zaragoza	Acción confesoria servidumbre. Motivación
S	12/04/2013	AP	Teruel	Relaciones de vecindad
S	24/06/2013	TSJ	Zaragoza	Servidumbre de luces y vistas
S	26/06/2013	AP	Teruel	Posesión de servidumbre
S	16/07/2013	AP	Teruel	Servidumbre de paso
S	13/09/2013	AP	Zaragoza (4)	Relaciones de vecindad
S	22/11/2013	AP	Zaragoza (4)	Medianería
S	27/11/2013	AP	Teruel	Relaciones de vecindad
S	22/01/2014	JPI	Teruel (2)	Extinción de servidumbre
S	07/02/2014	AP	Zaragoza (4ª)	Daños por edificación contigua
S	13/05/2014	AP	Teruel	Extinción de servidumbre
S	16/05/2014	AP	Zaragoza (4ª)	Relaciones de vecindad. Medianería
S	27/05/2014	JPI	Ejea (1)	Extinción de servidumbre
S	02/06/2014	JPI	Ejea (1)	Relaciones de vecindad
S	30/06/2014	AP	Zaragoza (4ª)	Servidumbres y medianería
S	30/09/2014	AP	Zaragoza (4ª)	Modificación de servidumbre
S	17/11/2014	TSJ	Zaragoza	Extinción de servidumbre
S	20/11/2014	AP	Zaragoza (4ª)	Servidumbre forzosa
S	11/12/2014	JPI	Calatayud (2)	Servidumbre de luces y vistas
S	04/11/2015	AP	Teruel	Extinción de servidumbre
S	02/12/2015	TSJ	Zaragoza	División de cosa común. Prescripción
S	23/12/2015	TSJ	Zaragoza	Deslinde y amojonamiento de monte público
S	31/03/2016	AP	Zaragoza (4ª)	Propiedad horizontal

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	15/09/2016	AP	Teruel	Bienes troncales
S	16/11/2016	TSJ	Zaragoza	Servidumbre de paso

9. Derecho de obligaciones.

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	22/01/1990	TSJ	Zaragoza	retr. de abolorio, consignación precio,caducid.,disponibilidad
S	06/02/1990	AP	Zaragoza (4)	retracto de abolorio,caducidad
S	20/02/1990	JPI	Huesca (2)	retracto de abolorio
S	05/04/1990	AP	Zaragoza (4)	r. de abolorio,caduc.,consignac.
S	25/10/1990	JPI	Calatayud	retracto de abolorio
S	14/01/1991	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	18/05/1991	JPI	Teruel (2)	retracto de abolorio
S	26/10/1991	JPI	Huesca (1)	retracto de abolorio
S	04/04/1992	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	01/06/1992	JPI	Daroca	retracto de abolorio
S	04/11/1992	TSJ	Zaragoza	retracto de abolorio
S	07/06/1993	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	01/09/1993	JPI	Boltaña	retracto de abolorio
S	03/06/1994	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	12/11/1994	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	14/11/1994	JPI	Calatayud (1)	retracto de abolorio
S	28/03/1995	JPI	Huesca (2)	retracto de abolorio
S	16/04/1996	JPI	Barbastro	retracto de abolorio, precio
S	06/06/1996	JPI	Zaragoza (2)	r. de abolorio, caducidad
S	17/10/1996	AP	Huesca	retracto de abolorio
S	25/10/1996	JPI	Zaragoza (4)	r. de abolorio, fac. moderad.
S	06/11/1996	JPI	Barbastro	retracto de abolorio, precio
S	17/03/1997	AP	Zaragoza (5)	r. de abolorio, caducidad, precio
S	26/05/1997	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	11/07/1997	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	30/07/1997	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	10/11/1997	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	12/12/1997	AP	Huesca	r. de abolorio, fac. moderad.
S	22/04/1998	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	29/04/1998	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	30/04/1998	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	08/09/1998	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	22/09/1998	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	25/01/1999	JPI	Zaragoza (2)	r. de abolorio.
S	10/03/1999	JPI	Huesca (1)	r. de abolorio, fac. moderad.
S	16/10/1999	AP	Huesca	r. de abolorio, fac. moderad.
S	07/03/2000	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	30/11/2000	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	19/12/2000	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	22/12/2000	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	28/12/2000	JPI	Huesca (2)	r. de abolorio
S	19/02/2001	AP	Huesca	daños y perjuicios caza

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	20/02/2001	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	07/06/2001	AP	Teruel	r. de abolorio
S	06/09/2001	AP	Teruel	cesión derechos caza
S	14/09/2001	AP	Zaragoza (4)	r. de abolorio
S	27/11/2001	AP	Teruel	daños y perjuicios caza
S	16/11/2001	AP	Zaragoza (5)	r. de abolorio
S	18/02/2002	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	24/04/2002	TSJ	Aragón	r. de abolorio
S	26/04/2002	AP	Huesca	daños y perjuicios caza
S	07/04/2003	AP	Zaragoza (4)	daños y perjuicios caza
S	28/07/2003	AP	Zaragoza (4)	daños y perjuicios caza
S	12/12/2003	JPI	Ejea (2)	r. de abolorio
S	09/01/2004	JPI	Zaragoza (17)	venta a domicilio
S	22/04/2004	JPI	Huesca (1)	r. de abolorio
S	14/12/2004	JPI	Huesca (1)	r. de abolorio
S	08/02/2005	JPI	Zaragoza (2)	r. de abolorio
S	04/03/2005	AP	Huesca	r. de abolorio
S	14/11/2005	TSJ	Aragón (S. Civil)	r. de abolorio
S	02/02/2006	AP	Huesca	r. de abolorio
S	23/05/2006	AP	Huesca	r. de abolorio
S	06/06/2006	JPI	Zaragoza 3	r. de abolorio
S	31/01/2007	JPI	Zaragoza 2	R. de abolorio
S	30/07/2007	AP	Huesca	R. de abolorio
S	19/10/2007	JPI	Zaragoza 4	R. de abolorio
S	8/01/2008	JPI	Zaragoza (14)	D. de abolorio
S	26/09/2008	AP	Huesca	D. de abolorio
S	17/07/2009	AP	Huesca	D. de abolorio
S	12/05/2009	JPI	Ejea (1)	Daños y perjuicios caza
S	13/05/2009	JPI	Ejea (1)	Daños y perjuicios caza
S	30/06/2009	AP	Huesca	Daños y perjuicios caza
S	20/07/2009	JPI	Ejea (1)	Daños y perjuicios caza
S	20/07/2009	JPI	Ejea (1)	Daños y perjuicios caza
S	14/09/2009	AP	Zaragoza (4)	Daños y perjuicios caza
S	19/11/2009	AP	Zaragoza (4)	Daños y perjuicios caza
S	24/11/2009	JPI	Ejea (1)	Daños y perjuicios caza
S	17/12/2009	AP	Zaragoza (4)	Daños y perjuicios caza
S	23/12/2009	AP	Zaragoza (4)	Daños y perjuicios caza
S	26/02/2010	AP	Zaragoza (5)	Daños y perjuicios caza
S	10/03/2010	AP	Zaragoza (2)	Daños y perjuicios caza
S	01/09/2010	TSJ	Zaragoza	Daños y perjuicios caza
S	02/09/2010	AP	Huesca	Daños y perjuicios caza
A	24/11/2010	TSJ	Zaragoza	Daños y perjuicios caza
S	No consta	JPI	Huesca (2)	Daños y perjuicios caza
S	No consta	JPI	Huesca (2)	Daños y perjuicios caza
S	No consta	JPI	Fraga	Daños y perjuicios caza
S	31/01/2011	AP	Huesca	Responsabilidad coto de caza
S	23/03/2011	AP	Huesca	Responsabilidad coto de caza
S	05/05/2011	AP	Zaragoza (4)	Daños y perjuicios por obras de construcción
S	05/10/2012	TSJ	Zaragoza	Retracto de abolorio

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	16/04/2013	JPI	Zaragoza (14)	Renuncia a herencia en fraude de acreedores
S	13/05/2013	JPI	Zaragoza (14)	Obligaciones asumidas por persona fallecida
S	10/03/2014	AP	Zaragoza (4)	Resarcimiento por aprovechamiento de local
A	10/03/2014	AP	Zaragoza (4)	Costas en incidente oposición
S	14/03/2014	AP	Teruel	Retracto de abolorio
S	15/05/2014	TSJ	Zaragoza	Propiedad horizontal. Local
S	15/09/2014	TSJ	Zaragoza	Retracto de abolorio
S	05/05/2014	AP	Zaragoza (4)	Daños y perjuicios por obras de construcción
S	23/01/2015	AP	Zaragoza (5ª)	Reclamación de cantidad por gastos sanitarios
A	06/02/2015	AP	Zaragoza (5ª)	Obligaciones de depositario
S	10/02/2016	TSJ	Zaragoza	Retracto de abolorio

o. Otras materias

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	21/03/1995	TS	Madrid	Casación
S	01/07/1996	TS	Madrid	Casación
A	28/02/1997	AP	Zaragoza (4)	Casación foral
A	04/03/1997	JPI	Zaragoza (2)	Casación foral
A	14/04/1997	TSJ	Zaragoza	Casación foral
S	24/09/1997	AP	Zaragoza (5)	Prescripción
A	19/11/1997	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	10/02/1998	TS	Madrid	Casación foral
A	24/02/1998	TS	Madrid	Casación foral
A	10/03/1998	TS	Madrid	Casación foral
A	20/04/1998	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	25/05/1998	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	14/07/1998	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	19/05/1998	TS	Madrid	Casación foral
A	02/03/1999	TS	Madrid	Casación foral
A	05/07/1999	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	22/09/2000	TSJ	Zaragoza	Casación foral
S	07/11/2001	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	28/01/2002	TSJ	Zaragoza	Recurso de revisión
A	15/05/2002	TSJ	Zaragoza	Casación foral
A	05/06/2002	TSJ	Zaragoza	Casación foral
S	12/01/2006	AP	Huesca	pº libertad baja volunt. cooperativista
S	31/01/2006	AP	Huesca	efectos baja voluntaria cooperativista
S	03/03/2006	AP	Zaragoza (5ª)	pareja estable: rég. jco.
S	12/05/2006	JPI	Zaragoza (14)	pareja estable; deseq.económ.
S	25/05/2006	AP	Zaragoza (5ª)	disolución cooperativa
S	26/05/2006	AP	Zaragoza (5ª)	control jud. sanción soc. de cazadores
S	27/06/2006	AP	Huesca	expulsión socio cooperativista
S	08/09/2006	AP	Huesca	rég. jco. parejas de hecho

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
S	21/12/2006	AP	Huesca	anulab.y nul. Acuerdos cooperativas.
S	9/01/2007	AP	Huesca	Plazo reembolso aportaciones cooperativista
S	21/02/2007	AP	Huesca	Accidente de esquí: Incumplimiento normativa
S	9/03/2007	AP	Huesca	Efectos baja voluntaria cooperativista
S	13/03/2007	AP	Huesca	Impugnación acuerdo sancionador Consejo rector de Cooperativa
S	27/03/2007	JPI	Zaragoza 17	Acción declarativa de dominio. Montes
S	5/06/2007	JPI	Zaragoza 12	Nulidad contrato compraventa vivienda protección oficial
S	31/07/2007	AP	Huesca	Efectos patrimoniales extinción unión paraconyugal
S	11/10/2007	AP	Huesca	Colegiación profesional
S	20/11/2007	AP	Zaragoza (5ª)	Alcance artículo 15 Ley 24/2003 de 26 de diciembre. Vivienda protegida
S	28/12/2007	AP	Huesca	Dº del consumidor a la información veraz, completa, objetiva y eficaz.
S	9/01/2008	AP	Huesca	Propiedad de una finca
S	10/03/2008	AP	Huesca	Colegiación profesional
S	26/03/2008	AP	Huesca	Colegiación profesional
S	10/06/2008	TSJ	Aragón	Vivienda protección oficial
S	24/06/2008	AP	Zaragoza (5)	Ley Urbanística de Aragón
S	31/07/2008	AP	Huesca	Oblig. Abastecim. agua potable
S	21/11/2008	AP	Zaragoza (5)	Parejas de Hecho
S	26/03/2009	AP	Huesca	Reclam. Honorarios Coleg. Arquitec.
S	28/10/2009	JPI	Huesca (2)	Acuerdos Junta asociación.
S	12/02/2010	AP	Huesca	Contrato de cooperativa. Ineficacia
S	15/02/2010	JPI	Zaragoza (14)	Pareja de hecho
S	19/02/2010	AP	Zaragoza (5)	Derechos socio cooperativista excedente
S	11/05/2010	AP	Zaragoza (5)	Pareja de hecho
S	13/09/2010	TSJ	Zaragoza	Derechos socio cooperativista excedente
S	19/01/2011	AP	Huesca	Pareja estable no casada. Pensión compensatoria
S	27/01/2011	AP	Huesca	Cooperativas. Obligatoriedad para los socios de acuerdos del órgano de gobierno
S	29/03/2011	TSJ	Zaragoza	Levantamiento del velo en contrato societario. Fraude
S	12/05/2011	AP	Teruel	Nulidad convenio regulador
S	22/06/2011	TSJ	Zaragoza	Pérdida de condición de socio cooperativista. Obligaciones contraidas. Adecuación sentencia y pretensión.
S	13/04/2012	JPI	Zaragoza (5)	Baja de socio en sociedad cooperativa
A	04/07/2012	TSJ	Zaragoza	Competencia funcional
A	05/07/2012	TSJ	Zaragoza	Competencia funcional
A	19/07/2012	TSJ	Zaragoza	Admisión recurso casación
A	26/07/2012	TSJ	Zaragoza	Admisión parcial recurso casación
A	26/07/2012	TSJ	Zaragoza	Admisión parcial recurso casación
A	19/11/2012	TSJ	Zaragoza	Incompetencia funcional recurso de

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
				casación
A	27/11/2012	TSJ	Zaragoza	Incompetencia funcional recurso de casación
A	22/03/2013	TSJ	Zaragoza	Costas en recurso de casación. Voto particular
A	05/04/2013	TSJ	Zaragoza	Competencia funcional recurso de casación. Voto particular
A	15/04/2013	TSJ	Zaragoza	Incompetencia funcional
A	27/01/2014	TSJ	Zaragoza	Causas de inadmisión del recurso de casación. Presupuestos de recurribilidad
A	14/02/2014	TSJ	Zaragoza	Causas de inadmisión del recurso de casación. Cuestiones nuevas. Modalidad
A	28/02/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso por infracción procesal
A	03/03/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación
A	13/03/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación. Falta de claridad. Cuestiones de hecho y de derecho
A	18/03/2014	TSJ	Zaragoza	Confusión motivos de impugnación. Datos de hecho
A	21/03/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación. Nueva valoración de la prueba
A	25/04/2014	TSJ	Zaragoza	Auto aclaratorio
A	25/04/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación por falta de interés casacional. Pensión compensatoria
A	05/05/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación. Falta de interés casacional
A	12/05/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación
A	03/07/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación
A	12/09/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación
A	22/09/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso por infracción procesal
A	03/10/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión parcial de recurso de casación
A	03/10/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión parcial de recurso de casación
A	20/10/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión parcial de recurso de casación
A	20/10/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación
A	06/11/2014	TSJ	Zaragoza	Recurso de queja por inadmisión recurso de casación
A	06/11/2014	TSJ	Zaragoza	Recurso de queja por inadmisión recurso de casación
A	03/12/2014	TSJ	Zaragoza	Recurso de aclaración
A	12/12/2014	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación. Naturaleza administrativa de la norma
S	15/01/2015	TSJ	Zaragoza	Baja en cooperativa
S	03/02/2015	TSJ	Zaragoza	Gastos comunidad de propietarios. Usufructo vidual
A	09/03/2015	TSJ	Zaragoza	Causas de inadmisión del recurso de casación. Modalidad. Valoración prueba

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	04/03/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión parcial de recurso de casación
A	08/05/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación e infracción procesal
A	28/05/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión parcial recurso de casación
A	29/05/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	29/05/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	01/06/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión parcial recurso de casación
A	03/06/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	22/06/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	24/06/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	26/06/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	02/07/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	03/07/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	02/09/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión parcial recurso de casación
A	04/09/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	10/09/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	07/10/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión parcial recurso de casación
A	08/10/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	08/10/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	14/10/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	15/10/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	16/10/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	16/10/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	03/12/2015	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	25/01/2016	TSJ	Zaragoza	Competencia y admisión parcial recurso de casación
A	15/02/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación
S	19/02/2016	TSJ	Zaragoza	Responsabilidad Consejo Rector de Cooperativa
S	24/02/2016	TSJ	Zaragoza	Incompetencia funcional recurso de casación
A	25/02/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación e infracción procesal
A	18/03/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación
A	11/04/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación
A	22/04/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación
A	03/06/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	06/06/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	10/06/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación e infracción procesal
A	16/06/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	30/06/2016	TSJ	Zaragoza	Incompetencia funcional recurso casación
A	06/07/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación e infracción procesal
A	07/07/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	08/07/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación

R.	FECHA	TRIB.	LOCALIDAD	CONCEPTOS
A	08/07/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	08/09/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
S	15/09/2016	TSJ	Zaragoza	Propiedad horizontal
A	20/09/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	21/09/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	26/10/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	28/10/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso de casación
A	28/10/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	21/12/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación e infracción procesal
A	11/11/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	16/11/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	21/11/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	23/11/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	25/11/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación
A	12/12/2016	TSJ	Zaragoza	Inadmisión recurso casación

2. INTERPRETACIÓN DE DERECHO CIVIL ARAGONÉS

2.1. Interpretación judicial

A') Selección de fundamentos de derecho.

Transcribimos a continuación los fundamentos de derecho que consideramos más interesantes de las resoluciones del año 2016, clasificados por materias, siguiendo el orden tradicional de la Compilación:

61. PERSONA Y FAMILIA. EN GENERAL

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 27 de junio de 2016. Asignación compensatoria del Derecho aragonés. Carácter indefinido o temporal. Cuantía**

"PRIMERO.- D. Pedro impugna únicamente, por la doble vía de la infracción procesal y de casación, el pronunciamiento por el que la sentencia recurrida torna en indefinida la asignación compensatoria que por importe de 1.000 € mensuales y tiempo de 10 años fijó la sentencia de primera instancia a favor de la que fuera su esposa, Dª Belén, hasta la sentencia de divorcio recaída en los autos de que trae causa el recurso.

Reclama el recurrente en primer lugar la declaración de nulidad de la sentencia y la reposición de las actuaciones al momento anterior de que fuera dictada por la Audiencia Provincial por haber incurrido esta en falta de motivación y errónea valoración de la prueba, a cuyo efecto articula dos motivos de infracción procesal. Subsidiariamente a tal pretensión, sostiene como motivo de casación la infracción del art. 83.2 CDFA, y solicita con carácter principal la reducción de dicha pensión a un tiempo de 1 año y a un importe de 500 € al mes, y, subsidiariamente el mantenimiento de la limitación temporal fijada en la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO.- La parte recurrida, en uso de la posibilidad establecida en el art. 485 LEC, alega que concurren causas de inadmisibilidad de los recursos por motivo de infracción procesal y de casación interpuestos que esta Sala no ha advertido en trámite de admisión.

En cuanto al recurso por motivo de infracción procesal, sostiene que los dos motivos de los que consta adolecen de carencia manifiesta de fundamento.

En lo que toca al recurso de casación afirma que incurre en defectuosa formulación por no respetar la base fáctica.

Si bien es cierto que el recurso por motivo de infracción procesal, como ahora el de casación, es susceptible de ser inadmitido por causa de carencia manifiesta de fundamento, tal palmaria falta no es de apreciar en el presente caso en el primero de los

motivos procesales, pues el recurrente expresa razones por las que entiende que a su parecer la sentencia de apelación no contiene una exhaustiva respuesta a todas las cuestiones planteadas en la apelación, ni justifica la razón por la que revoca el criterio de la primera instancia.

Y lo mismo cabe decir del segundo, en el que recurrente sostiene que la Sala ha errado en la valoración de la prueba en cuanto a las situación económica de los esposos que condujo a la decisión sobre la asignación compensatoria, pues el recurso sostiene con suficiente explicación las razones por las que entiende que la Sala ha dejado de tener en consideración relevantes elementos de prueba.

En definitiva, con independencia de su prosperabilidad, lo que será objeto de estudio en los siguientes fundamentos de derecho, el recurso por motivo de infracción procesal no presenta una falta de fundamento de tal entidad que justifique su inadmisión.

A igual solución llega la Sala en cuanto al recurso de casación. Sostiene la parte recurrida que el recurso no respeta los hechos tenidos como probados por la Sala de apelación, pero a tal efecto no puede ser obviado que se ha interpuesto conjuntamente el recurso por infracción procesal en los que los discute, y por otra parte plantea una neta cuestión jurídica sobre la temporalidad de la asignación compensatoria que la Sala de apelación torna en definitiva, por lo que tampoco en relación a este recurso entendemos que se den elementos de entidad suficiente para inadmitir el recurso.

TERCERO.- Recurso por motivo de infracción procesal.

Dos son los motivos de impugnación. El primero sostiene falta de motivación de la sentencia con infracción del art. 218.2 LCE; el segundo errónea valoración de la prueba practicada.

Por lo que se refiere a la primera de las infracciones procesales, el recurrente sostiene que la Sala no da *el más mínimo razonamiento jurídico … que nos permita comprender por qué se llega a esa conclusión tan diferente a la de la instancia y tan perjudicial para mi representado* hasta el punto de que *la redacción de la sentencia, impide a esta parte conocer el análisis jurídico hecho por el Tribunal de segunda, instancia, porque omite cualquier fundamentación jurídica y eso nos impide combatir la sentencia adecuadamente.*

Ciertamente el art. 218 LEC exige que las sentencias sean claras, precisas y congruentes y que sean motivadas expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la solución que pronuncian

El TC ha señalado en su STC 101/2015, de 25 de mayo de 2015:

> *Este Tribunal viene expresando reiteradamente que la motivación se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE y consiste en la expresión de los criterios esenciales de la decisión o, lo que es lo mismo, su ratio decidendi (SSTC 119/2003, de 16 junio; 75/2005, de 4 abril, y 60/2008, de 26*

mayo), por lo que se produce infracción constitucional cuando no hay motivación —por carencia total—, o es insuficiente, pues está desprovista de razonabilidad, desconectada con la realidad de lo actuado. Del mismo modo, hemos afirmado que 'la arbitrariedad e irrazonabilidad se producen cuando la motivación es una mera apariencia. Son arbitrarias o irrazonables las resoluciones carentes de razón, dictadas por puro capricho, huérfanas de razones formales o materiales y que, por tanto, resultan mera expresión de voluntad (STC 215/2006, de 3 de julio), o, cuando, aún constatada la existencia formal de la argumentación, el resultado resulte fruto del mero voluntarismo judicial, o exponente de un proceso deductivo irracional o absurdo (STC 248/2006, de 24 de julio)'

Ahora bien, el mismo Tribunal Constitucional se ha ocupado de circunscribir dicha exigencia a sus propios límites en sentencias tales como la nº 13/2001 y la 9/2015, en la primera de las cuales se dice con criterio reiterado en la segunda:

Ahora bien, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, como derecho a obtener una decisión fundada en Derecho, no es exigible un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se debate, sino que basta con que el Juzgador exprese las razones jurídicas en las que se apoya para tomar su decisión, de modo que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, esto es, la ratio decidendi que determina aquélla. No existe, por lo tanto, un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación, puesto que su función se limita a comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso, si el razonamiento que contiene constituye, lógica y jurídicamente, suficiente motivación de la decisión adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión (por todas, SSTC 184/1998, de 28 de septiembre, FJ 2; 187/1998, de 28 de septiembre, FJ 9; 215/1998, de 11 de noviembre, FJ 3; 206/1999, de 8 de noviembre, FJ 3, 187/2000, FJ 2).

Igual criterio sostiene el TEDH en su interpretación del art. 6 de Convenio de 1950 en SS tales como Bolea v Rumania, Kuznsov y otros v Rusia, Pronia v Ucrania, Dimitrelos v Grecia, Pérez v Francia, García Ruiz v España, Bwg y otros v Francia, Gorou v Grecia, Kukkonen v Finlandia, Helle v Finlandia, Tatishvili v Rusia … en las que se señala dicha norma incluye la obligación de los tribunales dar razones suficientes de su decisión, pero que no puede ser entendida en el sentido de que impone una respuesta detallada a cada argumento, ni que requiera que un tribunal de apelación haya de dar razones más detalladas cuanto aplica simplemente una concreta previsión legal para rechazar el recurso, de tal forma que puede ser bastante, en los casos en que la apelación es rechazada, la simple remisión a las razones dada por el tribunal inferior.

La jurisprudencia más reciente ha acuñado el "principio de economía motivadora", con arreglo al cual no se explica lo obvio, pues tan perturbador puede ser en ocasiones la

penuria o pobreza motivadora como una acumulación agotadora de argumentos que se van amontonando y pueden llegar a aturdir por su obviedad, dificultando el hallazgo de los puntos clave, los puntos realmente controvertidos (STS 2ª nº 290/2014 de 21 de Marzo de 2014).

Para terminar con la exposición de esta doctrina general, es de citar la que recoge nuestra S nº 26/2013, dictada en el recurso nº 5/2013, en el que dijimos:

> *Sobre la infracción del artículo 218.2 LEC basada en la necesidad de que el tribunal superior motive suficientemente el cambio de criterio de la primera instancia, la STS de 1 de octubre de 2.012 (recurso 29/2010) dice en su apartado 63: " 1) que la segunda instancia atribuye al tribunal de apelación plena libertad para la valoración de la prueba; 2) que no es precisa una motivación específica polemizando con la sentencia de la primera instancia, sino la propia de toda valoración probatoria; y 3) que no se ajusta a la verdad la pretendida falta de motivación, ya que, como se ha indicado, la sentencia expuso de forma clara y precisa los indicios que condujeron a las conclusiones de hecho sobre las que asienta su decisión."*

Pues bien, en el presente caso, la sentencia recoge como elementos de hecho específicamente para decidir sobre la asignación compensatoria lo que siguen:

> *El matrimonio ha durado más de 21 años, la esposa de 48 años de edad, licenciada en filología inglesa, no ha desempeñado nunca trabajo alguno fuera del hogar, habiendo contraído matrimonio con 24 años de edad, y dedicado ese tiempo al cuidado de la familia (cuatro hijos), período en que el esposo ha desarrollado una amplia labor profesional como economista, no sólo en el campo del ejercicio libre, sino también en el de la docencia (Universidad de Zaragoza) y de la empresa, obteniendo no sólo los importantes ingresos descritos en la Sentencia impugnada, sino también, el considerable patrimonio que apunta, que ha permitido sufragar el elevado nivel de vida de la familia.*

Anteriormente, ya había señalado como circunstancia relevante para la decisión del litigio que:

> *El nivel de vida de la familia ha sido elevado con gastos mensuales de jardinero, asistenta doméstica, abonos periódicos de esquí y de vehículos.*

Y sobre tales circunstancias razona que:

> *Es claro que la edad de la esposa y su nula experiencia laboral hacen poco factible su incorporación al mercado de trabajo, en condiciones que le permitan afrontar no sólo su independencia, sino su propia subsistencia, resultando así difícil la obtención de un periodo mínimo de cotización para ser acreedora de una pensión en el futuro.*

La liquidación de la sociedad conyugal no puede afectar al importe de las pensiones, al suponer la concreción para cada litigante del haber consorcial (S.T.S. 22-6-2011).

La fijación de una pensión temporal no va a permitir superar el desequilibrio concurrente a la esposa, vista la situación económica que detenta el esposo y la ostentada durante el matrimonio.

En consecuencia, procede establecer a favor de Dª Belén María una pensión de 1.000 € mensuales, con carácter indefinido.

Tales argumentos son bastantes para entender cumplida la exigencia de motivación cuyo incumplimiento se erige como motivo de recurso, pues exteriorizan y dar a conocer razones bastantes en hecho y derecho de la decisión tomada que permiten a la parte conocer el porqué del pronunciamiento, y le permiten su impugnación, como por otra parte muestra la extensa redacción del recurso, en que se discute los argumentos dados por la sentencia.

CUARTO.-Segundo motivo de infracción procesal. Error en la valoración de la prueba.

En la explicación de este motivo no indica el recurrente la contradicción entre la prueba practicada y el juicio de hecho llevado a cabo por el tribunal de apelación, lo que dice en su desarrollo es que la Sala de apelación ha dejado de valorar elementos relevantes a su juicio que de haber sido debidamente tenidos en cuenta habrían conducido a la solución sobre la asignación compensatoria que se propugna en el recurso. A tal efecto, afirma que la Sala no ha tenido en cuenta: 1) que Dª Belén ha rechazado un puesto de trabajo como administrativa en la empresa familiar de D. Pedro; 2) que el matrimonio dispuso de empleada del hogar a tiempo completo durante todo el tiempo que duró el matrimonio; y 3) que en el inventario a partir en la liquidación de la sociedad conyugal se ha recogido un activo de 600.000 € y no figura en él ninguna partida como pasivo.

Pues bien, todos estos elementos de hecho figuran debidamente recogidos en la sentencia apelada, sea directamente en su texto, bien por la asunción explícita o implícita de lo dicho en la sentencia de primera instancia, de tal forma que lo que en realidad se denuncia no es una errónea valoración de la prueba, como dice en la enunciación del motivo, sino la valoración que de los hechos que resultan probados realiza la Sala para decidir sobre el importe y duración de asignación en disputa, y tal propósito, por pertenecer a la subsunción jurídica, es por completo ajeno al recurso por motivo de infracción procesal que se ha hecho valer, y así lo hemos puesto de relieve en sentencias tales como la nº 35/2014, en la que dijimos, para desestimar un motivo en el que se invocaba la existencia de error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba:

El motivo ha de ser desestimado. La sentencia recurrida no ha ignorado el devenir profesional de la recurrida sino que, haciendo suyos los hechos de la sentencia de primera instancia, que expresamente reproduce, llega a la conclusión de la procedencia de mantener la citada asignación con carácter indefinido.

La sentencia de primera instancia había incluido esa vida laboral en el relato de hechos probados, que hemos trascrito en el segundo fundamento jurídico, y aunque no relataba pormenorizadamente todo el devenir de su actividad profesional, consignaba los documentos donde está recogida, de forma que el contenido de esta documental quedó integrado en el factum.

No aprecia esta Sala que en la valoración de estos hechos la Audiencia haya incurrido en error notorio o haya infringido las reglas de la lógica, sino que ha ponderado los diferentes hechos relevantes para justificar la decisión de mantener la asignación compensatoria, con carácter indefinido.

Frente a ello, la parte recurrente trata de sustituir el criterio valorativo efectuado por el tribunal de apelación por su propia valoración, especialmente en cuanto al juicio prospectivo de la futura evaluación de la situación personal y profesional de la contraria. Pero esta sustitución no tiene cabida en un recurso extraordinario como el presente.

QUINTO.- Único motivo de casación. Infracción del art. 83.2 CDFA.

Sostiene el motivo que la decisión recurrida al decidir una pensión indefinida por el importe de 1.000 € contraviene la doctrina sentada por esta Sala de casación por las siguientes razones: 1) rechazar como elemento relevante la atribución a Dª Belén de lo que le corresponda de los bienes inventariados en el procedimiento de liquidación del régimen consorcial aragonés; 2) contradecir el criterio de la Sala en relación a las posibilidades de empleo de la esposa; 3) contradecir el criterio de la Sala que señala que la asignación en disputa no tiene por fin igualar los patrimonios ni ser un medio indefinido de vida; 4) no haber tenido en cuenta que la esposa dispuso durante todo el tiempo de convivencia de la ayuda de una empleada del hogar a tiempo completo; 5) no haber tenido en cuenta que el uso del domicilio ha sido atribuido a la esposa y sus hijos durante 10 años; 6) no respetar el criterio de esta Sala de que debe haber una proporción entre la duración de la asignación y la del matrimonio cuya ruptura da lugar a ella.

De acuerdo con el art. 83.2 CDFA que se dice infringido:

La cuantía y la naturaleza temporal o indefinida de la asignación serán determinadas por el Juez mediante la ponderación equitativa de los siguientes criterios:

a) Los recursos económicos de los padres.

b) La edad del solicitante, sus perspectivas económicas y las posibilidades de acceso al mercado de trabajo.

c) La edad de los hijos.

d) La atribución del uso de la vivienda familiar.

e) Las funciones familiares desempeñadas por los padres.

f) La duración de la convivencia.

La aplicación de tales criterios al caso concreto forma parte de las facultades discrecionales que corresponden a los tribunales de instancia, de tal forma que las decisiones por ellos tomadas no pueden ser corregidas mediante el recurso de casación, dada su finalidad nomofiláctica, sino en aquellos casos en suponen infracción del precepto legal por aparecer como absolutamente ilógicas, irracionales o asentadas en parámetros distintos de los legales o establecidos por la jurisprudencia, y así lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, como en las SS nº 26/2013, en el recurso nº 5/2013, o 1/2012, en recurso 22/2011.

Así, en la primera de dicha sentencias sostuvimos:

> *En definitiva, se produce una circunstancia habitual en estos casos, al considerar la parte recurrente que su propia valoración de los parámetros legalmente establecidos para la fijación de esta asignación y su duración temporal, responde mejor a la prospectiva que se requiere para la superación del desequilibrio que la realizada por el tribunal, lo que no es posible salvo la acreditación de que esta última resulta ilógica, irracional y, en definitiva, arbitraria.*

Y en la segunda:

> *En realidad, lo que propone en su recurso es, partiendo de los hechos probados recogidos en la sentencia recurrida, una distinta valoración de los mismos, lo que no es posible porque tal función corresponde a los juzgados y a los tribunales de apelación. Las sentencias del Tribunal Supremo de 9 y 17 de octubre de 2008 (RC 516/2005 y RC 531/2005), de 28 de abril de 2010 (RC 707/2006) y de 4 de noviembre de 2010 (RC 514/2007), afirman que las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la pensión, ya en el de justificar su carácter vitalicio, deben ser respetadas en casación siempre que aquellas sean consecuencia de la libre y ponderada valoración de los factores a los que se refiere de manera no exhaustiva el artículo 97 CC y que han de servir tanto para valorar la procedencia de la pensión como para justificar su temporalidad, siendo posible la revisión casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia.*
>
> [...]
>
> *Así pues, la fijación de la pensión o asignación compensatoria de forma indefinida o temporal depende de las específicas circunstancias de cada caso cuya valoración corresponde a los tribunales de instancia y apelación que, como hemos*

dicho, no puede ser revisada en esta vía casacional salvo cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia, lo que no se aprecia en el presente supuesto por lo que debe ser rechazado el motivo y desestimado el recurso.

El recurrente, como decimos, sostiene que la decisión que combate incurre en infracción de la doctrina sentada por esta Sala, tanto en lo que se refiere a la temporalidad de la pensión como a su cuantía.

En relación a lo primero, ya destacamos en las SS 35/2014 y 35/2015 que el legislador aragonés no ha establecido en su regulación de la asignación compensatoria un plazo de duración, como sí ha hecho respecto de otras consecuencias de la ruptura matrimonial - uso de la vivienda familiar, art. 81.3 CDFA, por lo que su establecimiento es tan solo una posibilidad para el órgano jurisdiccional cuyo uso dependerá de que con él no se resienta la función de restablecer el equilibrio que cumple, a cuyo efecto habrá de valorar la idoneidad o aptitud del beneficiario para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto mediante un juicio prospectivo cuya realización corresponde a los tribunales de instancia y que no es revisable en casación, salvo que la decisión adoptada se aparte de los criterios exegéticos establecidos jurisprudencialmente o se realice mediante una valoración de los hechos alejada de la lógica.

Sostiene el recurrente que el tiempo indefinido por el que se ha inclinado la sentencia de primer grado no responde a una adecuada valoración de las circunstancias concurrentes de acuerdo con las pautas que resultan de la jurisprudencia de esta Sala, y no podemos sino acoger tal alegato.

Como con acierto señala el motivo, nos hemos pronunciado por la temporalidad en situaciones semejantes a la presente. Así en nuestra S 35/2015 mantuvimos la temporalidad (5 años) de la asignación de que se trata en relación a una persona de 45 años que no tenia limitación alguna y que había superado parte de los estudios de derecho, y en la sentencia 1/2012 dimos por bueno el razonamiento de que la *esposa deberá trabajar en el futuro por mucho que casi tenga 50 años y escasas cotizaciones* para mantener también la pensión compensatoria.

Por lo demás, en el presente caso, la esposa permanece en la vivienda conyugal con la descendencia común, integrada por dos hijos ya mayores de edad, si bien no son independientes, un tercero de 17 años y una cuarta de 7 años de edad, cuya atención no impide acometer el inicio de la procura de trabajo en el tiempo de 10 años fijado en la sentencia de primer grado, en el que es razonable suponer que las cargas familiares sean cada vez más livianas.

Por último, y en lo que toca las consecuencias que hayan de ser reconocidas a la atribución de bienes a la esposa (aproximadamente 300.000 €) en la liquidación del haber conyugal, la sentencia de primer grado la tiene en consideración a estos efectos,

mientras que la de segundo grado le niega expresamente relevancia es estos efectos. Pues bien, uno de los elementos que han de ser tenidos en cuenta de acuerdo con el art. 83.2 CDFA es *los recursos económicos de los padres*, y esta Sala ha mencionado el haber común partible como elemento a valorar para establecer la asignación compensatoria en SS 3/2016, 25/2013 y 1/2012.

Por el contrario, esta Sala ha rechazado la estricta proporcionalidad entre la duración de la asignación y la del matrimonio en la S 26/2016 en la que señalamos que la sola afirmación de que una duración del matrimonio de catorce años debe conllevar un plazo igual de catorce años de asignación para restaurar el desequilibrio ocasionado por el divorcio resulta arbitraria pues no se encuentra respaldada por norma alguna y debería ser puesta en relación, al menos, con la cuantía de la misma.

Así las cosas, hemos de concluir que la valoración de las circunstancias concurrentes realizadas por el juzgador de primer grado es más adecuada a los criterios sostenidos por esta Sala en la interpretación del art.83.2 CDFA, por lo que el recurso debe ser estimado en este punto.

SEXTO.- La respuesta al recurso ha de ser otra en cuanto al concreto importe de la asignación en el que convergen las sentencias de las dos instancias.

Sostiene el recurrente que ha de ser de 500 € al mes, pero a diferencia de lo que acontece en relación a la decisión de temporalidad o tiempo indefinido de la asignación que ha sido objeto de estudio en el anterior fundamento, no concurren razones para variar la valoración hecha por los juzgadores de instancia dentro del margen de discrecionalidad que en tal menester les reconoce en la jurisprudencia que ha quedado más arriba reseñada."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 6 de septiembre de 2016. Pensión compensatoria. Supresión. Alteración sustancial de las circunstancias. Falta de prueba**

"PRIMERO.- Ceñida la cuestión litigiosa a la supresión de la pensión compensatoria alegando en su demanda el actor como circunstancias sustanciales que justificaban su supresión, haber sufrido un revés económico en su empresa, cuyos resultados no son ni de lejos los existentes en la fecha de la sentencia de divorcio, así como la aprobación de acuerdo transaccional entre ambos otorgando la mitad del patrimonio a cada uno de ellos. Por el Juzgador de instancia se desestima tal pretensión tras examinar los preceptos legales atinentes al caso, por considerar que el demandante no ha cumplido con la carga de probar lo que le incumbe, razonando la imposición de costas por temeridad.

Concretamente se dice. " siendo temeraria una cosa dicha, hecha o pensada sin fundamento, razón o motivo (diccionario de la Real Academia Español), así que calificar una demanda tácticamente redactada sobre la crisis económica del peticionario, a la que no se acompaña documento alguno para intentar probarla y en el que su segundo argumento, consistente en la invocación del criterio jurisprudencial que considera la parte, no se ilustra con la referencia, por desacertada que pudiera ser, a resolución judicial alguna…".

Pues, dijo previamente en su sentencia el Juzgador de instancia " en el caso examinado, el actor ni siquiera intenta probar el hecho fáctico de la merma de recursos económicos con lo que hacer frente a la obligación impuesta que afirma en la demanda y cuya carga le incumbe (artículo 217 de la Le de Enjuiciamiento Civil), no aportando documento alguno en ella.

Requerido de complemento (artículo 770.1º de la Ley Procesal Civil), acompaña por toda justificación documental las declaraciones anuales correspondientes al Impuesto sobre Sociedades y documentación contable de la mercantil M, S.A.U de los ejercicios 2011 y siguientes.

De modo que en ausencia de explicación de cual sea la minoración que invoca el actor y de concreción de la misma en su persona no en la mercantil que dirige, su argumento carece de cualquier posibilidad de estimación"

A tal decisión y argumento se opone la parte apelante por la vía de este recurso de apelación para pretender la revocación del fallo de la sentencia y la supresión de la pensión compensatoria, por entender que si ha cumplido con la carga de probar siendo errónea la sentencia.

SEGUNDO.- El recurso ha de ser desestimado; sin mas que comprobar la inconcreción de la demanda en cuanto a las bases anteriores que determinaron el establecimiento de la pensión, porqué y en qué medida se dicen alteradas, pues ello es necesario para poder estimar su extinción por alteración sustancial de los criterios económicos en función de

los cuales fue determinada (art. 83.4 del Código de Derecho Civil de Aragón). Pues para ello no basta limitarse a alegar, que el patrimonio del matrimonio se ha liquidado o la genérica alegación de una crisis de la empresa del demandante, limitándose a presentar en apoyo de ello y a requerimiento del juzgado una documental contable, para que el Juzgador la examine y saque sus propias conclusiones como si se tratara de un experto contable. Es necesario dotar de concreción y significación jurídica a tales alegación, proporcionando como mínimo un juicio comparativo, que desde luego ni se ha ofrecido, no se ha intentado probar."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 30 de septiembre de 2016. Pensión compensatoria. Extinción. Alteración sustancial de circunstancias económicas**

"PRIMERO. Frente a la sentencia de instancia que, acordando el divorcio del matrimonio formado por , desestima la petición de aquél de reducir o extinguir la pensión compensatoria que satisface mensualmente a la Sra. I en la suma de 690 €, se alza ahora el Sr. E alegando: a) Infracción del artículo 83 del Código de Derecho Foral de Aragón; infracción de los artículos 90, 91 y 100 del Código Civil y del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo existente en aplicación de los mismos; y b) error en la valoración de la prueba.

Considera el apelante que en el caso enjuiciado se ha producido un cambio sustancial y permanente en las circunstancias que se tuvieron en cuenta para la fijación en su día de la pensión compensatoria a favor de la esposa, en concreto: 1º/ la pérdida del uso de la vivienda de la que disponía el apelante por razón de su trabajo mientras estuvo en activo en el Cuerpo de la Guardia Civil, lo que, según dice en su recurso, se traduce en una merma de unos 400 € mensuales. 2º/ La mejora en la situación económica de la esposa que –añade- ha aumentado su patrimonio desde que se produjo la separación, pues ha recibido por herencia una serie de inmuebles cuyo valor de referencia en la parte adjudicada es de 15.265,71 €; habiendo vendido uno de ellos por el que ha percibido la cantidad de 10.000 €, además de disponer de fondos de inversión, títulos valores, planes de pensiones o ahorros. Por otra parte alega el recurrente que al tener la Sra. I más de sesenta y cinco años, si bien no es posible que sea beneficiaria de una pensión de jubilación, sí podría ser beneficiaria de una pensión no contributiva en el momento en que sus ingresos o rentas anuales fuesen inferiores a 5.150,60 € (artículo 369 y concordantes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

La apelada doña D se opone al recurso interpuesto.

SEGUNDO. La primera de las cuestiones planteada por el apelante fue resuelta por el Magistrado-Juez de instancia partiendo de lo dispuesto por las partes en la cláusula tercera del convenio regulador firmado por ambos, estipulación que se dedica expresamente a regular la pensión compensatoria a favor de la Sra. I. En dicha cláusula los ahora litigantes fueron muy detallistas al fijar tanto la cuantía de la pensión compensatoria a favor de la Sra. I como las modificaciones que podría experimentar, llegando incluso a contemplar el cálculo de la pensión cuando este adquiriera la condición de jubilado o percibiera cualquier otra prestación de la Seguridad Social. Pues bien, a pesar de dicha precisión y minuciosidad no se hizo mención alguna a la vivienda, a pesar de ser una circunstancia que podían haber tenido en cuenta perfectamente porque ambos sabían que la vivienda asignada al apelante por razón de su trabajo dejaría de poseerla cuando ya no estuviera en activo.

Nada dice el apelante que desvirtúe dicho argumento, pues se limita a incidir en el gasto añadido que le supone el pago de una vivienda pero sin justificar dónde se halla el error de valoración de prueba que alega en su recurso.

Por otra parte, la alegación relativa a la mejora de la situación económica de la Sra. I también tuvo suficiente respuesta en la sentencia de primera instancia. Ha quedado acreditado en autos que el único ingreso que ha percibido doña D al margen de la pensión compensatoria durante los 17 años que han transcurrido desde la separación matrimonial han sido 10.000 € que le correspondieron por la venta de un inmueble recibido en herencia por la demandada y sus hermanas, venta que tuvo lugar el día 9 de noviembre de 2004, hace ya doce años. Este hecho no supone una alteración sustancial en la fortuna de la Sra. I susceptible de producir una modificación de la pensión compensatoria (art. 83.4 Código de Derecho Foral de Aragón); no se presenta con caracteres de estabilidad o de permanencia en el tiempo. Todo lo demás que es calificado por el apelante como aumento del patrimonio de la demandada (fondos de inversión, títulos valores, planes de pensiones o ahorros) no puede considerarse como tal incremento, como acertadamente expone el Magistrado-Juez a quo, pues no se ha probado que procedan de ingresos diferentes al pago mensual de la pensión que le satisface el esposo y de la suma percibida en herencia.

Finalmente, expone don J en su recurso la posibilidad que tiene la Sra. I de pedir una pensión no contributiva por tener más de sesenta y cinco años, lo que haría innecesario el pago de una pensión compensatoria por su parte. Pues bien, esta petición no se realizó en la instancia, razón suficiente para no poder ser estimada en esta alzada. Lo que interesó el actor en su demanda fue la extinción del pago de la pensión compensatoria en el supuesto de que doña D estuviera percibiendo algún tipo de prestación o pensión igual o superior a 400 € mensuales. Al haberse acreditado que no es beneficiaria de la misma, ha cambiado la petición e interesa la supresión por la "posibilidad" que tiene de pedirla, dando así un giro a su reclamación que debe considerarse extemporáneo. En todo caso, no puede pretenderse una extinción o reducción en base a un hecho que no ha acontecido.

Así las cosas, no dando el apelante en esta alzada ningún dato que pueda desvirtuar los acertados fundamentos esgrimidos por el Juzgador a quo en la resolución impugnada, deben ser rechazados los motivos de oposición y confirmar la sentencia impugnada."

62. PERSONA. EDAD

64. RELACIONES ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES

*** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 13 de enero de 2016. Régimen de visitas de menor próximo a mayoría de edad. Interés superior. Relación con el progenitor no custodio. Facultad discrecional del juzgador

"PRIMERO.- En el procedimiento de divorcio del que dimana el presente recurso, el Juzgado de Primera Instancia, considerando que concurrían en el caso todas las circunstancias favorables para el establecimiento de un régimen de custodia compartida para el hijo común, lo acordó así en sentencia de 29 de enero de 2015. En ella se expresa que el único problema que se plantea es la opinión contraria del menor (nacido el 1999), quien ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de permanecer bajo la custodia exclusiva del padre, pidiendo plena libertad para visitar a su madre. No obstante refiere que, valoradas las exploraciones del menor (tres en total, desde que se presentó la demanda en 5 de septiembre de 2012) se aprecia que "las razones esgrimidas por éste para justificar su preferencia hacia el padre se deben a la mayor flexibilidad del mismo en los aspectos educativos y, en general, de convivencia. No se aprecia una motivación seria y madura para preferir la convivencia con el padre, dando la impresión de que el rechazo a la madre, permitido por el desastroso régimen de medidas provisionales acordado en su día, sumado a la mala relación entre los progenitores, se debe a una búsqueda de comodidad por parte del menor y a una evitación del conflicto con la madre (…)". Y añade que, "además de esto, hay que remarcar una idea sumamente importante apuntada por el Ministerio Fiscal en su informe. El actual sistema, que es el que se pretende consolidar por la parte actora, esta produciendo de facto una clara desafección ente el hijo y la madre, lo cual resulta totalmente nocivo para el interés del menor a corto, pero sobre todo a largo plazo (…)".

La sentencia de la Audiencia Provincial dictada en fecha 29 de mayo de 2015 y ahora recurrida estimó el recurso del padre en cuanto al régimen de custodia, restaurando el acordado en el auto de medidas provisionales a favor del padre. Rechazó, sin embargo, la pretensión de que el menor pudiera relacionarse con su madre con total libertad, es decir, sin someterse a un régimen de visitas prefijado (tras señalar que en la exploración quedó patente la voluntad del menor de que el régimen de visitas consistiera en estar con su madre cuando él quisiera). Valoró la opinión del menor y la prueba pericial practicada, que consideró más adecuado que la custodia se atribuyera al padre pero con un régimen de visitas que "…puede ser flexible, siempre que se garantice una frecuencia en el contacto materno-filial al menos semanal".

SEGUNDO.- En el recurso de casación que se nos somete se combate el referido pronunciamiento, alegando que se han infringido los artículos 59, 79.2 y 80.2 del CDFA, y de los artículos 3.3 a) y 12 de la Ley 12/2001 de la Infancia y la Adolescencia en Aragón.

Como con toda razón apunta el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso, el recurrente no razona, de manera separada, por qué entiende que la sentencia recurrida infringe cada uno de los preceptos citados en el encabezamiento del motivo. El artículo 59 CDFA proclama el derecho y la obligación de los padres de visitar al hijo y relacionarse con él; el 79.2 dispone que en casos de ruptura de la convivencia de los padres el Juez dictará las medidas necesarias a fin de (entre otros) garantizar la continuidad y efectividad del mantenimiento de los vínculos de los hijos menores con cada uno de sus progenitores. No cabe, pues, entender, que infringe estos preceptos un pronunciamiento que establece un régimen de visitas mínimo y, de hecho, como acabamos de indicar, el recurrente no lo explica. Tampoco se alcanza a comprender por qué la fijación de un régimen de visitas vulnera el artículo 80.2, que versa sobre el régimen de custodia y factores a tener en cuenta para acordarla. El artículo 3.3.a) de la Ley 12/2001 alude a la prevalencia del interés superior de los menores como principio al que han de responder las acciones que se promuevan en la Comunidad Autónoma de Aragón para la atención de la infancia y la adolescencia, y el 12 de la misma Ley versa sobre el derecho a la información que asiste a los niños y adolescentes, lo que no guarda relación alguna con la cuestión que ahora nos ocupa.

Realmente, lo que se plasma en el recurso es la consideración que lleva a cabo la parte en el sentido de que la sentencia ha infringido el principio del *favor filii* al acordar un régimen de visitas preestablecido y tasado.

TERCERO.- Razona la parte que, cuando los hijos cuentan ya con una cierta edad, su autonomía personal es muy amplia, y difiere poco de la que tendrían si fueran mayores de edad.

Es lo cierto que, actualmente, el derecho de los padres a relacionarse con sus hijos no se configura sólo como un derecho sino más bien como un derecho/función, cuyo ejercicio se rige por el principio del interés del menor (art. 5.4 CDFA). Por ello, en aplicación de este principio, se otorga cierta participación del menor en la toma de decisiones. Ello conduce, como ha señalado la doctrina más autorizada, a una nueva manera de valorar todo lo que afecta a la situación jurídica del menor.

El menor, en cuanto tal, no tiene una autonomía completa, pues está sometido a la autoridad familiar. En lo relativo a la toma de decisiones judiciales que le afecten, tales como la que nos ocupa, la ley exige que éste sea oído; su opinión cuenta, pero no es vinculante. Dado que no ha alcanzado aún la madurez suficiente como para decidir por sí mismo, sobre su voluntad se impone la decisión del Juez, que es a quien corresponde determinar qué es lo que, en el caso, conviene a su interés, principio superior de orden público que es lo que ha de guiar dicha decisión.

El interés del menor (como el propio recurrente recoge en su escrito) es un concepto jurídico indeterminado que precisamente ha de ser determinado en cada caso. La noción de "interés del menor" no es ni un dogma, ni un estándar de contenido universal. Debe ser interpretada y aplicada caso por caso (de ahí que aporte poco la cita de sentencias

anteriores en las que se optó por soluciones distintas) evitando siempre eventuales arbitrariedades.

El Preámbulo de la reciente Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia lo expresa así:

Este concepto se define desde un contenido triple. Por una parte, es un derecho sustantivo en el sentido de que el menor tiene derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una solución. Por otra, es un principio general de carácter interpretativo, de manera que si una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma se debe optar por la interpretación que mejor responda a los intereses del menor. Pero además, en último lugar, este principio es una norma de procedimiento. En estas tres dimensiones, el interés superior del menor tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del menor, así como su desarrollo integral.

A la luz de estas consideraciones, es claro que la determinación del interés superior del menor en cada caso debe basarse en una serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el legislador que deben ser tenidos en cuenta y ponderados en función de diversos elementos y de las circunstancias del caso, y que deben explicitarse en la motivación de la decisión adoptada, a fin de conocer si ha sido correcta o no la aplicación del principio.

CUARTO.- En las situaciones de ruptura entre los progenitores, se hace necesario el establecimiento de un régimen de visitas que garantice ese derecho/deber de aquellos de relacionarse con sus hijos. Ciertamente, mientras que para los padres el artículo 59 lo configura como un derecho/deber, el artículo 60 del CDFA alude sólo al *derecho* del hijo a relacionarse con sus padres. Pero si los padres tienen deberes respecto de sus hijos es porque éstos tienen derechos respecto de sus padres y viceversa. Coexisten así los intereses de uno y de otros. Ante ello, el artículo 2.4 de la Ley de Protección Jurídica del menor dispone que *en caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes.*

El TEDH (Sentencia de 13 julio 2000) ha subrayado, en relación con el artículo 8 del Convenio de Roma, que "*el disfrute mutuo de la compañía recíproca de cada uno de los padres y del hijo constituye un elemento fundamental de la vida familiar, aún cuando la relación entre los padres se haya roto*".

Debe pues, partirse de que la relación de los hijos con los padres redunda en interés de éstos. Ello es así porque interés superior, derechos del menor y necesidades fundamentales de éste (entre las que están las afectivas) son nociones estrechamente relacionadas. Pero cabe que haya situaciones en las que eso no se así, y por ello el precepto del artículo 60.3 del CDFA permite que, *si el interés del menor lo requiere*, podrá el Juez denegar, modificar o suspender la relación del menor con sus padres.

Del lado de los hijos, la correspondiente decisión puede plantear problemas como el que aquí aparece. En ocasiones, cuando la edad del menor está próxima a la mayoría de edad, los tribunales acogen su manifestado deseo de relacionarse con el progenitor no custodio con libertad, valorando que ello es lo más conveniente en el caso. Cabe, empero, que no siempre sea así. En el presente caso, dejar el régimen de visitas a la entera voluntad del menor, que se ha manifestado contrario a la fijación de un régimen de visitas regular con su madre (que no a visitarla), podría comportar que se consolidase la desafección entre madre e hijo (distinto sería que hubiese un rechazo justificado por una acreditada conducta previa de la madre). Ello, al margen de la viabilidad o no de su imposición coactiva: ha de quedar al buen sentido de la madre la ponderación de hasta qué punto debe exigir (art. 65.2 CDFA) el cumplimiento riguroso del régimen que la sentencia recurrida ha acordado.

Pues bien, nos encontramos, una vez más, y como ya ha quedado expuesto, ante una facultad discrecional del Juez que, por eso mismo, no controlable en casación salvo que se patentice que no se ha utilizado de modo lógico. Es constante la doctrina jurisprudencial que limita el ámbito del recurso de casación a su función nomofiláctica, de tal forma que considera ajeno al mismo el control de las decisiones adoptadas dentro de los márgenes de discrecionalidad que el legislador confiere a los tribunales para llevar a cabo el juicio de valor del que depende la decisión del caso concreto. El Tribunal Supremo ha dicho (STS 614/2009 de 28 septiembre) que, establecido que el interés del menor el criterio legal de decisión:

"el problema procesal se plantea en torno al órgano que debe apreciar dicho interés, porque como señala la doctrina más autorizada, en esta cuestión, la discusión sobre si se ha aplicado o no la norma fundando la decisión en el interés del menor tiene aspectos casacionales, mientras que la delimitación de la realidad que determina en cada caso concreto cuál es el interés del menor, no los tendrá. Este Tribunal ha considerado que por tratarse de una facultad discrecional del juzgador, en el segundo aspecto no cabe impugnación casacional, a menos que en las actuaciones figuren "esas graves circunstancias que aconsejen otra cosa"

En definitiva, no cabe apreciar aquí arbitrariedad, pese a la manifestada voluntad del hijo. Pues la decisión se fundamenta en que lo acordado resulta beneficioso para el menor, tratándose con ello de evitar la absoluta pérdida de relación con la madre.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 19 de enero de 2016. Nulidad de actuaciones por indefensión. Exploración de los menores. Informe psicosocial**

"PRIMERO.- Recurre la demandada la Sentencia de instancia y suplica se decrete su nulidad por indefensión, por infracción de los Arts. 753, 770 y 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los 496 y ss. y 225-3 de dicha Ley, retrotrayéndose las actuaciones al momento anterior al de celebración de la vista para que pueda comparecer con Abogado y Procurador, y/o, subsidiariamente (sic), se decrete la nulidad de la exploración realizada a los menores, y se acuerde la práctica de informe psico-social sobre el régimen más idóneo de custodia de los hijos.

SEGUNDO.- El recurso no puede prosperar.

La recurrente alega, sustancialmente, indefensión porque fue declarada en rebeldía y no pudo acudir al Juicio asistida de Letrado ni representada por Procurador, y proponer en dicho acto sus pretensiones ni la prueba de que pudo valerse, no habiéndose respetado las garantías precisas en la exploración practicada, por lo que debe practicarse la pericial interesada.

Tales alegatos carecen del más mínimo sustento, por cuanto, no especifican los actos procesales llevados a cabo en el presente proceso que se entienda hayan infringido las normas que se citan en el recurso, normas por lo demás genéricas sobre la clase de juicio a seguir en los casos de demandas de separación o divorcio, y sobre los requisitos que debe cumplir la contestación a la demanda.

Ninguna de las resoluciones dictadas en este proceso ha sido impugnada por la recurrente.

La demandada fue emplazada en forma (folio 87), formuló solicitud de justicia gratuita fuera del plazo que le fue conferido (folio 90), pese a lo que se suspendió el procedimiento y se requirió la designación de profesionales (Auto de 10-09-14), los que fueron nombrados, requiriéndola, (providencia de 19-09-14), para que contestase a la demanda en los trece días que le restaban (folios 100 y 102) y por comparecencia en el Juzgado de 1 de octubre designó Procurador de libre elección, el que, en unión del Letrado libremente designando, renunció a representar y defender a la demandada el 3 de octubre (folio 105). El Juzgado suspendió el plazo para contestar a la demanda por diligencia de 9 de octubre.

Por resolución de 27 de noviembre de 2014 le fue denegado a la demandada el beneficio de Justicia Gratuita (folio 122).

Por Decreto de 20 de enero de 2015 se alzó la suspensión del proceso, comunicándose a la demandada que le restaban dos días para contestar, compareciendo con Abogado y Procurador, lo que se notificó por correo certificado con acuse de recibo (folio 127), dejando la misma transcurrir el plazo sin comparecer ni contestar en forma.

La diligencia en la actuación procesal del Juzgado no sólo ha sido plenamente correcta, sino incluso excesiva en torno a la facilitación de la comparecencia de la demandada, observando en ello todas las prescripciones legales. No cabe hablar de indefensión de ningún tipo, máxime cuando ha sido la propia recurrente la que ha desoído y hecho caso omiso de las llamadas al proceso que se le han efectuado.

Finalmente, señalar que la exploración no es un medio de prueba sujeto a las normas previstas en la Ley Procesal, huelga, por tanto, toda consideración sobre infracción de garantías que no se precisan en el recurso."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 19 de enero de 2016. Modificación de medidas. Pensión alimenticia. Cuantía. Disminución de ingresos del alimentante. Pago de pensión a otra hija**

"PRIMERO.- Contra la Sentencia de instancia se alza Dª Mª suplicando su revocación y se mantenga la pensión alimenticia estipulada en la Sentencia firme de divorcio para la hija del matrimonio, revocándose el pronunciamiento que contiene sobre gastos extraordinarios por no haber sido objeto del pleito.

SEGUNDO.- Alega en cuanto a los gastos extraordinarios que nada se solicitó sobre ellos por el actor en su demanda, por lo que el pronunciamiento que incluye el FALLO sobre dicha cuestión no debió introducirse, al ser la misma ajena al proceso y dado el contenido del convenio de divorcio aprobado judicialmente, que restringe la Sentencia.

Es cierto que el actor no solicitó en su demanda la modificación de tal medida, consensuada en el divorcio, como así reconoce el mismo, incluso en su escrito de oposición al recurso.

Los litigantes pactaron, libre y voluntariamente, en la cláusula segunda del convenio de 26 de septiembre de 2007 el pago por mitad de los gastos que en ella se reseñaban. Tal pacto no ha sido objeto de controversia en el litigio que nos ocupa, huelga, por tanto, cualquier precisión o consideración del mismo, debiendo excluirse el pronunciamiento que sobre el particular efectúa la Sentencia.

TERCERO.- El actor alegó varias circunstancias modificativas de su situación económica para interesar la rebaja de la pensión alimenticia de la hija, de las que deben excluirse el nacimiento de su segunda hija, y el reconocimiento de una discapacidad, por cuanto, se ha probado concurrían al tiempo del divorcio, centrándose el debate en su desempleo y reconocimiento de su incapacidad permanente total para su profesión habitual en mayo de 2013, con la percepción en 2015 de una pensión de 626,92€ por catorce pagas anuales.

No existe prueba de que realice trabajo en la actualidad, por más, que efectivamente, pudiera desempeñar algún trabajo ajeno al habitual (transportista).

Vive en un piso propiedad de sus padre sin pagar renta ninguna, y consta abona voluntariamente 201,50€ al mes a su segunda mujer, alega, en concepto de alimentos para su segunda hija (folios 125 y 126).

Este hecho concreto, no probada la capacidad económica de su segunda mujer, no habiendo disminuido las necesidades de la hija, M, nacida el 1997, impide establecer una reducción inferior a la suma voluntariamente reconocida por el actor para su otra hija, no habiendo aportado éste con la copia de la demanda de divorcio de su segundo matrimonio el convenio que dice suscrito.

Consecuentemente la pensión alimenticia debe quedar fijada, a partir de la presente resolución en 200€ mensuales, admitiendo que 1,50€ se adeuden en la cuenta del actor en concepto de comisiones."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 19 de enero de 2016. Régimen de custodia individual. Cierre de fronteras. Derecho a libre elección de residencia y circulación**

"PRIMERO.- Sólo recurre Dª Mª F un pronunciamiento de la Sentencia de instancia, el referente al cierre de fronteras de la hija menor, suplicando su revocación, pudiendo ambos progenitores viajar con la menor sin impedimento judicial, debiendo sólo informase, con un mes de antelación y de forma fehaciente, del lugar y fechas, así como de un teléfono de contacto con la menor.

SEGUNDO.- Alega la recurrente que tal medida es desproporcionada ya que goza de trabajo en España, ha matriculado a la menor en el Colegio "H", y tiene en Ecuador a la mayor parte de su familia, estando su madre delicada de salud, prohibiéndosele con ello realizar incluso cualquier viaje escolar o de vacaciones.

Ambos padres son de nacionalidad ecuatoriana y han mostrado su conformidad con que la custodia de la hija la detente individualmente la madre, a favor de la que se dictó una orden de protección frente al demandante.

El padre alega carecer de trabajo e ingresos y mantiene a otros dos hijos de otras relaciones anteriores.

En nuestra Constitución se reconoce el derecho a elección libre de residencia y circulación, y a entrar y salir libremente del territorio nacional (artículo 19), contemplándose el principio rector de protección a la familia y a la infancia (artículo 39).

Sentado lo anterior, debe señalarse que es frecuente la venida a España de nacionales de otros países latinoamericanos en busca de trabajo, y mejores condiciones de vida, que, a su vez, mantienen económicamente a la familia de su país de origen, al que viajan cuando se lo permiten sus recursos, o al que regresan cuando sus perspectivas de futuro se frustran, lo que no puede considerarse más que razonable y lógico ante la situación de crisis generalizada que afecta a nuestro país.

Con ello no se pretende más que poner de manifiesto una realidad que afecta a multitud de personas respecto de las que no cabe imponer limitaciones afectantes a su libre residencia y libertad de movimientos, más allá de las que procedan en los términos que la ley establezca.

Es claro que en este caso, mediando orden de protección para la recurrente, no va a resultar fácil llegar a acuerdos de traslados de la menor con el padre, y que aquella, lo mismo que éste, tienen derecho a viajar con la hija, en especial a su país de origen, a ver a sus familias respectivas, sin que pese sobre ellos la sospecha permanente de sustracción de menores, gozando la madre de su custodia, y resultando especialmente gravoso el trámite de autorización judicial, resolución que incluso es apelable, suponiendo ello una considerable dilación en el tiempo que impediría la efectividad de un supuesto traslado o viaje proyectado.

Es desde esta perspectiva desde la que la medida instaurada, cierre de fronteras para la menor, se estima excesiva, al gozar los padres de capacidad para solventar particularmente todos los asuntos concernientes a la hija menor y de nacionalidad ecuatoriana.

Por ello, procede acoger la petición de la recurrente, dejando sin efecto el cierre de fronteras establecido para la hija menor, pudiendo ambos progenitores viajar con ella cuando la tengan en su compañía, informando el uno al otro del traslado con un mes de antelación, de forma fehaciente, indicando el lugar, fechas de ida y de vuelta del viaje así como de un teléfono de contacto con la hija."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 19 de enero de 2016. Pensión de alimentos. Situación económica del alimentante**

"PRIMERO.- Recurre el demandado la Sentencia de instancia suplicando su revocación y se acuerde no imponerle la obligación de pago de alimentos para los dos hijos, o, subsidiariamente, se fije una cantidad proporcional a su capacidad económica y suspender la obligación de pago de la misma con efectos desde el 1 de Junio de 2015, con fundamento en errónea valoración de la prueba practicada, e infracción de los Arts. 82 y 69 del Código de Derecho Foral de Aragón.

SEGUNDO.- Alega, sustancialmente, el recurrente que carece de trabajo e ingresos y que no puede asumir el abono de la pensión alimenticia.

El demandado tuvo, según informe de vida laboral obrante al folio 86 de las actuaciones, el último empleo desde mayo de 2009 a diciembre de 2010, no consta ningún otro periodo posterior de alta en la Seguridad Social. Regentó con su familia un negocio de restauración del que derivaron deudas que se le están reclamando judicialmente, y también anteriormente otro de maquinaria de construcción.

Se encuentra en plena edad laboral, 53 años, y no resulta admisible, dada la precaria situación de la actora, trabajando de limpiadora y soportando gastos de alquiler, no asuma, siquiera una mínima cantidad para el sostenimiento de dos hijos, que cursan estudios universitarios, de 24 y 20 años de edad, y que carecen de independencia económica.

La cantidad estipulada en concepto de alimentos, 125 € mensuales, por hijo resulta plenamente proporcionada a los medios de vida que se suponen en el recurrente, cuyos gastos son mínimos al residir en vivienda de su familia.

El recurso, en suma, debe ser desestimado y confirmada la Sentencia en su integridad por sus acertados razonamientos."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 20 de enero de 2016. Atribución temporal del uso de la vivienda familiar. Facultad discrecional del juzgador. Valoración de las concretas circunstancias familiares. Motivación**

"PRIMERO.- Antecedentes relevantes.

1. Los cónyuges contrajeron matrimonio en fecha 25 de abril de 1998, del que nacieron dos hijos, C el 2001 y R el 2003.

2. Por sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Zaragoza, de fecha 10 de mayo de 2005, se acordó la separación de mutuo acuerdo del matrimonio.

3. Presentada demanda de divorcio contencioso por Dª María del Mar V. P. contra D. Juan Manuel G. M., recayó sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Zaragoza, de fecha 2 de marzo de 2015, en la que se declaró disuelto el matrimonio por causa de divorcio.

Se acordaron como efectos del divorcio, en lo que a este recurso interesa, que los hijos comunes continuarán bajo la custodia de la madre, con un régimen de visitas a favor del padre; que éste abonará la cantidad de 150 euros mensuales en concepto de alimentos para cada uno de los dos hijos comunes (300 euros en total), siendo la contribución a los gastos extraordinarios necesarios por mitad; y que la madre continuará en el uso de la que fuera vivienda familiar, sita en la C... de Zaragoza, cesando dicho uso el último día de diciembre de 2017, lo que conllevará el desalojo de la misma.

4. La sentencia de apelación, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 30 de junio de 2015, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Dª María del Mar V. P., revocando la sentencia de instancia, únicamente en lo que se refiere al período de uso de la vivienda que fuera domicilio familiar, cuyo plazo temporal se amplía en dos años, de manera que dicho uso cesará el último día de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Recurso de casación.

5. Frente a la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, el recurrente interpone recurso de casación al amparo de los arts. 2.1 y 2, y 3.1 y 3 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre casación foral aragonesa, y art. 477. 1 y 3 LEC, tanto por razón de la cuantía como por presentar la resolución del recurso interés casacional.

TERCERO.- Atribución temporal del uso de la vivienda familiar.

6. En el recurso se alega la infracción del art. 81.3 CDFA, que dispone:

"La atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia".

7. Constituye doctrina reiterada de esta Sala, puesta de manifiesto, entre otras, en las sentencias de 2 de octubre de 2015 (r.c. 29/15); 4 de febrero de 2015 (r.c. 50/14); 18 de julio de 2014 (r.c. 1/14) y 11 de julio de 2013 (r.c. 8/13), que la fijación del período de atribución temporal del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores, a falta de acuerdo, constituye una decisión discrecional del Juez, que debe valorar las circunstancias concurrentes, a salvo siempre de la arbitrariedad, o el razonamiento irracional o ilógico. Salvo supuestos de decisión arbitraria o ilógica, no corresponderá el Tribunal de Casación pronunciarse sobre tal cuestión, que queda reservada al juzgador de instancia, esto es, al Juzgado de Primera Instancia y a la Audiencia Provincial que conoce del recurso ordinario de apelación contra la sentencia dictada por el órgano unipersonal.

8. En el presente caso, la sentencia de apelación valora las circunstancias concretas que concurren en la familia para decidir sobre el período en que la madre, junto con los hijos comunes, debe continuar con el uso de la vivienda familiar, que le fue atribuido por acuerdo de las partes en el convenio de separación de 1 de marzo de 2005. Así, por una parte tiene en cuenta que la vivienda es privativa del esposo, que éste dispone de vivienda junto con su actual pareja, y que debe hacer frente al préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar. Por otra, que la recurrente no trabaja desde 2009, que la pensión de los hijos comunes -de 11 y 14 años de edad- se ha reducido a 300 euros mensuales (frente a los 1.091 euros que se fijaron en el convenio regulador en 2005, tal como recoge la sentencia de primera instancia). Ponderando todas estas circunstancias y, muy particularmente, la situación de falta de ocupación laboral de la madre y reducción de la pensión de alimentos de los hijos menores, concluye que debe ampliarse el período de atribución del uso de la vivienda familiar a favor de éstos en dos años más respecto del fijado en la sentencia de primera instancia.

La decisión de la Audiencia Provincial está motivada y es razonable, atendiendo a las circunstancias concretas que concurren en la familia afectada por la medida, valorando especialmente el interés de los hijos menores.

CUARTO.- Alegaciones del recurrente.

9. El recurrente fundamenta la infracción del precepto legal con diversos argumentos.

En primer lugar, realiza una valoración de las que considera son las circunstancias concretas de la familia que deben ser tenidas en consideración.

Algunas de estas circunstancias ya son valoradas por el juzgador, como el carácter privativo de la vivienda, que el recurrente tiene que abonar el importe de la hipoteca, o que vive en la actualidad de alquiler con su nueva pareja. La mención de otras, como que el uso de la vivienda por la esposa se ha prolongado más de diez años, parece olvidar que, por disposición legal (art. 81.2 CDFA) dicho uso se atribuye al progenitor al que le corresponde la custodia individual de los hijos y, aunque tiene un carácter temporal a fijar por el Juez, no está sujeto en el art. 81.3 CDFA a un plazo concreto de duración. Por último, las referencias a una supuesta simulación de falta de ingresos por la esposa no resultan admisibles en el ámbito casacional, puesto que, como es doctrina reiterada de esta Sala,

entre otras en sentencia de 30 de septiembre de 2013 (r.c. 26/2013) *"no habiendo articulado la parte recurrente motivos de infracción procesal, el tribunal debe partir de los hechos probados en las instancias, sin realizar modificación alguna, ya que el recurso de casación no constituye una tercera instancia"*.

Por lo expuesto, la valoración de las circunstancias concretas de la familia realizada en la sentencia recurrida, motivada y razonadamente, no puede ser sustituida por la que realiza el recurrente.

10. En segundo lugar, se alega en el recurso que la atribución del uso del domicilio no puede tener un contenido expropiatorio respecto del propietario, en beneficio del cónyuge que no lo es.

Al respecto cabe reiterar que el art. 81.3 CDFA se limita a disponer que la atribución del uso de la vivienda familiar es limitada en el tiempo, pero no fija ni un período máximo, ni tampoco mínimo, por lo que el uso de al vivienda por la madre y los hijos menores hasta finales de 2019 –dos años más de los establecidos en la sentencia de primera instancia, cuya confirmación solicita el recurrente- en modo alguno contraviene el precepto legal, ni tiene un contenido expropiatorio del derecho de propiedad del titular de la vivienda, sino que se adecua a las concretas circunstancias de la familia.

11. También debe rechazarse la interpretación que realiza el recurrente del precepto legal que, en modo alguno establece que la atribución del uso de la vivienda familiar solo puede tener lugar para satisfacer necesidades perentorias de alojamiento de los menores. Como ya se ha indicado, el art. 81.2 CDFA dispone que el uso de la vivienda familiar se otorgará al progenitor al que corresponda la custodia individual de los hijos, exceptuándose tan solo los supuestos en los que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor, circunstancia esta última que no aprecian ninguna de las sentencias dictadas y que ni siquiera se alega en el recurso.

12. Como último argumento, el recurrente rechaza la atribución del uso de la vivienda familiar a la madre por entender que no se respeta el principio de proporcionalidad en la asistencia de los hijos que, según manifiesta, se hace recaer exclusivamente a su cargo.

Si bien es cierto que la contribución de los progenitores a los gastos de asistencia a los hijos a cargo comprende los de crianza y educación, dentro de los que se incluye la obligación de proveer a su habitación (art. 65.1.b) CDFA), la atribución del uso de la vivienda familiar -prevista en el art. 81 CDFA- se sujeta a unos requisitos propios y diferentes de los que contempla el art. 82 CDFA para los gastos de asistencia a los hijos.

Así, en la atribución de la vivienda familiar el CDFA distingue entre los supuestos de custodia compartida o individual, disponiendo en estos últimos que la vivienda se atribuya al progenitor que la ostente, salvo que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje atribuirla al otro progenitor. Por tanto, no tiene en cuenta criterios de proporcionalidad, como sucede en la contribución a los gastos de asistencia de los hijos, sino que atiende al interés prevalente de los menores (art. 76.2 CDFA) para proveerles de

habitación, en función del concreto régimen de guardia y custodia establecido. Y así, cuando se trata de custodia individual, la atribución del uso de la vivienda familiar al progenitor que la ostenta favorece que los hijos menores sigan ocupando la que venía siendo residencia habitual de la familia.

La sentencia de la Audiencia Provincial atribuye el uso de la vivienda familiar con arreglo a lo dispuesto en el art. 81.2 CDFA, fijando su duración temporal en función de las circunstancias concretas de la familia, como exige el art. 81.3 CDFA, mediante una ponderación lógica y razonable.

13. Por todo lo expuesto, procede la desestimación del motivo y con él del recurso en el que se hace valer."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 3 de febrero de 2016. Custodia compartida. Interés del menor. Criterio preferente. Motivación. Cambio relevante de circunstancias. Edad y opinión del hijo**

"PRIMERO.- En la demanda origen del presente recurso se instó la modificación de medidas establecidas en sentencia de 1 de abril de 2009. Concretamente y, en lo que ahora interesa, se pidió la custodia compartida de la hija común, nacida el 2004.

La sentencia de primera instancia, después de referirse a la doctrina de esta Sala -de aplicación al supuesto enjuiciado- y valorar minuciosamente la prueba, desestima la demanda. No aprecia la concurrencia de una modificación relevante de las circunstancias que se tomaron en cuenta en su día, pues considera que el mero transcurso del tiempo no es suficiente para entender producida tal modificación. Expresa además que, "dada la estabilidad de la situación actual de la menor (detallada en la prueba que se ha expuesto) no se ha acreditado tampoco que el cambio del régimen de guarda y custodia sea el que responda de forma más idónea al superior interés de la menor". Ello, pese a que, a propósito de la prueba pericial practicada refiere que, según la psicóloga autora del informe, lo ideal sería un régimen de permanencia de la menor con sus progenitores en períodos equitativos.

La sentencia de apelación revoca la anterior y acuerda la custodia compartida. En su fundamentación, con cita de la sentencia de esta Sala de 26 de mayo de 2014, razona así: *Y sucede en el (*caso*) de autos, en el que la menor no tenía aún 5 años en abril de 2009 y tiene 11 en la actualidad, la pericial psicológica ha dejado acreditado que el régimen de custodia compartida es en este momento el más adecuado al interés del menor en este momento (*sic*) situación muy diferente a la que la sentencia de 1-4-09 refleja por referencia a los informes social y psicológico de 9 y 18 de marzo 2009 que aconsejaban mantener la custodia para la madre, no habiendo –se decía- prueba alguna indicativa de la necesidad de un cambio de visita ni informe a favor de la custodia compartida.*

Por lo que no cabe entender que no haya mediado la alteración en las circunstancias a que la modificación solicitada se condiciona. Expone a continuación los criterios establecidos por esta Sala en orden a la aplicación del artículo 80.2 y alude a los hechos acreditados por la prueba practicada, con referencia especial a la pericial psicológica, para concluir que no concurren razones para excluir la custodia compartida, pese a la opinión de la menor que manifestó no desear modificaciones en sus condiciones actuales.

SEGUNDO.- En el único motivo del recurso de casación planteado se denuncia infracción por aplicación indebida de los artículos 76.2 y 80.2 del CDFA. En síntesis, la parte apoya su pretensión impugnatoria en las consideraciones siguientes: la sentencia recurrida ha conculcado el principio del *favor filii*; no se hace referencia expresa a los factores indicados como de necesaria valoración en el artículo 80; no se ha acreditado un cambio relevante en las circunstancias concurrentes, necesario para modificar el régimen de guarda, ni se concreta en la sentencia cual es el cambio que permite la modificación de

aquél, y frente a ello no puede prevalecer la recomendación del informe psicológico; no se ha tenido en cuenta la opinión de la menor, que desea seguir viviendo con su madre.

TERCERO.- Tal como pone de relieve el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición al recurso, no se trata aquí de examinar la cuestión como si de una tercera instancia se tratara, sino de determinar si la sentencia recurrida infringe los preceptos cuya vulneración se alega.

El artículo 76.2 del CDFA establece que toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos menores de edad se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos.

En relación con esta cuestión, debemos recordar lo expuesto en nuestra reciente sentencia de 13 de enero de 2016:

El interés del menor (como el propio recurrente recoge en su escrito) es un concepto jurídico indeterminado que precisamente ha de ser determinado en cada caso. La noción de "interés del menor" no es ni un dogma, ni un estándar de contenido universal. Debe ser interpretada y aplicada caso por caso (de ahí que aporte poco la cita de sentencias anteriores en las que se optó por soluciones distintas) evitando siempre eventuales arbitrariedades.

El Preámbulo de la reciente Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia lo expresa así:

Este concepto se define desde un contenido triple. Por una parte, es un derecho sustantivo en el sentido de que el menor tiene derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una solución. Por otra, es un principio general de carácter interpretativo, de manera que si una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma se debe optar por la interpretación que mejor responda a los intereses del menor. Pero además, en último lugar, este principio es una norma de procedimiento. En estas tres dimensiones, el interés superior del menor tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del menor, así como su desarrollo integral.

A la luz de estas consideraciones, es claro que la determinación del interés superior del menor en cada caso debe basarse en una serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el legislador que deben ser tenidos en cuenta y ponderados en función de diversos elementos y de las circunstancias del caso, y que deben explicitarse en la motivación de la decisión adoptada, a fin de conocer si ha sido correcta o no la aplicación del principio.

(…).

Pues bien, nos encontramos, una vez más, y como ya ha quedado expuesto, ante una facultad discrecional del Juez que, por eso mismo, no controlable en casación salvo que se patentice que no se ha utilizado de modo lógico. Es constante la doctrina jurisprudencial

que limita el ámbito del recurso de casación a su función nomofiláctica, de tal forma que considera ajeno al mismo el control de las decisiones adoptadas dentro de los márgenes de discrecionalidad que el legislador confiere a los tribunales para llevar a cabo el juicio de valor del que depende la decisión del caso concreto. El Tribunal Supremo ha dicho (STS 614/2009 de 28 septiembre) que, establecido que el interés del menor el criterio legal de decisión:

"el problema procesal se plantea en torno al órgano que debe apreciar dicho interés, porque como señala la doctrina más autorizada, en esta cuestión, la discusión sobre si se ha aplicado o no la norma fundando la decisión en el interés del menor tiene aspectos casacionales, mientras que la delimitación de la realidad que determina en cada caso concreto cuál es el interés del menor, no los tendrá. Este Tribunal ha considerado que por tratarse de una facultad discrecional del juzgador, en el segundo aspecto no cabe impugnación casacional, a menos que en las actuaciones figuren "esas graves circunstancias que aconsejen otra cosa"

CUARTO.- Ha señalado esta Sala en reiteradas ocasiones que el artículo 80.2 del CDFA considera que, con carácter general, la custodia compartida es el sistema idóneo con el que satisfacer el interés del menor. Así, se recoge en la STSJA nº 36/2013, de 18 de julio:

"decíamos en la sentencia de 8 de febrero de 2012 (recurso 27/2011), destacando en las sentencias sobre esta materia que el criterio preferente establecido por el legislador aragonés es el de la custodia compartida, tal como dispone el artículo 80.2 CDFA, como expresión del sistema que mejor recoge el interés de los menores salvo, como también expresa con claridad el referido precepto, que la custodia individual sea más conveniente.

La sentencia de la Sala de 1 de febrero de 2012 (recurso 24/2011), resume los criterios que deben seguirse en la exégesis del artículo 80 CDFA:

'En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas: a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite -la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011).

Para adoptar la decisión, en cada caso, será relevante la prueba practicada, especialmente los informes psicosociales - art. 80.3 CDFA- obrantes en autos, y la opinión de los hijos menores, cuando tengan suficiente juicio -art. 80.2 c) CDFA-. Por último, el Tribunal que acuerde apartarse del sistema preferentemente establecido por el legislador debe razonar suficientemente la decisión adoptada' (...).

Desde esta perspectiva, la sentencia impugnada, que respeta el criterio preferente y justifica su opción por considerarla -atendidas las circunstancias concurrentes- más adecuada al interés de la menor, en modo alguno vulnera el artículo 80.2, pues no hay atisbo de irracionalidad o arbitrariedad en tal decisión.

SEXTO.- En relación con la alegación de que no se ha acreditado un cambio relevante en las circunstancias concurrentes, ni se concreta en la sentencia cuál es el cambio que permite la modificación del régimen de custodia hemos de destacar, ante todo, que la parte no ha invocado como infringido el artículo 79.5. En cualquier caso, no tiene razón. La menor tenía 5 años cuando se dictó la sentencia a modificar, y cuenta en la actualidad con once, y así se recoge en la sentencia impugnada. Pues bien, ello constituye en sí un cambio de relevancia para alterar el régimen, como el propio legislador viene a señalar. Así lo expresamos en nuestras sentencias de 23 de mayo de 2014, 26 de mayo de 2014 y en la de 13 de marzo de 2013.

SÉPTIMO.- Poco aporta, en fin, en orden a la prosperabilidad del recurso, la alegación de que no se ha tenido en cuenta la opinión de la menor, que desea seguir viviendo con su madre. El artículo 80.2 menciona la opinión de los hijos como uno de los factores que hay que atender a la hora de establecer el régimen de custodia, pero no es vinculante; no se exige la opinión favorable de los hijos para optar por uno u otro régimen. Como también dijimos en nuestra sentencia del pasado 13 de enero ya citada, dado que la menor no ha alcanzado aún la madurez suficiente como para decidir por sí mismo, sobre su voluntad se impone la decisión del Juez, que es a quien corresponde determinar qué es lo que, en el caso, conviene a su interés, principio superior de orden público que es lo que ha de guiar dicha decisión. Y hemos de recordar que como hemos puesto de manifiesto en ocasiones anteriores (así, sentencia de 7 de febrero de 2014) estas opiniones deben ser tomadas con prudencia, pues es lógico que quien se encuentra bien con su madre y con su padre prefiera evitar todo cambio en su régimen vital, pero la misma manifestada en esos términos en un entorno de crisis convivencial, sin que haya más factores para su emisión que la mera comodidad a corto plazo de la niña –o el temor indefinido a los cambios- dista mucho de ser una de las razones legalmente previstas para excluir la orden del legislador de ser preferente la custodia compartida."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 11 de febrero de 2016. Régimen de visitas en custodia compartida. Necesidades de los menores. Aumento proporcional de contribución a los gastos**

"PRIMERO.- El día 10 de noviembre de 2014 el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Zaragoza dictó sentencia por la que acordaba la disolución por divorcio del matrimonio celebrado por los litigantes el día 3 de junio de 2000 y en el que habían tenido dos hijos, 2003, y 2010.

La sentencia estableció las medidas reguladoras de los efectos de divorcio, entre las cuales, a los efectos de este recurso de casación, deben destacarse dos: 1.- acordó la custodia compartida por periodos semanales respecto de los hijos, con dos visitas entre semana a favor del progenitor no custodio; y 2.- fijó que el padre debería abonar en concepto de gastos por sostenimiento de los menores la suma de 400 € mensuales, y la madre la de 100 €.

La madre, ahora parte recurrida, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que fue resuelto por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza por la sentencia objeto del presente recurso de casación, dictada el día 28 de julio de 2015. En ella, en lo que ahora interesa, revocó en parte la sentencia recurrida, modificando lo acordado respecto del modo desarrollarse la custodia compartida y de la cuantía con la que el padre contribuiría al sostenimiento de los hijos. En concreto, por lo que hace a como definirse la custodia compartida, dispuso que en periodo lectivo, entre semana, de lunes a viernes, los menores comerían siempre en casa de la madre, siendo ésta quien les acompañaría a las actividades extraescolares que pudieran efectuarse a mediodía. En lo relativo a la cantidad a abonar por el padre, la aumentó en 80 € por cada uno de los periodos de alternancia semanal a él correspondiente, en los que tuvieran lugar las comidas en casa de la madre.

Frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial se interpone por el padre el presente recurso de casación, en el que interesa que se mantengan en su integridad las medidas adoptadas por el Juzgado de Primera Instancia.

SEGUNDO.- El motivo primero del recurso de casación considera infringido por la sentencia recurrida el artículo 80.1 y 2 en relación al artículo 76.3 b), ambos del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA), ya que, en resumen de las consideraciones del recurrente, el acuerdo tomado en la sentencia de la Audiencia Provincial respecto de que los menores coman en casa de la madre en el periodo en que la custodia corresponde al padre no garantiza a tal progenitor el ejercicio de sus derechos y obligaciones en situación de igualdad.

Aunque la solicitud contenida en el recurso pretende que se mantenga en su totalidad el fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, lo único recogido en el fundamento de la impugnación se refiere a la comida del viernes. Así, la razón que se expone de la infracción que se entiende cometida por la sentencia recurrida

deriva, según el recurrente, de que “como consecuencia de tal modificación, el padre desde el viernes por la mañana que deja los hijos en el colegio hasta el martes por la tarde de la semana siguiente, en la que tiene la custodia la madre, no tiene ningún contacto directo y personal con los hijos, es decir, cada dos semanas durante casi cinco días (es decir diez días al mes en total) no hay contacto personal entre el padre y los hijos.”

Al respecto cabe aclarar, en primer lugar, que el sistema establecido en la sentencia recurrida supone que el padre no tenga contacto directo con los hijos desde la mañana del viernes hasta la tarde del martes, lo que no alcanza los casi cinco días a que se refiere. Y asimismo cabe también señalar que con el sistema establecido en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que el recurrente pretende sea repuesta, y en lo que al viernes se refiere, el padre dejaba de ver a los hijos desde el propio viernes después de comer hasta el martes siguiente por la tarde.

Dado que no se contiene argumento alguno base del recurso sobre el resto de los días de la semana, debe así concluirse que lo planteado en este recurso es realmente si es conforme a derecho que la comida del viernes la hagan con su padre o con la madre.

TERCERO.- La sentencia recurrida razonó con claridad que el motivo del cambio que introdujo viene determinado por razones de mejor conciliación de las obligaciones del padre con la atención de los hijos a la hora de comer, y por dar el informe psicológico especial importancia a la mejor alimentación de los hijos. Y asimismo consideró que desde que se estableció en sistema de custodia compartida, desde mayo de 2014, los menores no han comido en casa del padre cuando le correspondía la custodia, sino que lo ha hecho en casa de los abuelos paternos.

Partiendo de tales consideraciones basadas en los hechos acreditados que no hay razón para modificar, no existe motivo alguno para considerar, como sostiene el recurrente, que el acuerdo tomado trate de modo desigual a uno y otro progenitor, porque lo que hace es distribuir las concretas responsabilidades del padre y madre conforme a un criterio perfectamente lógico y ajustado a las necesidades de los hijos. Si esta atención al interés de los menores comporta un trato no uniforme de los momentos en que cada progenitor pueda tener la compañía directa de los hijos, ello no significa desigualdad de trato, pues la asimetría en la relación deriva de las necesidades de los hijos, no de que se haya estudiado y resuelto una situación de cada progenitor de modo discriminatorio respecto del otro.

Además, no cabe sino considerar que, en todo caso y como ya se ha expuesto, la diferencia de medidas que sostiene el recurrente se concreta realmente en una sola comida, lo cual supone una variación tan escasa respecto de lo que acordó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia que en modo alguno permite considerar que haya derivado de un trato desigual de uno u otro progenitor.

En consecuencia con lo expuesto, procede la desestimación del primer motivo de recurso.

CUARTO.- El segundo motivo de recurso tiene por objeto la supresión del aumento periódico en 80 € de la contribución del padre a los gastos de los menores. Esta elevación, como se deduce de la sentencia recurrida, entronca con el aumento del número de comidas que los menores hacen con la madre, lo cual es plenamente ajustado a derecho como medio para equilibrar el costo económico que a cada progenitor supone atender la custodia de los menores, ya que entra dentro de la previsión del artículo 82.1 del CDFA. Por ello, mantenido ahora, en esta resolución, el nuevo régimen de comidas que supone mayor desembolso para la madre, debe igualmente mantenerse la medida económica compensatoria impugnada."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 17 de febrero de 2016. Modificación de medidas. Custodia compartida. Necesidad de relevante alteración de circunstancias. Nacimiento de nuevo hijo. Flexibilización de horario laboral**

"PRIMERO.- Hechos relevantes acreditados en el proceso.

En las instancias han resultado acreditados los siguientes hechos, que resultan relevantes para la decisión del recurso de casación interpuesto:

1.- D. Diego M. P. y Dª Beatriz G. E. contrajeron matrimonio en Zaragoza el día 27 de mayo de 2006.

2.- Dichos cónyuges tuvieron dos hijos, , nacidos el 2008 y el 2011, respectivamente.

3.- En autos de divorcio de común acuerdo nº 299/2012 recayó sentencia de 3 de mayo de 2012 por la que se declaró disuelto por divorcio el citado matrimonio y se aprobó el pacto de relaciones familiares de fecha 1 de abril de 2012, suscrito por ambos consortes.

4.- Conforme a dicho pacto, los dos menores hijos del matrimonio quedaban bajo la custodia de la madre, con un régimen de visitas a favor del padre, siendo compartida la autoridad familiar.

5.- D. Diego M. P. ha instado la modificación de las medidas de divorcio en la demanda que ha dado lugar a la apertura del presente proceso, modificación que sustenta en un cambio sustancial de las circunstancias que sirvieron de base para establecer la guarda y custodia de los menores a favor de la madre, solicitando que la guarda y custodia de los hijos habidos en el matrimonio sea compartida por ambos progenitores por meses alternos, además de modificación del uso del domicilio que fue familiar y que se fije un nuevo régimen de visitas.

6.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de esta ciudad desestima en lo sustancial la demanda deducida, al considerar que no concurren circunstancias para modificar el régimen de custodia establecido en la sentencia de divorcio, aunque realiza una modificación en el régimen de visitas y vacaciones.

7.- Interpuesto recurso de apelación por la representación del demandante, la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 29 de septiembre de 2015 lo desestima, confirmando la recurrida, al apreciar que no se ha producido un cambio de circunstancias respecto del momento en que recayó la sentencia de divorcio, y que de la prueba practicada resulta que se ha aplicado correctamente el artículo 80 del Código de Derecho Foral Aragonés (CDFA), al señalar que en este caso la custodia individual resulta más beneficiosa para los hijos menores que la compartida, solución que la Audiencia considera procedente ratificar.

SEGUNDO.- Los motivos del recurso de casación.

Frente a la citada sentencia D. Diego interpone recurso de casación, que funda en dos motivos: 1.- Infracción de lo dispuesto en los artículos 79.5 y 80.2 del CDFA, en relación con el artículo 91 del Código civil; 2.- Infracción de la doctrina sentada en sentencias dictadas por este Tribunal, de las que cita la sentencia nº 11/2015, de 6 de abril, entendiendo que el caso que nos ocupa es muy similar al allí resuelto, basándose en ello para fundar el interés casacional.

Ambos motivos han sido admitidos por Auto de 2 de diciembre de 2015, y van a ser objeto de examen conjunto en cuanto a su prosperabilidad, ya que el segundo de ellos puede considerarse como ampliación de los argumentos en que se funda el primero, teniendo en cuenta que todos los motivos de recurso de casación deben fundarse en la infracción de norma sustantiva conforme a lo dispuesto en el artículo 477 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- De la naturaleza del proceso de modificación de medidas.

Para la resolución del recurso de casación es necesario considerar la naturaleza del proceso en que nos hallamos, autos de Modificación de Medidas acordadas en sentencia de divorcio, que tiene cauce procesal en lo establecido en el artículo 775 de la Ley Enjuiciamiento Civil, y fundamento sustantivo en lo dispuesto en el artículo 79.5 del CDFA, concordante con lo establecido, en su ámbito de aplicación, en el artículo 91 del Código civil.

Esta Sala en diversas sentencias, entre ellas la nº 19/2014, de 26 de mayo, recaída en recurso de casación 13/2014, ha puesto de relieve que el contenido normativo del artículo 79.5 del CDFA tiene una mayor flexibilidad que el establecido en el artículo 91 del Código civil, lo que se explica porque las medidas a que se refiere el precepto aragonés son todas ellas relativas a menores.

Conforme a los indicados preceptos las medidas acordadas en sentencias firmes de divorcio pueden ser modificadas, instándolo por medio de demanda, cuando se haya producido una modificación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. En este proceso resulta posible decidir de nuevo respecto de lo ya resuelto en sentencia firme, siempre que resulte comprobado ese cambio de circunstancias y la nueva resolución que se solicita resulte más conveniente para el interés de los menores, en casos como el presente en que la modificación se insta respecto del régimen de custodia.

Como esta Sala tiene declarado en sentencia nº 37/2014, de 19 de noviembre, en el proceso de modificación de medidas de divorcio lo relevante "*no es tanto determinar si se ha producido la infracción del ordenamiento jurídico sustantivo denunciada al tiempo de dictarse la sentencia recurrida, sino la de considerar que, a la vista del cambio de las circunstancias concurrentes, resulta necesario modificar el régimen de custodia en los*

términos interesados por el demandante. Dicho de otro modo, en el proceso de modificación de medidas hemos de partir de las fijadas en la sentencia de divorcio, que fue acatada por ambas partes, y solo procederá la revisión cuando de los nuevos hechos acreditados resulte un cambio cualitativo de las circunstancias concurrentes que determine la modificación del sistema de guarda y custodia, en interés del menor, y la sentencia de instancia no haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la norma cuya infracción se denuncie".

En el caso de autos debemos resaltar que la sentencia de divorcio recayó en un proceso de dicha clase tramitado de común acuerdo, y en ella se aprobó el pacto de relaciones familiares de fecha 1 de abril de 2012, en el cual se acordaba que la guarda y custodia de los hijos menores quedaba atribuida a la madre, pacto que se firmó cuando ya estaba vigente el artículo 80 de CDFA, cuyo contenido constaba a las partes a través de su defensa jurídica, y que se firmó al amparo de lo establecido en los artículos 3 y 77 de dicho código.

CUARTO.- Decisión sobre los motivos del recurso.

La parte recurrente expone que se ha producido una relevante modificación de las circunstancias concurrentes, que ha de dar lugar a la modificación del régimen de custodia de los menores , modificación que se concreta en el nacimiento de una nueva hija del Sr. M. P. , por tanto hermana de los menores, y la flexibilización del horario laboral del Sr. M. P. por haber sido aprobado el Plan Concilia. De la existencia acreditada de dichos cambios resulta, a criterio del recurrente, la necesidad de modificar el régimen de guarda y custodia conforme a lo prevenido en el artículo 80.2 del CDFA y acordar la custodia compartida de los menores por semanas alternas.

El hecho de que el Sr. M. P. , aquí recurrente, haya sido padre de una nueva hija no modifica sustancialmente las circunstancias concurrentes que determinaron, en su día, el establecimiento de un régimen de custodia de los menores hijos del matrimonio a favor de la madre, conforme al pacto de relaciones familiares aprobado judicialmente. El mero hecho del nacimiento de un nuevo hijo puede afectar al tiempo que el progenitor pueda dedicar al cuidado y atención de los mayores, lo que en su caso podría significar una menor disponibilidad para atender a éstos, pero no es un argumento que justifique la necesidad de modificación de las medidas precedentemente acordadas.

En cuanto a la flexibilización del horario laboral del Sr. M. P. , hemos de estar al resultado probatorio que se expresa en la sentencia recurrida. En ella se recoge, al confirmar la de primera instancia, que D. Diego es Policía Local y trabaja en horario a turnos alternos mensuales, teniendo concedido el Plan Concilia, por lo que manifiesta que podría tener la custodia en los meses de horario de mañana. Cuenta con el apoyo de sus padres, que residen en C. El posible cambio de turno con un compañero es un hecho no aceptado en la sentencia de la Audiencia, que razona que se trata de una invocación por primera vez en la alzada y no ha sido aprobado por el órgano competente.

Partiendo de los hechos comprobados la Audiencia Provincial concluye en estimar que no se ha producido una modificación de suficiente entidad como para dar lugar a la modificación de las medidas acordadas en la sentencia de divorcio, conclusión que ha de ser ratificada por esta Sala. Conforme a una consolidada doctrina jurisdiccional, recogida en la sentencia del Tribunal Supremo nº 417/2015, de 29 de junio, la función de la casación no es la de una tercera instancia, sino la de control de la aplicación del derecho a la cuestión de hecho efectuada por la Audiencia Provincial, y en este caso no ha sido infringido el artículo 79.5 del CDFA.

QUINTO.- Tampoco existe vulneración de lo dispuesto en el artículo 80.2 del Código Aragonés, en cuanto previene que *El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente.* Dicha preferencia ha de establecerse siempre en interés del menor, que constituye el criterio superior al momento de fijar su régimen de atención, guarda y custodia.

En este sentido la Sala ha recordado -sentencia 17/2015, de 28 de mayo de 2015- que dicha prioridad se desprende del art. 3.1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 44/25, de 20 noviembre 1989; del art. 24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000; y del principio nº 15 de la Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo (DOCE núm. C.241 de 21 septiembre 1992), documentos internacionales todos ellos que deben considerarse asumidos por las normas constitucionales españolas sobre protección integral de la familia y de la infancia (art. 39.4 CE). En la normativa autonómica aragonesa recogen el principio, además del artículo 76.2 del CDFA, los 3.3.a) y c), 4, 13, 21, 46.i) de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón. Ha señalado también nuestro Tribunal Constitucional que dicho principio constituye "*un estatuto jurídico indisponible de los menores de edad dentro del territorio nacional*" (STC 141/2000 de 29 de mayo) y un "criterio básico y preferente" en los procedimientos en materia de familia (ATC 127/1986 de 12 de febrero) que "debe inspirar la actuación jurisdiccional" (STC 217/2009 de 14 de diciembre) y que, en consecuencia, faculta al tribunal para resolver incluso "*ex officio*" sobre todo lo concerniente a los menores (STC 4/2001 de 15 de enero).

En el caso de autos la sentencia recurrida razona que el interés superior de los menores sustenta el establecimiento –y mantenimiento incólume- de su custodia por la madre. Al respecto afirma que "*se ha aplicado el artículo 80 del CDFA por el Juzgador de instancia, al señalar que la custodia individual resulta más beneficiosa para los hijos menores, solución que esta Sala debe ratificar".* Dicha decisión, fundada en ajustados razonamientos, acuerda la aplicación al caso de la custodia individual, porque "*el padre no podría asumir el cuidado y atención diarios de dos niños tan pequeños*" y esta resolución, fundada en la valoración conforme a la sana crítica de la prueba pericial psicológica, no infringe el ordenamiento jurídico.

Por último debemos expresar, en respuesta a las invocaciones que se formulan como segundo motivo del recurso, que la sentencia recurrida no se opone a lo resuelto por esta

Sala en la sentencia nº 11/2015, de 6 de abril, en cuanto que los hechos allí considerados no resultaban similares a los de autos."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ejea de los Caballeros de 19 de febrero de 2016. Guarda y custodia. Informes sociales. Pensión alimenticia**

"Primero.- De la documentación aportada se considera acreditado que C y Ca tuvieron, el 2008, una hija llamada N.

La primera petición que se formula es que se atribuya al demandante la custodia de la hija menor, N, de ocho años de edad.

El artículo 80 del Código de Derecho Foral establece que se adoptará, de manera preferente, la custodia compartida, salvo que la individual sea más conveniente. Para ello hay que tener en cuenta el interés de los hijos, y los factores que indica el propio precepto: la edad de los hijos, su arraigo familiar y social, su opinión, la aptitud y voluntad de los progenitores y sus posibilidades de conciliar la vida familiar y laboral, y cualquier otra circunstancia relevante.

En el caso que nos ocupa, a la vista de la prueba practicada, especialmente el informe de servicios sociales y las manifestaciones hechas en la vista por las personas que lo elaboraron, entiendo que debe accederse a lo solicitado.

De lo expuesto en la vista se desprende que hubo un seguimiento de la familia mientras los hoy litigantes estaban juntos, por problemáticas que afectaban a la menor, tales como falta de higiene o cierto absentismo.

En la actualidad, al parecer, estos problemas se han atenuado, pero ambas testigos coincidieron en que las condiciones materiales que ofrece la familia paterna son más favorables para la menor que las ofrecidas por la familia paterna. De estas manifestaciones no se observa que exista un riesgo para la menor, como tal, con la familia materna, pero sí que las condiciones materiales que se le ofrecen pueden ser algo precarias, mientras que la familia paterna ofrece un entorno normalizado y que garantiza a la menor un ambiente para su desarrollo como el de cualquier otra menor de su edad.

La abuela paterna confirmó su disponibilidad para apoyar al padre en el cuidado de la nieta, así como las adecuadas condiciones de la vivienda de la que dispone. Asimismo, manifestó sus dudas acerca de la situación en la que se encuentra su nieta, tanto en lo relativo a la alimentación como en lo relativo a la vivienda donde reside actualmente, así como a los medios económicos de los que dispone la familia materna.

Ciertamente, puede existir un riesgo de que el testimonio de esta última persona sea algo sesgado, al tratarse de la abuela paterna. Pero, aún así, dicho testimonio no ha sido contradicho por ninguna prueba, ni ha habido oposición de la madre. En parte es coherente con lo manifestado por las autoras del informe que obra en las actuaciones. Y la declaración de la testigo, pese a la crítica o dudas que suscitaba, fue comedida y no se observó un hilo argumental que pudiera hacer pensar que sus manifestaciones fueran

exageradas o tendenciosas, sin perjuicio de que en ocasiones sus manifestaciones pudieran ser simples apreciaciones subjetivas.

Segundo.- Aunque en la demanda no se indicó nada del régimen de visitas, el artículo 80.1 del Código de Derecho Foral establece que, en los casos de custodia individual, se fijará un régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro progenitor.

En el caso que nos ocupa, pese a la incomparecencia de la madre, a la vista de lo expuesto por el propio demandado, la abuela materna y las testigos, se desprende que no hay motivo alguno para privar a la madre del contacto con su hija. Al contrario, las testigos manifestaron que existe una vinculación importante con ella y con la familia materna. De hecho, hasta el momento la menor ha estado viviendo con la madre.

La propia parte actora estuvo de acuerdo en la vista en fijar un régimen de visitas a favor de la madre.

Por lo tanto se fija un régimen de visitas de fines de semana alternos y mitad de vacaciones, con una tarde entre semana, tal y como solicitó el Ministerio Fiscal.

Tercero.- Se pide también en la demanda que se fije una pensión de alimentos, a favor de la hija, y a cargo de la madre, de 200 euros mensuales.

El artículo 82 del Código de Derecho Foral establece que los progenitores contribuirán a la satisfacción de los gastos de asistencia a sus hijos proporcionalmente con sus recursos. Y que se fijará el modo en que se materialice esta asistencia atendiendo al tipo de custodia establecida.

En el caso que nos ocupa, la madre deberá abonar una pensión de alimentos a favor de su hija.

En cuanto a la cuantía, las partes no han aportado documentación alguna. De la averiguación practicada de oficio se desprende que el padre trabaja y, según su manifestación, cobra unos 1.300 euros al mes.

La madre no trabajaba, aunque las testigos manifestaron haber tenido noticia recientemente de que podría haber empezado a trabajar, aunque no tenían constancia fiable. También manifestaron que en la familia materna no trabajaba ningún miembro y que, al parecer, vivían con la única prestación del abuelo materno por desempleo.

En atención a lo expuesto, entiendo que no se puede imponer a la madre sino una pensión de mínimo vital, que se fija en este momento en 80 euros mensuales, ya que no hay datos de que la madre esté recibiendo percepción alguna, y ningún sentido tiene fijar una pensión que no va a poderse pagar.

Asimismo, los gastos extraordinarios serán abonados en proporción de 80% el padre y 20% la madre, ya que sólo constan ingresos del primero."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 1 de marzo de 2016. Modificación de medidas. Requisitos. Pensión de alimentos. Posibilidades del alimentante**

"PRIMERO.- Se recurre por la representación de la parte actora D. A, la Sentencia recaída en Primera Instancia en el presente procedimiento sobre Modificación de Medidas (art. 775 LEC.).

En su recurso, el demandante considera que procede fijar en relación a la pensión de alimentos fijada en la Sentencia de 18 de julio de 2013 a favor del hijo menor, la cantidad de 150 €/mes durante los periodos de tiempo en que el actor desempeñe una actividad laboral y 50 €/mes durante los períodos de tiempo en que no desempeñe actividad laboral alguna.

SEGUNDO.- La modificación de las medidas (Arts. 90, 91 y 100 del Código Civil) ya fijadas en anteriores procesos matrimoniales requiere de una alteración de circunstancias, que para que sean tenidas en cuenta, han de revestir de una serie de características, como que sean trascendentes y no de escasa o relativa importancia, que se trate de una modificación permanente o duradera y no aleatoria o coyuntural, que no sea imputable a la propia voluntad de quien solicita la modificación ni preconstituida y que sea anterior y no haya sido prevista por los cónyuges o el Juzgador en el momento en que las medidas fueran establecidas. Correspondiendo la carga de la prueba a la parte que propone la revisión de las medidas (Artº. 217 L.E.C.). Igualmente el artículo 79, nº 5 del Código de Derecho Foral de Aragón, indica que las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes.

TERCERO.- En la Sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de 18-7-2013 (f. 11), se fijó una pensión de alimentos para el hijo menor de 210 €/mensuales, como se razona en la Sentencia apelada dicha pensión fue aceptada por el recurrente cuando percibía en su momento subsidio por desempleo, desconociéndose exactamente la cantidad, aún cuando admite el recurrente en el acto de la vista que sobre los 1200 €/mes, no obstante a fecha de dictarse la resolución de instancia percibía unos ingresos netos en torno a los 1000 €/mensuales y por lo que parece razonable considerar que la cantidad fijada en su momento es asumible en el caso de que el recurrente perciba ingresos superiores al salario mínimo interprofesional tal como acuerda el Juzgador de Instancia. Alude el apelante que no se han considerado los gastos que genera el menor y los que tiene el demandante consistente en alquiler de habitación y embargos judiciales, lo cierto es que estas circunstancias son tenidas en cuenta en la resolución apelada, atendiendo a los gastos propios del menor, su edad, 14 años en la actualidad, así como la situación económica de la recurrida análoga a la de la Sentencia de divorcio, pero en modo alguno desahogada y que ha tenido que hacer frente a diversos créditos del negocio familiar, no pudiéndose hacer recaer únicamente en la recurrida, los deberes de alimentación y sustento del hijo común. Por lo expuesto parece razonable las cantidades fijadas en la Sentencia apelada atendiendo a las distintas situaciones laborales del recurrente, debiéndose desestimar el recurso confirmando la Sentencia apelada."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 23 de febrero de 2016. Custodia compartida. Interés del menor. Informe psicológico. Edad del niño. Disponibilidad paterna**

"PRIMERO.- Contra la Sentencia de instancia se alza Dª V suplicando su revocación parcial y se establezca la custodia individual de la hija en su favor, con el régimen de visitas que relaciona entre ella y el padre, fijándose a cargo de éste una pensión alimenticia de 300 € mensuales y el pago del 70% de los gastos extraordinarios, siendo el 30% restante a cargo de la madre, con fundamento en error valorativo de la prueba practicada en el proceso.

SEGUNDO.- Alega, sustancialmente, la recurrente que el Juzgador no ha valorado correctamente el informe psicológico que recomienda la custodia materna, que el padre, por sus horarios laborales, carece de disponibilidad para ocuparse de la menor, siendo muy elevada la conflictividad entre los progenitores.

La ruptura de pareja se produjo en abril de 2014, tras marcharse el actor del domicilio familiar.

De la relación nació el 14 de marzo de 2013, N, que cuenta ahora con dos años y medio de edad.

El actor reconoce que desde el cese de la convivencia hasta el dictado de las medidas provisionales no abonó suma alguna para el mantenimiento de la menor, habiendo impagado las rentas de la vivienda familiar de enero, febrero y marzo de 2014, anteriores a la ruptura, habiéndose comprometido a su abono (f. 175 y 176 de las actuaciones).

Ambas partes suscribieron en el Juzgado de Familia el 25 de Julio de 2014, en presencia de sus Letrados y del Ministerio Fiscal, un acuerdo por el que se mantenía la custodia materna de la hija y se pactaba un régimen de visitas para el padre, con entregas y recogidas en el domicilio materno (folio 54), debiendo aquel comunicar de manera inmediata la imposibilidad de cumplirlo por motivos laborales.

La madre reside en Zaragoza en el domicilio de su madre, con la hija menor y otra habida de otra unión, y trabaja desde octubre de 2014, a tiempo parcial, en labores de limpieza.

El padre es militar de profesión, . En junio de 2014 percibió 2.455,96 €, con un descuento de 82,76 € por anticipo, en septiembre 1.376,78 €, con el mismo descuento, sin prorrateo de pagas extraordinarias. Reside en casa de sus padres en C. Su horario laboral es de 7'15 h a 15'15 h. de lunes a miércoles, el jueves hasta las 17 h. y el viernes hasta las 14'30 h, teniendo además un horario flexible según las necesidades del servicio y de la Unidad, que se prolonga hasta el fin de semana y festivos (f. 117).

La perito psicóloga, emisora del informe de autos (f.125 y ss.) recomienda la custodia materna, con fundamento en la escasa edad de la menor, que precisa un entorno

estable sin alteración de rutinas y con organización concreta que favorezca su desarrollo, y en la escasa disponibilidad del padre cuya actividad laboral le exige una constante disponibilidad y continuos desplazamientos, que siempre ha suplido la madre adecuadamente. Conclusiones que ratificó en el plenario.

TERCERO.- Con estas premisas, teniendo en cuenta que los apoyos del padre, sus padres trabajan, que su domicilio se halla en Cadrete y su centro de trabajo en Garrapinillos, que su horario laboral se inicia a las 7 h. de la mañana, debiendo estar permanentemente disponible por razones del servicio, que la madre trabaja 6 horas a la semana, residiendo en Zaragoza con su madre, la que no trabaja, y que ha atendido desde su nacimiento a la menor afrontando los períodos de ausencia del padre, debe concluirse en que el bienestar e interés de la menor quedan mejor salvaguardados con la custodia individual materna, sistema con el que se garantiza su adecuado desarrollo, estabilidad y los frecuentes contactos con su padre. (Art. 80-2 C.D.F.A.).

Se impone el régimen de visitas entre padre e hija establecido en el Auto de Medias Provisionales de 24 de Octubre de 2014, estableciendo que las vacaciones de verano, los meses de julio y agosto, se dividirán por semanas, como recomienda la psicóloga.

Con respecto a la pensión alimenticia, el padre cobra más de 1.400 € mensuales, frente a los escasos ingresos de la madre, unos 250 € al mes, debe fijarse, en consecuencia, la suma de 275 € al mes a cargo del primero, manteniéndose la proporción establecida del 70% en el abono de los gastos extraordinarios de la menor para el mismo.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 1 de marzo de 2016. Pensión alimenticia para hijo menor. Proporcionalidad. Falta de ingresos del alimentante**

"PRIMERO.- Recurre la demandada la Sentencia dictada en la instancia, suplicando su revocación y se mantenga la pensión alimenticia de 175,- € estipulada en su día a cargo del actor para la hija común, con sus correspondientes actualizaciones, o, subsidiariamente, se fije la pensión de 150,- € al mes, debiendo el actor acreditar cada dos meses si percibe o no algún tipo de prestación, volviéndose a abonar la pensión fijada en su día, cuando perciba algún tipo de ingresos, abonándose los gastos extraordinarios al 50%.

SEGUNDO.- El actor instó la demanda que nos ocupa alegando carecer de toda clase de ingresos, habiendo cesado en noviembre de 2014 el percibo de la renta activa de 426,- € mensuales, no pudiendo solicitarla hasta noviembre de 2015.

En pleito precedente de modificación de medidas, recayó Sentencia firme el 25 de febrero de 2014, en la que se mantuvo la pensión inicialmente establecida al aceptar el actor su pago por tener reconocido hasta noviembre de ese año el subsidio de desempleo, estableciendo, además, que abonaría la 1/3 parte de los gastos extraordinarios cuando cobrase el subsidio o no tuviese ingresos.

En el Fundamento Jurídico Tercero de la Sentencia que nos ocupa se establece una pensión de 75,- € mensuales, y el abono de la inicialmente establecida actualizada, una vez vuelva a percibir el citado subsidio o prestación similar, pronunciamiento que no se recoge en el FALLO de la misma.

Ya se ha constatado que también la demandada se encuentra en una situación económica precaria, cobrando subsidio de 426,- € al mes, viviendo con la menor en casa de su madre, y que las necesidades de ésta, E, de 11 años de edad, no han disminuido.

En estas condiciones, no puede alterarse lo resuelto por el Juzgador de instancia, dada la necesaria proporcionalidad que debe imperar en materia de alimentos, haciéndose constar en el Fallo el contenido de la fundamentación jurídica (Artº. 82 del Código de Derecho Foral de Aragón)."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 1 de marzo de 2016. Guarda y custodia individual de hijo menor por residencia alejada de los progenitores. Régimen de visitas. Pensión alimenticia. Denegación de pensión compensatoria**

"PRIMERO. Frente a la sentencia de instancia que determina las medidas definitivas de carácter paterno filial de los progenitores respecto a la hija común, , nacida el de 2013, y que se han hecho constar en el primer antecedente de hecho de la presente resolución, se alzan ahora ambos cónyuges impugnando los pronunciamientos de la misma.

SEGUNDO. Guarda y custodia de la menor.

Alega el apelante Sr. E que la atribución de la guarda y custodia a la madre infringe el principio del *favor filii* recogido en los artículos 75, 76, 80 y 82 del Código del Derecho Foral de Aragón. Sin embargo, las razones que da en apoyo de su pretensión no logran desvirtuar los argumentos esgrimidos por el Juzgador de instancia. Ha quedado acreditado que ambos progenitores son idóneos y están capacitados para ostentarla según el informe elaborado por la psicóloga y la trabajadora social adscritas al Instituto de Medicina Legal de Aragón, Subdirección de Teruel, sin que el hecho de tener el padre una mejor estabilidad social y laboral suponga una mayor idoneidad para cuidar de la menor. Tampoco implica un obstáculo para que la madre tenga la custodia de su hija "la pauta obstruccionista por parte de la madre a que la menor se relacione con el actor" alegada en el recurso, ya que, fijado judicialmente un amplio régimen de visitas y de comunicación del padre con su hija, la madre deberá cumplir con lo acordado y facilitarlo, lo que impedirá la "alienación parental" a la que se refiere el apelante. De ahí que deba ser rechazado este punto del recurso y confirmada la sentencia de instancia en cuanto a la guardia y custodia se refiere.

TERCERO. Régimen de visitas.

El Magistrado-Juez de instancia fija un régimen de visitas teniendo en cuenta la circunstancia concreta de no poder establecer en este caso la custodia compartida por residir cada uno de los progenitores en una ciudad diferente; no obstante, los apelantes muestran su disconformidad con determinados puntos, y, por otra parte, debido a la mala relación existente entre ellos, piden más concreción en otros.

Interesa don D en su recurso un régimen de visitas más amplio que el señalado en la sentencia por considerar que este no garantiza unas relaciones continuadas del padre con su hija y no respeta ni el derecho de la menor a tener un contacto directo con su padre de modo regular, ni el derecho del padre a la igualdad en sus relaciones familiares. En concreto solicita: a/ la ampliación de la comunicación con su hija por cualquier medio, incluso visual; b/ incorporación del fin de semana coincidente con un puente escolar a éste, disfrutándolo el progenitor a quien corresponda dicho fin de semana; c/ entregas y recogidas de la menor en el domicilio residencia de los progenitores y no en el Punto de

Encuentro; d/ cuando por causas ajenas al padre no pueda recoger a la menor un fin de semana, pueda disfrutar de ella el fin de semana inmediato posterior; e/ si por motivos laborales no pudiera recoger a su hija el viernes y lo hace el sábado que no suponga ningún incumplimiento del régimen de visitas a efectos legales; f/ asunción por ambos progenitores de los gastos de desplazamiento para el cumplimiento del régimen de visitas a favor del padre; g/ disfrute por el padre de la compañía de su hija menor todos los puentes escolares; h/ posibilidad de ver a la hija entre semana cuando tenga que desplazarse a Zaragoza por trabajo o formación u otras causas; i/ posibilidad de ver a la menor un día entre semana desde las 17 a las 20 horas la semana que no tenga derecho a régimen de visitas, en la localidad de Zaragoza; j/ disfrute de la menor el día de su cumpleaños por su madre en los años impares y con su padre en los años pares; el día del padre y el cumpleaños del padre con éste siempre que su actividad laboral se lo permita; el día de la madre y el cumpleaños de la madre con la madre; k/ en caso de ser impares los días de vacaciones de Navidad o de Semana Santa, disfrute por el padre de los que excedan al dividir por dos los días de vacaciones; l/ disfrute por el padre del 60% de las vacaciones de verano con suspensión del derecho de visitas relativo a fines de semana alternos pero no de las comunicaciones con la menor, debiendo informar el progenitor con el que esté la hija menor, al otro, el lugar donde se encuentre; debiendo comunicar en el mes de febrero el periodo escogido por el progenitor a quien corresponda ese año; m/ comunicaciones con su hija con todos los medios existentes incluidos los visuales de forma diaria entre las 19 y las 20 horas.

Doña R, respecto al régimen de visitas, hace las siguientes peticiones modificadoras del establecido en la sentencia apelada: a/ que se realice por el padre sin pernocta y con carácter gradual; b/ que se anticipe la hora de recogida de la menor; c/ que las recogidas y entregas de la menor se sigan realizando en el Punto de Encuentro; d/ que durante el periodo de Navidad únicamente falte a la guardería los días durante los cuales permanece cerrada, es decir, el 25 de diciembre y 1 y 6 de enero; e/ que la comunicación del periodo escogido para disfrutar las vacaciones con la menor por parte del progenitor a quien corresponda elegir, respecto al otro, tenga lugar con un mes de antelación; f/ que se señale un día concreto de visita intersemanal; g/ que la comunicación con la menor se realice de 14:00 a 14:15 horas; h/ respecto al día de Reyes, siempre que coincida la festividad en viernes, lunes o en fin de semana y la menor estuviera fuera, en el caso de que Ariadna estuviera desplazada en otra localidad, las horas de visita con el otro progenitor sean en el lugar donde se encuentre la menor para evitarle desplazamientos innecesarios.

Realmente piden los apelantes una concreción excesiva, si bien, debido a la mala relación existente entre ellos, se detallarán por esta Sala determinados puntos que consideramos necesarios para evitar conflictos entre los padres y con ello favorecer el desarrollo de la menor.

No existe razón para limitar el derecho de visitas del padre como interesa la madre, al no haber quedado acreditado ninguno de los motivos dados por ésta en dicho sentido. El informe emitido por el Instituto de Medicina Legal de Aragón, Subdirección de Teruel, es contundente al expresar que no se han observado indicadores que contradigan la adopción

de visitas con pernoctas a favor del padre. Todas las insinuaciones contenidas en el escrito de recurso de doña R relativas a la falta de capacidad del padre para cuidar a la niña, a la necesidad de ésta de dormir únicamente con la madre por su corta edad, al trauma que pueda producir en la menor la pernocta con el padre, etc. son impresiones subjetivas que no han quedado demostradas.

Sí conviene precisar el día intersemanal en que el padre podrá comunicar con su hija para crear un hábito en la menor y poder programar las actividades extraescolares de la niña. Por esto mismo, no puede admitirse que el padre pueda ver a su hija todos los días que por razón de trabajo u otra causa se desplace entre semana a Zaragoza, a menos que así lo considere también la madre.

Respecto a las comunicaciones del padre con la menor, dados los avances en este sentido, podrán tener lugar por cualquier medio, también visual, y podrán ser diarias, al haberse acreditado a través el informe elaborado por el Instituto Legal de Medicina de Aragón que es lo más ventajoso para A ("Se considera conveniente establecer y mantener comunicación telefónica o telemática diaria con el progenitor con el que no esté"). Dichas comunicaciones, dada la escasa edad de la menor, deberán tener lugar en horario de comida y no por la noche. De ahí que se amplíe la medida señalada en la sentencia apelada, si bien se estima procedente que se realice a través del móvil del abuelo materno y que sea este quien se encargue de dicho contacto visual para evitar la relación entre los progenitores. En el caso de que la Sra. D deje de vivir con sus padres, será ella quien facilite dichas comunicaciones.

No existe razón alguna para acordar que los gastos por razón de desplazamiento del padre para disfrutar de la compañía de su hija sean sufragados por ambos, y más teniendo en cuenta la diferencia de ingresos de cada uno de ellos tal como recoge la sentencia apelada.

Finalmente, se hacen las siguientes puntualizaciones:

El fin de semana coincidente con un puente escolar, será el progenitor a quien corresponda disfrutar de aquél quien podrá estar con su hija durante todo el puente escolar. No procede atribuir al padre el disfrute de todos los puentes escolares.

Las entregas y recogidas de A tendrán lugar en el domicilio de los progenitores únicamente si están de acuerdo ambos. En caso de que alguno de los progenitores se niegue a ello, las entregas y recogidas se realizarán en el Punto de Encuentro. Se consideran oportunos los horarios establecidos en la sentencia de instancia, no pudiendo calificarse de tardía la vuelta de la menor a las 20:00 horas para que el padre pueda disfrutar de ella también el domingo, no siendo ya una bebé.

Cuando por causas ajenas al padre no pueda éste recoger a su hija un fin de semana no podrá disfrutar de ella el fin de semana inmediato posterior pues ello alteraría el régimen de fines de semana alternos fijado.

La petición realizada por el apelante don D en orden a declarar en vía civil que no pueda considerarse incumplimiento del régimen de visitas el hecho de recoger a su hija un sábado cuando, esporádicamente, no pueda hacerlo el viernes, no puede ser atendida por improcedente.

Cuando el padre se desplace a Zaragoza por trabajo, formación u otras causas fuera del día intersemanal que le corresponde, únicamente podrá ver a su hija si la madre accede a ello pues lo contrario alteraría el normal desarrollo de la menor.

No procede acceder a la petición del apelante don D relativa a los cumpleaños y al día del padre y de la madre porque podría suponer unos viajes de la menor innecesarios, pudiéndose posponer o anticipar la correspondiente celebración.

No procede modificar el régimen de vacaciones señalado por el Juzgador de instancia que se considera adecuado para una correcta comunicación de los progenitores con su hija. Y puesto que se ha determinado en verano el disfrute por periodos quincenales, se suspenderá para el progenitor que no disfrute de la menor el derecho de visitas relativo a fines de semana alternos y también las comunicaciones con la menor (excepto si ambos progenitores acuerdan otra cosa). No se considera preciso que uno de los progenitores deba informar al otro acerca del lugar donde se encuentre la menor durante las vacaciones ya que no se ha dado razón alguna para prever que puedan hacer un mal uso de dichas vacaciones. El progenitor a quien corresponda elegir ese año las vacaciones deberá comunicarlo al otro como mínimo con tres meses de antelación. No es atendible la petición realizada por la madre en orden a que la menor asista a la guardería los días de Navidad en que permanezca abierta, porque esta solicitud resulta atentatoria contra el derecho que tiene el padre a disfrutar de la menor durante ese periodo.

CUARTO. Pensión de alimentos.

Fijada por el Magistrado-Juez a quo la pensión de alimentos a favor de la hija menor a cargo del progenitor Sr. E en la suma de 400 € mensuales, es impugnado este pronunciamiento por ambos recurrentes. El Sr. D interesando sea rebajada en 50 € y doña R pidiendo sea elevada a la cantidad de 700 €. Pues bien, las razones dadas por ambos recurrentes en apoyo de sus respectivas pretensiones no logran desvirtuar los acertados fundamentos recogidos en la sentencia de instancia en los que han sido estudiados los ingresos de los litigantes y las necesidades de la menor sobre la base de la legislación aplicable. Aun teniendo en cuenta las diferentes retribuciones de los progenitores y la contribución de la madre a las cargas de la menor con su dedicación a la hija, no ha probado unas necesidades de ésta que exijan elevar la suma a 700 € mensuales. Tampoco don D justifica la rebaja que interesa. Debe ser confirmado este punto del recurso.

QUINTO. Pensión compensatoria a favor de doña R

Dispone el artículo 310 del Código del Derecho Foral de Aragón lo siguiente: “Efectos patrimoniales de la extinción en vida. 1. En caso de extinción de la pareja estable no casada por causa distinta a la muerte o declaración de fallecimiento, y si la convivencia

ha supuesto una situación de desigualdad patrimonial entre ambos convivientes que implique un enriquecimiento injusto, podrá exigirse una compensación económica por el conviviente perjudicado en los siguientes casos: a) Cuando el conviviente ha contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja estable no casada. b) Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución insuficiente, se ha dedicado al hogar, o a los hijos del otro conviviente, o ha trabajado para éste. 2. La reclamación por cualquiera de los miembros de la pareja del derecho regulado en el párrafo anterior deberá formularse en el plazo máximo de un año a contar desde la extinción de la pareja estable no casada, ponderándose equilibradamente en razón de la duración de la convivencia."

El Juzgador de instancia ha denegado esta pensión razonando que no ha podido acreditar la solicitante perjuicio económico alguno con el consiguiente enriquecimiento de don D, ya que cada miembro de la pareja aportaba para gastos comunes una determinada cantidad en relación a la capacidad económica de cada uno de ellos; faltando así mismo la prueba de un empobrecimiento real y efectivo de doña Rebeca al cese de la convivencia de la pareja. Frente a este pronunciamiento se alza la Sra. D exponiendo que fue despedida de su trabajo por estar embarazada y renunció a la readmisión, una vez declarado nulo el despido, para poder dedicarse al cuidado del hogar y del bebé, ante la incompatibilidad de este trabajo al estar en localidades diferentes; que, además, durante todo este tiempo ha perdido oportunidad de trabajo y de ingresos acordes con su titulación; que lo ingresado por ambos a la cuenta común nada tiene que ver con los ingresos desequilibrados que tenía la pareja, puesto que ella sacrificó dinero que habría ingresado de haber cobrado por trabajar mientras que, por las horas de dedicación el Sr. E se evitó tener que pagar una empleada de hogar y una guardería. Es decir, invoca que durante la convivencia ha sufrido una "pérdida de oportunidades" y una "pérdida de expectativas" por las que debe ser indemnizada.

No puede ser acogido este punto del recurso por cuanto no se dan los requisitos contemplados en el precepto citado. La parte demandada-reconviniente no ha acreditado el enriquecimiento del Sr. D a su costa, ni su empobrecimiento por dedicarse al cuidado de la casa, en la que permaneció de manera continuada desde el mes de julio de 2013 (cuando fue despedida del trabajo que tenía en Zaragoza) hasta el mes de enero de 2015. Cada uno de los ahora litigantes aportaba cada mes una cantidad para gastos comunes en proporción a sus ingresos, sin que conste que la apelante dejara de percibir ingresos, bien por trabajo, bien por prestación de desempleo, durante el tiempo en que duró la convivencia entre ellos."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2 de marzo de 2016. Modificación de medidas. Momento en que se produce la alteración de circunstancias. Interpretación de la voluntad contractual. Pensión alimenticia para hijos mayores de edad. Pensión compensatoria**

"PRIMERO.- D. Ricardo formula recurso de casación contra la sentencia dictada por la AP de Huesca, que estima en parte el recurso de apelación que dedujo contra la sentencia de primer grado, que desestimó en su totalidad la demanda de modificación de medidas que presentó en relación a las acordadas en el convenio regulador aprobado por la sentencia de 21-12-2007, que decidió el divorcio del matrimonio que el recurrente concertó en su día con Dª Mª José.

La demanda de modificación afirmaba que habían variado las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la suscripción y aprobación del convenio regulador para fijar la pensión compensatoria a favor de la esposa -1.976 € mensuales-, y las pensiones alimenticias a cargo del padre como contribución al sostenimiento de los dos hijos habidos en el matrimonio: D. Ricardo, nacido en 1990, y Dª Inés, nacida en 1992 -2.400 € al mes para ambos-, tanto en cuanto a posibilidades del alimentante, como a las necesidades de los destinatarios, y, además, en cuanto a la segunda, por la falta de aprovechamiento en sus estudios de enfermería. En dicha demanda pedía con carácter principal la extinción de las pensiones a favor de Dª Inés y Dª Mª José, y la reducción de la de D. Ricardo; y con carácter subsidiario la reducción de la acordadas respecto de hija y la en su día esposa.

La sentencia de primer grado desestimó la demanda por entender que no es de apreciar el cambio de circunstancias que se afirma en la demanda. A tal efecto afirma que los esposos suscribieron un pacto en el mes de diciembre de 2013 por el que modificaban el convenio regulador, y que desde esta fecha no ha tenido lugar la necesaria alteración de circunstancias que permita la modificación de lo acordado de conoformidad con el art. 77.3 CDFA.

Por su parte, la sentencia de segundo grado entiende acreditado durante el procedimiento que el mayor de los hijos, D. Ricardo, además de haber terminado sus estudios de medicina en junio de 2014, ha obtenido plaza en el programa de formación MIR que comenzará a desarrollar en el mes de junio de 2015, lo que le reportará la independencia económica, por lo que, con estimación parcial del recurso de apelación, da lugar a la extinción de la pensión establecida para él a partir dicho mes de junio de 2015, si bien la mantiene en su integridad hasta entonces. Por el contrario, desestima la apelación en todo lo demás, pues considera que no se da respecto de la compensatoria a favor de Dª Mª José ni de los alimentos de Dª Inés la necesaria alteración de circunstancias que permita su modificación.

El recurso casación se asienta en tres motivos:

El primero sostiene infracción del art. 77.3.c CDFA porque la sentencia impugnada no tiene como día de referencia para hacer la necesaria valoración sobre cambio de

circunstancias la de la sentencia que aprobó el convenio regulador en el procedimiento de divorcio (21-12-2007), sino la de suscripción del pacto de modificación que se deja expresado. El segundo de los motivos afirma infracción de los arts. 82.1 y 82. 2 DCFA porque la no modificación del convenio regulador en los términos pretendidos es contraria a la exigencia contenida en dichos preceptos de que las pensiones en disputa se fijen en proporción a los recursos económicos del obligado y las necesidades de quienes son acreedores a ellas. Finalmente, el tercero de los motivos se sustenta en la infracción del art. 69 CDFA, en tanto que se mantiene una pensión alimenticia para cubrir las necesidades de su hija mayor de edad mas allá del tiempo razonable requerido para que pudiera completar su formación.

El recurrente en casación termina suplicando con carácter principal que se declare extinguida la pensión fijada para Dª Inés y la reducción de la asignada para D. Ricardo a 1.075'64 €, a abonar por ambos padres por partes iguales. Con carácter subsidiario solicita que se fije el último día del mes de junio de 2015 como limite temporal de la primera de las pensiones, que en todo caso debe ser reducida a la suma de 680'75 € desde la fecha de la presentación de la demanda que inició el proceso de modificación. Con igual carácter de subsidiariedad, solicita que para el caso de que no se acordara que la pensión fijada para D. Ricardo fuera a cargo de ambos progenitores por mitad, se redujera ésta a la suma de 680'75 €, todo ello con efectos desde la presentación de la demanda y hasta su extinción de junio de 2015.

No impugna por el contrario el pronunciamiento de la sentencia por el que se deniega la modificación de la pensión compensatoria.

SEGUNDO.- Primer motivo de casación.

La cuestión se halla planteada del siguiente modo:

Tras la sentencia de divorcio, y en el curso de dos procedimientos entablados entre ellos -ETJ 195/2011 y PO 520/2012-, D. Ricardo y Dª Mª José suscribieron el día 11 de diciembre de 2013 un pacto que fue judicialmente homologado por auto de día 17 del mismo mes y año, lo que determinó la terminación de dichos litigios. La sentencia recurrida entiende que los contendientes modificaron por dicho pacto los términos del convenio regulador de 2007, por lo que el día de referencia para valorar si se ha producido o no la alteración de circunstancias requeridas por el art. 77.3 CDFA que se denuncia como infringido para que pueda prosperar la pretensión modificatoria es la de dicho pacto, y no el de la sentencia que aprobó el convenio regulador.

El recurrente sostiene que el pacto de 2013 no tenía por objeto modificar el convenio regulador aprobado en la sentencia de divorcio, sino que tenía por única razón y finalidad la de poner término a los procesos abiertos que se identificaban en él, a saber: el de ETJ en el que la actora pretendía el cobro de atrasos en el pago de la pensión compensatoria, y el PO en el que se discutía la validez de un pacto de compensación alegado por el actor en dicha ejecución como motivo de oposición a ella. Por ello, sostiene que dicho pacto no

puede producir efectos fuera de dichos procedimientos, y que no puede ser tenido en cuenta para la aplicación del art. 77.3 CDFA.

Discutida la interpretación y alcance que haya de ser dada al pacto de 2013, se hace necesario recordar la constante doctrina recogida con extensión por la STS de 28 de enero de 2016, nº 6/2016, Recurso: 2773/2013, conforme a la que la interpretación de los contratos corresponde a los tribunales de instancia. Dicha sentencia dice:

> *La sentencia de 4 noviembre 2014, Rc. 2841/2012 , recogiendo la jurisprudencia sobre esta cuestión, declaraba que: «Hay que decir que constituye doctrina consolidada que la interpretación de los contratos es función de los tribunales de instancia, de tal manera que la realizada por estos ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación en la medida en que se ajuste a los hechos considerados probados por aquella en el ejercicio de su función exclusiva de valoración de la prueba, salvo cuando se demuestre su carácter manifiestamente Ilógico, irracional o arbitrario, sin que haya lugar a considerar infringidas las normas legales sobre interpretación de los contratos cuando, lejos de combatirse una labor hermenéutica abiertamente contraria a lo dispuesto en dichas normas o al derecho a la tutela judicial efectiva -por prescindir de las reglas de la lógica racional en la sentencia de las premisas, en la elaboración de las inferencias o en la obtención de las conclusiones-, el recurrente se limita en su recurso a justificar el desacierto de la apreciación -inherente a la labor interpretativa- realizada por el tribunal de instancia, con exclusivo propósito de sustituir una hipotética interpretación dudosa por sus propias conclusiones al respecto ya que también e ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia que lo discutible no es lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico, siendo así que en estos casos deberá prevalecer el criterio del tribunal de instancia por no darse esa abierta contradicción aunque la interpretación acogida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud (SSTS, entre las más recientes, de 5 de mayo de 2010 [RC n.º 699/2005], 1 de octubre de 2010 [RC nº 633/2006] y 16 de marzo de 2011 [RC n.º 200/2007]). La sentencia de esta Sala de fecha 29 de febrero de 2012 (recurso de casación n.° 495/2008), recoge esta doctrina que establece que salvo supuestos excepcionales no se permite revisar la interpretación del contrato, ya que otra cosa supone convertir la casación en una tercera instancia, alejada de la finalidad que la norma asigna al Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en el orden civil consistente, como recoge el preámbulo del acuerdo de esta Sala sobre criterios de admisión de 30 de diciembre de 2011, en la unificación de la aplicación de la ley civil y mercantil.»*
>
> *Se mencionaba en la misma línea doctrinal la sentencia de 7 de noviembre de 2013 y se añadía que este mismo criterio es aplicable a la calificación contractual y la determinación del fin jurídico que se pretende en el contrato (sentencia nº 458/2007, de 9 mayo, recurso nº 2097/2000).*

En el presente caso, la sala de apelación indica en su fundamento de derecho segundo:

Es cierto que a través de ese acuerdo transaccional terminaron dos procesos judiciales distintos e independientes del presente, pero no puede pasarse por alto que el acuerdo en cuestión al que llegaron ambos ex-cónyuges se autotitula <<modificación de convenio regulador de divorcio>> en clara y expresa referencia al convenio de octubre de 2007 que fue homologado en la precitada sentencia de diciembre del mismo año, y en él se modifican los pactos del convenio regulador que afectan precisamente a los extremos que son objeto de debate en el presente pleito, esto es, las pensiones alimenticias a favor de los dos hijos del matrimonio y la asignación compensatoria a favor de la ex-esposa, por lo que no puede aceptarse que este nuevo convenio deba afectar únicamente a los dos pleitos pendientes, ya que contienen una nueva regulación de los extremos a los que se refiere, sin que ninguna norma legal, ni sustantiva o procesal ni general o regional, suponga un obstáculo para llegar a esta conclusión. Hay que entender por todo ello que los propios interesados realizaron de común acuerdo una auténtica modificación de las medidas definitivas de su divorcio, y que tal modificación fue incluso homologada judicialmente para poner fin a dos procesos, por lo que sin duda son las circunstancias tenidas en cuenta para redactar el acuerdo de diciembre de 2013 las que deben ser analizadas ahora de cara a su eventual variación para decidir si ha lugar o no a lo solicitado por el apelante en su demanda inicial, que fue presentada en mayo de 2014

Esto es, la Sala, en ejercicio de su soberana competencia para interpretar el pacto, afirma que estaba en la voluntad de los otorgantes modificar el convenio regulador aprobado en la sentencia de divorcio y que así lo hicieron, y tal afirmación no se presenta en modo alguno como ilógica o irrazonable.

Por el contrario, los términos del mencionado pacto son claros. En su apartado primero se hace expresa mención a las pensiones fijadas con cargo al padre como contribución al sostenimiento de los hijos en el apartado cuarto del convenio –a la sazón, y merced a la cláusula de actualización, 1.361'51 € para cada uno-, y se afirma que cubren los *gastos actuales de todo tipo de los hijos*, y el apartado segundo contiene determinaciones sobre la pensión compensatoria objeto del pacto quinto de convenio regulador sobre la que ya nada se discute en el presente recurso.

Así las cosas, si a fecha diciembre 2013 se afirma que las pensiones fijadas son las que se corresponden con las necesidades que los hijos tenían en aquél tiempo, dentro de un pacto que tiene como rótulo *MODIFICACIÓN DEL PACTO CUARTO* del convenio regulador, es llano que para determinar si ha habido o no un cambio de circunstancias a los efectos del art. 77.3 CDFA ha de partirse de la fecha de dicho pacto modificador del convenio aprobado en el previo proceso matrimonial, y no de la de éste.

En consecuencia, procede la desestimación del motivo.

TERCERO.- Segundo motivo de casación.

En su desarrollo, el propio recurrente sostiene que, si las circunstancias a comparar son las existentes en diciembre de 2013 en que tuvo lugar el pacto de modificación del convenio regulador y las de 21 de mayo de 2014 en que fue presentada la demanda, no cabe entender que concurra ninguna alteración relevante en cuanto a su situación económica, por lo que la cuestión queda constreñida a las necesidades de los hijos, de las que también se ocupa en el motivo, a cuyo efecto ha de ser destacado que los hechos declarados probados en la instancias no han sido impugnados mediante motivo de infracción procesal.

Por lo que se refiere a D. Ricardo, la sentencia combatida afirma que no ha sido acreditado suficientemente *que desde entonces* [suscripción del pacto de 2013] *a la presentación de la demanda, o incluso al término de la carrera y a la preparación de las pruebas selectivas hubiera existido una disminución relevante de las necesidades patrimoniales del alimentista, quien seguía sin disponer de recursos económicos propios para mantenerse y subsistir de igual modo que sucedía en diciembre de 2013*. Si ello es así, si como se ha razonado no puede entenderse que haya habido una alteración de la situación económica del recurrente y se sienta como hecho que no ha sido acreditada una merma de las necesidades económicas de D. Ricardo hasta que comenzó su independencia económica por razón de haber ingresado en el período de formación MIR, la conclusión no puede ser otra que no se han producido nuevas circunstancias que permitan afirmar que la pensión que las partes entendieron adecuada al sostenimiento de las necesidades de D. Ricardo haya dejado de serlo al tiempo de la interposición de la demanda.

En consecuencia, no cabe entender que la denegación de la modificación de la pensión hasta el mes de junio de 2015 suponga infracción de los arts. 82.1 y 82. 2 DCFA por falta de proporcionalidad. En cualquier caso, ello carecería de relevancia, dada la constante doctrina del TS conforme a la que en los casos en que se trate de una modificación de medidas, bien por razón de recurso o por éxito de la pretensión que la reclame, los efectos de la modificación, a diferencia de lo que ocurre cuando son establecidas por vez primera, no se produce sino desde la fecha de la resolución modificadora (STS 26-3-2014, RC 1088/2013; y 15 y 23-6-2015), por lo que, extinguida la pensión respecto del mencionado hijo, ninguna virtualidad tendría ahora la modificación ulterior de las pensiones ya satisfechas.

Respecto a Dª Inés, y dejando aparte la cuestión de su rendimiento académico, que estudiaremos al ocuparnos del tercero de los motivos, la sentencia de primer grado establece como elementos de hecho no discutidos eficazmente que *unos meses antes de que sus padres pactaran el convenio de modificación, ya se había producido el traslado de la joven a Madrid a Palencia, en donde va a seguir cursando sus estudios, al menos según las noticias más recientes de las que disponemos, por lo que no es razonable, y muchos menos en los cinco meses mediantes entre el nuevo convenio y la promoción del presente pleito, pensar en una variación sustancial de las necesidades básicas de la joven, la cual seguirá devengando unos gastos relacionados tanto con sus estudios como con su alimentación y sustento que no tienen por qué experimentar grandes cambios*. En consecuencia, también aquí hemos de concluir que no hay razones para afirmar que la pensión que se entendió adecuada por los padres en diciembre de 2013 haya dejado de

serlo al tiempo de la interposición de la demanda por falta de proporcionalidad, por lo que tampoco en relación con la pensión fijada para la menor de los hijos podemos compartir que la Sala haya infringido los arts. 82.1 y 82. 2 CDFA por no haber dado lugar a la pretensión de modificación.

CUARTO.- Tercer y último motivo de casación.

Afirma el motivo infracción del art. 69 CDFA porque la Sala ha mantenido la asistencia económica de Dª Inés, que cuenta en la actualidad con 23 años edad, pese a que ha pasado el tiempo normalmente requerido para que su formación se complete.

Al respecto la sentencia recurrida afirma:

[...] en cuanto a la alegada falta de aprovechamiento de los estudios, debemos partir de la base de que, según la información más actualizada que se ha aportado a estos autos, que es la certificación expedida en septiembre del corriente, a la hija del apelante, que ya lleva cinco años estudiando, le restan para terminar su grado de enfermería tres asignaturas del tercer curso más las propias de fin de grado. Nadie con un mínimo de sensatez afirmará que la joven es una estudiante ejemplar, pero creemos que su rendimiento académico no es asimilable a la hipotética situación de quien comienza un ciclo académico y deja de dedicar el tiempo y el esfuerzo precisos para sus estudios parque sabe y es consciente que sus padre la sigan manteniendo económicamente mientras continúe siendo estudiante, que es algo que en el presente caso no se ha justificado que suceda, y mucho menos por el solo hecho de arrastrar algunas asignaturas de cursos anteriores.

Según resulta, literalmente, de la previsión del artículo 69 del CDFA:

"Artículo 69. Gastos de los hijos mayores o emancipados.

1. Si al llegar a la mayoría de edad o emancipación el hijo no hubiera completado su formación profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educación, se mantendrá el deber de los padres de costearlos, pero solo en la medida en la que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete.

2. El deber al que se refiere el apartado anterior se extinguirá al cumplir el hijo los veintiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos."

En su interpretación hemos dicho que [E]*n atención a tal precepto, debe mantenerse la obligación propia de la autoridad familiar aragonesa de subvención de los gastos de crianza y educación del hijo aun cuando éste haya alcanzado la mayoría de edad, siempre y cuando continúe su formación y con el límite de los 26 años de edad* (STJA 7/2015; Recurso: 51/2014), si bien hemos destacado que de acuerdo con el precepto tal

obligación *sólo se mantendrá si es razonable exigir su cumplimiento, y sólo por el tiempo normalmente requerido para que la formación se complete* (STJA 12 de mayo de 2.010; Recurso: 1/2010), y que *sólo tendrá lugar cuando el hijo que no ha terminado su formación mantenga una actitud diligente, porque de lo contrario deja de ser razonable exigir a los padres sufragar sus gastos* (STJA 8/2009; Recurso: 5/2009).

En el presente caso, lo que el actor afirma es que la sentencia de primer grado infringe la norma porque mantiene su obligación alimentaria para con su hija mayor de edad pese a que la razón por la que no ha acabado su formación radica en la falta de cumplimiento de sus obligaciones como estudiante, y a que ha excedido el tiempo normalmente requerido para completar su formación.

Pues bien, aparte de que ningún parámetro de normalidad con el que pueda ser comparada la historia académica de Dª Inés ha sido aportado a los autos, nada de lo que afirma el recurrente se deduce de los hechos sentados en la sentencia recurrida. Dª Inés tiene 23 años en la actualidad y se halla en los últimos cursos del grado de enfermería, y durante sus estudios se ha producido una interminable serie de enfrentamientos con el recurrente por motivo de sus estudios, con continuos cambios de centro universitario en los que los realizaba, lo que ciertamente sirve de justificación para que el tiempo empleado en alcanzar la titulación no coincida con el número de años de estudio que exige el grado de enfermería según los planes académicos, lo que, por otra parte, la experiencia enseña que no es una situación que pueda ser tildada sin más de anormal sin tener en cuenta otros factores.

En consecuencia, el mantenimiento de la pensión dada a la hija no es contrario al art. 69 CDFA y a la jurisprudencia de esta Sala que lo desarrolla, por lo que el motivo merece la misma suerte que los que le preceden."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 8 de marzo de 2016. Modificación de medidas. Pensión alimenticia. Cuantía. Empeoramiento de la situación económica del alimentante. Actos de liberalidad**

"PRIMERO.- El actor interpuso demanda de modificación de medidas en la que solicitaba la suspensión de la pensión de alimentos de 180 € mensuales que la sentencia de 28-5-2003, dictada en autos nº 476/2003 del Juzgado de instancia, sobre divorcio de mutuo acuerdo, señaló a favor de su hija, , o subsidiaria reducción de la pensión a 50 € mensuales, alegando al efecto el empeoramiento de su situación económica, pues se encontraba en situación de desempleo y carecía de ingresos, en cuyo sentido aportaba sendas certificaciones del INSS e INEM.

La sentencia de instancia no considera acreditada la alteración en las circunstancias que es presupuesto de la modificación solicitada y desestima la demanda, pronunciamiento frente al que se alza el actor, que reproduce sus alegaciones y pedimentos.

SEGUNDO.- La modificación judicial de las medidas inherentes a la nulidad, separación y divorcio sólo es posible cuando se alteren las circunstancias, alteración que, entre otros requisitos –sustancial, no de escasa o relativa importancia, y permanente, no coyuntural o transitoria-, ha de deberse a causas no imputables a la voluntad de quien ejercita la acción, a quien ex art. 217 LEC incumbe la demostración de los acontecimientos que la sustancian.

Al actor incumbía, pues, la prueba de sus reales ingresos cuando en marzo de 2003 firman el convenio regulador aprobado en mayo de ese año, y su situación económica al momento de interponerse la demanda de modificación de medidas, para así efectuar la tarea comparativa necesaria a la justificación de la modificación instada, carga que no puede entenderse satisfecha.

Cuando se firma el convenio regulador el Sr N asumió el pago de una pensión de 180 € mes, por lo que hay que entender que algún ingreso tenia, módico lógicamente a juzgar por la pensión estipulada. E ingresos tenía en 2012 y 2013, pese a los reiterados impagos de la pensión, pues en esos ejercicios las Declaraciones IRPF que el actor finalmente aportó reflejan unos rendimientos netos reducidos de 20.333,28 € y 16.237,61 € respectivamente –en régimen de estimación objetiva, pues normalmente serán más altos-. Y si no consta ninguna en 2014 es porque en ese ejercicio la declaración de la renta la presenta Doña B, su esposa desde 2005, no él, a quien la Agencia Tributaria no le remite borrador "por no ser posible la elaboración del borrador de declaración conjunta de acuerdo con la solicitud más favorable realizada por Uds".

Ello supuesto, dicho esta que no cabe tener al actor como persona desvinculada del negocio y sus resultados económicos, por mucho que su actual esposa lo titularice formalmente, y que esos resultados posibilitan el cumplimiento de las obligaciones asumidas. El derecho alimenticio de los hijos, ciertamente, no es tan absoluto que no deba

ceder ante determinadas situaciones de acreditada carencia de recursos, en las que conciliando la previsión del art 152-2 C.C. -"cesará la obligación de dar alimentos cuando la fortuna del alimentante se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia"- y el mandato incondicionado del art 82.1 CDFA -"Tras la ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribuirán proporcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su cargo"-se suspende la exigibilidad de la pensión en tanto subsista la situación de precariedad en la que el actor se encuentre, reanudándose en el momento en que perciba ingresos laborales o prestaciones por desempleo, o se acredite la existencia de otros medios de fortuna. Pero la situación en autos no se ha acreditado sea esa, por lo que ni puede prosperar la suspensión ni la reducción de pensión solicitada.

Por lo demás, en cuanto al dinero, ropa, complementos, tarjeta bus, libros etc que el recurrente quiere se tengan en cuenta, parece que para justificar al menos el cumplimiento en forma distinta de las obligaciones a su cargo, resulta aplicable el artículo 1.162 del Código Civil, conforme al cual hay que entender que el único pago liberatorio es el efectuado a la persona del acreedor, que, en este caso, no era la hija, sino la esposa, pues las cantidades pagadas y prestaciones en general hechas por el padre directamente a su hija no merecen otra consideración que la de actos de mera liberalidad, al margen de la obligación a cumplir, que ha de serlo a la verdadera acreedora, que era la madre y no la hija. “

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 15 de marzo de 2016. Custodia individual. Interés del menor. Situación precaria de un progenitor. Separación de hermanos. Limitación temporal en el uso del domicilio familiar**

"PRIMERO.- Se recurre por la representación de la parte demandada (A) la Sentencia recaída en Primera Instancia en el presente procedimiento sobre Divorcio (art. 770 L.E.C.).

En su recurso considera el apelante; que procede en cuanto a la guarda y custodia de los hijos:"1.- Atribuir la guarda y custodia de ambos hijos al padre.2.- Subsidiariamente, atribuir la guarda y custodia de la hija al padre y la del hijo a la madre"; en cuanto a la vivienda: "1.- atribuir el uso de la vivienda familiar y su ajuar al padre en el supuesto de que se le atribuya la guarda y custodia de los hijos hasta el 31-12-2016.-2.- Caso de atribuir la guardia y custodia de los hijos a la madre, atribuir el uso de la vivienda familiar y su ajar a la madre hasta el 31-12-2016.-3.- Y caso de atribuir la guarda y custodia de la hija al padre y la del hijo a la madre, acordar la venta de la vivienda, sin atribuir su uso a ninguno de los progenitores, siendo de cuenta y cargo de ambos los gastos y pagos que conlleve la vivienda . 4.- El uso de la vivienda, en su caso, supondrá la asunción de todos los gastos de la vivienda por cuenta de aquél al que se atribuya el uso, salvo el IBI que será de cuenta de ambos"; en cuanto a los alimentos:" 1.- Si se confirma la sentencia, se fije una contribución del padre en concepto de alimentos de 75,00 euros por hijo y caso de que mi mandante acceda al mercado de trabajo (algo que deberá comunicar a este Juzgado) y siempre y cuando supere el SMI en cómputo anual, los alimentos se eleven a una cantidad de 150,00 euros por hijo. 3.- Si se atribuye la guarda y custodia de ambos hijos al padre, la madre deberá contribuir en concepto de alimentos en la suma de 200 euros por cada hijo, que deberá abonar en los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe el padre y actualizables anualmente conforme el IPC.4.- Si se atribuye la guarda y custodia de la hija al padre y la del hijo a la madre, ésta deberá contribuir en concepto de alimentos para la hija en la suma de 150 euros, que deberá abonar en los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe el padre y actualizables anualmente conforme al IPC."

SEGUNDO.- En el presente supuesto, ambos progenitores solicitan la custodia individual.

En este tipo de cuestiones, debe indicarse que el principio de interés superior del menor o "favor filii" informa todo el ordenamiento no sólo el Aragonés, habiendo declarado el TC. S 176/2008 de 22-XII y de 7-10-2012 que dicho principio opera como contrapeso de los derechos de cada progenitor y obliga a la autoridad judicial a ponderar tanto la necesidad como la proporcionalidad de la medida reguladora sobre la guarda y custodia del menor, cediendo el interés de los progenitores al de éste. Ello dice la Sentencia del TSJA. de 21-12-2012, es consecuencia de lo dispuesto en el art. 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño de 20-XI-1999, recomendación 14 de la Carta Europea de los Derechos de la Infancia de 21-9-1992, art. 24.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE., art. 11.2 LO. de Protección del menor de 15-1-1996 y art. 3.3.a) y c). 4,13,21 y 46.i de la Ley 12/2001 de 2 de julio de la Infancia y la Adolescencia de Aragón y artículos

concordantes del CDFA Se trata como igualmente indica la Sentencia del TS. de 12-5-2012, de un principio general que tiene carácter de orden público y que debe guiar la adopción de cualquier medida en una situación de ruptura de la convivencia de los progenitores.

Se trata de dos hijos menores; N de 14 años e I de 7 años, la primera ha manifestado su derecho de convivir con su padre. Sobre esta cuestión, debe indicarse que la exploración judicial es el medio por el que el menor afectado por un procedimiento, da a conocer al Juez su opinión, adquiriendo a través del principio de inmediación su mayor importancia, pues es precisamente esa percepción o impresión captada por el Juez la que debe valorarse en su justa medidas, así el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en Sentencia de 25 de marzo de 2013 indica que es el Juzgador de instancia a quien corresponde ponderar la capacidad y grado de discernimiento del menor. Igualmente el Tribunal Constitucional (Sentencia de 25 de noviembre de 2002, 6 de junio de 2005 y 30 de enero de 2006) ha establecido que en aquellos casos en que se afecte a la esfera personal y familiar de menores y gozando éstos de juicio suficiente, procede que sean oídos por el Tribunal, con el fin de hacer efectivo el derecho a ser oídos en cualquier procedimiento judicial en que estén directamente implicados y que concluyan en una decisión que afecte a su esfera personal, familiar y social. No se trata, es obvio, que la voluntad del menor decida el litigio, pero si que es claro que se trata de un factor que resulta relevante, valorándose junto con los demás factores concurrentes (artículo 80-2 del Código de Derecho Foral de Aragón y 76-4 y 6 del mismo texto legal, artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección del Menor y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1989.

No obstante y aún contando con que nos encontramos ante una menor de 14 años reflexiva y madura, lo cierto es que su solicitud no coincide con su beneficio e interés, a los continuos viajes del progenitor a Argelia por las causas que expone la Sentencia apelada, se añade la carencia de vivienda y empleo por parte del recurrente, que no permite desarrollar la custodia de una manera adecuada, aparte de que caso de atender exclusivamente los deseos de la menor, se produciría la consecuencia de la separación de los hermanos, que no es aconsejable ni adecuado, a salvo de circunstancias excepcionales que no concurren en autos (art. 80.4 C.D.F.A.), por lo expuesto, lo mas adecuado y beneficioso para los menores, es la custodia individual materna con el régimen de visitas que fija la resolución apelada.

TERCERO.- Sobre el uso de la vivienda familiar**,** nada consta en relación a la naturaleza de la vivienda y su régimen, teniendo en cuenta la guarda y custodia individual fijada y lo dispuesto en el art. 81 del C.D.F.A., así como la diferencia de ingresos existentes entre los progenitores, lo más adecuado es que se limite el uso del domicilio familiar, pero con un periodo más definido de 5 años, revocando la Sentencia en este apartado.

CUARTO.- En cuanto a la pensión alimenticia, teniendo en cuenta que el alimentante trabaja de manera esporádica, parece que puede asumir la pensión de mínimo vital que fija la Sentencia apelada, por lo que en este apartado se confirma la Sentencia apelada."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de Ejea de los Caballeros de 18 de marzo de 2016. Custodia compartida. Régimen de visitas. Edad y opinión de la menor. Pensión compensatoria**

"Primero.- La parte demandante solicita que se decrete el divorcio.

De la documentación aportada se desprende que M y J contrajeron matrimonio en Tauste, el 31 de julio de 1993.

De este matrimonio nacieron dos hijos, D, el 1995, y Esther, el 2000.

Cumpliéndose los requisitos establecidos en los artículos 86 y 81 del Código Civil, procede decretar del divorcio de

Segundo.- De lo expuesto en la vista se desprende que existe conformidad de ambos litigantes en que sea el padre el que se quede con la custodia de la hija menor, E, ya que, de hecho, está viviendo con él y, además, ésta es la voluntad de la menor, que expresó de forma clara el día de la vista.

Teniendo en cuenta el acuerdo de las partes, la conformidad del Ministerio Fiscal, la voluntad de la menor, y que ello no sólo no resulta perjudicial para la menor sino que aparece como la solución más beneficiosa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 79 y 80 del Código de Derecho Foral, se atribuye la custodia de la hija menor al padre, siendo compartida la autoridad familiar, al no haber motivo para privar de ella a ninguno de los progenitores.

Tercero.- El artículo 80.1 del Código de Derecho Foral establece, entre otras cosas, que en los casos de custodia individual, se fijará un régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro progenitor que le garantice el ejercicio de las funciones propias de la autoridad familiar.

En el caso que nos ocupa, la madre pide un régimen de visitas, y el padre también lo propuso en su contestación a la demanda. En la vista apenas se habló del tema. La menor manifestó que no quería un régimen de visitas con su madre y que, en su caso, querría que hubiera alguien presente.

El informe psicológico recomienda un régimen de visitas abierto y flexible de la hija con la madre, en función de la opinión de la menor y de sus necesidades afectivas y educativas. La trabajadora social entiende que debe establecerse un régimen de visitas para que madre e hija puedan relacionarse sin influencias exteriores.

El artículo 80.2c) del CDFA exige que se tenga especial consideración a la opinión de los mayores de catorce años, como es el caso de E.

Visto lo manifestado por la menor, lo expuesto en los informes y el resto de circunstancias de esta familia, entiendo que debe respetarse la opinión de la menor, y su

voluntad, dada su edad, y la convicción con que se expresó en la exploración que se efectuó antes de la vista.

Sin embargo, debe valorarse también la posibilidad de que su voluntad esté influida excesivamente por la familia paterna, como se indica en el dictamen de la trabajadora social.

Asimismo, y sin perjuicio de las motivaciones que hayan podido mover a la menor a su actual estado de voluntad, se debe tratar siempre, salvo casos extraordinarios, de mantener la relación entre hijos y progenitores. En el momento actual es posible que la menor no tenga ganas de ver a su madre, pero conforme pase el tiempo, podría darse la situación de que quiera retomar una relación que, quizá, ya no pueda recuperarse. La adopción de medidas para tratar de promover que esa relación no se rompa es conveniente en este momento ya que si, en el futuro, E no tiene interés en mantener la relación con su madre, podrá actuar como estime conveniente, pero será mucho más difícil actuar a la inversa si la relación ya se ha roto de forma definitiva.

En cualquier caso, dada la edad de E, es claro que las visitas acabarán desarrollándose, en gran medida, según su voluntad, de modo que la madre deberá hacer un esfuerzo para suscitar en su hija el interés en que el régimen que va a establecerse se cumpla.

Se tiene en cuenta también que, pese a los hechos ocurridos en el seno de esta familia, incluso el hijo mayor de edad (según E su madre lo echó de casa) ha ido a vivir con la madre, lo que de alguna manera indica que es posible retomar, al menos en alguna medida, la relación.

Se fija, con base en todo lo anterior, un régimen de visitas consistente en un sábado al mes, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, sin pernocta. Los meses pares el padre llevará a su hija a la localidad de Luceni y la irá a recoger, mientras que los meses impares será la madre la que tendrá que organizarse para ir a buscar y devolver a su hija a su domicilio.

Asimismo, la menor podrá comunicar con su madre y estar más tiempo también con ella si así lo desea.

En cuanto a la necesidad de que haya una persona presente, dado que la madre vive en casa de los abuelos paternos, y que con ella convive el hijo mayor de edad, entiendo que no hace falta establecer esta cautela expresamente.

Cuarto.- El artículo 81.2 del Código de Derecho Foral establece que cuando corresponda a uno de los progenitores de forma individual la custodia de los hijos, se le atribuirá el uso de la vivienda familiar, salvo que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor.

En el caso que nos ocupa hay acuerdo en que el uso se atribuya al padre, al que corresponde la custodia de la hija. Al parecer, la vivienda pertenecía a la madre del

demandado, ya fallecida, por lo que debe estar integrada en la herencia correspondiente. Por ello, esta atribución de uso se hace sin perjuicio de los derechos que correspondan a sus legítimos titulares.

Quinto.- El artículo 82 del CDFA prevé que tras la ruptura de la convivencia de los padres, ambos contribuirán proporcionalmente con sus recursos económicos a satisfacer los gastos de asistencia de los hijos a su cargo.

En el caso que nos ocupa, ambas partes están de acuerdo en que cada uno de ellos se haga cargo del hijo con quien convive: el padre se hará cargo de la hija menor, y la madre del hijo mayor de edad pero dependiente económicamente. De ese modo, ninguno de los dos debe abonar cantidad alguna al otro en concepto de alimentos o asistencia a los hijos.

Considero que es razonable lo que se propone, por lo que se accede a esta solución.

Entiendo que no se puede ahora fijar una previsión para el caso de que las circunstancias cambien en el futuro. Por una parte, este cambio de circunstancias puede ser de diversos modos: que ambos hijos pasen a estar con la madre, o con el padre, o que el hijo mayor de edad pase a ser independiente económicamente, o que la hija alcance la mayor edad y sea independiente económicamente, o combinaciones de cualquiera de estas situaciones.

En cualquiera de estos casos las partes deberían fijar la cantidad que uno de los progenitores debe abonar al otro por alimentos para los hijos a su cargo partiendo de los ingresos de cada uno de ellos, y teniendo en cuenta las tablas orientativas del CGPJ. Si no lograran ponerse de acuerdo, no quedaría sino pedir la modificación de las medidas.

Aunque no se hizo ninguna referencia a los gastos extraordinarios, habrá que estar a lo que prevé el artículo 82.4: los que sean necesarios serán sufragados en proporción a los recursos de los progenitores. Teniendo en cuenta esta regla, se abonarán el 80% por parte del padre y el 20% por parte de la madre. No se considerarán gastos extraordinarios los propios del principio de curso.

Sexto.- La demandante pide una asignación compensatoria de 400 euros mensuales (en el cuerpo de la demanda se indica que por cinco años, aunque no así en el suplico). Alega que se ha dedicado a las tareas del hogar durante el matrimonio, tiene 44 años, no trabaja ni tiene ingresos y tiene gran dificultad para acceder al mercado laboral.

El demandado se opone alegando que no se da el presupuesto para acordar esta medida, que es que la ruptura le suponga un empeoramiento en su situación anterior a la convivencia, ya que la demandante no trabajaba antes de contraer matrimonio, por lo que su situación es igual y no empeora, e incluso es mejor como consecuencia de la liquidación del régimen económico matrimonial.

La argumentación de la parte demandada debe ser rechazada, a la vista de lo que expone el TSJA en su Sentencia de 4 de enero de 2013, con cita de otras anteriores (13 de julio de 2012 y 30 de diciembre de 2011). Aunque la redacción del artículo 83 del CDFA

parece contraponerse a la definición de pensión compensatoria recogida en el artículo 97 del Código Civil, su naturaleza y finalidad no son distintas. Se trata, en definitiva, de compensar la desigualdad económica que produce la ruptura para uno de los progenitores en relación con el otro. No hay que comparar, por lo tanto, la situación en que quedan los litigantes con la que tenían antes de la convivencia, para ver si existe o no empeoramiento, sino con la situación que tenían en esa convivencia (pese a la literalidad, probablemente defectuosa, del precepto).

En el caso que nos ocupa, considero que resulta claro el desequilibrio económico que la ruptura supone para la demandante, en relación con el demandado, ya que este último va a mantener íntegro el sueldo que tenía antes de la ruptura, mientras que la demandada carece de ingresos. El empeoramiento también es claro, puesto que la demandante, mientras hubo convivencia, contaba con los ingresos que entonces eran de la familia.

Se da, por lo tanto, el presupuesto para fijar una asignación compensatoria.

Por lo que se refiere a la cuantificación, habrá que examinar los criterios que establece el artículo 83.2.

En primer lugar, los recursos económicos de los progenitores. El padre, además de su sueldo de unos 1.500 euros brutos en catorce pagas, es titular o cotitular de diversos inmuebles, y desarrolla una pequeña actividad agrícola. La demandante carece de ingreso alguno. Ambos son cotitulares, al menos, de dos fincas de regadío, cuyas escrituras están incorporadas a las actuaciones.

La solicitante tiene, en la actualidad, 46 años. No trabaja, y según sus manifestaciones, tiene cualificación laboral de auxiliar de peluquería, de cocina y auxiliar técnico de geriatría.

La duración del matrimonio ha sido desde julio de 1993 hasta abril de 2014, momento en que se produce la ruptura de la convivencia, es decir, casi veintiún años.

El hijo mayor cumplirá este verano veintiún años, y la hija menor va a cumplir dieciséis años el mes que viene.

El uso del domicilio familiar se atribuye al padre y a la hija. Como se ha indicado, sin perjuicio de los derechos de sus titulares, ya que el piso pertenecía a la madre del demandado, de modo que su derecho hereditario está limitado por el derecho de los demás coherederos. La demandante vive en el domicilio de sus padres.

En cuanto a las funciones desempeñadas por los padres, de las declaraciones de los litigantes y de los informes psicosociales se desprende que el marido fue el que trabajó para obtener ingresos para la familia, mientras que la madre se dedicó a las tareas del hogar, si bien el demandado manifiesta que en los últimos años apenas se encargaba de ellas.

En cualquier caso entiendo que se da el supuesto característico para la fijación de una asignación compensatoria, ya que la esposa descuida totalmente su actividad laboral y formación y dedica su tiempo a trabajar para la familia, sin obtener cualificación o experiencia profesional, sin cotizar y alejándose de la posibilidad de acceder al mercado laboral. Tanto la actividad del marido como la de la esposa son importantes para la familia. Pero mientras el marido se ha mantenido en el mercado laboral y, en la actualidad, es capaz de obtener ingresos para atender sus necesidades, no ocurre lo mismo con la esposa. En la actualidad, el marido gana unos 1.500 euros brutos en catorce pagas, más las cantidades residuales provenientes de la actividad agrícola, para vivir él y su hija, mientras que la demandante no gana nada, y debe vivir ella y su hijo. Antes todos vivían con las cantidades que ingresaba el esposo.

Por lo tanto, debe fijarse una asignación compensatoria. En caso contrario, el esposo mejoraría económicamente, ya que seguiría cobrando lo mismo pero, en lugar de mantener a cuatro personas con su sueldo, mantendría a dos. Y la esposa empeoraría, ya que antes subsistía con el sueldo que se obtenía a favor de la familia, y ahora debe subsistir y mantener a su hijo sin ningún ingreso.

A la vista de lo expuesto, entiendo que es procedente lo que se pide: una asignación compensatoria de 400 euro mensuales durante cinco años. Esta cantidad palia, al menos en parte, el desequilibrio que se produce, y facilita la subsistencia de la demandante, aun sin llegar a equipararla al demandado, que seguirá disponiendo de mayores ingresos. El plazo de cinco años solicitado me parece adecuado teniendo en cuenta la edad de la demandante, el tiempo que lleva sin trabajar y las actuales circunstancias del mercado laboral.

Séptimo.- En relación con la rendición de cuentas solicitada, aunque parece que el Código Civil la prevé como provisional (artículo 103.4ª), entiendo que no hay inconveniente en acordarla en este momento. Estrictamente, este precepto sólo indica que esta medida se adoptará “admitida la demanda”. Además, esta medida tiene su sentido hasta el momento de la liquidación del régimen económico matrimonial, que en este caso aún no se ha producido.

De la documentación aportada por la demandante se desprende que los litigantes adquirieron dos fincas rústicas de regadío, y es el demandado el que las gestiona.

Considero que debe obligársele a que rinda cuentas de los beneficios que puedan dar las mismas (para lo cuál deberá tenerse en cuenta los gastos, las subvenciones, los ingresos e incluso la valoración del trabajo personal, etc.).

En cuanto al reparto de estas ganancias, entiendo que es una cuestión de la liquidación del régimen económico matrimonial. El precepto mencionado sólo prevé que se deban rendir cuentas, no hacer liquidaciones parciales anticipadas. Teniendo en cuenta que es el demandado el que viene explotando estos inmuebles, y que no parece que la demandante tenga interés en ello, entiendo que lo lógico es que sea el demandado el que continúe con la gestión de estos inmuebles. Deberá rendir las correspondientes cuentas y

las ganancias obtenidas se incluirán, en su caso, en la liquidación del régimen económico matrimonial."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 1 de marzo de 2016. Divorcio de cónyuges extranjeros con hija menor. Derecho aplicable. Subsidiariedad normativa aragonesa**

"PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la demanda de divorcio del matrimonio contraído por actora y demandado, de nacionalidad búlgara, al ser de aplicación la Ley nacional común de los cónyuges el momento de presentación de la demanda (art 107 Código Civil), y no haberse probado la Ley sustantiva aplicable -la búlgara-.

Recurre la demandante, que solicita se revoque la sentencia dictada y se acojan sus pedimentos en su integridad, alegando que la Juzgadora podía ex art 281.2 LEC haber verificado si la documentación aportada -fotocopia no legalizada de una traducción al castellano de los arts 104 a 108 del Código Civil búlgaro, legalizada y autenticada por la Embajada de Bulgaria en España- eran verdadera y aplicable.

SEGUNDO.- El art. 22.3º de la LOPJ atribuye competencia a los Tribunales españoles en materia de nulidad matrimonial, separación y divorcio cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España. El art. 107.2 del Código Civil establece que la separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda, que en este caso sería la legislación búlgara por ser la común a los litigantes, al que además remite el art. 9.2 del mismo Código. Y el art 281.2 de la LEC que "el Derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia", añadiendo que el Tribunal podrá valerse "de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación".

La parte demandante solo aportó la fotocopia de unos artículos, que no son todos sobre el tema objeto de recurso, pues a titulo de muestra nada se dice en ellos de la pensión de alimentos, y la parte demandada permanece en situación de rebeldía voluntaria, no habiendo contestado a la demanda pese a haber sido emplazado, con lo que el juzgador que ha conocido del asunto en primera instancia, y ahora esta Audiencia, no dispone del contenido, vigencia e interpretación del derecho extranjero susceptible de aplicación.

El hecho de que no pueda entenderse debidamente probado el derecho búlgaro no ha de implicar, sin embargo, de modo automático, la desestimación de la pretensión, puesto que el TS tiene reiteradamente señalado que en el supuesto de que el Tribunal no se considere debidamente instruido sobre el contenido del derecho extranjero aplicable, procederá a resolver la cuestión debatida conforme a las normas de nuestro propio ordenamiento jurídico. En este sentido la STS 5-3-2002, que cita las de 7-9-1990, 11-5-1989, 25-1-1999 y 13-12-2000, declarando la STS 10-6-2005 que "Esta Sala, en ejercicio de la función complementaria del ordenamiento jurídico que le atribuye el artículo 1.6 del Código Civil ha declarado que, cuando el contenido y vigencia del derecho extranjero no han resultado probados por las partes ni averiguados por el Tribunal en la medida que sería precisa para resolver el conflicto de intereses planteado y la regla de conflicto no impone otra cosa, resulta aplicable la lex fori, como norma subsidiariamente competente

(sentencias de 11 de mayo de 1989, 7 de septiembre de 1990, 23 de marzo de 1994, 25 de enero de 1999, 5 de junio de 2000, 13 de diciembre de 2000, entre otras)", doctrina que -añade- la STS 155/2001, de 2 de julio, consideró más respetuosa con el contenido del art 24 CE que la solución consistente en la desestimación de la demanda-

TERCERO.- Actora y demandado contrajeron matrimonio el día 9-10-2009 en la localidad de Mramoren (Bulgaria), habiendo nacido con anterioridad -el 7-5-08- una hija.

La convivencia entre ambos se reveló imposible y, abandonada por el marido la vivienda familiar en Ejea de los Caballeros, la esposa presentó el 29-1-2015 demanda de divorcio. Por tanto, transcurridos más de tres meses desde la celebración del matrimonio y solicitado el divorcio por la esposa, procede declarar la disolución por divorcio del matrimonio contraído, ex art 86 y 81.2 C.C..

En cuanto a las medidas personales y económicas que deben regir la situación posterior al divorcio, las relativas a la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas a favor del cónyuge no custodio y pensión de alimentos deben señalarse, en los términos que se dirán en la parte dispositiva, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 79 a 82 del Código de Derecho Civil de Aragón: la guarda de la hija a favor de la madre, con autoridad familiar compartida con el demandado, que tendrá con su hija el régimen de visitas y comunicaciones que se dirán; la pensión por alimentos de la hija a cargo del padre, en cuantía de 250 € mensuales, cantidad que, desconocida por completo la capacidad y situación económica del obligado, se considera prudencialmente adecuada; y el uso de la vivienda familiar atribuido a la madre e hija bajo su guarda hasta la mayor edad de esta última. "

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 24 de febrero de 2016. Régimen de visitas con abuela. Derecho de los ascendientes y voluntad de la menor. Mediación**

"I.- Es objeto de esta litis, tanto en la primera como en esta segunda instancia del régimen de visitas y comunicaciones de la hija menor de la demandada, , de doce años de edad, con su abuela paterna, dada la inexistente, relación entre ambas, desde el fallecimiento del padre, y la conflictiva relación existente entre aquélla y su madre. La sentencia recurrida, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso, y en concreto del resultado de la exploración de la menor y de el informe emitido por el equipo psicosocial adscrito el Instituto de Medicina Legal de Aragon, conviene, de conformidad con el Ministerio Fiscal la inconveniencia de establecer un régimen de visitas a favor de la demandante. Frente a dicha resolución se alza la representación de la parte actora que denuncia error de la juzgadora de instancia en la apreciación de las pruebas. Entiende en síntesis la parte recurrente que el derecho de visita de los abuelos sobre los nietos constituye un presupuesto de carácter legal que no puede ser derogado.

II.- El Art. 60 del Código de Derecho Foral de Aragón, recogiendo las previsiones de la Ley de Cortes de Aragón 2/2010, de 26 de mayo de igualdad en las relaciones familiares atribuye al Juez, de oficio o a instancia de parte, la función de garantizar la continuidad y la efectividad del mantenimiento de los vínculos de los hijos menores con cada uno de sus progenitores, así como de la relación con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas que solo puede suspender, modificar o denegar la relación si el interés del menor lo requiere, por lo que la resolución judicial debe tratar de conjugar ese derecho de los menores y de sus abuelos a relacionarse entre sí, con el superior interés del mismo. Por otra parte no puede soslayarse que, aún existiendo un derecho por parte de los abuelos a relacionarse con sus nietos, este derecho está supeditado al beneficio e interés de los hijos menores de edad en línea igualmente con lo proclamado por el Art. 39 de la Constitución Española, la Ley Organica 1/1996 de 15 de Enero , sobre protección jurídica del menor; la Convención de los Derechos del Niño de 1989, la Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo, las Sentencias del T.C. 114/1992 , 143/1990 y 141/2000 entre otras y Ley Aragonesa de a Adolescencia e Infancia..

III.- La función del juzgador en el presente litigio debe tratar de conjugar, por una parte, el indiscutible derecho de los abuelos para relacionarse con sus nietos y de otra parte el interés preferente del menor. Así las cosas la realidad del caso debatido no permite acceder a la pretensión de la demanda de establecer "manu militari" un derecho de visita en favor de la abuela, no sólo en contra de la voluntad de la nieta, quien manifiesta un rechazo total hacia la misma, con ideaciones suicidas, debiendo recordarse en este punto que, como señala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 24 de Julio de 2012, la voluntad de los menores resulta relevante a la hora de decidir sobre su forma de vida futura; si no incluso en contra de las recomendaciones efectuadas en el informe pericial emitido por el equipo psicosocial adscrito al Instituto de Medicina Legal de Aragón, que recomiendan abordar primeramente un tratamiento psicológico de la menor, antes de intentar iniciar un régimen de de visitas controlado en el punto de encuentro

familiar. Por ello resulta acertada, a juicio de la Sala, la resolución adoptada por la juzgadora “a quo”, remitiendo las partes a un proceso de mediación, con la intervención de la hija menor, al objeto de que puede intentarse superar animadversión hacia la familia paterna, y si el mismo se completa con éxito, retomar progresivamente el derecho de visitas, con autorización judicial, comenzando en el punto de encuentro familiar. En consecuencia procede desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución recurrida.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 8 de marzo de 2016. Modificación de medidas. Custodia compartida. Favor filii. Cambio de lugar de residencia. Participación de ambos progenitores en decisiones que afecten a los hijos. Régimen de visitas y comunicaciones**

"PRIMERO.- Actora y demandado contrajeron matrimonio en Getxo (Vizcaya) el 12 de julio de 2008. De esta unión nacieron dos hijos, I 2010, y H 2012.

El matrimonio quedó disuelto por sentencia de 9 de abril de 2013 del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Zaragoza (Procedimiento de mutuo acuerdo 107/2013), que aprobó el Pacto de Relaciones Familiares suscrito por los cónyuges el 8 de febrero de 2013.

En lo que afecta a este procedimiento, respecto al domicilio, custodia y régimen de visitas, acordaron lo siguiente:

"ESTIPULACIONES

I.- DOMICILIO CONYUGAL.

Ambos cónyuges se reconocen, mutua y recíprocamente la más completa libertad para fijar sus respectivos domicilios y regirlos con absoluta independencia, sin más obligación que comunicarse el mismo al otro cónyuge de forma fehaciente.

El domicilio conyugal, se encuentra en Zaragoza, calle C. O. G. , número 7, 2º A y el uso del mismo se le atribuye a la esposa y los hijos que conviven con ella por un plazo de cuatro años a contar desde la fecha de la sentencia.

La señora O. abonará todos los gastos del uso de la vivienda, comunidad de propietarios, luz, agua, gas, etc. Ambos cónyuges como propietarios que son de la vivienda, abonarán por mitad, el Impuesto de Bienes Inmuebles, el seguro del hogar, las derramas extraordinarias y el seguro de la caldera.

II.- HIJOS DEL MATRIMONIO

Los hijos menores habidos en el matrimonio quedarán bajo la guardia y custodia de la madre siendo la autoridad familiar compartida por ambos progenitores.

Ambos progenitores acuerdan que en el plazo de cuatro años a contar desde la fecha de la sentencia, la guarda y custodia de los menores será compartida y en su momento se revisará el régimen de estancias y vacaciones que sea mejor para sus hijos.

III.- RÉGIMEN DE VISITAS

Los esposos acuerdan, en beneficio de los hijos, que su padre pueda comunicar con ellos y tenerlos en su compañía sin más limite que no interferir en los horarios

escolares y de descanso de los hijos y con carácter mínimo, el régimen de visitas será el siguiente:

Hasta que el hijo menor, H, cuente con 18 meses de edad, el padre podrá tener a su hijo Iñigo los fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio o guardería hasta el domingo que lo recogerá la madre en el domicilio del padre.

Durante este periodo, a su hijo H lo tendrá los fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio de su hermano I hasta el 20 horas, el sábado desde las 12 horas de la mañana hasta las 20 horas y el domingo desde las 12 horas de la mañana hasta las 20 horas siendo la madre la que lo recogerá en el domicilio del padre.

Entre semana el padre también podrá tener en su compañía a sus hijos tarde del lunes desde la salida del colegio o guardería hasta las 20,30 horas que lo devolverá en el domicilio de la madre, esta semana será la semana que al padre no haya disfrutado de sus hijos el fin de semana anterior. La semana que el padre haya disfrutado a sus hijos el fin de semana anterior, la tarde de visitas será el jueves desde la salida del colegio o guardería hasta las 20.30 horas que lo devolverá en el domicilio de la madre.

Cuando el hijo menor, H, cumpla 18 meses de edad, el padre podrá tener en su cumpla a sus hijos desde el viernes a las salida del colegio hasta el lunes por la mañana que lo devolverá en el colegio o guardería.

Asimismo, entre semana podrá tener a sus hijos la tarde del lunes desde la salida del colegio o guardería hasta el día siguiente que los devolverá en el colegio o guardería, esta semana será la semana que el padre no haya disfrutado de sus hijos el fin de semana anterior. La semana que el padre haya disfrutado de sus hijos el fin de semana anterior, el día de visitas será desde el jueves a la salida del colegio guardería hasta el viernes por la mañana que los devolverá en el colegio o guardería a la que asistan los menores.

Los puentes del calendario escolar se añadirán al fin de semana que corresponda a cada progenitor.

Cualquier cambio en el régimen de visitas establecido de fines de semana deberá comunicarse por cualquiera de los progenitores con 48 horas de antelación.

El cumpleaños de cada uno de los menores debiera ser compartido por cada uno de los progenitores al 50% con independencia del régimen de visitas establecido.

Los menores compartirán el día de cumpleaños de cada uno de los padres con el progenitor en cuestión, con independencia del régimen de visitas establecido.

En cuanto al día de la madre y del padre compartirán íntegramente ese día con cada uno de los padres en cuestión, con independencia del régimen de visitas establecido."

En fecha 18 de diciembre de 2013 la Sra. O. presentó demanda de modificación de medidas por sus nuevas circunstancias, concretadas fundamentalmente en su deseo de trasladarse a su localidad de origen en Portugalete (Vizcaya) donde habría encontrado una posibilidad de trabajo (según comunicación al Sr. R. en noviembre de 2013). Solicitaba por ello la modificación del régimen de visitas de modo que el padre pasaría con los hijos los fines de semana alternos, uno de ellos en el lugar de residencia de los menores y otro en el de la residencia del padre, y de la misma forma los dos días entre semana siempre que el padre pudiera trasladarse al lugar de residencia de los menores. Solicitaba también una contribución del padre a los alimentos de los menores de 1.200 euros mensuales y la extinción del uso de la vivienda familiar que tenía atribuido junto con los hijos.

El demandado negaba en su escrito de contestación la posibilidad de modificación de medidas porque la solicitud obedecía únicamente a la voluntad y conveniencia de la actora, habiéndose visto obligado el demandado a solicitar medidas cautelares al Juzgado que, tras comparecencia de las partes y del Ministerio Fiscal, terminaron mediante auto de 5 de diciembre de 2013 (documento 22 de la demanda), que decretó el sobreseimiento del expediente porque, según manifestación de la madre, su domicilio no se modificaría hasta que no hubiera acuerdo o resolución judicial, provisional o definitiva, en primera instancia.

La sentencia de primera instancia considera que el régimen de visitas que se postula en la demanda no puede entenderse como adecuado para las circunstancias concurrentes pues implicaría la práctica imposibilidad de la efectiva ejecución del régimen de visitas propuesto, sobre todo respecto a los días entre semana, al exigir al padre el traslado a dicho localidad distante más de trescientos kilómetros desde su residencia en Zaragoza. En el fundamento segundo cita la sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 2014 (sentencia 18/2014, recurso 3/2014) en la que se expone la doctrina sobre los requisitos para que la modificación de medidas pueda ser adoptada *"cuando concurran causas o circunstancias relevantes"* (artículo 79.5 del CDFA), en términos menos exigentes que los del artículo 91 del Código civil (*"cuando se alteren sustancialmente las circunstancias"*). Recoge los requisitos de la alteración de circunstancias para que pueda concederse la modificación, expuestos en la citada sentencia 18/2014:

"a) Que se haya producido, con posterioridad a dictarse la resolución judicial que la sancionó, un cambio en la situación fáctica que determinó la medida que se intenta modificar.

b) Que dicha modificación o alteración, sea sustancial, esto es que afecte al núcleo de la medida, y no a circunstancias meramente accesorias o periféricas. Que haga suponer que de haber existido al momento del divorcio se habrían adoptado medidas distintas.

c) Que tal cambio sea estable o duradero, con carácter de permanencia, y no meramente ocasional o coyuntural, o esporádica.

d) Que la repetida alteración sea imprevista, o imprevisible y, por ende, ajena a la voluntad de quien entabla la acción de modificación, por lo que no puede ser buscado de propósito, por quien interesa la modificación para obtener unas medidas que le resulten más beneficiosas."

Se recogen también en la sentencia del Juzgado otras dictadas por distintas Audiencias Provinciales, entre otras la de Zaragoza de 29 de julio de 2014, que requieren que la modificación de circunstancias sea permanente o duradera y no aleatoria o coyuntural, y *"que no sea imputable a la propia voluntad de quien solicita la modificación, ni preconstituída"*. En el mismo sentido se cita la sentencia de 27 de junio de 2014 de la A.P. de Pontevedra, por su similitud con el caso que se resuelve.

En el fundamento tercero recuerda la sentencia del Juzgado el contenido del artículo 75.2 del CDFA sobre la finalidad de promover, en los casos de ruptura, unas relaciones continuadas de los padres con sus hijos, y el del artículo 76.3 sobre los derechos de los hijos menores a un contacto directo con sus padres de modo regular, y el correlativo de los padres respecto a sus hijos menores, y, finalmente, el artículo 76.2 sobre la adopción de la medidas relativas a los hijos menores en atención al beneficio e interés de los mismos. Se pone de relieve que la modificación solicitada pretende la del régimen de visitas del padre acordada en el pacto de relaciones familiares otorgado el 8 de febrero de 2013, destacando que no se pide de forma expresa que se autorice a la demandante a trasladarse con sus hijos a más de 300 kms. de Zaragoza –*"por más que ello esté presente en toda la resultante fáctica del escrito rector del procedimiento"*-, por lo que tal posibilidad es la cuestión principal del litigio.

Considera la sentencia, en cuanto a la necesidad del traslado de la madre por motivos laborales, que la modificación de medidas no debe ser imputable a la propia voluntad de quien la solicita y que está acreditado que tenía trabajo en Zaragoza, adecuadamente remunerado, y que el traslado afectaría a los menores y a su derecho al contacto directo con los padres, cuestionando gravemente el derecho del padre a la participación responsable en la crianza y educación de sus hijos (artículo 75.2) y a su derecho a la igualdad en las relaciones familiares (artículo 76.3). Respecto a la modificación del régimen de visitas, afirma que el pacto de relaciones familiares fue suscrito en fecha tan cercana que impide considerar el mero paso del tiempo como un factor que en este caso pueda entenderse suficiente para contemplar la modificación que se insta, además de que la necesidad de traslado por motivos laborales -los familiares le parecen evidentes- no aparece acreditada pues no consta una oferta firme de trabajo. Por todo ello desestima la demanda.

SEGUNDO.- La sentencia de apelación parte en su segundo fundamento de la siguiente consideración sobre el hecho del traslado de la actora y sus hijos a Portugalete:

*"**SEGUNDO**.- Del conjunto de la demanda, en la que la cuestión no se plantea expresamente, pero trasluce y en todo caso se puso de manifiesto en los momentos iniciales del juicio, se desprende, en lo que respecta a visitas y comunicaciones, que la lectura de los pedimentos del suplico ha de hacerse a partir de la vuelta de la Sra. O. al que fue su domicilio en Portugalete –el de sus padres- y de la obtención en diciembre de 2012 de un contrato de trabajo en Zamudio como Ingeniera –la Sra. O. lo había hecho hasta entonces en Zaragoza-, tras el cual los dos hijos del matrimonio se desplazaron con ella, de modo que, como se apunta en la resolución recurrida, lo que se somete a decisión es la posibilidad del traslado de la actora a Portugalete, con modificación del régimen de visitas a favor del padre, pero mantenimiento de la guarda y custodia que en el Pacto de Relaciones Familiares suscrito el 8-2-13 se le atribuyó sobre sus dos hijos."*

La sentencia rechaza el razonamiento de la actora de que lo pactado en marzo de 2013, sobre la libertad de fijar los respectivos domicilios, le permitiera establecer libremente el suyo en Portugalete, porque en el referido pacto de relaciones familiares las partes dejaron diferida a un plazo de cuatro años la custodia compartida de los hijos, y su estipulación sobre la libertad de fijación del domicilio no iría más allá de fijarlo en Zaragoza o cercanías, no alcanzando al traslado de domicilio a provincia distinta.

Y, frente al alegado artículo 19 de la Constitución sobre la libertad de residencia -dice la sentencia-, debe primar el interés de los menores pues el traslado *"puede comportar un cambio radical en su entorno social y parental, con posibles problemas de adaptación, caso en el que, de afectar el cambio de residencia al interés de los menores, merecedores de una tutela preferente, ello podría conllevar un cambio de la guarda y custodia"*.

Y continúa diciendo:

"En el caso, actora y demandado contrajeron matrimonio el 12-7-08, tuvieron su primer hijo, I 2010, se separaron de hecho, cesando la convivencia, en noviembre de 2012, y al mes, , nació H, el segundo hijo, firmando el 5-2-13 el Pacto de Relaciones Familiares aprobado por la sentencia de divorcio 8-2-2013. Desde entonces ambos hijos permanecieron bajo la guarda y custodia de la madre, con el régimen de visitas que a favor del padre se señaló en el Pacto de Relaciones Familiares. La vuelta de la Sra. O. a Portugalete se produjo desde luego en ejercicio del derecho a una libertad de residencia que le reconoce el art. 19 de la C.E., sin que conste un uso fraudulento de ese derecho, ni el cambio aparezca como caprichoso, injustificado o perjudicial para los hijos, sino consecuencia y derivación de unas circunstancias razonables, pues razonable es que, habiendo dejado Bilbao y su entorno familiar por razón de matrimonio, la Sra. O. , tan prontamente sobrevenida la ruptura, con anterioridad incluso al nacimiento del segundo hijo, quisiese volver a su lugar de origen, en el que cuenta con un arraigo personal y familiar y puede conciliar con ayuda de su entorno propio su vida laboral y sus obligaciones como madre, todo ello sin que el traslado de los niños a Portugalete, dada su edad, haya supuesto tampoco riesgo en la adaptación

de su vida en otra ciudad, ni desaparición de la relación con el padre y entorno paterno, que podrá mantenerse a través del régimen de visitas establecido.

En consecuencia, concurrente a juicio del Tribunal una causa seria para el cambio, exento este de todo matiz caprichoso o perjudicial para los hijos, la Sala, en desacuerdo con las razones que en la instancia llevaron a la desestimación de la demanda, considera que el traslado de madre e hijos a Portugalete, razonable, justifica la nueva ordenación de las visitas que la demandante propone para los periodos lectivos, sin modificación del régimen de guarda y custodia estipulado en el Pacto de Relaciones Familiares."

En el fundamento tercero considera la sentencia que el traslado de la madre e hijos a Bilbao, con la consiguiente no utilización de la vivienda, ha de comportar la extinción del uso de la vivienda familiar que en su día se atribuyó a la esposa e hijos por tiempo de cuatro años. Por el contrario, desestima el aumento de las pensiones por no haberse producido un relevante cambio de circunstancias económicas y laborales del demandado.

En consecuencia, la sentencia estima parcialmente el recurso de apelación y modifica el régimen de visitas en el sentido interesado por la actora.

La parte apelada presentó escrito de aclaración por considerar que la sentencia había cometido el error de entender que había sido trasladada la residencia de los menores a Portugalete con su madre, lo que no había sucedido a pesar de que ella estuviera trabajando para una empresa de Zamudio. Aportaba certificados de los centros escolares de los menores en Zaragoza acreditativos de que ambos niños se encontraban matriculados en el curso 2014/2015, ya terminado, y para el curso 2015/2016. Considera que dicho error vicia la sentencia pues, de haberse establecido como premisa que los niños nunca han dejado de residir en Zaragoza, la conclusión hubiera sido necesariamente la de mantener dicha residencia pues ese es el hilo argumental de la resolución.

El auto de la Audiencia de 15 de julio de 2015 contesta la petición de aclaración diciendo en su único fundamento de derecho:

"UNICO.- El error denunciado, que es cierto, no determina el sentido del fallo, en cuanto a la legitimidad del traslado de doña Silvia a Bilbao, como es de ver en el FJ segundo, pero debe ser aclarado en el único sentido de que , los hijos no se desplazaron con su madre a Portugalete cuando esta lo hizo, sino que permanecen en Zaragoza, con la lógica y adecuada consecuencia de que las derivaciones que por la actora recurrente quisieran extraerse de lo resuelto, como podría ser el traslado de los menores a Portugalete y escolarización de los mismos en esa localidad, debe quedar determinado por lo que resuelva el TSJA al conocer del recurso de casación que en su caso interponga don I, y en tal sentido diferido a ese momento. Y en el mismo sentido la extinción del uso de la vivienda familiar, que ya se pidió "desde el momento en que el padre realice un régimen de visitas normalizado con el hijo menor, H".

En base a lo anterior la sentencia aclara la sentencia en el sentido de que:

"A) los dos hijos del matrimonio, , no se desplazaron con su madre a Bilbao, como se dice en el párrafo segundo del FJ segundo, sino que, pese al trabajo conseguido en diciembre de 2013 por doña Silvia en Zamudio (Vizcaya), han seguido viviendo en Zaragoza ininterrumpidamente bajo su custodia.

B) cualquier efecto consiguiente al traslado de doña Silvia a Portugalete (Vizcaya), como pueda ser el desplazamiento de los menores y escolarización de los mismos en esa localidad, debe quedar determinado por lo que resuelva el TSJA al conocer del recurso de casación que en su caso interponga don I, y en tal sentido diferido a ese momento.

C) lo mismo que la extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar en Zaragoza."

La parte apelante, a su vez, solicitó aclaración porque los menores "han residido en Portugalete con la madre, eso sí, salvo en los momentos en que el padre tenía establecido el régimen de visitas (que incluían días entre semana, y por tanto los menores tenían que desplazarse a Zaragoza entre semana, para que no se incumpliera el régimen de visitas)...". Solicitaba la aclaración "en el sentido de que los menores han estado en Zaragoza para el cumplimiento del régimen de visitas, residiendo el resto del tiempo con la madre en Portugalete y que, no estando ninguno de los dos en edad escolar, el pequeño ni siquiera de preescolar, se aclare qué se entiende por escolarización y en qué afecta a dos menores de 4 y dos años, es decir, que no se encuentran en edad escolar, así como que se aclare que el contenido del fallo de la sentencia en modo alguno queda modificado ni alterado por el auto de aclaración, en tanto no se dicte otra sentencia que lo modifique."

El auto de la Audiencia de 22 de julio de 2015 explica en su fundamento de derecho único que procede acoger la primera petición *"en el único sentido de recoger lo que es manifestación de la solicitante de la aclaración. La segunda no requiere aclaración ninguna, pues quien la solicita percibe sin duda lo que se dice y cuál es el problema, por encima de la vulgarización de la palabra, referida a dos niños de 4 y 2 años. Y en cuanto a la tercera petición, el auto dice lo que dice, y se mantiene, máxime cuando su alcance pierde fuerza si es que, como se dice en el escrito presentado, el centro de las visitas permanece localizado en Zaragoza, y se respeta"*.

Por ello, en la parte dispositiva acuerda haber lugar en parte a la aclaración *"en el único sentido de que, según se manifiesta en el escrito presentado, los menores no han seguido viviendo de forma ininterrumpida en Zaragoza, sino que han residido en Portugalete con la madre, salvo en los momentos en que el padre ha tenido establecido el régimen de visitas, en los que son desplazados a esta Ciudad desde Portugalete"*.

TERCERO.- La parte apelada interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación. El primero fue inadmitido mediante auto de 3 de diciembre de 2015, quedando admitido el de casación en sus tres motivos.

En sus respectivos escritos de oposición tanto el Ministerio Fiscal como la parte recurrida alegaron, en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso de casación, lo que debe ser resuelto en este momento dado que cabe alegar en los escritos de oposición (artículo 485 LEC) las causas de inadmisibilidad que no hayan sido ya rechazadas por el Tribunal.

Alega la representación de la Sra. O. que la parte recurrente afirmó la recurribilidad de la sentencia por haber sido dictada en asunto cuya cuantía era imposible de calcular ni siquiera de modo relativo (artículo 2.1 de la Ley 4/2005), olvidando –dice- que dicho apartado está regulando los procedimientos determinados por su cuantía, lo que no sucede en el presente caso en que el procedimiento de modificación de medidas no viene determinado por la cuantía sino por la materia, sin que haya de ser fijada la cuantía ni la misma ha de afectar al procedimiento.

Ha de recordarse a este respecto que la regulación del recurso de casación en la Ley aragonesa 4/2005 tuvo como finalidad expresa (párrafo tercero de su Preámbulo) la creación de jurisprudencia por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, lo que era dificultado por el escaso número de asuntos que accedían al recurso de casación, en gran medida por su escasa cuantía.

Razón por la que el tope inferior de la misma fue situado en 3.000 euros, permitiendo el acceso también en aquellos asuntos en los que resulte imposible de calcular ni siquiera de modo relativo. Se trataba en este último caso de evitar la restrictiva interpretación del Tribunal Supremo conforme a la cual quedaban excluidos del recurso de casación aquellos asuntos cuya cuantía hubiera quedado indeterminada (los del artículo 253.3 LEC en los que fuera imposible determinar su cuantía, siquiera de forma relativa, para remitirlos a la tramitación del juicio ordinario, pero excluidos del recurso de casación). Permitiendo el legislador aragonés, incluso, el acceso a la casación de los asuntos de cuantía inferior a 3.000 euros cuando el asunto presente interés casacional, que puede invocarse aunque la determinación del procedimiento se hubiese hecho en razón de la cuantía (artículo 2.3 de la Ley 4/2005), y no solo por razón de la materia. Por lo tanto, en nuestro recurso de casación pierde sentido que la determinación del procedimiento se haya hecho por razón de la cuantía o por razón de la materia.

La existencia de interés casacional ya no tendría relevancia si resulta admisible el recurso por ser de cuantía imposible de calcular siquiera de forma relativa. En todo caso, el artículo 3.3 considera que el interés casacional existe si se aplican normas civiles aragonesas con menos de cinco años de vigencia, como es el caso, siempre que no exista doctrina jurisprudencial relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

CUARTO.- El Ministerio Fiscal también alega como causa de inadmisibilidad que no indica la parte recurrente la norma sustantiva infringida, que debería ser el artículo 80.1, párrafo tercero, por tratarse de asunto sobre régimen de visitas y comunicación del

padre con los hijos, sino que fundamenta el primer motivo en el artículo 76.3.a) en relación con el artículo 80.2 (custodia compartida), el segundo en el artículo 76.5 en relación con la buena fe (artículo 7 Cc.), y el tercero en el artículo 76.3.b) en relación con el artículo 75.2 (igualdad de relaciones familiares).

Para fundamentar el recurso de casación en infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (artículo 477.1 LEC), en nuestro caso normas del Derecho civil aragonés (artículo 1 de la Ley aragonesa 4/2005), las sentencias recurribles habrán debido aplicar las mismas, de forma que el tribunal casacional pueda cumplir su función nomofiláctica de comprobar su correcta aplicación y conseguir la unificación en la interpretación de tales normas. Salvo en el caso de alegarse infracción por inaplicación de normas, en el que se señalará la no aplicada, o indebidamente aplicada.

En la sentencia recurrida de 30 de junio de 2015 dictada por la Sección Segunda de la Ilma. Audiencia de Zaragoza, el único precepto que se cita es el artículo 19 de la Constitución Española (derecho de los españoles a elegir libremente su residencia), que se reconoce a la apelante pero considerando que no resuelve la petición de la misma porque debe primar el interés de los menores, y centra la cuestión a resolver en *"la procedencia o improcedencia de pasar aquéllos* (los menores) *a residir en otro lugar, lo que puede comportar un cambio radical en sus entornos social y parental, con posibles problemas de adaptación, caso en el que, de afectar el cambio de residencia al interés de los menores, merecedores de una tutela preferente, ello podría conllevar un cambio de la guarda y custodia"*. Así pues, para la sentencia el problema va más allá del régimen de visitas por la trascendencia del cambio de residencia de los menores que puede modificar el régimen de guarda y custodia, para lo que debe primar su interés.

Al tribunal de apelación corresponde un nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante el de primera instancia para, en su caso, la revocación de la resolución recaída con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas en la demanda (artículo 456 LEC), y la sentencia que dicte deberá pronunciarse sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación (artículo 465.5 LEC).

Los preceptos legales que cita el recurso de apelación interpuesto por la representación de la madre son: Específicamente el artículo 19 CE, globalmente la Sección 3ª del Capítulo II del Título II del CDFA (artículos 75 a 84), los artículos 63, 64 y 65 del CDFA sobre el deber de crianza y autoridad familiar, y los artículos 75.2 y 76.3 por referencia a la cita de los mismos en la sentencia de primera instancia. Se reseña también en el escrito de recurso la sentencia de 7 de marzo de 2007, nº 113/2007, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sobre visitas, en la que se afirma la necesidad de que las medidas tuitivas relativas a los hijos deberán ser resueltas por el juez aun cuando las partes no se las hubieran solicitado, por tratarse de elementos de *ius cogens* derivados de la especial naturaleza del derecho de familia. También se argumentaba en el recurso de apelación, sin cita de preceptos legales, sobre el pacto de relaciones familiares suscrito entre los cónyuges y su posible modificación.

El Ministerio Fiscal echa en falta en el escrito del recurso de casación la cita del artículo 80.1, párrafo tercero, del CDFA, porque la sentencia recurrida resuelve sobre un régimen de visitas y comunicación del padre con los hijos. Se puede constatar que dicho precepto no es citado ni en las sentencias de primera instancia y de apelación, ni en los escritos de demanda y contestación, ni en los de interposición del recurso de apelación ni en el de oposición al anterior. Sin duda, su cita en el recurso de casación podría ser pertinente, pero exigiría construir el recurso sobre la interpretación que debiera hacerse de un precepto que a lo largo de todo el proceso no ha sido específicamente citado por nadie.

Los motivos del recurso de casación se fundan en normas citadas específicamente por la sentencia de primera instancia, con base en las cuales fue desestimada la modificación del régimen de visitas y comunicación acordado en el pacto de relaciones familiares, sin que en la sentencia de apelación la aplicación de tales normas haya sido cuestionada. Por otra parte, el recurrente en casación impugna lo resuelto por la Audiencia no solo en cuanto al concreto régimen de visitas sino al más amplio del régimen de comunicación de los padres con los hijos, estableciendo una concreta relación del mismo con el régimen de custodia compartida preferente según el artículo 80.2 CDFA (motivo primero), en cuanto pudiera resultar afectado al así previsto en la estipulación II del pacto de relaciones familiares a partir de del 9 de abril de 2017 (cuatro años desde la fecha de la sentencia que lo aprobó).

En definitiva, será al resolver los motivos del recurso de casación cuando pueda comprobarse si los preceptos señalados en los mismos permiten, en su caso, su estimación, pero en el trámite de resolver sobre su admisibilidad deben ser aceptados como pertinentes para fundar el recurso de casación interpuesto.

QUINTO.- El primer motivo del recurso de casación denuncia infracción del artículo 76.3.a), en relación con el artículo 80.2 del CDFA (FAVOR FILII).

El presupuesto del motivo es que la sentencia recurrida parte del error de que los niños llevan (en julio de 2015) casi dos años en Portugalete y de que tal situación no les ha perjudicado, pero –afirma el recurrente- la premisa es errónea pues los niños no han dejado de vivir en Zaragoza desde que nacieron.

Esta circunstancia fáctica –si los niños se trasladaron, o no, con su madre a Portugalete-, era también el presupuesto del motivo de infracción procesal en el que se invocaba vulneración del artículo 28.1 y 218.2 LEC, por falta de suficiente motivación de la sentencia y por no estar ajustada a las reglas de la lógica y de la razón. El motivo así formulado fue inadmitido en el auto de esta Sala de 3 de diciembre de 2015 porque no explicaba el recurrente la falta de exhaustividad y congruencia (artículo 218.1 LEC), y falta de motivación (artículo 218.2) de la sentencia, pues no habría incongruencia (discordancia entre lo pedido y lo resuelto) aunque pudiera resultar incoherente, ni falta de motivación pues el auto de la Audiencia de 15 de julio de 2015 aclaró la cuestión del (no) traslado, pero motivó que la consecuencia sobre el traslado de los menores y su escolarización en Portugalete debía quedar determinado por lo que resolviera el TSJA al conocer del recurso de casación.

El auto, en definitiva, admitió el error dejando sentado que los niños habían seguido viviendo en Zaragoza ininterrumpidamente, si bien con la precisión de que ello no determinaba el sentido del fallo en cuanto a la legitimidad del traslado de Dª Silvia, pero que lo relativo al traslado de los niños sería determinado por el TSJA. Es decir, se admitía la legitimidad del traslado personal de la madre pero sin arrastrar por ello el de los hijos.

Debe examinarse la consecuencia de dicho error, a cuyo efecto recordamos que, como hemos dicho, el fundamento segundo de la sentencia recurrida admite el traslado de la madre pues *"siendo cierto que ese Pacto otorga prioridad a lo acordado en la regulación de las relaciones familiares y que ambas partes establecieron en los referidos términos que ninguna limitación tenía ninguno de ellos a la hora de fijación del domicilio tras la ruptura, si se tiene en cuenta que ambas partes dejaron diferida a un plazo de cuatro años la custodia compartida que dejaban comprometida, no parece que la estipulación fuese más allá de domicilios en Zaragoza o cercanías, no alcanzando el traslado de domicilio a provincia distinta"*.

Y continúa diciendo: *"La solución tampoco la da el artículo 19 de la Constitución...pues lo que debe primar es el interés de los menores. El problema es la procedencia o improcedencia de pasar aquellos a residir en otro lugar, lo que puede comportar un cambio radical en su entorno social y parental, con posibles problemas de adaptación, caso en el que, de afectar el cambio de residencia al interés de los menores, merecedores de una tutela preferente, ello podría conllevar un cambio de la guarda y custodia"*.

Y, como también ha quedado transcrito, tras afirmar que la vuelta de la Sra. O. a Portugalete se produjo en ejercicio del derecho a la libertad de residencia, sin que conste un uso fraudulento de ese derecho, ni el cambio caprichoso, injustificado o perjudicial para los hijos, la sentencia continúa diciendo: *"...todo ello sin que el traslado de los niños a Portugalete, dada su edad, haya supuesto tampoco riesgo en la adaptación de su vida en otra ciudad, ni desaparición de la relación con el padre y entorno paterno, que podrá mantenerse a través del régimen de visitas establecido"*.

Sin duda, a esa conclusión se llega con la premisa de que los niños habían sido trasladados a Portugalete, sin haber supuesto por ello riesgo en la adaptación. Ya en el párrafo primero del fundamento segundo se había afirmado que se desprende, en lo que respecta a visitas y comunicaciones, *"que la lectura de los pedimentos del suplico ha de hacerse a partir de la vuelta de la Sra. O. al que fue su domicilio en Portugalete..., tras el cual los dos hijos del matrimonio se desplazaron con ella, de modo que lo que se somete a decisión es la posibilidad del traslado de la actora a Portugalete, con modificación del régimen de visitas..."*.

Después, tras afirmar que ni el pacto de relaciones familiares con su previsión de custodia compartida a cuatro años, *"que dejaban comprometida"*, ni el artículo 19 CE autorizaba al traslado de los niños por el cambio radical en sus entornos, lo que *"podría conllevar un cambio de la guarda y custodia"*, se concluye que el traslado de la madre e hijos justifica la nueva ordenación de las visitas. Tal conclusión ya resultaría incoherente a

la vista de las cautelas anteriores (pacto de relaciones familiares sobre custodia compartida y artículo 19 CE), salvo que se basara en la expresada afirmación de haberse producido ya el traslado sin haber afectado a la adaptación de los niños. Pero, tras el auto de aclaración, la incoherencia resulta patente pues la expresada razón de la adaptación de los niños a las nuevas circunstancias, al ser incierta y de tal relevancia, no permite la posibilidad de justificar las nuevas medidas.

Si en la sentencia se amparaba la modificación de medidas en el cambio de residencia de los menores y su adaptación al mismo, no se puede llegar a la misma conclusión tras dejar sentado que no se ha producido el cambio de residencia, pues falta el presupuesto legal (artículo 79.5 CDFA) de la previa alteración de circunstancias para así permitir la modificación de medidas, que es precisamente lo que llevó a la desestimación de la demanda en la primera instancia con expreso fundamento en el contenido de la sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 2014 (recurso de casación 3/2014) respecto al artículo 79.5 del CDFA en correspondencia con el artículo 91 Cc.

Aun producido el cambio de residencia de la madre por sus propias circunstancias familiares y laborales, voluntariamente buscadas aunque no fraudulentamente, la sentencia recurrida ya exponía las cautelas a tener en cuenta: el pacto sobre custodia compartida que quedaba comprometido, y el interés de los menores en la posible nueva residencia con los problemas de adaptación y el posible cambio de guarda y custodia. Solo la errónea afirmación de que se había producido el cambio sin problemas de adaptación llevaba a autorizar la modificación de medidas.

SEXTO.- A la vista de lo anterior adquiere relevancia la denunciada infracción del artículo 76.3.a) en relación con el artículo 80.2 del CDFA, que el recurso justifica dándole mayor alcance que lo relativo simplemente al régimen de visitas, pues lo basa en el derecho de los hijos menores a un contacto directo con sus padres de modo regular y a que ambos participen en la toma de decisiones que afecten a sus intereses, con la perspectiva también de lo dispuesto en el artículo 80.2 sobre el régimen de custodia compartida. Como hemos visto, la conexión con este último precepto la viene a establecer la sentencia recurrida al no amparar en el pacto de relaciones familiares la libertad del cambio de domicilio de la madre, por tener en cuenta el acuerdo sobre la custodia compartida a partir del 9 de abril de 2017, "*que dejaban comprometida*", y al cambio radical que podía suponer en los menores, lo que podría conllevar "*un cambio en la guarda y custodia*".

Efectivamente, se presentaba la modificación del régimen de visitas como mínima, pero llevaba consigo la práctica imposibilidad de cumplimiento para el padre, según afirmaba la sentencia de primera instancia, no solo por tener que pasar uno de los fines de semana alternos en la residencia de la madre y el otro tener que ir a recogerlos allí, sino por el traslado para las visitas entre semana. Además, se comprometía seriamente (si no definitivamente) el pacto sobre la custodia compartida, lo que se percibe sin necesidad de mayores razonamientos pues, fijada en su caso la residencia de los menores en Portugalete bajo la custodia de la madre, fácilmente sería denegada la exigencia de lo pactado sobre custodia compartida si ello implicaba el nuevo traslado de los menores.

El traslado, aun admitido solo respecto a la madre por la libertad en la elección de su domicilio y en su derecho a volver a su localidad de origen, ya implicaba una seria modificación de las comunicaciones con el padre, como se ha dicho. Además, era adoptado de forma unilateral por quien luego solicitaba la modificación de las medidas y vulnerando lo dispuesto en el artículo 76.3.a) del CDFA, que exige, como derecho de los hijos, que ambos progenitores participen en la toma de decisiones que afecten a sus intereses.

A este respecto se cita en este primer motivo del recurso la sentencia de esta Sala de 28 de mayo de 2015 (recurso 3/2015) en la que, con referencia al interés del menor a considerar en los casos de traslado de residencia, se dice: *"Lo que acaba de señalarse es lo esencial y en lo que debe centrarse la resolución del problema que nos ocupa, y frente a ello resulta secundario establecer si el cambio de residencia de la madre era caprichoso e inmotivado o, por el contrario, era necesario como sostiene con vehemencia la recurrida. Ello no obstante, cabe recordar lo declarado por el TS en sentencias como la de 11 de diciembre de 2014:*

"Dice la sentencia de esta Sala de 26 de octubre de 2012 lo siguiente: " Las acciones y responsabilidades que derivan de la patria potestad corresponden a ambos padres de tal forma que cualquiera de ellos, tanto el que tiene la guarda como el que no la conserva, puede actuar en relación a sus hijos una posición activa que no solo implica colaborar con el otro, sino participar en la toma de decisiones fundamentales al interés superior del menor. Una de ellas la que concierne a su traslado o desplazamiento en cuanto le aparta de su entorno habitual e incumple el derecho de relacionarse con el padre o madre no custodio.

Pues bien, la guarda y custodia de los menores deriva de la patria potestad y de la patria potestad, entre otras cosas, deriva la fijación del domicilio familiar, según dispone el artículo 70 del Código Civil , para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 del Código Civil, respecto de la obligación de vivir juntos. La ruptura matrimonial deja sin efecto la convivencia y obliga a los progenitores a ponerse de acuerdo para el ejercicio de alguna de estas facultades que traen causa de la patria potestad, entre otra la de fijar el nuevo domicilio y, como consecuencia, el de los hijos que se integran dentro del grupo familiar afectado por la ruptura coincidente por lo general con el de quien ostenta la guarda y custodia. Estamos, sin duda, ante una de las decisiones más importantes que pueden adoptarse en la vida del menor y de la propia familia, que deberá tener sustento en el acuerdo de los progenitores o en la decisión de uno de ellos consentida expresa o tácitamente por el otro, y solo en defecto de este acuerdo corresponde al juez resolver lo que proceda previa identificación de los bienes y derechos en conflicto a fin de poder calibrar de una forma ponderada la necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada, sin condicionarla al propio conflicto que motiva la ruptura.

Es cierto que la Constitución Española, en su artículo 19, determina el derecho de los españoles a elegir libremente su residencia, y a salir de España en los términos que la ley establezca. Pero el problema no es este. El problema se suscita sobre la procedencia o improcedencia de pasar la menor a residir en otro lugar, lo que puede comportar un cambio radical tanto de su entorno social como parental, con problemas de adaptación.

De afectar el cambio de residencia a los intereses de la menor, que deben de ser preferentemente tutelados, podría conllevar, un cambio de la guarda y custodia".

Esta doctrina del Tribunal Supremo, que es la que recoge en parte la sentencia recurrida al establecer las cautelas antes reseñadas, plantea las posibilidades de actuación de uno solo de los progenitores en la toma de decisiones fundamentales para los menores, como *"el traslado o desplazamiento en cuanto le aparta de su entorno habitual e incumple el derecho de relacionarse con el padre o madre no custodio"*.

El interés del menor (*favor filii*) es invocado por el recurrente vinculado al artículo 76.3.a) del CDFA por considerar vulnerado el derecho de los menores a un contacto directo y regular con su padre, en tanto en cuanto la decisión de la madre no tenía en cuenta dicho interés, dado el radical cambio de entorno que comportaba. Y también porque, habiendo pactado la custodia compartida a partir del 9 de abril de 2017, ésta resultaría imposible y sería por ello vulnerado el interés de los menores, que es el que preside la preferencia legal de dicho régimen (artículo 80.2 CDFA).

Es evidente que el interés del menor no queda ignorado, sino al contrario, cuando una resolución judicial adopta el régimen de custodia individual precisamente por resultar más beneficioso para él. Pero en el presente caso los padres previeron en su pacto la custodia compartida, y este pacto quedaba comprometido, como decía la sentencia recurrida, por el traslado de los niños a Portugalete. Ya ha dicho esta Sala en varias ocasiones que debe observarse especialmente el respeto a lo pactado por los padres en esta materia, que solo cabe ser modificado por cambio cualitativo en las circunstancias pactadas. Así, la sentencia nº 37/2014, de 19 de noviembre, recurso 14/2014: *"Dicho de otro modo, en el proceso de modificación de medidas hemos de partir de las fijadas en la sentencia de divorcio, que fue acatada por ambas partes, y solo procederá la revisión cuando de los nuevos hechos acreditados resulte un cambio cualitativo de las circunstancias concurrentes que determine la modificación del sistema de guarda y custodia, en interés del menor, y la sentencia de instancia no haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la norma cuya infracción se denuncie"*.

En definitiva, el pretendido traslado de los niños a Portugalete, que comportaría un cambio sustancial en su entorno y en la relación con su padre, sin otra justificación que el voluntario (no forzoso) cambio de residencia de la madre, no tiene en cuenta el interés de los menores y compromete seriamente lo pactado respecto a la custodia compartida de los mismos, por lo que la sentencia recurrida vulnera lo dispuesto en los preceptos citados.

En consecuencia, procede la estimación de este motivo del recurso, lo que conlleva la casación de la sentencia recurrida y su anulación, confirmando íntegramente la recaída en primera instancia."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 6 de abril de 2016. Modificación de medidas. Régimen de visitas. Extensión. Situación socioeconómica del progenitor no custodio**

"PRIMERO. Frente a la sentencia de instancia, que desestima íntegramente la demanda formulada por don D en la que interesaba la modificación de las medidas adoptadas en sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2014 respecto a la hija menor de ambos litigantes, se alza ahora el demandante alegando error en la apreciación de la prueba por parte del Magistrado-Juez a quo pues dice deducirse de las pruebas practicadas en el presente procedimiento la modificación esencial de las circunstancias que entonces se tuvieron en cuenta para la fijación del régimen de visitas a su favor.

El Ministerio Fiscal interesa con carácter principal la desestimación del recurso, si bien con carácter subsidiario entiende correcto incrementar de forma progresiva el régimen de visitas –que considera en exceso exiguo actualmente- y establecer fines de semana alternos (de momento sin pernocta) debiendo el padre recoger a su hija en su domicilio por la mañana los sábados y domingos alternos, hasta las 20 horas, rechazándose el resto de pedimentos vacacionales y sin perjuicio de lo que en un futuro pueda resultar.

La apelada doña M se opone a la modificación interesada.

SEGUNDO. Establece el artículo 79.5 del Código de Derecho Foral de Aragón que "las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes." Ello supone que para proceder a la modificación es preciso que concurra una causa o circunstancia relevante aparecida con posterioridad a la sentencia que acordó dichas medidas y que tenga cierto grado de permanencia en el tiempo, es decir, que no sea una situación coyuntural.

Partimos de que el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de los de Teruel dictó sentencia en fecha 17 de febrero de 2014 (en la que se acordaron las medidas de custodia de la menor, régimen de visitas, uso de domicilio familiar y pensión de alimentos tras la ruptura de la pareja formada por los ahora litigantes) en la que acordó un régimen de visitas a favor del progenitor con respecto a su hija, N, nacida el de 2008, consistente en fines de semana alternos, los sábados y domingos de 17 a 19 horas sin derecho a pernocta, cumplimentándose siempre a través de tercera persona de total confianza de la pareja y, en su defecto, en el punto de encuentro que correspondiere. Justificó el Magistrado-Juez este régimen restrictivo en el hecho de que era la madre quien propiciaba mayor seguridad y estabilidad para el adecuado desarrollo psicoevolutivo de la menor, mientras que el padre carecía de domicilio fijo, de medio de locomoción y de capacidad económica alguna, no teniendo siquiera un lugar seguro en el que pasar los fines de semana con la menor.

Estas circunstancias, base de la argumentación del Juzgador a quo en la sentencia indicada, han cambiado en la actualidad, pues ha quedado acreditado en autos que el apelante ha alquilado una vivienda en la localidad de Castelvispal que se encuentra en

buen estado de habitabilidad, presentando buenas condiciones higiénicas y un aspecto organizativo adecuado (según informe emitido por la trabajadora social de la comarca Gúdar-Javalambre,), que dispone de medio de locomoción al haber adquirido un coche Peugeot 305, , y que trabaja durante los meses de mayo a agosto en Francia en la recogida de la nectarina percibiendo una cantidad mensual equivalente a 1.200 €/mensuales, habiendo renovado también el Ingreso Aragonés de Inserción.

Por otra parte, debe tenerse en consideración que no consta dato alguno del que pueda deducirse la falta de capacidad del padre para el cuidado de su hija, o circunstancias que desaconsejen el trato con ella. Es cierto, como dice el Juzgador de instancia, que el apelante se negó a realizar los test planificados (PAI y CUIDA) y ello impidió al equipo psico-social adscrito al Instituto de Medicina Legal de Aragón, Subdirección de Teruel, realizar una valoración psicométrica del recurrente, pero sí se le efectuó una entrevista valorativa y una valoración de la interacción paterno-filial, resultando de ellas la existencia de una vinculación afectiva de la menor con su padre con el que se siente protegida y cómoda, dándole muestras de cariño a las que la niña responde favorablemente y manteniendo hacia ella una conducta estimuladora.

Por todo ello se estima que sí han cambiado las circunstancias que se tuvieron en cuenta cuando el Juzgado señaló un régimen de visitas que, como dice el Ministerio Fiscal, es excesivamente escaso y procede incrementarlo, por lo que procede acceder a aumentar el tiempo en que el padre podrá permanecer con su hija, si bien no en la forma interesada por el apelante sino de manera progresiva. Así, dado que hasta ahora la menor no ha pernoctado nunca con el padre en el domicilio de este y que no se pudo obtener por el equipo psicosocial del I.L.M.A. más información sobre las habilidades parentales del Sr. D por su negativa a la realización de los test y por no contestar a todas las preguntas que le efectuaron, considera la Sala que debe concederse un régimen de custodia de fines de semana alternos sin pernocta, pues lo contrario supondría un brusco cambio en relación con el régimen que se ha mantenido hasta ahora, ampliando las horas de visitas para que don D pueda tener en compañía a su hija los fines de semana alternos desde las 10 a las 20 horas del sábado y desde las 10 a las 20 horas del domingo, recogiendo el padre a su hija en el domicilio de esta o a través de una tercera persona de confianza o, en su caso, en el Punto de Encuentro más cercano. Dicho régimen se suspenderá cuando el padre tenga que desplazarse fuera de España, reanudándose cuando regrese.

Con relación a las vacaciones, ya se ha dicho que se considera necesario que el incremento de la relación paterno-filial sea progresiva, por lo que no procede por el momento conceder las vacaciones interesadas. Además de que, respecto a las vacaciones de verano, y dado que el Sr. D realiza su trabajo en Francia en periodo estival, es lo cierto que sus circunstancias en este tiempo no son las adecuadas para cuidar de N, con la que no podría permanecer durante las horas de trabajo ni se tiene seguridad de dónde residiría."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 12 de abril de 2016. Tiempo de uso del domicilio conyugal. Pensión alimenticia. Pensión compensatoria.**

"PRIMERO.- Se recurre por la representación de la demandada (Dª I), la Sentencia recaída en primera instancia en el presente procedimiento sobre divorcio (artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En su recurso considera la demandada, que el uso del domicilio familiar debe serle atribuido por un periodo de doce años, alternativamente y para el caso de que no se otorgue el uso y disfrute a Dña. I se establezca que D. A deberá de abonar a la antes citada igualmente por periodo de doce años, en los cinco primeros días de cada mes y en la cuenta bancaria que por la misma se designe la suma de 340,00€ vinculada obligatoriamente al arrendamiento de una vivienda donde la beneficiaria deberá de fijar su domicilio habitual. Dicha suma será actualizada con periodicidad anual conforme a las variaciones del I.P.C. publicadas por el I.N.E. u organismo que los sustituya. Que no procede fijar a su cargo ni pensión alimenticia a favor de los hijos, ni abono de gastos extraordinarios. La pensión compensatoria deberá elevarse a 350€ mensuales durante un periodo de diez años.

SEGUNDO.- Sobre el uso del domicilio familiar se trata de un inmueble que no es propiedad de los litigantes, sino privativo de la familia del actor, los hijos ya mayores de edad residen con su padre, no procede la atribución del mismo a la recurrente ni tampoco la pretensión alternativa de obligación de abono por alquiler de vivienda, sin perjuicio de que esta cuestión pueda ser valorable a los efectos de la fijación de pensión compensatoria.

TERCERO.- En cuanto a la pensión alimenticia y abono de los gastos extraordinarios, los hijos residen con su padre, careciendo de ingresos y encontrándose en periodo de formación, la demandada percibe sobre los 450€ mensuales en jornada a tiempo parcial, el actor percibe en el año 2014 unos ingresos de aproximadamente los 3.000€ mensuales, teniendo en cuanta que la pensión fijada constituye el denominado mínimo vital indispensable, procede mantener la fijación de la pensión en 100€ mensuales por ambos hijos tal como proclama la resolución apelada así como la contribución a los gastos extraordinarios, en la mínima contribución del 10%, rectificándose la Sentencia en este apartado.

CUARTO.- En cuanto a la pensión compensatoria, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011, establece que "responde a un presupuesto básico consistente en la constatación de un efectivo desequilibrio económico, producido en uno de los cónyuges con motivo de la separación o el divorcio, siendo su finalidad restablecer el equilibrio y no ser una garantía vitalicia de sostenimiento, perpetuar el nivel de vida que venían disfrutando o lograr equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluta entre éstos, tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constnte matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, en sintonía con lo anterior, siendo uno de los razonamientos que

apoyan su fijación con carácter temporal aquel que destaca, como legítima finalidad de la norma legal, la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y resulta razonable entender que el desequilibrio que debe compensarse debe tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, que la expresada naturaleza y función de la pensión compensatoria obligan al órgano judicial a tener en cuenta para su fijación, cuantificación y determinación del tiempo de percepción, factores numerosos y de imposible enumeración, entre los más destacados, los que enumera el artículo 9l7 del Código Civil. Por último, operan también estos factores para poder fijarla con carácter vitalicio o temporal, pues permiten superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación de desequilibrio. Para este juicio prospectivo el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre, la existencia de un desequilibrio económico entre los esposos en el momento de la ruptura de la convivencia, constituye un presupuesto de hecho requerido por la norma jurídica.

Las más recientes Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011, 10 de octubre de 2011 y 23 de enero de 2012, en cuanto a la naturaleza de la pensión, concepto de desequilibrio y momento en que ésta deba producir, vienen a indicar que por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económica de casa uno, antes y después de la ruptura. Al constituir finalidad legítima de la norma legal colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laboral y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, es razonable entender, de una parte, que el desequilibrio que debe compensarse ha de tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familiar, y, de otra, que dicho desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio, y no basarse en sucesos posteriores, que no puedan dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial.

Partiendo de la concurrencia de desequilibrio, en la medida que la ley no establece de modo imperativo el carácter indefinido o temporal de la pensión, constituye igualmente doctrina consolidada:

Que su fijación en uno y otro sentido dependerá de las específicas circunstancias del caso, particularmente, las que permiten valorar la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, siendo única condición para su establecimiento temporal que no se resienta la función de restablecer el equilibrio que constituye su razón de ser (Sentencias del Tribunal supremo de 17 de octubre de 2008 [RC nº 531/2005 y RC nº 2650/2003], 21 de noviembre de 2008 [RC nº 411/2004], 29 de septiembre de 2009 [RC nº 1722/2007], 28 de abril de 2010 [RC nº 707/2006], 29 de septiembre de 2010 [RC nº 1722/2007], 4 de

noviembre de 2010 [RC nº 514/2007], 14 de febrero de 2011 [RC nº 523/2008] y 27 de junio de 2011 [RC nº 599/2009].

Que esta exigencia o condición obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 del Código Civil, que según la doctrina de esta Sala, fijada en Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC nº 52/2006], luego reiterada en Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2010 [RC nº 514/2007], 14 de febrero de 2011 [RC nº 523/2008] y 27 de junio de 2011 [RC nº 599/2009], entre las más recientes, tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio y como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión, las cuales permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencias y ponderación con criterios de certidumbre.

En el presente supuesto, se trata de una convivencia de 26 años, la solicitante no ha trabajado constante matrimonio hasta el año 2008, dedicándose hasta esa fecha al cuidado de la familia, carece de cualificación, dedicándose a la limpieza de edificios, el actor es conductor de autobús, con contrato indefinido, la diferencia de ingresos es la ya relatada en el anterior fundamento jurídico, la solicitante no dispone de vivienda propia, debiendo asumir gastos de alquiler y el demandante reside en el domicilio que fue familiar, por tales consideraciones procede fijar la pensión compensatoria en la cantidad de trescientos cincuenta (350) euros mensuales, pero con un periodo de cinco años, que se considera más adecuado teniendo en cuenta las circunstancias que anteriormente se han expuesto.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 12 de abril de 2016. Custodia individual. Separación de hermanos. Previa convivencia**

"I.- La sentencia recurrida otorga la guarda y custodia de la hija menor de la pareja, I, a su padre como consecuencia de que este la ha venido manteniendo desde la separación de sus progenitores. Frente a dicho pronunciamiento se alza la madre demandada en solicitud de que se acuerde la custodia compartida. Sin embargo la propia parte recurrente, reconoce en su escrito de recurso, la custodia compartida resulta inviable habida cuenta la lejanía de ambos progenitores, por lo que, lo que en definitiva se pretende es la custodia individual por la madre. Fundamenta la recurrente esta solicitud en el Art. 80.4 del Código de Derecho Foral de Aragón, cuando establece que, salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se adoptarán soluciones que supongan la separación de los hermanos, siendo que la menor tiene otros dos hermanos, fruto de una relación anterior. Ciertamente la norma del artículo Art. 80.4 del Código de Derecho Foral de Aragón, coincidente con la del articulo 92.5 in fine del Código Civil, establece el criterio legal de que el Juez procure no separar a hermanos., y ello porque el legislador ha entendido que el interés de los hijos, que debe de servir de guía a la actuación judicial en lo procesos de separación se protege mejor manteniendo la unidad en la custodia. Pero esta regla no es absoluta, ya que, en algunos supuestos no será preferible decidir la custodia separada de unos y otros hijos que imponer una custodia conjunta que represente perjuicio para alguno de ellos. Y ello es lo que ocurre en el caso enjuiciado: En primer lugar, debe de tenerse en cuenta que, según se desprende del informe psicosocial aportado en autos, es el padre quien, desde la ruptura de la pareja (a finales del año 2013), ha ejercido la custodia de la menor, siendo, como señala el citado informe su principal referente afectivo y de apego. El mismo informe pone de relieve que el padre dispone de un mayor y mejor soporte social que la madre. Por otra parte no puede soslayarse que la demandada, ha tenido cuatro hijos de tres relaciones distintas, con lo que resulta complejo mantener la unidad de custodia, que preconizan los preceptos legales citados. Por otra parte, la convivencia en los que se fundamenta la aplicación del Art. 80. 4 del CDFA, sería con hermanos que no han convivido con su hermana, conviviendo la madre, que actualmente reside en Cataluña junto a su nueva pareja, con un hijo de su anterior relación de trece años de edad y una hija de su nueva relación, de cuatro meses de edad. Pues bien, en tales circunstancias estima la Sala, que la solución adoptada por el Juzgador "a quo" de otorgar al padre la custodia de su hija resulta apropiada para satisfacer el interés de la misma. En consecuencia, procede desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución recurrida."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 26 de abril de 2016. Pensiones alimenticias en custodia compartida**

"PRIMERO.- Recurre el demandado las pensiones económicas estipuladas en la Sentencia, suplicando se suprima la pensión de 180 € mensuales fijada a su cargo, o, subsidiariamente, se reduzca a 90 € al mes, se fije en 75 € al mes la suma a ingresar por cada progenitor en la cuenta común, y se establezca la contribución por mitad del embargo, derivado del préstamo contraído con Caja Rural.

La actora solicita en su impugnación se elimine la obligación de ingreso en la cuenta común de la pensión que la hija L percibe del INSS.

El Ministerio Fiscal se adhiere a la petición de revocación de la pensión alimenticia estipulada.

SEGUNDO.- Viene a sostener el recurrente, que los ingresos de uno y otro litigante son similares, no existiendo, por ello, razón para establecer la mayor contribución del padre en el sostenimiento de los hijos.

Los recursos del recurrente son notoriamente superiores a los de la demandante. Las nóminas por él aportadas (f. 240 y ss. de las actuaciones) revelan unos ingresos en octubre de 2014 de 1.577,88 €, en enero y en febrero de 2015 de 1.734,02 € y 1.697,40 €, respectivamente, frente a los escasos 800 € mensuales de media que ha percibido entre 2014 y 2015 Dª V, computando los períodos de desempleo con percepción de prestación.

Ambos litigantes soportan gastos de alquiler. Las deducciones en la nómina de D. D por retención y anticipo no desvirtúan lo expuesto.

Los tres hijos del matrimonio cuentan con 11 y 7 años de edad, y sus necesidades de todo orden son claras.

L, la mayor, percibe una pensión del INSS de 1.000 € al año, que se abona en dos pagos, suponiendo unos 83 € al mes.

No cabe modificar las pensiones estipuladas en la Sentencia, por cuanto, los ingresos de la madre resultan insuficientes, para atender la asistencia cotidiana de los hijos cuando están a su cargo, vistos los gastos de alquiler que soporta, si además se tiene en cuenta que el resto de gastos que se abonan con la cuenta común son puntales y su grueso se abona generalmente al inicio del curso escolar (libros, material escolar, AMPA), aligerando así escasamente los gastos más frecuentes y perentorios de comida y vestido de los menores.

Por ello, la inclusión en esa cuenta común de la pensión de L no parece obedezca a otorgar cobertura a las necesidades ordinarias de los hijos, máxime si se demuestra su retirada de la cuenta nada más efectuado su ingreso, en enero y julio de cada año, cuando los gastos que la cuenta cubre no se devengan en esas fechas.

Debe pues excluirse dicha pensión de la obligación de abono en la cuenta común, percibiéndola como hasta la Sentencia venía ocurriendo la actora y en beneficio de la hija.

Con respecto a la contribución en el embargo, nada cabe resolver en este proceso, debiendo ventilarse en el procedimiento oportuno. “

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 9 de mayo de 2016. Custodia compartida. Motivación de su exclusión. Edad del menor. Disponibilidad. Apoyos familiares. Informe pericial. Voto particular**

"PRIMERO.- Los litigantes, Dª. Sara O. P. y D. Jairo L. H. mantuvieron relación de convivencia durante varios años, en la que nació el hijo común L, por lo que cuenta en la actualidad con siete años de edad. Terminada la relación estable, Dª. Sara presentó ante el Juzgado de Primera Instancia de Daroca la demanda rectora de este procedimiento con el fin de que se acuerden medidas reguladoras de la relación de los progenitores con el menor. Todas las medidas solicitadas partían de la base previa de que la custodia acordada para cuidado del menor fuera la individual atribuida a la madre y demandante. Partiendo ello, concretó luego el régimen que estimaba más oportuno respecto de visitas, vacaciones y comunicaciones del menor con su padre, así como el modo de contribución de los progenitores al pago de los gastos ordinarios y extraordinarios derivados del cuidado del niño y la atribución del uso de la vivienda que era el domicilio familiar.

El padre demandado contestó a la demanda e interesó que el régimen de custodia a seguir fuera el de custodia compartida, en la que por meses alternos el hijo menor permanecería con uno de los progenitores, con propuesta asimismo de fijación de régimen de visitas y vacaciones, y pago de gastos distinto del propuesto por la madre, sin que mostrara disconformidad respecto de la atribución de uso de la vivienda familiar a ella.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 24 de abril de 2015 en la que, respecto del régimen de custodia a seguir, tras citar la regulación recogida en el artículo 80.2 del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA), razonó lo siguiente: "En el caso de autos se va a establecer un sistema de custodia individual a favor de la actora, atendiendo al superior interés del menor y ello en función del informe psicológico obrante en las actuaciones que así lo aconseja, manifestando que el sistema planteado por la parte demandada no se considera lo más beneficioso para el niño e incluso podría generar desequilibrio en las rutina del niño, a mayor abundamiento teniendo en cuenta la posibilidad de conciliar la vida laboral con la familia, la actora tiene el mismo horario laboral que el horario escolar, sin embargo, el padre el horario laboral de verano es rotativo e incluso tiene que salir de su domicilio durante 3 o 4 días, delegando en aquellos supuestos la guardia al padre del progenitor, sin embargo éste reside en distinta localidad y carece de carnet de conducir."

Con base en tales consideraciones, la custodia establecida por la sentencia fue la individual atribuida a la madre, lo que se acompañó del acuerdo respecto del resto de medidas reguladoras de la relación personal y atención patrimonial de los progenitores y el menor.

La sentencia referenciada fue apelada por el padre, que solicitó su revocación especialmente en lo referente al sistema de custodia fijado, e interesó que fuera acordada la custodia compartida, tal y como en su contestación a la demanda había interesado. El Tribunal de segunda instancia, Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, dictó el día 1 de diciembre de 2015 la sentencia ahora recurrida, en la que desestimó el recurso de

apelación y confirmó en su integridad la sentencia recurrida, estando así al régimen de custodia individual acordado por el Juzgado de Primera Instancia.

TERCERO.- La anterior sentencia ha sido ahora recurrida en casación ante esta Sala por el padre. El recurso se sustenta en un solo motivo, la infracción del artículo 80.2 del CDFA en relación con el artículo 76.2 del mismo Código y los artículos 39.2 y 4 de la Constitución Española. Estima la parte recurrente, con cita de numerosa jurisprudencia de esta Sala, que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial no da adecuado cumplimento a la previsión establecida en la legislación aragonesa de preferencia del régimen de custodia compartida respecto del de custodia individual, ya que los elementos de juicio en que se sustenta la resolución no son concluyentes ni suficientes para eludir la preferencia legalmente establecida.

En concreto, el razonamiento final de la sentencia recurrida respecto del régimen de custodia a establecer fue el siguiente: "Los extremos expuestos ponen de manifiesto que la solución adoptada por el Juzgador de instancia preserva de forma adecuada el superior interés del menor al valorar prioritariamente, de forma razonada, su estabilidad y bienestar, los que no quedarían salvaguardados en el sistema propuesto por el recurrente, carente de garantías en el correcto desarrollo del cuidado del hijo (artículo 80 del Código de Derecho foral de Aragón)".

La forma razonada en que resolvió el Juzgado de Primera Instancia y a que se refiere el párrafo trascrito de la sentencia recurrida ya fue recogida en el Fundamento de Derecho segundo.

Los extremos de referencia que tal párrafo considera que impiden que queden salvaguardadas la estabilidad y bienestar del menor son los que la propia sentencia indica con anterioridad en los siguientes términos:

"El hijo menor (...) cuenta con 6 años de edad. Reside con su madre en C. y acude al colegio de M. , donde vive con el padre. El padre trabaja como peón especialista forestal en la base de D., con horario de mañanas de octubre a julio, y el resto del año en turnos rotativos de mañana y tarde, debiendo atender emergencias durante seis meses.

La madre trabaja como auxiliar de guardería en

El padre carece de apoyos familiares, su padre reside en Zaragoza".

CUARTO.- El artículo 80.2 del CDFA, norma imperativa aplicable a la cuestión, establece que el Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual resulte más conveniente. Así, cuando debe tomarse la decisión judicial no se está ante la posibilidad de valorar discrecionalmente y partiendo del vacio legal sobre cuál sea el régimen de custodia que la autoridad judicial puede establecer. En Derecho Aragonés el juez parte de una primera valoración, hecha por el legislador, de que el interés del menor debe dar lugar, prima facie, a la fijación del régimen de custodia compartida. Cabrá que, aun partiendo de tal preferencia legalmente impuesta, la autoridad judicial considere que en el caso concreto de que se trate esté

presente algún motivo que justifique hacer salvedad del régimen de custodia compartida y fijar la custodia individual. Para llegar a tal conclusión debería a su vez, ponderar los presupuestos que el texto legal expone a continuación de modo expreso o cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia.

Además, el Juez valorará también los informes periciales obrantes en autos, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de custodia de los menores.

Por tanto, y como ha indicado constante jurisprudencia de esta Sala (por ejemplo, sentencias de 27 de mayo de 2015 en recurso de casación 7/2015, o de 18 de febrero de 2016 en recurso de casación 61/2015) la posible exclusión de la preferencia legal a favor del sistema de custodia compartida exige que la autoridad judicial valore detenidamente la concreta prueba practicada hasta obtener la conclusión debidamente justificada de que existen las razones relevantes exigidas por el apartado segundo del artículo 82 para poder ceder el sistema principal de custodia compartida hacia el legalmente establecido como secundario, de custodia individual.

QUINTO.- Pues bien, en el procedimiento actual la sentencia recurrida cita diversos datos de los que luego concluye que la custodia compartida no salvaguarda en el presente caso la estabilidad y bienestar del menor, ya que carece de garantías para el correcto desarrollo del cuidado del hijo menor.

La competencia atribuida a este Tribunal de casación no autoriza, salvo casos excepcionales que no están ahora presentes, a reconsiderar las conclusiones sobre prueba que hayan podido ser adoptadas por los tribunales de instancia, y, además, debe también entenderse que no corresponde tampoco, salvo también casos especiales que no se dan ahora, que el órgano de casación invada el ámbito de decisión discrecional que tiene reconocido el propio tribunal de instancia. La competencia propia de esta Sala se dirige a determinar si la sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Provincial, es ajustada a derecho o si, por el contrario, ha infringido la norma de aplicación, complementada con la jurisprudencia a observar en cada caso. Por ello, en el supuesto ahora enjuiciado no procede modificar las conclusiones probatorias obtenidas por la sentencia recurrida ni tampoco el margen de discrecionalidad otorgado a la Audiencia Provincial. Pero sí debe estudiarse y resolverse si su sentencia dio cumplimiento a la orden legal de establecer preferentemente la custodia compartida, salvo que existan motivos relevantes que aconsejen otro tipo de cuidado del menor. Y asímismo procede valorar en este recurso si el ámbito de discrecionalidad reconocido al tribunal de instancia respetó el marco en que puede desenvolverse conforme a la legislación aragonesa.

SEXTO.- Respecto de la posible presencia de factores de relevancia que desaconsejen en este caso establecer la custodia compartida, la sentencia recurrida enumera, sin vincularlos entre ellos ni directamente con la conclusión final que obtiene, diversos datos. El primero es que el niño tiene seis años cuando la sentencia se dicta (en la actualidad ha cumplido ya siete años). No es este un dato que por sí solo pueda determinar la exclusión de la custodia

compartida, ya que es una edad que permite, sin duda, la convivencia por periodos alternos del niño.

Cita igualmente la resolución que el niño vive con la madre en C. y acude al colegio en M. , donde trabaja la madre y donde vive el padre, el cual trabaja en D. Cabe indicar que las tres poblaciones citadas están en la provincia de Zaragoza y que C. dista de M. un total de 9 km., mientras que D. está a 15 Km. de M. Es decir, según tales datos, la madre se traslada con el niño a trabajar a la misma población en que vive el padre. Y éste, a su vez, trabaja cerca de tal lugar. Ciertamente, la situación óptima en casos de separación de los progenitores, sea cual sea el régimen de custodia, sería que vivieran en el mismo núcleo urbano, pero el hecho de que esto no sea así en el caso tratado no parece que sea de especial relevancia para negar la idoneidad de la custodia compartida, menos cuando el traslado de la madre con el hijo al lugar donde vive el padre es continuo por motivos laborales.

Señala también la sentencia como extremo que desaconseja la custodia compartida el hecho de que el padre trabaja como peón especialista forestal, con turnos que varían según la temporada del año. Durante diez meses al año es en horario de mañanas. Y los otros dos en turnos rotativos de mañana y tarde. Este horario, a falta de mayor concreción en la sentencia, no parece que deba concluirse que impide de modo relevante la custodia compartida pues, al contrario, al tratarse mayoritariamente de horario continuo y no partido, parece correcto para poder atender al niño. El hecho que también se cita de que el padre deba atender urgencias durante seis meses, y también a falta de mayores y más precisos datos sobre asistencias que deba hacer, no es cuestión tampoco concluyente respecto al tipo de custodia a fijar, ya que tales urgencias debe entenderse que son de localización, y la proximidad de las localidades indicadas como de residencia del padre y de prestación de su trabajo permite entender que ningún problema habrá para desplazarse de una a otra caso de ser preciso.

Se señala asimismo que el padre carece de apoyos familiares, y que su padre reside en Zaragoza. No se recoge si la madre tiene apoyos familiares. En cualquier caso, la distancia entre Zaragoza y D. no es excesiva para caso de urgencia, y, además, no sólo el apoyo familiar es el posible en un caso de emergencia. El hecho de que una persona viva con la familia extensa a una hora de distancia, no se observa realmente, ni así lo indica la sentencia, como factor de trascendencia para la fijación de la custodia compartida.

Asimismo, la sentencia indica que el informe pericial evidencia buena vinculación del menor con ambos progenitores, pero no considera la custodia compartida como el mejor sistema de vida del menor, al suponer el cambio un factor generador de desequilibrio en el niño, y aconseja que quede bajo la custodia de la madre. Como ya se tuvo en cuenta en sentencia de esta misma Sala de 6 de abril de 2015 en recurso de casación 1/2015, el informe pericial es de relevancia indudable al tiempo de determinar si procede la exclusión de la custodia compartida, y así lo previene el texto legal y debe considerarlo el tribunal. Pero, como también se señaló en tal sentencia, la decisión sobre la custodia no corresponde tomarla al perito psicólogo, sino al tribunal. El ámbito técnico de la actuación pericial se circunscribe a la competencia propia del perito psicólogo, que excluye el

conocimiento jurídico y, por tanto, la posible conclusión de cuál sea la custodia procedente conforme a lo legalmente ordenado. Por ello, la trascendencia de las conclusiones periciales debe ser convenientemente valoradas por el tribunal; en su propio ámbito técnico para luego extraer el órgano judicial las consecuencias jurídicas que puedan derivar de la expertización realizada por el perito conocedor de la materia de que se trate. En este marco de la competencia pericial, en el caso presente, y según expone la sentencia, la psicóloga valoró la buena vinculación del menor con padre y madre, y que el cambio de la custodia compartida es un factor generador de desequilibrio del niño.

Sin duda, se establezca uno u otro sistema de custodia, el riesgo de desequilibrio de los menores inmersos en el proceso de ruptura de la convivencia de sus progenitores está siempre presente. Y en el supuesto actual el cambio de un sistema de custodia seguido desde la ruptura (que las partes admiten fue un año y medio antes de presente la demanda) a otro puede potenciar el desequilibrio. Este riesgo general de perjuicio de los menores cuando padre y madre comienzan su vida por separado y que, precisamente, trata de paliar la normativa reguladora de los efectos de la separación, no recoge la sentencia recurrida que se concrete de modo especial en el presente caso, pues, según se indica, el psicólogo observa que la vinculación del menor con ambos progenitores es buena. Ausente en este caso la certeza de que el establecimiento de la custodia compartida pueda generar un desequilibrio de relevancia superior a la propia de la situación de cese de la convivencia que el legislador ya ha observado, no cabe entender que lo recogido por el perito en su informe pericial psicológico deba dar lugar al efecto jurídico de excluir la custodia preferente.

Por último, la sentencia hace suyo el razonamiento excluyente de la custodia compartida que recogió el Juzgado de Primera Instancia. Este razonamiento, trascrito al Fundamento de Derecho segundo de esta resolución, hacía propia a su vez la conclusión del informe psicológico. De las consideraciones que recogió el Juzgado se ha hecho ya antes referencia a la escasa relevancia a reconocer al potencial desequilibrio del menor, al trabajo del padre, o la relativa lejanía de la familia extensa. Igualmente se ha hecho referencia antes también al no reconocimiento del perito como decisor del sistema de custodia que legalmente debe ser establecido. En definitiva, por tanto, no añade argumento nuevo a los ya expuestos la remisión que la sentencia recurrida hace a la dictada en primera instancia.

SEPTIMO.- Como resulta de lo expuesto debe concluirse que la sentencia recurrida no expone razones fundadas en hechos probados que justifiquen la presencia de motivos de relevancia excluyentes de la custodia compartida. Por tanto, no observó la previsión del artículo 80.2 del CDFA que extrae del ámbito de discrecionalidad de la autoridad judicial la custodia que preferentemente procede establecer.

Procede así casar la sentencia recurrida, que debió ser revocatoria de la dictada por el Juzgado de Primera instancia, y establecer el sistema de custodia compartida como regulador de las relaciones paternofiliales en el presente caso.

Casada la resolución, queda este Tribunal como juzgador de instancia, por lo que procede valorar ahora que especie, dentro del género de custodia compartida, puede establecerse.

OCTAVO.- Ante las propuestas concretas de aplicación del régimen hechas por el demandado solicitante del establecimiento de custodia compartida nada opuso la parte contraria. De oficio no cabe observar que lo interesado pueda ser contrario al correcto desenvolvimiento del sistema ni, especialmente, al interés predominante de prestar la adecuada atención al hijo menor. Por ello se respetarán en lo esencial las peticiones del demandado, si bien con las concreciones que se recogerán en el fallo y que se estiman necesarias y útiles para el mejor desarrollo del régimen de vacaciones, visitas y contribución a los gastos.

NOVENO.- De conformidad con lo establecido en los artículo 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo estimado el recurso de casación, y habiendo debido ser estimado el de apelación, no procede hacer imposición de las costas causadas en tales trámites. Respecto de las producidas en primera instancia, la existencia de resoluciones distintas evidencia la complejidad fáctica del asunto, y la consiguiente dificultad jurídica, por lo que tampoco procede hacer imposición a ninguna de las partes de las costas causadas por el trámite ante el Juzgado de Primera Instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,

FALLAMOS

PRIMERO.- Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D. Jairo L. H. contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza el día 1 de diciembre de 2015 que casamos, dejándola sin efecto.

SEGUNDO.- En su lugar acordamos que, salvo acuerdo de las partes, las relaciones familiares entre los demandantes y su hijo menor se regirán por las siguientes medidas:

-La guarda y custodia del hijo Lorién será compartida entre ambos progenitores, cada uno de los cuales tendrá la custodia de su hijo por el plazo de un mes natural, salvo en los meses de julio y agosto, que será quincenal en la forma que luego se indicará. El día uno de junio del corriente año 2016 comenzará la custodia del padre y luego se desarrollará por los correspondientes periodos sucesivos alternos.

-Durante el mes en que uno de los progenitores no tenga la custodia del menor lo recogerá los martes y jueves a la salida del colegio o, en su defecto o en época vacacional, a las 16,30 horas y permanecerá en su compañía hasta las 20 horas, en que lo reintegrará al domicilio donde viva el que ejercita la custodia.

- El progenitor que no tenga la custodia en el periodo mensual disfrutará de fines de semana alternos de la compañía del menor, para lo cual lo recogerá el viernes a la salida del colegio o, en su defecto, a las 16,30 horas y lo reintegrará a las 20 horas del domingo. Caso de que haya puente festivo la recogida o reintegro del menor se entenderá que es en la víspera o al día siguiente del puente.

-En los periodos de vacaciones escolares de Semana Santa y Navidad cada progenitor tendrá la compañía del menor la mitad del periodo. Los años impares corresponderá al padre el primer periodo, que en Navidad terminará el día 30 de diciembre, y los pares a la madre.

- En los meses de julio y agosto la custodia compartida será por periodos quincenales sucesivos, del 1 al 15 de julio, del 16 al 31 de julio, del 1 al 15 de agosto y del 16 al 31 de agosto. El reintegro del menor al terminar cada periodo lo hará el progenitor custodio a las 20 horas del día en que termine la quincena en el domicilio del otro progenitor. En los años impares corresponderá al padre el primer periodo, y los pares a la madre.

-Durante los periodos de vacaciones descritos, no habrá régimen de visitas para el otro progenitor, ni se cumplirá el régimen ordinario de guarda y custodia.

- Los gastos ordinarios diarios de mantenimiento del menor serán de cuenta del progenitor que en cada momento tenga su custodia. Los extraordinarios necesarios serán abonados por mitad por ambos. Los extraordinarios no necesarios serán abonados por el progenitor que decida hacerlos.

TERCERO.- No se hace expresa imposición de las costas causadas en la instancia ni de las producidas por este recurso de casación.

CUARTO.- Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Devuélvase al recurrente el depósito que constituyó.

Se pone en conocimiento de las partes que contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo, anunciando Voto Particular los Magistrados Ilmos. Sres. D. Javier Seoane Prado y Dª. Carmen Samanes Ara, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRAD ILMO. SR. D. JAVIER SEOANE PRADO, Y SE ADHIERE LA MAGISTRADA ILMA. SRA Dª CARMEN SAMANES ARA

Con absoluto respeto a la decisión de la mayoría, lamento tener que formular voto particular al amparo de lo prevenido en el artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 205 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que baso en las razones que expongo a continuación.

Acepto el encabezamiento, los antecedentes de hecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La razón por la que me opongo con total respeto al voto de la mayoría radica en que entra a decidir el caso como si se tratara de una instancia más,

contradiciendo el criterio sustentado en las dos instancias, en el informe sicológico y por Ministerio Fiscal en la segunda instancia y en este recurso de casación.

SEGUNDO.- Ya he dicho en otras ocasiones, con criterio que ahora reitero, que el interés superior de menor es la guía para decidir toda medida que pueda afectarle, entre las que se encuentran las relativas a su guarda y custodia. Así ha sido indicado por esta Sala, entre otras, en SSTSJA 8 y 10/2011, de 13 de julio y 30 de septiembre, en recta interpretación de la normativa aplicable, entre la que destaca como específico para los procesos de ruptura de la convivencia familiar el art. 76.2 CDFA, conforme al que:

Toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos menores de edad se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos.

La STC 141/2000, de 29 mayo, en la misma línea que multitud de resoluciones del TS como las nº 87/2012, 323/2012, 800/2011, 614/2009 o 565/2009, tiene a este principio como *estatuto jurídico indisponible de los menores de edad dentro del territorio nacional*, y destaca como relevantes a estos efectos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por España en 1990 , la Carta europea de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo y la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor (en parecidos términos SSTC 298/1993, 187/1996 , y ATC 28/2001, de 1 febrero).

También pueden ser citadas en apoyo de la consideración del interés del menor como superior criterio de decisión las SSTJUE dictadas en los asuntos C 211/10 y C 403/09, y el TEDH en los casos RAHIMI c. GRECIA y LYUBENOVA c. BULGARIA.

Tal principio es de orden público y aplicable a toda ruptura de la convivencia de los progenitores, cualquiera que sea el derecho personal que resulte aplicable, por lo que no es dable entender que una norma de derecho civil autonómica pueda alterar la jerarquía de valores que establece.

TERCERO.- Ocurre que el interés superior del menor es un concepto jurídico indeterminado que ha de ser integrado en cada caso concreto, labor para la que le legislación estatal disponía de una parca guia legal hasta la reciente reforma de la LO 1/1996 por la LO 8/2015, que supone un significativo avance al establecer los *criterios generales* que sirven para determinar qué responde mejor al interés del menor, así como los *elementos generales* ha que hay que atender para realizar la necesaria ponderación para decidir en cada caso.

Así dispone el nuevo art. 2 L 1/1996:

<< A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto:

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior.

c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia.

d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos generales:

a) La edad y madurez del menor.

b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica o circunstancia relevante.

c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo.

d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro.

e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales.

f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores.

Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que ampara.

4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes.

En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.

Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados.>>

CUARTO.- El legislador aragonés, a diferencia de otros sistemas legales que confían por completo al juez la determinación de los criterios y elementos generales a los que ha de atender para decidir en cada caso el sistema de custodia que mejor se adapta al interés del menor, opta por establecer unos criterios a los que se ha de atender en tal cometido.

Participo de la opinión mayoritaria de que el art. 80 CDFA considera que, con carácter general, la custodia compartida es el sistema idóneo con el que satisfacer el interés del menor, pero ello no implica sino la posición de partida en la que se ha de situar el juzgador a la hora decidir el sistema más conveniente en el caso concreto.

No significa, por el contrario, una jerarquía o preferencia de este sistema sobre los demás posibles que desvíe al juez del interés superior del menor como única guía a la hora de decidir el caso concreto, y menos supedite la observancia de tal principio a ninguna otra consideración, como pudiera ser la defensa de la particularidad de la norma aragonesa.

Y tampoco implica que no corresponda al juez decidir porque el legislador aragonés lo haya hecho por él, ni una merma la facultad-deber de averiguar de oficio interés el menor que rige el derecho de familia.

Como resulta del mismo precepto, el juez aragonés, como el de derecho común, ha de optar por un sistema diferente al de la custodia compartida cuando las circunstancias del caso evidencien que aquél interés lo exige, a cuyo fin se establece una lista abierta de factores no jerarquizada y carente de indicación de en qué sentido opera cada uno de ellos a los que ha de atender el juzgador para determinar si, en el caso concreto que decide, es el sistema de custodia compartida el que mejor se acomoda al interés del menor.

Los sistemas diferentes a la custodia compartida no son, por tanto, ninguna excepción, como tampoco lo es este sistema en el derecho común respecto de la custodia individual, como se ha encargado de señalar el TS en S nº 579/2011, de 22 de julio, sino el régimen normal a seguir cuando así lo exijan las circunstancias del caso.

Ello supone la concesión de un margen de discrecionalidad cuyo ejercicio corresponde a los tribunales de instancia, y que no tiene otro límite que la observancia de los criterios señalados en la norma, y la exigencia de una motivación fundada en ellos que no implique una abierta infracción del mandato legal, que no es otro que el que la decisión sea tomada en interés del menor.

No puedo compartir por lo dicho las afirmaciones de la sentencia mayoritaria de que en la decisión sobre el régimen de custodia << no se está ante la posibilidad de valorar discrecionalmente y partiendo del vacío legal sobre cuál sea el régimen de custodia que la autoridad judicial pueda establecer >> (fundamento cuarto), y que el art. 80.2 CDFA << extrae del ámbito de la discrecionalidad de la autoridad judicial la custodia que preferentemente pueda establecer >>, al menos en el sentido que parece desprenderse del contexto de la sentencia de negar discrecionalidad al juez -su literalidad es ambigua a mi modo de ver, ya que no puedo concluir de ella con seguridad si la opinión mayoritaria entiende que la decisión sobre la custodia del caso concreto es o no discrecional -. Si así fuera entraría en contradicción con la doctrina sentada sin discrepancia en la reciente sentencia de esta sala de 21/2015, Rc 17/2015:

<< no puede entenderse que la sentencia de apelación ignore el criterio preferente de la custodia compartida establecido en el art. 80.2 CDFA, **sino que ejerciendo el margen de discrecionalidad que le corresponde por Ley ha considerado**, motivadamente, que en el concreto caso enjuiciado la custodia individual satisface mejor el interés superior de las hijas menores >>

QUINTO.- Es constante la doctrina jurisprudencial que limita el ámbito del recurso de casación a su función nomofiláctica, de tal forma que considera ajeno al mismo el control de las decisiones adoptadas dentro de los márgenes de discrecionalidad que el legislador confiere a los tribunales para llevar a cabo el juicio de valor del que depende la decisión del caso concreto.

Así lo ha entendido este Tribunal en SS nº 32/2012 (contribución a gastos de los hijos) o 903/2005 (decisión sobre la vivienda).

En particular, y por lo que se refiere a las medidas relativas a la custodia de los menores, el Tribunal Supremo ha dicho (S 614/2009 de 28 septiembre) que, establecido que el interés del menor el criterio legal de decisión:

<< el problema procesal se plantea en torno al órgano que debe apreciar dicho interés, porque como señala la doctrina más autorizada, en esta cuestión, la discusión sobre si se ha aplicado o no la norma fundando la decisión en el interés del menor tiene aspectos casacionales, mientras que la delimitación de la realidad que determina en cada caso concreto cuál es el interés del menor, no los tendrá. Este Tribunal ha considerado que por tratarse de una facultad discrecional del juzgador, en el segundo aspecto no cabe impugnación casacional, a menos que en las actuaciones figuren "esas graves circunstancias que aconsejen otra cosa" >>

En parecidos términos se pronuncian las SS nº 228/2010, la nº 578/2011, o la nº 373/2013, de 31 de enero de 2013

Por nuestra parte hemos dicho que el tribunal de casación no puede actuar como un tribunal de tercera instancia en la revisión de la decisión sobre el sistema de custodia que ha de ser aplicado; así lo hemos resaltado en SS como las 49/2015, recurso 36/2015; 27/2015, recurso 31/2015; o 19/2015, recurso13/2015:

<< Pues bien, como señala la STS 251/2015, de 8 de mayo, el recurso de casación en la determinación del régimen de guarda y custodia no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales del procedimiento de familia. Es cierto que en la ley aragonesa el legislador se ha ocupado de establecer los factores a los que ha de atender el juzgador a la hora de decidir cuál de los sistemas de custodia posibles es el que más conviene en cada caso al menor, y establece una preferencia por la custodia compartida que obliga al juzgador de instancia a partir en su análisis de tal premisa, pero de ahí no se sigue que la Sala de casación pueda sustituir el criterio afirmado por la sentencia recurrida, si, atendidos aquellos factores, concluye razonadamente que la individual es la guarda que mejor satisface el interés del menor."

Por su parte, la ya citada sentencia de esta sala nº 21/2015 remacha esta idea cuando, tras señalar que la decisión sobre custodia pertenece al ámbito discrecional de la instancia, afirma que en la tomada por los tribunales de instancia << solo podría apreciarse su infracción [la del art. 80.2 CDFA] en el caso de que la misma [decisión] resultara irracional, ilógica o arbitraria, o claramente atentatoria contra el interés del menor. >>

La sentencia de la que discrepo lo afirma también cuando en su fundamento de derecho quinto razona:

<< además, debe también entenderse **que no corresponde tampoco, salvo también casos especiales que no se dan ahora, que el órgano de casación invada el ámbito de decisión discrecional que tiene reconocido el propio tribunal de instancia**. La competencia propia de esta Sala se dirige a determinar si la sentencia recurrida, dictada por la Audiencia Provincial, es ajustada a derecho o si, por el contrario, ha infringido la norma de aplicación, complementada con la jurisprudencia a observar en cada caso >>.

Sin embargo, olvida tal parecer cuando entrando el fondo de la cuestión decide sustituir la apreciación discrecional de la sala por la suya y actuar como órgano de tercera instancia.

SEXTO.- En el asunto que nos ocupa, el juzgador de primer grado expresa la razón de su decisión en el fundamento de derecho segundo de su sentencia en los siguientes términos:

<< En el caso de autos se va a establecer un sistema de custodia individual a favor de la actora, atendiendo el superior interés del menor y ello en función del informe psicológico

obrante en las actuaciones que así lo aconseja, manifestando que el sistema planteado por la parte demandada no se considera lo más beneficioso para el niño e incluso podría generar desequilibrio en las rutinas del niño, a mayor abundamiento teniendo en cuenta la posibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar, la actora tiene el mismo horario laboral que el horario escolar sin embargo, el padre el horario laboral de verano es rotativo e incluso tener que salir de su domicilio durante tres días, delegando en aquellos supuestos la guardia al padre del progenitor, sin embargo éste reside en distinta localidad y carece de carnet de conducir. >>

Por su parte, la sentencia de apelación, que acepta los fundamentos de la apelada y por tanto los incorpora, justifica así el rechazo del recurso de apelación interpuesto por Jairo contra la anterior decisión:

<< El hijo menor, , cuenta con 6 años de edad. Reside con su madre en C y acude al colegio en M, dónde vive el padre. El padre trabaja como peón especialista forestal en la base de Daroca, con horario de mañanas de octubre a julio, y el resto del año en turnos rotativos de mañana y tarde, debiendo atender emergencias durante seis meses.

La madre trabaja como auxiliar de guardería en la Comarca Campo de Daroca, servicio ubicado en Mainar.

El padre carece de apoyos familiares, su padre reside en Zaragoza.

El informe pericial evidencia una buena vinculación del menor con ambos progenitores, sin embargo, no considera la alternancia que propone el padre como el mejor sistema de vida del menor, al suponer tal cambio un factor generador de desequilibrio en el niño, aconsejando que quede bajo la custodia de la madre, aumentando los contactos con el padre...

Los extremos expuestos ponen de manifiesto que la solución adoptada por el Juzgador de instancia preserva de forma adecuada el superior interés del menor al valorar prioritariamente, de forma razonada, su estabilidad y bienestar, los que no quedarían salvaguardados con el sistema propuesto por el recurrente, carente de garantías en el correcto desarrollo del cuidado del hijo (artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón).

El recurso, en suma, debe ser desestimado y confirmada la Sentencia dictada en todos sus extremos, por cuanto, incluso, el sistema de visitas instaurado, es lo suficientemente amplio (con una pernocta intersemanal) para permitir un contacto frecuente entre padre e hijo. >>

Como se ve, las sentencias dan razones en justificación del pronunciamiento por el que atribuyen la custodia individual del menor de la madre, en particular, las conclusiones alcanzadas por el informe sicológico, y la total compatibilidad que a tal fin supone el trabajo de la madre en el mismo centro escolar de la localidad de Mainar al que acude el menor, que contrasta con la mayor dificultad del padre derivada de su trabajo como peón especialista forestal en la base de Daroca, con horario de mañanas de octubre a julio y el

resto del año en turnos rotativos de mañana y tarde, debiendo atender emergencias durante seis meses, lo que se ve agravado con la falta de apoyo de la familia paterna, pues el padre del recurrente reside en Zaragoza.

Tales razones se ajustan a los criterios señalados expresamente en el art. 80.2 CDFA, por lo que no cabe entender sino que los órganos de primera instancia se han mantenido dentro de los limites de discrecionalidad que comportan, sin que su decisión pueda ser tachada de *irracional, ilógica o arbitraria, o claramente atentatoria contra el interés del menor*, circunstancias que la sentencia de la que discrepo no aprecia que concurran, como expresamente afirma en en el pasaje más arriba transcrito de su fundamento de derecho quinto.

Finalmente, no puedo dejar de señalar que la sentencia mayoritaria margina la cuestión principal de qué es lo más conveniente al interés del menor en el caso concreto, y se conforma en el criterio general establecido en la norma, pues no dedica ni una sola línea a justificar la razón por la que entiende que la custodia compartida que impone satisface mejor aquél interés que la individual de la madre, frente al criterio unánime de quienes están más próximos a los autos: juez de primera instancia, tribunal de apelación, ministerio fiscal en la instancia y en casación, y perito asignado a los juzgados de familia.

Así las cosas, entiendo que no cabe apreciar la infracción del precepto que se entiende quebrantado."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 4 de mayo de 2016. Pensión de alimentos. Cuantía. Situación del alimentante. Régimen de visitas. Gastos de desplazamiento**

"PRIMERO.- Recurre la demandante dos pronunciamientos de la Sentencia de instancia, suplicando se eleve a 150€ mensuales la pensión alimenticia del hijo a cargo del padre y se imponga a éste el abono de la totalidad de los gastos de desplazamiento derivados del ejercicio del régimen de visitas durante los periodos vacacionales.

SEGUNDO.- Con respecto a la pensión alimenticia, y aún partiendo de la precaria situación económica en que se encuentra la madre; la que vive con el menor en casa de su madre, abuela materna, careciendo de trabajo e ingresos, es lo cierto que el demandado ha acreditado estar percibiendo en junio de 2015 prestación por desempleo por importe de 207,32€ (folio 69 de las actuaciones).

Alega residir en casa de sus padres en la provincia de Badajoz, teniendo otra hija de otra relación.

La escasez de los recursos acreditados impide la elevación de la pensión alimenticia del hijo menor, dada la prevalencia del principio de proporcionalidad que preside tales prestaciones (artículo 82 del Código de Derecho Foral de Aragón).

Sin embargo, debe acogerse la petición de su exoneración de los gastos de traslado del menor.

Es al padre al que corresponde ejercer las visitas con el hijo, siendo él el que efectúo su traslado de residencia voluntariamente, y, careciendo la madre de ingresos no puede imponérsele un gasto que haría inefectiva la pensión alimenticia del menor, cuando ella soporta su cuidado y atención diarios."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 9 de junio de 2016. Custodia compartida. Criterio preferente. Interés superior del menor. Motivación**

"PRIMERO.- Resultan acreditados en las instancias los siguientes hechos, relevantes para la resolución del recurso de casación interpuesto:

1.- D. Jesús B. B. y Dª Sagrario F. R. contrajeron matrimonio en Zaragoza el día 5 de septiembre de 1999.

2.- De dicha unión nació y vive un hijo llamado J, nacido en Zaragoza el 2002.

3.- El matrimonio se disolvió por divorcio, acordado en sentencia de 27 de marzo de 2009. El fallo de dicha sentencia atribuyó a Dª Sagrario la guarda y custodia del hijo común, con un régimen de visitas a favor del padre.

4.- Promovido proceso de modificación de medidas, recayó sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº Dieciséis de Zaragoza, de 21 de diciembre de 2012, en la que se acordó la custodia compartida por ambos progenitores respecto del hijo común. Esta modificación del régimen de custodia produciría efectos desde el 11 de enero de 2013. Dicha decisión fue confirmada por la Audiencia Provincial de esta ciudad, en sentencia de 22 de noviembre de 2013.

5.- En el mes de julio de 2014 el menor manifestó su deseo de vivir con la madre y de suprimir todo contacto con el padre, como consecuencia de un enfado con éste y de divergencias en cuanto a las relaciones personales.

6.- El 16 de septiembre de 2014 Dª Sagrario interpuso la demanda que da origen a los presentes autos, en la que instó la modificación de medidas definitivas de los efectos del divorcio, solicitando que se otorgue la guardia y custodia del menor a su favor, y formuló otros pedimentos relativos a pensión de alimentos y a la forma de sufragar los gastos del hijo.

7.- En este proceso recayó sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº Dieciséis de Zaragoza, de fecha 25 de mayo de 2015, que desestimó la demanda, confirmando las medidas adoptadas en la sentencia anterior, aunque estableció un sistema transitorio en cuanto al régimen de visitas entre el padre y el hijo, al efecto de recuperar la relación entre ellos.

8.- La representación de Dª Sagrario interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia, y tras su admisión y tramitación recayó sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 19 de enero de 2016, que lo estimó, acordando atribuir a Dª Sagrario F. R. la guarda y custodia individual del hijo común J B. F., con ejercicio compartido de la autoridad familiar en lo que exceda de su ámbito ordinario, además de establecer otros pronunciamientos respecto al régimen de visitas con el padre y a la pensión de alimentos, que no son objeto de este recurso.

Motivos del recurso de casación

SEGUNDO.- Frente a la citada sentencia de la Audiencia Provincial, la representación procesal de D. Jesús B. B. interpone recurso de casación, que funda en dos motivos:

1.- Por infracción del artículo 80.2 y del artículo 79.5 del Código de Derecho Foral de Aragón (en adelante, CDFA), al considerar que no ha sido respetada la preferencia que establece la norma de la custodia compartida sobre la custodia individual, invocando además la falta de motivación y justificación de las razones que motivan la revocación de la guarda y custodia compartida acordada previamente. En el desarrollo del motivo la parte recurrente considera, además, que en la sentencia de segunda instancia se ha infringido por inaplicación lo dispuesto en el artículo 75.2 del CDFA.

2.- Por infracción del artículo 79.5 del CDFA, entendiendo que no concurren circunstancias relevantes para modificar las medidas que contemplaban la guarda y custodia compartida, expresando que la modificación de medidas debe quedar sometida al régimen general indicado en el artículo 775 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

En atención a que ambos motivos se refieren a la infracción del artículo 79.5 del CDFA y a la procedencia de la decisión judicial sobre la guarda y custodia del menor, van a ser objeto de examen conjunto. Las consideraciones jurídicas que seguirán han de referirse a las infracciones denunciadas, si bien no se detendrán en las alegaciones referidas al artículo 75.2 del CDFA que, en sede de disposiciones generales acerca de los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, se refiere a la finalidad de esta sección –la sección tercera del capítulo segundo, libro primero, del CDFA- y establece un principio general dirigido a promover unas relaciones continuadas de los progenitores con sus hijos, mediante una participación responsable, compartida e igualitaria en su crianza y educación, como principio inspirador de las normas jurídicas subsiguientes; además de que su cita en el motivo primero del recurso se incluye, en deficiente técnica casacional, en el desarrollo de aquel y sin indicación de las razones por las que se considera infringido por inaplicación.

Examen de los motivos del recurso de casación

TERCERO.- Para el examen de los motivos del recurso es necesario partir de los hechos acreditados en las instancias, y que sucintamente se han relatado en el primero de estos fundamentos jurídicos. En lo que atañe a la procedencia de la modificación de medidas, el artículo 79.5 del CDFA y el artículo 775 de la Ley Enjuiciamiento Civil establecen la posibilidad de que la medidas judiciales adoptadas en esta clase de procesos pueden ser modificadas cuando concurran circunstancias relevantes, que en el caso de autos se concretan en la edad actual de J, que cumplirá catorce años el próximo día 16 de junio, y en los problemas habidos en la relación con su padre, con el que no ha mantenido contacto en los últimos meses. De esta forma resultaba procedente la tramitación del proceso de modificación de medidas y posible la adopción de un nuevo sistema de guarda y custodia, acorde a lo pedido y conforme al resultado de la prueba practicada.

Ciertamente, el régimen de custodia compartida es el preferente y predeterminado por el legislador aragonés, según se establece en el artículo 80.2 del CDFA, lo que se hace en busca del interés del menor y en orden al pleno desarrollo de su personalidad. Pero el citado precepto permite que, en interés del menor, el Juez adopte un sistema de custodia individual cuando sea más conveniente, atendiendo a los factores que el propio precepto señala, y motivando suficientemente las razones que conducen para establecer este régimen de guarda y custodia –en este sentido, sentencias de esta Sala de 1 de febrero de 2012 (nº 4/2012), 27 de noviembre de 2012 (nº 39/2012), 17 de julio de 2013 (nº 35/2013), 30 de septiembre de 2013 (nº 41/2013).

En el caso de autos la sentencia de la Audiencia Provincial recoge los siguientes criterios valorativos, que expresa en el fundamento de derecho segundo:

"La modificación de medidas instada, dada la fecha de las que constituyen su objeto -sentencia de 21-12-12-, queda sometida al régimen general indicado del artículo 775 de la LEC, de modo que el interesado en ella debe alegar y probar una alteración relevante de las circunstancias que presidieron su adopción, extremo éste en el que es de señalar que la STSJA 26-5-14, tras señalar las diferencias entre los presupuestos de la modificación en los arts. 91 CC y 79.5 CDFA –alteración sustancial en el primero, alteración relevante en el segundo, lo que denota en este segundo caso una mayor flexibilidad- declara, en relación a estas medidas, relativas a menores, que no se trata ya de constatar si ha quedado acreditada una alteración sustancial de circunstancias existentes en el momento en que recayó la previa decisión judicial, sino si concurren o no aquellas causas o circunstancias que por su relevancia justifican su modificación, teniéndola todas aquéllas que evidencien que las acordadas ya no se convienen con el interés del menor. Conclusión ésta que la prueba practicada autoriza sin duda.

Del padre, diagnosticado de trastorno bipolar en febrero de 2008, el Centro de Salud Mental de referencia refiere una buena adherencia al tratamiento, y la psicóloga manifiesta que en el momento del informe –mayo 2015- se encontraba en un periodo de estabilización con predominio de fases depresivas moderadas. Y la trabajadora social informa que dispone de recursos suficientes y total disponibilidad para el cuidado de su hijo, pero carece de habilidades domésticas y de organización familiar.

La Sra. F., por su parte, posee recursos suficientes, una sólida red de apoyo y su horario le permite compatibilizar su vida familiar y laboral.

En cuanto a J cumplirá 14 años el 16-6-2016. Vive con su madre en casa de la abuela paterna y desde la segunda quincena de 2014, cuando deja el domicilio de su padre, hasta enero de 2015 estuvo con su padre en dos ocasiones, no habiendo mantenido contacto con él desde entonces. Ante la Psicóloga refirió que con su madre realiza actividades programadas y ha iniciado actividades con amigos, mientras que con su padre apenas participa en actividades conjuntas y no lo ayuda en los deberes a pesar de que se lo pide; que con su padre el periodo de custodia compartida no era real, ya que pasaba la mayor parte del tiempo con su madre, que se ocupaba de sus rutinas y sobre todo del control de sus deberes, limitándose a pernoctar en el domicilio materno; y

expresó su preferencia por vivir con ella, aunque sin mostrar rechazo a relacionarse con su padre ni ruptura de la relación afectiva con él. Y en términos similares se manifestó en la exploración realizada en primera instancia, al igual que en esta alzada, en la que con muestras de perceptible madurez, sin indicio de influencia materna, insistió en que no quiere estar con su padre, con el que no hace nada, sino con su madre y en su entorno, que da una mejor respuesta a las exigencias propias de su edad.

Realizado el estudio de la situación familiar la psicóloga aconseja que el menor permanezca con la madre, teniendo en cuenta que su desarrollo evolutivo ha dado lugar a cambios en sus necesidades y exigencias, que necesita relacionarse con sus iguales y llevar a cabo actividades que favorecen el desarrollo de su personalidad, y que las condiciones y circunstancias maternas responden de manera más adecuada a sus necesidades. Recomendando un régimen de visitas consistente en fines de semana alternos de viernes a la salida del colegio al lunes a la entrada en el mismo, y una tarde a la semana, el miércoles, desde la salida del colegio a la entrada al día siguiente, así como la mitad de las vacaciones escolares.

La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador aragonés, que se aplicará siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011), pero puede establecerse un sistema de custodia individual cuando éste resulte más conveniente para el interés del menor, evaluados los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011), siendo relevante para adoptar la decisión la prueba practicada, especialmente los informes psicosociales –art. 80.3 CDFA- y la opinión de los hijos menores, cuando tengan suficiente juicio –art. 80.2 c) CDFA-.

Y todo ello ponderado, si para negarse a la vuelta con su padre adujo el menor razones nimias en principio, como el enfado con él por no querer llevarlo a casa de un primo o la respuesta del padre a su aviso de que se iba con su madre y algunos desacuerdos en tema de limpieza de la vivienda y control de su ropa e higiene, la prueba practicada ha puesto de relieve, como se ha dicho, razones más profundas que permiten concluir que la custodia individual resulta en este caso más conveniente para el interés del menor, justificando el desplazamiento del tipo de custodia preferente acordado en la primera instancia del procedimiento."

CUARTO.- Como indicamos en la sentencia de esta Sala de 3 de febrero de 2016 (nº 4/2016), el interés del menor es prevalente al momento de establecer el sistema de su guarda y custodia, siendo dicho interés un concepto jurídico indeterminado, que en cada caso es necesario determinar, evitando siempre eventuales arbitrariedades.

En el caso presente la sentencia de la Audiencia Provincial no desconoce la prioridad legal a favor de la custodia compartida, pues así lo expresa en el fundamento jurídico que se ha reseñado. Y no se trata de una expresión retórica, ya que el resto de la fundamentación se centra en justificar la decisión adoptada que, separándose del criterio preferencial, opta por la guarda y custodia de la madre.

A estos efectos son destacables los siguientes argumentos: a) el padre dispone de recursos suficientes y total disponibilidad para el cuidado de su hijo, pero carece de habilidades domésticas y de organización familiar; b) la Sra. F., por su parte, posee recursos suficientes, una sólida red de apoyo y su horario le permite compatibilizar su vida familiar y laboral; c) de la exploración del menor realizado ante la sicóloga resulta que J con su madre realiza actividades programadas y ha iniciado actividades con amigos, mientras que con su padre apenas participa en actividades conjuntas y no lo ayuda en los deberes a pesar de que se lo pide; d) que con su padre el periodo de custodia compartida no era real, ya que pasaba la mayor parte del tiempo con su madre, que se ocupaba de sus rutinas y sobre todo del control de sus deberes; e) el menor se manifestó en la exploración realizada en primera instancia, al igual que en la alzada, con muestras de perceptible madurez, sin indicio de influencia materna, y en ellas insistió en que no quiere estar con su padre, con el que no hace nada, sino con su madre y en su entorno, que da una mejor respuesta a las exigencias propias de su edad.

Estos argumentos revelan que la Audiencia Provincial ha atendido a los factores recogidos por el legislador en el art. 80.2 del CDFA, de modo que su decisión, suficientemente motivada, se ajusta a la norma y adopta una de las decisiones posibles conforme a aquélla.

QUINTO.- Es consolidada la doctrina jurisprudencial que recoge la STS de 29 de junio de 2015, (nº: 417/2015), citada por esta Sala en nuestra sentencia de 16 de diciembre de 2015 (nº 36/2015), conforme a la cual:

"La función de la casación no es de tercera instancia, sino de control de la aplicación de derecho a la cuestión de hecho, que es incólume en casación, tal como han afirmado innumerables sentencias, como las de 25 junio 2010, 5 mayo 2011, 4 abril 2012, 6 mayo 2013, 24 octubre 2014. Lo cual lleva consigo la proscripción de hacer supuesto de la cuestión; es decir, dar por probados hechos que no han sido declarados así por la sentencia de instancia o prescindir de los que sí han sido declarados probados: sentencias de 6 octubre 2011, 19 abril 2013, 11 junio 2013, 6 febrero 2015 ."

De este modo la finalidad del recurso de casación no consiste en llevar a cabo una nueva valoración de la prueba, o una comparación entre la sentencia dictada en primera y segunda instancia, sino la de determinar, en la función nomofiláctica que esencialmente corresponde a la casación, si la sentencia de la Audiencia ha infringido el ordenamiento jurídico, en cuanto a las normas a que se refieren los motivos del recurso.

Desde esta perspectiva la sentencia impugnada, que respeta el criterio preferente y justifica su opción por considerar la custodia individual para la madre -atendidas las circunstancias concurrentes- más adecuada al interés del menor, en modo alguno vulnera el artículo 80.2, sin que la Sala aprecie atisbo de irracionalidad o arbitrariedad en tal decisión.

En este punto hemos de hacer, para concluir, una referencia a la argumentación de la sentencia cuando afirma que *"la prueba practicada ha puesto de relieve, como se ha*

dicho, razones más profundas que permiten concluir que la custodia individual resulta en este caso más conveniente para el interés del menor". Si existiese únicamente esa argumentación y se entendiese como apelación a razones que quedan en el arcano de la conciencia, podría razonarse sólidamente a favor de la casación por razón de arbitrariedad o de falta de motivación; pero el examen completo de la argumentación -que actúa como expresión lingüística de un razonamiento-, sin sacar de contexto una sola frase, revela que el tribunal provincial no ha pretendido excluir la motivación sobre las verdaderas razones de la decisión, sino valorar como relevantes, y no nimias, las discrepancias del menor con el estilo educativo que ejercía su padre.

Procede en consecuencia desestimar el recurso de casación"

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 10 de junio de 2016. Custodia compartida. Interés superior del menor. Edad del menor. Arraigo familiar. Régimen de visitas. Opinión del niño. Intervención pública. Compensación económica**

"PRIMERO.- De la relación entre la actora y el demandado nació su hijo G el 2003.

Tras las demandas interpuestas por ambos progenitores en las que cada uno solicitaba para sí la guarda y custodia del menor, que fueron acumuladas en el procedimiento del que trae causa el presente recurso, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Zaragoza dictó sentencia de 9 de marzo de 2015 en el que atribuyó la guarda y custodia del menor a la madre condicionada a que ambos progenitores y el hijo se sometieran durante un período de seis meses a la terapia que se les marcara desde el IASS y Protección de la Infancia y Tutelas del Gobierno de Aragón en relación con ADCARA, siendo estas instituciones desde las que se fijaría el régimen de visitas entre padre e hijo. Si transcurridos los seis meses no se hubiera producido mejora en la relación entre ambos, la sentencia autoriza al IASS y al Servicio de Protección de la Infancia y Tutela para llevar a cabo el cambio de la tutela a favor del Gobierno de Aragón a fin de sacar al menor de la situación de riesgo en que se encuentra.

No se establece en la sentencia régimen de visitas entre padre e hijo, siendo las instituciones intervinientes en la terapia familiar las que habrían de establecer el régimen más adecuado conforme evolucionase la terapia a la que se va a someter el grupo familiar.

Se fija una pensión alimenticia para el hijo a cargo del padre de 500 euros mensuales, no se señala uso de la vivienda familiar, sin perjuicio de su adjudicación a su propietario, el Sr. V. , y no se da lugar a la compensación económica solicitada por la Sra. N.

Ambas partes interpusieron recurso de apelación. La actora en solicitud de que se dejara sin efecto la autorización otorgada al IASS para asumir la tutela del hijo, que se establezca el mantenimiento de la terapia familiar mientras progrese la relación paterno filial, y que se fije una compensación económica de 1.300 € mensuales durante cinco años a cargo del Sr. V.; y el demandado en solicitud de que se le otorgue la custodia del hijo con el régimen de visitas que establezca el IMLA para la madre.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial desestimó el recurso del Sr. V. y estimó parcialmente el de la Sra. N. en el sentido de mantener a su favor la custodia del hijo, sin condición alguna, suprimiéndose la autorización concedida al IASS para la asunción de su tutela y (suprimiéndose) las visitas hasta ahora existentes con el padre al haber cesado la terapia instaurada. Y establece a favor de la Sra. N. una compensación económica de 400 € mensuales durante cinco años, actualizable anualmente conforme a las variaciones del IPC.

SEGUNDO.- El primer motivo del recurso de casación interpuesto por la representación del Sr. V. se basa en infracción de lo establecido en el artículo 80.2 del CDFA en consonancia con el artículo 76.2, con vulneración del artículo 39.2 de la Constitución, e incorrecta aplicación del principio de protección del interés del menor al no establecer la custodia del menor a favor de su padre.

La sentencia de primera instancia (fundamento tercero) parte de la afirmación de que no existe ningún impedimento para que la guarda y custodia del menor sea atribuida tanto a la madre como al padre. Destaca del informe del Gabinete Psicosocial del IMLA que *"es evidente que la influencia de la madre es perjudicial para el menor por cuanto le está alejando tanto del padre como del entorno paterno; sin embargo, tal y como postula la propia psicóloga del IMLA, la atribución en este momento de la guarda y custodia al padre sería todavía más perjudicial para éste que mantener la guarda y custodia con la madre como hasta ahora se estaba produciendo, por cuanto considera que en atención a la edad de G éste podría no solo escaparse al estar con su padre sino que además podrían producirse situaciones violentas de enfrentamiento con el padre"*.

Y, en búsqueda de la solución más adecuada para el menor, coincidiendo con la psicóloga del IMLA, *"a pesar de considerar que Dª Mª Pilar N. no es una buena influencia (por no decir una mala influencia) para su hijo, no se le puede atribuir de forma repentina la guarda y custodia a D. Julián pues es un cambio excesivamente brusco y extremo que puede producir un mayor rechazo del menor hacia su padre."*

No obstante, la sentencia somete la decisión a los dictámenes o informes que emita Protección de la Infancia y Tutela de la DGA, en colaboración con el IASS y con la Asociación de Desarrollo Comunitario en Áreas de Aragón (ADCARA). Y si la actuación de estas instituciones no produce efecto en el plazo de seis meses, *"debido a la situación de riesgo del menor al haber perdido todo el contacto con el padre y el entorno paterno, y considerando que es la madre la causante de este deterioro, se debería atribuir la patria potestad al Gobierno de Aragón para que Guillermo, desde un entorno neutral inicie una nueva relación con su padre y con su madre, sin la influencia de uno ni de otro, para que se vuelvan a establecer los vínculos afectivos con ambos pero en condiciones de igualdad."*

La sentencia de apelación da cuenta del resultado de la exploración del menor en la alzada (fundamento segundo): *"...manifestando de forma tranquila y razonada estar contento y adaptado a su actual sistema de vida en S. I. , a su nuevo colegio en este barrio, donde se lleva bien con sus compañeros, juega a balonmano y se siente integrado alegando no sentirse cómodo en presencia de su padre, con el que le resulta difícil hablar y con el que hay tensión, suponiéndole las visitas supervisadas establecidas un gran esfuerzo y pérdida de tiempo, por los traslados que comportan y porque no tiene interés en verle, cumpliéndolas porque lo manda el Juez"*.

También refiere la sentencia, aunque no aparece como manifestación en el acta de exploración, que el menor alude haber presenciado incidentes violentos por parte de su

padre que le provocan un gran rechazo. Y que desde el inicio del verano la situación se ha radicalizado, negándose el niño a ver a su padre.

A continuación (fundamento tercero) la sentencia se refiere a la forma en que se han desarrollado las visitas entre padre e hijo, tuteladas por el P.E.F., en un ambiente tenso y con gran malestar del menor, habiendo acudido la madre y el menor voluntariamente a tratamiento en la Fundación ADCARA, e informando el IASS del cese de su intervención tras un incidente conflictivo ocurrido en julio de 2015 entre padre e hijo motivador del retroceso en los avances conseguidos.

Resume el informe del IASS *"en el que comunica la suspensión de la terapia familiar implantada ante el retroceso del menor que se niega a asistir a la misma, y ello tras el incidente acaecido en julio de 2015 que derivó en denuncia penal. El IASS ante la influencia negativa de la madre y su entorno hacia el padre propone una separación provisional del menor de la madre para restablecer los vínculos con ambos progenitores en condiciones de igualdad, considerando el sometimiento de Dª Pilar a intervención psiquiátrica. Ambos informes indican también la negativa influencia de la abuela materna en la actitud del menor respecto de su padre, la falta de constancia de una actitud deliberada de la madre en la influencia del menor respecto de su padre, y en la necesidad de que este último adquiera habilidades de acercamiento y destreza respecto del niño, centrándose más en sus necesidades que en las suyas propias."*

Y concluye la sentencia: "*Tales informes y lo hasta ahora actuado determinan que, en interés del niño, y ante su clara actitud de rechazo, se mantenga la custodia individual a favor de la madre para preservar su estabilidad y serenidad, entorno en el que se desenvuelve de forma adecuada, social y académicamente, sin establecer visitas con el padre, interrumpidas ya tras el cese de las terapias*".

La sentencia resuelve así, simultáneamente y con los mismos razonamientos, lo relativo a la guarda y custodia (individual para la madre) y al régimen de visitas del padre (que no se acuerda). Y rechaza que exista situación de desamparo del menor, a pesar de constatar el informe del IASS maltrato psicológico por influencia de la madre y de la familia materna que llevan al rechazo paterno, por no contemplar la autónoma voluntad del menor, también derivada de determinados comportamientos paternos por él rechazables. Afirma que no se cumple el supuesto de ausencia de recursos familiares previsto en el Reglamento de medidas de protección de menores en situación de riesgo o desamparo (Decreto 190/2008, de 7 de octubre, del Gobierno de Aragón), para adoptar medidas como la combatida.

TERCERO.- Afirma la parte recurrente que se ha producido la infracción del artículo 80.2 del CDFA al no conceder la guarda y custodia del menor a favor del padre porque, aunque en la atribución de la custodia individual no hay criterio preferente, se debe atender también para ello a los factores señalados en el artículo 80.2 para valorarlos respecto a cada uno de los progenitores individualmente.

Considera que no son inconveniente respecto a él ni la edad del hijo y su arraigo social y familiar con la familia paterna, pues el menor mantenía con todos una buena relación hasta la separación. Niega la aptitud y voluntad de la madre, que afirma para sí, por no ser consciente del grave daño que provoca al hijo con su actitud. Y también afirma sus posibilidades de conciliación de la vida laboral.

Se ocupa especialmente del valor de la opinión del menor que, dada la influencia y manipulación de la madre y de la abuela materna sobre el mismo, hace que la opinión del menor sea realmente la de ellas dos.

La sentencia recurrida, como hemos visto, reproduce ampliamente los informes de las entidades y asociaciones que los emitieron, de los que se deduce la difícil situación que debe ser afrontada ya que constatan la tensa relación entre padre e hijo con referencia a la negativa influencia de la madre y su entorno, y también a la necesidad de que el padre adquiera habilidades de acercamiento y destreza respecto al niño.

Con similares informes ya la sentencia de primera instancia había llegado a la misma conclusión de atribuir la custodia del menor a la madre, a pesar de la negativa influencia para el menor de ella y de su entorno, por apartarle del padre. Ahora la sentencia de apelación tiene en cuenta, además, el resultado de la exploración del menor, que en el momento de su realización contaba con doce años de edad (con derecho a ser oído conforme a lo dispuesto en el artículo 76.4 en relación con el artículo 6, ambos del CDFA).

En base a todo ello la sentencia recurrida concluye que el interés del menor aconseja mantener la custodia individual de la madre para preservar su estabilidad y serenidad. Frente a ello el motivo del recurso que examinamos pretende alterar la valoración de la prueba argumentando, fundamentalmente, la negativa influencia de la madre y de la abuela materna tendente a perjudicar la relación del menor con su padre.

La sentencia, según hemos visto, no ignora la realidad de la mala influencia en el menor de la madre y de la abuela materna, y así lo constata al citar el contenido del informe del P.E.F. y el del IASS, destacando también de los mismos que no consta una actitud deliberada de la madre en la influencia del menor respecto de su padre, y la necesidad de que este último adquiera habilidades de acercamiento y destreza respecto del niño.

En base a tales informes y al manifestado rechazo del niño acuerda la custodia individual de la madre por resultar más acorde al interés del menor, y este resultado probatorio, debidamente justificado, no puede ser alterado por las subjetivas apreciaciones de la parte recurrente, pues no se acredita que resulte arbitrario, irracional o ilógico, o claramente atentatorio contra el interés del menor.

Como ha manifestado reiteradamente esta Sala (por todas, la sentencia nº 4/2016, de 3 de febrero, recurso de casación 57/2015, y las allí citadas), el interés del menor es el prevalente para establecer el sistema de guarda y custodia, siendo un concepto jurídico

indeterminado que es preciso concretar en cada caso, de modo que no resulta desconocido ni infringido cuando se opta por el de custodia individual frente al preferente de compartida, por resultar más conveniente para el menor (artículo 80.2 CDFA). En el presente caso, en el que se resuelve la petición de custodia individual de cada uno de los progenitores, la sentencia, valorando las difíciles circunstancias de la situación, opta por mantener la custodia de la madre teniendo en cuenta todas las circunstancias ya expuestas, como mejor forma de preservar el interés del menor.

En consecuencia, no resultan infringidos los artículos 80.2 y 76.2 del CDFA, por lo que el motivo debe ser desestimado.

CUARTO.- Los motivos segundo y tercero, que en el recurso se exponen conjuntamente, se interponen por infracción de lo establecido en los artículos 80.1 y 79.2 del CDFA en consonancia con los artículos 76.3.a) y 75.2, con vulneración también del principio del beneficio e interés del menor, y artículo 39 CE al no fijar un régimen de visitas a favor del padre, infringiéndose así el derecho del menor a un contacto directo y frecuente con su padre y familia paterna.

Argumenta la parte recurrente que el no señalamiento de visitas para el padre significaría condenarle a no ver más a su hijo, con pérdida para el menor de la referencia de la figura paterna, y los trastornos emocionales y psicológicos que ello conllevaría. A su juicio ninguno de los informes obrantes en las actuaciones aconseja no establecer un régimen de visitas sino que, al contrario, lo que aconseja el IASS es la separación temporal del menor con su entorno materno por resultar perjudicial para él.

El Ministerio Fiscal considera que debe estimarse este motivo del recurso por resultar infringidos los preceptos citados al no señalar régimen de visitas por las circunstancias conflictivas que afectan a ascendientes y descendiente. La negativa del menor no justificaría la supresión del régimen de comunicación, estancias o visitas, y se infringiría el artículo 80.1, en perjuicio del propio menor y del ascendiente que no ha sido privado de las funciones de la autoridad familiar.

La parte recurrida muestra su conformidad con lo resuelto en este punto por la sentencia de la Audiencia Provincial, si bien pone de manifiesto que ya desde el procedimiento de medidas cautelares previas estimaba que debía establecerse un sistema progresivo de visitas que se fuera incrementando conforme fuera mejorando la relación entre padre e hijo. De hecho, en el suplico de su demanda solicitó que se estableciera un régimen progresivo de visitas en sábados alternos desde las 11 hasta las 20 horas, con entrega y recogida en el P.E.F.

Considera dicha parte que el régimen de visitas acordado por el Juzgado de Violencia en las medidas cautelares previas, más amplio, no dio el resultado apetecido, sino al contrario, por el rechazo del hijo. Dado que las entrevistas entre ambos se habían producido en un ambiente de gran tensión y malestar para el menor y que, según el informe de ADCARA, se debía profundizar en las habilidades parentales y destrezas de

acercamiento al hijo, que sufría crisis de ansiedad por tales vistas, las pruebas aconsejaban suprimir las vistas con el padre.

Como ya se ha expuesto, la sentencia recurrida resuelve de forma conjunta la atribución de la custodia a favor de la madre y el no establecimiento de visitas en favor del padre centrando sus razonamientos en la conclusión de los distintos informes sobre la conveniencia de mantener la custodia individual y, de forma explícita, en la voluntad expresada por el menor en la exploración judicial. No contiene la sentencia un razonamiento específicamente dirigido a justificar la no continuación del régimen de visitas.

El párrafo tercero del artículo 80.1 del CDFA determina que, en los casos de custodia individual, se fijará un régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro progenitor que le garantice el ejercicio de las funciones propias de la autoridad familiar.

Se configura este régimen de comunicación en la doble vertiente del derecho de los menores a un contacto directo con los padres de modo regular (artículo 76.3.a), y el derecho de los padres para garantizar el ejercicio de las funciones propias de la autoridad familiar (artículo 80.1, en relación –artículo 59 b- con el derecho y obligación de los padres, aunque no vivan con el menor, e incluso cuando no ostenten la autoridad familiar, a visitarlo y relacionarse con él), añadido a las medidas a adoptar por los jueces para garantizar la continuidad y la efectividad del mantenimiento de los vínculos de los hijos menores con cada uno de sus progenitores, así como de la relación con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas (artículo 79.2.a). No se trata de un derecho libremente disponible, tampoco para el menor, que en última instancia (artículo 60) será dotado de eficacia, o suspendido, modificado o denegado por el juez, atendiendo a su interés. Y para solicitar la intervención judicial se legitima a todos los interesados, lo que también indica que no se trata de un derecho exclusivo del menor aunque permanentemente concebido en su interés y dirigido al mismo.

En las relaciones entre ascendientes y descendientes (Título II del Libro Primero del CDFA), y dentro de los efectos de la filiación (Capítulo primero), el artículo 60.1 del CDFA configura las relaciones de los hijos con ambos padres, con sus abuelos y otros parientes y allegados, como un derecho de los primeros, salvo si, excepcionalmente, el interés del menor lo desaconseja (el subrayado es nuestro).

Así pues, el no establecimiento de un régimen de comunicación, estancias o visitas entre padres e hijos y los demás parientes citados, exige que, excepcionalmente, se justifique por desaconsejarlo el interés del menor. En el presente caso se ha atendido exclusivamente a la voluntad del menor que, como señala el Ministerio Fiscal, no puede suponer, por sí sola, el elemento decisorio tratándose de un niño de doce años, pues tal decisión puede suponer un perjuicio para él mismo. De hecho, los informes periciales subrayaban, ya para la decisión sobre la custodia, la necesidad de mantener los vínculos con su padre para contrarrestar la negativa influencia del entorno materno. Y la representación de la madre avalaba la necesidad de mantener tal relación mediante un régimen progresivo de visitas, sin perjuicio de que no haya dado resultado positivo, lo que

requerirá un esfuerzo mayor de todos los implicados para conseguir su efecto beneficioso, que nadie niega.

Por ello, no habiéndose dado la justificación excepcional que la norma exige para no establecer un régimen de comunicación, estancias o visitas entre padre e hijo, se han infringido los preceptos citados y en tal sentido debe ser casada la sentencia.

Asumiendo la instancia por tal motivo, se confirma en este punto lo resuelto por la sentencia de 9 de marzo de 2015 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2, en los términos del apartado 2º de su fallo.

QUINTO.- El cuarto motivo del recurso se articula por infracción de los apartados 1 y 3 del artículo 83 del CDF, en relación a la fijación de una compensación económica a favor de la Sra. N. , su cuantía y duración. Y el motivo quinto por infracción de lo establecido en el artículo 310, apartado 1, del CDFA, en relación al establecimiento de una compensación económica a favor de la Sra. N. , su cuantía y duración.

Ambos motivos se refieren a una misma cuestión, la compensación económica en favor de la Sra. N. , aun con contenidos y fundamentos distintos, por lo que se resolverán conjuntamente.

En el cuarto motivo alega la parte recurrente que el Juzgado, valorando las pruebas practicadas, llegó a la conclusión de la inexistencia de desequilibrio, pero la sala de apelación, sin haber valorado el conjunto probatorio, concluye que existe desequilibrio y fija una cantidad de 400 euros mensuales durante cinco años. La parte recurrente centra sus argumentos en cuestiones de hecho sobre las circunstancias económicas de ambos, para defender que no se ha producido desequilibrio.

De forma parecida alega sobre las circunstancias de hecho para negar que se haya producido desigualdad patrimonial entre los convivientes a la que se refiere el artículo 310 del CDFA, como supuesto de hecho para poder exigir una compensación económica.

La parte actora había solicitado en su demanda una compensación económica con fundamento expreso en el artículo 310.1.b) del CDFA. La sentencia del Juzgado, razonando (primer párrafo del fundamentos sexto) que habrá de resolver sobre la compensación económica del artículo 310 y no sobre una pensión compensatoria, examina los requisitos de dicho precepto sobre contribución económica del reclamante a la adquisición de los bienes y su dedicación al hogar o a los hijos del otro y, negando la concurrencia de los mismos en la Sra. Navarro, desestima su petición.

En el recurso de apelación de esa parte específicamente se rebate la valoración de la prueba de la sentencia del Juzgado sobre los requisitos del artículo 310 (convivencia de la pareja, dedicación al hogar y al hijo común dejando su trabajo por ello, y el patrimonio de su pareja).

Sin embargo, la sentencia recurrida se refiere en su fundamento cuarto a la fijación de una asignación compensatoria (sic) y la acuerda para Dª Mª Pilar en base al tiempo de

convivencia, trabajos e ingresos de uno y otro y dedicación de ella a la familia, concluyendo que *"es claro el descenso económico provocado por la ruptura en la Sra. N."*. No se cita precepto alguno pero los parámetros que indica y la propia denominación que utiliza denotan que se concede una asignación compensatoria del artículo 83 CDFA.

En el motivo sexto de los de infracción procesal, que resultó inadmitido, la parte recurrente alegaba infracción del artículo 218.2 LEC por falta de motivación al señalar la compensación económica y manifestaba que la sentencia no citaba precepto alguno por lo que ignoraba si se reconocía la compensación con base en el artículo 310 o en el artículo 83 del CDFA. Pero no articulaba motivo de infracción procesal que pusiera de manifiesto el posible desajuste entre lo pedido por la parte con su justificación y lo resuelto en la sentencia de apelación, por lo que nada cabe razonar ni decidir al respecto. Y en el auto de18 de marzo de 2016 inadmitiendo los motivos de infracción procesal ya se puso de manifiesto que no había falta de motivación pues la sentencia señalaba las circunstancias tenidas en cuenta para fijar la compensación, aunque no se enmarcaran en un precepto u otro.

En esta situación solo cabe examinar si se han infringido los preceptos citados, para lo que hay que partir de que, a la vista del fundamento cuarto de la sentencia, lo acordado en la misma es una asignación compensatoria del artículo 83 pues, al margen de la propia denominación, los parámetros examinados son los que llevan a la existencia de un desequilibrio económico provocado por la ruptura (descenso económico en la Sra. N. , dice la sentencia). Por ello, no siendo aplicado el artículo 310, no cabe alegar su infracción.

Y, fundamentalmente, existiendo hijos a cargo (Título II, Capítulo II, Sección 3ª, del CDFA), resulta aplicable también a las parejas no casadas la posible asignación compensatoria del artículo 83, por lo que éste es el precepto aplicable y no el artículo 310.

En el motivo cuarto del recurso, que examinamos, la parte recurrente expone su desacuerdo con la valoración de los parámetros realizada en la sentencia, aun habiendo afirmado antes la falta de motivación, y aunque escuetamente motivados no cabe en casación la mera discrepancia con los mismos pretendiendo una nueva valoración de la prueba. En definitiva, debe respetarse la valoración de la prueba efectuada y, con ello, la decisión sobre la asignación compensatoria, por no haber sido infringido el artículo 83 del CDFA."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número uno de Ejea de los Caballeros de 10 de junio de 2016. Guarda y custodia. Régimen de visitas. Pensión de alimentos**

"Primero.- Se considera acreditado que de la relación habida entre C y A nació una hija llamada N, el 2009. Así se desprende de la certificación de nacimiento aportada como documento 2 de la demanda.

Se considera también acreditado que los litigantes finalizaron su convivencia y que la niña quedó en compañía de la madre. Desde entonces, aparte de algún período en el que no ha habido contacto alguno con el padre (cuando estuvo en prisión), las visitas han sido irregulares, pese a haberse establecido un pacto que se protocolizó notarialmente, y otro que se alcanzó ante los Servicios Sociales. Así se desprende del informe de estos Servicios, aparte de la declaración de los propios litigantes que, en este aspecto, aún con alguna diferencia de matiz, vienen a coincidir.

De la declaración de las partes y el informe de Servicios Sociales, así como de la consulta del Punto Neutro Judicial, se desprende que A no tiene contrato de trabajo, aunque ayuda en una empresa familiar de hostelería, por lo que recibe una gratificación que no ha sido cuantificada. La madre trabaja de forma temporal en brigadas del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, por lo que recibe un sueldo de casi 700 euros.

Segundo.- La principal cuestión que se discute en este procedimiento es la custodia de la hija menor, N.

La demandante pide que se le atribuya la custodia, estableciéndose un régimen de visitas a favor del padre, que no incluiría pernoctas.

El padre, por su parte, solicita que se establezca un régimen de custodia compartida, por semanas alternas, y mitad de vacaciones para cada progenitor.

El artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón dispone lo siguiente:

"*1. Cada uno de los progenitores por separado, o ambos de común acuerdo, podrán solicitar al Juez que la guarda y custodia de los hijos menores o incapacitados sea ejercida de forma compartida por ambos o por uno solo de ellos.*

En los casos de custodia compartida, se fijará un régimen de convivencia de cada uno de los padres con los hijos adaptado a las circunstancias de la situación familiar, que garantice a ambos progenitores el ejercicio de sus derechos y obligaciones en situación de igualdad.

En los casos de custodia individual, se fijará un régimen de comunicación, estancias o visitas con el otro progenitor que le garantice el ejercicio de las funciones propias de la autoridad familiar.

2. El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y atendiendo, además, a los siguientes factores:

a. La edad de los hijos.

b. El arraigo social y familiar de los hijos.

c. La opinión de los hijos siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años.

d. La aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos.

e. Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.

f. Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia.

3. Antes de adoptar su decisión, el Juez podrá, de oficio o a instancia de parte, recabar informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas debidamente cualificados e independientes, relativos a la idoneidad del modo de ejercicio de la autoridad familiar y del régimen de custodia de las personas menores.

4. Salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se adoptarán soluciones que supongan la separación de los hermanos.

5. La objeción a la custodia compartida de uno de los progenitores que trate de obtener la custodia individual, no será base suficiente para considerar que la custodia compartida no coincide con el mejor interés del menor.

6. No procederá la atribución de la guarda y custodia a uno de los progenitores, ni individual ni compartida, cuando esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos, y se haya dictado resolución judicial motivada en la que se constaten indicios fundados y racionales de criminalidad. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género".

El artículo trascrito establece la custodia compartida como forma preferente de custodia, salvo que la custodia individual sea más conveniente.

El legislador aragonés parte del establecimiento de una custodia compartida en el caso de ruptura de la convivencia de la pareja, como regla general, salvo que haya motivos que aconsejen una custodia individual. En la exposición de motivos de la Ley 2/2010, que introdujo esta regulación, parece partirse de que este tipo de régimen redunda, en

principio, en el interés de los menores, y entronca esta decisión legislativa con la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y la obligación de los Estados a mantener las relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores de modo regular; con la igualdad entre ambos progenitores; con el derecho de los hijos a mantener una relación equilibrada y continuada con ambos progenitores y el derecho-deber de éstos de crianza y educación. Asimismo, considera ventajosa la custodia compartida al entender que mantiene los lazos de afectividad entre los hijos y ambos progenitores, facilita la aceptación de la nueva situación por parte de los hijos, promueve la implicación de los progenitores en la educación y el desarrollo de los hijos, reduce la litigiosidad, y favorece una distribución igualitaria de los roles sociales entre hombres y mujeres.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en sus Sentencias de 28 de septiembre, de 18 de abril y de 8 y 9 de febrero de 2012, se remite a la síntesis de sus criterios de interpretación del artículo trascrito, expuestos en su sentencia de 1 de febrero de 2012: "*a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011); d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite -la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011)*".

Tercero.- De lo expuesto se concluye que, para la adopción de un régimen de custodia individual, deberán probarse circunstancias que la hagan más aconsejable que la custodia compartida.

En el caso que nos ocupa entiendo que la custodia individual de la menor, a cargo de la madre, es más beneficiosa para aquélla.

Por un lado, de lo expuesto por los litigantes en la vista y de la documentación que obra en las actuaciones, especialmente el pacto protocolizado, el acuerdo que los progenitores firmaron ante los Servicios Sociales en octubre de 2015 y el informe emitido en abril de 2016, se desprende que, desde la ruptura de la pareja, cuando la hija tenía corta edad, la menor ha estado siempre bajo la custodia de la madre.

La situación previa resulta poco relevante, por ser más lejana en el tiempo, y por haber sido una época en la que ambos progenitores no debieron estar a la altura en el cuidado de su hija, ya que se abrió un expediente de protección, al considerar los Servicios Sociales que la niña se encontraba en situación de riesgo.

Tras la ruptura, la niña quedó en compañía de la madre. Durante un período que no ha quedado determinado, perdió todo contacto con el padre, que entró en prisión. Y, tras la salida de prisión, tanto en el acuerdo protocolizado ante Notario, en abril de 2014, como en el acuerdo ante los Servicios Sociales, en octubre de 2015, la custodia de la menor se atribuyó a la madre.

Incluso así las cosas, en el informe se hace referencias a la irregularidad del cumplimiento de las visitas.

Es decir, de lo expuesto resulta claro que la menor debe tener un mayor arraigo familiar con la madre y la familia materna (letra b del artículo 80.2 del Código de Derecho Foral). Esto no significa que no deba mantener el contacto con el padre y la familia paterna, y que incluso deba ser fomentado dicho contacto, pero es un elemento indicativo de que la custodia materna puede ser más conveniente para la menor que el establecimiento de una custodia compartida, con el cambio que ello supondría, del que no hay elementos que hagan pensar que va a ser positivo.

La letra d) del artículo 80.2 prevé que se tenga en cuenta la aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos. De la prueba practicada resulta que, en este tiempo, el padre no ha contribuido económicamente al sostenimiento de su hija menor o, al menos, no ha quedado acreditado (correspondiéndole a él la carga de la prueba, conforme a lo establecido en el artículo 217 de la LEC, al tener la mayor facilidad probatoria). La demandante niega aportaciones, y en el informe así se indica también, señalándose que es el abuelo el que en alguna ocasión ha contribuido económicamente.

En su declaración, el padre también se excusó de acudir al colegio a hablar con los profesores de la niña, según él, para evitar problemas con la madre, aunque no queda claro qué problemas podrían ser esos. Ambos progenitores tienen apoyo familiar para el cuidado de la niña, pero el informe indica que las circunstancias de trabajo y económicas de A son inestables. La letra e) del precepto mencionado también hace referencia a las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral.

El informe de servicios sociales recomienda la custodia para la madre porque ha demostrado que cuida adecuadamente a la menor, se ha integrado correctamente en el ámbito escolar de su hija y se considera que ejerce sus funciones de forma responsable y procurando un adecuado cuidado a su hija.

Por lo expuesto, se atribuirá la custodia de la hija menor a la madre.

Cuarto.- En cuanto al régimen de visitas, no puede obviarse que la menor ha estado bajo la custodia de la madre desde la ruptura, y que las visitas han sido sin pernocta y que en los últimos meses ni siquiera se han llevado a cabo.

Por otra parte, el informe indica la conveniencia de que la niña mantenga contacto con su padre y con la familia paterna. Y, pese a hechos negativos que hayan podido ocurrir en el pasado (lo cual no solo es predicable del padre, sino también de la madre), del informe de servicios sociales y documentación recibida se observa que el padre muestra

interés en mantener contacto con la menor, y que puede estar dejando atrás el tipo de vida que pudo haber llevado antes. No tiene un contrato de trabajo pero sí colabora en una empresa familiar por la que recibe alguna gratificación, y ha venido sometiéndose a análisis en un programa para deshabituarse del consumo de tóxicos.

Por ello, el hecho de que no haya tenido pernoctas con anterioridad no puede ser motivo para que no las haya en el futuro.

No obstante, y habida cuenta de lo que se ha explicado, parece conveniente que el régimen de visitas se establezca de modo progresivo, para que la nueva relación que la menor va a mantener con su padre y la familia paterna no se le imponga de modo que pueda llegar a resultar incluso contraproducente.

Así, se establece un primer período para este verano, hasta el inicio del curso escolar, en que el padre podrá estar en compañía de la menor una tarde entre semana, los miércoles desde las 17:00 a las 20:00 horas. Y los domingos alternos, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.

Una vez que comience el curso escolar, el régimen será el ordinario de fines de semana alternos, completos y con pernocta, con una tarde entre semana, y mitad de vacaciones.

Quinto.- Por lo que se refiere a la pensión de alimentos, conforme a lo previsto en el artículo 82 del Código de Derecho Foral, los progenitores deberán contribuir a los gastos de los hijos en proporción a sus recursos económicos.

No hay documentación relativa a la capacidad económica de la madre, aunque en el informe de servicios sociales se indica que trabaja para el Ayuntamiento de Ejea, aunque con un contrato temporal. La madre manifestó en la vista que cobraba casi 700 euros mensuales.

El demandado no tiene trabajo, aunque colabora en una empresa familiar por la que recibe algún tipo de gratificación, sin que se haya podido determinar una cuantía mensual.

Esto dificulta la aplicación de las tablas orientativas del CGPJ, aunque entiendo que no puede establecerse una mera pensión de las llamadas de subsistencia. Aunque “en negro”, el demandado lleva a cabo algún tipo de actividad económica y debe contribuir a la satisfacción de las necesidades de su hija, aunque sea detrayéndolas de esas “gratificaciones” no cuantificadas que dice obtener. En el convenio protocolizado notarialmente en abril de 2015 se comprometió a abonar una pensión de 150 euros mensuales, por lo que se fijará una pensión de 165 euros mensuales.

En cuanto a los gastos extraordinarios, los necesarios serán abonados por mitad por los progenitores. Aquellos que no sean necesarios serán abonados por el progenitor que decida realizarlos. Dada la baja cuantía de las mensualidades, se indica expresamente que los gastos propios del inicio del curso escolar se considerarán extraordinarios y, por lo tanto, deberán ser abonados por mitad por ambos progenitores.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 30 de junio de 2016. Custodia compartida. Criterio preferente. Motivación de la custodia individual. Informe pericial. Escasa edad de la menor. Dificultad para conciliar vida laboral y familiar**

"PRIMERO.- Actor y demandada mantuvieron relación de pareja en la que nació una hija el 2013, por lo que cuenta en la actualidad con tres años de edad. Dicha relación concluyó en abril de 2014. El padre presentó demanda de guarda, alimentos y régimen de visitas de la hija, solicitando, en lo que ahora interesa, la custodia individual para él y subsidiariamente, la custodia compartida. A ello se opuso la madre.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia en la que, tras citar la regulación recogida en el artículo 80.2 del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA) y la sentencia de esta Sala de 6 de abril de 2015, lleva a cabo una amplia exposición de la valoración que le merece el informe pericial. Y termina indicando:

> "En suma, considera quien ahora juzga que se dan en el presente supuesto las circunstancias necesarias y apropiadas para establecer un sistema de custodia compartida respecto de la hija común de ambos progenitores pues: 1º/Ambos padres reúnen las cualidades y aptitudes precisas para hacerse cargo de la menor, 2º/Existe un fuerte vínculo afectivo entre la menor y cada uno de los progenitores, 3º/Ambas partes tienen similar disponibilidad horaria pues si bien el Sr. M. está sujeto a disponibilidad fuera de su horario laboral en situaciones de emergencia, se trata de supuestos excepcionales y no habituales y para los cuales dispone de apoyo familiar hasta que la madre pudiese hacerse cargo de la menor. En consecuencia, en atención a todo lo hasta aquí expuesto, procede acordar la custodia compartida de la Menor (...)."

TERCERO.- Las razones que proporciona la sentencia de segunda instancia, aquí recurrida, para revocar la anterior en el extremo relativo a la custodia de la menor son las que a continuación se reproducen:

> "...La madre reside en Zaragoza en el domicilio de su madre, con la hija menor y otra habida de otra unión, y trabaja desde octubre de 2014, a tiempo parcial, en labores de limpieza.
>
> El padre es militar de profesión, (...). Reside en casa de sus padres en C. Su horario laboral es de 7,15 h de lunes a miércoles, el jueves hasta las 17 h. y el viernes hasta las 14,30 h, teniendo además un horario flexible según las necesidades del servicio y de la Unidad, que se prolonga hasta el fin de semana y festivos.
>
> La perito psicóloga, emisora del informe de autos (f. 125 y ss) recomienda la custodia materna, con fundamento en la escasa edad de la menor, que precisa de un entorno estable sin alteración de rutinas y con organización concreta que favorezca su desarrollo, y en la escasa disponibilidad del padre cuya actividad laboral le exige una

constante disponibilidad y continuos desplazamientos, que siempre ha suplido la madre adecuadamente. Conclusiones que ratificó en el plenario.

TERCERO.- Con estas premisas, teniendo en cuenta que los apoyos del padre, sus padres trabajan, que su domicilio se halla en C y su centro de trabajo en Garrapinillos, que su horario laboral se inicia a las 7 de la mañana, debiendo estar permanentemente disponible por razones del servicio, que la madre trabaja 6 horas a la semana, residiendo en Zaragoza con su madre, la que no trabaja, y que ha atendido desde su nacimiento a la menor afrontando los períodos de ausencia del padre, debe concluirse que el bienestar e interés de la menor quedan mejor salvaguardados con la custodia individual materna (...)."

CUARTO.- El recurso de casación se articula en dos motivos. El primero, por infracción de lo dispuesto en los artículos 79.1 y 80.2 del CDFA en relación con el artículo 91 del Código civil, y el segundo con base en lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley de casación aragonesa, al entender la parte que la sentencia recurrida se opone a la doctrina sentada por esta Sala sobre el precepto del artículo 80.2. Realmente, el segundo no constituye un motivo autónomo, sino que, aludiendo a algunas sentencias dictadas por esta Sala de casación, sirve como refuerzo de lo expresado en el primero.

QUINTO.- Como hemos expresado en muchas sentencias anteriores, en materia de custodia de hijos menores, el legislador aragonés considera que, con carácter general, la custodia compartida es el sistema idóneo con el que satisfacer el interés del menor. Y a diferencia de otros sistemas legales que confían por completo al juez la determinación de los criterios y elementos generales a los que ha de atender para decidir en cada caso el sistema de custodia que mejor se adapta al interés del menor, opta por establecer unos criterios a los que se ha de atender en tal cometido. Ahora bien, como la propia parte indica en su escrito de recurso, este régimen preferente puede sustituirse por la custodia individual cuando ésta se considere más conveniente para el menor. Es decir, el juzgador ha de optar por un sistema diferente al de la custodia compartida cuando las circunstancias del caso evidencien que aquél interés lo exige, a cuyo fin se establece una lista abierta de factores no jerarquizada y carente de indicación de en qué sentido opera cada uno de ellos a los que ha de atender el juzgador para determinar si, en el caso concreto que decide, es el sistema de custodia compartida el que mejor se acomoda al interés del menor.

SEXTO.- Dijimos en nuestra sentencia de 3 de febrero de 2016:

"...debemos recordar lo expuesto en nuestra reciente sentencia de 13 de enero de 2016:

El interés del menor (como el propio recurrente recoge en su escrito) es un concepto jurídico indeterminado que precisamente ha de ser determinado en cada caso. La noción de "interés del menor" no es ni un dogma, ni un estándar de contenido universal. Debe ser interpretada y aplicada caso por caso (de ahí que aporte poco la cita de sentencias anteriores en las que se optó por soluciones distintas) evitando siempre eventuales arbitrariedades.

El Preámbulo de la reciente Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia lo expresa así:

Este concepto se define desde un contenido triple. Por una parte, es un derecho sustantivo en el sentido de que el menor tiene derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una solución. Por otra, es un principio general de carácter interpretativo, de manera que si una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma se debe optar por la interpretación que mejor responda a los intereses del menor. Pero además, en último lugar, este principio es una norma de procedimiento. En estas tres dimensiones, el interés superior del menor tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del menor, así como su desarrollo integral.

A la luz de estas consideraciones, es claro que la determinación del interés superior del menor en cada caso debe basarse en una serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el legislador que deben ser tenidos en cuenta y ponderados en función de diversos elementos y de las circunstancias del caso, y que deben explicitarse en la motivación de la decisión adoptada, a fin de conocer si ha sido correcta o no la aplicación del principio.

(…).

Pues bien, nos encontramos, una vez más, y como ya ha quedado expuesto, ante una facultad discrecional del Juez que, por eso mismo, no controlable en casación salvo que se patentice que no se ha utilizado de modo lógico. Es constante la doctrina jurisprudencial que limita el ámbito del recurso de casación a su función nomofiláctica, de tal forma que considera ajeno al mismo el control de las decisiones adoptadas dentro de los márgenes de discrecionalidad que el legislador confiere a los tribunales para llevar a cabo el juicio de valor del que depende la decisión del caso concreto. El Tribunal Supremo ha dicho (STS 614/2009 de 28 septiembre) que, establecido que el interés del menor el criterio legal de decisión:

"el problema procesal se plantea en torno al órgano que debe apreciar dicho interés, porque como señala la doctrina más autorizada, en esta cuestión, la discusión sobre si se ha aplicado o no la norma fundando la decisión en el interés del menor tiene aspectos casacionales, mientras que la delimitación de la realidad que determina en cada caso concreto cuál es el interés del menor, no los tendrá. Este Tribunal ha considerado que por tratarse de una facultad discrecional del juzgador, en el segundo aspecto no cabe impugnación casacional, a menos que en las actuaciones figuren "esas graves circunstancias que aconsejen otra cosa"

En la sentencia de 17 de septiembre de 2015 también hemos expresado que el artículo 80.2 confiere al juzgador un margen de discrecionalidad al efecto de determinar, en el caso concreto, qué tipo de custodia satisface más el interés del menor.

SÉPTIMO.- En el caso que nos ocupa, la parte recurrente no razona ni justifica que la sentencia recurrida haya infringido el precepto. Se hace una extensa alusión al contenido de la sentencia de primera y de segunda instancia, así como al informe psicosocial, cuya valoración no combate. Y a continuación expresa que, poniendo en relación con el caso concreto los factores del artículo 80.2, "todos ellos juegan a favor de que se otorgue la custodia compartida". Mas esto no es sino la particular apreciación de la parte, que no llega a alegar que la decisión de la sentencia recurrida al establecer la custodia individual, fundamentada y avalada por una prueba pericial que así lo aconseja, sea irrazonable y vulnere por ende el precepto.

En ocasiones anteriores hemos dicho que el tribunal de casación no puede actuar como un tribunal de tercera instancia en la revisión de la decisión sobre el sistema de custodia que ha de ser aplicado; así lo hemos resaltado en sentencias como la de 18 de febrero de 2016 que cita de la de 30 de junio de 2015:

> << Pues bien, como señala la STS 251/2015, de 8 de mayo, el recurso de casación en la determinación del régimen de guarda y custodia no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales del procedimiento de familia. Es cierto que en la ley aragonesa el legislador se ha ocupado de establecer los factores a los que ha de atender el juzgador a la hora de decidir cuál de los sistemas de custodia posibles es el que más conviene en cada caso al menor, y establece una preferencia por la custodia compartida que obliga al juzgador de instancia a partir en su análisis de tal premisa, pero de ahí no se sigue que la Sala de casación pueda sustituir el criterio afirmado por la sentencia recurrida, si, atendidos aquellos factores, concluye razonadamente que la individual es la guarda que mejor satisface el interés del menor."

En la ya aludida sentencia de esta sala de 17 de septiembre de 2015 tras señalar que la decisión sobre custodia pertenece al ámbito discrecional de la instancia, se afirma que en la tomada por los tribunales de instancia "solo podría apreciarse su infracción [la del art. 80.2 CDFA] en el caso de que la misma [decisión] resultara irracional, ilógica o arbitraria, o claramente atentatoria contra el interés del menor".

Así las cosas, en el caso que nos ocupa apreciamos que la Audiencia Provincial razona y justifica los motivos que le llevan a aplicar la posibilidad legal de custodia individual, por considerarla más conveniente para la menor, con una fundamentación suficiente, atendiendo de modo especial al informe pericial tal como se prevé en la norma aragonesa, y destacando la escasa edad de la menor y las dificultades de conciliación laboral y familiar del padre. Por ello, de acuerdo con lo postulado por el Ministerio Fiscal, se concluye que no hay vulneración de los preceptos invocados, por lo que el recurso debe ser desestimado."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 5 de julio de 2016. Custodia compartida. Conflictividad entre progenitores. Condiciones sociolaborales. Valor del informe psicosocial**

"PRIMERO.- La Sentencia recaída en 1ª. Instancia, en el presente procedimiento sobre guarda, custodia y alimentos (Arts. 748.4º, 769.3 y 770 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil), es objeto de recurso por la representación de la parte actora, Dª. E, que en su apelación (Artº. 458 L.E.C.), considera:

- que procede fijar la guarda y custodia a su favor, estableciendo un régimen de visitas de fines de semana alternos y periodos vacacionales por mitad,

- que procede fijar una pensión a cargo del padre de 170 €/mes por hijo, y

- que procede se permita la entrada de la recurrente en la vivienda familiar para la retirada de todos sus bienes personales, enseres, muebles, etc..., y

- se decrete la obligación del Sr. L de autorizar el cambio de colegio a sus hijos por no poder asumir los progenitores los gastos derivados de un colegio concertado, debiendo permitir que a los menores se les escolarice en un colegio público.

SEGUNDO.- La doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación a la custodia compartida recogida en las Sentencias de 01-02-2012 y 05-07-2012, indican expresamente que "a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011); b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al Juez; el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011); c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el Artº. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011; d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite –la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011). Para adoptar la decisión, en cada caso, será relevante la prueba practicada, especialmente los informes psicosociales –Artº. 80.3 CDFA- obrantes en autos, y la opinión de los hijos menores, cuando tengan suficiente juicio –Artº. 80.2 c) CDFA-. Por último, el Tribunal que acuerde apartarse del sistema preferentemente establecido por el legislador debe razonar suficientemente la decisión adoptada.-".

Igualmente, tanto el Tribunal Supremo (SS 21-07-2011 y 07-04-2011) como el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (SS. 30-09-2011 y 05-07-2012), han destacado la especial relevancia de los informes psicosociales, puesto que en ellos previa constatación de los hechos concurrentes y la necesaria exposición razonada del método y factores

tenidos en cuenta, se analiza por expertos profesionales la conveniencia o no de la adopción de las medidas solicitadas.

TERCERO.- En el presente supuesto, se trata de dos menores de 5 y 10 años, respectivamente. La progenitora reside en Grisén y el progenitor en Zaragoza, ambos menores asisten a Colegio en la localidad de Zaragoza ().

Es cierto, que el informe pericial psicológico recomienda continuar con el régimen de estancias fijado en el Auto de medidas provisionales, pero también es cierto que el propio informe indica que el recurrente no tiene ningún tipo de limitación personal para afrontar el cuidado de los menores, asimismo indica que "*ambos progenitores tienen capacidad para afrontar el cuidadote los menores, cubriendo las necesidades afectivas y de desarrollo de los mismos. Igualmente, no se detectan en ellos trastornos mentales que puedan limitar el mantenimiento de una relación extensa con ellos.*

Por lo que se podría valorar el uso compartido de la custodia de los menores.-".

Las circunstancias por las que el informe se inclina por la custodia individual materna, se circunscriben a la conflictividad existente y las condiciones socio-laborales del progenitor.

Sobre la primera cuestión, hacemos nuestras las argumentaciones del juzgador de instancia, no vislumbrándose una conflictividad tal que ponga en peligro la propia efectividad de la guarda compartida, no siendo aquélla tan relevante. Por otro lado, sobre la organización del recurrido, dispone de contrato laboral indefinido, siendo irrelevante la persona que le ha contratado, sobre cuya oportunidad incide la parte apelante, ello no impide ver la realidad de tal contratación, y las posibilidades de obtención de domicilio, tal como viene a constatarse de la documentación aportada por la parte apelada (folios 207 y ss.).

Por tales consideraciones, procede mantener la guarda y custodia compartida, así como las medidas inherentes a dicha declaración que se revelan como las más adecuadas en beneficio de los menores, incluida las relativas a la retirada de enseres y ropa personales, dejándose para la fase liquidatoria o a través de lo dispuesto en el Artº. 89 del Código de Derecho Foral de Aragón, el resto de solicitudes vertidas en el recurso."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 19 de julio de 2016. Pensión compensatoria. Desequilibrio. Procedencia con límite temporal**

"PRIMER Se recurre por la representación de la parte actora (D. J), la Sentencia de Primera Instancia en el presente procedimiento sobre Divorcio (art. 770 LEC).

En su recurso considera el demandante que procede denegar el derecho de la demandada a percibir una asignación compensatoria.

SEGUNDO.- En cuanto a la pensión compensatoria vía Art. 97 del Código Civil (ex Art. 83 del Código de Derecho Foral de Aragón) debe indicarse que, como declara la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11-01-2012 "la asignación compensatoria prevista en el articulo 9 de la ley aragonesa 2/2012 (artículo 83 CDFA) no tiene, en lo sustancial, una naturaleza y finalidad diferente a la señalada por el artículo 97 del Código Civil a la pensión compensatoria, que para señalarla con carácter temporal o indefinido el artículo 83 CDFA provee al juez de unos criterios similares a los indicados en el Código Civil, y la invitación a la "ponderación equitativa" de los mismos no añade un modo de aplicar la norma distinto del que debe seguirse para el artículo 97 Cc.". Igualmente la Sentencia del Tribunal Supremo de 22-06-2011 establece que "responde a un presupuesto básico consistente en la constatación de un efectivo desequilibrio económico, producido en uno de los cónyuges con motivo de la separación o el divorcio, siendo su finalidad restablecer el equilibrio y no ser una garantía vitalicia de sostenimiento, perpetuar el nivel de vida que venían disfrutando o lograr equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluta entre estos, tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, en sintonía con lo anterior, siendo uno de los razonamientos que apoyan su fijación con carácter temporal aquel que destaca, como legítima finalidad de la norma legal, la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y resulta razonable entender que el desequilibrio de debe compensarse debe tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, que la expresada naturaleza y función de la pensión compensatoria obligan al órgano judicial a tonar en cuenta para su fijación, cuantificación y determinación del tiempo de percepción, factores numerosos y de imposible enumeración, entre los más destacados, los que enumera el artículo 97 del C. Civil. Por último, operan también estos factores para poder fijarla con carácter vitalicio o temporal, pues permiten valorar la idoneidad o aptitud del beneficiario para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación de desequilibrio. Para este juicio prospectivo el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre, la existencia de un desequilibrio económico entre los esposos en el momento de la ruptura de la convivencia, constituye un presupuesto de hecho requerido por la norma jurídica.

Las más recientes sentencias del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2011, 10 de octubre de 2011 y 23 de enero de 2012, en cuanto a la naturaleza de la pensión, concepto de desequilibrio y momento en que ésta deba producir, vienen a indicar que por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. Al constituir finalidad legítima de la norma legal colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laboral y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, es razonable entender, de una parte, que el desequilibrio que debe compensarse ha de tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familiar, y, de otra, que dicho desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio, y no basarse en sucesos posteriores, que no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial.

Partiendo de la concurrencia de desequilibrio, en la medida que la ley no establece de modo imperativo el carácter indefinido o temporal de la pensión, constituye igualmente doctrina consolidada:

Que su fijación en uno y otro sentido dependerá de las específicas circunstancias del caso, particularmente, las que permiten valorar la idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico, siendo única condición para su establecimiento temporal que no se resienta la función de restablecer el equilibrio que constituye su razón de ser (Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2008 [RC nº 531/2005 y RC nº 2650/2003], 21 de noviembre de 2008 [RC nº 411/2004], 29 de septiembre de 2009 [RC nº 1722/2007], 28 de abril de 2010 [RC nº 707/2006], 29 de septiembre de 2010 [RC nº 1722/2007, 4 de noviembre de 2010 [RC nº 514/2007],14 de febrero de 2011 [RC nº 523/2008] y 27 de junio de 2011 [RC nº 599/2009].

Que esta exigencia o condición obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 del Código Civil, que según la doctrina de esta Sala, fijada en Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC nº 52/2006], luego reiterada en Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2010 [RC nº 514/2007], 14 de febrero de 2011 [RC nº 523/2008] y 27 de junio de 2011 [RC nº 599/2009], entre las más recientes, tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio y como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión, las cuales permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencias y ponderación con criterios de certidumbre.

TERCERO.- En el presente supuesto la convivencia duró 6 años, no habiendo trabajado la demandada prácticamente durante el matrimonio, habiéndose dedicado al

cuidado de la familia. El recurrente percibe sobre los 1500 €/mensuales y la recurrida se encuentra en situación de desempleo, tiene en la actualidad 33 años no estando acreditado que no pueda trabajar, parece adecuado tal y como se razona por el Juzgador de instancia que ante la existencia de un claro desequilibrio en el momento de la ruptura en relación con su situación económica durante el matrimonio se fije a favor de la demandada una pensión o asignación compensatoria en la cuantía y limitada en el tiempo, en los términos que se contemplan en la Sentencia apelada sin que proceda en conclusión la supresión de aquella. “

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 19 de julio de 2016. Custodia compartida. Capacidad de ambos progenitores. Drogodependencia**

"PRIMERO. Frente a la sentencia de instancia que atribuye al padre la guarda y custodia de las dos hijas menores de edad de los litigantes se alza ahora la madre, , interesando la revocación de dicha resolución y el dictado de otra por la que se le conceda a ella dicha guarda. El Ministerio Fiscal y don V interesan la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO. Basa el Magistrado-Juez *a quo* su decisión de conceder la guarda y custodia de forma individual al padre en la drogodependencia de la madre unida a la falta de conciencia de enfermedad de que esta hace gala, así como en el hecho de que las menores no perderán su relación con la madre al no modificarse su residencia en Teruel donde vive el padre, contando este con un amplio soporte familiar para el cuidado de las menores. Así lo deduce el Juzgador del informe de la Cruz Roja obrante en autos y de las declaraciones testificales y de las propias partes vertidas en el juicio.

Pues bien, se ha practicado en esta instancia prueba pericial mediante la realización de una valoración toxicológica y psicológica de la Sra. J por la Médico Forense y la Psicóloga adscrita al Instituto de Medicina Legal de Aragón, resultando de los análisis efectuados que no se detecta un consumo repetitivo y continuado de sustancias estupefacientes en los seis meses anteriores a la obtención de la muestra de pelo (17 de junio de 2016). En dicho informe se hace constar que doña M refirió haber consumido cocaína junto con el Sr. L, a quien no se le ha practicado en el presente procedimiento análisis alguno, y manifestó asimismo que ha superado su adicción, constando su abstinencia al menos durante el presente año. Dichas peritos, que ratificaron y explicaron su informe en la Vista celebrada ante este Tribunal, fueron contundentes al declarar que la madre está perfectamente capacitada en el momento presente para el cuidado de las menores, y que cuando reseñan que presenta dificultades para brindar un cuidado adecuado a las menores, únicamente quieren indicar que todas las habilidades de cuidado están sujetas al aprendizaje y mejora, no careciendo la Sra. J de las condiciones apropiadas para cuidar de sus hijas. Ha quedado así mismo acreditado por los informes de los Centros Educativos donde han estudiado las menores que la apelante ha acudido siempre a las tutorías cuando ha sido llamada y que el aseo, vestido y material escolar de las menores, mientras han estado en su compañía, han sido adecuados. Es dato a tener en cuenta de manera singular que la madre tuvo una hija de una relación anterior, que tiene en la actualidad doce años de edad, hermana con la que han convivido hasta ahora. Por otra parte, la circunstancia de haber dejado de tener doña M el apoyo de sus padres se ha debido a su cambio de residencia, no a la voluntad de estos de negarle su ayuda. Respecto a don V, no existe dato en el procedimiento del que pueda deducirse que no esté en condiciones de asumir también obligaciones de guarda y custodia de sus hijas, viviendo el mismo en Teruel.

Conclusión de todo ello es que los dos progenitores son idóneos para ostentar la custodia de sus hijas menores de edad.

TERCERO. Una constante jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, destaca que el criterio preferente establecido por el legislador aragonés es el de la custodia compartida, tal como dispone el artículo 80.2 del Código de Derecho Foral de Aragón, como expresión del sistema que mejor recoge el interés de los menores salvo, como también expresa con claridad el referido precepto, que la custodia individual sea más conveniente. Así pues, en Derecho Civil de Aragón se parte de un sistema de custodia compartida, de forma que en toda decisión que se adopte en torno a la guarda de los menores, el punto de partida siempre debe ser el de la custodia compartida. No obstante lo anterior, ello no supone que se deba fijar de forma automática, pues el propio Código establece una serie de circunstancias que es necesario tener en cuenta y que podrían imposibilitar la fijación de dicho régimen.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 1 de febrero de 2012 (recurso 24/2011) resume los criterios que deben seguirse en la exégesis del artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón:

"En sentencias de esta Sala dictadas en aplicación de la Ley 2/2010, cuyos preceptos han sido incorporados al Código de Derecho Foral de Aragón, se han establecido los siguientes criterios exegéticos acerca de dichas normas: a) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin; b) El sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al Juez: el superior interés del menor; c) Podrá establecerse un sistema de custodia individual cuando este resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el artículo 80.2 del Código; d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite –la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores.

Para adoptar la decisión en cada caso será relevante la prueba practicada, especialmente los informes psicosociales (artículo. 80.3 Código del Derecho Foral de Aragón) obrantes en autos, y la opinión de los hijos menores cuando tengan suficiente juicio. Por último, el Tribunal que acuerde apartarse del sistema preferentemente establecido por el legislador debe razonar suficientemente la decisión adoptada."

En el supuesto enjuiciado todos los datos expuestos en el fundamento jurídico anterior llevan a concluir que los dos progenitores están capacitados para asumir la guarda de sus hijas menores y ambos residen en Teruel (San Blas es un barrio turolense que se halla a escasos kilómetros del centro de la ciudad), no habiéndose expuesto ninguna circunstancia que impida determinar la custodia compartida ni se advierte un solo motivo negativo para privar a las hijas de compaginar la custodia entre ambos progenitores.

Alega la parte apelante que la custodia individual a su favor impediría la separación de respecto a su hermana de madre, C. Dispone a este respecto el artículo 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón que "Salvo circunstancias que lo justifiquen específicamente, no se adoptarán soluciones que supongan la separación entre hermanos". Dada la importancia que tiene la relación directa entre hermanos y el apoyo que estos pueden dar entre sí se considera que salvo circunstancias excepcionales de enorme gravedad no es oportuno proceder a la separación de los hermanos. Sin embargo, en el caso actual no puede decirse que se haya infringido el criterio legal establecido en el artículo 80.2 Código del Derecho Foral de Aragón al decidir la custodia compartida, pues ello no supone un distanciamiento entre las hermanas que introduzca una separación, al fijarse una custodia que permitirá la continuidad de las relaciones entre ellas.

CUARTO. Dada la edad de las menores, nacidas el 2008 y de 2010, se considera lo más conveniente que las menores permanezcan con cada uno de los progenitores meses alternos, con dos tardes intersemanales para el progenitor que no las tenga ese mes en su compañía, que se fijarán por acuerdo de ambos progenitores teniendo en cuenta las actividades extraescolares que tengan las menores.

Al haber quedado probada la adaptación de las menores al Colegio Rural Agrupado y no estimándose necesario cambio alguno en este sentido, deberán permanecer en él el siguiente curso escolar y los sucesivos, siempre que no concurran circunstancias nuevas que pudieran aconsejar otra medida.

En cuanto a los periodos de vacaciones, para evitar conflictos de interpretación entre los padres, se fija el siguiente régimen:

En las vacaciones de verano se establecen dos periodos: el mes de julio y el mes de agosto, correspondiendo elegir a la madre en los años pares y al padre en los impares. Durante estos dos meses no tendrán lugar las visitas intersemanales por el otro progenitor que no tenga la guarda.

En vacaciones de Navidad, un primer periodo desde el día 23 de diciembre a las 10,00 horas hasta el 31 de diciembre a las 10,00 horas; y un segundo periodo, desde el 31 de diciembre a las 10,00 horas, hasta el día 6 de enero a las 17,00 horas. En los años pares corresponderá la elección a la madre y en los impares al padre.

La Semana Santa se dividirá en dos periodos iguales en función de los días en que se determinen las vacaciones escolares, iniciándose el primer periodo al día siguiente al que terminen las clases escolares a las 10,00 horas, y el segundo periodo al día siguiente de terminar el primero a las 10,00 horas, reintegrando al menor a las 20 horas de la finalización de este segundo periodo. En los años pares corresponderá a la madre el primer periodo y en los impares al padre.

QUINTO. En cuanto a la pensión de alimentos, se aprecia actualmente un gran desequilibrio patrimonial entre ambos progenitores por cuanto la madre se encuentra en el paro y el padre tiene trabajo fijo con un salario que oscila en los mil euros mensuales. Sin

embargo permanecen inalterables las necesidades de las menores durante todos los meses del año, por lo que debe procurarse una razonable estabilidad de las mismas y que no se vean sometidas a los vaivenes derivados de la diferente capacidad adquisitiva de sus progenitores custodios, por lo que entiende la Sala que el padre deberá satisfacer a la madre para el cuidado de las hijas comunes la suma de 200 € cada uno de los meses en que la madre las tenga en su compañía durante un máximo de dos años.

Los gastos extraordinarios necesarios deberán ser satisfechos por mitad entre ambos progenitores (como libros de texto, gastos médicos y de dentista, gafas, matrículas de estudios, clases particulares precisas, etc.). Los gastos extraordinarios que no sean necesarios deberá satisfacerlos el progenitor que los acuerde."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 22 de julio de 2016. Régimen de visitas con progenitor interno en centro penitenciario. Interés del menor. No proceden por escasa relación con el hijo, edad de éste y apego al otro progenitor**

"PRIMERO.- El recurso sobre la concesión de un régimen de visitas a favor del padre durante su estancia en el centro penitenciario, bien a través de las visitas al mismo, o con carácter subsidiario con motivo de la concesión de un permiso penitenciario.

Si bien en ocasiones hay resoluciones de esta propia Audiencia Provincial favorables a la concesión de un régimen de relación (visitas o comunicación) de los internos en centro penitenciario con sus hijos, incluso en situaciones de crisis con el otro progenitor, no todos los supuestos son iguales, por cuanto el principio que prima es el aludido del *favor filii*, esto es el de actuar en interés del menor. Así lo exige el contenido del artículo 80 CDFA a la hora de atribuir la guarda y custodia y el sistema de relacionarse los menores con sus progenitores.

En el presente caso la decisión del Juez de instancia de postergar el régimen de visitas a favor del padre a la salida estable y no episódica del Centro Penitenciario donde cumple condena, se apoya en sólidas bases: la poca relación del padre con el menor, la escasa de edad de éste (dos años y medio), y la dependencia emocional del mismo con su madre. Todo ello apoyado en los informes periciales practicados que abonan la necesidad de que se vaya fomentando poco a poco una relación paterno filial estable, y a tal fin la resolución impugnada así lo pauta, razonando a nuestro juicio de modo acertado, que las visitas episódicas aprovechando permisos penitenciarios, no permiten la debida continuidad y progreso de la relación paterno-filial, por lo que en consecuencia procede confirmar aquélla, y desestimar el recurso interpuesto."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 29 de julio de 2016. Custodia compartida. Criterio preferente. Conflictividad entre progenitores. Capacitación similar**

"PRIMERO.- Recurre la Sra. S la sentencia dictada, suplicando su revocación y se mantenga a su favor la custodia individual del hijo común, con una pensión de alimentos para este de 200 € mensuales, actualizables anualmente con arreglo a las variaciones del IPC se mantenga hasta final del curso 2015/2016 el uso del domicilio familiar atribuido a madre e hijo bajo su guarda, gastos extraordinarios por mitad y el régimen de visitas que detalla.

SEGUNDO.- El artículo 80.2 CDFA dispone que "El juez adoptara de forma preferente la custodia compartida en interés de los menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente…", siendo criterios exegéticos reiterados por el TSJA en la interpretación se esa preferencia:

a) que la custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin (Sentencia de 30 de septiembre de 2011).

b) que el sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor (Sentencia de 13 de julio de 2011).

c) Que podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código (Sentencias citadas y la de 15 de diciembre de 2011);

d) La adopción de la custodia individual exigirá una atenta valoración de la prueba que así lo acredite -la conveniencia para el menor- frente al criterio preferente de la custodia compartida al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores (Sentencia de 15 de diciembre de 2011)..

Por último, que el Tribunal que acuerde apartarse del sistema preferentemente establecido por el legislador debe razonar suficientemente la decisión adoptada" y que "siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias, la prueba deberá ser dirigida a acreditar que la custodia individual es la más conveniente y sólo entonces se otorgará" -sentencia de 18 de abril de 2012 y 27 de noviembre de 2012 -.

TERCERO.- Se trata en el caso de un hijo, de la relación de convivencia que actora y demandado mantuvieron.

La madre, bióloga, funcionaria, reside en Zaragoza desde hace unos 8 años y refiere perspectivas de traslado a Madrid, donde también viven sus hermanas y dice tener un piso

de su propiedad en Rivas-Vaciamadrid, sin especificar si ese traslado lo tiene previsto de forma inmediata o dependerá de los concursos que se convoquen.

El Sr. S, en el desempleo, vive en Zaragoza desde hace unos 11 años y reside en el piso de su madre, junto a esta y su pareja, refiriendo su propósito de hacerlo después en el piso de su propiedad, actualmente ocupado por la actora e hijo común.

La psicóloga del IMLA, valorada la situación familiar, recomienda que el hijo permanezca con su madre, con un régimen de visitas a favor del padre consistente en fines de semana alternos, de viernes a la salida del colegio hasta el lunes, entregando al mismo en su centro escolar, y dos tardes entre semana, desde la salida del colegio hasta las 20 horas.

La Sala, sin embargo, comparte con el Juzgador que no existe dato objetivo que haga necesario separarse del sistema preferente que la Ley establece. En tema de capacidad, habilidades e idoneidad del padre para ocuparse del hijo no se desprende elemento negativo que indique que el establecimiento de ese sistema sea contrario al interés del menor. Tras la entrevista con ambos progenitores la psicóloga reseña que durante el periodo que duró la convivencia los dos mostraron una implicación activa en los cuidados del menor, algo que la actora le reconoce al demandado, y que el hijo muestra una adecuada vinculación con ellos.

Se objeta, por otro lado, la conflictividad existente entre las partes, de la que sería expresión la condena habida en la primera instancia del proceso penal seguido contra el Sr. S por delito de malos tratos. Este fue, sin embargo, absuelto, por lo que, siendo cierta la necesidad de un cierto grado de entendimiento o consenso entre los progenitores para poder realizar de manera adecuada la corresponsabilidad parental después de una ruptura, también lo es que toda crisis matrimonial o de pareja lleva consigo una cierta falta de entendimiento y desencuentro, pero para que puedan dejarse sin efecto los beneficios que para el menor puede conllevar el establecimiento de la custodia compartida es exigible un grado de conflictividad u hostilidad que excluya el régimen recurrido, lo que no consta acreditado y no cabe presumir.

La prueba ha mostrado, en suma, que ambos progenitores están capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias para la consecución del fin perseguido, por lo que, siendo la custodia compartida el sistema preferente y predeterminado por el legislador, la establecida debe mantenerse, con desestimación del recurso, al no haberse demostrado que la custodia individual, evaluados los factores del art. 80.2 CDFA, sea sistema más adecuado para preservar el superior interés del menor, designio al que debe ajustarse toda decisión, resolución o medida que afecte a las mismas (art 76 CDFA).”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 7 de septiembre de 2016. Custodia compartida. Modificación de medidas por alteración relevante de circunstancias. Criterio preferente. Motivación de la custodia individual. Informe pericial. Natural crecimiento de la menor. Sobrevaloración de su opinión**

"PRIMERO.- Son hechos relevantes para la resolución del recurso de casación interpuesto:

1.- D. Iñigo G. G. y Dª María Eugenia C. L. mantuvieron una relación sentimental, de la que nació su hija el 2006.

2.- Producida la ruptura de dicha relación, el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Zaragoza dictó sentencia de fecha 25 de noviembre de 2008 por la que aprobó el convenio regulador suscrito entre las partes en fecha 12 de noviembre anterior, en el que se pactaba otorgar a la madre la guarda y custodia de la hija menor , con un régimen de visitas y comunicaciones de ésta con su padre.

3.- En el mismo Juzgado se tramitaron autos de modificación de medidas nº 136/2011, a instancia de D. Iñigo, quien solicitaba la custodia compartida, en los que recayó sentencia de 17 de noviembre de 2011 desestimatoria de dicha pretensión, aunque modificó el régimen de visitas para la hija común , ampliando el anteriormente existente.

4.- Instada de nuevo la modificación de medidas ante el referido Juzgado, que fue tramitada como autos 143/2015, tras los trámites pertinentes recayó sentencia en primera instancia de fecha 10 de septiembre de 2015 por la que se acordó no haber lugar a la demanda. Las razones esenciales en que se funda la desestimación fueron: que a la vista de la prueba practicada se desprende que no se ha producido, más allá del natural crecimiento de la hija, un cambio de circunstancias sustancial, y que conforme al informe psicológico practicado es conveniente proteger la estabilidad emocional de la niña, sin introducir una variación en sus hábitos y costumbres, resultando incierta cual sería la adaptación si se instaurase el sistema solicitado.

5.- Recurrida en apelación dicha sentencia, tras los trámites legales y la exploración de la menor practicada en segunda instancia, la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia de 8 de marzo de 2016, desestimatoria del recurso de apelación y confirmatoria de la sentencia recurrida.

6.- La representación procesal de D. Iñigo interpuso recurso de casación para ante esta Sala, fundado en dos motivos, de los que únicamente ha sido admitido el primero, que se funda en la infracción del párrafo segundo del artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA).

SEGUNDO.- El motivo de recurso de casación que ha sido admitido a trámite denuncia, según se ha expuesto, la infracción del artículo 80.2 del CDFA, en cuanto que el legislador establece como forma preferente de custodia para los hijos menores el de

custodia compartida, salvo que la individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el Plan de Relaciones Familiares y los factores que el mismo precepto expresa, entendiendo el recurrente que, conforme a la prueba practicada, no resultan elementos suficientes para resolver conforme a la excepción y no seguir el criterio preferente establecido por el legislador aragonés.

El Ministerio Fiscal ha apoyado el recurso, solicitando se estime la custodia compartida conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala que sigue el mandato del legislador y entendiendo que en el caso concreto la aptitud y actitud de ambos progenitores y el principio de no discriminación e igualdad entre ellos son razones que avalan el establecimiento de la custodia compartida.

La parte recurrida, al oponerse al recurso, sostiene la bondad de los fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada de contrario, entendiendo que en ellos se hace una valoración de los aspectos más relevantes recogidos en el informe psicosocial, como el deseo de la menor de no introducir cambios en su vida, y que el resultado de la exploración judicial practicada en la Audiencia Provincial ha llevado a ésta a la convicción de que debe mantenerse la custodia individual de la madre como situación más acertada para preservar el superior interés de la hija menor.

TERCERO.- Antes de entrar a decidir sobre la denunciada infracción de la norma sustantiva, conviene hacer referencia al procedimiento seguido, que es el de modificación de medidas regulado en el artículo 775 de la Ley Enjuiciamiento Civil. Conforme al mismo el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del Tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas.

Conforme a dicho régimen, para que proceda la modificación de medidas ya adoptadas habrá de alegarse y acreditarse que han variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. En similares términos se pronuncia el artículo 79.5 del CDFA.

En diversas sentencias de esta Sala tenemos declarado que, una vez transcurrido el plazo de un año recogido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2/2010 y Sexta del CDFA, los interesados en la modificación del régimen de custodia deben alegar y acreditar una sustancial alteración de las circunstancias que en su momento fueron valoradas -sentencia de 3 de octubre de 2013, nº 42/2013-, y que, en caso en el que la pretensión se ejercita conforme a dichos preceptos, lo relevante es considerar si, a la vista del cambio de las circunstancias concurrentes, resulta necesario modificar el régimen de custodia en los términos interesados por el demandante –sentencia de 19 de noviembre de 2014, nº 37/2014-.

En este caso, y frente a lo expresado en la sentencias de primera y segunda instancia, la Sala considera que se ha producido un cambio sustancial de las circunstancias, debido fundamentalmente al crecimiento en edad de la hija. Ésta, nacida

el 2006, tenía dos años de edad cuando se fijó el sistema de guarda y custodia para la madre, en convenio regulador que fue aprobado judicialmente. Cuando se interpuso la demanda que da origen a los presentes autos, en febrero de 2015, la menor tenía más de ocho años de edad, y cuando recae la sentencia recurrida tiene más de nueve años. Este crecimiento vital afecta al desarrollo de su personalidad, a sus hábitos y costumbres, así como a sus posibilidades de relación social, todo lo cual implica un cambio cualitativo a considerar, a los efectos de aplicación de los preceptos citados, por lo que puede plantearse legítimamente un cambio del régimen de custodia, considerando siempre el superior interés de la menor.

CUARTO.- El único motivo del recurso de casación que ha resultado admitido denuncia la infracción del artículo 80.2 del CDFA, al entender la parte recurrente que en la sentencia del tribunal provincial no se aplica la custodia compartida, que es el régimen preferente y ha de ser adoptado por el juez en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente. En el desarrollo del motivo el recurrente expone las razones por las que, a su juicio, se ha producido esa vulneración, razones que centra en la evolución madurativa de J, juntamente con que el principio de interés del menor o "*favor filii*" ha de encaminarse a un régimen de autonomía personal de la menor y no perpetuar un régimen de sobreprotección. Añade que, estando el padre y madre capacitados para la custodia de la hija, y siendo la situación laboral absolutamente compatible para que ambos progenitores puedan disfrutar de periodos similares de permanencia en compañía de su hija, la correcta aplicación al caso del precepto citado ha de dar lugar a la casación de la sentencia y a la aprobación del Plan de Relaciones Familiares con la petición de custodia compartida.

QUINTO.- En reiteradas sentencias de esta Sala hemos puesto de relieve que el legislador aragonés ha establecido el régimen de custodia compartida de los hijos menores como el preferente, que debe ser adoptado por el Juez competente, por que a través de este sistema se atiende más adecuadamente al interés del menor, asegurando la relación normalizada con ambos progenitores, de forma que tenga presente la figura paterna y materna en su ámbito de formación y sociabilidad. Así se recoge en las sentencias de 6 de junio de 2012 (nº 22/2012), 10 de enero de 2014 (nº 1/2014) y 6 de abril de 2015 (nº 11/2015), entre otras. Como expresa el preámbulo de la ley aragonesa (apartado VI del que inicia el Decreto Legislativo) "*la custodia compartida se fundamenta en la conjugación de dos derechos básicos: por una parte, el derecho de los hijos a mantener una relación equilibrada y continuada con ambos padres y, por otra, el derecho-deber de los padres de crianza y educación de los hijos en ejercicio de la autoridad familiar*".

Aunque el sistema establecido no es rígido, salvo en el mandato de atender siempre al superior interés del menor, recogido en normas generales y convenios internacionales de los que España es parte, el establecimiento de la custodia individual requiere que de la prueba practicada, a la que se refiere el apartado 3 del citado artículo 80, resulte claramente la preferencia en el caso concreto para la custodia individual de uno de los progenitores, y que se razone suficientemente acerca de esta prioridad. En este punto

expresamos en la Sentencia de 9 de octubre de 2013 (nº 44/2013), respecto a la revisabilidad en casación de la decisión adoptada, que "*Sobre las premisas anteriores y con respeto a los hechos que resultan probados en ambas instancias, se deberá comprobar si los juicios de valor que en la sentencia recurrida llevan a la adopción de la custodia individual materna se ajustan a las previsiones legales (artículo 80 CDFA) que en nuestro ordenamiento civil permiten excepcionar la regla preferente de la custodia compartida*".

SEXTO.- La aplicación de la norma citada al caso de autos conduce a la necesaria estimación del motivo de recurso de casación.

En efecto, la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación y confirmado la sentencia de primera instancia, que no dio lugar a la solicitud de guarda y custodia compartida, fundándose en el informe pericial y en la exploración judicial de la menor practicada en la segunda instancia. Del primero extrae como consecuencia que la menor presenta un deseo de compartir más tiempo con su padre, pero sin introducir variaciones en sus condiciones cotidianas de vida, y recomienda un sistema de relaciones acorde con tal deseo, pero sin introducir la custodia compartida.

Del resultado de la exploración judicial la Audiencia valora que la menor presenta una buena relación con ambos progenitores, debiéndose permitir que mantenga una relación frecuente con los dos, pero sin introducir variaciones sustanciales en el actual sistema, dado que se encuentra bien adaptada y sin que sea adecuado añadir la noche del martes solicitada por la menor en la exploración, pero que no se considera necesario teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el informe pericial psicológico. Concluye afirmando que procede mantener el sistema fijado por la sentencia apelada, que finalmente confirma en todos sus pronunciamientos, incluyendo entre ellos la introducción de una pernocta intersemanal de la menor con su padre, tal como aparece en el fallo de primera instancia.

Los anteriores razonamientos no tienen en cuenta que en el caso de autos, y según se expresa claramente en la fundamentación jurídica de primera instancia, el padre recurrente "se encuentra plenamente capacitado para cuidar y atender a su hija" –fundamento de derecho primero- , y que "la menor mantiene buena relación con ambos progenitores obteniendo resultados académicos buenos y satisfactorios" –fundamento de derecho tercero-. Que también el padre puede flexibilizar su horario de trabajo, lo que le permite conciliar la vida laboral y familiar, y que la menor ha expresado su deseo de compartir más tiempo con su padre.

De tales datos se desprende que concurren los requisitos establecidos en la norma para fijar un sistema de guarda y custodia compartida, que es el preferente conforme a la norma aragonesa, sin que los posibles obstáculos que se esgrimen para la inaplicación de ésta tengan relevancia en el caso para concluir aplicando la excepción.

Ambas sentencias, y especialmente la de primera instancia, se refieren a que la situación ha causado a la niña una gran alteración emocional, asumiendo una carga y una

responsabilidad que no le corresponde por el mero hecho de intentar satisfacer y contentar a ambos progenitores, y que todo ello está creando un estado emocional desadaptativo, frente al cual el Juzgado, y posteriormente la Audiencia Provincial, consideran necesario y prioritario proteger su estabilidad emocional.

Pero esta situación proviene de una sobrevaloración del resultado de la exploración de la menor, y por tanto de la consideración de la opinión de ésta como dato relevante para la decisión del litigio. Como se ha expuesto en el precedente fundamento, la opinión de la menor es un factor a considerar por el tribunal, pero no puede convertirse en el elemento decisorio, habida cuenta la joven edad de la menor y las condiciones concurrentes.

Es de considerar, como ya lo ha realizado esta Sala en casos similares, que la adaptación a un régimen de custodia compartida puede necesitar de apoyos para que la estabilidad de la menor no sufra, pero que el mantenimiento del "statu quo" no puede resultar de hecho la razón para no aplicar la norma contenida en el artículo 80.2 del CDFA, y no hacer posible el despliegue de los efectos beneficiosos que la custodia compartida reporta. Como expresamos en la sentencia de 17 de julio de 2013 (nº 35/2013), no es posible priorizar el *statu quo*, frente a la preferencia legalmente establecida a favor de la custodia compartida. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2016, nº 166/16, se refiere al interés del menor, que no resulta definido legalmente ni en el artículo 92 del Código Civil ni en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, desarrollada en la ley 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, indicando que este interés exige que las situaciones de separación se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquél.

SÉPTIMO.- Por las razones expuestas estimamos el recurso de casación. Y la Sala, constituyéndose en instancia, acuerda establecer un régimen de guarda y custodia compartida en los términos solicitados en el Plan de Relaciones Familiares expuesto por el recurrente, al resultar ajustado a los intereses de la menor, sin perjuicio de la posibilidad de que ambos progenitores, de común acuerdo, puedan modificar alguno de sus contenidos.

Ello conlleva la necesidad de dejar sin efecto la pensión de alimentos que actualmente abona el recurrente a la demandada, por cuanto en el régimen de custodia compartida que se instaura la hija menor disfrutará del mismo tiempo de convivencia con cada uno de ellos y, en consecuencia, ambos contribuirán por igual al sostenimiento de los gastos y asistencia y educación de la menor.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRAD ILMO. SR. D. JAVIER SEOANE PRADO

Con absoluto respeto a la decisión de la mayoría, lamento tener que formular voto particular al amparo de lo prevenido en el artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 205 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que baso en las razones ya expuestas en otros anteriores, como el emitido en el RC 5/2016, al que me remito, y se resumen en señalar que la Sala, nuevamente en contradicción con el criterio sustentado en la instancia por las dos sentencias dictadas en ella y de la opinión sostenida en ella en el informe sicosocial, el Ministerio Fiscal y la opinión que la misma menor expresó en la exploración practicada ante el ponente en la alzada, actúa como tribunal de tercera instancia, y, sustituyendo el criterio discrecional del tribunal de apelación, decide aplicar como preferente el sistema de custodia compartida en ciega aplicación del art. 80.2 CDFA.

En consecuencia, entiendo que el fallo de la sentencia debió haber sido:

FALLAMOS

1. Desestimar el recurso casación formulado contra la sentencia de fecha 8 de marzo de 2016 dictada por la Secc. Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza en el Rollo nº 715/2015.

2. No hacer imposición de las costas del recurso.

3. Decretar la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal. “

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 14 de septiembre de 2016. Custodia compartida. Modificación de medidas por alteración relevante de circunstancias. Flexibilidad de la norma aragonesa. Interés del menor. Falta de prueba procesal. Intervalo de edad de la menor**

"7. El recurso de casación se interpone por la representación del Sr. C. al amparo del art. 477.2.3º y 3 LEC, por entender que presenta interés casacional al oponerse a la doctrina jurisprudencia de este Tribunal. Se consideran infringidos los arts. 80, 77.3.c) y 79.5 CDFA.

8. En síntesis, el recurrente alega, partiendo del carácter preferente otorgado a la custodia compartida por la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, actualmente plasmada en el art. 80 CDFA, que la sentencia recurrida y la de primera instancia infringen dicho precepto, puesto que solo puede acordarse la custodia individual cuando se acredite que esa es la solución más conveniente para el interés del menor y, en el presente caso, lo más beneficioso para la hija es el cambio de régimen de custodia, estableciendo la compartida, puesto que la actitud de la Sra. C. está perjudicando a la menor, al poner trabas a la relación con su padre, hecho que pretende acreditar con cita de la prueba documental aportada en el proceso.

Alega también, con mención de nuestra sentencia de fecha 18-04-12 (recurso de casación 31/2011), que dado el carácter preferente de la custodia compartida, lo que debe probarse es que la individual satisface mejor el interés de la menor, no lo contrario, a diferencia de lo que concluye la sentencia recurrida.

Por último, afirma el recurrente que han variado las circunstancias que fueron tenidas en consideración al firmar el convenio regulador por el que se atribuía la custodia individual a la madre, por lo que, al no modificarse el régimen de custodia, se están vulnerando los arts. 77.3.c) y 79.5 CDFA.

TERCERO.- Preferencia de la custodia compartida y cambio de régimen de custodia.

9. Entrando a conocer sobre las alegaciones del único motivo del recurso, efectivamente, tal como señala el recurrente, esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el carácter preferente de la custodia compartida en numerosas resoluciones (SSTSJA 13/2011, de 15 de febrero; 4/2012, de 1 de febrero; 39/2012, de 27 de noviembre; 35/2013, de 17 de julio; etc.), pero siempre a salvo de que se acredite que la custodia individual salvaguarda mejor el interés del menor. Entre otras muchas, en la de fecha 4-03-14, recurso de casación 41/2013 (reproducida en la de 17-09-15; recurso de casación 17/2015), dijimos *"que el art. 80.2 del CDFA establece como criterio legal el de la custodia compartida de los hijos menores, como forma preferente de satisfacer el superior interés del menor. Dicha norma resulta imperativa para el Juez en los propios términos en que se expresa el texto legal, de modo que debe establecerse un sistema de custodia*

compartida salvo que, de la prueba practicada en autos, resulte más beneficiosa para el interés del menor la custodia individual de uno de los progenitores". Y en la de 18-04-12 (recurso de casación 31/2011), mencionada en el recurso, se recoge que "*la ley parte de que el interés del menor se consigue mejor con la custodia compartida, por lo que la custodia individual sólo se otorgará cuando se compruebe más conveniente. En eso consiste la preferencia, en que la regla sea la custodia compartida y la custodia individual sea la asignada si se demuestra más conveniente para el menor*".

10. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial fundamenta la denegación del recurso de apelación en que "*la solicitud de custodia compartida viene a basarse en una serie de divergencias y desavenencias surgidas entre las partes lo que no constituye razón alguna para acceder a la solicitud del recurrente*", añadiendo que "*habría que acreditar que el cambio de custodia pretendida sea más beneficiosa para la menor que el pactado en su momento en fecha reciente, nada de esto consta probado, ni se ha practicado prueba pericial psicológica ni solicitado por el recurrente para acreditar que el sistema de guarda solicitado sea más beneficioso que el pactado en su día (vigente el CDFA), tal como razona de forma adecuada el Juzgador de instancia, pretensión desestimatoria que de igual manera se extiende a la aplicación del período vacacional pretendido, dada la edad de la menor, la ausencia de prueba alguna que así lo aconseje, así como lo relativo a la pensión alimenticia, petición planteada por el apelante de manera correlativa a la solicitud de guarda y custodia compartida*". Se observa que la sentencia recurrida parte de la inexistencia de prueba que justifique la conveniencia del cambio de régimen de custodia en interés de la hija menor, pasando de la individual pactada a la compartida.

Frente a este razonamiento judicial, entiende el recurrente que la sentencia infringe la doctrina sentada por esta Sala en la sentencia de 18-04-12 (recurso de casación 31/2011), que considera -dado el carácter preferente que el legislador atribuye al régimen de custodia compartida desde la Ley 2/2010- que éste no debe ser probado como el más conveniente, pues inicialmente la ley así lo afirma, sino que, al contrario, sólo la prueba de que la custodia individual es más conveniente permite alterar dicho régimen legal. En esta sentencia se cita la de 9-04-12 (recurso 29/2011), en la que se dice: "*De modo que, se concluye, si en el caso concreto a resolver no existe, conforme a los criterios establecidos en la ley, constancia realmente evidenciada de ser mejor para el menor la custodia individual que la compartida, debe estarse a esta última*".

Sin embargo, la sentencia mencionada, y otras con la misma doctrina, resuelven supuestos de hecho claramente diferentes al que aquí nos ocupa, pues en aquellos se revisa el régimen de custodia acordado por las partes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2010, en aplicación de la Disposición Transitoria Primera establecida en dicha norma (actual Disposición Transitoria Sexta del CDFA). En esta disposición transitoria el legislador aragonés parte, implícitamente, de que en el régimen vigente con anterioridad la custodia compartida era excepcional y no se contemplaba como la más beneficiosa para los hijos menores, a diferencia de la regulación actual, razón por la que se permite que sea sometido a revisión el régimen de custodia, con sujeción a la adecuada valoración de las

circunstancias concurrentes por parte de los tribunales, pero sin necesidad de que se haya producido una alteración sustancial en las circunstancias tenidas en cuenta para su adopción

En sentencias posteriores de esta Sala se aclara perfectamente esta doctrina para los supuestos en los que ya ha transcurrido el plazo de un año fijado en la Disposición Transitoria Primera, exigiéndose una alteración de las circunstancias tenidas en consideración al acordar el régimen de custodia inicial. Así, en la sentencia de 3-10-13 (recurso de casación 22/2013), entre otras, se dice:

"En consecuencia con tal normativa transitoria, durante el periodo indicado de un año desde el 8 de septiembre de 2010 se posibilitaba pedir la modificación del anterior régimen de custodia individual por el de custodia compartida sin necesidad de que estuviera presente el cambio sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta cuando se fijó inicialmente el régimen, como exige con carácter general el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Para hacer factible tal posibilidad de solicitud de cambio se optó por introducir, en el periodo indicado, como causa suficiente para justificar la petición de cambio de las medidas iniciales reguladoras de la crisis parental, el solicitar la custodia compartida en vez de la individual.

Consecuentemente, una vez transcurrido el plazo indicado de un año no basta con la mera petición de cambio de régimen de custodia para instar y obtener el cambio de las medidas fijadas por la inicial sentencia de divorcio, sino que debe estarse al régimen general indicado del artículo 775 de la LEC , de modo que los interesados en la modificación del régimen de custodia que fueran establecidas en el momento inicial de regulación de la situación de ruptura de la convivencia de los progenitores, deben alegar y acreditar una sustancial alteración de las circunstancias que en su momento fueron valoradas". En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sala en la sentencia de 23-05-14 (recurso de casación 3/2014).

11. Por tanto, vigente la nueva regulación desde la Ley 2/2010, habiéndose pactado por los progenitores la atribución de la custodia a la madre en el pacto de relaciones familiares por considerarla más conveniente para la menor, para proceder a la modificación del régimen de custodia resulta necesario acreditar que concurren en la actualidad nuevas causas o circunstancias relevantes que aconsejen el cambio en interés de la hija común, tal como dispone el art. 79.5 CDFA, sin que sea posible valorar la conveniencia de uno u otro régimen como si nos encontrásemos ante la toma de la decisión inicial. Es en este último supuesto, o en el de aplicación de la mencionada disposición transitoria primera, cuando se desenvuelve con plenitud la doctrina según la cual, a falta de una prueba convincente de que la custodia individual satisface mejor el interés del menor, debe prevalecer la compartida, en atención a su preferencia legal.

CUARTO.- Concurrencia de causas o circunstancias relevantes que permiten la modificación del régimen de custodia.

12. Sentado lo anterior, debemos entrar a conocer si, en el presente caso, concurren esas causas o circunstancias relevantes que permiten la modificación del régimen de custodia.

A estos efectos debemos poner de manifiesto la diferente regulación del art. 79.5 CDFA, en los términos expuestos, frente al art. 91 CC, que admite la modificación cuando se alteren sustancialmente las circunstancias que fueron tenidas en consideración. Esta mayor flexibilidad de la norma aragonesa, que se explica porque las medidas a las que se refiere el art. 79.5 son todas ellas relativas a menores, supone que no se trata tanto de acreditar una alteración sustancial de las circunstancias existentes en el momento de la decisión inicial que fijó el régimen de custodia, como de constatar que esas circunstancias ya no satisfacen adecuadamente el interés del menor, por concurrir otras de la suficiente relevancia que justifican la modificación (STSJA de 23-05-14; recurso de casación 3/2014).

13. El recurrente entiende que han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al firmar el convenio regulador en el que se atribuía la custodia a la madre. Alega que, cuando se firmó, la madre quería favorecer en todo momento la relación de la hija menor con su padre, fijando un régimen de visitas que iba a ampliarse paulatinamente pero, actualmente, la madre pone todos los impedimentos que están a su alcance para dificultar la relación y visitas de la menor con su padre, creando una barrera infranqueable que perjudica e influye negativamente en la hija común.

Sin embargo, tanto la sentencia de instancia, como la de apelación que la confirma, señalan que en el proceso no se ha practicado prueba alguna que acredite los recíprocos reproches y acusaciones que se cruzan los progenitores, ni que el sistema de guarda solicitado por el padre sea más beneficioso para la menor que el acordado en su día. Es por ello que, no habiendo articulado la parte recurrente motivos de infracción procesal, el tribunal debe partir de los hechos probados en las instancias, sin realizar modificación alguna, rechazando la nueva valoración probatoria que pretende el recurrente mediante la remisión a la prueba documental aportada en autos.

La mención reiterada que el recurrente realiza a la cláusula II del convenio regulador, en la que se pactó que *"La guardia y custodia de la hija común se atribuye a la madre, con la que convivirá (o en su caso al padre, sin perjuicio de que quepa la posibilidad de convenir una guardia y custodia compartida)"*, tampoco puede justificar la modificación peticionada, puesto que solo abre la puerta a un cambio de custodia consensuado por las partes, lo que no es el caso.

Por último, no puede considerarse como una causa o circunstancia relevante la diferencia de edad de la hija que media entre el momento es que se acordó la custodia individual por sentencia de 13 de diciembre de 2013, y el momento en el que se solicita la modificación de régimen, por demanda del hoy recurrente (acumulada a la presentada por la contraparte) de fecha 19 de noviembre de 2014, no habiendo transcurrido ni un año. Que la menor, nacida el 14 de octubre de 2012, tuviese catorce meses cuando se hizo cargo de la custodia la madre, y veinticuatro meses cuando se pide la modificación del régimen

de custodia, carece de toda relevancia, puesto que resulta una diferencia de edad tan nimia que, por sí sola, no permite la modificación pretendida.

Lo expuesto lleva a concluir que no se han vulnerado por la sentencia recurrida los arts. 80.2, 77.3.c) y 79.5 CDFA, desestimándose el recurso de casación, tanto en su petición de cambio de régimen de custodia, como en el de alimentos y sustento de la hija, consecuencia de aquél."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 15 de septiembre de 2016. Régimen de visitas y comunicaciones. Principio de favor filii. Voluntad del menor de 13 años**

"I.- El núcleo de la discrepancia objeto del recurso se concreta exclusivamente en la determinación del régimen de visitas y comunicaciones del hijo menor del matrimonio, que actualmente cuenta con 13 años de edad. La sentencia recurrida, partiendo de los informes psicológicos obrantes en autos y de la propia exploración del menor concluye que el régimen de visitas será de fines de semana alternos durante dos horas en el punto de encuentro familiar. De igual forma dispone que dicho régimen quede supeditado a la voluntad del menor que es quien decida si desea ver a su progenitor o no. Por su parte el esposo demandado impugna dicha resolución alegando error en la apreciación de la prueba, entendiendo que sea sobrevalorado la exploración del menor y se han interpretado de forma deficiente los informes obrantes en la en los autos, pretendiendo en definitiva normalizar un régimen de visitas, aun cuando sea de forma progresiva.

II.- El principio *favor filii* es un principio jurídico esencial básico que orienta la actuación judicial y que se resume en la protección integral de los hijos, entendiéndose como superior a cualquier otro derecho el del menor, que primará sobre cualquier otro interés legítimo con el que entre en conflicto. Dicho principio tiene consagrado en el artículo 76. 3 del Código de Derecho Foral de Aragón, señalando que toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos menores de edad se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos. Pues bien, en el caso enjuiciado hay que partir de que, cuando los cónyuges se divorciaron en el año 2011 acordaron una custodia compartida, que se rompió cuando el demandado fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar en la persona de su esposa. A partir de ese momento se suspendió la convivencia del esposo con su hijo menor, y el régimen de visitas quedó supeditado a fines de semana alternos durante dos horas semanales en el punto de encuentro familia, que es el régimen de visitas que ahora se pretende superar. Pues bien en primer lugar hay que partir de no conviene al beneficio del interés del menor la relación con un progenitor condenado por ejercer y violencia sobre su cónyuge, y por tanto en el caso enjuiciado la limitación del régimen de visitas está más que justificada. Partiendo de esta premisa es cierto que de los numerosos informes obrantes en las actuaciones, elaborados tanto por el equipo psicosocial adscrito al Instituto de Medicina Legal de Aragón , como por la Cruz Roja, que administra el punto de encuentro familiar se desprende que la relación paterno filial durante tales encuentros ha ido mejorando, pero sin llegar al punto de que se les resulte aconsejable sustituir el mismo, que así se expresa el último informe emitido por el Instituto de Medicina Legal de Aragón, de fecha nueve de Marzo de dos mil dieciséis que entiende que esta mejoría es insuficiente para pasar un régimen de visitas normalizado. Sin embargo, este Tribunal no puede compartir la tesis de la sentencia recurrida en el sentido de dejar en manos del menor el cumplimiento de ser régimen de visitas pues ello, en las difíciles relaciones que mantienen ambos progenitores abocaría inexorablemente a la desaparición del mismo. Cierto es que no puede compelerse a un menor, con el suficiente juicio que debe tener una persona que cuenta con 13 años de edad, a que

mantenga una relación no querida con su progenitor, pero la función del Juzgador debe ser, por lo menos, garantizar la posibilidad de que esta exista, facilitando el contacto entre ambas partes, para que esas relaciones puedan subsistir, y en su caso mejorar, lo que no ocurría en el supuesto de que el menor, de propia voluntad o inducido con terceros, a adoptarse la decisión de suprimir el régimen de visitas. En consecuencia procede estimar parcialmente al recurso y, confirmando el resto de la resolución del recurrida, dejando sin efecto la mención a que el régimen de visitas quedará a voluntad el hijo menor del matrimonio."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 22 de septiembre de 2016. Custodia compartida. Criterio preferente. Idoneidad de ambos progenitores. Conflictividad. Prueba del maltrato**

"PRIMERO.- Discrepa la parte apelante del fallo de la sentencia por el que se atribuye a la madre la custodia individual de los hijos menores, e interesa que la custodia de los menores se comparta con las concreciones determinadas en el escrito de contestación a la demanda.

En la sentencia objeto del recurso de apelación sobre la base de la prueba practicada en primera instancia, ceñida al interrogatorio de partes, y documental reducida al informe de atención en el Instituto Aragonés de la Mujer, obrante al folio 79 de las actuaciones, se concluye la procedencia de la custodia individual de la madre respecto de los hijos menores de edad, a fecha de hoy, de seis y cuatro años, razonando que:

Si bien la custodia compartida es el criterio preferente contenido en el Código de Derecho Foral de Aragón sin embargo, tras la práctica de al prueba de la presente litis, se dice, existen indicios suficientes para dar preponderancia a la guarda y custodia individual sobre la compartida, merced a la documental y al interrogatorio de parte, así como de la testifical practicada en la persona del Sr. J, pues de ello resulta, que la pareja mantiene una relación conflictiva, los progenitores ni siquiera se hablan, el reconocimiento administrativo a favor de la madre como víctima de violencia de genero manifestada y el papel que durante la convivencia venía ejerciendo cada uno de los progenitores, dedicándose la madre y demandante al cuidado de la casa y los hijos. Se concluye finalmente la procedencia con ello de atribuirla a la madre pues, se explica, que desde el punto de vista psicológico es recomendable que el entorno de los menores, durante la experiencia traumática que les supone la cesación de la convivencia de los padres, sea lo más estable posible y que no se produzcan grandes cambios en su vida cotidiana y habitual, como así sucedería si se atribuyera la guarda y custodia de forma compartida, merced a las causas plasmadas en la presente resolución.

A tales argumentos se opone la parte apelante por la vía de este recurso alegando, que el sólo hecho de la conflictividad entre los progenitores no justifica la exclusión del criterio legal preponderante, invocando como precedentes jurisprudenciales la STSJ de Aragón de 18 de diciembre de 2015. Que la documental referida no alcanza un nivel de objetividad que permita apreciar la suficiencia de su contenido para servir a la decisión judicial, finamente que el papel social desarrollado por los progenitores durante la convivencia, no empeña la capacidad del padre para atenderlos en los términos propios de una custodia compartida.

Por el Ministerio Fiscal se interesó la confirmación de la sentencia, manifestando en argumento añadido, que para el Ministerio Público resulta evidente que el padre pudiera poner a sus hijos en una situación muy precaria con la intención de esquivar la obligación de contribuir a la pensión alimenticia a sus hijos, se dice, conocedor como es

de que la madre de sus hijos no posee nada de índole material, ya sea patrimonio ni rentas, con escasa posibilidad de obtenerlas más allá de su tarea como limpiadora.

SEGUNDO.- Vaya por delante que este Tribunal, tras examinar los autos, la prueba practicada, tras la visualización del soporte audiovisual del acto del juicio y la valoración de ésta, comparte las objeciones de la parte apelante por sus propios fundamentos que se dan por reproducidos. Ello motivo la suspensión de la deliberación y la practica del necesario informe psico-social que en casos como el presente, a juicio de este Tribunal, debería haber sido solicitado en la primera instancia.

Tras la valoración de dicho informe su ratificación y aclaraciones en el acto de la vista, ciertamente se puede concluir:

Que no existe una relación de conflictividad entre los progenitores más allá de posibles y normales desavenencias que sea obstáculo para considerar un régimen de custodia compartida, pues es el padre la persona a la que acude la madre para que atienda y se quede con los hijos y los cuide cuando ella no puede por razones laborales, lo que de hecho ha significado una convivencia del padre con los hijos muy intensa equiparable a una modalidad de custodia compartida (pernoctando con el padre todos los fines de semana y estando con ello dos días entre semana).

Que el supuesto maltrato sufrido por la madre no se ha objetivado, pues la asistencia recibida por tal motivo por parte del Servicio Aragonés de Salud está basado únicamente en las manifestaciones de la madre. Ello no permite sin dato alguno objetivo ni informe pericial al respecto considerar que el padre posea un perfil de maltratador, y con ello y en relación con sus hijos concluir que no es la persona adecuada para atenderlos.

Es más, ha de concluirse que pese a las alegaciones de la madre en su demanda y en el recurso, es la propia madre la que con sus hechos avala lo contrario, pues si tuviera la menor duda sobre la capacidad del padre para atender a sus hijos, por los motivos que aquí se alegan o cualquier otro, no debería haberlos dejado en su compañía, para que los cuide el padre en el régimen de guarda de hecho, que se vino cumpliendo a su conveniencia y resulta ser de una amplitud incompatible con las alegaciones que sustentan la demanda y las razones de la sentencia recurrida.

Finalmente estima este Tribunal que el papel social que desenvolvieron los padres durante la convivencia respecto del cuidado de sus hijos es anterior e irrelevante.

Con ello y examinado el informe pericial practicado ante este Tribunal, ha de concluirse como lo hace el informe pericial psicológico y social presentado y practicado a instancia de este Tribunal que no existe razón significativa alguna que permita considerar en mejores condiciones a la madre que al padre, para el ejercicio de la guarda y custodia ello determina legalmente la procedencia de conformidad, con el artículo 80.2 del Código de Derecho Civil de Aragón la fijación de un régimen de custodia compartida.

Pues de acuerdo con el referido informe en sus conclusiones ratificado sin matiz relevante alguno en el acto de la vista, y que brilla por su profesionalidad y seriedad, en contradicción con lo argumentado en la sentencia que se recurre, se dice:

"**PRIMERA:** Respecto a la **Sra. A** en la valoración realizada no se aprecian alteraciones de la sensopercepción ni del contenido o curso del pensamiento, ni otros indicadores de trastorno.

De sus resultados en el test MCMI-III se extrae que no hay presencia de patrones clínicos o patología grave de la personalidad, ni presencia de síndromes clínicos.

De sus resultados en el test CUIDA se extrae que la informada podría presentar algunas dificultades en dar un cuidado idóneo a los menores, siempre teniendo en cuenta que las habilidades parentales están sujetas a la mejora y al aprendizaje.

Durante la interacción materno-filial se observa la vinculación afectiva de los menores con la Sra. Alves, siendo esta afectuosa y segura.

La disponibilidad materna para los cuidados básicos de los menores es parcial debido a sus horarios de trabajo.

La red de soporte y apoyo materno para el cuidado de los menores es escasa.

SEGUNDA: Respecto al **Sr. T**, en la valoración realizada no se aprecian alteraciones de la sensopercepción ni del contenido o curso del pensamiento, ni otros indicadores de trastorno.

De sus resultados en test CUIDA, en global, los resultados señalan a que el informado sería capaz de brindar un cuidado adecuado a los menores, no presentado dificultades significativas para cubrir sus necesidades tanto físicas como emocionales.

Durante la interacción paterno-filial se observa la vinculación afectiva de los menores con el Sr. T, siendo esta afectuosa y segura.

La disponibilidad del Sr. M para los cuidados básicos de los menores es parcial debido a sus horarios de trabajo, aunque refiere que cuenta con flexibilidad para organizarse.

El informado presenta una red de soporte y apoyo para el cuidado de los menores familiar y disponible.

TERCERA: La conflictividad en el momento actual es baja, siendo capaces de mantener comunicación y llegar a acuerdos respecto a los menores, aunque en el pasado no ha sido así.

Ambos progenitores muestran deseos de ejercer el rol parental.

Estas conclusiones surgen del análisis de las circunstancias en el momento actual, cualquier modificación que pueda afectar implicaría un nuevo estudio y valoración."

Con tales conclusiones, que incluso apuntan a una mayor idoneidad del padre y su entorno familiar, este por otro lado, el único que puede proporcionar dicho apoyo en la crianza y educación de los hijos, y que no permiten apreciar evidencia alguna de un propósito o intención desviada del padre, para pretender una custodia compartida, como sería el destacado por el Ministerio Fiscal (pretensión de abandono de la obligación de alimentos situando a la madre y su entorno en una difícil situación de precariedad económica) procede la estimación del recurso de apelación y revocación de la sentencia recurrida fijando el plan de relaciones familiares interesado por el padre y que se estima idóneo, con las modificaciones del texto que figuran en el fallo, pues ha sido introducido en el proceso en el momento procesal oportuno y ni las partes ni el Ministerio Fiscal han objetado su adecuación e idoneidad."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ejea de los Caballeros de 23 de septiembre de 2016. Extinción de pensión alimenticia para hijos mayores de edad. Carácter retroactivo**

"Primero.- Se considera acreditado que el 30 de enero de 2008 se dictó sentencia en este Juzgado en el que se acordaba el divorcio entre J y M. Aunque la sentencia no consta en las actuaciones se refiere a ella la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, aportada como documento de la demanda. Dicho documento no ha sido recurrido y éste es un hecho sobre el que las partes no discuten. Dicha sentencia fijaba una pensión de alimentos de 400 euros para el hijo menor, y de 150 euros para cada una de las dos hijas, entonces de 17 años.

El 16 de julio de 2008, la sección segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia que revocaba parcialmente la anterior. En lo que se refiere a los alimentos, dejaba sin efecto los pronunciamientos de la sentencia de instancia, y elevaba a 900 euros mensuales, como pensión global a favor de los tres hijos, lo acordado en la instancia. Así se desprende de la sentencia aportada como documento adjuntado a la demanda que, como se ha dicho, no se ha impugnado, aparte de no ser éste un hecho discutido por las partes.

De la documentación presentada y de las declaraciones de las partes se consideran acreditados los siguientes hechos relevantes para la resolución de este procedimiento:

- La hija V, nacida el 1990, en la fecha de consulta del Punto Neutro, el 16 de marzo de 2016, llevaba cotizados cinco años. Según la madre cobra unos 600 euros al mes. Vive en el domicilio de la madre, pero con anterioridad abandonó el domicilio y se fue a vivir con su pareja, con la que tuvo un hijo. Rota la relación volvió al domicilio de la madre, junto con el hijo.

- La hija L, nacida 1990, vive en el domicilio de la madre, que manifiesta que gana unos 800 euros al mes. El 16 de marzo de 2016 llevaba cotizados siete años y nueve meses.

- El demandante declaró en el ejercicio 2014 unos ingresos brutos de 48.965,7 euros, y en el ejercicio 2015 unos ingresos brutos de 48.998,26 euros. Así se desprende de la documentación presentada por el demandante y la consulta en el Punto Neutro Judicial.

- No hay prueba precisa de los ingresos de la madre, que manifiesta cobrar en negro entre 400 y 600 euros al mes.

- Desde mayo de 2016 el padre ha dejado de abonar 600 euros mensuales de la pensión global. A raíz de esto, la madre ha dejado de pagar la mitad de la cuota del préstamo hipotecario, que ha pasado a ser abonada íntegramente por el demandante.

Segundo.- El artículo 775.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil establece que "*el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas*". También prevé este cambio el artículo 77.3 del Código de Derecho Foral de Aragón.

La variación de las circunstancias es presupuesto para la modificación de medidas pero, aun dándose dicha variación, la modificación no es automática. El hecho de que hayan cambiado algunas de las circunstancias que se daban en el momento de acordarse unas medidas no significa, necesariamente, que las medidas tengan que modificarse. Es necesario, además, que las nuevas medidas propuestas sean procedentes, a la vista de las circunstancias de cada caso.

En el presente caso, para fundamentar la demanda se alega la edad de las hijas, respecto de las que se pide la extinción de la pensión, así como el hecho de no haber finalizado sus estudios y haber estado trabajando, por lo que tienen ingresos propios, siendo excepcional en Aragón la prestación de alimentos a los hijos mayores de edad. Asimismo, se alega la destinación de la pensión a fines distintos que la atención de las necesidades de las hijas.

En cuanto a la reconvención se alega que las necesidades del hijo menor han aumentado, que la pensión nunca se ha actualizado, y que la cuantía reclamada es la que resulta de la aplicación de las tablas orientativas del CGPJ.

Tercero.- En cuanto a la extinción de la pensión alimenticia a favor de las hijas, parece claro que resulta procedente su extinción desde el 7 de agosto de 2016, momento en que ambas cumplieron veintiséis años. Y ello conforme a lo establecido en el artículo 69.2 del Código de Derecho Foral, al no concurrir motivos para fijar una edad distinta.

La cuestión es si se puede fijar una fecha anterior para esta extinción, tal y como pide la parte actora. En la vista, la defensa del demandante propuso que se fijase la fecha desde que se debían entender extinguidas estas pensiones, pero no se propuso una en concreto (salvo, en su caso, la interposición de la demanda). Se hizo referencia a unos hechos posteriores que no se concretaron, que tampoco se probaron y que no se fijaron en el tiempo. De la declaración de la demandada se desprende que la última pensión completa que abonó el demandante fue en mayo de 2016.

La demandada alega que no es posible la extinción con carácter retroactivo de una pensión de alimentos, y cita en su apoyo una Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 20 de octubre de 2012.

Considero que, a la vista de diversas sentencias de la sección segunda de Ilma. Audiencia Provincial de Zaragoza (ej: 6 de marzo, 22 de octubre y 11 de noviembre de 2014, y 30 de octubre de 2012), el criterio general es que no se puede extinguir con

carácter retroactivo las pensiones de alimentos abonadas y consumidas. Ello con base en elementos tales como el carácter constitutivo de este tipo de sentencias, el carácter esencialmente consumible de la prestación, o la fundamentación en necesidades perentorias del alimentista.

Sin embargo, se admite la atribución de efectos retroactivos de la extinción en relación a pensiones no abonadas, cuando hay elementos que justifican dicha retroactividad (en concreto, la Audiencia se refiere a un supuesto que califica de abuso de derecho).

En el caso que nos ocupa quizá no pueda hablarse de abuso de derecho, pero sí de cierto descontrol, y de suficiente justificación para el cese en la pensión de alimentos. El artículo 69 del Código de Derecho Foral se refiere al deber de los padres de costear los gastos de crianza y educación de los hijos que han alcanzado la mayoría de edad, si no han completado su formación y no tienen recursos propios para sufragar estos gastos, y sólo en la medida en que sea razonable, y por el tiempo normalmente requerido para que la formación se complete.

Las hijas dejaron de estudiar con dieciséis años y se pusieron a trabajar. Es cierto que una de ellas (L) ha estado trabajando más que la otra, la cual, además, se fue a vivir con su pareja, con la que tuvo un hijo, volviendo más tarde a vivir a casa de la madre. Es decir, las hijas no han continuado estudiando ni formándose, lo que ya supone la desaparición de uno de los supuestos a que se refiere el artículo 69. De lo obrante en las actuaciones se desprende que no han tenido ninguna voluntad de hacerlo.

Por otro lado se evidencia que han tenido recursos propios. Especialmente en el caso de L, que ha estado trabajando prácticamente todo este tiempo. V ha trabajado menos tiempo, pero tiene cotizados más de cinco años. De las facturas de odontólogo aportadas se desprende que, además del pago de la pensión, el padre ha hecho frente a otros gastos de las hijas en alguna ocasión.

A la vista de esto, entiendo que llega un momento en que deja de ser razonable que el padre siga abonando la pensión de alimentos a unas hijas que hace tiempo que alcanzaron la mayoría de edad; una de ellas ha estado trabajando casi de forma permanente y la otra, aún habiendo trabajado menos, se marchó del hogar familiar para vivir con su pareja, con la que llegó a tener un hijo; que no han tenido ninguna voluntad de continuar su formación o sus estudios; viven en el domicilio familiar.

El problema es determinar la fecha exacta de la extinción de las pensiones de las hijas. Pero teniendo en cuenta que cumplían los 26 años en agosto, entiendo que es razonable fijar la fecha de la extinción en mayo de 2016, cuando el padre abona la última pensión completa, de modo que no podrán reclamarse ninguna de las pensiones abonadas, pero tampoco podrá exigirse ningún impago.

En cuanto a los posibles problemas económicos que esto pueda suponer, debe tenerse en cuenta que, en cualquier caso, la pensión se extinguiría en agosto. Además, si

observamos los ingresos de la madre y las hijas (según lo manifestado, ya que no hay ninguna prueba documental al respecto), en la casa de la madre estarían entrando unos 2.000 euros mensuales, más la pensión de 900 euros hasta el momento en que dejó de abonarse. Tras ese momento, el demandante se ha hecho cargo del pago de la totalidad de la cuota del préstamo hipotecario.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Derecho Foral, las hijas deberían contribuir a las necesidades de la vivienda en la que residen. En relación con el hijo de V, además, es posible que el padre deba contribuir a satisfacer sus necesidades, obligación que no puede ser trasladada al demandante, al menos de manera automática. Con los ingresos expuestos, *a priori*, parece que pueden satisfacerse las necesidades básicas de las personas que viven en el domicilio familiar.

Cuarto.- En cuanto al aumento de la pensión del hijo menor, , no hay circunstancias nuevas, sobrevenidas o imprevistas que hayan aumentado sus gastos o, al menos, no se han justificado. Que un buen día cumpliría quince años no es algo que no se supiera en 2008, y no se ha demostrado que tenga unos gastos superiores a los de cualquier otro chico de su edad.

Sin embargo han de tenerse en cuenta varias cosas. Por un lado, que la pensión de alimentos no se ha actualizado en estos ocho años. Ciertamente la sentencia de la Audiencia no decía nada al respecto, pero las pensiones de alimentos son deudas de valor, por lo que la falta de actualización supone una pérdida cada año que pasa. Existen opiniones favorables a la obligatoriedad de actualizarlas incluso aunque no se haya establecido nada al respecto de forma expresa.

Por otra parte, la Audiencia fijó una pensión global para los tres hijos, lo que no significa que corresponda un tercio a cada uno de ellos. Proporcionalmente, los gastos de un hijo son mayores que los de tres, porque existen ciertos gastos fijos que no aumentan con el número de hijos, y otros que sí aumentan, pero no de forma proporcional, sino de manera inferior. Tres hijos no gastan el triple que uno. Un reflejo de esta idea la encontramos en las tablas orientativas del CGPJ, de modo que, para una misma población e ingresos de los progenitores, el resultado de una pensión de alimentos para tres hijos no es el triple que para uno.

Por ello, entiendo que sí debe aumentarse la pensión alimenticia del menor . Aplicando las tablas orientativas mencionadas el resultado es de algo más de 350 euros mensuales, por lo que se fijará la pensión en 380 euros al mes (ya que el resultado deja al margen las necesidades de vivienda y de estudios).

El resultado alcanzado no coincide con el que propone la parte actora. Debe tenerse en cuenta que la demandada parte de sus ingresos netos, pero emplea los ingresos brutos del demandante, por lo que el resultado que alcanza no es correcto, en opinión del que suscribe.

En cuanto a los gastos extraordinarios, que no incluirán los propios del inicio del curso, vista la diferencia de ingresos entre el padre y la madre se repartirán al 75% el padre y el 25% la madre."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 14 de octubre de 2016. Pensión de alimentos. Modificación de medidas. Alteración de circunstancias. Posterior. Relevancia. Estabilidad. Imprevisión**

"PRIMERO.- D. Julio recurre en casación la sentencia de la Audiencia Provincial que desestimó su apelación contra la sentencia por la que el Juzgado rechazó la demanda en la que pretendió la modificación de la pensión alimenticia de 500 € (hoy actualizada a 511'27 €) fijada como contribución al sustento de su hijo E, nacido el de 1992 en el seno de su matrimonio con la recurrida, Dª María Emilia, en la sentencia de divorcio de fecha 11 de noviembre de 2010.

SEGUNDO.- Como único motivo de casación se afirma que la sentencia recurrida infringe el art. 82.2 CDFA porque hace abstracción de las efectivas disponibilidades económicas del recurrente obligado a la prestación alimenticia.

El motivo pasa por alto la razón por la que las sentencias de ambas instancias desestimaron las pretensiones que el recurrente mantuvo en ellas, que no es otra que la de que no concurre el cambio de circunstancias que permite la modificación de las medidas acordadas en una sentencia matrimonial firme.

De acuerdo con una consolida doctrina de esta Sala (SS 42/2013, de 3 de octubre y 17/2013, de 13 de marzo o 10/2015, de 2 de marzo) en interpretación de lo dispuesto en el art. 79.5 CDFA y 775.1 LEC, para que pueda darse lugar a la modificación de las medidas definitivas acordadas en una previa sentencia matrimonial es inexcusable la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se haya producido, con posterioridad a dictarse la resolución judicial que la sancionó, un cambio en la situación fáctica que determinó la medida que se intenta modificar.

b) Que dicha modificación o alteración, sea sustancial, esto es que afecte al núcleo de la medida, y no a circunstancias meramente accesorias o periféricas. Que haga suponer que de haber existido al momento del divorcio se habrían adoptado medidas distintas.

c) Que tal cambio sea estable o duradero, con carácter de permanencia, y no meramente ocasional o coyuntural, o esporádica.

d) Que la repetida alteración sea imprevista, o imprevisible y, por ende, ajena a la voluntad de quien entabla la acción de modificación, por lo que no puede ser buscado de propósito, por quien interesa la modificación para obtener unas medidas que le resulten más beneficiosas.

Como ha sido señalado, la exigencia de la alteración sustancial de circunstancias como presupuesto de la modificación de las medidas adoptadas en un precedente proceso matrimonial tiene por fin evitar una serie interminable de procesos de revisión de

medidas ya acordadas con quiebra del principio de seguridad jurídica que se produciría de no ser así.

Y la razón por la que las sentencias de ambas instancias rechazan la demanda de modificación es precisamente que no consideran que se haya producido el necesario cambio de circunstancias, lo que, por otra parte, tampoco es alegado por el recurrente en ninguno de sus escritos procesales, en los que omite toda pormenorización de las circunstancias que a su entender han variado desde el momento en que la medida cuestionada fue establecida en la previa sentencia de divorcio.

En definitiva, la sentencia recurrida difícilmente puede haber incurrido en la infracción del art. 82.2 CDFA, por la sencilla razón de que no lo ha aplicado, pues la demanda de modificación no superó el escrutinio de si concurren en el caso los elementos necesarios para que las medidas matrimoniales ya adoptadas puedan ser objeto de nuevo estudio y decisión."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 14 de octubre de 2016. Límite temporal en el uso de la vivienda familiar. Periodo indeterminado. Gestiones de venta. Uso de cosa común**

"PRIMERO.- Antecedentes relevantes.

1. Por sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Zaragoza, de fecha 1 de octubre de 2015, en aplicación del art. 81.3 CDFA se limitó el uso de la vivienda familiar a la esposa hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha en la que debía desalojarla con la finalidad de facilitar la negociación sobre su uso en condiciones de igualdad entre las partes, según dispone la resolución.

2. La sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 10 de mayo de 2016, en su fundamento de derecho cuarto, considera "razonable y adecuada la limitación temporal que fija la Sentencia apelada, que por ello se confirma". Sin embargo, a continuación, estima la petición subsidiaria de la esposa para, una vez llegue el 31 de diciembre de 2017, proseguir en la vivienda que ocupa hasta que se logre su efectiva venta. Se afirma en la sentencia que *"tratándose de bienes en comunidad o copropiedad, en los que por más que haya cesado el uso atribuido a uno ambos titulares tienen el derecho de propiedad sobre la cosa, el art. 394 C.C. dispone que cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, disponiendo de ellas conforme a su destino y sin perjudicar el interés de la comunidad, ni impedir a los copartícipes utilizarlas según su derecho, debiendo ser, pues, por la normativa propia del régimen de comunidad por las que se rija el uso en cuestión"*.

La petición subsidiaria de la Sra. M. se fundamentaba en el recurso de apelación en sus menores ingresos y en la mayor necesidad de ocupar la vivienda frente a su esposo.

En el fallo, la sentencia revoca en parte la dictada en primera instancia, acordando que *"una vez finalizado el uso de la vivienda, podrá la Sra. M. seguir el uso de la misma hasta su efectiva venta, debiendo tener una conducta activa en las gestiones conducentes a la misma"*.

SEGUNDO.- Recurso por infracción procesal.

3. Al amparo del art. 469.1, 2º y 4º LEC, se alega por el recurrente la infracción del art. 218.2 LEC, en relación con los arts. 248.3 LOPJ y 24 CE.

Entiende el recurrente que la sentencia incurre en el vicio de incongruencia interna, puesto que, por una parte, confirma la sentencia de primera instancia, que fija una fecha concreta para la finalización de uso de la vivienda por la esposa (31 de diciembre de 2017) y, por otra, extiende este uso por un período indeterminado, puesto que la efectiva venta de la vivienda dependerá de numerosos factores, entre los que se incluye la propia voluntad de la usuaria de la vivienda conyugal.

4. La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha delimitado los contornos de la denominada incongruencia interna, entendiéndose por tal la contradicción entre los fundamentos de derecho de la sentencia y su fallo o, tambien, cuando esta contradicción afecta a los diversos pronunciamientos del fallo.

Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2011, con mención de la de 15 de febrero de 2005 y otras anteriores, señala:

"Como excepción a la norma general que exige que la incongruencia se manifieste por una discordancia entre el fallo o parte dispositiva de la sentencia y lo pedido en el suplico de la demanda, la doctrina de esta Sala, recogida en las sentencias citadas en el motivo de 25 de mayo de 1990 y 18 de octubre de 1996, permite apreciar incongruencia atendiendo a la contradicción existente entre la fundamentación de la sentencia y su parte dispositiva, doctrina que se reitera en la sentencia de 18 de diciembre de 2003, según la cual "la incongruencia interna pude tener lugar por contradicción entre los pronunciamientos de un fallo, o bien entre la conclusión sentada en la fundamentación jurídica como consecuencia de la argumentación decisiva -"ratio decidendi"- y el fallo, o con alguno de sus pronunciamientos. Para que se produzca esta segunda modalidad de incongruencia interna será preciso que la contradicción sea clara e incuestionable, pues en otro caso, prevalece el fallo, sin perjuicio de que la obscuridad en el razonamiento pueda servir de sustento a otro vicio de la sentencia distinto de la incongruencia".

5. Sin embargo, en el presente caso no nos encontramos, propiamente, con una contradicción entre los razonamientos recogidos en los fundamentos de derecho de la sentencia y su plasmación en el fallo o, por decirlo con otras palabras, las conclusiones a que conducen los razonamientos jurídicos del fundamento de derecho cuarto se corresponden con lo acordado en el fallo. Así, si bien estima adecuada la limitación temporal al uso de la vivienda familiar fijada en la sentencia apelada en aplicación del art. 81.3 CDFA, la revoca parcialmente para acordar que la Sra. M. continúe ocupando la vivienda hasta su efectiva venta, en aplicación del régimen de uso de la cosa común regulado en el art. 394 CC que la sentencia de segunda instancia entiende procedente.

Por ello, debe rechazarse el recurso por infracción procesal, centrando la cuestión debatida en la posible infracción de los arts. 81.3 CDFA y 394 CC alegada en la casación.

TERCERO.- Recurso de casación: **atribución temporal del uso de la vivienda familiar (art. 81.3 CDFA)**.

6. Se interpone el recurso al amparo de los arts. 477.2.3º y 477.3 LEC, así como de los arts. 2 y 3.1 Ley 4/2005, sobre la casación foral aragonesa, al considerar que la resolución del recurso presenta interés casacional, por oponerse la sentencia recurrida a la doctrina sentada por esta Sala. Se alegan como infringidos el art. 81.3 CDFA y el 394 CC.

7. El recurrente afirma que, frente a la fijación por la sentencia de primera instancia de un límite temporal al uso de la vivienda familiar en la fecha del 31 de diciembre de 2017, la resolución recurrida, al ampliarlo hasta que se proceda a la efectiva venta del inmueble,

desnaturaliza ese límite temporal y lo convierte en un período indeterminado, que depende de la discrecionalidad de la propia ocupante, puesto que su intervención resulta imprescindible para proceder a la venta del piso.

8. El art. 81.3 CDFA, que se estima infringido por el recurrente, dispone que: "La atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener una limitación temporal que, a falta de acuerdo, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia".

Esta misma Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la obligación que establece el citado precepto de fijar un límite temporal cierto para la atribución del uso de la vivienda familiar. Así, en la sentencia de 4 de enero de 2013 (recurso de casación 35/2012), referida a un supuesto en el que la sentencia recurrida acordaba que, transcurrido el plazo temporal de nueve años, cualquiera de las partes podría instar demanda de modificación de medidas definitivas para evaluar, teniendo en cuenta las concretas circunstancias familiares concurrentes, la posibilidad de su prórroga, cambio o destino dar a la vivienda familiar, decíamos:

"Lo que la ley ordena en este particular es que el Juez ha de fijar un límite para la atribución del uso, o lo que es lo mismo, señalará un plazo. De ese modo se atiende la necesidad de certeza al respecto, que conviene a ambas partes: por un lado al favorecido con la atribución del uso, quien de este modo podrá hacer con tiempo sus previsiones para cuando llegue ese momento, tales como búsqueda de otro alojamiento, o evaluación de sus posibilidades de adjudicárselo si, como en el caso que nos ocupa, ambos son cotitulares del inmueble, etc. Y, por otro lado, conviene también al que se ve privado del uso del bien, que no sólo podrá también ponderar esas posibilidades, sino que sabrá que podrá venderse libre de esa carga a partir de una determinada fecha. Esto no se consigue con el pronunciamiento de la sentencia recurrida (que confirmó íntegramente la de primera instancia que a su vez incluyó el inciso del que la parte disiente) ya que deja en la indefinición el límite temporal con ese añadido tan innecesario como perturbador".

9. En el presente caso, la sentencia recurrida, después de valorar las circunstancias concretas de la familia, en particular los ingresos de ambos progenitores, ratifica la finalización de la atribución del uso de la vivienda familiar fijado por la sentencia de primera instancia en la fecha del último día del mes de diciembre de 2017, en aplicación del art. 81.3 CDFA. La propia sentencia, en su fundamento de derecho cuarto, expresamente indica que le "parece razonable y adecuada la limitación temporal que fija la sentencia apelada, que por ello se confirma".

Sin embargo, esta confirmación de la limitación temporal es meramente aparente, puesto que, a continuación, se estima la petición subsidiaria de la Sra. M., autorizándole a seguir ocupando la vivienda hasta la venta de la misma por entender que, al ser copropietaria, viene amparada por el art. 394 CC.

10. La ampliación del uso de la vivienda a la Sra. M. hasta su efectiva venta, en aplicación de un precepto no alegado por las partes y que se refiere a un ámbito completamente

distinto al de las medidas patrimoniales a adoptar en el proceso de divorcio -como es el régimen de uso de la cosa común por los copropietarios al que se refiere el art. 394 CC-, desnaturaliza la exigencia legal de fijación de un límite temporal cierto a la atribución del uso de la vivienda familiar regulado en el art. 81.3 CDFA, puesto que dicho uso, de acuerdo con el fallo de la sentencia recurrida, no finará el 31 de diciembre de 2017, sino que queda a expensas de la voluntad de una de las partes -la propia interesada-, que deberá prestar su consentimiento y su colaboración para que el inmueble sea vendido. En definitiva, la aplicación indebida y no solicitada del art. 394 CC frustra la finalidad perseguida por el art. 81.3 CDFA de establecer un límite temporal cierto al uso de la vivienda familiar, por lo que debe entenderse infringido este último precepto.

La mención incluida en el fallo de que la ocupante de la vivienda deberá tener una conducta activa en las gestiones conducentes a la venta, ninguna incidencia tiene, puesto que no es más que un mero desiderátum sin trascendencia jurídica real. En todo caso, aun cuando la conducta de la interesada fuera activa a favor de la venta, seguiría desvirtuándose la exigencia de fijación de un límite temporal cierto, puesto que el momento de la efectiva venta estará sujeto a numerosas variables que no dependen, exclusivamente, de la voluntad de los vendedores.

Por lo expuesto, al infringir la sentencia recurrida el art. 81.3 CDFA, procede estimar el recurso de casación por este motivo, casando la sentencia de apelación y confirmando la de primera instancia en este punto.”

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ejea de los Caballeros de 28 de octubre de 2016. Custodia compartida. Disponibilidad. Alteración de status quo. Interés del menor**

"**Primero**.- O y L mantuvieron una relación sentimental de la que nació una hija, llamada M, el 3 de septiembre de 2008. En sentencia de 26 de junio de 2013, dictada en este Juzgado, en el procedimiento 59/2013, se aprobó la propuesta de pacto de relaciones familiares que presentaron. Entre otras medidas, se acordaba atribuir la guarda y custodia de la hija menor al padre, se fijó un régimen de visitas y vacaciones a favor de la madre, y se estableció una pensión de alimentos a favor de la hija y a cargo de la madre de 250 euros mensuales. Así se desprende de la certificación del Registro de la Propiedad, el pacto de relaciones familiares y la copia de la sentencia aportados como documentos 2, 3 y 4 de la demanda.

El principal motivo de que la guarda y custodia se atribuyese al padre fue el hecho de que la madre se marchó de Ejea de los Caballeros, por haber encontrado trabajo en otra localidad, e incluso los progenitores hablaron de replantear esta cuestión si la madre volvía a residir en Ejea. Así lo manifiesta la demandante, y así lo vino a reconocer el demandado en su declaración en el juicio.

En la actualidad, la demandante reside en Ejea de los Caballeros, tras haber encontrado trabajo en esta localidad. Se aporta junto a la demanda contrato de arrendamiento (documento 9), y en las diversas nóminas aportadas se hace constar que su domicilio está en Ejea de los Caballeros. Además, aunque sobre este punto, en la contestación, se duda acerca de si el domicilio de la demandante va a quedar establecido de forma definitiva en Ejea, en la vista, celebrada siete meses después, el demandado parece reconocer este extremo. En los informes psicológico y social se parte de que la Sra. R reside en Ejea.

De los informes referidos se desprende que el demandado vive en el domicilio con su hija, su padre y un hermano de 53 años, jubilado por enfermedad laboral. Trabaja a turnos de mañana (6 a 14 horas), de tarde (14 a 22 horas) y de noche (de 22 a 6 horas), aunque este último turno lo realiza en menos ocasiones. La madre, por su parte, trabaja en el matadero de Ejea de los Caballeros, de 6:00 a 15:30 horas. Vive con su pareja, que tiene el mismo horario. La demandante tiene dos hijos y una hijastra. Esta última, según manifestó en la vista, vive muy cerca de la demandante y tiene un horario de madrugada que le permitiría estar por la mañana con la hija de O y llevarla al colegio.

Segundo.- El artículo 775.1 de la LEC establece que "*el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas*".

La variación de las circunstancias es presupuesto para la modificación de medidas pero, aun dándose dicha variación, la modificación no es automática. El hecho de que hayan cambiado algunas de las circunstancias que se daban en el momento de acordarse unas medidas no significa, necesariamente, que las medidas tengan que modificarse. Es necesario, además, que las nuevas medidas propuestas sean procedentes, a la vista de las circunstancias de cada caso.

Tercero.- En el caso que nos ocupa ha quedado acreditado un cambio de circunstancias relevante, cual es el cambio de domicilio de la madre. La cuestión es determinar si este cambio es suficiente para justificar la modificación de medidas solicitada. Lo que equivale a decidir si las nuevas medidas propuestas son o no lo más beneficioso para la menor.

El artículo 80 del Código de Derecho Foral, no establece exactamente que la custodia compartida sea el régimen preferente, sino que lo preferente es el interés del menor (cuestión distinta es que se adopte de forma preferente la compartida si no se acredita que el interés del menor es otro).

En este caso:

- Ambos progenitores tienen capacidad para hacerse cargo de la menor.

- En relación con su disponibilidad, la del padre está acreditada ya que lleva varios años ejerciendo la custodia de su hija sin que conste ninguna incidencia. En relación con la madre no está tan claro. Su horario le dificulta estar con la niña por la mañana y llevarla al colegio. Afirma que podría contar con la ayuda de sus hijos y de su hijastra, pero este extremo no ha quedado evidenciado del todo. No hay ninguna documentación acerca de horarios o disponibilidad de ninguna de estas personas, y tampoco declararon los hijos de la demandante. Sólo la hijastra que, aunque mostró su voluntad, también dejó claro que tiene poco conocimiento acerca de los horarios de la menor. Además, pese a su manifestación de voluntad, según su propia declaración llegaría de trabajar sobre las 4:30 o 4:45 horas, por lo que podría resultar bastante duro el tener que encargarse de la menor cada mañana y llevarla al colegio.

- En cuanto a la opinión de la menor, del informe psicosocial se desprende que prefiere quedarse con el padre, aunque pueda aumentarse el tiempo que esté en compañía de su madre. Esta opinión no debe ser criterio decisor del asunto (ej: STSJ de Aragón de 7 de septiembre de 2016), pero es un elemento que debe tenerse en cuenta porque así lo establece la ley (artículo 80 CDFA), y porque es un derecho del menor.

- Por lo que se refiere al arraigo de la menor, del informe psicosocial se desprende que se lleva bien con ambos progenitores. Desde la separación, ha estado bajo la custodia del padre, conviviendo con él, su abuelo y su tío.

El informe psicosocial concluye proponiendo que se mantenga la custodia del padre. Se trata de una prueba más, que debe valorarse conforme a las reglas de la sana crítica, pero

es una prueba especialmente relevante en este tipo de procedimientos, expresamente citada en el CDFA al regular esta materia. En el caso que nos ocupa puede existir alguna imprecisión a la hora de referirse a la disponibilidad de la madre, pero creo que hay que valorar el hecho de que ambas profesionales coinciden en sus conclusiones, y que dichas conclusiones coinciden con la opinión de la menor. Parece que, aparte de la cuestión de la disponibilidad, la psicóloga y la trabajadora social valoran también la estabilidad de la menor, que lleva ya unos años adaptada a un modo de vida que le ha resultado beneficioso, además de la voluntad de la niña.

En definitiva, estamos ante un supuesto algo dudoso. Si éste fuera el punto de partida, es posible que se tratara de un caso de custodia compartida. Pero no pueden desconocerse los tres años de custodia individual, que han generado a la menor una estabilidad en un modo de vida que se considera positivo. La alteración de esta situación es posible, y no cabe negarla por la simple comodidad de la menor que, como alega la parte actora, no conoce otra cosa. Pero es necesario justificar que el nuevo régimen propuesto va a ser beneficioso para la menor, más beneficioso del que existe en la actualidad. Y, a la vista de lo expuesto, opino que no se ha acreditado que las nuevas medidas propuestas sean más beneficiosas para la menor, en comparación con las que existen en la actualidad.

Sí entiendo que es procedente ampliar el régimen de visitas, a la vista de la buena relación entre la madre y la hija, porque el que se estableció en su día era el propio para la situación de una madre que vivía en otra localidad. En la situación actual es lógico que, viviendo en la misma localidad y teniendo las tardes libres la madre, se fijen visitas intersemanales. Asimismo, dado que el padre trabaja algunas tardes, también parece lógico que esa semana la madre pueda estar todas las tardes con su hija.”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 3 de noviembre de 2016. Pensión compensatoria. Extinción. Convivencia marital. Cambio de situación económica**

"PRIMERO.- Por la representación de la parte apelante y demandante se formularon dos pretensiones distintas.

Por un lado la supresión de la pensión compensatoria.

Por otro lado la supresión de la pensión de alimentos.

En cuanto a la primera de ellas se manifestaba que existía previo acuerdo no formalizado, y con la demanda se pretendía la declaración de extinción.

A tal pretensión no hubo oposición por la parte demandada y apelada, y por tanto no fue cuestión controvertida en este procedimiento, que quedó limitada en el acto del juicio a la pretensión de supresión de la pensión compensatoria.

En cuanto a esta, se argumentaba como causa de extinción de acuerdo con los fundamentos jurídicos de la demanda la convivencia de la esposa more uxorio con tercera persona.

En el expositivo de hechos de la demanda se apuntaba también a que el esposo había visto disminuida su capacidad económica y que la esposa vería incrementada su fortuna a partir del 29-3-2015.

La demanda fue presentada en el año 2014 y la contestación en el mismo año.

La vista fue celebrada el 5-11-2015 y la sentencia dos de marzo de 2016.

En dicha sentencia no se da lugar a la estimación de la demanda de modificación de las medidas de divorcio, para la extinción de la pensión compensatoria porque no se considera suficientemente acreditada la convivencia marital con tercera persona.

Se dice al respecto: " el demandante base toda su alegación en el hecho de que la Junta de S, de la cual forma parte el Sr. R y la Sra. S, y que se encarga del cuidado y mantenimiento de la ermita del mismo nombre situada en la localidad turolense de Andorra, está compuesta por parejas, lo que no ha quedado acreditado,, ya que si bien debe ser lo habitual, ello fue contradicho por la parte contraria, manifestando de hecho una testigo que formó parte de la Junta, que en alguna ocasión las parejas no mantenían relación sentimental, aunque no sea lo más frecuente.

Igualmente, el testigo Sr. R niega mantener una relación estable con la demandada…

Por otro lado, ninguna otra prueba se aporta por la demandante, dado que el testigo Sr. P, (la cual se propuso argumentado que era amiga de la demandada y resultó no ser cierto), manifiesta que nada sabe acerca de que la demandada y el Sr. R sean pareja, no

aportándose referendo probatorio de que haya una conciencia social de tal hecho, sino al contrario, se acredita que residen en diferentes domicilios, no manteniendo ni convivencia ni vinculación económica o persona que revista tal naturaleza destacando, que, de hecho, incluso los hijos mayores de edad de la demandada acuden a su domicilio a comer y cenar, lo que evidencia el mantenimiento de vidas independientes, más allá de una amistad en un grado más o menos cercano, lo que en modo alguno supone la estabilidad y compromiso que exigen, tanto la Ley como la Jurisprudencia a los efectos del art. 101 CC, del 83.5 del Código de Derecho Foral de Aragón.".

A tal argumento opone la parte apelante:

En primera lugar la nulidad por infracción del art. 24 de la Constitución, al habérsele denegado la práctica de la prueba que dice.

La cuestión ha sido superada por el auto dictado por esta Audiencia Provincial de fecha 26-9-2016, que no ha sido recurrido por la parte.

En segundo lugar el error en la valoración de la prueba.

I.-Respecto de la pensión compensatoria, el conjunto de las alegaciones para sostener una conclusión probatoria distinta se basan en una prueba que no ha sido admitida y por tanto sobre tales cimientos no puede apreciarse el error que se dice.

Al margen de ello nada se aporta en relación con la operación de valoración que se critica que permita apreciar que la relación de amistad de la pareja, reúna las condiciones propias de la convivencia more uxorio, por su estabilidad y el compromiso y proyecto de vida en común, para satisfacer recíprocamente la pareja, las necesidades mutuas de auxilio, ayuda mutua, etc (art.66,67 y 68 del Código Civil), es decir lo fines propios que dotan de contenido material a esta caracterizada convivencia para que sea asimilable a la marital, exista o no convivencia en el mismo domicilio.

Por ello examinada la prueba practicada en este procedimiento y la concordancia de la sentencia con el resultado, que de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se fija en la sentencia, no apreciándose error ni omisión en el razonamiento; el motivo ha de ser desestimado.

II.- Respecto del cambio sustancial de la situación económica.

En la sentencia, al respecto, se dice que no se aprecia la modificación de tales circunstancias, particularmente no considera imputable a la esposa que no haya obtenido un puesto de trabajo hasta la fecha, reconociéndole el esfuerzo para su formación y la dificultad de acceder a uno por razón de edad, estado de salud y coyuntura económica.

Añadiendo respecto de los gastos del ex marido por los que se trata de demostrar su disminución de recursos que el hecho de haber sufragado los gastos del vehículo a uno de sus hijos, es un gasto ajeno a la cuestión controvertida.

Al respecto se sostiene por la vía del recurso que la esposa por la edad 50 años está capacitada para la vida laboral y recursos propios. La alegación anterior, que lo es interesada y de parte no sirve para acreditar que la esposa posea ingresos procedentes de su trabajo que permitan asegurar que ha mejorado de fortuna.

Por lo que al plan de pensiones se refiere y la jubilación del Sr. S, ningún pronunciamiento contiene la sentencia, y ello es lógico y procedente en derecho pues tales cuestiones aunque hayan podido entremezclarse en el tiempo dado lo dilatado en la tramitación del procedimiento. Sin embargo no formaron parte del objeto del proceso que fue determinado por el juego de la demanda y la contestación, en dichos escritos dispositivos el hecho de la jubilación era un hecho futuro, sobre el que no se volcaron los principios procesales, y por tanto se trata de cuestiones sobre las que el Juzgador de Primera Instancia ni debía ni podía pronunciarse, por elementales principios procesales.

III.- Respecto del pronunciamiento sobre las costas.

Este Tribunal no aprecia error alguno en la aplicación del art.394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que la cuestión controvertida quedó reducida a la supresión de la pensión compensatoria y esta ha sido estimada, ello implica adecuadamente una estimación sustancial."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 9 de noviembre de 2016. Custodia compartida. Distantes domicilios de los progenitores. Custodia individual. Igualdad de situaciones**

I.- El núcleo de la cuestión litigiosa en el presente procedimiento, y en esta alzada, se concreta en la atribución al padre de la guarda y custodia de su hija menor. La sentencia recurrida parte de la premisa de que, en el caso enjuiciado no es posible la custodia compartida por recibir los litigantes en municipio distinto, y que ambos están igualmente capacitados para asumir la custodia. Sin embargo el juzgador opta por la custodia del padre fundamentándose esencialmente en la consideración de no alterar el entorno tanto escolar como personal de la menor, ya que trasladarse a residir con su madre supondría un importante cambio con en dichos ámbitos, incluso la necesidad de aprender otro idioma. Esta argumentación es rebatida por la parte recurrente, que entiende que en el domicilio de la madre tiene un entorno familiar apropiado para desarrollarse.

II.- La Jurisprudencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sentencias de 1 de Febrero y 18 de Abril de 2012 entre muchas otras) señalan que la custodia compartida por parte de ambos progenitores es el criterio preferente y predeterminado por el legislador, en busca del interés del menor, en orden al desarrollo de la personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia, siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin, limitándose la custodia individual aquellos casos en que los progenitores no están capacitados para ella, o a que la custodia individual resulta mas conveniente para el menor, atendiendo a la edad de los hijos, su arraigo social y familiar, su opinión, así como las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres. En todo caso debe primar el principio *favor filii,* que es un principio jurídico esencial básico que orienta la actuación judicial y que se resume en la protección integral de los hijos, entendiéndose como superior a cualquier otro derecho el del menor, que primará sobre cualquier otro interés legítimo con el que entre en conflicto. En el caso enjuiciado ambos progenitores descartan la posibilidad de la custodia compartida, y por tanto debe otorgarse una custodia de carácter individual, que en este caso resulta compleja, toda vez que es forzoso reconocer que ambos progenitores están perfectamente capacitados para asumirla, y que la hija menor mantiene una buena relación con los dos, y no le importaría vivir con uno u otro. Así las cosas, la exploración efectuada por este Tribunal sobre la hija de menor, pone de relieve que se encuentra perfectamente integrada familiar y escolarmente, en su domicilio de Sarrion, que comparte con su padre y abuela, donde mantiene el círculo de sus amistades, aunque mantiene una buena relación con su madre con la pareja de esta Por ello estima la Sala, al igual que el Juzgador de instancia, que no existen razones para alterar este sistema de convivencia, que se ha mostrado adecuado para el desarrollo integral de la menor, y sustituirlo por otro cuyo resultado es, cuando menos, incierto. Todo ello sin perjuicio de que, como la menor puso de manifiesto, se amplíe el régimen de visitas, con el fin de incrementar su relación con su madre. En consecuencia procede desestimar recurso y confirmar internamente la resolución recurrida."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 9 de noviembre de 2016. Pensión alimenticia para dos hijos menores. Cuantía. Reducción o incremento. Prueba de la disminución o incremento de ingresos**

"I.- La sentencia recurrida estima parcialmente la pretensión de la demanda, y acuerda la modificación de las medidas acordadas en la sentencia de divorcio, de fecha diez de Febrero de dos mil quince, en el sentido de elevar la contribución al levantamiento de las cargas familiares de 300 a 400 euros. Frente a dicha resolución se alzan ambas partes litigantes, solicitando la parte demandante que se eleve la contribución hasta la suma de 600 euros en tanto que el demandado interesa que se mantenga la contribución en la suma de 300 euros.

II.- El Art. 79.5 del Código de Derecho Foral de Aragón establece que las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes. En el caso enjuiciado, la sentencia recurrida entiende que ha existido una modificación sustancial de las circunstancias, por cuanto la esposa, que trabajaba en la hostelería a tiempo parcial, ha dejado de hacerlo, y tan sólo percibe un subsidio por importe de 426 euros mensuales. Ciertamente la circunstancia de que uno de los cónyuges caiga en paro, es una circunstancia relevante a los efectos de la aplicación del precepto citado; pero no puede soslayarse que para ello es necesario conocer cuales eran sus retribuciones cuando trabajaba, para poder apreciar en que medida han diminuido en la nueva situación, lo cual, en el presente caso no ha sido justificado, ya que, probablemente las retribuciones percibidas por la esposa cuando trabajaba en la hostelería a tiempo parcial, no fuera muy diferentes de las que ahora percibe. Por otra parte el Art. 142 del C. Civil, dispone que la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. La sentencia recurrida reconoce que el demandado percibe un sueldo mensual de 793,54, hicieron los gastos de vivienda de 410,82 euros, y al margen de ello abonará una contribución al mantener que los de sus hijos de 300 euros mensuales, con lo que le resta una cantidad para su subsistencia de 82,72 euros. La sentencia recurrida hace referencia a que el demandado ha tenido siempre mayores ingresos; sin embargo ninguna prueba se ha aportado sobre ello por lo que tal afirmación no pasa de ser una mera especulación. Por otra parte, siendo el horario laboral del mismo desde la 08:00 horas a las 17:00 horas y desde las 20:00 a las 24:00 horas, con solo un día semanal de libranza, resulta cuando menos complejo obtener otras retribuciones complementarias. En consecuencia, entiende el Tribunal que, por una parte, no existen razones que justifiquen la elevación de la cuantía de la contribución al levantamiento de las cargas familiares, cuando no se ha podido constatar en qué medida han disminuido las retribuciones de la esposa. Por otra parte estima, que no se puede sobrecargar más la precaria situación económica del esposo, que con los ingresos constatados, apenas dispone de unos mínimos recursos para subsistir. En consecuencia, no procede estimar el recurso formulado por la parte demandada, y desestimar íntegramente las pretensiones de la demanda; desestimando igualmente el recurso planteado por la parte actora, sin necesidad de mayor discurso."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 22 de noviembre de 2016. Autoridad familiar. Mayoría de edad. Reducción de pensión de alimentos**

"PRIMERO.- Recurre Dª. M dos pronunciamientos concretos de la Sentencia de instancia, suplicando se acuerde que el hijo, S, deberá residir bajo la autoridad familiar de su madre y junto con sus dos hermanas, y se mantenga la pensión alimenticia estipulada para todos ellos a cargo del padre, o, subsidiariamente, se mantenga dicha pensión sin fijar suma alguna a cargo de la recurrente para S.

SEGUNDO.- Alega que por el bien de las dos hijas y del propio S, éste debe permanecer conviviendo con la madre e hijas, no debiendo separarse a los hermanos.

S, el hijo mayor, nacido el 1997, ha alcanzado la mayoría de edad, y ha decidido pasar a residir con su padre.

No existe fundamento jurídico que avale la petición principal de la madre, pese a los buenos propósitos que le acompañen (control de los estudios, vida del hijo y convivencia con las hermanas).

La autoridad familiar es un instituto afectante exclusivamente a los hijos menores de edad no emancipados (Arts. 63 y ss. del Código de Derecho Foral de Aragón), por lo que nada cabe acordar respecto de S, mayor de edad, ni sobre la autoridad familiar, ni sobre la imposición de la convivencia que se propugna.

TERCERO.- Respecto a las pensiones alimenticias, el actor percibió en el ejercicio 2014, 28.457,44 € brutos. Posee una vivienda en propiedad en P, adjudicada en la liquidación conyugal. Reside en , y carece de cargas hipotecarias.

La demandada reside en la vivienda que fue familiar, adjudicada en la liquidación y gravada con hipoteca, que supone una cuota mensual de 769,27 €. Desde Junio de 2016 cobra pensión de jubilación por importe de 1.742,51 € al mes, por catorce pagas.

Los ingresos de ambos son similares, unos 1.900,- € al mes, prorrateadas las pagas extraordinarias, siendo ligeramente mayores los gastos de la recurrente por la hipoteca, y ya no tendrá que afrontar, con el carácter de necesario, el gasto de cuidadora de las hijas, dada su jubilación.

En estas condiciones, asumiendo el padre la tenencia del hijo mayor, debe reducirse a 100,- € mensuales la pensión alimenticia de S a cargo de la madre, único sentido en que se revoca la Sentencia, manteniendo el resto de las pensiones alimenticias estipuladas."

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ejea de los Caballeros de 22 de noviembre de 2016. Guarda y custodia. Pensión alimenticia. Asignación compensatoria**

"Primero.- La parte demandante solicita que se decrete el divorcio.

De la documentación aportada se desprende que R y J contrajeron matrimonio, el 8 de octubre de 2008.

Con anterioridad a la celebración del matrimonio, los cónyuges habían tenido dos hijas, C, el 2004, y A, el 2005.

Cumpliéndose los requisitos establecidos en los artículos 86 y 81 del Código Civil, procede decretar del divorcio de

Segundo.- La principal cuestión que debe decidirse es la relativa a la custodia de las hijas, ya que ambos progenitores solicitan la custodia.

Se examinarán los diversos elementos que constan en las actuaciones para determinar cuál es el régimen de custodia más conveniente, atendiendo principalmente al interés superior de las hijas menores.

Debe indicarse que, pese a lo dispuesto en el artículo 80.6 del Código de Derecho Foral, dicha norma resulta inaplicable al presente procedimiento, ya que ambos progenitores han sido condenados por agredir al otro. Así, el Sr. O ha sido condenado en Sentencia de 2 de septiembre de 2016, del Juzgado de lo Penal nº 8 de Zaragoza. Y la Sra. C fue condenada en Sentencia de 12 de febrero de 2016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ejea de los Caballeros.

Por otro lado considero que tampoco es posible acordar una custodia compartida, que nadie solicita, aunque sea considerado como régimen preferente por el artículo 80.2 del CDFA. Esta preferencia lo es salvo que la custodia individual resulte más conveniente, que es lo que ocurre en este caso. Ambos progenitores han sido condenados por agresiones del uno al otro, existen medidas de prohibición de aproximación y comunicación y, en definitiva, todos los intervinientes en este proceso entienden que la custodia debe ser para uno de los progenitores, pero en ningún caso cabe una custodia compartida.

A la vista de la prueba practicada considero que debe de adoptarse el régimen de custodia propuesto por el Ministerio Fiscal, es decir, atribuir la custodia de las menores al padre, siempre que las hijas permanezcan en el domicilio de la abuela paterna.

Tanto el informe psicosocial como el de los Servicios Sociales de las Cinco Villas apuntan hacia esta solución. En este último se indica como las menores se han trasladado a vivir a la casa de la abuela "como medida que garantice la atención y cuidado de las dos menores", y se expresa la incapacidad de la madre para hacerse cargo de las niñas y la necesidad de que inicie tratamiento. También se dice que "no se considera que R pueda

asumir la atención de sus hijas menores en este momento". La fecha del informe es 7 de noviembre de 2016. En este informe se recogen indicaciones graves en relación con la madre, tales como que presenta carencias en la higiene, que se sospecha posible consumo habitual de drogas (también en relación con el padre), no acude a las citas ni aporta la documentación de las menores que se le solicita, duerme de día y sale de noche o que no atiende a sus hijos y es la abuela e incluso una vecina la que da de comer a las hijas. Se indica posteriormente una posible negligencia física leve hacia sus hijas, al no ser atendidas adecuadamente en materia de higiene, alimentación, vestido o sueño. Se indica que la vivienda no está en condiciones de habitabilidad por estar muy sucia y con acumulación de enseres y ropa. Ello ha dado lugar a proponer la situación legal de riesgo de las menores (ya que, aparte de lo expuesto respecto de la madre, se dan otros indicadores que son predicables de ambos progenitores).

El informe social concluye con la propuesta de que las menores estén con el padre, con un régimen de visitas con la madre, y tiene en cuenta lo expuesto en la declaración de riesgo de las menores. La psicóloga también concluye lo mismo, siempre que estén con la abuela. Indica que actualmente sus condiciones no son las más adecuadas para garantizar el bienestar de las niñas, que ha hecho dejación de sus funciones parentales y que el padre, aunque tiene también limitaciones, comparativamente, reúne mejores condiciones que la madre, además de tener un sólido soporte familiar y social, que no tiene la Sra. C.

Lo expuesto en estos informes es coherente con la realidad puesta de manifiesto por las personas que depusieron en la vista, tanto las partes como las testigos. Aunque discreparon en muchos aspectos parece claro que las niñas, que vivían con la madre por haberse acordado así de forma cautelar, han acabado viviendo en el domicilio de la abuela, con anuencia de la madre.

Aparte de las condiciones personales de los progenitores, en las que ya se ha visto que ambos presentan carencias, pero las de la madre son mayores, de la prueba practicada se evidencia un mayor apoyo familiar en el entorno del padre. Apoyo familiar del que carece la madre. También los informes y las declaraciones efectuadas ponen de manifiesto que la abuela paterna es un pilar esencial en el cuidado de las menores.

En cuanto a la opinión de las menores, que es otro elemento que debe valorarse, además de ser un derecho suyo el ser tenidas en cuenta para adoptar cualquier decisión que les afecte, la menor A simplemente dijo que estaba bien con ambos progenitores, y que le gustaría estar un rato con cada uno. C manifestó que prefería vivir con su madre. Pero en su exploración se pone de manifiesto cierto interés en proteger a su madre, ya que la niña niega lo que se ha evidenciado en los informes, como la falta de higiene y desatención en cuestiones tales como la ropa, alimentación, orden, etc.

Por todo lo expuesto, considero que la custodia debe atribuirse al padre, aunque condicionada a que se mantenga a las menores en el domicilio de la abuela paterna. Esta última manifestó su disposición de apoyar a su hijo en el cuidado de las menores.

Tercero.- En cuanto al régimen de visitas, el Ministerio Fiscal propone un régimen amplio, a la vista de la relación que las menores tienen con la madre. También así lo propone el dictamen psicosocial. La parte demandada, sin embargo, propone limitar las pernoctas, a la vista de las circunstancias de la madre.

En la exploración de las menores se puso de manifiesto la voluntad que ambas tienen de pasar tiempo con su madre.

El dictamen social propone una tarde entre semana para la madre, y la mitad del tiempo no lectivo (fines de semana y vacaciones). El dictamen psicológico propone un régimen de visitas amplio a favor de la madre.

El principal problema que se observa es la declaración de riesgo que se ha efectuado, teniendo en cuenta que las menores habían sido confiadas, inicialmente, a la madre, así como la indicación de determinados hechos en los informes de los servicios sociales que desaconsejarían que las niñas pasaran períodos prolongados con la madre (falta de higiene o negligencia en cuestiones tales como vestido, alimentación o salud).

Por lo expuesto considero que puede resultar más beneficioso para las menores establecer un régimen de visitas de dos tardes entre semana y fines de semana alternos, y una regulación de vacaciones por espacios cortos. Así, las Navidades y la Semana Santa se dividirán en dos mitades. Las vacaciones de verano se dividirán en dos grupos de períodos, por quincenas.

Cuarto.- Por lo que se refiere al uso del domicilio familiar, el artículo 81.2 del CDFA establece que cuando corresponda a uno de los progenitores de forma individual la custodia de los hijos, se le atribuirá el uso de la vivienda familiar, salvo que el mejor interés para las relaciones familiares aconseje su atribución al otro progenitor.

En este caso el interés de las menores está satisfecho porque tienen garantizada la cobertura de su necesidad de vivienda, al quedarse en el domicilio de la abuela. No sólo eso, sino que precisamente se ha acordado la custodia para el padre en la medida en que las menores vivan en el domicilio de la abuela paterna.

Así las cosas, el interés para las relaciones familiares exige que se atribuya a la madre el uso, porque así tiene un lugar en Biota donde vivir y donde acoger a las menores cuando las tenga en su compañía.

El artículo 81.3 prevé una limitación temporal del uso. Teniendo en cuenta lo expuesto, entiendo que debe establecerse como límite la mayoría de edad de las hijas, de modo que se atribuye este uso hasta la mayoría de edad de la más joven de las dos.

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del CDFA, entiendo que los gastos ordinarios de las hijas correrán a cargo del padre, y que la madre debe contribuir con la correspondiente pensión de alimentos.

Es cierto que tiene unos ingresos mínimos, pero sigue teniendo la obligación de asistir a sus hijas, que no dejan de tener necesidades por el hecho de que la madre tenga pocos ingresos.

Para calcular la pensión de alimentos se partirá de los ingresos de los progenitores y se aplicarán las tablas orientativas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial.

En el caso que nos ocupa, la madre cobra 426 euros al mes, según manifestó en la vista, y se desprende del documento 7 de la demanda y la consulta al Punto Neutro Judicial.

El padre, que ha estado en paro, lleva varios meses trabajando y manifestó cobrar unos 1.400 euros, aunque no ha aportado documentación, y a la trabajadora social le manifestó que cobraba unos 1.500.

Aplicando las tablas del Consejo resultaría de aplicación una pensión alimenticia mensual a favor de las hijas de unos 130 euros al mes.

En cuanto a los gastos extraordinarios, deberán contribuir los progenitores de forma proporcional a sus ingresos, de modo que serán al 65% el padre y 35% la madre.

Sexto.- El artículo 83 del CDFA dispone que el progenitor al que la ruptura de la convivencia produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior a la convivencia, tendrá derecho a percibir del otro una asignación compensatoria.

La actora pide una asignación compensatoria de 300 euros mensuales.

Entiendo que, efectivamente, se produce un desequilibrio económico entre los cónyuges, y que hay un empeoramiento para la Sra. C, en relación con su situación durante el matrimonio. De la consulta en el Punto Neutro de la vida laboral de ambos cónyuges se desprende que la Sra. C apenas trabajó durante la convivencia anterior y posterior al matrimonio, mientras que el Sr. O tiene 19 años cotizados.

Resulta claro, por lo tanto, que durante la convivencia la pareja y posterior matrimonio vivían de los ingresos del Sr. O. La ruptura supone que la Sra. C va a dejar de poder vivir de estos ingresos, por lo que el empeoramiento es claro, y también el desequilibrio (el Sr. O cobra más del triple de lo que gana la Sra. C).

En cuanto a las circunstancias que se deben tener en cuenta, el artículo 83 designa, en primer lugar, los recursos económicos de los padres. Como se ha indicado, el Sr. O tiene un sueldo que ronda los 1.500 euros mensuales y la Sra. C recibe la renta de inserción de unos 426 euros mensuales. Son dueños de la vivienda familiar, que está hipotecada, y existen préstamos pendientes.

En cuanto a la edad y perspectivas económicas y posibilidad de acceso al mercado de trabajo la Sra. C nació en 1980, tiene 36 años y poco más de un año cotizado. No consta

su cualificación laboral, simplemente en el informe de servicios sociales se indica que tiene un nivel de estudios medio. De lo que se desprende una posibilidad razonable de acceder al mercado de trabajo en empleos de baja cualificación, quizá en hostelería, donde se indica que ha tenido algo de experiencia.

La edad de las hijas es de 11 y 12 años.

Se le ha atribuido el uso de la vivienda familiar hasta la mayoría de edad de la menor de las hijas, es decir, hasta octubre de 2023.

Las funciones familiares de los progenitores no han sido acreditadas. Se supone que si el padre estuvo trabajando y la madre quedándose en casa habría una distribución de roles coherente con este hecho, aunque no está acreditado, y se ha puesto de manifiesto una deficiencia generalizada, de los dos progenitores, en la realización de determinadas tareas domésticas, al menos en los últimos tiempos.

En cuanto a la duración de la convivencia, el matrimonio se celebró en octubre de 2008, pero la primera hija nació en marzo de 2004, por lo que es probable que la convivencia se iniciase antes (la demandante dice que en 2001). Podemos entender que hay unos quince años de convivencia.

A la vista de lo anterior, considero que debe fijarse la asignación compensatoria en 250 euros mensuales. A los 426 euros que cobra la Sra. C hay que añadir el valor económico que tiene la atribución del uso de la vivienda. Es complicado en este procedimiento porque no hay datos para ello, pero podríamos valorar el uso en unos 300 euros mensuales. Si sumamos todas estas cuantías obtenemos un total de unos 975 euros mensuales. Esta cantidad no es equiparable a los 1.250 euros mensuales que le quedarían al Sr. O tras deducir los 250 euros de la asignación. Pero esta asignación no tiene por objeto equiparar a ambos cónyuges, sino compensar el desequilibrio que produce la ruptura de la convivencia.

Por otro lado, atendida la duración de la convivencia y la edad de la Sra. C, se limita temporalmente esta asignación a diez años.

Al tenerse en cuenta el hecho de la atribución del uso del domicilio familiar, en el momento en que cese dicho uso, deberá aumentarse la asignación a 400 euros mensuales. Este aumento sólo se producirá una vez finalizado el plazo por el que se le atribuye el uso de la vivienda, y en el caso de que, efectivamente, cese en el uso efectivo de aquélla. Si abandona la vivienda antes por iniciativa propia no tendrá lugar el aumento, puesto que tiene atribuido el uso. Y si, transcurrido el plazo, continúa en el uso de la vivienda, tampoco tendrá lugar el aumento.

Séptimo.- A la vista de que según lo acordado la Sra. C debería abonar al padre 130 euros al mes para alimentos de las hijas y el Sr. O debería abonar a la madre 250 euros mensuales por asignación compensatoria, en tanto deban abonarse estas cantidades, procede su compensación. En este momento significa que el Sr. O abonará a la Sra. Ciprés

120 euros mensuales, pero la compensación deberá acomodarse en cada momento a las variaciones que puedan experimentar ambas cantidades (alimentos y asignación).”

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 1 de diciembre de 2016. Modificación de medidas. Alteración sustancial de circunstancias. Edad de la menor y cambios en sus hábitos de vida. Custodia compartida. Régimen de estancias. Evolución psicológica. Superior interés del menor**

"PRIMERO.- Para la resolución del recurso de casación interpuesto conviene relatar los hechos acreditados en las instancias y las sucesivas actuaciones procesales:

1. D. Roberto José S. G. y Dª María Cruz J. P. contrajeron matrimonio en Zaragoza el 2002.

2. De dicha unión nació una hija, , el 2005.

3. En autos de divorcio de mutuo acuerdo nº 1580/2009, tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Zaragoza (Familia), se dictó sentencia de 10 de febrero de 2010, que decretó la disolución por causa de divorcio del matrimonio contraído entre los citados y aprobó el convenio regulador firmado por ellos. En lo que aquí interesa dicho convenio acordaba que la guarda y custodia de la hija habida del matrimonio sería ejercida por la madre, con un régimen de visitas para que D. Roberto pudiera estar con su hija.

4. A instancia de D. Roberto se tramitó en el mismo Juzgado proceso sobre modificación de medidas definitivas del divorcio de mutuo acuerdo, en el que recayó sentencia de 18 de noviembre de 2011 por la que se aprobó la modificación de dichas medidas, modificación que afectaba al régimen de visitas del padre respecto de su hija.

5. A partir del mes de noviembre de 2014 D. Roberto y D.ª María Cruz convinieron que V conviviera con cada progenitor el mismo número de días, ejerciendo ambos una custodia compartida por días alternos, hecho aceptado por la menor habida cuenta las circunstancias concurrentes y, especialmente, que las residencias de ambos progenitores están muy próximas y que también el centro escolar al que acude la hija se encuentra en las proximidades.

6. D. Roberto ha interpuesto ante el juzgado reseñado demanda de modificación de medidas definitivas de divorcio, solicitando que se establezca respecto de la menor un régimen de custodia compartida por semanas alternas, en los términos que se expresan en dicho escrito, y además solicita la extinción de la atribución del uso de la vivienda familiar por parte de la madre y autorización de su venta.

7. Tras la tramitación oportuna recayó sentencia de primera instancia de 13 de octubre de 2015 que estimó parcialmente la demanda. En cuanto a la guarda y custodia, el fallo decidió que ambos progenitores mantendrán el ejercicio conjunto de la autoridad familiar y que la guarda y custodia de la hija menor V será compartida de tal manera que la menor esté entre semana en días alternos con cada progenitor y asimismo los fines de semana de forma alternativa. También acordó mantener el uso del domicilio y ajuar familiar para Dª Mª Cruz hasta el 30 de junio de 2017, con mantenimiento de la opción

de posible adjudicación a una de las partes de la plena titularidad de la vivienda vigente en la actualidad y en los términos fijados, si bien señalando que en igualdad de condiciones se otorga preferencia a la Sra. J.

8. Interpuesto recurso de apelación por la representación de D. Roberto, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó sentencia de 17 de mayo de 2016 que lo estimó parcialmente, en el sentido de sustituir, dentro del régimen de custodia compartida de la hija menor atribuido a ambos progenitores, el sistema fijado por días por el sistema de semanas alternas con cambio los domingos a las 20 horas, y acordó dejar sin efecto la preferencia otorgada a las Sra. J. para la adquisición de la vivienda común. Dicha sentencia fue complementada por Auto de 9 de junio de 2016, en cuanto a la fecha de los efectos del cambio de régimen de custodia.

Motivos del recurso de casación

SEGUNDO.- Frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial la representación procesal de Dª Mª Cruz J. P. ha interpuesto recurso de casación, que funda en dos motivos: en primer lugar aduce la vulneración el artículo 79.5 del CDFA y 775.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al entender que no se ha producido ninguna alteración sustancial que pueda dar lugar a la modificación de las medidas aprobadas judicialmente, y que el demandante debió acreditar y la sentencia recurrida debió justificar un cambio relevante de circunstancias, lo que no se ha producido en el caso de autos; y como segundo motivo alega la vulneración del artículo 76.2 y 3 a), artículo 79.2 a) y c) y artículo 80.1 y 2, todos ellos del CDFA, en relación con el artículo 92.8 del Código civil y artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, entendiendo que la sentencia recurrida ha aplicado incorrectamente el principio de protección del interés del menor.

Admisibilidad del recurso

TERCERO.- En el trámite de oposición el Ministerio Fiscal plantea la posible inadmisión del recurso de casación, por falta de interés casacional, expresando que no queda claro cual es el interés casacional que se propugna por la parte recurrente, pues ésta no indica con precisión qué jurisprudencia solicita que se fije o se declare infringida, ya que es evidente que la sentencia recurrida consagra la preferencia de la custodia compartida de los padres a tenor del artículo 80.2 del CDFA y que ambos progenitores están de acuerdo en tal custodia compartida.

Esta cuestión, oportunamente deducida conforme al artículo 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de ser sin embargo rechazada. Es cierto que el escrito de interposición del recurso de casación se refiere a la concurrencia de interés casacional, sin detallar a cual de los supuestos prevenidos en el artículo 2.2 de la Ley Aragonesa se refiere, indicando únicamente que la contradicción con la doctrina jurisprudencial de este tribunal y del Tribunal Supremo se desprende de la propia sentencia. Pero también indica que la sentencia de la Audiencia Provincial es recurrible en casación por razón de la cuantía, invocando la aplicación del artículo 2.1 de la Ley Aragonesa 4/2005, de 14 de

junio, de casación foral. Por lo tanto esta vía era suficiente para justificar la recurribilidad de la sentencia y por ello la invocada causa de inadmisión no puede ser estimada.

Examen del primer motivo de recurso

CUARTO.- El artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite la modificación de las medidas judicialmente aprobadas en sentencia firme cuando se produzca un cambio sustancial de las circunstancias concurrentes, y disciplina la legitimación procesal del Ministerio Fiscal y de los cónyuges para instar esa modificación. A su vez, el artículo 79.5 del CDFA, en el mismo sentido que el artículo 90.3 del Código civil, previene que las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes. En particular, cuando se haya acordado la custodia individual en atención a la edad del hijo o hija menor, se revisará el régimen de custodia en el plazo fijado en la propia sentencia, a fin de plantear la conveniencia de un régimen de custodia compartida.

Tales normas permiten excepcionar el régimen general de cosa juzgada, conforme al cual los pronunciamientos recaídos en sentencia firme son inmutables, salvo que concurran causas de revisión previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En atención a la naturaleza del proceso de divorcio o separación y de las medidas que se adoptan en relación con los hijos menores, el legislador ha previsto la posibilidad de que dichas medidas sean modificadas cuando concurran las citadas circunstancias, habida cuenta los cambios que pueden producirse tanto por el crecimiento vital de los hijos menores como por las situaciones personales, profesionales y económicas de los progenitores. En este sentido se pronuncian la sentencia del Tribunal Supremo nº 685/2014, de 19 de noviembre, y las de esta Sala números 42/2013, de 3 de octubre y 37/2014, de 19 de noviembre.

En el caso de autos, la sentencia de primera instancia se refiere expresamente a este cambio de circunstancias, y en sus fundamentos jurídicos segundo y tercero razona sobre su concurrencia, habida cuenta la edad de V y las modificaciones operadas en sus hábitos de vida. La Audiencia Provincial no se refiere, expresamente, a esta cuestión, porque no había sido planteada en el recurso de apelación interpuesto por D. Roberto, pero toda su argumentación parte de esa modificación.

Frente a ello no pueden prosperar los argumentos en que se funda el primer motivo de recurso, ya que es claro que el crecimiento de la hija menor ha supuesto un cambio notorio de circunstancias, y a partir de noviembre de 2014 se produjo un cambio en su régimen de vida, pasando a pernoctar con cada uno de los progenitores por días alternos. Todo ello justifica la posibilidad de que la parte actora solicitase y el Tribunal competente decidiese una modificación de las medidas inicialmente adoptadas.

En consecuencia el motivo se desestima.

Examen del segundo motivo de recurso

QUINTO.- El segundo motivo en que se funda el recurso de casación denuncia, según hemos adelantado, la vulneración del artículo 76.2 y 3, apartado a), del artículo 79.2, apartados a) y c) y artículo 80.1 y 2 del CDFA, en relación con el artículo 92.8 del Código civil y artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. En el desarrollo del motivo la parte recurrente hace referencia a diversas cuestiones de naturaleza procesal, como son la falta de motivación –mantiene que la sentencia recurrida "se despacha y justifica en apenas 20 líneas la Audiencia Provincia de Zaragoza acordando la modificación de las estancias de la menor"- así como la incongruencia y arbitrariedad del fallo que es objeto de recurso. Tras ello procede a valorar el informe psicológico aportado a los autos y concluye entendiendo que la sentencia impugnada ha infringido los preceptos citados, pues no debió modificar el régimen de estancias antes establecido, que funciona correctamente, y cuyo cambio puede tener consecuencias negativas para la menor.

En el examen del motivo de recurso de casación han de ser rechazadas las argumentaciones de naturaleza procesal que, en su caso, debieron ser introducidas como motivo por infracción procesal conforme a lo establecido en el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la disposición final decimosexta, regla primera, de la misma. En todo caso es de advertir que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial está suficientemente motivada en cuanto a la cuestión controvertida, pues en el segundo fundamento jurídico explica las razones por las que modifica el sistema de estancias antes establecido, y dicho razonamiento y parte dispositiva no resultan incongruentes en cuanto a los términos en que se produjo el debate procesal ni responden a una valoración arbitraria de las pruebas practicadas.

SEXTO.- En cuanto a los preceptos sustantivos cuya infracción denuncia la parte recurrente, es de señalar: 1º) que el artículo 76 del CDFA establece unos "derechos y principios" en orden a la determinación de los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, previniendo el apartado 2 que toda resolución que afecte a los hijos menores de edad se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos, lo que no es sino una aplicación en el derecho aragonés del principio del superior interés del menor, mantenido en los convenios internacionales de los que España es parte, entre los que destaca la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, adoptada por la Asamblea General de la ONU, y el apartado 3 a) ordena que los menores de edad tengan un contacto directo con sus padres de modo regular y que ambos participen en la toma de decisiones que afecten a sus intereses como consecuencia del ejercicio de la autoridad familiar; 2º) que dichos principios sirven de referencia para la interpretación y aplicación de los derechos regulados en los preceptos subsiguientes del Código Foral, y especialmente de los prevenidos en los artículos 79 y siguientes, como medidas de aplicación en defecto del pacto de relaciones familiares; 3º) que el artículo 79, en los apartados antes citados, previene que el juez dictará las medidas necesarias respecto de los hijos menores de edad, para garantizar la continuidad y efectividad del mantenimiento de los vínculos de los hijos menores con cada uno de sus progenitores, y para evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda y custodia.

En el caso de autos resulta meridiano que no se ha producido en la sentencia impugnada vulneración de los preceptos reseñados, porque el régimen antes establecido, que se mantiene salvo en el régimen de estancias, es de custodia compartida, de forma que la hija menor mantenía y sigue manteniendo un contacto directo con ambos progenitores, de modo regular, sin que la modificación del régimen de estancias que establece la sentencia objeto del recurso haya producido perturbaciones dañosas para la menor, atendidas las razones que se exponen en los fundamentos de derecho de la misma, y por los argumentos que seguidamente se expondrán.

SÉPTIMO.- Respecto a la invocada infracción del artículo 80, en sus apartados 1 y 2, del CDFA, el motivo ha de ser igualmente desestimado.

Dicho precepto regula la guarda y custodia de los hijos, previniendo en el apartado 1 que los progenitores podrán solicitar al Juez que la guarda y custodia de los hijos menores o incapacitados sea ejercida de forma compartida o por uno sólo de ellos, mientras que en el apartado 2 determina que el Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares y atendiendo a los factores que la norma consigna.

En el caso de autos se ha establecido la guarda y custodia compartida entre ambos progenitores de la hija menor , tanto en la sentencia de primer grado como en la de apelación, decisión que responde a la voluntad de los litigantes y que es plenamente acorde con la preferencia establecida por el legislador, de forma que la única discrepancia entre aquellos se refiere al régimen de estancias, pues la sentencia de la Audiencia Provincial lo establece por semanas alternas, mientras que la parte recurrente solicita dicho régimen mediante unas estancias entre semana en días alternos con cada progenitor y los fines de semana de forma alternativa.

La sentencia recurrida da pleno y cabal cumplimiento a la preferencia establecida legalmente en el artículo 80.2 del CDFA, siendo la modalidad en cuanto al régimen de estancias una decisión que compete al ámbito discrecional de dicho Tribunal, conforme a la valoración de la prueba practicada, que es competencia de las instancias y no revisable en casación, salvo supuestos de decisión arbitraria o irracional. En este sentido se pronuncian las sentencias nº 599/2014, de 6 de noviembre, del Tribunal Supremo y la sentencia nº 17/2015, de 28 de mayo, de esta Sala.

En el caso de autos no se ha incurrido en arbitrariedad o irracionalidad.

Es de reseñar finalmente que la decisión adoptada ha tenido en cuenta el preferente interés de la menor, de la cual afirma la sentencia que mantiene una actitud positiva, y no le importaría cambiar al régimen de custodia semanal, pese a estar acostumbrada al sistema anterior de días alternos. Y destaca en su fundamentación que “a juicio de la perito el sistema que propugna el recurrente no va a producir un cambio sustancial en la menor, y que de cara a una proyección de futuro se adapta mejor (a) las necesidades educativas, organizativas y de autonomía”. Dicha argumentación no se basa sólo en

proyecciones de futuro, sin considerar el potencial riesgo o consecuencias negativas que tal cambio pueda suponer, como denuncia la recurrente, sino que tiene en cuenta la normal evolución psicológica de la niña, recogida en el informe pericial, explicando que "es en base a esta proyección de futuro que la niña ya tiene en ciernes, por lo que creemos más adecuado la fijación de un régimen de custodia compartida por semanas alternas".

Esta decisión, adoptada en el ámbito de discrecionalidad que al tribunal de instancia compete, no ha vulnerado ninguno de los preceptos señalados en el recurso, por lo que éste ha de decaer."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 2 de diciembre de 2016. Modificación de medidas. Pensión de alimentos a hija mayor de edad. Cambio de necesidades. Negativa a relacionarse**

"PRIMERO.- Es objeto de recurso la sentencia de 21 de abril de 2016 que desestimó íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de D. R frente a Dª, M y Dª. I sobre modificación de medidas definitivas acordadas en proceso de divorcio 791/2007.

En la demanda de modificación se interesó la supresión de la pensión en favor de la hija I, nacida el 1995, o su reducción a 150 euros; así como la supresión de contribución al 50% de los gastos extraordinarios. Las razones de su pretensión: la ausencia de relación padre e hija, pese a los intentos del padre por tener una mínima relación con la hija desde la crisis matrimonial, estimando que las nulas relaciones solo obedecen a un ingrato y caprichoso proceder de la hija; la reducción de necesidades de la hija, que venía estudiado en un Colegio por el que pagaba más de 450 euros, ignorando donde estudia en la actualidad.

Los argumentos de la sentencia de instancia que justifican la desestimación de la demanda fueron: ausencia de prueba de cuales fueran sus muchos intentos de mantener una mínima relación con la hija, así como de las razones que han dado lugar a la nula relación paterno filial invocada, no pudiendo reprocharse a la hija una conducta inadecuada o ingrata y caprichosa; concurrencia de los requisitos legales previstos en el art. 69 CDFA para mantener el deber paterno de sufragar los gastos de crianza y educación; cosa juzgada respecto a la pretensión de supresión de gastos extraordinarios (sentencias de 28/2/2013 y 10/10/2013 del Juzgado de Primera Instancia 16 y A. Prov. respectivamente).

El recurrente: insiste en el ingrato y caprichoso proceder de la hija que no quiere tener relación con su padre, pero sí cobrar la pensión de alimentos; reitera la merma de necesidades económicas de la hija; impugna la imposición de costas.

SEGUNDO.- El matrimonio del se disolvió por divorcio decretado por sentencia de 30/11/2007 del Juzgado de Primera Instancia número 16 de Zaragoza. En la fundamentación de la expresada sentencia y como cada hijo del matrimonio quedaba con uno de los progenitores, ya fue objeto de discusión la cuantía de las pensiones alimenticias y a la hora de fijarlas se tuvo en cuenta que la hija estudiaba en el Colegio (coste mensual de más de 450 euros) y que el hijo era factible que próximamente iniciara estudios superiores teniendo que salir del pueblo () para realizarlos. La sentencia se revocó en parte por la de 19/12/2008 de esta Sección que fijó en 600 euros al mes la pensión de alimentos a favor de I y a cargo del padre.

El Sr. L interesó en su día la modificación de las medidas, solicitando la atribución de la guarda y custodia de la menor I, por estimar que la falta de cumplimiento efectivo del régimen de visitas con su hija de 14 años venía siendo propiciado por la actitud

obstaculizadora de la madre en tal sentido. En ambas instancias se rechazó la pretensión y, en concreto, la sentencia de esta Sala de 12/5/2009 revocó en parte la del juzgado de primera instancia y amplió el régimen de visitas a desarrollar en Punto de Encuentro Familiar.

El Sr. L interesó en su día la modificación de las medidas, solicitando la supresión o reducción de la pensión de alimentos a favor de la hija Irene a 100 euros y ya en la sentencia de primera instancia de 28/2/2013 (definitivamente confirmada por la de 28/3/2014 de la Sala de lo Civil del TSJ de Aragón) se aludió al hecho de haber pasado de estudiar en el Colegio a uno público, sin que ello justificara una disminución de la pensión; y asimismo a la falta de relación paterno filial que no podía cuestionar la obligación de prestar alimentos a sus hijos en los términos legales. Tras ser desestimada la apelación presentada por el Sr. López en lo que a estos extremos se refiere, se interpuso recurso de casación foral resuelto por sentencia de 28/3/2014.

En el fundamento de derecho sexto sentencia de la sentencia del TSJ Aragón de 28/3/2014 se afirmaba "...denuncia la parte infracción por interpretación errónea del artículo 69.1 del CDFA, que exige razonabilidad para mantener la pensión de alimentos. A juicio del recurrente, no es razonable exigir al obligado a prestar alimentos que siga costeándolos en el caso de que el hijo perceptor, mayor de 18 años, no quiera tener relación de ningún tipo con el progenitor que ha de satisfacerlos. Alude, en apoyo de su tesis, al artículo 152 del Cc que contempla como una de las causas de extinción de la obligación de alimentos el caso de que el alimentista hubiese cometido alguna falta de las que dan lugar a desheredación, entre las que está el maltrato de obra o injuria grave al ascendiente. El deber de sufragar los gastos de crianza y educación, que establece los artículos 65 y concordantes del CDFA, no se condiciona a determinadas actitudes de los hijos hacia los padres ni a ninguna otra circunstancia. Sucede, además, que en la sentencia recurrida no se encuentra referencia alguna, como tampoco en la de primera instancia, a la existencia de maltrato de obra o injuria grave por parte de la hija al padre; en realidad, ni siquiera se da como probado que las relaciones entre padre e hija sean malas, o inexistentes. En el caso de que pudiera haber base para entenderlo así acreditado, o de que la hija cometiera alguna falta de consideración hacia el padre, eso tampoco sería suficiente para establecer que no es razonable exigir el mantenimiento del deber de sufragar los gastos de crianza y educación. Pues sería preciso conocer las razones de las deficientes relaciones paterno filiales, de modo que sólo si obedecieran a un ingrato y caprichoso proceder de la hija, podría, en su caso, plantearse la irrazonabilidad de continuar con el pago".

Son las últimas líneas de la sentencia del TSJ Aragón en las que se apoyó el Sr. L para instar la modificación de medidas desestimada en la instancia y que es objeto de este recurso.

TERCERO.- La crisis matrimonial de los padres de I se remonta a 2006 , cuando la menor contaba con 11 años de edad y desde ese momento la relación paterno filial no hizo sino menguar, sin que ello pueda reprochársele a la menor, sino a los progenitores, que eran los que deberían haber propiciado que sus desavenencias no perjudicaran a los hijos, evitando la madre los comentarios negativos de la figura paterna que mencionamos en

nuestra sentencia de 12/5/2009 y siendo consciente el padre que a él, como adulto , le correspondía aportar el mayor esfuerzo en el restablecimiento y consolidación del vínculo. Los informes realizados en 2008 y 2009 por el equipo técnico del punto de encuentro donde se desarrollaban las visitas que se suspendieron por decisión paterna (a mediados de 2009) ante la nula evolución de la relación, evidenciaron la contradicción interna de la menor que junto a lo negativo, también expresaba reproche al padre por "tirar tan pronto la toalla" y dudaba sobre su postura acerca de la decisión paterna de suspender visitas.

La actual situación de la relación paterno filial es consecuencia de lo anterior. No existe constancia de cuales hayan sido los intentos del padre de retomar la relación con su hija desde 2009 y una vez esta ha adquirido su mayoría de edad. Y de lo expresado en Sala por I no cabe calificar su proceder de caprichoso o ingrato, pues en ningún momento cerró la puerta a mantener relación con su padre y ello tanto por su expresión limitada en el tiempo "por ahora", como por la llamada de atención al padre que se desprende de las afirmaciones del tenor "vivo donde siempre", o "si quisiera podría tener relación conmigo".

CUARTO.- No existe justificación para la supresión o reducción de pensión alimenticia o contribución a gastos extraordinarios, ni por el proceder de la hija I que, por otro lado, continúa con provecho su formación, ni por alteración de necesidades, pues ya en su momento se desechó como hecho determinante pasar del Colegio a un Colegio Público y en la actualidad I está estudiando en Huesca por lo que a los gastos educativos (matrícula, libros ...) deben añadirse los de alojamiento, suministros, viajes de fines de semana o vacaciones a Zaragoza..., por lo que no cabe estimar acreditada ni una mengua de sus necesidades , ni de la capacidad económica paterna y no debemos olvidar que en trámite de petición de modificación de medidas ya fijadas en anteriores procesos matrimoniales se requiere de una alteración en las circunstancias que para que sea tenida en cuenta ha de revestir una serie de características, como que sea sustancial, permanente o duradera y no simplemente aleatoria o coyuntural, y además de no imputable a la propia voluntad de quien solicita la modificación, no prevista por los cónyuges o el Juzgador en el momento en que las medidas se establecieron y, desde luego, cumplidamente probada, siendo a quien ejercita la acción a quien ex art. 217 LEC incumbe la prueba de los hechos que la sustancian"

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 2 de diciembre de 2016. Modificación de medidas. Alteración sustancial de circunstancias. Edad de la menor y situación laboral. Custodia compartida. Conciliación de vida familiar y laboral. Voto particular**

"PRIMERO.- Como antecedentes de interés para la resolución del presente recurso, deben citarse los siguientes:

1.- De la relación entre actor y demandada nació una niña, 2009.

2.- En autos nº 665/2010 del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Zaragoza, de procedimiento de familia sobre medidas de guarda y custodia y alimentos de hijo menor de edad, recayó sentencia de 30 de noviembre de 2010, confirmada por la de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 12 de abril de 2011, en la que la guarda y custodia de la hija quedó atribuida a su madre.

3.- El 30 de junio de 2014 presentó el padre la demanda de modificación de medidas de la que deriva el presente recurso solicitando, en lo esencial, el régimen de guarda y custodia compartida de la hija común.

SEGUNDO.- En las presentes actuaciones la sentencia de 27 de julio de 2015 del Juzgado de Primera Instancia nº 16 desestimó la demanda y confirmó la custodia individual atribuida a la madre, si bien varió el régimen de estancias y comunicaciones entre padre e hija en el sentido de que los fines de semana alternos comprendieran desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes a la entrada del mismo (en la anterior sentencia era hasta el domingo a las 20 horas), y se añadía una visita intersemanal los miércoles desde la salida del colegio o de la actividad extraescolar hasta el día siguiente por la mañana.

Esta sentencia examinaba, en primer lugar, si se habían producido cambios sustanciales en las circunstancias respecto a las tenidas en cuenta en el momento de la adopción de las medidas cuya variación se pretendía, para lo que hace referencia a una serie de datos que consideraba de interés:

"*En el momento de dictarse la sentencia de guarda, custodia y alimentos el 30 de noviembre de 2010, confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial de Zaragoza que desestimó los respectivos recursos de apelación de las partes, el régimen de custodia así como las estancias y comunicaciones del padre con la hija antes mencionados se basó fundamentalmente no sólo en la edad de la menor que entonces contaba escasamente con un año, sino que se atendieron a las circunstancias personales de ambos progenitores, el padre por razones de trabajo desde la tarde de los lunes hasta la tarde de los jueves se encontraba fuera de Zaragoza, y la madre estaba en aquel momento desempleada.*"

Ante la afirmación en la demanda de que en el momento de la presentación de la misma (30 de junio de 2014) el actor se encontraba en situación de desempleo, lo que le permitía tener más tiempo libre, constata la sentencia que estas circunstancias variaron de

nuevo pues después de su interposición encontró un nuevo puesto de trabajo con sus consiguientes retribuciones. Afirma la sentencia que: *"Si se atendiera exclusivamente a estos motivos, tendría que concluirse que no se ha producido variación alguna ya que únicamente aconteció un cambio temporal, no obstante debe reconocerse que para ambas partes se ha producido una variación en su situación laboral al menos en lo que se refiere a la jornada de trabajo, ya que la Sra. T se ha incorporado al mundo laboral desde el año 2010, y el actor ha pasado a tener otro tipo de horario."*

En el fundamento siguiente analiza la sentencia el informe psicológico emitido el 27 de febrero de 2015 por la profesional adscrita al Juzgado. Según el mismo, el actor reside en C. de H. y trabaja como comercial de una distribuidora de alimentación 40 horas semanales de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas y de 16,30 a 20 horas señalando, según indicó aquél, que es un horario flexible y que contaba a su vez con una adecuada red de apoyo familiar. Por lo que se refiere a la madre, el informe pericial afirma que reside con la hija en una vivienda propia en el barrio de T. trabajando como gestora de punto de venta de lunes a viernes en horario de 9 a 17 horas, y alude igualmente a flexibilidad en el mismo así como la posibilidad de realizar labor administrativa desde casa, contando con su madre como apoyo en el cuidado de la niña. Continúa la sentencia:

"En cuanto a la actitud de ambos progenitores estima la profesional que la progenitora se muestra escasamente intervencionista en el control de la conducta de la niña estimando necesario en cuanto a su educación que cumpla unas normas mostrándose flexible en determinados momentos. En cuanto al progenitor reúne condiciones personales para hacerse cargo de la niña, con una actitud menos invasiva pero sin anticipar las dificultades.

Se afirma a su vez que de la valoración de la situación familiar se extrae que la progenitora es la principal figura de referencia para la menor mostrando esta una relación afectiva hacia ella, lo cual por otra parte resulta lógico ya que desde su nacimiento ha vivido exclusivamente con la madre pasando con esta la mayor parte de su tiempo.

Se recoge también en el informe que la convivencia con ambos progenitores en dos entornos con diferente nivel de estructuración favorecerá el desarrollo de su autonomía personal.

En la actualidad las relaciones con el padre se distancian en el tiempo más de una semana considerando positivo para el desarrollo de la niña un contacto más frecuente con ambos progenitores.

Sin embargo el horario del progenitor como así manifiesta la psicóloga hasta las 20 horas de lunes a viernes, no permite establecer períodos alternos ya que dependería excesivamente de apoyos y el período de guarda y custodia con el progenitor no permitiría estancias de tiempo efectivo durante la semana, por lo que sí estima más idóneo introducir pernoctas y alargar los períodos de manera que padre e hija puedan

interaccionar juntos en la cena, al acostarse y levantarse o inclusive acompañarla al colegio.

Se concluye en definitiva que lo más aconsejable es un sistema para que la menor se relacione con el padre en fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes a la entrada del mismo y una tarde a la semana los miércoles desde la salida del colegio hasta el día siguiente a la entrada a este así como la mitad de las vacaciones."

Del informe realizado por la trabajadora social el 8 de julio de 2015 recoge lo siguiente:

"En lo que afecta al demandante se hace constar que reside con su pareja en la localidad de C. de H. junto con su pareja que es soltera y no tiene hijos de relaciones anteriores y con la que mantiene una relación desde hace dos años y conviven desde hace tres meses.

Se dice a su vez que trabaja desde mayo de 2014 como agente comercial para la empresa R. F. S.L. presentando un certificado de la empresa de fecha 2 de julio de 2015 en el que se especifica que su horario es de 40 horas semanales de lunes a viernes siendo éste flexible para adaptarse al horario de su cartera de clientes. Dispone el recurrente de vehículo de empresa y comercializa productos refrigerados, congelados y conservas siendo sus principales clientes el pequeño comercio y la hostelería.

En cuanto a la Sra. T. esta reside en Zaragoza si bien en este caso se indica en el barrio O. y no en el de T. , trabaja desde 2013 para la empresa La Z. SA y su jornada laboral es de ocho horas diarias y se lleva a cabo entre las nueve horas y las 21 horas para adaptarse a los horarios comerciales de los diferentes centros.

Ya más en concreto en relación a la menor se afirma que ha finalizado 3º de Infantil en el colegio público D teniendo un horario escolar de nueve horas a 17 horas utilizando el servicio de comedor y realizando actividades extraescolares dentro del propio centro así como los martes practica natación de 17,30 horas a 18,15 horas.

Según la trabajadora social los dos progenitores presentan ciertas dificultades para compatibilizar su vida familiar y laboral al desempeñar labores comerciales con jornadas de 40 horas semanales sin un horario predeterminado por lo que tienen dificultades de conciliación laboral siendo que un mínimo entendimiento permitiría que la menor pudiera pasar el mayor tiempo posible con cada uno de ellos evitando un apoyo excesivo e innecesario de las familias extensas.

Ambas partes cuentan con recursos suficientes y estabilidad en la vivienda así como dispone del apoyo de sus familias extensas para los cuidados relacionados con la menor.

Concluye que ambos progenitores son idóneos para el ejercicio de la guarda y custodia de E disponiendo de los recursos necesarios para atenderla y cuidarla."

La juez de instancia atribuye la diferencia entre ambos informes, el de la psicóloga y el de la trabajadora social, a la variación de datos, al recoger la psicóloga un horario del padre de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas y de 16,30 a 20 horas, que no se concretaba en lo expuesto por la trabajadora social a la que el actor había aportado un certificado de empresa de 2 de julio de 2015, que por su contenido debe ser el mismo que el que obra en las actuaciones de 20 de enero de 2015 (oficio remitido al Juzgado en prueba documental propuesta por la parte demandada), en el que se manifiesta que el horario de trabajo es de 40 horas semanales de lunes a viernes siendo flexible para adaptarse al horario de los clientes ya que ocupa el puesto de agente comercial.

Según la sentencia no se ha podido concretar el horario aproximado del Sr. I. y la forma en que se flexibiliza, añadiendo que "*No es suficiente con señalar que se dispone de flexibilidad horaria, al igual que sucede en el caso de la madre Sra. T. que tampoco concreta horario de trabajo siendo lo máximo que se alcanza a saber es que es de ocho horas y se lleva a cabo entre las 9 y las 21 horas para adaptarse a los horarios comerciales de los centros, sin saberse por tanto se realiza turnos rotatorios, partidos etc.*

Sentado lo anterior y puesto que la menor convive hasta la fecha con la madre, es de entender que la misma ha podido organizar y compatibilizar su horario de trabajo con el de la menor con la asistencia de miembros cercanos de su familia como su madre.

En el caso del Sr. I. , partiendo de esa misma indeterminación no ha podido concretarse cual es su jornada de trabajo al efecto de poder determinar aspectos importantes como si tiene posibilidad de llevar a la menor al colegio por las mañanas, de recogerla por las tardes, y que tiempo puede pasar con la misma una vez finalizado el horario escolar y el de las actividades extraescolares."

En la sentencia se suscitan también dudas sobre el domicilio del actor, quien afirmó a la trabajadora social que reside en su domicilio de C. de H. en el que convive con su pareja tras dos años de relación, pocos meses antes de emitirse el informe, aportando un certificado de empadronamiento de 3 de julio de 2015, suscitando dudas a la juzgadora que esta convivencia no se produjera tras la ruptura entre las partes ni con anterioridad a la interposición de la demanda sino a escasos días de celebrarse el acto de la vista. Se dice que no hay constancia de la residencia del actor en C. de H. dados los escasos consumos de gas y electricidad según los recibos de 2014. Y continúa:

"*No ha quedado así concretada cual es la disponibilidad del padre, si efectivamente reside solo o en pareja en la vivienda de C. de H. y si puede conciliar la vida familiar y laboral para tener a la hija en régimen de custodia compartida sin tener que acudir a los apoyos externos en la misma medida en que puede hacerlo la madre.*

(…)

Y esta es la duda que acontece en el caso analizado, pues además de no saberse a ciencia cierta ni el horario de trabajo del Sr. I., ni su lugar exacto de residencia, si efectivamente vive de forma independiente en la vivienda de su propiedad no ha

acreditado como puede compatibilizar sus horarios con los de la hija cuando en principio cabría pensar que aquellos son los que más concretó a la psicóloga en su informe (bastante incompatibles) pese a que esta cuestión es más competencia de la trabajadora social en cuyo informe y seguramente por las propias manifestaciones del entrevistado, no se detallan estos.

Si por otra parte el recurrente continúa residiendo con sus padres y su horario es el antes indicado, tal y como la psicóloga aprecia, tan apenas habría estancias de tiempo efectivo entre padre e hija durante la semana para el supuesto de disponerse una guarda compartida, lo que equivale a atribuir o delegar la mayor parte del tiempo en los abuelos el cuidado y la atención de la niña lo que no comulga con la finalidad de este régimen.

Los razonamientos expuestos deben conllevar necesariamente a desestimar la pretensión principal formulada por el Sr. I. porque si bien es cierto que ha cambiado de empresa y de horario de trabajo, ni el de antes ni el de ahora, por falta de acreditación de este último resultan compatibles con un sistema de custodia compartida que exige una plena probanza de la disponibilidad del progenitor si bien no es impedimento alguno para una ampliación del régimen de visitas en los términos que se detallarán en el fallo de la presente resolución porque el vigente resulta escaso y no atiende a las necesidades y reforzamiento de vínculos entre padre e hija que se deben fomentar.

TERCERO.- Interpuesto recurso de apelación por ambas partes, la sentencia de 21 de junio de 2016 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza desestimó el del actor manteniendo la custodia materna y estimó el de la demandada en el sentido de reducir la visita intersemanal al miércoles sin pernocta, desde la salida del colegio hasta las 20 horas.

Se expresan así las razones para mantener la custodia materna:

"La perito psicóloga establece en su informe un horario laboral del padre de 9 h. a 13'30 h. y de 16'30 h. a 20 h. de lunes a viernes. El alude a un horario flexible, flexibilidad que por su inconcreción no garantiza esa disponibilidad que propugna, por tratarse de conceptos en absoluto equivalentes.

Tampoco ha acreditado el actor su actual residencia, pese a la documental aportada, no prueba eficazmente la concreta ubicación de su domicilio habitual, que más bien parece buscado de propósito en fechas recientes para favorecer su pretensión.

Finalmente, las comunicaciones aportadas de los litigantes, revelan continuos desacuerdos en el cumplimiento de las visitas, y disfunciones en ese ejercicio que solo propician perjuicios a la menor (inasistencia del padre a actividades extraescolares y cumpleaños de la menor, etc.).

Debe mantenerse la custodia materna por estimase es la medida que mejor protege el interés de la hija.

Para razonar sobre la modificación de las visitas solicitada por la demandada en su recurso de apelación, se dice en la sentencia:

La Juzgadora desestima la petición de custodia compartida por considerar que el padre no puede atender personalmente a la menor, dudando que pueda llevarla al colegio y recogerla diariamente, entre otros cometidos, sin embargo, contradictoriamente, instaura un sistema de visitas intersemanales con pernocta, que no solo no ha pedido el actor en su demanda, sino que darían lugar a la misma problemática que se pone de manifiesto en la Sentencia.

El padre reside en C. de H. y la madre con la menor en Zaragoza, iniciando el primero la jornada laboral a las 9 h. de la mañana, y, según prueba aportada en esta alzada, ha dejado de acudir a recoger al colegio a la hija en diversas ocasiones, generándose conflictos parentales, que han devenido en habituales.

Si su jornada laboral finaliza a las 20 h. poco podrá hacerse cargo de la menor, entre semana.

En estas condiciones, y para regular adecuadamente la vida y estabilidad de la niña, en cuyo interés y derecho se establecen las visitas, deben reducirse las intersemanales a un día fijo, los miércoles, desde la salida del colegio hasta las 20 h., manteniéndose el resto del sistema de visitas instaurado por estimarse adecuado, y, prácticamente similar al fijado en la Sentencia precedente, único sentido en que se revoca la Sentencia."

CUARTO.- El recurso de casación se articula, por lo que se refiere a la custodia de la menor, en seis motivos, si bien los relevantes son el cuarto, en el que se argumenta la infracción del artículo 80.2 por no haberse respetado su contenido relativo a la preferencia legal por la custodia compartida contenida en el mismo, con cita de diversas sentencias de esta Sala en apoyo de su interpretación, y el quinto en lo referente al apartado 2.e) del artículo 80.2 sobre la conciliación de vida familiar y laboral.

En el primer motivo se citan como normas infringidas los artículos 75.2, 76.2, 76.3, 79.2 y 80.2 del CDFA, además del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LPJM), sobre el interés superior del menor. En el segundo se enuncian los principios a que se refieren los preceptos anteriores. En el tercero se muestra disconformidad con la sentencia que se recurre por la denegación de la custodia compartida y por la reducción de las visitas. En el cuarto se concreta la infracción del artículo 80.2 CDFA, y el quinto se centra de forma más específica en el apartado 2.e) del mismo referido a la conciliación de la vida familiar y laboral. El sexto afirma que la guarda y custodia individual de la menor no es la más conveniente para ella por el reconocimiento del artículo 76.2 CDFA al derecho de la menor a una relación igual con sus padres, con cita de alguna sentencia del Tribunal Supremo sobre este principio. El séptimo se refiere al régimen de visitas y el octavo reitera las infracciones denunciadas.

Los citados motivos inciden, aunque de forma poco hilvanada, en la infracción del artículo 80.2 CDFA, como se concreta en los motivos cuarto y quinto, siendo los demás de apoyo en el terreno de los principios, por lo que se examinarán conjuntamente a los efectos de comprobar si se ha producido la infracción del citado artículo 80.2.

El Ministerio Fiscal, tras cita de la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre la custodia compartida, destaca del informe de la psicóloga que la convivencia de la hija con ambos progenitores favorecerá el desarrollo de su autonomía personal y que considera positivo para el desarrollo de la niña un contacto más frecuente con ambos progenitores. Y del de la trabajadora social que ambos progenitores son idóneos para el ejercicio de la guarda y custodia disponiendo de los recursos necesarios para atenderla y cuidarla.

Deduce el Ministerio Fiscal que el criterio de la conciliación de la vida familiar y laboral parece ser el determinante para que ambas instancias se inclinen por la custodia individual de la madre, lo que le resulta *"chocante porque los dos progenitores trabajan una 40 horas semanales (el horario del padre es flexible, según el certificado de la empresa R. F. SL). El horario de la madre en la empresa La Z. también es de 40 horas, entre las 9 y las 21 horas, para adaptarse a los horarios comerciales de los diferentes centros. Y según la trabajadora social los dos progenitores presentan ciertas dificultades para compatibilizar su vida familiar y laboral, por lo que ambos progenitores tienen que buscar el apoyo excesivo e innecesario de las familias extensas (los abuelos)."*

Expone el Ministerio Fiscal las bondades de la custodia compartida según el texto del Preámbulo de la Ley 2/2010, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, y de sentencias del Tribunal Supremo, y concluye que se debe estimar el recurso de casación.

La parte recurrida niega que la preferencia legal por la custodia compartida tenga un carácter imperativo, como pretende la parte recurrente, y que la sentencia recurrida ha concluido que la custodia individual es lo más conveniente para la menor, tras la valoración de la prueba practicada. Además, que en un procedimiento de modificación de medidas, conforme al artículo 79.5 del CDFA, corresponde probar su existencia y alcance a la parte que pretende la modificación.

QUINTO.- Por lo que se refiere al cambio de circunstancias requerido para instar la modificación de las medidas inicialmente adoptadas, recordamos lo expuesto en nuestra sentencia de 26 de mayo de 2014, nº 19/2014, recurso 13/2014:

El art. 79.5 CDFA no emplea la misma expresión que el art. 91 CC ["alteración sustancial de circunstancias"] para establecer el presupuesto que permite la modificación de las medidas definitivas previamente acordadas, sino la de concurrencia de "causas o circunstancias relevantes", lo que implica una mayor flexibilidad, que se explica porque las medidas a las que se refiere el art. 79.5 son todas ellas relativas a menores.

Por tanto, en relación a estas medidas, no se trata ya de constatar si ha quedado acreditada una alteración sustancial de circunstancias existentes en el momento en que

recayó la previa decisión judicial, sino si concurren o no aquellas causas o circunstancias que por su relevancia justifican la modificación de las medidas, y ciertamente la tienen todas aquéllas que evidencien que las acordadas ya no se convienen con el interés del menor que ha de quedar salvaguardado en todo caso, como ha sido indicado por esta Sala, entre otras, en SSTSJA 8 y 10/2011, de 13 de julio y 30 de septiembre, en recta interpretación de la normativa aplicable, entre la que destaca como específico para los procesos de ruptura de la convivencia familiar el art. 76.2 CDFA, conforme al que: "Toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos menores de edad se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos".

Y entre aquellas causas merece especial mención la adaptación al desarrollo del menor, como lo muestra el mismo precepto que analizamos, cuando indica que:

"En particular, cuando se haya acordado la custodia individual en atención a la edad del hijo o hija menor, se revisará el régimen de custodia en el plazo fijado en la propia sentencia, a fin de plantear la conveniencia de un régimen de custodia compartida"

Es cierto que nuestra sentencia 42/2013, de tres de octubre, dictada en el Recurso: 22/2013, que se enfrentaba a un litigio sobre modificación del régimen de custodia que venía acordado en el procedimiento matrimonial anterior, hemos dicho que una vez transcurrido el plazo del año establecido en las disposiciones transitorias primera de la Ley 2/2010 y sexta del CDFA, no basta con la mera petición de cambio de régimen de custodia para instar y obtener el cambio de las medidas fijadas por la inicial sentencia, sino que los interesados en la modificación deben alegar y acreditar una sustancial alteración de las circunstancias que en su momento fueron valoradas, pero no es menos cierto que a continuación se justifica la denegación de la modificación pretendida porque la prueba practicada no acreditaba la conveniencia del cambio pretendido, lo que constituía verdaderamente la ratio decidendi de la decisión entonces tomada.

Por su parte, la sentencia de esta Sala más arriba citada, nº 17/2013, señalaba que la diferencia de edad entre el momento de la inicial medida y aquél en el que se solicitaba la modificación (en el caso el cambio había sido de 10 a 14 años) puede ser circunstancia suficiente para el cambio del régimen de custodia.

En la sentencia recurrida no hay mención a si ha habido, o no, cambio de circunstancias, e incide para confirmar la de primera instancia en las pruebas practicadas, conforme a las cuales resulta más conveniente la custodia individual de la madre. La sentencia del Juzgado afirma, según consta en los razonamientos trascritos, que en el procedimiento inicial se tuvo en cuenta no solo la edad de la menor que entonces contaba escasamente un año, sino también las circunstancias laborales del padre que, por razones de trabajo, se encontraba fuera de Zaragoza desde la tarde de los lunes hasta la tarde de los jueves, y las de la madre que en aquel momento (noviembre de 2010) se encontraba desempleada.

Y, tras dar cuenta la sentencia del Juzgado, de que las circunstancias laborales de los progenitores habían variado incluso desde la fecha de la presentación de la demanda (junio de 2014), pues ahora (fecha de la sentencia, julio de 2015) la madre se ha incorporado al mundo laboral desde el año 2010 y el padre ha pasado a tener otro tipo de horario, se analizan las circunstancias personales y laborales de ambos.

Tales cambios serían, pues, que la niña, nacida en octubre de 2009, tenía en la fecha de la primera sentencia (noviembre de 2010) menos de un año, y en el momento de la sentencia del Juzgado (julio de 2015) casi cinco años de edad. Y, además, las indicadas circunstancias laborales de los padres, ambos con trabajo ahora, el actor ya en Zaragoza.

En consecuencia, la modificación de las circunstancias en relación con las tenidas en cuenta en noviembre de 2010, es evidente y justifica que se pueda entrar a valorar si las mismas permiten ahora variar las medidas entonces adoptadas.

SEXTO.- La sentencia de apelación ahora recurrida constata que la de primera instancia había analizado pormenorizadamente la prueba practicada y había concluido que el interés de la menor no aconsejaba el cambio pretendido dado que el padre, por su ocupación laboral, carecería de disponibilidad efectiva de tiempo para ocuparse personalmente del cuidado cotidiano de la niña. Incide la sentencia de apelación en el horario laboral del padre, de 9 a 13,30 h. y de 16,30 a 20 h., sin que la flexibilidad alegada, por su inconcreción, garantice la disponibilidad que propugna, por tratarse de conceptos en absoluto equivalentes.

Afirman el Ministerio Fiscal y la parte recurrente que, como pone de manifiesto el informe de la trabajadora social, ambos progenitores (la madre trabajando también 40 horas semanales entre las 9 y las 21 horas), presentan ciertas dificultades para compatibilizar su vida familiar y laboral y necesitan apoyo de las familias.

Y, efectivamente, estos datos así resultan de la prueba analizada en las sentencias de instancia en lo referente a las circunstancias laborales de ambos progenitores, lo que por sí solo no permitiría concluir que es mejor la situación de uno u otro en este apartado. Decía la sentencia del Juzgado:

"No es suficiente con señalar que se dispone de flexibilidad horaria, al igual que sucede en el caso de la madre Sra. T. que tampoco concreta horario de trabajo siendo lo máximo que se alcanza a saber es que es de ocho horas y se lleva a cabo entre las 9 y las 21 horas para adaptarse a los horarios comerciales de los centros, sin saberse por tanto se realiza turnos rotatorios, partidos etc."

A continuación la sentencia del Juzgado supone que la madre, dado que convive con la niña, ha podido organizar y compatibilizar su horario con la asistencia de miembros cercanos de su familia, como su madre, pero dice respecto al padre que no ha podido concretarse cual es su jornada de trabajo al efecto de poder determinar aspectos importantes, como si tiene posibilidad de llevar a la menor al colegio por las mañanas, de

recogerla por las tardes, y qué tiempo puede pasar con la misma una vez finalizado el horario escolar y el de las actividades extraescolares.

Incide, por lo tanto, en las dificultades de ambos progenitores para compatibilizar su vida familiar y laboral, como pone de manifiesto el informe de la trabajadora social que prevé la necesidad de apoyos familiares para ambos, pero presume que la madre puede hacerlo (no se indica cómo) y, en cambio, no lo supone de igual forma respecto al padre. Y por eso concluye (ver último párrafo transcrito en nuestro fundamento tercero anterior) que la falta de acreditación del horario del padre no resulta compatible con el sistema de custodia compartida que exige una plena probanza de la disponibilidad del progenitor. Lo que no impide –se dice en la sentencia- una ampliación del régimen de visitas a los miércoles con pernocta.

Debe suponerse, en igualdad de horarios laborales, que ambos podrán superar esta dificultad de conciliación de la vida laboral y familiar, salvo que se tenga por acreditado lo contrario, lo que no se ha puesto de manifiesto en el presente caso. Para que podamos llegar a tal conclusión no es necesaria distinta valoración de la prueba, que se concreta a los horarios laborales de ambos progenitores, pues las posibilidades futuras de conciliación del padre no pueden ser adivinadas.

El otro factor que en la sentencia recurrida lleva a mantener la custodia individual es el domicilio del padre pues, según ha quedado transcrito, a pesar de la documental aportada (certificado de empadronamiento en C. de H.), le parece buscado de propósito en fechas recientes para favorecer su pretensión. Y, según hemos transcrito también, para razonar sobre la supresión de la pernocta de los miércoles con el padre, afirma que el padre reside en C. de H. iniciando la jornada laboral a las 9 h. de la mañana, y la menor con la madre en Zaragoza. Por lo tanto, parece concluirse que el domicilio del padre es en C. de H. , y se suprime la pernocta de los miércoles que había sido acordada por la sentencia de primera instancia precisamente porque el horario laboral del padre aconsejaba concederla, siguiendo la recomendación del informe psicológico para que padre e hija pudieran estar juntos al menos desde las 20 h.

Las conclusiones establecidas en las sentencias, partiendo de los hechos concretos citados (horarios laborales de ambos y domicilio del recurrente) parecen suponer –pero no justifican- que el padre no podrá cumplir las obligaciones que impone la custodia compartida, con exigencias (posibilidad de llevar y recoger a la niña del colegio, tiempo de estancia con la misma) que tampoco se sabe cómo puede cumplir la madre (véase el anterior párrafo últimamente transcrito de la sentencia de primera instancia), que necesitará la ayuda que pueda recibir de la familia, en particular de su madre.

Salvo lo anterior, no se ha puesto de manifiesto que el padre no sea idóneo para el ejercicio de la guarda y custodia de su hija, sino que afirman tal aptitud las sentencias de instancia con cita de los informes de la psicóloga y de la trabajadora social, aunque la primera opte por mantener la custodia individual con ampliación del régimen de visitas y la segunda aparezca más abierta al régimen de custodia compartida.

Indudablemente se han producido cambios relevantes que permiten examinar si el régimen de custodia que mejor atiende al interés del menor puede ser el de custodia compartida. Afectan dichos ambos a la edad de la niña y a las circunstancias laborales de los progenitores.

La edad de la niña, de menos de un año en el momento de ser fijada la custodia individual, casi siete años al tiempo de la sentencia recurrida (junio de 2016), y ahora ya cumplidos, en régimen de escolarización hasta las cinco de la tarde, alguna tardes después de las actividades extraescolares, permite contemplar con normalidad ese cambio partiendo de que, conforme a la norma aragonesa, es el sistema que mejor atiende a dicho interés (Sentencias de esta Sala, entre otras muchas, de 6 de junio de 2012 (nº 22/2012), de 10 de enero de 2014 (nº 1/2014), y 6 de abril de 2015 (nº 11/2015).

Y también el Tribunal Supremo, sin norma que establezca preferencia por un concreto sistema de guarda, considera que el examen del principio de necesaria observancia del interés del menor permite comprobar si es aplicado correctamente para, en otro caso, modificar el de custodia individual, y se pronuncia ya reiteradamente en la misma línea de considerar que este principio se consigue por el mayor compromiso y la colaboración entre los progenitores, más allá de la rutina de una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos, lo que determina en dichos supuestos la adopción del régimen de custodia compartida por salvaguardar mejor el interés de los menores. Lo expresa así su sentencia nº 495/2013, de 19 de julio de 2013, recurso 2964/2012, interpretando el artículo 92.8 del Código civil:

"La sentencia de 29 de abril de 2013 declara como doctrina jurisprudencial la siguiente: "la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea".

Es decir, se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, definen ni determinan, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro,

termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel."

Las circunstancias laborales de los progenitores también han variado sustancialmente respecto a las de noviembre de 2010. El padre ya no pasa fuera de Zaragoza, por razones de trabajo, desde la tarde de los lunes hasta la tarde de los jueves, sino que trabaja en Zaragoza en horario de 9 a 16,30 y de 16,30 a 20 horas. Es evidente que en aquellas circunstancias no se podía ocupar en noviembre de 2010 de una niña de menos de un año. Ahora, el horario indicado se lo permite en circunstancias parecidas a las de la madre, que entonces tenía todo el tiempo disponible dado que se encontraba en paro.

La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2013, nº 761/2013, recurso 774/2012, ante la afirmación de la sentencia de apelación de que no ha habido cambio de circunstancias porque los menores tienen perfectamente cubiertas sus necesidades económicas y afectivas conviviendo con su madre, y la relación con su padre se desarrolla amplia y satisfactoriamente con un generoso régimen de visitas, dice en apoyo del régimen de custodia compartida:

Sin duda, la valoración del interés de los menores no ha quedado adecuadamente salvaguardado y la solución aplicada en la resolución recurrida no ha tenido en cuenta ninguno de parámetros imprescindibles para determinar el régimen de custodia aplicable, que pueda asegurar el adecuado desarrollo evolutivo, estabilidad emocional y formación integral del menor y, en definitiva, y aproximarlo al modelo de convivencia existente antes de la ruptura matrimonial, garantizando al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos en la última etapa de su infancia, lo que sin duda parece también lo más beneficioso para ellos."

La sentencia ahora recurrida afirma también, trayendo en esa instancia una cuestión sobre la que no se había pronunciado la del Juzgado, que las comunicaciones de los litigantes revelan continuos desacuerdos en el cumplimiento de las visitas y disfunciones en ese ejercicio que solo propician perjuicios a la menor.

En relación con la conflictividad de la relación entre los progenitores, la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2013, recurso 1128/2012, citada de la de 17 de diciembre de 2013, recurso 2645/12, dice:

En relación a la conflictividad entre los cónyuges, la sentencia de 22 de julio de 2011, dictada en el RC núm. 813/2009 declaró que "las relaciones entre los cónyuges por sí solas no son relevantes ni irrelevantes para determinar la guarda y custodia compartida. Solo se convierten en relevantes cuando afecten, perjudicándolo, el interés del menor".

Lo mismo debe afirmarse respecto a los demás factores de cambio que puedan afectar a los menores: que solo serán relevantes si perjudican el interés del menor.

Lo expuesto acredita que no se han aplicado correctamente algunos de los criterios señalados en el artículo 80.2 del CDFA para atribuir a los progenitores la guarda y custodia de los hijos, en particular el apartado e) sobre las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres, según se ha razonado."

"**VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRAD ILMO. SR. D. JAVIER SEOANE PRADO**

Con absoluto respeto a la decisión de la mayoría, lamento tener que formular voto particular al amparo de lo prevenido en el artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 205 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que baso en las razones ya expuestas en otros anteriores, como el emitido en el RC 5/2016, al que me remito, y se resumen en señalar que la Sala, nuevamente en contradicción con el criterio sustentado, esta vez hasta en cuatro ocasiones en las dos instancias, corrige el criterio sentado en dicho grado y se comporta como tribunal de tercera instancia, a fin de sustituir el criterio discrecional del tribunal de apelación, por el suyo propia en la valoración sobre si las concretas circunstancias del caso, y en atención a los factores a ponderar establecidos en el art. 80.2 CDFA la custodia individual es o no más conveniente el menor.

La mera lectura de la sentencia mayoritaria, que analiza larga y detalladamente las circunstancias del caso para concluir que a su juicio no son bastantes para optar por la custodia individual frente al criterio legal general de la compartida, muestran que no estamos ante un supuesto de que solo podría apreciarse su infracción en el caso de que la misma resultara irracional, ilógica o arbitraria, o claramente atentatoria contra el interés del menor que justificaría la corrección del criterio sostenido en las sentencias impugnadas, lo que por otra parte no se dice en la sentencia que ocurra.

La casación de la sentencia en este caso supone, a mi parecer, la inobservancia del criterio que hemos sentado en otras resoluciones, como en la S nº 21/2015, Rc 17/2015 en la que decimos.

<< Partiendo de estos hechos no puede entenderse que la sentencia de apelación ignore el criterio preferente de la custodia compartida establecido en el art. 80.2 CDFA, sino que ejerciendo el margen de discrecionalidad que le corresponde por Ley ha considerado, motivadamente, que en el concreto caso enjuiciado la custodia individual satisface mejor el interés superior de las hijas menores. Conclusión a la que llega la sentencia recurrida de manera razonada, valorando los hechos que considera acreditados por los informes emitidos por el centro educativo y por la exploración de la hija mayor.

Al respecto es preciso indicar que el interés del menor debe ser apreciado en cada situación por los tribunales conforme a los hechos presentados y según la valoración dada a los mismos, de manera que solo podría apreciarse su infracción en el caso de que la misma resultara irracional, ilógica o arbitraria, o claramente atentatoria contra el interés del menor. >>"

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 14 de diciembre de 2016. Pensión compensatoria. Pensión de alimentos para hija mayor de edad. Requisitos. Valoración de la prueba**

"PRIMERO.- Ceñida la cuestión litigiosa a la pretensión del demandado y reconviniente de fijar una pensión compensatoria a su favor de cuatrocientos euros, y la supresión de la pensión de alimentos a favor de la hija mayor de edad determinada en 150 euros mensuales; alegando, en primer lugar la indefensión que le ha causado la inadmisión de la prueba en primera instancia; en segundo lugar el error en la valoración de la prueba.

En cuanto a la primera de las cuestiones nos remitimos al auto dictado por este Tribunal, el 17 de noviembre de 2016, auto firme por conformidad tácita de la parte. Cuyo sentido desestimatorio despeja cualquier duda sobre la infracción procesal, a la que se alude como primer motivo del recurso.

SEGUNDO.- En cuanto a las cuestiones de fondo suscitadas, trataremos en este fundamento de derecho el error en la valoración de la prueba alegado respecto de la pensión compensatoria.

Argumenta en la sentencia:

"*Se fijará de conformidad con el art. 83 del Codigo de Derecho Foral de Aragón y el art. 97 del Código Civil, teniendo en consideración la situación económica resultante del divorcio y perspectivas económicas previsibles para cada uno de ellos, la duración del matrimonio, la edad y salud de ambos cónyuges, así como cualquiera de las circunstancias que pudieran resultar relevantes.*

Que la duración del matrimonio ha sido de treinta años y el solicitante tiene la edad de cincuenta y cinco años, no habiéndose dedicado en exclusiva al cuidado y atención de la familia, teniendo la actividad laboral que las circunstancias del mercado le han permitido.

Que la capacidad económica del solicitado, Sra. M ya ha sido expuesta anteriormente así como las cargas que ha de soportar.

Lo mismo sucede en cuanto a la capacidad económica del solicitante, Sr. V.

En consecuencia de la prueba practicada cabe formular las siguientes conclusiones:

a) *Resulta acreditada la actual situación de desempleo del Sr. V, si bien percibe la cantidad equivalente a mil cinco euros mensuales.*

b) *Que no ha existido por parte del solicitante una manifiesta o exclusiva dedicación al cuidado de la casa y atención de la familia dado que siempre ha tenido una actividad laboral bastante significativa que ha compaginado o alternado con la familiar.*

c) Que el solicitante le consta tanto una formación profesional adecuada como una considerable actividad laboral.

d) Que el solicitante ha trabajado de forma regular durante la totalidad del matrimonio.

e) Si al solicitante se le acaba el paro en el mes de marzo, a la solicitada dada su condición laboral de interinidad le ha sido ofertada la plaza, y por último;

f) La solicitada, Sra. M, afronta unos gastos mensuales equivalentes a quinientos diez euros en concepto de derramas y gastos de comunidad, así como luz, agua, gas, teléfono, todos ellos sustentados en documentos nº 1 a 9 aportados en la vista celebrada

En consecuencia de lo anteriormente expuesto no existe un desequilibro patrimonial claro y manifiesto que, a priori, resultaría conforme con la finalidad y naturaleza jurídica de la pensión compensatoria, pese a que la solicitada no goce de una moderada solvencia económica, que no resulta suficiente como para la concesión de la pensión interesada...".

A tales conclusiones se opone la parte apelante alegando el error en la valoración de presentando un alegato, que es producto de una interpretación sesgada del material probatorio, y que en su conjunto más allá de la posibilidad de discutir si los gastos de la demandante son 510 euros al trimestre o al mes, o puntualizar los ingresos de la misma; aun cuando se rectificaran todos ellos carecerían de la significación suficiente para enmendar la conclusión obtenida. Pues olvida el apelante la condición de interinidad en el trabajo de la demandante, que su situación de paro es eventual, que posee la capacidad profesional necesaria y suficiente para reintegrarse en el mercado laboral, que la contraria desde la perspectiva laboral no es de mejor condición, siendo tan coyuntural la diferencia actual de salarios como coyuntural la situación laboral de ambos, base esta que no permite apreciar un desequilibrio significativo que permita hacer al esposo acreedor de la pensión que reclama. Máxime si se considera que el matrimonio posee dos inmuebles uno lo ocupa la esposa y el otro uno de los hijos. El régimen económico es el de comunidad y no consta acreditado la creación o incremento del patrimonio privativo de ninguno de los cónyuges durante el matrimonio, en detrimento del otro. Tampoco que los recurso de la esposa como ya hemos anunciado le permitan sostener un nivel de vida significativamente superior al del esposo con carácter permanente en el tiempo y en detrimento de la proporción e igualdad que es deseable tras la ruptura del matrimonio, nivel de vida que ha de mantenerse en dicho términos de proporción cuando la especial atención a la familia de uno de ellos durante la convivencia le ha impedido, alcanzar la capacitación persona necesaria y suficiente para mantenerlo por sí solo o en condiciones de igualdad con el otro. Esto último desde luego no ha sido probado.

Como consecuencia el motivo ha de ser desestimado y la sentencia confirmada en este punto.

TERCERO.- Respecto de la hija mayor de edad, se razona resumidamente al respecto en la sentencia:

Que aunque sea mayor de edad sigue conviviendo en domicilio materno, cursando estudios de primero de grado superior de hostelería, lo que genera un gasto mensual de 30 euros, no desempeña actividad laboral alguna, salvo esporádicamente para atender banquetes, bodas comuniones o en fechas navideñas, percibiendo una cantidad equivalente a 85 euros mensuales. Tiene además los gastos propios de alimentación, ropa, móvil, ocio, se trata de una persona madura y responsable, estudiante correcta y capaz de asumir sus responsabilidades y la formación ya sea universitaria o cualquier otra análoga.

Y con ello se afirma que se cumplen los requisitos legales que considerando la suficiencia de los recursos de los padres justifican, de conformidad con los arts. 93.2 y 142 y siguientes del Código Civil, la fijación de la pensión.

A ello se opone la parte apelante alegando el error en la valoración de la prueba centrando sus discrepancias en la mayor o menor exactitud en las afirmaciones sobre los recursos económicos de las partes en este procedimiento y de lo que percibe con carácter eventual la hija. El conjunto de las alegaciones como ya dijimos con anterioridad resultan poco significativas, ante el hecho no controvertido de que ambos cónyuges perciben ingresos que la hija carece de recursos viviendo en compañía de su madre por razón de necesidad, pues carece de trabajo al estar completando su formación, con aprovechamiento normal y que por sus características personales, que se describen (no se discute su capacidad y responsabilidad) es acreedora de la pensión de alimentos, si bien ha de predicarse que en sentido estricto. Pues con tales argumentos podrá discutirse si el importe es proporcionado o no pero no pretender que la demandante no tenga derecho, menos sobre la base de que el padre se ocupa de hecho a atender en solitario a las necesidades de alimentos de otro hijo mayor de edad que posee una vida independiente, en otro domicilio en vivienda propiedad de los ex esposos, pues ello resulta perplejo y perturbador."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 14 de diciembre de 2016. Custodia compartida. Motivación suficiente de custodia individual. Larga convivencia con progenitor custodio. Pensión de alimentos. Alteración sustancial de situación conveniada**

"I.- La sentencia recurrida estima parcialmente la pretensión de la demanda y modifica las medidas económicas convenidas por los cónyuges litigantes, en el sentido de elevar la contribución por el esposo al levantamiento de las cargas familiares de 400 euros a 500 euros. Del mismo modo desestima la demanda de convencional planteada por el demandado que pretendía, por una parte la custodia compartida de la hija menor del matrimonio, y por otra la reducción de la referida contribución a la suma de 200 euros. Frente a dicha pretensión se alza la parte demandante que sustenta su impugnación, en lo que se refiere a la atribución de la custodia compartida, en la doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que la considera como preferente, sin que en el caso enjuiciado la Juzgadora haya justificado cumplidamente las razones para apartarse del criterio legal. Por otra parte, en lo que se refiere a la contribución del levantamiento de las cargas familiares, la parte demandada entiende que no concurren las circunstancias que justifican ni el supuesto aumento de la capacidad económica del recurrente, ni tampoco el aumento en las necesidades de las hijas del matrimonio.

II.- La primera y más fundamental cuestión a debatir en esta alzada es la relativa a la pretensión reconvencional del demandado de que se le otorgue la custodia compartida de la hija menor del matrimonio, Laia. Ciertamente, el punto de partida debe de ser el Art. 80 del Código de Derecho Foral de Aragón, que establece como criterio preferente para la atribución de la guarda y custodia de los hijos menores la custodia compartida, que el Juez adoptará en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, atendiendo, además, a los siguientes factores: la edad de los hijos, su arraigo social y familiar, su opinión, la aptitud y voluntad de los progenitores para asegurar la estabilidad de los hijos, las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres y cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia. La Jurisprudencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sentencias de 1 de Febrero y 18 de Abril de 2012 entre muchas otras) señalan que la custodia compartida por parte de ambos progenitores es el criterio preferente y predeterminado por el legislador, en busca del interés del menor, en orden al desarrollo de la personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia, siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin, limitándose la custodia individual aquellos casos en que los progenitores no están capacitados para ella, *o a que la custodia individual resulta mas conveniente para el menor*, atendiendo a la edad de los hijos, su arraigo social y familiar, su opinión, así como las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres. En el caso enjuiciado, la sentencia recurrida fundamenta su atribución de custodia individual en el hecho de que ha sido la madre la que se ha encargado de la custodia durante todo el tiempo de ruptura matrimonial, en tanto que el padre ha manifestado un desinterés y falta de iniciativa en el contacto con las menores. Igualmente destaca, de acuerdo con el informe psicosocial

emitido en autos, la voluntad de la menor de permanecer bajo la custodia de la madre y los problemas de comunicación el rechazo de la misma con la actual pareja de su padre. Pues bien tal planteamiento debe ser refrendado por este Tribunal. Es cierto que el informe psicosocial constata la aptitud del padre para afrontar la custodia de su hija menor, pero no puede soslayarse que los cónyuges litigantes rompieron la convivencia conyugal en el año 2009, y en aquel momento convinieron que las hijas menores quedaron bajo la custodia de la madre, que se ha mantenido hasta el momento actual sin conflicto alguno, y sólo cuando la esposa ha planteado la modificación de las medidas en orden a obtener una mayor contribución al levantamiento de las cargas familiares, el esposo ha planteado su interés por recuperar la custodia compartida de su hija menor. La custodia compartida como criterio preferente, fue instaurada en Aragón por Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres**.** La Disposición Transitoria Primera de la citada Ley establecía que la solicitud de custodia compartida por uno de los progenitores sería causa de revisión de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas bajo la legislación anterior durante un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, facultad que el demandado no utilizó. En definitiva el demandado ha consentido que durante un largo periodo de tiempo sus hijas menores hayan organizado su convivencia en torno a la figura de la madre, y por tanto no puede pretender alterar ese esquema de convivencia, mantenido en el tiempo y sustituirlo por otro con la única razón de su propio interés, sin que concurran causas o circunstancias relevantes que lo justifiquen, en el sentido del artículo 79.5 del Código de Derecho Foral de Aragón, que en este caso no se aprecian. En consecuencia, la impugnación debe de ser desestimada.

III.- La segunda cuestión controvertida es la relativa a la contribución económica del esposo al levantamiento de las cargas familiares. En este punto hay que destacar que, si bien en la demanda reconvencional el demandado pretendía y argumentaba la reducción de su contribución de 400 euros a 200 euros, en su recurso apelación se limita a combatir la elevación acordada en la sentencia recurrida, sin hacer referencia a su pretendida disminución; por lo que en definitiva la apelación debe entenderse circunscrita a la primera. Dispone el Art. 79.5 del Código de Derecho Foral de Aragón que las medidas aprobadas judicialmente podrán ser modificadas cuando concurran causas o circunstancias relevantes. Por su parte el Art. 142 del C. Civil establece que la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. Pues bien en el caso enjuiciado la prueba practicada con justificado que, mientras que la capacidad económica del demandado ha aumentado, al menos aparentemente, la de la esposa ha disminuido. Así lo que al esposo se refiere, de percibir una prestación del por desempleo, ya agotada a pasado a regentar un negocio de video club y venta de chucherías, para lo cual ha obtenido un préstamo de 45.000 euros. Consta igualmente que ha sido contratado como montador percibiendo retribuciones que oscilan entre los 1900 y 2300 euros, generando con ello una prestación por desempleo, con una base reguladora de 70. 90 euros, y consta que efectúa e igualmente trabajos esporádicos como comisario en la entidad Motorland. Por su parte respecto de la esposa no se conocen otros ingresos que una renta inserción que supuestamente finalizó en Octubre de 2016 y han aumentado sus gastos ya que la hija mayor se encuentra en disposición de iniciar

estudios superiores, con el consiguiente aumento de los mismos. Consta asimismo que la actora ha percibido ayudas sociales por parte de Caritas Diocesana y de la Cruz Roja con el fin de atender a necesidades básicas. Así las cosas entiende la Sala que efectivamente han existido una alteración sustancial de las circunstancias respecto a las contempladas en los convenios suscritos con los litigantes que han devenido en un empeoramiento de la situación de la actora y, cuando menos, una aparente mejora de la situación del esposo, por lo que la elevación acordada en la sentencia recurrida resulta ajustada a derecho. En consecuencia procede desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución recurrida."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 19 de diciembre de 2016. Custodia compartida. Atribución a un progenitor de forma exclusiva. Pensión alimenticia. Precariedad económica del alimentante**

"PRIMERO. Frente a la sentencia de instancia que determina las medidas definitivas de carácter paterno filial de los progenitores doña R y don J respecto al hijo común, , nacido el de 2013, y que se han hecho constar en el primer antecedente de hecho de la presente resolución, se alza ahora la Sra. P impugnando los pronunciamientos de la misma.

SEGUNDO. Alega la apelante Sra. P que la atribución de la guarda y custodia al padre infringe lo dispuesto en el artículo 80 del Código de Derecho Foral de Aragón porque más que otorgársela al padre se concede en favor de su actual pareja; porque ha sido siempre ella la que ha cuidado del hijo, habiéndose desentendido el padre desde la ruptura de la pareja; porque el informe psicosocial no habla en ningún momento de que en la actualidad se encuentre el menor mal atendido por la madre y únicamente refiere situaciones de riesgo acaecidas en el pasado por unos incidentes que ya están solucionados; que la causa de dichos incidentes fue la depresión en la que cayó tras la ruptura pero que ya ha superado rehaciendo su vida con otra pareja y manteniendo una excelente relación con su madre y la pareja de ésta. Añade que no se ha acreditado que el cuidado y atención que le presta al hijo no sea el adecuado.

Sin embargo, las razones que da la apelante en apoyo de su pretensión no logran desvirtuar los argumentos esgrimidos por la Juzgadora de instancia que le han llevado a atribuir la guarda y custodia del menor al padre, como el hecho de que el entorno materno ha colocado al menor en condiciones potencialmente peligrosas, no ofreciendo al menor la protección adecuada. Circunstancias que no se refieren a situaciones aisladas ya superadas, sino que han sido constantes en el tiempo, y se mantienen en el momento presente pues la Sra. P sigue presentando inmadurez, un carácter agresivo, irresponsabilidad e inestabilidad en diferentes aspectos de la vida, lo que sin duda afecta al cuidado del menor, sin contar tampoco con una red familiar de apoyo y control porque ha trasladado su domicilio a otra localidad y porque la red de soporte materno para el cuidado del menor es dudosa por los episodios de violencia física y verbal intensa vividos entre sus miembros en presencia del niño, y por el consumo por estos de sustancias estupefacientes. No puede desconocerse así mismo que la madre ha obstaculizado la relación del padre con el hijo, permitiendo a su antojo las visitas entre ambos no separando el conflicto entre los adultos de la relación paterno-filial.

Por otra parte, aun cuando niega la apelante la capacidad del padre para asumir la guarda y custodia del hijo e invoca que ni siquiera el equipo psicosocial ha podido valorar el tipo de cuidado que ha dado al menor porque nunca lo ha cuidado en solitario, es lo cierto que de los resultados de los "Test CUIDA" que se le realizaron, las profesionales que forman dicho equipo llegaron a la conclusión de que el padre cuenta con suficientes habilidades y oportunas características para brindar un cuidado adecuado al menor. De ahí que tanto la psicóloga como la trabajadora social del Instituto de Medicina Legal, Subdelegación de Teruel, recomiendan en el informe por ellas elaborado la guarda y

custodia paterna con un régimen de visitas del menor en la forma establecida en la sentencia de instancia.

Por todo ello ser rechazado este punto del recurso y confirmada dicha resolución en cuanto a la guardia y custodia se refiere.

TERCERO. Para el caso de confirmarse en esta alzada el pronunciamiento relativo a la guarda y custodia en favor del padre, interesa la Sra. P que se suprima la pensión de alimentos fijada por la Juzgadora a quo en la suma de 75 € mensuales, alegando falta de capacidad económica por percibir solamente la suma de 400 € mensuales en concepto de ayuda como víctima de malos tratos que finalizará el 8 de marzo de 2017.

Realmente la situación económica de la madre no le permite satisfacer al padre una pensión de alimentos a favor del hijo común, considerando que contribuye a los gastos del menor asumiendo los que tengan lugar durante el tiempo que lo tenga en su compañía y la mitad de los extraordinarios. Por lo que debe ser estimado en este punto el recurso formulado.

CUARTO. Finalmente, interesa la apelante que se haga un pronunciamiento expreso en relación con las entregas y recogidas del menor, en el sentido de mantener el régimen que se está llevando en la actualidad, es decir, que tengan lugar en el domicilio materno. Petición que debe ser estimada al hallarse la madre en una situación económica tan precaria que, en caso contrario, se le podría estar privando al menor de convivir con su madre los días fijados, al no poder desplazarse ésta a la localidad valenciana donde reside el progenitor, tal como alega la Sra. P en su recurso."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 20 de diciembre de 2016. Uso del domicilio familiar. Interés de los menores. Límitación temporal**

"PRIMERO.- Contra la Sentencia de instancia se alza Dª. Mª, suplicando su revocación parcial y se declare que no procede la extinción del uso de la vivienda familiar ni su venta inmediata, ni desalojo, o, subsidiariamente, se limite el uso concedido hasta que el hijo menor, E, alcance la mayoría de edad.

El Ministerio Fiscal impugna la Sentencia solicitando se limite el uso hasta que el hijo menor del matrimonio alcance la mayoría de edad.

SEGUNDO.- Alega, de modo sustancial la recurrente, como ya hizo en su escrito de contestación a la demanda, que no ha existido modificación de las circunstancias existentes con anterioridad, suponiendo la extinción del uso de la vivienda familiar un perjuicio para los dos hijos menores, no abonando el actor ningún gasto derivado de la titularidad de la misma, habiendo mejorado también la situación de este último, que ha contraído nuevo matrimonio.

El demandante presentó, el 19 de febrero de 2016, demanda de modificación de medidas, solicitando la extinción del uso de la vivienda familiar otorgado a madre e hijos en anterior proceso de divorcio, o la fijación, con carácter subsidiario, de una indemnización mensual a su favor, y la reducción de la pensión alimenticia a 400,- € mensuales, alegando el cambio sustancial que ha comportado para la economía de la Sra. G el matrimonio por ella contraído en agosto de 2015, que supone para él "una grave injusticia material", al constituir una afrenta humillante tolerar esa convivencia mientras él se ve obligado a vivir de alquiler, y además pagar los gastos que genera la propiedad de dicha vivienda.

En la Sentencia de divorcio de 14-03-2013, los cónyuges pactaron "la atribución a madre e hijos del uso del domicilio familiar, y que el mismo se liquidaría a la independencia de los dos menores, salvo acuerdo futuro entre los cónyuges", tras entrar en vigor la Ley 2/2010, de 26 de mayo.

El 4 de marzo de 2015, once meses antes de la presentación de esta demanda, se dictó Sentencia en proceso de modificación de medidas Nº. 507/14, seguido a instancia del Sr. C, en el que las partes alcanzaron un acuerdo sobre la pensión alimenticia y régimen de visitas, desistiendo el mismo de la custodia compartida que solicitaba (Doc. Nº. 3 de la demanda).

En este pleito se puso de manifiesto oficialmente, a través del informe psicológico en él practicado, que la Sra. G residía ya entonces con su actual esposo en el domicilio familiar con los hijos. Siendo imposible que desconociera el actor tal circunstancia, que, necesariamente, debieron comunicarle sus hijos, a los que veía y ve habitualmente (folios 131 y ss. de las actuaciones), pese a lo cual ninguna petición formuló en él sobre extinción de uso de la vivienda familiar, a sabiendas de la convivencia existente ya en dicho pleito.

Por consiguiente, es claro, que sólo el matrimonio celebrado por la demandada puede entenderse como nueva circunstancia ahora concurrente, debiendo valorarse también, el nuevo matrimonio contraído por el actor, que, en la misma medida, debe suponer un reparto de los gastos y obligaciones que sobre él pesan, teniéndose en cuenta que el mismo no abona, como así reconoce, ninguno de los gastos que genera la propiedad de la vivienda familiar, que asume en exclusiva la demandada, junto con el cuidado diario de los dos hijos, que desarrollan su vida, de forma habitual y cotidiana en dicho domicilio, al ostentar la madre su custodia individual.

TERCERO.- Siendo como anteceden los hechos concurrentes, debe partirse de la regulación del Artº. 81 del Código de Derecho Foral de Aragón.

Conforme a su párrafo tercero, es clara la limitación temporal que del uso de la vivienda familiar establece la Ley.

El interés de los hijos es el único, en este caso a contemplar, por encima del de cada uno de los progenitores, ninguno de los cuales ha solicitado en este proceso la venta de la vivienda familiar.

Consecuentemente, en atención a los hechos concurrentes, a los pactos establecidos en su día, ratificados judicialmente, y al interés de los hijos menores, procede mantener a éstos y a la madre en el uso de la vivienda familiar hasta que se proceda a su efectiva liquidación, sentido en que se revoca la Sentencia, con eliminación de todos los pronunciamientos referentes a su venta."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 21 de diciembre de 2016. Régimen de visitas. Progenitores residentes en diferentes países. Supervisión**

"PRIMERO.- Resultan acreditados en las instancias los siguientes hechos, relevantes para la resolución del recurso de casación:

1.- D. Daniel T. B., de nacionalidad española, y D.ª Inga L., ciudadana rumana, mantuvieron una relación sentimental fruto de la cual nació una hija en Zaragoza, el 2014, llamada D

2.- En fecha no determinada, pero dentro del año 2014, se produjo la ruptura de dicha relación. D. Daniel se trasladó a Inglaterra por razones laborales, pasando a ejercer su profesión de ingeniero en la localidad de Haverhill (Inglaterra), donde vive y trabaja.

3.- Al tiempo de presentarse la demanda en solicitud de guarda y custodia y alimentos (noviembre de 2014) D.ª Inga mantenía su domicilio en Zaragoza, ciudad en la que residía con su hija. En la demanda interpuesta, D. Daniel solicitó que la guarda y custodia de la hija fuera atribuida a la madre, siendo la autoridad familiar compartida por ambos progenitores, y solicitaba que mientras él resida en Inglaterra se estableciera un régimen de visitas y periodos de vacaciones en los términos que constan en el suplico de la demanda, interesando también el cierre de fronteras con la finalidad de que la hija común no pudiera ser sacada de España sin la autorización escrita de ambos progenitores o, en su defecto, sin autorización judicial. En su contestación D.ª Inga se mostró conforme con la atribución de la guarda y custodia de la menor D, pero instó la posibilidad de fijar su residencia junto a la menor en cualquiera país de la Comunidad Europea, además de que las visitas a favor del padre se hagan en un medio controlado por una tercera persona que salvaguarde la integridad de la menor en todo momento.

4.- La sentencia del juzgado de primera instancia, tras analizar detalladamente las circunstancias concurrentes y, de modo especial, la prueba practicada respecto al estado de salud psíquica de D. Daniel, concluyó considerando que de ninguno de los informes se desprende el padecimiento de una seria y/o grave patología o una importante alteración que le sea invalidante para atender sus obligaciones paterno filiales en relación a la hija, concluyó decidiendo atribuir la guarda y custodia de la hija común a la madre Sra. L., con mantenimiento de la autoridad familiar compartida, confirmando igualmente el régimen de visitas y comunicaciones, con entregas y recogidas en el punto de encuentro familiar de Zaragoza (PEFZ), establecido en autos de 30 de marzo y 30 de abril de 2015, y fijó un régimen en cuanto a las vacaciones del año 2016 y posteriores.

5.- Recurrida dicha sentencia por ambas partes, la Audiencia Provincial dictó su fallo en el que, estimando parcialmente los recursos de apelación deducidos, revocó en parte la sentencia impugnada y decidió: autorizar el traslado a Bélgica de D.ª Inga L. y D; señalar en Bruselas las visitas de fines de semana desde el sábado a las 10 horas al domingo a las 20 horas y días intersemanales, con pernocta si tienen lugar bajo la supervisión de los abuelos y sin pernocta en otro caso; y mantener la supervisión de las

visitas padre/hija, ya por los abuelos paternos, en España en períodos vacacionales o en Bruselas si coincidiesen con las estancias de los mismos en ese ciudad, ya por persona de su confianza que la Sra. L. designe o por establecimiento cuyo nombramiento promueva en su actual país de residencia.

6.- Dicha sentencia fue objeto de aclaración, a instancia del demandante Sr. T., por auto de 12 de mayo de 2016, en el sentido de que los informes médicos requeridos deberán ser expedidos por psiquiatra y de que la recogida y entrega de la niña tendrá lugar en el domicilio de la madre en Bélgica.

7.- La sentencia de la Audiencia Provincial, aclarada en su fallo en los términos expuestos, es objeto de recurso de casación y extraordinario por infracción procesal interpuesto por D. Daniel, que se funda en los motivos reseñados en los antecedentes de hecho.

Admitido el recurso por todos ellos, la Sala debe examinar primeramente los motivos de infracción procesal conforme a la regla sexta de la Disposición Final 16ª.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, el motivo de casación por infracción de preceptos legales sustantivos.

Recurso extraordinario por infracción procesal. Examen del primer motivo

SEGUNDO.- El primer motivo de recurso extraordinario por infracción procesal se funda en la infracción de las normas procesales reguladores de la sentencia, en relación con los artículos 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 214 y 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunciando la modificación del fallo de la sentencia de 4 de mayo de 2016 operada mediante lo resuelto en el auto de aclaración de 12 de mayo siguiente. Explica el recurrente que el auto aclaratorio supone una variación del fallo, dado que no es lo mismo Bruselas que Bélgica, y al resolver que la entrega y recogida de la niña será en Bélgica está afectando a los periodos vacacionales que están establecidos en España, sin que se hubiera solicitado cambio sobre dicha situación por ninguna de las partes. Así, entiende el recurrente que el auto aclaratorio introduce *ex novo* un pronunciamiento que supone dos variaciones sustanciales: el de fines de semana y días intersemanales, que pasa de ser en Bruselas a ser en Bélgica en general, y de ser en Zaragoza para los periodos vacacionales para tener que realizarse en Bélgica, explicando que la madre reside en la población de Braine le Comte, situada a 40 kilómetros de Bruselas. También impugna que el auto aclaratorio haya exigido que el informe médico bimensual sea de un médico psiquiatra, lo que supone una alteración importante de la sentencia, conculca el artículo 267.1 del Ley de Enjuiciamiento Civil (en realidad debe referirse a la Ley Orgánica del Poder Judicial) y ocasiona indefensión a su representado.

TERCERO.- El motivo por infracción procesal ha de ser estimado. Es de considerar que, dictada sentencia por la Audiencia Provincial, la representación de la parte actora solicitó su aclaración, como también lo hizo la demandada, y este fue el trámite seguido por la Audiencia, tras el cual dictó el auto que ha sido mencionado. No se utilizó el

procedimiento para complemento de la sentencia, permitido en la legislación procesal vigente y regulado en el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En estos términos, la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico para aclarar las sentencias únicamente contempla el esclarecimiento de algún concepto oscuro o la rectificación de errores materiales o aritméticos, pero sin alterar el fallo dictado.

En el caso de autos la sentencia había señalado en Bruselas las visitas de fines de semana, mientras que el auto de aclaración decide que las entregas y recogidas de la niña tengan lugar en el domicilio de la madre en Bélgica, que no se encuentra en la capital. Esto significa cambiar el contenido del fallo y, dados los términos generales en que se produce el auto de aclaración, ampliar el objeto de dicha entrega y recogida a todo el régimen de visitas.

La estimación del motivo afecta únicamente al régimen de visitas. Respecto al informe médico bimensual, la sentencia de la Audiencia Provincial únicamente decidía mantenerlo, para establecer además la supervisión de las visitas en los términos recogidos en el fallo. Por ello la concreción que se produce en este punto, a instancia de la parte demandada, no excede de la posibilidad de aclaración de las sentencias al afirmar que dichos informes deberán ser expedidos por psiquiatra.

Recurso extraordinario por infracción procesal. Examen del segundo motivo

CUARTO.- El segundo motivo denuncia la infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en concreto lo dispuesto en el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al entender la parte recurrente que la sentencia incurre en falta de motivación respecto a la valoración de las pruebas relativas a la afectación psíquica que sufre el Sr. T.. En el desarrollo del motivo refiere que, si bien la sentencia expone cuales son los informes psicológicos y psiquiátricos obrantes en autos, no existe razonamiento alguno sobre la valoración de tales pruebas, de manera que se desconocen las razones que han llevado a la convicción de la Sala a revocar en este punto la de primera instancia, de manera muy perjudicial para su representado.

La sentencia impugnada, al abordar el tema de la supervisión de las visitas que podrá tener el Sr. T. con su hija, expresa que en autos hay cinco informes, describiendo los resultados de los realizados . Tras esta narración detallada, entiende el tribunal provincial que "hoy por hoy no existen garantías suficientes sobre la situación psíquica del apelante, por lo que procede mantener la supervisión de las visitas", para a continuación determinar la forma en que dicha supervisión tendrá lugar.

La motivación de las decisiones judiciales viene exigida legalmente en el artículo 218.2 de Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual ordena que "*Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito,*

considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón", como forma de exteriorizar las razones que justifican la decisión adoptada, de forma que las partes puedan conocerlas, y de este modo resulte posible articular el recurso que las leyes procesales previenen, además de evitar la arbitrariedad en la resolución.

Pero el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han mantenido reiteradamente que no es precisa una motivación amplia y exhaustiva, sino que se cumple la exigencia constitucional y legal mediante una motivación que sirva a los efectos antes expresados. Como indica la STS de 22 de abril de 2013, (Id Cendoj: 28079110012013100308), con razonamientos que son trasladables al caso de autos, "*La sentencia recurrida cumple el deber de motivación, pues en ella se exponen los elementos y razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios fácticos y jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 196/2003, de 27 de octubre, y 218/2006, de 3 de julio; SSTS de 17 noviembre de 2006 y 1 de diciembre de 2006, entre otras), se hace de forma comprensible y, como acto de aplicación del Derecho, permite su control jurisdiccional por medio del sistema de recursos (STS de 31 de enero de 2007, RC núm. 937/2000).* Y añade el Tribunal Supremo: "*La desestimación implícita de los argumentos del demandante no implica falta de motivación, pues el juicio de suficiencia de la motivación hay que realizarlo (SSTC 66/2009, de 9 de marzo y 114/2009, de 14 de mayo) atendiendo no solo al contenido de la resolución judicial considerada en sí misma, sino también dentro del contexto global del proceso, valorando las circunstancias concurrentes que singularicen el caso concreto, tanto las que estén presentes, explícita o implícitamente en la resolución recurrida, como las que no estándolo, constan en el proceso (STS de 9 de marzo de 2010, RIPC núm. 2460/2005)".*

En el caso de autos, la descripción de los resultados de los informes emitidos en el proceso pone de relieve que, frente a los informes psicológicos, existen otros realizados por psiquiatras de los que se desprende una personalidad de carácter antisocial, narcisista y obsesiva, inmadura y disfuncional, y la conclusión a la que llega el tribunal no es expresar que D. Daniel padece una enfermedad psíquica sino que, no existiendo garantías suficientes sobre su situación, procede mantener la supervisión de las visitas, decisión que adopta en interés de la menor, y que resulta suficientemente motivada.

Por ello el motivo de recurso ha de ser desestimado.

Recurso extraordinario por infracción procesal. Examen del tercer motivo

QUINTO.- En el tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se denuncia que la sentencia recurrida ha realizado una valoración irracional de la prueba practicada en la instancia, con infracción de lo dispuesto en el artículo 218.2 de Ley de Enjuiciamiento Civil. En apoyo del recurso sostiene el recurrente que el Sr. T. no está diagnosticado de ninguna psicopatología y que, en consecuencia, la supervisión de las visitas supone un doble control que no está justificado por la prueba practicada.

El motivo se desestima, por las siguientes razones: a) es sabido que la valoración de la prueba es función que corresponde a los tribunales de instancia, ya que la misma se ha practicado ante ellos, conforme a los principios de oralidad e inmediación, y no puede ser revisada en sede de recursos extraordinarios; b) únicamente resulta posible considerar dicha valoración cuando, a la vista de los fundamentos de derecho expresados en la sentencia, pueda concluirse que se ha llevado a cabo de forma absurda, arbitraria o ilógica –STS de 19 de octubre de 2010, nº 652/2010 y de 21 de septiembre de 2016, nº 554/2016, entre muchas otras; c) en el caso de autos lo que el recurrente sustenta es un punto de partida distinto a aquél que ha mantenido la Audiencia Provincial, ya que parte de que el Sr. T. no está diagnosticado de ninguna psicopatología, frente a los dictámenes de los psiquiatras antes mencionados.

En definitiva, trata el recurrente de sustituir su criterio valorativo por el imparcial del tribunal de segunda instancia, lo que no es admisible en el examen de un recurso extraordinario por infracción procesal.

Recurso extraordinario por infracción procesal. Examen del cuarto motivo

SEXTO.- El cuarto motivo de recurso extraordinario por infracción procesal es introducido por la misma vía, pero referido a la existencia de error palmario en cuanto a los lugares de residencia de los litigantes, pues ni el Sr. T. reside en Londres ni la Sra. L. reside en Bruselas. De este error estima el recurrente que dimana la decisión acerca del lugar en el que se ha de llevar a efecto las visitas, y entiende que el acuerdo sobre visitas de días intersemanales es, desde las condiciones fácticas realmente existentes, una quimera.

La sentencia recurrida no dice expresamente que los lugares de residencia de ambos progenitores sean los indicados, pero parte de ese dato para adoptar su decisión. Así, en el fundamento de derecho segundo indica que "es claro que, ya producida la ruptura entre ambos, no cabe confrontar el derecho de la madre ni con el arraigo de una niña de año y medio en Zaragoza ni con los derechos de los abuelos paternos, sin que padezcan las visitas del padre, ni en Bruselas, dada la fácil, frecuente y rápida comunicación con Londres, ni en Zaragoza en los periodos vacacionales". Por ello en el fallo, tras autorizar el traslado a Bélgica de D.ª Inga, señala en Bruselas las visitas de fin de semana y mantiene la supervisión de las mismas en dicha ciudad. El auto de aclaración expresa que la recogida y entrega de la niña tendrá lugar en el domicilio de la madre en Bélgica.

La STS de 21 de septiembre de 2016 ya enunciada, tras apoyarse en otras anteriores del mismo tribunal, indica que "*concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración*".

Esta circunstancia se produce en el caso de autos. La decisión ha incurrido en error notorio en cuanto a los lugares en que tienen su residencia ambos progenitores litigantes y, a partir de dicha consideración, ha adoptado las decisiones sin tener en cuenta las

distancias existentes entre las localidades en que cada uno de ellos reside y las capitales de los respectivos estados.

Por ello el motivo se estima.

Consecuencia de la estimación de motivos de recurso por infracción procesal

SÉPTIMO.- La estimación de dos de los motivos de recurso extraordinario por infracción procesal no conduce, sin embargo, a la devolución del proceso a la Audiencia Provincial para que dicte nueva sentencia, como insta la parte recurrente. La Disposición Final Décimo Sexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil previene a estos efectos en su apartado 1, regla 7ª, que "*Cuando se hubiese recurrido la sentencia por infracción procesal al amparo del motivo 2º del apartado primero del artículo 469, la Sala, de estimar el recurso por ese motivo, dictará nueva sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso de casación*".

Conforme a dicho precepto la Sala habrá de entrar a considerar el recurso de casación partiendo de los hechos acreditados en las instancias y de las decisiones adoptadas estimando los motivos de infracción procesal, por lo que seguidamente hemos de entrar a considerar el motivo único de recurso de casación.

Recurso de casación. Determinación de la legislación aplicable

OCTAVO.- Aunque no ha sido cuestionado por ninguna de las partes y ambas sentencias han aplicado el Derecho aragonés, es pertinente plantear la cuestión del ordenamiento jurídico aplicable al caso porque en este concurre un elemento de extranjería en cuanto consta acreditado que la menor es hija de padre español y madre rumana.

La parte actora apoyo su demanda en lo dispuesto en el artículo 142 del Código Civil y 80 y 82 del Código de Derecho foral aragonés. La demandada en su contestación se mostró conforme con la fundamentación jurídica invocada en la demanda.

En este caso es de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.4 segundo párrafo del Código civil a cuyo tenor "*La ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o por adopción, y al ejercicio de la responsabilidad parental, se determinará con arreglo al Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños*". Porque lo relevante para la decisión del litigio no es la existencia de una relación de pareja a la que se refiere la sentencia de primera instancia, sino el ejercicio de la responsabilidad parental relativa a la hija común por parte de ambos progenitores, y en concreto en orden al derecho de visitas y de relación que corresponde al padre respecto de la menor, cuya guarda y custodia ha sido atribuida a la madre y la ejerce en país extranjero.

El Convenio citado, del que tanto el Reino de España como Bélgica son parte, previene en su art. 15.1 la aplicación de la *lex fori*: *"En el ejercicio de la competencia atribuida por las disposiciones del Capítulo II, las autoridades de los Estados contratantes aplican su propia ley"*.

La menor es de nacionalidad española, conforme al artículo 17.1 a) del Código civil. En este caso la aplicación de la ley nacional española al caso debe llevar a la legislación aragonesa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 47.1 y 4 del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, al tratarse de una niña nacida en Zaragoza, cuyo primer domicilio lo fue en esta ciudad, de modo que se mantiene un vínculo estrecho con el territorio de Aragón y, por tanto, con su ordenamiento jurídico.

Ello no impedirá que, en su caso, pueda aplicarse en la ejecución el ordenamiento jurídico del Estado en que reside actualmente, pues conforme al apartado 3 del art. 15 del Convenio, "*En caso de cambio de la residencia habitual del niño a otro Estado contratante, la ley de este otro Estado rige las condiciones de aplicación de las medidas adoptadas en el Estado de la anterior residencia habitual a partir del momento en que se produce la modificación*". Aunque es de significar que en este proceso no se ha aportado el derecho de Bélgica que podría ser de aplicación ni ninguna de las partes lo ha reclamado.

Examen del motivo único

NOVENO.- Dicho motivo se articula, con apoyo procesal en el artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 3.1 de la Ley de Casación Foral aragonesa, por infracción de apartado 2 del artículo 60 y del artículo 76.3 del CDFA. Tras indicar el contenido de la autoridad familiar, que comprende como derecho-deber el de tener al hijo o hija en compañía, y que tras la ruptura de la pareja se respetará el derecho de los hijos a tener contacto directo con ambos progenitores, estima la parte recurrente en el desarrollo impugnativo que la sentencia de apelación, inexplicablemente, permite a la madre decidir a su arbitrio cuando hay pernocta y cuando no la hay, y que la designación de persona de su confianza para la supervisión de las visitas supone de facto denegar al padre el derecho-deber de estar con su hija y tenerla en su compañía.

El art. 60 del CDFA previene que "*1. El hijo tiene derecho a relacionarse con ambos padres, aunque vivan separados, así como con sus abuelos y otros parientes y allegados, salvo si, excepcionalmente, el interés del menor lo desaconseja.*

2. Los padres y guardadores no podrán impedir la relación personal del hijo con ninguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, salvo cuando el interés del menor lo exija.

3. El Juez, a petición del menor, padres, abuelos, parientes o allegados, y atendidas las circunstancias, podrá suspender, modificar o denegar la relación con el menor si su interés lo requiere. También puede adoptar las medidas necesarias con vistas a la efectividad de esta relación personal, especialmente cuando los padres vivan separados".

Por su parte el art. 76 del CDFA, bajo la rúbrica de "derechos y principios" establece en su apartado 3: "*En las relaciones familiares derivadas de la ruptura de la convivencia de los padres se respetarán los siguientes derechos:*

a) Los hijos menores de edad tendrán derecho a un contacto directo con sus padres de modo regular y a que ambos participen en la toma de decisiones que afecten a sus intereses como consecuencia del ejercicio de la autoridad familiar.

b) Los padres, respecto de sus hijos menores de edad, tienen derecho a la igualdad en sus relaciones familiares".

A la vista de la decisión adoptada en la sentencia y de las alegaciones de las partes, especialmente de los argumentos impugnativos del recurrente, el recurso ha de ser acogido, en la medida y con las precisiones que se dirán.

A tal efecto es de considerar:

A) La sentencia en su parte dispositiva mantiene la supervisión de las visitas padre / hija, ya por los abuelos paternos, en España en periodos vacacionales o en Bruselas si coincidiesen con las estancias de los mismos en esa Ciudad, ya por persona de su confianza que la Sra. L. designe o por establecimiento cuyo nombramiento promueva en su actual país de residencia.

B) La medida de supervisión de las visitas no vulnera el contenido normativo de los preceptos cuya infracción se denuncia, por cuanto en interés de la menor y a la vista de las circunstancias psíquicas que concurren en Don Daniel, y cuya valoración se ha realizado correctamente por la Audiencia, es posible establecer cautelas para asegurar que esas visitas tendrán lugar siempre en beneficio de la menor.

C) Tampoco es contrario a derecho ordenar que dicha supervisión pueda ser realizada por establecimiento cuyo nombramiento promueva en su actual país de residencia, Bélgica, lo que se fijará en ejecución de sentencia y por acuerdo de las partes, si a él llegasen, o en su defecto conforme a lo que es ha expresado en el último párrafo del fundamento anterior, es decir, acudiendo al derecho del Estado en que la menor reside con su madre.

D) Contraviene las disposiciones mencionadas el hecho de que pueda la madre decidir la persona de su confianza. En la medida en que la confianza es subjetiva y la decisión depende de forma omnímoda a la madre, los términos en que se expresa el fallo permiten que Doña Inga decida si existe o no, en cada momento, una persona de su confianza para que se lleve a efecto el régimen de visitas, lo que incluso puede dar lugar a la imposibilidad de ejercicio del derecho de visitas, y por consiguiente de la normal relación que la menor puede tener con su padre, lo que vulnera los preceptos del CDFA contenidos en el art. 60.2 y 76.3 a). El cumplimiento de los deberes no puede quedar al arbitrio de una de las partes, en este caso la que aparece como deudora u obligada a realizar actos que hagan posible el ejercicio del derecho de relación que en la sentencia se ha reconocido.

En este punto, por tanto, el recurso de casación es estimado. “

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 23 de diciembre de 2016. Custodia compartida. Falta de prueba de alienación parental**

"PRIMERO.- Contra la Sentencia de instancia de 13 de abril de 2016, se alza Dª Y, suplicando su revocación y la íntegra desestimación de la demanda formulada por D. F, con fundamento en infracción de los arts. 80-6 del C.D.F.A. y 24-2 de la Constitución Española y de los derechos de las dos hijas menores, que se han visto conculcados con la medidas en ella adoptadas.

El actor formula impugnación de la Sentencia, solicitando se declare extinguido el uso del domicilio familiar establecido a favor de la Sra. B así como el derecho a hacer suyas las rentas (alquiler de la plaza de garaje).

SEGUNDO.- La Sentencia de instancia resuelve, tras haberse dictado contra la demandada Auto de apertura de Juicio Oral por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Zaragoza por querella interpuesta contra ella por el actor, por delito de menoscabo y maltrato psicológico en el ámbito familiar, que no puede la misma seguir ostentando la custodia de las hijas, y, provisionalmente, hasta que recaiga Sentencia en el proceso penal, obliga al I.A.S.S. a asumir la guarda de la hija P, atribuyendo al padre la custodia de I desde el 6 de mayo de la presente anualidad.

La recurrente ha puesto en conocimiento del Juzgado y de esta Sala el dictado de la Sentencia absolutoria y recaía en el proceso penal, el 19 de mayo de 2016, y la declaración de su firmeza por Auto dictado por el Juzgado de lo Penal nº 9 de Zaragoza el 22 de Julio de 2016. Es por ello evidente que las razones de adopción de las medidas establecidas en la Sentencia recurrida, por aplicación del art. 80-6 C.D.F.A., han desaparecido por completo, resultando lógica, dado que expresamente se instauraron en ella con carácter provisional hasta el dictado de la Sentencia penal, su automática revocación, y en atención a que no se establecieron las mismas en exclusivo interés de las menores y por los motivos invocados en la demanda.

Sin embargo, esta Sala en atención a la trascendencia de los hechos alegados por el actor en su demanda, a las nuevas intervenciones de profesionales llevadas a cabo con motivo de la iniciación de este proceso, y a la protección del interés de las hijas menores, debe entrar a conocer de las pretensiones de ambas partes deducidas en el pleito.

TERCERO.- El actor, alegando que la madre ha envenenado la voluntad de las hijas, sometiéndolas a un estado de alienación parental, solicitó en su demanda, fechada el 16-10-2014, se le otorgase la custodia individual de las dos hijas, sin visitas para la madre,o, subsidiariamente, la de I, y a la D.G.A. la de P, hasta que esta última recuperase la relación con su padre.

No se ha practicado en el proceso prueba determinante que acredite los hechos invocados por el demandante en su demanda, ni éstos responden a la realidad existente.

Tras el proceso de divorcio (sentencia de 5-10-2007), el actor ha promovido tres procesos civiles más en que se han ventilado las mismas pretensiones aquí planteadas, y un proceso penal contra la demandada.

Desde las fechas del divorcio, la hija P, nacida el 2001, ha mantenido un frontal rechazo al contacto con su padre, no así la otra hija, I, nacida el 6-10-2006, que mantiene un regular contacto con su padre, sin incidencias destacables.

La Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 9 de Zaragoza, analiza de forma exhaustiva y detallada, los diferentes informes psicológicos y sociales practicados a los implicados, concluyendo, a la vista de los mismos, que Dª Y no ha causado a la hija P menoscabo psíquico alguno, ni la ha sometido a trato degradante o maltrato psíquico (folio 382 y siguientes de las actuaciones).

Esta Sala ya señaló en Sentencia de 13-3-2013, en el primer proceso de modificación de medidas, que las pretensiones de custodia del padre y del Servicio de Menores de la D.G.A. eran inatendibles, y sólo entrañarían auténticos perjuicios para las menores, reseñando que el propio padre había contribuido con su actitud y comportamiento al enquistamiento del conflicto con P.

En el presente pleito se ha emitido informe psicológico el 14-9-2015 (folio 241 y ss.), que desaconseja adoptar las medidas solicitadas por el padre, recomendando el mantenimiento de la custodia de las hijas a favor de la madre y una ampliación de las visitas entre el padre e I.

El informe del I.A.S.S. emitido de 4-12-14, concluye que P está bien adaptada en todas las áreas de su vida, es una niña madura y responsable, presentando alta insatisfacción con el ambiente familiar por la conflictividad de sus progenitores, no detectándose en ella muestras de daño emocional, recomendando al padre no apartar a la menor de su entorno materno.

El informe del IMLA de 7-5-2015 (f. 201 y ss.) señala que P no presenta cuadro clínico alguno, ni afectación emocional de ningún tipo.

En esta alzada se ha aportado informe del I.A.S.S., fechado el 26 de mayo de 2016 (f. 427 y ss.), en el que los técnicos valoran que el interés superior de P pasa por no separarla de la madre y no formalizar su acogimiento, pues su ingreso en un Centro de Protección le provocaría un real perjuicio, y porque su malestar no puede achacarse a un solo progenitor, recomendando continuar con su seguimiento educativo e intervención terapéutica.

Tales informes y conclusiones desaconsejan las medidas interesadas por el padre respecto de ambas hijas, cuya vida se desarrolla, desde 2007, en el entorno materno con normalidad y correcta adaptación, lo que evidencia la inconsistencia y, como se dijo, falta de razonabilidad, de las pretensiones del actor, máxime, cuando las intervenciones de profesionales llevadas a cabo en los diferentes procesos seguidos, no han permitido

normalizar la relación entre P y su padre, voluntad la de esta última que debe respetarse en atención a su edad, 15 años, y capacidad.

Consiguientemente, y en interés de las dos hijas menores, debe desestimarse la demanda formulada por D.F en su integridad, con rechazo expreso de las peticiones de extinción del uso de la vivienda familiar y de percepción de los alquileres del garaje, por no existir justificación para dicha modificación, máxime cuando el mismo las hace depender de la atribución al mismo de la custodia de las hijas, la que no se ha estimado en el proceso.

Se mantiene, por tanto, la custodia de las hijas a favor de la madre, se mantiene también el régimen de visitas entre I y el padre establecido en Autos de Jurisdicción Voluntaria nº 80/14, sin fijación de visitas para con P, que podrá relacionarse con su padre cuando y como libremente convenga, y se mantienen las medidas económicas, y sobre el uso de la vivienda familiar y percepción de alquiler de garaje, estipuladas en anterior pleito de modificación de medidas.

Visto el informe del I.A.S.S de 26-5-2016, se mantiene, por el tiempo que dicho Organismo considere procedente, y, en beneficio exclusivo de P, la continuidad del seguimiento educativoo e intervención terapéutica de dicha menor."

65. TUTELA, ADOPCIÓN Y JUNTA DE PARIENTES

*** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 3 de febrero de 2016. Privación de autoridad familiar. Grave y reiterado incumplimiento de deberes paterno-filiales. Interés del menor

"PRIMERO.- Recurre el demandado la Sentencia de instancia suplicando su revocación y se desestime la demanda contra él formulada, alegando, sustancialmente, la falta de prueba de los hechos en que la misma se sustenta, no habiendo generado una situación de desamparo hacia los hijos, siendo las únicas circunstancias concurrentes el encontrarse en prisión, su toxicomanía y el despecho hacia él de la familia materna.

SEGUNDO.- Solicitada por la actora la privación de la autoridad familiar del padre respecto de los hijos habidos de su unión con él, demandado, con fundamento en el grave incumplimiento de los deberes inherentes a dicha institución la sentencia acoge dicha pretensión, atribuyéndola en exclusiva a la madre, solución que esta Sala debe ratificar. Desde el nacimiento de los hijos menores, , el demandado no se ha ocupado ni material ni afectivamente de sus hijos, habiendo ingresado un período en la cárcel en 2010, obteniendo el tercer grado penitenciario poco después, tiempo durante el que tampoco se hizo cargo de los menores, abandonando el domicilio de los padres de la actora (donde la pareja residía) durante un año, en que se desentendió totalmente de su familia, hasta que nuevamente ingresó en prisión en octubre de 2012, siendo la madre y los padres de ésta, con los que vive, los únicos que han proveído al cuidado y sustento de los dos menores.

El demandado presenta, como antecedentes psiquiátricos, trastorno de personalidad, trastorno adaptativo, (síntomas afectivos y ansiosos), siendo politoxicómano de inicio precoz, presentando cuadros de crisis comiciales por ingesta o deprivación de alcohol, según informe médico obrante al folio 144 de las actuaciones). Según informe psicológico, presenta conductas disociales desde la pubertad, y personalidad con elevada impulsividad, carece de hábitos laborales y de capacidad para asumir responsabilidades (informe al folio 142). Está en tratamiento farmacológico.

Los hechos expuestos, revelan el grave y reiterado incumplimiento por el demandado de sus deberes paterno-filiales, exigiendo el prioritario interés de los hijos que el ejercicio exclusivo de la autoridad familiar recaíga en la madre, única encargada hasta ahora de su cuidado y educación.

El padre no ha mantenido el menor contacto ni preocupación por lo menores desde su nacimiento, en estos casos, en beneficio de los mismos y como medida de protección hacia ellos, debe ratificarse la privación de la autoridad familiar acordada (S.S. T.S. 31-12-96 y 5-3-98)."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 26 de abril de 2016. Incapacitación parcial. Curatela. Esquizofrenia**

"PRIMERO.- Se recurre por la representación de Dª R, la Sentencia recaída en primera instancia en el presente procedimiento sobre incapacidad (artículo 756 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En su recurso considera la demandada, que se ha producido infracción del artículo 4, 5 y 7 de la Ley 41/2002 básica de los derechos del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación en relación con el artículo 7.3 y 10 de la Ley de Protección de datos y vulneración del artículo 18 de la C.E., al aportarse informe clínico del USM San José Norte sin consentimiento de la recurrente, no pudiéndose emitir dicho informe a petición de un tercero, lo que conlleva su nulidad, debiéndose declarar dicha prueba como ilícita; igualmente entiende producida infracción del artículo 34.1 y 38 del Código de Derecho Foral de Aragón, al no existir prueba concluyente que destruya la presunción de capacidad de la recurrente ni emplearse e la valoración médico-forense unos baremos adecuados (grado de discapacidad y dependencia) regulados en el R.D. 1971/1999 y R.D. 504/2007, no existiendo causas suficientes para determinar la incapacidad de la recurrente , dado que aún a pesar de la existencia de una enfermedad mental ésta no le impide gobernarse por si misma ni en la esfera personal ni en la esfera patrimonial, ni se ha acreditado que a pesar de padecer una determinada enfermedad mental sufra una perturbación que sea origen de un estado mental susceptible de repercusiones jurídicas.

SEGUNDO.- La declaración de incapacitación de una persona, sólo puede acordarse por Sentencia Judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley mediante un procedimiento en el que se respecten escrupulosamente los trámites que impone el Artº. 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, en la medida en que van dirigidos a asegurar el pleno conocimiento por el órgano judicial de la existencia y gravedad de las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que concurren en el presunto incapaz y que le inhabilitan para gobernarse por sí mismo y que son la causa y fundamento de su incapacitación (Artº. 200 del Código Civil y 38 del Código de Derecho Civil de Aragón).

Igualmente, reiterada doctrina del TS (SS 20-11-2002, 14-07-2004 y 29-04-2009), establece que para que se incapacite a una persona no es sólo suficiente que padezca una enfermedad persistente de carácter físico o psíquico, sino que lo que verdaderamente importante es que el trastorno tanto sea permanente como que oscile en intensidad, e impida gobernarse a la persona afectada por sí misma.

Igualmente, debe indicarse que como establece el TS (por todas S 29-04-2009): "la incapacitación, con el consiguiente nombramiento de tutor, es una medida de protección para quienes no pueden autogobernarse y por tanto, se toma en su beneficio y no en el de familiares o de otras personas del entorno. La curatela es un órgano estable, pero de actuación intermitente que se caracteriza porque la función no consiste en la representación de quien está sometido a ella, sino completar la capacidad de quien la posee, pero necesita un plus para la realización de determinados actos. La diferencia se

encuentra entonces en que el sometido a tutela carece de capacidad y por ello la medida de protección es la representación, mientras que el sometido a curatela es capaz, pero requiere de un complemento de capacidad.

TERCERO.- Sobre el primer motivo del recurso no prospera, dado que carece de relevancia al valorar el Juzgado de instancia, la totalidad de la prueba practicada (documental, informe médico-forense, examen de la demandada y de los parientes más cercanos) y habiéndose respetado en el procedimientos todas las garantías procesales, incluidas la práctica de las preceptivas pruebas a las que se refiere el artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, destinado todo ello a evaluar la capacidad de la demandada para el establecimiento de las medidas adecuadas de protección, únicamente instauradas en su propio beneficio; por otro lado la médica psiquiatra explicó en el acto de la vista en esta instancia los motivos por los cuales expidió el informe a instancia de sus familiares, dada la situación en la que se encontraba la demandada precisando de ayuda de terceros, tal como incluso se hacía constar a través de los servicios sociales, no existiendo motivo alguno para declarar su ilicitud, a parte de que no contradice en modo alguno al resto de las pruebas practicada en ambas instancias.

CUARTO.- Respecto al segundo motivo del recurso, conviene destacar que en esta instancia se ha practicado informe pericial, según este informe la demanda está diagnosticada de esquizofrenia residual, necesitando tratamiento psicofarmacológico continuado y seguimiento estrecho por Psiquiatría de forma ambulatoria. La situación de R es de carácter irreversible, siendo posible las descompensaciones psíquicas pese a la toma adecuada de la medicación indicada, puesto que la esquizofrenia es una enfermedad que cursa en brotes. En la actualidad se considera, que es capaz de gobernar su persona, sin embargo no es capaz de gestionar sus bienes o patrimonio que tuviere.

La propia médico forense, en el acto de la vista matiza que la demandada necesita del control médico de terceros para la supervisión de su enfermedad, tal como se indicaba igualmente en el informe de primera instancia con conciencia nula de su enfermedad, igualmente, la testigo perito Sra. S así lo determina, a parte de la necesidad evidente de ser controlada en el área patrimonial, tal como dictaminan la totalidad de los informes practicados y revela la propia audiencia de la demandada.

Por lo expuesto, ninguna duda cabe que procede declarar la incapacidad parcial de la demandada sometida a curatela en los términos que acertadamente se contemplan en la resolución apelada.

QUINTO.- Sobre la persona o institución que ejerza el cargo de curadora, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 116.1 G del Código de Derecho Foral de Aragón, procede el nombramiento como tal de la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos del I.A.S.S. de la D.G.A., dada la situación familiar existente, descartándose el nombramiento del hermano, con el que comparte vivienda, no deduciéndose de las actuaciones que se haya preocupado por la recurrente.

Por lo expuesto unido a los razonamientos de la Sentencia apelada procede su íntegra confirmación."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 12 de julio de 2016. Declaración de desamparo. Tutela del Gobierno de Aragón. Interés del menor**

"PRIMERO.- Recurren los actores la sentencia dictada en la primera instancia de este procedimiento, desestimatoria de su demanda de oposición contra la resolución de 9-3-2015 de la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela del Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, por la que se confirmó la situación de desamparo de , sus hijos, nacidos respectivamente el 2010 y el 2011.

SEGUNDO.- Alegan los recurrentes que no existe en todo el expediente informe que ponga de manifiesto una situación de tal gravedad que haya impedido a la Administración la reinserción familiar y el establecimiento de las pautas de que ellos carecen, poniendo a su disposición los medios personales y materiales necesarios y posibilitando así la solución de sus dificultades y la mejora de sus habilidades parentales, máxime cuando por parte de la Administración se indica en sus informes la existencia de afecto en la relación paterno-filial y que los menores mantienen las referencias parentales con sus padres biológicos. Algo que ni siquiera sucedió cuando tras establecer el Equipo Técnico el 28-9-2014 el necesario sometimiento de doña B a una valoración psiquiátrica, como primer requisito para una posible reinserción familiar de los menores, aquella manifestó no comprender el porqué de tal petición ni como se había llegado a la situación de no ver a sus hijos.

Del expediente administrativo, sin embargo, y de los informes emitidos por Psicóloga y Trabajadora Social, resulta lo justificado de la actuación de la Administración, no habiendo acreditado los actores estar en condiciones de atender a sus hijos de forma adecuada y quedando asimismo constatada la incapacidad de la familia de origen para cuidarlos.

La madre, de 38 años, tiene reconocida una minusvalía del 66 % por inteligencia limite, con un déficit de capacidad de adaptación y de habilidades sociales e interpersonales que le dificultan la toma de decisiones, además de problemas oftalmológicos por perdida de agudeza visual. Y el padre, de 70 años, problemas de salud y una problemática personal que le afecta a nivel relacional y emocional, todo lo cual afecta negativamente el ejercicio de la parentalidad, siendo sintomático lo repetitivo del problema con sus otros 6 hijos, con los que dice no mantener contacto.

De los hijos, O tiene reconocida una discapacidad del 34 % y M ha sido valorada como alumna con necesidades especiales, siendo a raíz de los episodios de violencia y amenazas detectados que los Servicios Sociales iniciaron una intervención en la que se constató la grave problemática que afectaba la madre para establecer relaciones sociales normalizadas, sus limitaciones intelectuales, su carencia de habilidades sociales de comunicación y para el cuidado de los hijos, su dependencia respecto de su marido en este menester, y su respuesta negativa ante las intervenciones profesionales, que las ha habido, con abundancia, aunque sin el resultado buscado.

Los Servicios Sociales de la Ribera Alta iniciaron el estudio de la familia en agosto de 3012, y en octubre siguiente la incluyen en un programa de intervención inicialmente aceptada por los padres, pero finalmente rechazada por considerar que no necesitaban de la ayuda de educador. En enero de 2013 desde la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela se abrió expediente de protección y ante las carencias y falta de conciencia de los padres se consideró necesaria una intervención educativa con ellos y seguimiento por los Servicios Sociales, aplicándose en junio de 2013 la medida de declaración de riesgo con inclusión de la Familia en un Programa de Intervención Familiar, en el que se llevaron a cabo diferentes estrategias educativas relacionadas con diferentes áreas -escolar, ocio y tiempo libre, sanidad, calidad de vida, organización económica y relaciones familiares y sociales, entre otras-. Luego, en agosto de 2014, tras una denuncia por una agresión a los menores y a la vista de la evolución socioeducativa de la familia a lo largo de la intervención familiar, se constata la situación de desamparo, se propone al Servicio de Menores adoptar medidas de un programa de separación provisional, la Subdirección propone una tutela urgente y se pasan los menores a acogimiento residencial, planteándose objetivos para trabajar con los padres en tema de adquisición de métodos de disciplina y valoración psiquiátrica de la madre que permita el control de la agresividad. En octubre de 2014 los menores se incluyen en un programa de acogimiento familiar, en enero de 2015 se proponen los trámites de la tutela firme, basándose en la cronicidad de la situación familiar no obstante las intervenciones, y el 9-3-2015 se declara su desamparo.

No se observa, pues, la pasividad que los recurrentes denuncian, ni los déficits de la Administración en la prestación de ayudas dirigidas a la reinserción de los menores en su familia biológica.

La situación que motivó la intervención de la Administración, cronificada en el tiempo, ha quedado constatada por los profesionales que participaron en ella y la prueba aportada revela lo justificado de su actuación ante los riesgos a que los menores venían expuestos. Y en cuanto a las ayudas, lo que ha quedado demostrado, aparte la falta de unas familias extensas a las que acudir, ha sido una respuesta inadecuada por parte de los interesados, que no conscientes de las deficiencias que han tenido los menores a todos los niveles cuando convivían con ellos, no admiten los argumentos de los Servicios Sociales y de Protección de Menores, o lo hacen con una escasa respuesta, considerándose plenamente capacitados para ofertar a los menores un entorno en el que desarrollarse adecuadamente.

Es también de interés señalar como la STS 31-7-09, a propósito de la ponderación del interés del menor en relación con su posible reinserción en la familia biológica, dice que "ambos principios o directrices pueden entrar en contradicción, puesto que las soluciones más adecuadas al interés del menor pueden no ser las que favorezcan la reinserción en la familia"; que "cuando existe esta contradicción se impone una técnica de ponderación que exige valorar el peso que el legislador atribuye a cada una de las directrices, para atribuir valor preponderante a una u otra de ellas"; que cuando se trata de adoptar medidas de protección respecto de un menor desamparado "el derecho de los padres biológicos no es reconocido como principio absoluto... y tampoco tiene carácter de derecho o interés

preponderante, sino de fin subordinado al fin al que debe atenderse de forma preferente, que es el interés del menor"; que "la adecuación al interés del menor es, así, el punto de partida y el principio en que debe fundarse toda actividad que se realice en torno a la defensa y a la protección de los menores"; que "las medidas que deben adoptarse respecto del menor son las que resulten más favorables para el desarrollo físico, intelectivo e integración social del menor y hagan posible el retorno a la familia natural, pero este retorno no será aceptable cuando no resulte compatible con las medidas más favorables al interés del menor"; y, en conclusión, "que para acordar el retorno del menor desamparado a la familia biológica no basta con una evolución positiva de los padres biológicos, ni con su propósito de desempeñar adecuadamente el rol paterno y materno, sino que es menester que esta evolución, en el plano objetivo y con independencia de las deficiencias personales o de otro tipo que puedan haber determinado el desamparo , sea suficiente para restablecer la unidad familiar en condiciones que supongan la eliminación del riesgo de desamparo del menor y compensen su interés en que se mantenga la situación de acogimiento familiar en que se encuentre teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el tiempo transcurrido en la familia de acogida, si su integración en ella y en el entorno es satisfactoria, si se han desarrollado vínculos afectivos con ella, si obtiene en la familia de acogida los medios necesarios para su desarrollo físico y psíquico, si se mantienen las referencias parentales del menor con la familia biológica y si el retorno al entorno familiar biológico comporta riesgos relevantes de tipo psíquico". Nada de lo cual puede afirmarse en el caso, en el que en todo momento han permanecido vigentes las circunstancias fácticas que determinaron en su día su declaración en desamparo, careciendo los actores de una estabilidad personal, social, emocional, laboral y económica favorecedora de un proceso de educación y crianza adecuado, las necesarias habilidades parentales y los recursos necesarios para proporcionar un crecimiento personal y social satisfactorio a sus hijos, que desde octubre 2014 viven en acogimiento provisional sin que se hayan detectado indicadores de desadaptación.”

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 23 de diciembre de 2016. Incapacitación. Garantías procesales. Nombramiento de tutor. Situación personal y patrimonial**

"PRIMERO.- El Juzgado de instancia declaró a doña A incapaz para regir su persona y bienes, designando para el cargo de tutor a la "Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos" del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de la Diputación General de Aragón, pronunciamiento este ultimo que es recurrido por doña R, una de las tres hijas de la incapacitada, que solicita se declare la nulidad de lo actuado a partir de la providencia de 28-10-2014, por no haberse practicado la audiencia de parientes prevista por el art 759 LEC, citándosele luego para aceptar y jurar el cargo de defensora judicial de su madre y posteriormente, previa citación de las tres hermanas para la vista oral, con audiencia de las mismas, se declare la incapacidad total permanente de doña A, designando como tutora a la recurrente.

Por su parte, , las otras dos hermanas, impugnan la sentencia, solicitando también se declare la nulidad de lo actuado, en los mismos términos que la recurrente, y en otro caso se acuerde revocar la designación de la Comisión de Tutelas y se designe una tutela conjunta, nombrando tutoras de la incapaz a sus tres hijas, que actuaran de forma mancomunada; subsidiariamente se designe a las dos que viven en España, , dejando abierta la posibilidad de que, una vez fijada su residencia en España por doña A -en ese momento en EEUU-, se amplié la tutela para su ejercicio por las tres hijas; y para el caso de que a criterio del Juzgador sea solo una la elegida, se nombre tutora a doña C.

SEGUNDO.- Como primer motivo del recurso se alega infracción de normas y garantías procesales, al no haberse dado audiencia, de entre los parientes más próximos de la incapaz –tres hijas-, más que a doña A, y no a doña C y doña R.

La normativa reguladora de la nulidad de las actuaciones judiciales, contenida en los arts 238 y ss. de la LOPJ y arts. 225 y ss. de la LEC, está inspirada en un criterio claramente restrictivo de la declaración de nulidad, que juntamente con un principio conservador de lo actuado mientras la falta no sea subsanable (arts. 11.3 y 240.2 LOPJ y 231 LEC), se manifiesta en la exigencia de que la infracción procesal haya producido efectiva y no sólo formal indefensión a las partes, no bastando con la existencia de cualquier incumplimiento o violación de las normas procedimentales, sino que será preciso que con ello se haya colocado a las partes en una situación de real indefensión (arts. 238-3º LOPJ y 225-3º LEC), diferenciándose entre indefensión formal e indefensión material y otorgándose relevancia constitucional a los efectos del art 24 CE únicamente a la segunda, entendida como limitación sustancial en la defensa de los derechos e intereses o abierta ruptura del equilibrio entre las partes, por lo que si bien la mera inaplicación o infracción de la norma procesal será condición necesaria, no será suficiente para entender vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial, lo que exigirá un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa, con el consiguiente perjuicio para los intereses del afectado (SSTC 24 enero 1995 y 16 marzo 1999). La misma jurisprudencia viene señalando que la indefensión es irrelevante cuando es imputable a negligencia de la parte, ya que no puede alegar

vulneración del derecho de defensa quien se coloca a sí mismo en la situación que la provoca, o quien no hubiera quedado indefenso de actuar con una diligencia razonablemente exigible.

En el caso se oyó a doña A en el acto del juicio celebrado el 8 septiembre 2015. Doña R, que no es creíble no recibiese la citación telefónica, supo de la celebración del juicio en la misma mañana, según resultó en la vista del recurso. Lo que es de reiterar en cuanto a A, que se desconoce si por aquellas fechas se encontraba en España, a donde ha vuelto definitivamente, o en EEUU, teniendo admitido que de no designarse mancomunadamente a las tres hermanas se nombre tutora a doña C.

No es, pues, apreciable la indefensión material que la Ley exige, por lo que la nulidad de actuaciones solicitada no prospera.

TERCERO.- El art. 116 del CDFA dispone que "Para designar al titular de las funciones tutelares, el Juez", a falta de cónyuge que conviva con él, "preferirá: b) A los descendientes mayores de edad del incapacitado".

Tras el interrogatorio de doña A, única asistente a la vista en primera instancia, el Juzgador nombró tutora a la Comisión de Tutelas y Tutela Judicial de Adultos, decisión que no se comparte, pues no se aprecia razón para alterar el orden de prelación del art 116.1, siendo, por el contrario, más oportuno y beneficioso para la incapaz que el cargo tutelar sea desempeñado por un familiar directo y cercano, antes que por un tercero ajeno a la familia, en el caso la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos. Lo que, al menos en principio, ha de brindar un control mas directo y cercano, no solo en lo económico, sino sobre todo de la situación personal de la incapaz.

En cuanto a cual de las tres hermanas haya de desempeñar la función tutelar, el art 134 CDFA dispone que "La tutela se ejercerá por un solo tutor, salvo, entre otros casos, a) Cuando se haya separado la tutela de la persona y la de los bienes.-", supuesto, también previsto en el art 236.1 del Código Civil, en el que tanto en la delación voluntaria como en la dativa cabe la designación de una pluralidad de tutores, encomendando a uno o a varios el cuidado de la persona del pupilo y a otro u otros la de los bienes. Con la particularidad, respecto del régimen del Código Civil, de que la separación de funciones no se condiciona a la existencia de circunstancias especiales.

En el caso, una hermana –doña C- reside en Ibiza y dijo que no visitaba a su madre desde marzo de 2015. Otra -A- reside en Jaca, localidad a la que ha retornado hace unos meses desde EEUU tras cesar su adscripción a la Embajada. Doña R, la recurrente, reside en Zaragoza, y manifestó que visita a su madre mensualmente.

La presencia de doña R en Zaragoza se estima ha de ser razón suficiente para que se le nombre tutora de su madre, cuya atención mas inmediata esta, por lo demás, garantizada por la Residencia donde está ingresada.

En lo que toca a la tutela de los bienes –tres pisos en Zaragoza, de los cuales dos están alquilados, sus plazas de aparcamiento, y cuentas y valores en Bancos-, la residencia

de doña R en esta Ciudad y su cercanía inmediata a los bienes y valores aconsejan no prescindir de su concurso, por las ventajas y eficacia que tal circunstancia ha de brindar lógicamente en el tratamiento de las variadas incidencias que pueden acompañar su administración.

Al mismo tiempo, la audiencia de las hermanas lleva a la Sala a la convicción de que la dedicación de doña R a sus establecimientos, entre otros posibles motivos, ha determinado limitaciones a veces traducidas en una gestión no transparente o descuidada de los inmuebles, realidad frente a la que la misma audiencia puso perceptiblemente de relieve la disposición y dedicación de doña C, que desde Ibiza ha intervenido también en la gestión y/o control en todo lo que la documentación que se le remitió y las aplicaciones informáticas consintieron. Situación en la que bajo el principio prioritario de la mejor protección de la incapaz, se estima adecuado atribuir a doña R la tutela de la persona y a doña R y doña C la tutela mancomunada de los bienes, sin nombramiento para doña A, por lo demás situada en la misma línea que doña C."

663. REGIMEN ECONÓMICO CONYUGAL

RÉGIMEN LEGAL

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Zaragoza de 9 de junio de 2016. Formación de inventario. División de herencia. Carácter privativo o consorcial de negocio de administración de loteria. Frutos**

"PRIMERO.- En las presentes actuaciones de formación de inventario y división de herencia de doña C, madre de los litigantes y fallecida el 31/01/1998, se plantea la cuestión de si debe incluirse o no en el haber hereditario de la misma la parte correspondiente a la valoración de un negocio de administración de lotería regentado por su esposo D. R hasta el fallecimiento de éste, que tuvo lugar el 18/07/2005, así como los rendimientos obtenidos por dicha administración, en el porcentaje del 50% que le correspondía a la finada al tratarse de un bien consorcial. La parte actora (las cuatro hermanas) sostienen que debe atribuírsele dicha naturaleza de bien consorcial, con las consecuencias que ello conlleva a efectos hereditarios, mientras que el hermano, que es el actual titular de la misma a virtud de nombramiento por resolución administrativa de fecha 11/11/2005, mantiene, por el contrario, que se trata de un bien privativo, habiendo sido ya, además, resuelta la cuestión por Sentencia de la AP Zaragoza, Sección IV, de fecha 17/12/2014, aplicando el criterio establecido por el TS en Sentencia de 02/01/2006, al pronunciarse respecto a la herencia del citado padre.

SEGUNDO.- La cuestión resuelta en la mencionada sentencia de la Audiencia no es exactamente igual a la que aquí se plantea pues lo que en aquélla se discutía era si procedía o no incluir en el inventario de la herencia de D. R, titular de la administración de lotería en el momento de su fallecimiento, el citado negocio, algo que tanto la sentencia de primera instancia como la de apelación rechazan al tratarse de una titularidad que se extingue con la muerte del titular, debiendo atenderse a los requisitos establecidos en el art. 14.1 del Real, Decreto 1082/1985 que regula la forma de concesión de las citadas titularidades, pero ningún pronunciamiento se hace respecto a la naturaleza del bien, consorcial o privativo, tal y como expresamente se indica en el fundamento de Derecho Tercero de la citada resolución. En el presente supuesto, por el contrario, lo que sé plantea es una cuestión bien distinta cual es la de determinar si el mencionado bien, y sus rendimientos económicos tienen la consideración de bienes consorciales, como sostienen los actoras, o por el contrario se trata de un bien privativo, tal y como entiende el demandado, por tanto la cuestión no ha sido resuelta por la citada sentencia y nada obsta para su estudio.

TERCERO.- Según ha quedado acreditado en las actuaciones D. R y Doña C, *ambos* de vecindad foral aragonesa, contrajeron matrimonio el 31/08/1946, y en el año 1975 a aquél le fue concedida la explotación de la administración de lotería por la autoridad administrativa al cumplir los requisitos exigidos por la mencionada normativa. Dicho negocio fue explotado ininterrumpidamente por el mismo, con el auxilio de sus cinco hijos y su esposa, hasta el momento de su fallecimiento, pero el único titular, a todos los efectos, era

D. R. Por tanto, y con independencia de que se aplique la normativa existente en el momento del otorgamiento de la explotación (1975) como en el momento del *fallecimiento de su* esposa (1998) como el actual régimen vigente del CDFA (arts. 210 y siguientes), la conclusión que se extrae es que la citada administración de lotería no era un bien común sino privativo del esposo pues no resulta encajable en ninguno de los supuestos previstos en el actual art. 210.2 del citado CDFA ya que no consta que el mismo fuese adquirido a título oneroso (no tuvo que efectuar desembolso alguno), ni que se trate de una empresa o explotación económica fundada por el mismo durante la vigencia del consorcio; por el contrario, hay que entender que nos encontramos ante un bien patrimonial de carácter personal de los previstos en el art. 212.1 del citado texto legal, bien se entienda que el mismo tiene la consideración de bien inherente a la persona (se le concedió al mismo por concurrir en su persona los requisitos legales exigidos para ello) o que se trata de un bien intransmisible ínter vivos (que lo es, pues la normativa administrativa no lo permite ni siquiera mortis causa). Por tanto no resulta de aplicación la presunción de comunidad del art. 217 y debe rechazarse, en consecuencia, su inclusión (en la parte que le hubiese correspondido) en el haber hereditario de Doña C.

CUARTO.- Pero siendo la titularidad del bien privativo, por su condición de personalísimo o por ser intransmisible ínter vivos, ello no impide considerar que los frutos, productos o rendimientos del mismo devengados durante el consorcio sean bienes comunes pues se trata de los frutos de un bien privativo (art. 210.2.f), por lo que procede acordar la inclusión en el haber hereditario de la finada, además de los bienes respecto a los que no existe controversia, de los rendimientos obtenidos por dicha administración de lotería, en el porcentaje correspondiente al 50, desde la fecha el óbito de Doña C (31 de enero de 1998) hasta el presente momento."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 27 de octubre de 2016. Liquidación de régimen económico conyugal. Previo convenio transaccional. Consideración de consorcio ya liquidado**

"I.- La sentencia recurrida estima parcialmente las pretensiones de la demanda y ordena incluir en el activo del inventario del consorcio conyugal constituido por los esposos litigantes, el crédito de la sociedad frente al actor por los pagos efectuados entre Abril de 2002 y Noviembre de 2013 del préstamo suscrito con el Banco Pastor que grava la nave industrial privativa del demandado en la Puebla de Alfinden, así como el automóvil marca Porsche y la motocicleta BMW , rechazando la inclusión en el mismo de los pagos efectuados entre el 20 de Abril de 2002 y el 11 de Noviembre de 2013 para el abono del préstamo hipotecario suscrito con la entidad Ibercaja que era la vivienda propiedad privativa de aquel en Alcañiz. Frente a dicha resolución se alzan ambos litigantes, solicitando la demandante de la total estimación de la demanda, en tanto que el demandado pretende la desestimación integrada de la misma.

II.- Antes de proceder al análisis pormenorizado de ambos recursos, esta Sala debe replantearse la procedencia de los mismos, y ello porque, en el caso enjuiciado hay que partir de que en el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo seguido entre aquellos, que terminó por sentencia de fecha once de Noviembre de dos mil trece, ambos litigantes efectuaron un convenio transaccional sobre la liquidación de su sociedad conyugal, definiendo el activo y pasivo de la misma y estableciendo las correspondientes adjudicaciones. El Art. 269 del Código de Derecho Foral de Aragón, prevé que los cónyuges o partícipes puedan, mediante acuerdo unánime, liquidar y dividir por sí mismos el patrimonio consorcial. Así pues, los cónyuges litigantes, a la hora de proceder a la liquidación de su sociedad conyugal, optaron por un procedimiento legal, esto el acuerdo de las partes, en detrimento del procedimiento contencioso para la liquidacion del patrimonio y por tanto una vez firme dicho acuerdo, al haber sido aprobado por resolución judicial, no puede pretenderse, como ha pretendido el demandante efectuar una liquidación paralela de otros activos o pasivos, preteridos en aquella liquidación, pues es evidente que estas nuevas cargas no se tuvieron en cuenta a la hora de la primera liquidación, y por probablemente de haberse traído a colación, la liquidación hubiera no sido aprobada por las partes en aquellos términos, o lo hubiera sido en forma diferente. En consecuencia estima el Tribunal que no puede pretenderse un nuevo procedimiento de liquidación de la sociedad conyugal, respecto a un consorcio ya liquidado, y tan sólo podría solicitarse la nulidad, o en su caso la rescisión de aquella partición, si se reúnen las exigencias necesarias para ello, pero en modo alguno proceder a una liquidación parcial de una sociedad que fue ya disuelto y liquidada con arreglo a la ley. En consecuencia procede desestimar ambos recursos, y con revocación de la resolución recurrida, desestimar íntegramente la pretensión de la demanda, absolviendo a la parte demandada de las pretensiones contenidas en la misma, sin que para ello sea necesario en el análisis del contenido de los recursos planteados"

71. DERECHO DE SUCESIONES

NORMAS COMUNES

72. SUCESIÓN TESTAMENTARIA

*** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 8 de febrero de 2016. Interpretación de testamento. Voluntad real. Fideicomiso de residuo. "Pacto al más viviente". Testamento mancomunado

"**PRIMERO.-** D. F y Dª I otorgaron ante Notario testamento mancomunado el 26 de marzo de 1985, en el que, en síntesis, 1) ambos testadores se nombraron uno a otro herederos universales, con plena libertad del supérstite para disponer .de todos los bienes que herede del otro, 2) se reconocían la potestad de revocar su voluntad testamentaria, tanto en vida como mortis causa, sobre el presupuesto de que el testamento no contiene disposiciones correspectivas, y 3) se instituyó un fideicomiso de residuo de todos los bienes que quedaren y de los que "no haya dispuesto el sobreviviente de ambos",con los que se habrían de formar dos masas con la mitad del haber hereditario, recibiendo cada una de ellas los parientes más próximos de los testadores.

2) Fallecido D. F el 12 de julio de 2004 sin otra voluntad testamentaria que la expresada, Dª I otorgó nuevo testamento notarial el 10 de octubre de 2011, en el que instituyó heredera universal a su hermana de vínculo sencillo a Dª A.

3) Fallecida Dª I el 20 de octubre de 2014, Dª Mª P, representada y Dª Ma , ahora demandante, y como parientes más próximos de D. F comparecieron el 7 de octubre de 2014 ante notario para otorgar acta de notoriedad de esa condición de parientes más próximos del citado causante D. F.

4) Dª A, demandada en este proceso, en fecha 20 de noviembre de 2014 otorgó escritura de aceptación de la herencia, mediante la cual se adjudicó todos los bienes de Dª I. El Registro de la Propiedad denegó la inscripción de esta escritura al considerar que se vulneraba el fideicomiso de residuo.

5) Las demandantes, , como parientes más próximos de *D. F* postulan una tutela en la que se pretende se declare su derecho hereditario en esa condición de familiares más próximos del citado causante a la mitad de todos los bienes (de cualquier procedencia) que quedaren y de los que no hubieran dispuesto D I al tiempo de su fallecimiento por actos intervivos, así como la declaración de nulidad del testamento otorgado por I el 10 de octubre de 2011, siendo fundamento de su petición el fideicomiso de residuo establecido en el testamento mancomunado otorgado el 26 de marzo de 1989, fideicomiso que se califica de su modalidad de "si quid superit" (si queda algo)

B) La sentencia dictada en la primera instancia.

SEGUNDO.- La. sentencia dictada en la primera instancia resaltará que 1) se trata de

un problema de interpretación de la voluntad del testador, debiéndose indagar la voluntad real, que es la que debe prevalecer y 2) que en atención a la caracterización jurídica del fideicomiso de residuo y a la parquedad de la voluntad testamentaria en orden a las facultades de disposición que tendría el sobreviviente, si solo "ínter-vivos" o también "mortís-causa", integrando la voluntad del testador, y atendiendo a las cláusulas segunda y cuarta, debe concluirse que el sobreviviente carecía de la facultad de disposición "mortis-causa" de los bienes del premuerto. Lo que lleva a declarar el derecho de las demandantes a la mitad de los bienes que quedaron a la muerte de Dª I y de los que no hubieran dispuesto, así como la nulidad del testamento notarial otorgado por Dª I el día 10 de octubre de 2011.

TERCERO.- Dª A interpone recurso de apelación en el que, tras un sumario y una cuestión previa (sobre el ámbito del recurso de apelación) en síntesis y simplificación aduce, (i) la infracción de los arts. 1, 3 y 416 del Código de Derecho Foral, pues aplica para interpretar el testamento el art. 675 C. Civil, inaplicando el derecho civil aragonés, lo que supone un error de derecho, al igual que, al confrontar las cláusulas contradictorias, segunda (institución recíproca) y cuarta (fideicomiso de residuo),

(ii) infracción del art. *218* LEC, incurriendo en incongruencia, al amparar su solución en la cláusula cuarta del testamento y obviando la segunda, que tan solo transcribe y sobre la que no se razona, (iii) vulneración de los arts. 318, 405, 416.3 y 419.1 CDFA, con relación a la institución recíproca de herederos o "pacto al más viviente", y la voluntad del testador como "Ley" de la sucesión, y IV) infracción de los arts.- 421, 431 y 432 CDFA, con relación a la libertad de revocación individual, para ya en fin y al margen del reproche último respecto a la imposición de las costas impugnar el pronunciamiento que anula el testamento.

C) La interpretación de los testamentos.

CUARTO.- Como primer motivo del recurso se denuncia una infracción de los arts. 1, 3 y 416 del CDFA, en cuanto, en el sentir de la parte recurrente, se ha vulnerado el sistema de fuentes en el Derecho Aragonés y las reglas de interpretación de los testamentos.

Tal infracción se produce, según la parte recurrente, al invocarse en la instancia el art. 675 C. Civil, cuando en el CDFA la materia está regulada en el art. 416, lo que induce a incurrir en otras infracciones, pues en la pugna entre las dos instituciones que aparecen enfrentadas, institución recíproca de herederos o pacto al más viviente y fideicomiso de residuo, se termina dando preferencia de manera errónea a esta última con inaplicación del principio de libertad civil, con lo que se está vulnerando el sistema de fuentes prevenido en el art. 1.1 CDFA conforme al cual el Código Civil es un sistema supletorio de cuarto grado.

El motivo no se acoge por las razones que se van a exponer.

Con tal motivo la parte está entremezclando dos cosas diferentes. Una es interpretar el testamento, es decir tratar de averiguar la verdadera voluntad del testador, dado que todo proceso de verbalización de una voluntad puede contener expresiones equivocas o incompletas o aun contradictorias, y otra la operat-ividad que las genuinas instituciones

sucesorias aragonesas pueda tener frente a una voluntad previa y claramente determinada.

Porque el art. 416.1 CDFA viene a disciplinar prácticamente lo mismo que el art. 675 C. Civil, fuera de la invocación en el texto legal aragonés al testamento mancomunado: en esencia que hay que estar a la literalidad de lo dispuesto salvo que resulte clara una voluntad diferente, con lo que no se acierta a explicar, ni se explica en el recurso, en orden a perfilar lo realmente querido por los testadores (STS 02.11.2010, para el C. Civil) en qué ha consistido la vulneración legal que se denuncia. Una cosa es que en la labor interpretativa se haya errado en la instancia y otra es que se haga partiendo de un principio o regla interpretativa de los testamentos en Aragón, inadecuada, lo que no es el caso pues expresamente se afirma la prevalencia de la voluntad real. Que es el principio rector en la interpretación de los testamentos en el Derecho Aragonés (art.416 CDFA) . Puede existir en la instancia una invocación incorrecta de la norma aplicable, la del art. 675 C.Civil, pero no hay vulneración del contenido material de la norma aragonesa aplicable, el citado art. 416 CDFA.

Las otras infracciones que se denuncian, de los arts. 1 y 3 CDFA, relativos a la prevalencia de la libertad en Aragón y de la interpretación restrictiva que debe merecer toda limitación se resolverán al afrontar los demás motivos del recurso, con los que están íntimamente vinculados.

C) La interpretación de los testamentos.

QUINTO.- Objeto de este proceso, lo mismo en la primera instancia que en este segundo grado jurisdiccional, es, como se ha dicho, la interpretación de un testamento.

La problemática sobre la interpretación de los testamentos ha sido siempre algo paradójica. Punto de partida es el art. 405.CDFA, precepto en el que, en su primer apartado, se instaura la preeminencia de la voluntad del disponente, que ha de ser manifestada consciente y libremente en testamento otorgado conforme a Ley. El mismo precepto dispone en el segundo de sus apartados que el testamento puede contener cualesquiera disposiciones relativas a la ordenación de la sucesión del testador o testadores.

Repárese en la circunstancia de que no se trata de cualquier voluntad, sino la de aquélla expresada en el testamento. Es, como dice la rúbrica del art. 495 CDFA una "voluntad testamentaria". Sin perjuicio de que la jurisprudencia haya admitido en algunas ocasiones la posibilidad de acudir a elementos externos al testamento para averiguar la voluntad real del testador, la que no es relevante al caso.

A la interpretación del testamento dedicará el CDFA el art. 416. Precepto que, al igual que el C. Civil, recoge la paradoja de ceñirse y alejarse de lo verbalizado por el testador: las disposiciones testamentarias deben entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca **claramente** *que* fue otra la voluntad del testador. Si, como se ha dicho, la voluntad que hay que interpretar es la testamentaria, si ésta se exterioriza a través de su verbalización en testamento, bien se comprenderá que la voluntad que debe prevalecer debe resultar del mismo testamento y con tal contundencia

("claramente") que pueda sobreponerse al sentido literal de sus palabras o de alguna de ellas.

Apartarse de la literalidad de las palabras debe hacerse con sumo cuidado y prudencia, pues existe el peligro de que al socaire de la interpretación del testamento se termine alterando la voluntad real que resulta del sentido propio (y literal) de las palabras, lo que el legislador autoriza con carácter restrictivo, pues la prevalencia de otra voluntad distinta a la que resulta de esa la literalidad solo es posible cuando así resulte "claramente". Y esto lo mismo vale para Derecho Aragonés que para el Código Civil, por lo que no hay una, como ya se ha dicho, inaplicación en la instancia del sentido material de la norma aragonesa, aunque si pueda haberla en la invocación formal del precepto aplicable.

Adiciona el art. 416 CDFA tres reglas más concretas sobre la interpretación de los contratos. Una, la prevenida en su apartado dos, conforme a la cual las cláusulas ambiguas u oscuras se interpretarán en sentido favorable a su eficacia. Y otras dos que afrontan la cuestión relativa a la solución que se debe dar a las disposiciones cuya comprensión pueda ofrecer dudas. La primera ordena que se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador "según el tenor del mismo testamento" (art.416.1 CDFA) y la segunda la de que, en tales casos de duda la interpretación se realizará en sentido favorable al heredero instituido y las disposiciones que impongan cualquier carga se interpretaría de manera restrictiva.

E) El fideicomiso y el fedeicomiso de residuo.

SEXTO.- El fideicomiso es una institución con la que quien ordena su sucesión lo hace de manera que al primer instituido le suceda otro, de suerte que se establecen dos herederos sucesivos del causante.

El fideicomiso es un supuesto de sustitución, es decir el llamamiento de un segundo o ulterior heredero para que lo sea después del llamado en primer lugar, en el que, en el régimen del C.Civil se "encarga al heredero que conserve y transmita a un tercero el todo o parte de la herencia" (art. 781 C.Civil) En el fideicomiso el fideicomitente es el causante del primer heredero, el fiduciario, sino también del segundo, del fideicomisario, y ambos son herederos del fiduciante. En el fideicomiso hay una sola herencia aunque varias aperturas de esa sucesión.

Ciertamente el fideicomiso es un gravamen impuesto al fiduciario y aunque la norma previene que el fiduciario transmita, existe el criterio común de que no hay tal transmisión, pues es la ley la que atribuye automáticamente la titularidad al fideicomisario. En el fideicomiso se mantiene la unidad del haber hereditario en la medida en la que existe un deber de conservar.

En el fideicomiso el fiduciante es el causante de los dos herederos, del fiduciario y del fideicomisario y son llamados a heredar en virtud del llamamiento del fiduciante.

SÉPTIMO.- Como modalidad del fideicomiso existe el denominado de residuo, institución con la que se quiere comprender aquélla ordenación de los bienes por el causante,

en testamento, por la que se instituye heredero fiduciario a una persona para que en su día pase al fideicomisario que designa el testador o fiduciante, con la potestad a favor del fiduciario de la facultad de disponer de los bienes, de suerte que el fideicomisario heredará del fiduciante sólo lo que reste de aquello que el fiduciario no dispuso, lo que justifica esa denominación "de residuo".'

Al fideicomiso de residuo se le asigna como característica natural, aunque no esencial, la del deber de conservar la herencia, centrándose la cuestión en las facultades de disposición que se atribuyen al fiduciario, si ínter-vivos, (oneroso o gratuitos) o también mortis-causa. Lo que depende de la voluntad del testador.

La STS 30.10.2012 (rec 797/2010), en un supuesto en el que el testador limitó al fiduciario a las disposiciones Inter-vivos, explica la institución:

> "conforme a su desenvolvimiento jurisprudencial, particularmente de la línea seguida por las Sentencias de esta Sala de 13 de diciembre de 1974 (RJ 1974,4677), 25 de abril de 1983 (RJ 1983,2122), 22 de julio de 1994 (RJ 1994,6578) y 29 de diciembre de 1997 (RJ 1997,9490), la caracterización de esta figura puede describirse en atención a los siguientes criterios:
>
> A) En primer lugar debe señalarse que el fideicomiso de residuo se integra en la estructura y unidad del fenómeno sucesorio como una proyección de la centralidad y generalidad que presenta la institución de heredero. Quiere decirse con ello, entre otras cosas, que el llamamiento a los herederos fideicomisarios no es condicional, sino cierto desde la muerte del testador; resultando más o menos incierto el caudal o cuantía a heredar, según la modalidad del fideicomiso dispuesto.
>
> El fideicomisario, según el "ordo sucessivus", o llamamientos a sucesivos herederos como nota común y esencial en toda sustitución, trae directamente causa del fideicomitente o testador, pues el difuciario, a estos efectos, no transmite derecho sucesorio alguno que no estuviere ya en la esfera hereditaria del fideicomisario (articulo 784 del código Civil).
>
> B) En segundo lugar también debe señalarse que, aunque pueda aceptarse que la obligación de conservar los bienes hereditarios resulte una nota natural y no esencial al instituto, lo es sin detrimento de su valor conceptual y analítico, esto es, respecto de lo incierto del residuo en si mismo considerado. Quiere decirse con ello, entre otras cosas, que aunque el heredero fiduciario venga autorizado con las más amplias facultades de disposición, ya a título gratuito, o bien mortis causa, no por ello deja de tener sentido conceptual la obligación de conservar en lo posible, y conforme al objeto del fideicomiso, los bienes hereditarios en orden al heredero fideicomisario; todo ello de acuerdo a los parámetro de las exigencias de la buena fe en el ejercicio de los derechos, o de la sanción derivada del abuso del derecho o de su ejercicio fraudulento. De esta forma se comprende mejor el juego conceptual de los artículos 781 y 783 del Código

Civil. Así, por ejemplo, dentro de la previsión testamentaria, la facultad de disponer deberá entenderse restrictivamente conforme a la finalidad de conservación que informa al fideicomiso de residuo. En parecidos términos de lógica jurídica los límites, ya testamentarios o generales, al ejercicio de estas facultades de disposición también determinarán la carga de la prueba, según la mayor o menor amplitud de las facultades concedidas. Así, por ejemplo, y dentro siempre de la previsión testamentaria, en los supuestos en que el heredero fiduciario venga autorizado con las más amplias facultades de disposición, la posible impugnación de la transmisión efectuada correrá a cargo del fideicomisario que deberá probar que, fuera del objeto del fideicomiso, el fiduciario yació el contenido del mismo actuando de mala fe o de forma fraudulenta o abusiva".

El fideicomiso de residuo es admisible porque siendo la voluntad del causante Ley del orden sucesorio no hay, ni en el Código Foral ni en el Código Civil regla general que la impida. De hecho en el C.Civil no hay propiamente una regulación del mismo, sino que su admisibilidad se viene a inferir del art. 783.2° C.Civil. En el Código Foral está permitido en la medida en la que, como se ha dicho, la sucesión responde a la voluntad del causante expresada en testamento y nada impide que el testador. disponga un orden sucesivo en la sucesión de su patrimonio. Como tampoco nada impide que al fiduciario le otorgue facultades de disposición inter-vivos o, también, mortis-causa. Mas en ese caso ya no es propiamente un fideicomiso de residuo sino preventivo de residuo, esto es el heredero sucesivo está llamado para el supuesto de que la facultad de disponer del fiduciario sea ilimitada en cuanto al patrimonio heredado del que puede disponer y, sobre todo, el titulo del que puede disponer, también a titulo gratuito y mortis-causa. Lo permite lo mismo el C.Civil y el Código Foral, pues en ambos impera el principio de soberanía de la voluntad del testador.

OCTAVO.- Denuncia la parte recurrente la vulneración de los arts. 318,405,408,416.3 y 419 CDFA, en lo que atañe a las instituciones de pacto al más viviente e institución recíproca de herederos, así como a la voluntad del testador como Ley de la sucesión.

Explica la parte recurrente que en la cláusula segunda del testamento se recoge una institución aragonesa típica, "agermanamiento" o "pacto al más viviente", instituciones basadas en la afectividad, reguladas, en el rt. 419 CDFA, que "coincide con el texto del calendado art. 108.1 de la Compilación de 1967 ... norma en vigor en el momento del otorgamiento de esta disposición de última voluntad (26 de marzo de 1985)", destacándose en el recurso que esa cláusula segunda resalta la plena libertad en el supérstite para disponer de todos los bienes que herede del que primeramente muera de ambos, plenitud de derechos y plenitud de libertad que la parte entiende suponía una clara facultad de disponer mortis causa, argumentándose que tendría escaso sentido que se pudiera disponer por el supérstite en vida por actos gratuitos y no pueda hacerse mortis causa, siendo inadmisibles, conforme a las instituciones aragonesas, el que las facultades dispositivas se deban interpretar de manera restrictiva.

El motivo del recurso no se acoge por cuanto aísla una cláusula testamentaria para imponerla a otra (la cuarta) que no es, en sentido estricto, incompatible con la anterior (la

segunda) sino antes al contrario perfectamente incardinable en el principio de libertad del testador.

Ciertamente las sustituciones no están reguladas en el Código Foral, como no lo estaban en la Compilación, siquiera existan normas que contemplen la institución, entre ellas la que prevenía en el art. 108.3 de la Compilación. La institución está contemplada ahora normativamente en los arts. 419.3, (testamento mancomunado), 531.2 (sucesión del cónyuge viudo) y 395.3 (pacto al más viviente), todos ellos del Código Foral, como también se recogía, ya se ha dicho, en el art. 108.3 CDFA. Citado en el recurso de manera similar en este último precepto pero no igual, pues ahora la institución recíproca no conlleva por sí misma el "pacto al más viviente", que sí lo arrastraba el art. 108.1 COFA, siendo ahora en el art. 419 CDFA necesaria de una previsión específica.

Porque en contra de lo argumentado en el recurso el fideicomiso de residuo y la institución recíproca de herederos, ni aun el pacto al más viviente son incompatibles ni especialmente difíciles de armonizar.

En primer lugar porque no hay dificultad alguna en aplicar a las instituciones aragonesas las normas del C.Civil como previene el sistema de fuentes (arts. 1.1 COFA), de suerte que no hay inconveniente en citar como aplicable el art. 783.2° C.Civil, en el que se contempla el fideicomiso de residuo. Posiblemente para admitir esa figura en el Derecho Civil Aragonés no haría falta la invocación del mencionado precepto, y sería admisible en virtud del principio de libertad del testador que la parte recurrente defiende precisamente como infringido en la instancia, no viéndose la razón por la que el testador en Aragón no pueda, Código Civil aparte, nombrar dos herederos sucesivos.

La cláusula cuarta, que dispone un fideicomiso de residuo, no es incompatible con la institución recíproca. En el fideicomiso de residuo hay una designación de heredero fiduciario que es pleno propietario pues puede disponer del haber hereditario. Y los supuestos legales que antes hemos mencionado no son sino supuestos de fideicomiso de residuo, legales, pero supuestos de fideicomiso de residuo, por lo que no se atisba a comprender la razón por la que es contrario al principio de libertad civil el pacto que establece un fideicomiso de residuo.

No es tanto, pues, cuestión de si debe prevalecer la regla de que ante la duda se excluye lo dudoso, que es lo que sostiene la parte demandante, o la de que en Aragón está prohibido prohibir, que es lo que sostiene la parte recurrente, sino si es posible, e incontestablemente lo es, el que un aragonés pueda disponer de su sucesión estableciendo un orden sucesorio sucesivo, y que lo pueda hacer conforme a su voluntad,otorgando el fiduciante al fiduciario las facultades dispositivas que estime convenientes, sólo ínter-vivos, a título oneroso o gratuito, o también mortis-causa.

NOVENO.- La parte recurrente, ya en fin, argumentará en contra de la cláusula cuarta en el sentido de integrar lo prevenido en ella en el sentido de que «cuando se previene el fideicomiso con los bienes que no ha dispuesto el sobreviviente de ambos hay que incardinarla con la cláusula segunda, en la que se instaura la "plena libertad en el supérstite, de

manera que esa facultad de disponer para después de la muerte del primero de ellos debía comprender la disposición mortis causa".

Pero esa interpretación pugna con la rúbrica de la disposición testamentaria cuarta, "fideicomiso de residuo", concepto antes explicado y que en nuestra cultura y comunidad jurídica tiene un significado preciso y perfectamente perfilado. Que sea testamento notarial revaloriza el alcance de la expresión y del concepto, al ser función del notario autorizante asesorar a los otorgantes, lo que hace verosímil que la voluntad de los testadores se ajustó a la literalidad y significado jurídico propio de la rúbrica. Dispone el art. 1 del Reglamento Notarial que los Notarios "como profesionales del Derecho tienen la misión de asesorar a quienes reclaman su ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquéllos se proponen alcanzar". En definitiva el testamento dice lo que dice, y lo que dice es que el sobreviviente hereda con el gravamen de no poder disponer mortis causa, que es lo propio del fideicomiso de residuo. Que se contenga en la rúbrica realza su valor y significación, pues es *un* concepto jurídico, como se ha dicho, jurídicamente diáfano y consignado bajo el asesoramiento profesional del Notario.

Y no vale afirmar que lo que en realidad se quiso es trasladar al testamento el fideicomiso de residuo que contemplaba el art. 108 de la Compilación. Pues tal afirmación es especulativa y pugna con la lógica que resulta de que el fideicomiso que se contemplaba en esa norma era legal(y preventivo), de manera que para su operatividad bastaba que se dieran sus presupuestos legales, sin necesidad de previsión testamentaria. De suerte que si se hizo alguna referencia lo plausible es entender que lo que se quiso fue precisamente variar el sentido del fideicomiso legal. Y es lo que resulta de que no se intitulara la rúbrica de la cláusula como fideicomiso legal o preventivo, sino simplemente fideicomiso de residuo. La propuesta de la parte recurrente no es interpretar el testamento sino expulsar toda una cláusula del mismo.

La tesis de la parte recurrente podrá ser más o menos razonable, pero no desvela "claramente" ni "evidentemente" *una* voluntad diferente a la literalidad de la expresión, entendiendo esa literalidad, *ya* se ha dicho, en su consideración jurídica, no ya usual sino unánimemente aceptada en nuestra cultura jurídica.

DÉCIMO.- En el cuarto motivo del recurso se denuncia la infracción de los arts. 421,431 y 432 CDFA, al haberse desconocido la facultad de revocación individual, lo que se apoyará .en la falta de correspectividad que expresamente se declara en la cláusula tercera.

El motivo se acoge.

El testamento mancomunado es una forma (o tipo) de consignación de la voluntad de los testadores que no borra el carácter diferenciado de la voluntad de cada uno de sus otorgantes, con el que no se priva de la revocabilidad unilateral, de cada uno de ellos, como elemento esencial de toda voluntad testamentaria. Revocabilidad que se plasma hoy normativamente en los arts 406.3 y 421 del CDFA, diferenciación de otorgamiento que se proyecta incluso en los supuestos de nulidad (art. 430.2 CDFA). Más declarándose expresamente la falta de correspectividad en el propio testamento.

Por tanto nada podía impedir que Dª I dispusiera de sus propios bienes no heredados de su fallecido esposo D. F.

UNDÉCIMO.- En el motivo sexto (VI) se denuncia infracción del art. 423 CDFA, sobre las causas de nulidad del testamento pues, se defiende, las causas de nulidad están tasadas, y entre ellas no se encuentra la disposición testamentaria de bienes que tenían esa limitación, afectados por el fideicomiso de residuo.

El motivo se estima. La disposición testamentaria de bienes afectados por ese gravamen es ineficaz en cuanto afecta a los mismos, pero no hace nula ni ineficaz la disposición de los propios.

La disposición mortis causa de los bienes de los que no podía disponer el testador hace ineficaz esa disposición, pues nadie puede transmitir derechos de los que se carece. Pero ello no contamina al testamento como un todo ni invalida ni hace ineficaz la disposición de los bienes que sí podía transmitir el causante.

Ya en fin no procede hacer declaraciones abstractas de nulidad de inscripciones registrales, cuando no consta que se haya practicado alguna, y las que se hubieran podido hacer los términos y condiciones en que lo han sido."

PRIMERO.- Tras hacer una síntesis de lo que, en el parecer del recurrente en la sentencia de instancia, se considera el perfil jurídico del derecho de usufructo, bien el usufructo corno legado bien porque se reservó el mismo la demandante al hacer donación a su hijo, entrará en el motivo a reflexionar sobre la naturaleza jurídica del derecho usufructuario de la demandante, en el que se destaca su carácter esencialmente familiar, y que la cláusula testamentaria debe entenderse referenciada al usufructo vidual, y no un usufructo estricto secuente a un legado.

Punto de partida es el testamento mancomunado otorgado por la demandante Da A y su fallecido esposo D. A, el día 22 de noviembre de 2000 en el que, en su primera cláusula y como rúbrica se identifica la disposición testamentaria como "LEGADO", y en virtud de la cual "se legan el usufructo universal y vitalicio de todos sus bienes...".

Es incontestable que el usufructo es un legado. Podrá discutirse si es posible que ese usufructo puede conciliarse o no con el derecho al usufructo legal aragonés, de naturaleza familiar. Pero que se concibió testamentariamente un derecho autónomo al usufructo de los bienes del otro, de la totalidad de los bienes, es tan indiscutible como que en la escritura de aceptación de herencia, a la que compareció el recurrente y la que consintió en su integridad de manera concurrente con su madre demandante, y en la que, en su "estipulación" tercera y también bajo la rúbrica "LEGADO" se adjudica consensuadamente a Dª A el usufructo de todas las fincas. Es incontestable que la demandante se configuró como titular de un derecho de usufructo, con su perfil jurídico propio y no el que le pudiera corresponder en razón al matrimonio. Y todavía más, si es que pudiera existir duda alguna, los comparecientes en el otorgamiento de esa escritura, y entre ellos el recurrente, D. M, tomaron posesión de sus legados.

Desconocer ese legado es negar lo evidente y actuar contra sus propios actos. Podrá o no subyacer bajo este usufructo el legal de viudedad aragonesa, pero el prevalente es aquél del que se tomó posesión.

SEGUNDO.- Igual suerte desestimatoria debe tener la segunda de las alegaciones, centradas en el alcance del acuerdo de colaboración de explotación familiar, de 29 de noviembre de 1991, acuerdo otorgado notarialmente, doliéndose el recurrente de que el Juzgado haya basado su conclusión en el sentido de que dicho acuerdo comprendía solo fincas privativas en el mero testimonio de la hija de la actora (y hermana del demandado), cuando tal testigo no fue parte del acuerdo.

Motivo que, como se ha anticipado, no se puede acoger pues aparte de tal testimonio, aunque a la notaría comparecieron la demandante, Dª A y su esposa, D. A, la única otorgante es Da A y no su esposo, y además lo hace ella y sólo ella como "titular" de una Explotación Familiar Agrícola. Y es ella también, y sólo ella, la que asume el compromiso a que su hijo, ahora demandado y recurrente, partícipe total, directa y personalmente en todos los trabajos y en la gerencia de la explotación. Por tanto resulta no una deducción sino una evidencia que las fincas que comprendía ese acuerdo nada tenían que ver con las *que son* objeto de reclamación en cuanto a su usufructo que la actora ha recibido vía legado, pues tenían que ser aquéllas sobre las que en 1991 ya tenía el uso y aprovechamiento como privativas.

TERCERO.- A ese acuerdo de colaboración se le quiere atribuir en el recurso otro alcance, que no se termina de explicar. Objeto de la demanda son las fincas legadas en usufructo y no las privativas de la demandante, por lo que la sentencia de instancia ni entra ni podría entrar, de manera que la explotación no se tiene que ver afectada. Transcribe el recurrente parte de esos acuerdos que se refieren única y exclusivamente al ámbito de la explotación objeto del acuerdo, y no a esa explotación unitaria que el demandado ha configurado utilizando fincas propias con las del acuerdo y con las que son objeto del usufructo demandado.

CUARTO.- Insiste la parte recurrente en que las fincas objeto del proceso están arrendadas a su favor, de suerte que no se podría dar satisfacción a su usufructo. A lo que es de contestar que aunque se ha cuidado la parte de no precisar a cual de las fincas alcanzan esos arrendamientos los documentos aportados sólo desvelan arrendamientos sobre nueve parcelas, en los que hay pactado un plazo de duración de diez años, sin que se aporte prueba de su subsistencia por cuanto ni se prueba ni tan siquiera se alega, fuera de lo que luego se dirá, el pago de las rentas pactadas, de manera que en un supuesto en el que el propio recurrente había asumido un protagonismo absoluto en el aprovechamiento agrícola de las fincas propias con las que lo eran de sus padres, consorciales o no, que se hubiera mantenido la vigencia de ese vínculo contractual sobre esas pocas parcelas resultaría verosímil a partir de la prueba del pago del arrendamiento.

De una manera confusa, en el hecho segundo del escrito de contestación se hace un totum revolutum en cuanto al aprovechamiento de las fincas, de todas las fincas, afirmándose un acuerdo conforme al cual la renta de todas las fincas, todas ellas, las destinadas a viñas como

las de cereal, se abonaría al padre la ayuda o beneficio de la PAC, y que tras su fallecimiento las hermanas del demandado, cómo nudas propietarias, percibirían una pequeña cantidad anual y la madre, Dª A, las ayudas del almendro (doc. Nº 14, f. 1021).

A criterio de la Sala esta versión es incoherente e insuficiente para pretender mantener la existencia de un arrendamiento. Hay sí ciertamente una confusa situación, creada por todas las partes, sobre el aprovechamiento de las fincas, lo que se puede explicar en razón al vínculo familiar entre las partes, no resultando verosímil unos arrendamientos verbales en los que se abonan rentas a quienes como mero nudo-propietarias carecerían de todo derecho, acuerdo verbal que *no* se sabe si se superponen o absorben a los documentados. Queda claro que las relaciones a las que se han sometido las partes no son las propias de *un* contrato de arrendamiento.

QUINTO.- En la cuarta de las alegaciones del recurso se centra la principal queja del demandado, que pivota, en el que se reitera la unidad de explotación, de suerte que fue él quien costeó los viñedos y el riego, que se consideran de su propiedad, en lo que podría considerar una suerte de derecho de superficie rústica.

En la cuarta de las alegaciones vuelve a insistir la parte en que el valor de lo ejecutado a su costa y de la puesta en valor de las fincas mediante la plantación de las viñas y a su dotación de riego, a su costa y con su trabajo lo que configura, en el parecer de la parte recurrente, un derecho de superficie rústico, en virtud del cual se adquiere un derecho de propiedad parcial, separado y temporal de lo sembrado o plantado. Es necesario, en el parecer de la parte recurrente, un documento acreditativo de ello, pero no escritura pública, y el del recurrente estaría constituido por el Registro Vitícola. Tal derecho de superficie es un derecho real de goce.

El motivo es de rechazar. En primer lugar por la incompatibilidad conceptual que tiene con el arrendamiento que había alegado en la oposición a la demanda y, el margen, por cuanto que está vedado por el art. 456 LEC, al responder al modelo de apelación limitada, en virtud del cual se permite una revisión por parte del tribunal de segundo grado de lo actuado y resuelvo en la primera instancia, pero bajo ningún concepto pueden realizar nuevos planteamientos, alterando la causa de pedir hecha valer en la primera instancia, lo que generaría una clara indefensión a la parte contraria.

SÉPTIMO.- El último motivo relativo a la oposición se centrará en defender que no está acreditada la parte correspondiente a la demandante, pues siendo arrendatario y propietario de la explotación no tendría obligación alguna, y que si lo hizo en vida del padre lo fue de manera voluntaria y en agradecimiento a la colaboración que el mismo les podría prestar, advirtiendo además que falta ahora uno de los cónyuges.

Es reiterar lo ya contestado: la demandante es usufructuaria, no hay prueba de arrendamiento alguno y no se puede pretender que los viñedos puedan tener una configuración jurídica autónoma que supondría de facto la anulación de los derechos del usufructuario.

En cuanto a la cuantía se concretaron en el trámite de conclusiones, sobre la base de la

prueba pericial y la rectificación contenida en la misma, en proporción a la superficie objeto de usufructo, sin que alcance a explicar en el recurso en qué error se ha incurrido, fuera de la afirmación de que no se sabe en qué concreta parcela se han obtenido los rendimiento vinícolas, con olvido de que él mismo viene defendiendo recurrentemente la unidad de la explotación, por lo que, aparte de que sería deducción razonable la de presumir el mismo rendimiento en todas ellas, esa misma unidad opera en contra de la oportunidad de indagar sobre la concreta producción de las distintas parcelas.

OCTAVO.- No mejor suerte ha de tener la pretensión de extinción del usufructo. Al margen de pretender hacer prevalecer el de viudedad sobre aquél sobre el que se posesionó y que es objeto de causa de pedir en la acción ejercitada, pues aun situándonos en el ámbito de ese usufructo de origen familiar, la pretensión de su extinción parte de una situación inexistente, como lo es que sea ella la que lo explota y administra, lo que no es el caso, sino antes al contrario una administración y explotación que lleva el mismo nudo-propietario, por lo que la acción prevista en el art. 292 CDFA es inaplicable al supuesto de autos. Como también la invocación al régimen de los derechos hereditarios del cónyuge viudo en el C. Civil, que además de inaplicable en el caso, no se corresponde con la situación existente ni tampoco con los presupuestos de la norma.

***** Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Zaragoza de 15 de septiembre de 2016. Interpretación de cláusula testamentaria otorgada por matrimonio. Sustitución fideicomisaria de residuo. Facultad de disposición del fiduciario. Amplitud y libertad en derecho aragonés**

"PRIMERO.- La actora, sobrina de D. J quien falleció en fecha 9/10/2005 en estado de casado con Doña. P, habiendo otorgado ambos cónyuges en fecha 19/11/2001 testamento mediante el cual se instituían mutua y recíprocamente herederos universales en pleno dominio y libre disposición (documento 1 demanda), ejercita en las presentes actuaciones una acción en solicitud de que se declare la nulidad parcial del testamento otorgado por la citada sra. P en fecha 1/12/2005 por entender que ésta dispuso en el mismo indebidamente de bienes, concretamente de la mitad indivisa de un piso, habida cuenta que en el inicial testamento otorgado por los cónyuges se había instituido un fideicomiso de residuo (Disposición Segunda) mediante el cual los bienes de los que no hubiese dispuesto el cónyuge supérstite en el momento de su fallecimiento serían heredades, por iguales mitades indivisas, por las respectivas sobrinas de los testadores (la actora y la codemandada Sra. S); asimismo, y como consecuencia de lo anterior, solicita que se declare también la nulidad de todos los actos de disposición posteriores llevados a cabo respecto al citado bien.

Por su parte las demandadas, declaradas todas ellas herederas de su difunta tía (falleció el 30/09/2012) en el mencionado testamento de 1/12/2005, se oponen a la pretensión actora pues entienden que ésta sí que dispuso libremente de la totalidad de los bienes haciéndolo mortis causa, no existiendo ningún límite ni impedimento que le privase de dicha facultad, por lo que no existe ningún bien residual al que aplicar el destino establecido en el mencionado fideicomiso de residuo.

SEGUNDO.- Como cuestión previa hay que comenzar señalando que dado que ambos cónyuges poseían la vecindad civil aragonesa, resulta de aplicación al presente supuesto la normativa establecida al respecto en el CDFA y, en concreto, lo dispuesto en los arts. 395 y 419.3 del citado texto legal.

Dicho esto, y entrando a conocer del fondo del asunto, lo que aquí se plantea es la forma en la que debe interpretarse el contenido de la mencionada Disposición Segunda del testamento. otorgado *por ambos esposos, y en* concreto si tal y como está redactada la misma no existe ninguna limitación respecto al título de disposición de los bienes (ínter vivos o mortis causa), y por lo tanto la heredera sra. P dispuso correctamente del piso en cuestión (que es el criterio sustentado por las demandadas) o, por el contrario, si la posibilidad de disponer del bien mortis causa debía venir expresamente indicada en el testamento y al no hacerse constar nada al respecto le venía vedada tal posibilidad a la testadora (tesis mantenida por la actora)

TERCERO.- Planteados así los términos del debate hay que indicar que en el presente caso nos encontramos ante una recíproca institución hereditaria entre cónyuges a la que se le atribuye el carácter de sustitución fideicomisaria de residuo, y cuyo 'efecto es que el

cónyuge supérstite hereda los bienes del premuerto, siempre que éste no tenga descendientes corno es este el caso (art. 395.1 CDFA); es decir, el viudo (en este caso la viuda) se hace dueño absoluto de los bienes de su premuerto cónyuge y puede disponer de ellos a su arbitrio. Es cierto que, en el Derecho Común, y también en el Código de Derecho Civil de Cataluña (art. 426.53), así como en la jurisprudencia desarrollada al respecto, se establece la exigencia de que la facultad de disposición del fiduciario mortis causa deba venir expresamente recogida en el título, pero no lo es menos que en la legislación foral aragonesa, normativa aplicable al presente supuesto, el art. 419.3 del citado texto legal señala expresamente que "·.....*fallecido el testador supérstite sin haber dispuesto por título alguno de los bienes procedentes del primeramente fallecido, pasarán los que de ellos quedaren a los parientes llamados*.....", y esta amplitud y libertad de disposición ha sido reconocida por el TSJA en Sentencia de fecha 30/09/2005 cuando indica, Fundamento de Derecho Tercero, que el viudo que hereda los bienes de su difunto consorte puede disponer de ellos a su libre arbitrio y por cualquier título, "inter vivos o mortis causa, oneroso o gratuito".

Por tanto, al haber aceptado la viuda la herencia proveniente de . su fallecido esposo (escritura de 17 de noviembre de 2005), podía disponer, y dispuso, libremente de los bienes en la forma o mediante el título que estimó adecuado, en este caso mortis causa, por lo que no concurre el supuesto de nulidad contemplado en el art. 424 del CDFA.

CUARTO.- A mayor abundamiento, y por si lo hasta ahora indicado no fuese suficiente para rechazar la pretensión actora, debe asimismo tenerse en cuenta que, según la declaración testifical del sr. M (testigo especialmente cualificado al ser el notario autorizante de todas las escrituras), y si bien el mismo no puede recordar, lógicamente dado el tiempo transcurrido., el caso concreto, resulta muy ilustrativa su práctica habitual a la hora de redactar esto tipo de disposiciones testamentarias, que era la de requerir expresamente a los testadores si querían que se incluyese algún tipo de limitación en la facultad de disposición del cónyuge supérstite y en caso de respuesta afirmativa *se* hacía constar tal limitación, lo que permite concluir *que «i no* aparecer en el presente caso ninguna de ellas, la intención de los testadores era la de otorgarse plena libertad de disposición (art. 675 Código Civil) "

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 16 de marzo de 2016. Legado testamentario. Usufructo. Compatibilidad con el usufructo vidual aragonés. Doctrina de los propios actos. Prueba de arrendamiento**

"PRIMERO.- Tras hacer una síntesis de lo que, en el parecer del recurrente en la sentencia de instancia, se considera el perfil jurídico del derecho de usufructo, bien el usufructo corno legado bien porque se reservó el mismo la demandante al hacer donación a su hijo, entrará en el motivo a reflexionar sobre la naturaleza jurídica del derecho usufructuario de la demandante, en el que se destaca su carácter esencialmente familiar, y que la cláusula testamentaria debe entenderse referenciada al usufructo vidual, y no un usufructo estricto secuente a un legado.

Punto de partida es el testamento mancomunado otorgado por la demandante Da A y su fallecido esposo D. A, el día 22 de noviembre de 2000 en el que, en su primera cláusula y como rúbrica se identifica la disposición testamentaria como "LEGADO", y en virtud de la cual "se legan el usufructo universal y vitalicio de todos sus bienes...".

Es incontestable que el usufructo es un legado. Podrá discutirse si es posible que ese usufructo puede conciliarse o no con el derecho al usufructo legal aragonés, de naturaleza familiar. Pero que se concibió testamentariamente un derecho autónomo al usufructo de los bienes del otro, de la totalidad de los bienes, es tan indiscutible como que en la escritura de aceptación de herencia, a la que compareció el recurrente y la que consintió en su integridad de manera concurrente con su madre demandante, y en la que, en su "estipulación" tercera y también bajo la rúbrica "LEGADO" se adjudica consensuadamente a Dª A el usufructo de todas las fincas. Es incontestable que la demandante se configuró como titular de un derecho de usufructo, con su perfil jurídico propio y no el que le pudiera corresponder en razón al matrimonio. Y todavía más, si es que pudiera existir duda alguna, los comparecientes en el otorgamiento de esa escritura, y entre ellos el recurrente, D. M, tomaron posesión de sus legados.

Desconocer ese legado es negar lo evidente y actuar contra sus propios actos. Podrá o no subyacer bajo este usufructo el legal de viudedad aragonesa, pero el prevalente es aquél del que se tomó posesión.

SEGUNDO.- Igual suerte desestimatoria debe tener la segunda de las alegaciones, centradas en el alcance del acuerdo de colaboración de explotación familiar, de 29 de noviembre de 1991, acuerdo otorgado notarialmente, doliéndose el recurrente de que el Juzgado haya basado su conclusión en el sentido de que dicho acuerdo comprendía solo fincas privativas en el mero testimonio de la hija de la actora (y hermana del demandado), cuando tal testigo no fue parte del acuerdo.

Motivo que, como se ha anticipado, no se puede acoger pues aparte de tal testimonio, aunque a la notaría comparecieron la demandante, Dª A y su esposa, D. A, la única otorgante es Da A y no su esposo, y además lo hace ella y sólo ella como "titular" de una Explotación Familiar Agrícola. Y es ella también, y sólo ella, la que asume el compromiso a

que su hijo, ahora demandado y recurrente, partícipe total, directa y personalmente en todos los trabajos y en la gerencia de la explotación. Por tanto resulta no una deducción sino una evidencia que las fincas que comprendía ese acuerdo nada tenían que ver con las *que son* objeto de reclamación en cuanto a su usufructo que la actora ha recibido vía legado, pues tenían que ser aquéllas sobre las que en 1991 ya tenía el uso y aprovechamiento como privativas.

TERCERO.- A ese acuerdo de colaboración se le quiere atribuir en el recurso otro alcance, que no se termina de explicar. Objeto de la demanda son las fincas legadas en usufructo y no las privativas de la demandante, por lo que la sentencia de instancia ni entra ni podría entrar, de manera que la explotación no se tiene que ver afectada. Transcribe el recurrente parte de esos acuerdos que se refieren única y exclusivamente al ámbito de la explotación objeto del acuerdo, y no a esa explotación unitaria que el demandado ha configurado utilizando fincas propias con las del acuerdo y con las que son objeto del usufructo demandado.

CUARTO.- Insiste la parte recurrente en que las fincas objeto del proceso están arrendadas a su favor, de suerte que no se podría dar satisfacción a su usufructo. A lo que es de contestar que aunque se ha cuidado la parte de no precisar a cual de las fincas alcanzan esos arrendamientos los documentos aportados sólo desvelan arrendamientos sobre nueve parcelas, en los que hay pactado un plazo de duración de diez años, sin que se aporte prueba de su subsistencia por cuanto ni se prueba ni tan siquiera se alega, fuera de lo que luego se dirá, el pago de las rentas pactadas, de manera que en un supuesto en el que el propio recurrente había asumido un protagonismo absoluto en el aprovechamiento agrícola de las fincas propias con las que lo eran de sus padres, consorciales o no, que se hubiera mantenido la vigencia de ese vínculo contractual sobre esas pocas parcelas resultaría verosímil a partir de la prueba del pago del arrendamiento.

De una manera confusa, en el hecho segundo del escrito de contestación se hace un totum revolutum en cuanto al aprovechamiento de las fincas, de todas las fincas, afirmándose un acuerdo conforme al cual la renta de todas las fincas, todas ellas, las destinadas a viñas como las de cereal, se abonaría al padre la ayuda o beneficio de la PAC, y que tras su fallecimiento las hermanas del demandado, cómo nudas propietarias, percibirían una pequeña cantidad anual y la madre, Dª A, las ayudas del almendro (doc. Nº 14, f. 1021).

A criterio de la Sala esta versión es incoherente e insuficiente para pretender mantener la existencia de un arrendamiento. Hay sí ciertamente una confusa situación, creada por todas las partes, sobre el aprovechamiento de las fincas, lo que se puede explicar en razón al vínculo familiar entre las partes, no resultando verosímil unos arrendamientos verbales en los que se abonan rentas a quienes como mero nudo-propietarias carecerían de todo derecho, acuerdo verbal que *no* se sabe si se superponen o absorben a los documentados. Queda claro que las relaciones a las que se han sometido las partes no son las propias de *un* contrato de arrendamiento.

QUINTO.- En la cuarta de las alegaciones del recurso se centra la principal queja del

demandado, que pivota, en el que se reitera la unidad de explotación, de suerte que fue él quien costeó los viñedos y el riego, que se consideran de su propiedad, en lo que podría considerar una suerte de derecho de superficie rústica.

En la cuarta de las alegaciones vuelve a insistir la parte en que el valor de lo ejecutado a su costa y de la puesta en valor de las fincas mediante la plantación de las viñas y a su dotación de riego, a su costa y con su trabajo lo que configura, en el parecer de la parte recurrente, un derecho de superficie rústico, en virtud del cual se adquiere un derecho de propiedad parcial, separado y temporal de lo sembrado o plantado. Es necesario, en el parecer de la parte recurrente, un documento acreditativo de ello, pero no escritura pública, y el del recurrente estaría constituido por el Registro Vitícola. Tal derecho de superficie es un derecho real de goce.

El motivo es de rechazar. En primer lugar por la incompatibilidad conceptual que tiene con el arrendamiento que había alegado en la oposición a la demanda y, el margen, por cuanto que está vedado por el art. 456 LEC, al responder al modelo de apelación limitada, en virtud del cual se permite una revisión por parte del tribunal de segundo grado de lo actuado y resuelvo en la primera instancia, pero bajo ningún concepto pueden realizar nuevos planteamientos, alterando la causa de pedir hecha valer en la primera instancia, lo que generaría una clara indefensión a la parte contraria.

SÉPTIMO.- El último motivo relativo a la oposición se centrará en defender que no está acreditada la parte correspondiente a la demandante, pues siendo arrendatario y propietario de la explotación no tendría obligación alguna, y que si lo hizo en vida del padre lo fue de manera voluntaria y en agradecimiento a la colaboración que el mismo les podría prestar, advirtiendo además que falta ahora uno de los cónyuges.

Es reiterar lo ya contestado: la demandante es usufructuaria, no hay prueba de arrendamiento alguno y no se puede pretender que los viñedos puedan tener una configuración jurídica autónoma que supondría de facto la anulación de los derechos del usufructuario.

En cuanto a la cuantía se concretaron en el trámite de conclusiones, sobre la base de la prueba pericial y la rectificación contenida en la misma, en proporción a la superficie objeto de usufructo, sin que alcance a explicar en el recurso en qué error se ha incurrido, fuera de la afirmación de que no se sabe en qué concreta parcela se han obtenido los rendimiento vinícolas, con olvido de que él mismo viene defendiendo recurrentemente la unidad de la explotación, por lo que, aparte de que sería deducción razonable la de presumir el mismo rendimiento en todas ellas, esa misma unidad opera en contra de la oportunidad de indagar sobre la concreta producción de las distintas parcelas.

OCTAVO.- No mejor suerte ha de tener la pretensión de extinción del usufructo. Al margen de pretender hacer prevalecer el de viudedad sobre aquél sobre el que se posesionó y que es objeto de causa de pedir en la acción ejercitada, pues aun situándonos en el ámbito de ese usufructo de origen familiar, la pretensión de su extinción parte de una

situación inexistente, como lo es que sea ella la que lo explota y administra, lo que no es el caso, sino antes al contrario una administración y explotación que lleva el mismo nudo-propietario, por lo que la acción prevista en el art. 292 CDFA es inaplicable al supuesto de autos. Como también la invocación al régimen de los derechos hereditarios del cónyuge viudo en el C. Civil, que además de inaplicable en el caso, no se corresponde con la situación existente ni tampoco con los presupuestos de la norma."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 9 de noviembre de 2016. Testamento otorgado en Reino Unido. Validez. Capacidad del testador**

"PRIMERO.- Las hijas de don J, fallecido el 22 de noviembre de 2009 bajo vecindad civil aragonesa, impetraron acción de nulidad del testamento otorgado en Birmingham (Inglaterra), ante, la notaría doña *L* el *28* de agosto de 2009, y por el cual instituía heredera universal de sus bienes a doña M, con la que contrajo matrimonio el 2 de septiembre de 2009, respetando la legítima de sus hijas sobre la mitad de la herencia. Se fundamentó la acción sobre la base de que 1) No se han respetado las formas y solemnidades que la Ley Aragonesa de Sucesiones de 1999 vigente entonces, y concordantes del Código Civil exigen para el otorgamiento de un testamento personal y abierto. 2) Falta de capacidad del testador.

Los antecedentes fácticos del supuesto sometido a nuestra consideración -y de necesario conocimiento para la resolución del recurso- se encuentran oportunamente expuestos en el fundamento jurídico segundo de la sentencia objeto de apelación, y que reproducimos a continuación:

1.- J nacido en 1930, contrajo matrimonio en 1956 con I, fruto del cual nacieron las tres hijas ahora demandantes.

2.- En noviembre de 2007 J, interpuso demanda de divorcio frente a su esposa, siguiéndose autos de divorcio con el n *1295/2007* ante el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de esta capital, que dictó sentencia estimatoria en fecha 25 de marzo de 2008.

3.- Desde principios de 2008 J convivió con la demandada M en el domicilio que ésta tenía en el barrio de de Zaragoza.

4.- Desde tal momento hasta su fallecimiento acaecido en 22 de noviembre de 2009, J estuvo ingresado en diversos períodos y en diferentes hospitales de esta capital por padecimientos cuya etiología no fue diagnosticada.

5.- En tal interin se sucedieron diversos incidentes que dieron lugar a la formulación de denuncias cruzadas, siguiéndose juicios de faltas. También se siguieron autos de liquidación de la sociedad conyugal del matrimonio ya disuelto.

6.- Y en marzo de 2009 las demandantes instaron la incapacidad de su padre mediante la oportuna demanda siguiéndose procedimiento de incapacidad ante el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de esta capital con el nº 509/2009, demanda que fue contestada por el entonces demandado oponiéndose a tal petición y adjuntando un informe pericial médico forense fechado el día 30 de junio de 2009, que concluía en que J tenía conservadas sus capacidades cognitivas y volitivas.

7.- En fecha 31 de julio de 2009 J y su entonces pareja manifestaron ante la Notaria de esta capital María Luisa Loren su propósito de contraer matrimonio levantándose la oportuna Acta.

8.- En agosto de 2009 la pareja viajó a Birmingham (Inglaterra) instalándose en el domicilio de la hija de la demandada que vivía en tal ciudad con su esposo D.

9.- Ingresado nuevamente J en el pabellón 28 del Hospital Heartlands de la citada capital inglesa, el día 31 de agosto de 2009 otorgó testamento ante la Notaria L, interviniendo como testigos un compañero de D, S, y quien actuó de intérprete en tal instrumento, J. En el referido testamento, fechado el día 28 de agosto, escrito en castellano y en inglés, y que fue leído y comentado por D. J, se instituía heredera a la demandada M a salvo "los derechos de legítima que estrictamente puedan corresponder a sus hijas, con las que no tiene relación personal alguna y desheredaría en caso de existir causa legal para ello, debido a la ingratitud y falta de cariño demostrada hacia su padre y por las falsedades e insultos que las mismas han proferido con respecto al testador y su prometida".

10.- El día 2 de septiembre de 2009 contrajeron matrimonio en la ciudad *de* Birmingham.

11.- El día 22 de noviembre de 2009 falleció J en tal ciudad inglesa.

12.- El proceso de incapacitación seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 13 fue archivado por resolución de 2010.

13.- En mayo de 2010 las aquí demandantes interpusieron demanda de nulidad del matrimonio anterior frente a la aquí demandada, dictándose sentencia en fecha 15 *de* noviembre de 2010 por el Juzgado de Primera Instancia nº l6 de esta capital en autos seguidos con el nº 612/2010-C, por la que se desestimaba la demanda, lo que fue confirmado por la Sección II de la Audiencia Provincial en sentencia de 26 de abril de 2016.

Sobre esta base fáctica, la sentencia objeto de apelación consideró, en resumen, que en el presente caso se otorgó testamento ante una notaría inglesa conforme a las formalidades de aquella nación -conforme a los artículos 11 y 732 CC-. Por lo que la nulidad formal pretendida debía desestimarse.

Con relación al segundo motivo de impugnación del testamento, consideró que existían numerosas pruebas que evidenciaban el correcto e idóneo entendimiento y voluntad que tuvo el causante en el momento de otorgamiento del testamento.

Por todo ello el Juez a quo desestimó la acción entablada.

Contra esta resolución se alzan las demandantes: refieren que el Juez a quo silencia, en la resolución impugnada, la expresa voluntad del testador de someter todas las disposiciones y cláusulas al .derecho y tribunales aragoneses, por ser ésta su vecindad civil, infringiendo el artículo 90 de la Ley de sucesiones por causa de muerte en Aragón, insistiendo en la falta de requisitos formales exigidos para la validez del testamento. Indebida aplicación de los artículos 11 y 732 Cc, cuestionando finalmente la capacidad del testador.

SEGUNDO.- El artículo 11 CC establece que las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se

otorguen y el artículo 13 CC refiere que las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicación, así como las del Título IV del Libro I, con excepción de las normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, tendrán aplicación general y directa en toda España.

Pues bien, convenimos con el Juez a quo que ninguna discusión ofrece la validez formal del testamento discutido por haber sido otorgado conforme a las prescripciones de la legislación del inglesa conforme previene la norma de conflicto contenida en el art. 11 CC, según el cual las formas y solemnidades de los testamentos se regirán por la Ley del país en que se otorguen, así como el art. 732 Cc, reconociendo validez a dicho documento público aportado apostillado conforme al Convenio de la Haya de 5-10-61, al estar dicho Convenio ratificado por España (BOE 22911978, de 25 septiembre 1978), debiendo añadir a lo expuesto al respecto en la instancia, que el citado Convenio, es una norma que ha venido, como dice el Tribunal Supremo -STS 19 de febrero de 2000-, a liberalizar los requisitos para la validez de los documentos otorgados y procedentes de otras naciones, pues suprime la exigencia de la legalización para los documentos públicos extranjeros y atribuye la categoría de públicos en su artículo 1, a las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro. A estos efectos, el artículo 323-2-2º LEC, dispone que se considerarán como documentos públicos los documentos apostillados, por lo que habrá de concluirse que encontrándose apostillado el documento no necesita ninguna autenticación.

Partiendo de la validez formal del testamento, cuestiona el apelante la aplicación del artículo 11. Sin embargo, consideramos que el artículo 13 CC, establece el ámbito de aplicación, y en nuestro caso, se ha respetado, toda vez que las formas y solemnidades se han cumplido, conforme previene la regia del artículo 11 CC; y en cuanto al contenido del testamento, se ha respetado el derecho foral de Aragón, en cuanto que se ha dispuesto de la parte de libre disposición respetando a los legitimarios, conforme a la norma.

El artículo 732 refiere que los españoles podrán testar fuera del territorio nacional sujetándose a las formas establecidas por las leyes del país en que se hallen. Es decir, el testamento es válido pues se han observado las leyes inglesas, conforme al artículo 1 del Convenio de la Haya, tratando estas normas de favorecer la validez del testamento en cuanto a la forma, objetivo fundamental del convenio. *Y* del mismo modo ha sido observado, relación al contenido, la vecindad civil aragonesa del testador.

Finalmente, la falta de capacidad del testador ha de ser probada por quien la alega y no se cumple con tal carga en el supuesto de autos."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 14 de diciembre de 2016. Nulidad de testamento. Capacidad del testador. Testamento anterior. Legítima. Uso de la fiducia**

"I.- La sentencia recurrida desestima íntegramente la pretensión de la demanda, encaminada a obtener la nulidad del testamento de D. E, por falta de capacidad del testador y, consecuentemente , la validez del testamento mancomunado efectuado por el testador y su esposa en 1993; la nulidad de la institución de heredera universal de la demandada Dª. M; la inexistencia de causa de desheredación de Dª. Mar, y el reconocimiento de la legítima que corresponde a la misma. Frente a dicha resolución se alza la parte demandada que denuncia incongruencias de la resolución recurrida, al entender que, si bien la juzgadora de instancia ha resuelto sobre la primera de las pretensiones, no se ha pronunciado sobre las restantes.

II.- Ciertamente, la sentencia recurrida centra su razonamiento en la primera y principal pretensión de la demanda que se concreta en la nulidad del testamento de D. E, por falta de capacidad del testador, desarrollando un extenso argumentarlo para rechazarla, hasta tal punto que la parte demandante, en su recurso, asume aquellos razonamientos, y fundamenta su impugnación en la incongruencia de la resolución recurrida al entender que no ha pronunciado sobre las restantes pretensiones de la demanda. La sentencia satisface las exigencias de coherencia cuando da respuesta razonada a las pretensiones de las partes, aunque no contenga un razonamiento autónomo y pormenorizado de todos y cada uno de los fundamentos jurídicos en que aquellas se sustenten. No es necesario que la sentencia conteste uno por uno a todos los pedimentos o pretensiones jurídicas desglosados por las partes en sus pretensiones. Basta que decida, aunque sea globalmente, todas las cuestiones debatidas y propuestas por las partes. Así la Jurisprudencia señala que "La exigencia de congruencia de las resoluciones judiciales, no exige, que los Jueces y Tribunales se pronuncien concreta y detalladamente sobre todos y cada uno de los argumentos que, según las partes, puedan fundamentar sus pretensiones" (Auto Tribunal Supremo 1 febrero 2002 y sentencia 16 julio 2001). Por otra parte, las sentencias absolutorias no pueden ser por lo general incongruentes, pues resuelven sobre todo lo pedido, salvo que la desestimación de las pretensiones deducidas por las partes se hubiera debido a una alteración de la causa de pedir o a la estimación de una excepción no opuesta por aquellas ni aplicable de oficio por el juzgador» (Sentencias del T. Supremo 476/2012, de 20 de julio, 365/2013, de 6 de junio, y 31/2014, de 12 de febrero)

II.- Como se ha dicho en el fundamento jurídico primero las pretensiones de la demanda se concretan en las siguientes: 1.- La nulidad del testamento de D. E, por falta de capacidad del testador. 2.- La validez del testamento mancomunado efectuado por D. E y su esposa en 1993; 3.- La nulidad de la institución de heredera universal de la demandada Dª. Mar; 4.- La declaración de la inexistencia de causa de desheredación de Dª. M; y 5.- El reconocimiento de la legítima que corresponde a la demandante Dª. Mar. La parte recurrente sostiene que la juzgadora se ha limitado a pronunciarse sobre la primera de las cuestiones y no ha resuelto sobre las restantes. Ahora bien no puede obviarse que todas las demás pretensiones son subsidiarias de la primera. Efectivamente, así como extensa y

pormenorizadamente has razonado la juzgadora distancia el testamento de don E no es nulo, no puede sostenerse en modo alguno la validez de un testamento anterior, porque como señala el artículo 739 del C. Civil, el testamento anterior queda revocado de derecho por el posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo o en parte, sin que para ello no será necesario que se exprese la voluntad de revocar el testamento anterior. Respecto de la tercera, cuarta y quinta pretensiones, debe recordarse el contenido del artículo 486 del Código de Derecho Foral de Aragón que establece que la mitad del caudal fijado conforme al artículo 489 debe recaer en descendientes, de cualquier grado, del causante, que son los únicos legitimarios. "*Esta legítima colectiva puede distribuirse, igual o desigualmente, entre todos o varios de tales descendientes, o bien atribuirse a uno solo*". Así las cosas, el testador no ha desheredado a su hija M, ni ha vulnerado la legítima, sino que tan solo ha hecho uso de la fiducia que tenía encomendada y atribuido a uno solo de los herederos el remanente hereditario, de acuerdo con el citado artículo 489. Por otra parte tampoco puede sostenerse que se ha vulnerado la fiducia, por cuanto que en el testamento mancomunado se designó herederas universales a las dos hijas, y ello porque si se lee atentamente dicho documento se comprobara que la institución de de la universales de las dos hijas se produce "para el caso de conmoriencia o que el cónyuge sobreviviente no ejercicio se las facultades contenidas en la disposición anterior (fiducia); lo que no ha ocurrido porque efectivamente el sobreviviente ha ejercitado la filosofía sucesoria en el testamento que es objeto de impugnación. En consecuencia procede desestimar el recurso y confirmar internamente la resolución recurrida."

75. LEGÍTIMAS

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 18 de mayo de 2016. Intangibilidad de la legítima. Nombramiento de administrador hasta el cumplimiento de una determinada edad. Presunción iuris tantum de justa causa. Concepto de acto de administración. Intereses de los legitimarios**

"PRIMERO.- En el presente caso, los legitimarios, que son los actores, impugnan el testamento en el que se les designa como tales, en concreto la disposición segunda del aquel, en la que se nombra un administrador de los bienes que por su herencia se adjudiquen a sus hijos hasta que alcancen la edad de veinticinco años, razonando que aquella grava la legítima, y que debe ser considerada ineficaz, desde el momento en que los herederos alcancen la mayoría de edad para administrar sus bienes, y por tanto pide que se tenga por no puesta en todo aquello que exceda de la mayoría de edad legal que les autorice a administrar sus bienes.

SEGUNDO.- En primer lugar, ha de decirse que la Sentencia que fue dictada por esta misma Sala de catorce de octubre de dos mil ocho –número 536, rollo de apelación 363/2008--, que se cita por la actora en apoyo de su argumentación, que es por cierto la única que se ha podido encontrar que se pronuncie sobre una caso de cierto parecido con el presente—en aquella, la figura controvertida era el albacea, y no el administrador como en el presente pleito, salvedad hecha, y ha hacerse constar, de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de ocho de marzo de dos mil trece en cuyo caso se estudiaba idéntica y exacta cláusula pero aplicada a otros diferentes efectos, por lo que carece de interés ahora--, pero el supuesto de aquella anterior de esta Sala es difícil de incardinar en el que ahora se enjuicia, dadas las importantes divergencias existentes entre ambos, pues, tal como se transcribe en el correspondiente antecedente de hecho de aquella primera Sentencia dictada por el Juzgado –naturalmente, las actuaciones no se han podido consultar por no encontrarse a disposición de este Tribunal al haber sido devueltas en su momento al Juzgado--, en el suplico de la demanda, que fue aceptado en la resolución, se decía: "Se debe tener por no puesta y es ineficaz la disposición siguiente de dicho testamento, que impone la limitación de no poder disponer de los bienes hasta que se cumpla la edad de treinta años", esto es, aquel caso se refería a las facultades de disposición, que se impedían ejercer hasta que se cumpliera la edad de treinta años, y en el acto presente se designa un administrador hasta que se llegue a la edad de veinticinco años, lo que es claramente diferente, por lo que la acomodación de aquella resolución al supuesto presente no resulta factible, una referida a las facultades de administración, y la otra anterior a las de disposición.

TERCERO.- Bien sabido es que La ley protege la legítima, y por eso distingue dos tipos de intangibilidad de la misma: la cuantitativa y la cualitativa. Con el segundo tipo, la ley impide al testador imponer un gravamen al legitimario, mientras que en virtud de la intangibilidad cuantitativa se prohíbe otorgar menos de lo que por legítima corresponda. El primer tipo está previsto en el artículo 813.2 del Código Civil, y su incumplimiento

produce la anulación del gravamen mientras que el segundo se encuentra en el artículo 815 siguiente, y da lugar al complemento de la legítima la intangibilidad afecta al causante, que no puede ni gravar al legitimario, ni dejarle menos de lo que por legítima le corresponda y abre las acciones que éste tiene para corregir las disposiciones que le perjudican, cuyos preceptos coinciden en esencia con los artículos 497 y 498 del Código Aragonés La intangibilidad afecta al causante, que no puede ni gravar al legitimario, ni dejarle menos de lo que por legítima le corresponda y abre las acciones que éste tiene para corregir las disposiciones que le perjudican. El Código de esta región tiene, además, unas disposiciones concretas en la regulación de la legítima, y, entre otras, por lo que se refiere al supuesto que se discute, por ser de innegable interés en el mismo, merecen expresa cita las siguientes:

En el artículo 497 se trascribe lo siguiente: "C*umplimiento en bienes relictos. L*a legítima debe atribuirse en bienes relictos. **2.** El incumplimiento del deber de atribuir en bienes relictos lo que falte para alcanzar la cuantía de la legítima colectiva, computadas las donaciones imputables, faculta individualmente a los legitimarios afectados para pedir que la parte proporcional que en la diferencia les corresponda les sea entregada en bienes relictos por los extraños que los han recibido, renunciando en favor de éstos a los correspondientes bienes no relictos. **3.** La reducción de liberalidades de bienes relictos hechas en favor de no descendientes no podrá afectar al cónyuge viudo y para su práctica será de aplicación el artículo 496".

El artículo 498 del Código Aragonés expone: "Prohibición de gravámenes sobre la legítima. El causante solo puede imponer gravámenes sobre los bienes relictos que atribuya a sus descendientes cuando el valor de los atribuidos libres de gravamen sumado al de las donaciones imputables a la legítima cubra el importe de la legítima colectiva. 2. Se entiende a estos efectos por gravamen toda carga, condición, término, modo, usufructo, obligación, prohibición o limitación impuestos en el título sucesorio que disminuya el valor de los bienes relictos o la plenitud de la titularidad o del conjunto de facultades que correspondían al causante. No se consideran gravámenes los legados en titularidad plena de bienes ciertos con que el causante hubiera gravado a un descendiente".

Para mejor entendimiento de cual pueda ser la posible naturaleza del gravamen, también resulta de conveniente cita el artículo 813 del Código Civil cuando dice que: "El testador no podrá privar a los herederos de su legítima sino en los casos expresamente determinados por la ley. Tampoco podrá imponer sobre ella gravamen, ni condición, ni sustitución de ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo de viudo y lo establecido en el artículo 808 respecto de los hijos o descendientes judicialmente incapacitados". O, con igual pretensión, ha de señalarse asimismo el *artículo 451-9 del Código Civil Catalán, que señala a su vez: "Intangibilidad de la legítima.* **1.** El causante no puede imponer sobre las atribuciones hechas en concepto de legítima o imputables a esta condiciones, plazos o modos. Tampoco puede gravarlas con usufructos u otras cargas, ni sujetarlas a fideicomiso. Si lo hace, estas limitaciones se consideran no formuladas".

El artículo 501 del Código Aragonés contiene otro precepto que viene a completar los anteriores, como es el artículo 501: "G*ravámenes permitidos.* No se incluyen en la

prohibición del artículo 498 los siguientes gravámenes: **1.º** Aquellos dispuestos en beneficio de otros descendientes, presentes o futuros, dentro de los límites de las sustituciones fideicomisarias. **2.º** Los establecidos para el caso de fallecer todos los legitimarios sin descendencia, y solo relativamente a los bienes de que cada uno no hubiere dispuesto. **3.º** Los establecidos con justa causa, que esté expresada en el título sucesorio o en documento público, conforme a lo previsto en el artículo siguiente. **4.º** Los demás previstos por la ley". El concepto de gravamen -se expone por los tratadistas-- es muy amplio: en él deben comprenderse tanto auténticas limitaciones de naturaleza real, como obligaciones de carácter personal, y así obviamente debe entenderse por la simple lectura del artículo 498. 2 antes transcrito: "Se entiende a estos efectos por gravamen toda carga, condición, término, modo, usufructo, obligación, prohibición o limitación impuestos en el título sucesorio que disminuya el valor de los bienes relictos o la plenitud de la titularidad o del conjunto de facultades que correspondían al causante", y sobre el mismo, y en concreto sobre si el nombramiento de administrador hasta aquella edad de veinticinco años constituyen "gravamen" en dicho sentido, ha de ocuparse, principalmente, esta Sentencia al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la del Juzgado.

Y el artículo 502 siguiente, también de importancia, añade: "Justa causa de gravamen. **1.** Solo es justa la causa que busca un mayor beneficio del legitimario gravado o de los demás legitimarios. **2.** Si el gravamen impusiera una obligación cuyo incumplimiento produzca la transferencia de los bienes heredados por el gravado a otra persona, solo será válido cuando esa persona sea otro descendiente. 3. La causa expresada deberá tenerse como justa mientras no se demuestre que no lo es". En este sentido, se dice por los tratadistas que estudian la legítima en el Derecho Aragonés, la justa causa debe entenderse en un sentido restrictivo, aquella por cuyo medio se busca un mayor beneficio del legitimario gravado, y no en un concepto meramente vulgar.

La consecuencia de la infracción de las anteriores normas se contienen en el artículo 499 del Código, cuando expresa que *el legitimario a quien se hubiera impuesto un gravamen que contravenga lo dispuesto en el artículo anterior "Tiene derecho a que se tenga por no puesto" –con ciertas reglas posteriores que concretan el modo con que ha actuarse--, a diferencia de lo que se señalaba en el* 125 de la Compilación derogada, cuando decía que "Los gravámenes *se tendrán por no puestos", lo* que implicaba un cierto automatismo, que aparece corregido en la redacción vigente, en la que aquel ya no se acepta.

CUARTO.- Con lo que hasta el momento queda dicho, ya se deduce la necesidad de confirmar la Sentencia del Juzgado, siguiendo la misma argumentación que en ella se desarrolla. Es de repetir lo que se escribe en aquel artículo 502: "3. La causa expresada deberá tenerse como justa mientras no se demuestre que no lo es". Esto es, a la parte que afirma que no es justa la causa, corresponde su prueba, produciéndose así una traslación de la carga probatoria, y en el caso no se ha probado que la causa que pudiera haber explicado la necesidad de la administración estuviera justificada, aportando las alegaciones y pruebas necesarias, y esa falta de prueba debe interpretarse en contra de las pretensiones de la actora, tanto más cuando –según se dice en algún lugar del pleito—los

bienes de la herencia presentaban una cierta complejidad, que en cierto modo recomendaba una cierta prudencia y madurez en su gestión habitual.

QUINTO.- Profundizando sobre el tema, en la monografía "Intangibilidad de la legítima", de Fuenmayor Champin, Amadeo --se ha obtenido este texto de "Internet" ero no se dice el lugar de su publicación--, se encuentra una cierta solución al tema que se discute, si bien algo dubitativa, cuando expone: "Finalmente, y para terminar esta consideración general, baste decir que por la regla del artículo 813, 2º resultan prohibidos toda clase de gravámenes. Sánchez Roman afirma que en la prohibición vienen comprendidos así los gravámenes reales como los personales. Aunque no parece del todo claro lo que quiere decir con la expresión de "gravámenes personales", no puede dudarse que al testador no le es dado establecer ningún derecho real, condición, término o carga modal. Lo mismo ha de decirse respecto de las sustituciones difeicomisarias por cuanto implican una prohibición de disponer: resulta del propio artículo 813 y lo confirma el 777. En resumen, el testador no puede establecer sobre la legítima gravamen de ninguna clase". Y sigue diciendo este autor: "El Tribunal Supremo en sentencia de 15 de diciembre de 1922 declaró, interpretando la Ley 27 de Toro, con referencia a un testamento otorgado antes del Código Civil, que no debe considerarse como gravamen de la mejora el relativo a la administración, en cuanto que sólo impropiamente puede calificarse de gravamen "la restricción temporal en el manejo de dicha clase de bienes. Contra esta doctrina pueden verse las razones aducidas en la consulta número 153 de la Revista General de Legislación y Juriprudencia. Con acierto se indica en esta consulta que no debe hablarse en tal caso de "restricción temporal en el manejo de los bienes", sino de "entrega de los bienes en administración", lo cual constituye, sin duda alguna, un gravamen prohibido, en cuanto que merman las facultades del legitimario, al imponerle un administrador forzoso, que no puede despedir…", cuyas conclusiones dichas son de aplicar al presente supuesto.

SEXTO.- Los actos de administración son los de mera gestión del patrimonio ajeno, los que simplemente se dirigen al mantenimiento y conservación de la cosa, o percepción de los frutos o rentas que le sean propios, se refieren a su simple aprovechamiento, son de resultados transitorios y nunca definitivos, se trata de simples modificaciones que no afectan a la esencialidad del bien en su sentido más riguroso, y cualquier acto que traspase este límite ya no puede considerarse acto de administración –por insignificante que sea--, necesitando el consentimiento del dueño, debiendo tenerse en cuenta así, por ejemplo, lo que se dice en el artículo 398 del Código: "Para la administración y mejor disfrute será necesario el acuerdo de la mayoría de los partícipes,…". Desde otra perspectiva, el artículo 1713 del Código contrapone aquellos a los de disposición, al expresar que "El mandato concebido en término en términos generales no comprende más que los actos de administración. Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso". El artículo 1715 sigue diciendo: "No se consideran traspasados los límites de mandato si fuese cumplido de una manera más ventajosa para el mandante". En lo que se exceda el mandatario de los estrictos límites de la administración concedida, en mandante podrá instar la revocación del acto, y ésta es una de las conclusiones a se llega en la Sentencia del Tribunal Supremo de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, recurso de apelación 22013/2014, concebido para otro

supuesto pero también aplicable al presente, al decir: “Procede, consecuentemente, aplicar la norma general del artículo 1259 CC a los actos realizados por el guardador de hecho que no sean en interés del menor o presunto incapaz o que no redunden en su utilidad. Y la nulidad, salvo ratificación, que sanciona el segundo párrafo de dicho artículo no está sujeta a plazo de caducidad alguno”. Ello obliga a reflexionar sobre si la administración concedida a tercero en el testamento mientras que los legitimarios no cumplan aquella edad de veinticinco años debe entenderse como un gravamen en el sentido que más arriba ha sido expuesto, debiendo ser negativa la respuesta, teniéndose en cuenta además el respeto que siempre ha de tenerse a la expresión de la última voluntad del testador, conforme a la interpretación del artículo 675 del Código Civil que viene haciendo la Jurisprudencia al razonar que “La voluntad del testador es siempre prevalente…” -- Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de septiembre de 1089, entre otras muchas.

SÉPTIMO.- Y ya por último, también desde otra perspectiva, habría de estarse a lo que se dispone en el Decreto-Legislativo 1-2011, de 22 de marzo, de Aragón, que regula los actos que pueden desempeñar los menores y mayores de 14 años en esta región. Respecto del menor de catorce años, se admite la designación de administrador y la dispensa de la autorización judicial o de la junta de parientes. Así, el artículo 9.2 del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, dispone, respecto de los actos de disposición en representación del menor de catorce años y como excepción a la regla general que los atribuye a los titulares de la autoridad familiar y, en su defecto al tutor: "Se exceptúan los bienes cuya administración y disposición correspondan al tutor real, administrador judicial o persona designada por aquel de quien el menor hubo los bienes por donación o sucesión. En los dos últimos casos se estará a lo ordenado por el Juez o el disponente y, en su defecto, serán aplicables las mismas limitaciones, formalidades y responsabilidades impuestas al tutor". En cuanto al mayor de catorce años, el artículo 26 de dicho Decreto Legislativo dispone: "El administrador administra los bienes del menor mayor de catorce años en representación suya, pero los actos de administración podrán ser realizados también por el menor con la debida asistencia". Nada se dice sobre el emancipado o mayor de edad. Quiere decirse con ello que en la forma de desempeñarse aquella administración concedida a tercero, y que es objeto de debate en este pleito, habrá de estarse a lo que se dispone en aquella regulación, favoreciendo siempre los intereses de los legitimarios conforme al espíritu de aquella norma, puesto que ya a los menores de aquella edad se les reconoce una cierta posibilidad de libre actuación, pero sin que ello pueda implicar la nulidad del testamento que se interesa.”

76. SUCESIÓN INTESTADA

8. DERECHO DE BIENES

*** Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 31 de marzo de 2016. Propiedad horizontal. Yustaposición de elementos privativos y comunes. Ponderación. Restitutio in integrum. Indemnización. Deber jurídico de soportar el perjuicio

"PRIMERO.- La propiedad horizontal se ha caracterizado siempre por una intensa yuxtaposición de elementos, los privativos y los comunes, que interaccionan entre si en términos de los que resulta difícil la precisión en la delimitación de los derechos de unos y otros y, sobre todo, de su uso. Hay en ocasiones una percepción subjetiva del uso de esos derechos, y por ello en no pocas ocasiones los conflictos que se producen en el seno de la propiedad horizontal se resuelven por los tribunales aplicando técnicas de ponderación

SEGUNDO.- Este es el supuesto de autos en el que con ocasión de las obras de reforma de la vivienda 3º de Zaragoza se han producido determinadas afecciones en la vivienda de la demandante, Da C, propietaria de la vivienda inferior, el

Tales reformas han consistido, en síntesis, en la modificación de la distribución de las habitaciones, con nueva ubicación de la cocina y creación de un nuevo baño lo que, en el sentir de la parte recurrente, ha generado una alteración en la distribución de las cargas que ha generado un proceso de fisuración en su vivienda, se ha ocupado parte del vuelo de su vivienda, aunque oculto por un falso techo pero que tiene carácter privativo de la vivienda de la demandante, así como la alteración de los usos e intensificación del ruido que se entiende no se está en el deber jurídico de soportar.

Dos precisiones conviene hacer de inicio. La primera es que no compete a la jurisdicción civil pronunciarse como tutela principal sobre la aplicabilidad a las obras que aquí se discuten el código técnico de la edificación. Se han obtenido las licencias pertinentes, de suerte que inicialmente es la Administración la que asume su control y no ha apreciado objeción alguna al proyecto.

La segunda precisión es respecto al alcance de las tutelas pretendidas. Aunque con algunas dudas la más reciente jurisprudencia autoriza y legitima a un copropietario a, sin acuerdo de la comunidad, accionar en defensa de lo común. Pero examinado el suplico se desvela que lo solicitado no es en defensa de lo común sino de lo privativo, por la afección que las obras han afectado en su departamento.

Precisión que tiene su relevancia en razón a la afección que la nueva instalación ha tenido en las bovedillas del forjado, de la que la comunidad ha tenido conocimiento y respecto de las que el arquitecto de esa misma comunidad les ha informado que no tiene relevancia. No se plantea pues en este proceso una defensa de lo común.

TERCERO.- La sentencia de instancia ha estimado parcialmente la demanda en un aspecto residual, relativo al proceso de fisuraciones, cuya reparación se compensa con el importe de su reparación.

Contra este pronunciamiento se alzará la parte demandante para denunciar en primer lugar una errónea valoración de la prueba, en particular la pericial y en general los criterios técnicos vertidos testificalmente en cuanto a la prevalencia al informe del Sr. G, en la medida en la que, se afirma, coinciden con las opiniones del Sr. Ga, entrando a analizar determinados detalles de las opiniones técnicas vertidas en el proceso.

En el juicio se ha realizado, acaso, un desproporcionado esfuerzo probatorio para resaltar extremos que en alguna medida no son contradictorios entre si. Porque insista como se insista en el recurso no es que no exista errónea valoración de la prueba, sino que prácticamente no hay discusión sobre los hechos.

Es incontestable técnicamente que las paredes divisorias en el edificio no cumplen una función estructural, no son paredes maestras, no están destinadas funcionalmente a soportar cargas, pues si lo fueran la propia demandante tendría que reponer la tabiquería a su estado original, que no lo es, pues la distribución de su vivienda tampoco es la originaria.

Los criterios técnicos vertidos en el juicio son conformes en que es la estructura la que soporta las cargas y que solo indirectamente al recuperar el forjado su flecha al verse liberado o modificadas sus cargas por eliminación de los tabiques, se ha podido generar un proceso de ligerísima fisuración.

Es esa reparación económica la que ha sido objeto de condena y que no ha sido Objeto de una

La jurisprudencia (STS de 9 noviembre 1968) se decantó como regla general por el cumplimiento en forma específica, otorgando prelación a la "restitutio in integrum" sobre la indemnización con entrega de suma de dinero, declarando (STS 10 de octubre de 2005) que en nuestro sistema el cumplimiento de la obligación por equivalencia es subsidiario de la satisfacción del acreedor de forma específica. En concreto, tratándose de obligaciones de hacer, la sentencia de 13 de junio 2005 puso de manifiesto que la reparación "in natura" es preferente sobre la indemnizatoria, siempre que ello sea posible y el perjudicado la prefiera (sentencias de 2 diciembre 1994; 13 mayo 1996 y 13 julio 2005

Ahora bien, en atención a las circunstancias concurrentes esa doctrina legal ha evolucionado permitiendo al perjudicado postular una indemnización por equivalencia en vez de la posible reparación" in natura".

Afirma la sentencia de 16 marzo de 2011 Rc. 1642/2007 reiterándolo la de 25 de marzo de 2015 Rc. 926/2013 , que: "Es cierto que, en determinados supuestos se ha señalado la solución contraria, a saber, que la posibilidad de instar la reclamación directa de la indemnización pertinente es una excepción a la regla general del articulo 1098 del Código Civil -reparación "in natura " (SSTS de 17 de marzo de 1995; 13 de julio y 27 de septiembre de 2005-. Ahora bien, aun en estos casos, se ha mantenido la procedencia de la

pretensión resarcitoria por equivalencia. Todo ello como consecuencia racional y lógica de que el fin de la indemnización es tanto como la reparación o compensación y trata de conseguir que el patrimonio del lesionado quede, por efecto de la indemnización y a costa del responsable del daño, en situación igual o al menos equivalente, a la que tenía antes de haber sufrido el daño, y que la solución indemnizatoria es más efectiva en atención a las complicaciones, dilaciones y conflictos que se pueden plantear en el trámite ejecutivo (STS 21 de diciembre 2010).

Por tanto dada la ligerísima afección que la reforma ha provocado, con mínimas fisuraciones, la Sala considera como más adecuada y prudente solución indemnizatoria la que por equivalente dinerario se ha fijado en la instancia.

CUARTO.- El segundo punto, el más dudoso en términos jurídicos, es que donde antes pasaba un tubo de fibrocemento ahora hay estructura de desagüe, de una doble "y" que recoge ahora un potencial y mayor caudal de las aguas residuales, pasando a ocupar un mayor volumen del falso techo del 3º izda y privativo de éste. Es esta ocupación el quid del proceso.

El informe del Sr. G precisa con claridad la polémica: "la discusión es, pues, qué volumen o cantidad de espacio en el falso techo inferior se ocupa con esta instalación".

Debe precisarse que es un volumen privativo. Se ha sustituido una instalación obsoleta de fibrocemento por una de PVC que ofrece mayores garantías de estanqueidad y mejores prestaciones. En ese informe, (folio 263) y en su ampliación (f. 394 y 395) con relación a la situación preexistente (primera foto, f. 263, que sin ser la que es objeto de autos, puede representar una idea de la situación preexistente), se desvela la ocupación de un mayor volumen secuente a la colocación de esa estructura de tuberías.

Dispone el art. 7 de la LPH que "el propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o **perjudique los derechos de otro propietario,** debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad."

La posibilidad de modificar el departamento privativo tiene pues ese límite de que no se perjudique a otro propietario. Y aquí el perjuicio acaece: se ocupa, en razón a esa estructura de tuberías un volumen y espacio privativo que excede lo que verosímilmente existía previamente, un único tubo. La modificación sería tolerable si se hubiera cambiado ese tubo, aunque fuera de un mayor diámetro. Pero la nueva estructura, intrusión en bovedillas aparte, guarda desproporción con la verosímilmente preexistente y conlleva la ocupación de un volumen privativo que no tiene el deber jurídico de soportar el propietario del piso inferior. Por tanto la parte' demandada tendrá que dar otra solución a la recogida de esas aguas residuales, de forma que se mantenga de manera equivalente la situación preexistente.

QUINTO.- No puede tener acogida la denuncia relativa a la distribución de la vivienda

superior por cuanto se entiende influye negativamente en la protección contra el ruido en la vivienda de la demandante, lo que se justifica en que la modificación y reestructuración de las pieza habitacionales altera su uso, de suerte que una habitación de la actora soportará ahora los usos de una cocina, que se consideran más intensos.

El motivo no se acoge. No estando prohibido tales alteraciones en el uso, la convivencia que conlleva la proximidad habitacional en la propiedad horizontal sin ningún género de duda debe hacer tolerable ese cambio de uso, sin que exceda de lo que ordinariamente conlleven las relaciones de vecindad en el marco jurídico de la propiedad horizontal. El art. 7 de la LPI-i dispone que "el propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél, cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad". Y como se ha dicho, el cambio de uso de un espacio habitacional, entra dentro de lo tolerable y no funda afirmar que se cause daño en sentido jurídico."

***** Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel de 15 de septiembre de 2016. Acción reivindicatoria de bien troncal. Adquisición a título gratuito. Transformación del bien primigenio en otro diferente**

"I.- Frente a la sentencia instancia, que estima íntegramente la acción reivindicatoria ejercitada por la actora en su demanda, y condena a los demandados a restituir el bien reclamado (casa sita en R), al estimar que el mismo tiene el cartel troncal y pertenece a la demandante por herencia de su tío D. M. Frente a dicha pretensión se alza la parte demandada que se opone a dicha pretensión entendiendo que dicho inmueble pertenece a los demandados por herencia de Dª. D esposa de D. M , que adquirió el bien constante matrimonio. Fundamenta dicha oposición, al igual que lo hizo en la instancia en dos cuestiones: en primer lugar entiende que el citado inmueble no tiene carácter troncal por que el mismo no fue adquirido por herencia de don M, quien a su vez lo heredó de don F, sino que don F lo dividió en vida entre D. M y Dª. Má. En segundo término entiende que el bien transmitido es distinto de aquel que permaneció en la familia pues el bien primigenio era una paridera, en tanto que el bien que se reivindica es una vivienda

II.- Respecto a la primera cuestión que se plantea, esto es la relativa a la adquisición del bien objeto de la reivindicación, hay que partir de que el artículo 528 del Código de Derecho Foral de Aragón dispone que son bienes troncales simples los que el causante haya recibido a título gratuito de ascendientes o colaterales hasta el sexto grado. Pues bien es evidente que el título de dominio esgrimido por la parte demandada, donde se afirma que Dª. D, de quien los demandados traen causa, adquirió el bien reivindicado por compra, constante matrimonio a don F resulta inadmisible toda vez que don F falleció meses antes del matrimonio de doña D. Por otra parte es indiferente, a efectos de calificar la troncalidad del bien en cuestión, que la adquisición efectuada por don M hubiera sido en vida del causante o "mortis causa", siempre que hubiera sido a título gratuito; y a falta de otras pruebas, no puede presumirse el carácter oneroso de dicha adquisición cuando no consta contraprestación alguna.

III.- La segunda cuestión es la relativa a la transformación del bien primigenio en otro distinto. Es un hecho acreditado que don F dividió, ya en vida, ya a su muerte, la paridera de su propiedad en dos partes que adjudicó a don M y Dª.Ma, y que el primero de ellos, junto con su esposa Dª. D, reedificaron la misma construyendo hasta tres plantas donde instalaron su vivienda. La parte recurrente invoca en este punto la Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Aragón 9/2015 de 3 de Marzo, que establece como doctrina que desde el punto de vista de la troncalidad de los bienes, el resultante por la edificación sobre un solar troncal es un bien distinto del recibido de los ascendientes, sobre el que no se proyecta el carácter troncal del solar. La sentencia recurrida entiende inaplicable dicha doctrina, pues entiende que el presupuesto de hecho es distinto, pues en aquel caso se trataba de una edificación en régimen de propiedad horizontal sobre un solar de carácter troncal, y en el presente supuesto se trata de una ampliación de una vivienda rústica, aprovechando el cerramiento y retirando de la cubierta, alzando una planta más. Sin embargo este planteamiento no puede ser acogido por el Tribunal. A juicio de la Sala la transformación de una paridera, esto es, una construcción rústica de una sola planta, para

el estabulamiento de ganado, en un edificio de tres plantas destinado a vivienda con todos sus servicios, supone una transformación no sólo física sino jurídica del bien, que implica modificación sustancial de su identidad real y económica, hasta el punto de que no puede sostenerse que el bien que permaneció la familia, sea al mismo que hoy se pretende reclamar. En consecuencia procede estimar el recurso y revocar la resolución recurrida, desestimando la demanda y absolviendo a la parte demandada de las pretensiones de la misma."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 16 de noviembre de 2016. Acción negatoria de servidumbre de paso. Usucapión. Destino de padre de familia. Signo aparente. Hechos probados**

"PRIMERO.- Antecedentes relevantes.

1. Por lo que interesa a este recurso de casación, el demandante ejercita en su demanda la acción negatoria de servidumbre, solicitando se declare en sentencia que las fincas 310 y 341, propiedad del demandado, no ostentan los derechos reales de paso en calidad de predio dominante sobre la finca 313 de su propiedad.

A su vez, el demandado reconviene interesando se declare que la finca 341 es predio dominante y las fincas registrales 313 y 309 predios sirvientes de una servidumbre de paso de peatones (paso 1A); y que la finca registral 310 es predio dominante y la 313 predio sirviente de una servidumbre de paso de vehículos y personas (paso 1B).

2. La sentencia de primera instancia, de fecha 2 de junio de 2015, estima la demanda reconvencional, declarando la existencia de las servidumbres peticionadas. Concretamente las dos expuestas en el número anterior -pasos 1A y 1B-; además de otras dos, referidas a los pasos 2A y 2B, que no son objeto del recurso de casación.

La sentencia considera acreditados los signos aparentes de ambas servidumbres, al haberse constatado en los informes periciales aportados por el demandado una serie de caminos visibles y delimitados que coinciden con los pasos descritos en la demanda reconvencional. Entiende también acreditado el carácter aparente de dichas servidumbres, su uso y utilización desde tiempo inmemorial para acceder a las fincas registrales 310 y 341. Concluye la resolución que la existencia de los signos aparentes de las servidumbres de paso durante, al menos, más de veinte años, y el uso por varios vecinos del pueblo y no solo por el actor reconvencional, resulta incompatible con un uso oculto o clandestino, siendo tal posesión hábil para usucapir, por lo que se desestima la acción negatoria de servidumbre ejercitada en la demanda principal y se estima la acción confesoria de servidumbre de paso contenida en la demanda reconvencional.

3. Interpuesto recurso de apelación se dictó sentencia en segunda instancia, de fecha 5 de mayo de 2016, que estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por don Julio N., revocando la sentencia de primera instancia en el sentido de declarar que las fincas registrales 310 y 341 no ostentan derechos reales de paso en calidad de predio dominante sobre la registral 313 (pasos 1A y 1B); y se mantiene el reconocimiento de la existencia de servidumbre sobre los pasos 2A y 2B, que no son objeto del recurso de casación.

La sentencia establece que no es posible la constitución de las servidumbres de paso por usucapión mientras todas las fincas estuvieron bajo un mismo dueño. Y desde el momento en que dejaron de estar bajo un mismo dueño, mediante la escritura de fecha 3 de noviembre de 2004, hasta la interposición de la demanda ejercitando la acción negatoria de servidumbre de paso sobre la registral 313 en fecha 4 de julio de 2014 todavía no habían transcurrido los diez años exigidos para usucapir. Además, la resolución

entiende, respecto del paso 1B, que no se puede afirmar que durante todo el período necesario para usucapir haya estado marcado sobre el terreno el camino, sin perjuicio de que haya podido haber temporadas en las que sí estuviesen marcadas las roderas, lo que no es equiparable a la existencia de un camino marcado.

Por tanto, la sentencia entiende que las servidumbres solo podrían haberse constituido, en su caso, por destino de padre de familia conforme al art. 566 CDFA o 541 CC (por ser derechos anteriores al 1 de enero de 2011) y no por usucapión.

No obstante, y por lo que respecta a la servidumbre denominada 1B, la sentencia termina concluyendo que tampoco puede afirmarse su constitución por destino del padre de familia, puesto que no queda acreditado que al tiempo de separarse las propiedades estuviera marcado sobre el terreno el camino, ni mucho menos se ha probado que dicho camino comunicaba la registral 313 con la 310, ya que no basta con que hubiera un camino en la finca 313 dando servicio a esta finca, sino que resulta preciso que al separarse las propiedades dicho camino estuviera marcado hasta la registral 310, dando servicio a esta última, dominando la 313, signo aparente que no se ha probado.

Respecto del paso 1A, la sentencia de apelación concluye que, aunque se estimara que el espacio delimitado por setos –considerado por el recurrente una senda- ya estaba así en el momento de separarse las propiedades, no puede considerarse que dicho espacio o senda pueda servir para entender constituida la servidumbre por destino del padre de familia a favor de la registral 341, pues donde muere la denominada senda da una apariencia de servicio para la propia finca 313 o, todo lo más, para otras fincas del mismo dueño (P. anejo al chalet o casa nueva y a ésta misma), no proclamando apariencia alguna de servidumbre hasta la registral 341 a través del P. Siendo de resaltar que en una pretendida servidumbre de paso, para su adquisición por destino del padre de familia o por usucapión, la apariencia no la da el uso, naturalmente discontinuo, sino los signos exteriores marcados sobre el terreno a modo de senda, camino o carril, proclamando una relación de subordinación/dominio entre las fincas que ha de estar presente en el momento de la separación de las propiedades (destino del padre de familia) o durante todo el tiempo durante el cual se consolida la usucapión.

SEGUNDO.- Primer motivo de infracción procesal: principio de justicia rogada.

4. Alega el recurrente que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial ha vulnerado el principio de justicia rogada contemplado en el art. 216 LEC, que dispone que “los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales”.

En síntesis, basa esta conclusión en que, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el entonces recurrente alegaba -refiriéndose a las servidumbres reconocidas por dicha resolución- que “nunca se había establecido signo aparente de servidumbre entre las fincas que fueron de los padres de ambos

contendientes". Sin embargo, en la sentencia se afirma que los caminos se habían hecho desaparecer con ocasión de la adjudicación de la herencia entre los hermanos contendientes en este pleito.

5. El principio de justicia rogada se integra por los principios dispositivo y de aportación de parte, propios de la jurisdicción civil. Conforme al segundo de ellos, tal como se recoge en el art. 216 LEC, son las partes las que deben aportar los hechos al proceso, en cuanto constituyen el fundamento de su pretensión.

En el presente caso, una de las partes, don Joaquín N. –hoy recurrente que ejercitó la acción confesoria de servidumbre- sostiene la existencia de signos aparentes de servidumbre; por el contrario, la otra parte, don Julio N. –que ejercitó la acción negatoria de servidumbre- mantiene que no existían esos signos aparentes de servidumbre y ambos aportan prueba para acreditar sus alegaciones.

La sentencia recurrida, en realidad, no dice que los signos externos de los pasos se hicieron desaparecer cuando las fincas dejaron de estar en manos del mismo dueño. La redacción literal que utiliza es: *"… no puede hablarse de usucapión mientras todas la fincas estuvieron bajo un mismo dueño, de modo que en realidad dichas servidumbres de paso sólo se pudieron constituir por destino del padre de familia conforme al art. 566 del Código de Derecho Foral o, mejor, conforme al art. 541 del Código Civil (pues estamos hablando de hechos anteriores al 1 de enero de 2011, fecha de entrada en vigor de la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho Civil Patrimonial) si no se hubieran hecho desaparecer los signos externos de los pasos cuando las fincas dejaron de estar bajo un mismo dueño, siendo de resaltar que tal cosa ocurrió el 3 de noviembre de 2004, mediante la escritura de los folios 32 y siguientes, menos de diez años antes de que se interpusiera la demanda negando la existencia de servidumbre alguna de paso sobre la registral 313, por lo que ninguna servidumbre de paso se ha podido usucapir sobre dicha registral …"*.

La lectura atenta de todo el fundamento de derecho cuarto pone de manifiesto que la sentencia excluye la posibilidad de usucapión de las servidumbres afirmada por la resolución de primera instancia, de manera que concluye que solo podrían haberse constituido las servidumbres por destino del padre de familia, conforme al art. 541 CC. La referencia que recoge a continuación, "si no se hubieran hecho desaparecer los signos externos de los pasos cuando las fincas dejaron de estar bajo un mismo dueño", no es una afirmación, sino, simplemente, la mención expresa del requisito exigido por dicho precepto para que la servidumbre continúe tras la enajenación de una de ellas. Cuando la sentencia se refiere a que "tal cosa ocurrió el 3 de noviembre de 2004, mediante la escritura de los folios 32 y siguientes" no se está refiriendo a que en ella se hicieron desaparecer los signos externos, lo que contradeciría lo dispuesto en el art. 541 CC -que exige que la desaparición de los signos externos sea anterior al otorgamiento de la escritura-, puesto que si lo que se quiere es poner fin a la servidumbre en ésta, nos encontramos ante el otro supuesto de precepto -único contemplado en el art. 566 CDFA- que permite, para que la servidumbre no continúe tras la separación de las fincas, que "se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas".

En definitiva, la expresión “tal cosa ocurrió el 3 de noviembre de 2004” se refiere a que las fincas dejaron de estar bajo un mismo dueño en esa fecha, mediante la escritura de adjudicación de herencia, no a que se hicieran desaparecer los signos externos de paso. Así resulta también de la lectura del resto de la sentencia, en la que no se afirma en ningún momento tal cosa. Antes bien, respecto del paso 1B se señala que no queda acreditado que el camino haya estado marcado durante todo el tiempo en el terreno, ni que estuviera marcado al tiempo de separarse las propiedades, ni mucho menos que comunicase la registral 313 con la 310. Y respecto del paso 1A, que aun partiendo de que existiese la senda al tiempo de la separación de las propiedades, ésta moría en la propia finca 313 y daba apariencia de servicio tan solo a la misma finca o a otras del mismo dueño.

6. Por lo expuesto, en modo alguno se vulnera el principio de justicia rogada, puesto que la sentencia de apelación no introduce hechos nuevos en el proceso, sino que, valorando los aportados por las partes a la luz de las pruebas propuestas, considera acreditados unos y otros no, partiendo de los alegados por los litigantes, sin que la convicción a la que llegan los magistrados tenga que coincidir con las afirmaciones de las partes, debiéndose desestimar el primer motivo de infracción procesal alegado.

TERCERO.- Segundo motivo de infracción procesal: vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 CE.

7. Alega el recurrente la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, ex art. 24 CE, por la indebida, arbitraria y manifiestamente errónea apreciación de los hechos por parte del tribunal de apelación, que ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio y ha extraido conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas y que conculcan los más elementales criterios de la lógica y las normas de valoración de la prueba, como consecuencia de no haber apreciado la existencia, tanto en vida de la anterior propietaria, como tras la adjudicación de su herencia, de camino y senda que atravesando la FR 313 conducen a la FR 310 y 309.

8. Una abundante doctrina de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha delimitado los supuestos en los que la valoración probatoria puede acceder al control del tribunal de casación por la vía del art. 469.1.4º LEC. Así, en la sentencia del Alto Tribunal de fecha 29 de abril de 2015 (rc. 803/2014), con referencia a otras anteriores, se dice:

"Como recoge la sentencia de 23 marzo 2011, Rc. 2311/2006 , las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba, las cuales constituyen premisas de carácter epistemológico o jurídico-institucional a las que debe ajustarse la operación lógica de enjuiciamiento necesaria para la resolución del asunto planteado, pueden ser sometidos al examen del Tribunal de casación, al amparo del artículo 469.1.4 LEC , cuando por ser la valoración de la prueba manifiestamente arbitraria o ilógica, ésta no supera el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 CE.

A salvo este supuesto, la valoración de la prueba es función de la instancia (27 de mayo de 2007, Rc. 2613/2000, 15 de abril de 2008, Rc. 424/2001, STS 28 de noviembre de 2008, Rc. 1789/03). Si no se demuestra de modo patente la existencia de una infracción de las reglas del discurso lógico aplicables al proceso, no es posible tratar de desvirtuar una apreciación probatoria mediante una valoración conjunta efectuada por el propio recurrente para sustituir el criterio del Tribunal por el suyo propio, por acertado que pueda parecer (SSTS de 9 de mayo de 2007, Rc. 2097/2000 , 27 de mayo de 2007, Rc. 2613/2000 , 15 de abril de 2008, Rc. 424/2001 , 30 de junio de 2009, Rc. 1889/2006 , 29 de septiembre de 2009, Rc. 1417/2005), lo que convertiría el recurso en una tercera instancia contraria a su naturaleza y función (STS de 29 de septiembre de 2009, Rc. 1417/2005)".

9. En el presente caso, el recurrente realiza en este segundo motivo de infracción procesal, de modo exhaustivo, una nueva valoración probatoria. Repasa detalladamente cada uno de los medios probatorios practicados en el juicio (documental, testifical, pericial) para concluir la indebida, arbitraria y manifiestamente errónea apreciación de los hechos por parte del tribunal de apelación. Sin embargo, tal proceder solo evidencia su disconformidad con la valoración probatoria alcanzada en la sentencia recurrida, sin que se aprecie la existencia de las infracciones denunciadas.

La valoración probatoria de la sentencia de apelación, sustentada en un estudio de las fotografías y vídeos aportados y en las declaraciones de los testigos y peritos, no puede ser calificada como irracional, ilógica o arbitraria, superando el test de racionalidad constitucionalmente exigible para entender que se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE.

Para estimarse el control judicial a través de este recurso extraordinario de infracción procesal es necesario que se aprecie una valoración de la prueba "manifiestamente errónea o arbitraria, pero no la valoración desacertada de la misma a juicio de la parte recurrente, si no concurre aquel elemento de manifiesto error o arbitrariedad" (STS 64/2010, de 23 de febrero), que es lo que pretende el recurrente, que analiza y valora nuevamente toda la prueba para intentar desvirtuar la valoración realizada por el tribunal de apelación, sin que pueda calificarse como error manifiesto que los testigos tomados en consideración en la sentencia no ofrezcan credibilidad al recurrente frente a otros que considera más acertados o que éste entienda que otras fotografías muestran más claramente la realidad que aquellas a las que se refiere la resolución recurrida, o bien que se deberían haber tenido en cuenta las declaraciones de otros testigos o aceptarse las conclusiones de la prueba documental y pericial que aportó al proceso. Frente a esa opinión, el tribunal valoró toda la prueba en su conjunto, haciendo expresa referencia a los medios de prueba que sirvieron para acreditar los hechos que estima probados. La valoración de la prueba que efectúa el recurrente, si bien es legítima, no puede desvirtuar la efectuada por el tribunal de apelación, salvo que se demuestre de manera patente su error, falta de lógica o arbitrariedad, lo que no es el caso.

Por lo expuesto, el segundo motivo de infracción procesal debe ser rechazado.

CUARTO.- Recurso de casación. Pasos 1B y 1A.

10. El recurso entiende infringidos los arts. 561.c) y 566 CDFA, referidos ambos a la constitución de las servidumbres por signo aparente.

11. Para fundamentar el recurso de casación, alega el recurrente que la sentencia recurrida, en su fundamento de derecho cuarto, equipara de forma errónea el signo externo o aparente de la servidumbre con la exclusiva existencia o concurrencia de camino marcado sobre el terreno comunicando ambas fincas. Entiende, respecto del paso 1B, que dadas las características topográficas de las fincas 313 y 310 y su acceso único por una verja o portal común para ambas, establecido originariamente por el propietario de la finca matriz y mantenido al tiempo de segregación de las fincas, es la verja de la C/ S. M., punto común de acceso, el signo aparente de servidumbre. Señala el recurrente que la propia configuración de la finca 310 como "fondo de saco", con una única salida a través de la colindante 313, lleva a considerar como clara y manifiesta la voluntad de la anterior propietaria común de ambas fincas de configurar una servidumbre de paso a favor de la primera de las fincas sobre la segunda. En defensa de este argumento el recurrente realiza una nueva valoración probatoria.

12. En lo que se refiere al paso 1A, el recurrente manifiesta que la existencia de la servidumbre se publicita también, como signo externo, por la puerta de acceso a la que va a desembocar el camino en línea recta a la C. V. de P. (finca 341) que, desde finales de 1950, se convirtió en la puerta principal de entrada de esta casa. Se manifiesta también que, aunque la C. V. de P. tiene un portón histórico en la parte de atrás de la calle B. B., éste quedó inutilizado una vez se abrió a finales de 1950 la referida puerta.

13. Como ha establecido esta Sala en numerosas ocasiones, en el examen del recurso de casación el tribunal debe partir de los hechos probados en las instancias, sin introducir modificación alguna, puesto que no estamos ante una tercera instancia (entre otras, STSJA de 30-09-13, recurso de casación núm. 26/2013). En palabras de la STS 593/2013, de 4 de febrero, citando la de la misma Sala 765/2012, de 28 de diciembre, "*el supuesto de hecho al que se ha de proyectar el recurso de casación no es el que pueda haber reconstruido, interesadamente o no, la parte recurrente, sino el que hubiera declarado probado la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración por el Tribunal que la dictó de los medios de prueba que se practicaron en el proceso. Consecuentemente, queda fuera del ámbito de la casación la reconstrucción de los hechos declarados probados en las instancias*".

14. En el presente caso, como hemos expuesto al relatar los antecedentes relevantes, la sentencia de primera instancia estimó la existencia de todas las servidumbres reclamadas por entender acreditados una serie de caminos visibles y delimitados y concluyó que la existencia de esos signos aparentes de las servidumbres de paso durante, al menos, más de veinte años determinaban la constitución de las servidumbre por usucapión. Por su parte, la sentencia de apelación, además de rechazar la constitución de las servidumbres por usucapión, considera que tampoco pudieron constituirse por destino de padre de familia. Respecto del paso 1B, porque no ha quedado acreditado que al tiempo

de separarse las propiedades estuviera marcado el camino sobre el terreno, y menos todavía, que dicho camino comunicara la registral 313 con la 310. Y respecto del paso 1A porque, aun suponiendo la existencia de la senda que afirma el recurrente, ésta tan solo da apariencia de servicio para la propia finca 313 (predio sirviente) o, todo los más, para otras fincas del mismo dueño.

Por tanto, ninguna referencia contienen la resoluciones anteriores a los nuevos signos externos o aparentes de servidumbre que pretende introducir el recurrente a través de su recurso: las características topográficas de las fincas 313 y 310 y su acceso único por una verja o portal común para ambas –situada en la C/ S. M.-, establecido originariamente por el propietario de la finca matriz y mantenido al tiempo de segregación de las fincas, así como la consideración de la finca 310 como "fondo de saco", en lo que se refiere al paso 1B; y la puerta de acceso construida en los años 50 para el paso 1A.

15. Como ya hemos indicado, para resolver el recurso de casación la sala ha de partir de los hechos declarados probados por las sentencias de primera instancia y apelación, puesto que no estamos ante una tercera instancia. La única vía para modificar esos hechos es la que brinda el recurso extraordinario por infracción procesal, pero habiéndose desestimado éste por las razones ya expuestas, la pretensión de introducir nuevos hechos en la sentencia, en este caso, otros signos aparentes de servidumbre no contemplados en las resoluciones anteriores, debe ser rechazada, lo que conlleva la desestimación del recurso."

9. DERECHO DE OBLIGACIONES

*** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 10 de febrero de 2016. Retracto de abolorio. Afección del retrayente. Naturaleza del bien

"PRIMERO.- La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda en los términos que han sido consignados en el anterior antecedente de hecho segundo, dando lugar al retracto de abolorio sobre las dos fincas identificadas en la demanda. Explica en su primer fundamento que, al no haber sido contestada la demanda en plazo, se deduce del informe en el acto del juicio que la oposición de la parte demandada se centraba en que el jardín sobre el que se ejercitaba el retracto no podía ser objeto del mismo por ser un solar y por no haber pertenecido durante dos generaciones a la misma familia. En relación con este elemento objetivo dice la sentencia (fundamento tercero) que *"se discute y se opone por la parte demandada la procedencia familiar de los bienes en el sentido de haber permanecido en la familia durante dos generaciones y ello con respecto al inmueble que forma hoy lo que sería el jardín y que fue adquirido por el suegro y abuelo de las vendedoras y padre de la actora, durante el consorcio matrimonial con su esposa"*. Lo resuelve con arreglo a lo dispuesto en el artículo 589 del Código del Derecho Foral de Aragón (en adelante CDFA), considerando que tiene la condición de bien de abolorio aquel inmueble que haya sido incorporado a la familia, al menos, por el abuelo del enajenante y ulteriormente no haya salido de la misma, resultando indiferente el título en virtud del cual haya recibido los bienes el enajenante.

Y concluye respecto a esta cuestión: *"Pues bien, en el caso que nos ocupa, siendo los bienes que son objeto de la acción promovida, de naturaleza inmobiliaria, estar en Aragón y procedencia familiar de, al menos, dos generaciones, la acción promovida también cumple con el requisito de los elementos objetivos."*

En el fundamento cuarto hace referencia al criterio moderador en los casos de retracto de abolorio, que permitiría no estimarlo si no se consigue la finalidad última de mantener la integridad del patrimonio, exigiéndose al retrayente una afección de los bienes que pretende retraer, *"…que no se aprecia cuando haya, por ejemplo, un interés especulativo sujeto, por ejemplo también, a un proyecto urbanístico, pero es lo cierto que en el caso que nos ocupa este posible interés, o bien en sentido contrario, esa falta de desafección* (sic) *no se ha acreditado"*. Así lo aprecia por la manifestación de la actora de que los inmuebles que pretende retraer son aquellos en los que ha vivido y en los que se ha criado hasta que contrajo matrimonio…*"y no hay prueba en contra que determine que deba ser interpretado restrictivamente el derecho que ejercita"*.

SEGUNDO.- El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada alegaba vulneración del artículo 589 porque la finca llamada "jardín con piscina", finca registral independiente, tiene naturaleza urbana y por ello no susceptible de la acción ejercitada, habiendo omitido la sentencia recurrida toda referencia a dicha finca independiente y a su carácter urbano. También alegaba vulneración del requisito de permanencia en la familia de procedencia durante dos generaciones y, finalmente, que la acción ejercitada no tenía la

finalidad de mantener la integridad del patrimonio familiar sobre la base de la afección del retrayente sobre el mismo.

La sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que estima el recurso de apelación, resuelve lo relativo al tiempo de permanencia de la finca en la familia afirmando (fundamento segundo) que fue así admitido por la representación de la demandada en el acto de la audiencia previa, por lo que no puede ser objeto de nuevo debate. En el fundamento tercero confirma el ejercicio del retracto dentro de plazo, y en los fundamentos cuarto y quinto desarrolla los antecedentes de la regulación actual y los fundamentos de la misma en la forma en que aparecen recogidos en la Exposición de Motivos del CDFA.

El fundamento sexto de la sentencia estudia el concepto de los bienes de abolorio del artículo 589 del CDFA, limitado, además de los edificios o parte de ellos, a los inmuebles de naturaleza rústica que, conforme a jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita, se reconocen por su situación, por el aprovechamiento o destino, y por la preponderancia de uno de estos elementos si ambos concurren en un mismo predio, o por relación de dependencia que entre ellos exista como principal el uno y accesorio el otro. Afirma, por referencia al supuesto examinado por la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1991, que *"la prueba ha puesto de relieve –con independencia de otras circunstancias de menor entidad- que la finca retraída no está destinada al cultivo por lo que mal puede conseguirse la finalidad pretendida por el legislador en una finca de tal naturaleza"*.

El fundamento séptimo analiza lo relativo a la finalidad pretendida con el ejercicio del retracto distinguiendo un elemento subjetivo, la afección sentimental hacia los bienes, y otro objetivo, el mantenimiento y engrandecimiento del patrimonio familiar.

En el fundamento octavo, refiriéndose a las circunstancias del caso, deja constancia de que las fincas sobre las que se ejercita el retracto son las registrales (casa con cochera y corral), y la (piscina con vestuarios y barbacoa) inscrita como finca urbana procedente por segregación de la . Y ambas constituyendo una única finca catastral identificada con el número (por error se cita como registral en la sentencia). Continúa diciendo que se encuentran en el Barrio de M., zona de claro crecimiento urbanístico de esta ciudad y que: *"La urbana está excluida de la posibilidad del ejercicio del derecho ejercitado de adquisición preferente, según ha sido ampliamente estudiado, y la segunda debe tener la misma consideración resultando que –tal como aparece descrita- no puede entenderse como finca rústica, recordándose aquella Jurisprudencia citada sobre que las características de las fincas sobre las que pretenda ejercitarse el derecho son las que resulten del pleito, conforme a la concreta prueba practicada, siendo cuestión de hecho que no puede entenderse predeterminada por lo que se haya hecho figurar en cierto documento, cuando se demuestre que el uso de la finca de que se trate no es precisamente para su utilización, ni lo ha sido ni lo es, como suelo de naturaleza rústica"*.

El fundamento noveno comienza diciendo: *"Otro tanto cabe sostener apreciando el interés que se pretenda conseguir con la adquisición de la finca, en general bien señalado*

por la Ley –la conservación en el seno familiar de una finca rústica poseída por tiempo de dos generaciones, evitando se transmita su propiedad a terceras personas-, pero la cuestión debe ser objeto de mayor matización en atención a las circunstancias del caso concreto, como se ha expuesto en el trabajo doctrinal antes citado. Que la actora pudiera haber nacido en la casa es hecho que no justifica sin más el uso del derecho, ni ese exigible interés en la conservación de la casa, cuando también ha quedado demostrado que no tiene su residencia, ni la ha tenido en tiempos más o menos recientes en la misma, e incluso que pasa largas temporadas en el extranjero, careciendo de cualquier relación actual, de cualquier clase, con la misma, pudiendo existir un cierto interés especulativo dada la situación de las fincas, que no puede admitirse en modo alguno".

Se hace a continuación una referencia al retracto de colindantes, al que se asocia un interés general de evitar una excesiva fragmentación de la propiedad, aclarando que ese interés general no se puede predicar de la misma manera en el retracto de abolorio pues ya la Exposición de Motivos de la ley aragonesa expresa que los inconvenientes que presenta en el tráfico inmobiliario no son suficientes para suprimirlo…*"y debe defenderse una interpretación estricta en su ejercicio, más cuando los pueblos han quedado abandonados y aquellas viviendas solo se usan como general como segundad residencias, pudiendo implicar una considerable merma económica en la transmisión, salvo que se demuestre, claro, que el fin deseado es coincidente con el que se recoge en la Ley, en los términos antes dichos, que no es el caso. Por lo demás, el hecho de que las fincas descritas puedan ser dependientes entre sí, en cuanto que el paso a una solo se consigue por la otra, no permite el ejercicio conjunto del derecho, al no reunir las condiciones exigidas, ni puede concederse el derecho respecto de una de ellas, que es posibilidad que la mayor parte de la doctrina rechaza".*

TERCERO.- Debe examinarse en primer lugar el motivo quinto de infracción procesal, único de los admitidos por este cauce, interpuesto al amparo del artículo 469.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por vulneración del artículo 24 de la Constitución española, por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva consistente en la indebida, arbitraria y manifiestamente errónea apreciación de los hechos por parte del tribunal de apelación, al incurrir en error patente, ostensible o notorio y haber extraído conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas, y que conculcan los más elementales criterios de la lógica y las normas de la valoración de la prueba, todo ello, en parte, como consecuencia de haber presumido, sin base ni prueba alguna, que había finalidad especulativa en el ejercicio del retracto.

En este motivo la recurrente centra sus alegaciones en la falta de prueba sobre la supuesta finalidad especulativa, que nunca habría formado parte del debate entre las partes por no haber sido invocado por la parte demandada y que, por el contrario, otras pruebas acreditarían la afección negada por la sentencia recurrida.

Como ya planteó la Sala en la providencia de 8 de octubre de 2015 al poner de manifiesto las posibles causas de inadmisibilidad de todos los motivos de infracción procesal, lo relativo a la afección del retrayente respecto a los bienes objeto del retracto fue objeto de expreso razonamiento en el fundamento cuarto de la sentencia de primera

instancia, y negado por la parte demandada en la alegación tercera de su recurso de apelación, por lo que no puede afirmarse que no hubiera sido objeto de debate. La sentencia de apelación, según hemos visto, examina ampliamente la cuestión en los fundamentos séptimo y noveno, poniendo en duda en este último el contacto de la retrayente con las fincas y sugiriendo, en términos hipotéticos, un posible interés especulativo: "*...pudiendo existir un cierto interés especulativo*".

En su escrito de alegaciones a la providencia, la parte recurrida afirma en la cuarta de ellas: "La sentencia que se impugna de contrario no afirma como hecho probado que la acción ejercitada tuviera finalidad especulativa, sino que considera, y ello sobre la base del resultado de la prueba practicada (...), puesto en relación con la situación de las fincas en una zona de claro crecimiento urbanístico, que no existe afección sobre los bienes objeto de retracto y que podría existir un cierto interés económico en el ejercicio de la acción. La alusión a la finalidad especulativa, por lo tanto, no es una declaración de hecho que se considere probado por medio del método de presunciones, como señala la providencia dictada por la Sala, de lo que se deriva la concurrencia de la causa de inadmisibilidad puesta de manifiesto...".

En el auto de 5 de noviembre de 2015 fue admitido el motivo pero no dando por acreditado en la sentencia, según la redacción de la misma, tal interés especulativo, por lo que no se habría producido la denunciada errónea valoración de la prueba. Ahora, tras ser expuestos de forma sistemática los razonamientos de la sentencia recurrida, debemos confirmar que en la misma no se incurre en la infracción denunciada porque, de una parte, no se afirma tal interés especulativo y, de otra, porque no se toma tal posible finalidad especulativa como base única de la falta de afección sobre los bienes, sino como un elemento más de los tenidos en cuenta para justificar que no se cumpliría la finalidad que la ley atribuye al retracto de abolorio (la conservación de los bienes en el seno familiar).

Por ello, se desestima el motivo de infracción procesal, sin perjuicio de que este aspecto de la cuestión haya de ser examinado al enjuiciar el motivo de casación, entre los requisitos exigidos para el ejercicio del retracto.

CUARTO.- El motivo único de casación, interpuesto por infracción de los artículos 589 y 593 del CDFA, lo centra la parte recurrente en "discutir y determinar si una finca urbana que constituye el jardín del edificio, y que no tiene acceso ni vida independiente del mismo (incluso son una misma finca catastral) puede considerarse un bien de abolorio y ser retraíble".

Sostiene la parte recurrente que, ya desde la audiencia previa, su posición era que, "constituyendo ambas fincas una unidad física (de hecho forman una única finca catastral) y siendo un hecho indubitado que la finca-jardín solo da servicio a la casa o edificio, debía tener la consideración de <u>parte de ellos</u> (de los edificios) a que se refiere el artículo 589 del CDFA...". Por su parte, de contrario se sostenía la aplicación estricta y literal de la citada norma legal, argumentando que su naturaleza de finca urbana (jardín) le impedía ser objeto de retracto, y ello aunque existiera esa unidad física con el edificio y que no pudiera ser objeto de una utilización independiente".

En su escrito de oposición al recurso de casación alega la parte recurrida que "por más que el recurrente se ampare en la relación que contiene el artículo 589 del CDFA, la razón de la denegación del retracto sobre el edificio radica en la falta de afección de la retrayente sobre las fincas objeto de su acción."

Deben examinarse, pues, los dos elementos que resultan determinantes en la solución adoptada por la sentencia recurrida, como son el objeto sobre el que recae el retracto y la finalidad perseguida con su ejercicio.

El elemento objetivo: En la nueva regulación del retracto de abolorio dada por la Ley 8/2010, de 2 de diciembre, de Derecho civil patrimonial, integrada como Título III del Libro Cuarto del CDFA, se justifica el mantenimiento de la institución (apartado 42 de su Preámbulo) en intereses y concepciones familiares dignos de protección, para evitar que, en ciertos casos, un inmueble salga de la familia por disposición de su actual titular.

El Preámbulo del CDFA explica la limitación de la posibilidad del ejercicio del derecho a los inmuebles rústicos y a los edificios, por considerar que sólo éstos, aparte de los rústicos, son los que conservan una impronta familiar que justifica la preferencia de los parientes.

El fundamento octavo de la sentencia recurrida, antes transcrito en lo que ahora interesa, después de dejar constancia de que ambas fincas registrales constituyen una sola finca catastral, describe la registral 4.663 (piscina con vestuarios y barbacoa) inscrita como urbana, y la 2.227 (casa con cochera y corral) y afirma que la finca urbana está excluida del ejercicio del derecho de retracto *"según ha sido ampliamente estudiado"*, y la segunda también (*"debe tener la misma consideración")* porque no puede entenderse como finca rústica según la jurisprudencia citada cuando se demuestre que el uso de la finca no es para su utilización como suelo de naturaleza rústica.

La jurisprudencia citada en el fundamento sexto que justifica el anterior razonamiento, en concreto la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1991 (recurso 2539/1989, ponente Martín-Granizo Fernández), no resulta de aplicación a este caso pues se refiere específicamente al retracto de colindantes (artículo 1523 Cc.), que únicamente es reconocido a los propietarios de tierras colindantes en la venta de finca rústica de cabida inferior a una hectárea. En dicha sentencia no se acogía dicho retracto en un supuesto en el que el colindante pretendía retraer una finca que lindaba con los edificios de la periferia de Benidorm, erial, en la que se encontraba una edificación que servía de vivienda, no destinada al cultivo agrícola. En definitiva, para el Tribunal Supremo no se trataba propiamente de tierras ni de finca rústica, que es el presupuesto básico del retracto de colindantes.

En el caso que nos ocupa las fincas objeto de retracto no son rústicas sino urbanas, pero el fundamento de la acción no era la naturaleza rústica de la denominada urbana (jardín con piscina, vestuarios y barbacoa) sino su condición de anejo de la casa que, a su vez, viene descrita como casa con cochera y corral. Si se siguiera el razonamiento de la sentencia recurrida tampoco la cochera y el corral podrían ser objeto de retracto ni junta ni

separadamente porque no son suelo de naturaleza rústica, pero indudablemente en un retracto dirigido a la casa (edificio que conserva la impronta familiar) la cochera y el corral que forman parte de la misma finca estarían incluidos con el edificio.

Aparte de los inmuebles de naturaleza rústica, el artículo 589 del CDFA permite el ejercicio del retracto de abolorio sobre los edificios o parte de ellos en tanto que (Preámbulo del CDFA) también pueden conservar la impronta familiar con fuerza suficiente para justificar la preferencia de los parientes respecto a los terceros adquirentes, y sin necesidad de que deban estar destinados a finalidad agrícola.

En la demanda el retracto se dirigía a dos fincas registrales porque así aparecen identificadas en el Registro de la Propiedad pero, como afirma la recurrente, el objeto era la finca como unidad física (una sola finca catastral, urbana) formada por la casa con cochera y corral junto con el jardín que contiene la piscina, vestuarios y barbacoa, que no tiene acceso independiente sino a través de la anterior. En el último inciso del fundamento noveno que ha sido transcrito antes, la sentencia recurrida rechaza el retracto sobre esas fincas dependientes entre sí *"al no reunir las condiciones exigidas"*, refiriéndose al requisito de finca rústica. Decía el párrafo completo: "*Por lo demás, el hecho de que las fincas descritas puedan ser dependientes entre sí, en cuanto que el paso a una solo se consigue por la otra, no permite el ejercicio conjunto del derecho, al no reunir las condiciones exigidas, ni puede concederse el derecho respecto de una de ellas, que es posibilidad que la mayor parte de la doctrina rechaza".*

En la escritura de de 2014 (protocolo del Notario D. Eloy Jiménez), de venta a los demandados de las fincas objeto de retracto por las vendedoras (sobrina y cuñada de la retrayente), que eran nudo propietaria y usufructuaria, respectivamente, de ambas fincas, tras la descripción de la registral (jardín con piscina) el notario hace constar: *"Manifiestan que según catastro está señalada con el número del Paseo "*. (Corresponde dicho número a la otra finca, la casa con cochera y corral).

Y en la reseña del título se dice que procede de una segregación *"realizada en la escritura otorgada ante el Notario Don Francisco de Asís Sánchez Ventura Ferrer el día de de dos mil cinco, número de protocolo"*. Se reitera a continuación que las fincas tienen un solo número de referencia catastral *"ya que forman una sola finca, que es la que consta en la certificación catastral descriptiva y gráfica obtenida por medios telemáticos que uno a esta matriz. Manifiestan los comparecientes a mi instancia que los datos recogidos en dicha certificación se corresponden con la realidad física de las referidas fincas"* (el subrayado es nuestro). Y continúa la descripción: *"Tal y como se ha dicho las descritas fincas forman una sola en el catastro, con una superficie total de…correspondiendo a la primera ochocientos cuarenta y cinco metros …y en el interior de esta existe una edificación de dos plantas, con una superficie construida total de…"*. Las dos fincas *"con todo cuanto les sea accesorio e inherente a las mismas"*, se venden por un precio conjunto de 100.000 euros.

Como se dice en la anterior escritura, la denominada finca urbana (jardín con piscina, vestuarios y barbacoa), registral , que forma en la realidad una sola finca con la

casa familiar, procede de una segregación de la finca matriz, la , anteriormente la , según lo recoge el fundamento octavo de la sentencia recurrida. Según la certificación registral aportada como documento nº 3 con la demanda, esta registral fue segregada (escritura de de de 2005, protocolo del notario D. Francisco de Asís Sánchez-Ventura Ferrer) por la sobrina de la actora y su madre (las vendedoras), correspondiendo a la primera por herencia (y la segunda usufructuaria) de su padre D. José L. M., hermano de la actora, quien a su vez la había recibido como legatario de sus padres D. José L. D. y Dª. Pilar M. A., que la habían comprado en escritura de de de 1941 al padre del primero, D. Cesáreo L. L. Según la inscripción 3ª de la registral , que era la que quedaba tras la segregación anterior, esta última finca era vendida a C. T., de forma que la otra finca, la , aun registralmente independiente, era vendida junto con la (casa con corral y cochera), como una sola, a los demandados por un único precio.

Por lo tanto, las vendedoras, tras la segregación realizada por ellas en 2005 para independizar la que venderían a C. T. S.A., vendieron a los demandados, hoy recurridos, una sola finca (física y catastralmente) constituida por la casa familiar con su cochera y corral y por la finca-jardín con piscina, vestuario y barbacoa, y así la adquirían los compradores. No parece que dichos compradores aceptaran que, dado que se trata de dos fincas registrales distintas, pudiera ser ejercitado el retracto sobre la primera y no sobre la segunda, o viceversa.

En definitiva, las propias vendedoras incorporaron la finca registral (jardín-piscina), física y catastralmente, a la casa familiar, como un anejo, como ya lo era la cochera y el corral, y así lo vendieron en su conjunto. El artículo 334 del Código civil incluye como inmueble a todo aquello que esté unido al suelo (construcciones, árboles, plantas, estatuas, etc.), de manera fija o incorporado por su dueño. En este caso la cochera y el corral ya aparecían así en la descripción conjunta con la casa, y sus dueñas incorporaron otro anejo, el jardín con la piscina, vestuario y barbacoa, y así lo vendieron.

La finca destinada a jardín con piscina y demás elementos, calificada como urbana, podría no permitir ser retraída aisladamente, pero no era la pretensión de la parte demandante, que la incluía en su demanda como un elemento anejo e inseparable de la casa. En ese sentido, se produce la infracción del artículo 589 del CDFA, pues toda ella debe ser considerada como edificio, pero no hay infracción de lo dispuesto en el artículo 593 que prevé la situación inversa, en la que solo se pretende retraer uno solo de los inmuebles que se enajenan, siempre que reúna los requisitos para ellos y tenga la condición de bien de abolorio.

La finalidad perseguida: La sentencia de primera instancia se refiere a la facultad moderadora de los tribunales que llevaría a la desestimación del retracto de abolorio en los casos en que, aun concurriendo los requisitos para ello, no se consiga la finalidad última de mantener la integridad del patrimonio familiar, "*exigiéndose al retrayente una afección de los bienes que pretende retraer, cuestión que no se aprecia cuando haya, por ejemplo, un interés especulativo sujeto, por ejemplo también, a un proyecto urbanístico, pero es lo cierto que en el caso que nos ocupa este posible interés, o bien en sentido contrario, esa falta de desafección no se ha acreditado*".

La sentencia de apelación se refiere también (fundamento noveno) al interés por *"la conservación en el seno familiar de una finca rústica poseída por el tiempo de dos generaciones…"*. Del hecho de haber nacido la actora en la casa afirma que no justifica sin más el uso del derecho dado que no tiene allí su residencia y carece de relación actual, mencionando el posible interés especulativo. Con cita de la jurisprudencia sobre el retracto de colindantes afirma que debe defenderse una interpretación estricta en el ejercicio del retracto de abolorio, *"más cuando los pueblos han quedado abandonados y aquellas viviendas solo se usan por lo general como segundas residencias, pudiendo implicar una considerable merma económica en la transmisión, salvo que se demuestre, claro, que el fin deseado es coincidente con el que se recoge en la Ley, en los términos antes dichos, que no es el caso"*.

El Preámbulo del CDFA explica la reforma afirmando que *"los inconvenientes que presenta en el tráfico inmobiliario no son suficientes para suprimirlo, pues responde a intereses y concepciones familiares dignos de protección. En cualquier caso, el derecho de abolorio no debe tener otros presupuestos, requisitos ni restricciones que los que la Ley establece, por lo que se prescinde de la referencia a la "moderación equitativa" por los tribunales que la Compilación introdujo"*.

En el texto articulado los requisitos subjetivos se cumplen cuando el derecho lo ejerciten los parientes colaterales dentro del cuarto grado, además de la permanencia de los bienes en la familia durante las dos generaciones inmediatamente anteriores. Ambos requisitos se tienen por cumplidos tanto en la sentencia de primera instancia como en la de apelación. Por lo que se refiere al interés de la retrayente, la sentencia del Juzgado afirma que no se ha probado la falta de afección, y la de la Audiencia no aprecia la afección porque la actora no tiene su residencia en la localidad ni la ha tenido en tiempos recientes, pasa largas temporadas en el extranjero y carece de relación actual.

Como se ha dicho, en la regulación actual no se exigen otros requisitos que los legalmente establecidos, entre los que no se encuentra la afección y, desde luego, no se exige que se pruebe la misma, habiéndole bastado a la sentencia de primera instancia que no se hubiera probado su falta.

La supresión de la facultad moderadora tiene su justificación, precisamente, en objetivar los requisitos exigibles (parentesco y permanencia en la familia), sin exigir una afección específica que se debe presumir mediante el cumplimiento de los requisitos anteriores. Además, ha de tenerse en cuenta la prohibición para el retrayente de enajenar el bien adquirido durante cinco años (artículo 596.3).

En definitiva, la afección subjetiva del retrayente no es requisito legalmente exigido para el ejercicio del derecho de retracto por lo que su exigencia (pretendiendo además la prueba de la afección a la parte actora), vulnera lo establecido en el artículo 589 del CDFA, por lo que debe ser estimado el recurso y casada la sentencia."

o. OTRAS MATERIAS

*** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de enero de 2016. Recurso de casación. Competencia. Preceptos infringidos

"PRIMERO.- Dictada sentencia por la Audiencia Provincial de Teruel el día 4 de noviembre de 2015, se articula por la parte demandada recurso de casación fundado en cinco motivos. La procedencia para interponer el primero de ellos se sustenta en la previsión del artículo 477.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al entender infringido el artículo 33.3 de la Constitución.

Respecto de tal motivo, como se indicó en la providencia de fecha 28 de diciembre de 2015, que ha sido reproducida en el Antecedente de Hecho Tercero de esta resolución, consideraba la Sala que podía proceder su inadmisión, porque al ser la invocación del derecho constitucional planteada de modo meramente circunstancial a los fundamentos reales del recurso, la justificación de la impugnación en la norma constitucional carecía de fundamento real.

Dado traslado de tal consideración a la parte recurrente, en el escrito presentado expone que la infracción constitucional debe entenderse producida por no haber respetado la sentencia la previsión del artículo 9.3 de la Constitución, y no hace referencia alguna al artículo 33.3 de la Constitución que es el que recogió como fundamento en su escrito de recurso.

Al pretender basar el recurso, después de haber sido presentado, en un nuevo precepto, la parte introduce en el proceso, extemporáneamente, una nueva causa de impugnación. Pretensión que es inadmisible, ya que, tal y como previene el artículo 481 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , los fundamentos del recurso de casación deben ser expuestos en el escrito de interposición del recurso.

Respecto del artículo 33.3 de la Constitución, que sí fue causa del recurso de casación, ninguna mención recoge el escrito que atendió el traslado por posible inadmisión del recurso. Por tanto, no cabe valorar argumento alguno que pueda contradecir o variar la consideración de posible inadmisión del motivo primero que recogía la providencia de 28 de diciembre de 2015. En consecuencia con ello, procede mantener la inadmisión del motivo primero, por ser claramente carente de fundamento, y por aplicación del artículo 483.2.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- Los motivos dos a cuatro del recurso se sustentan procesalmente en el interés casacional previsto en el artículo 477.2.3º y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en cuanto al fondo, argumentan la infracción de normas aragonesas referidas a la servidumbre de paso, lo cual determina que la competencia corresponda a esta Sala y que sean admitidos a trámite.

TERCERO.- El motivo quinto del recurso cita como infringido el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que es norma legal estatal. Dado que la competencia de esta Sala, según el artículo 478.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se extiende a los casos en que sea invocado derecho aragonés y derecho general, procede también la admisión de tal motivo de recurso."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 15 de febrero de 2016. Recurso de casación. Inadmisión. Infracción normativa**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo, según dispone el artículo 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta Sala es competente para conocer del recurso de casación interpuesto, a tenor del artículo 478, núm. 1º, párrafo 2º, de la citada Ley procesal, ya que corresponde "*a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales Civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad*", y a estos efectos competenciales puede entenderse que el recurso de casación interpuesto se refiere a la vulneración de derecho civil aragonés, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá acerca de su admisibilidad.

SEGUNDO.- El recurso de casación tiene naturaleza de recurso extraordinario, tendente a revisar si la sentencia dictada en segunda instancia por una Audiencia Provincial ha infringido el ordenamiento jurídico aplicable al caso. Como expresa el Auto del TS de 6 de noviembre de 2012 (recurso 1880/2011), *Conviene recordar en este punto que tales exigencias derivan de la propia naturaleza de este recurso y de su carácter especialmente restrictivo y exigente (SSTC 7/89 y 29/93), como esta Sala ha declarado con reiteración en la aplicación del art. 1707 de la LEC de 1881, por ello se encuentra implícita en el artículo 481.1 de la LEC 1/2000, de manera que este precepto impide la admisión, además de aquellos recursos carentes de fundamentación, también de aquellos en los que la parte, con cumplimiento aparente de los requisitos formales -denuncia de infracción sustantiva y exposición más o menos extensa de alegaciones- sólo pretende someter al Tribunal sus propias conclusiones sobre la controversia, pero no una verdadera infracción sustantiva.*

El art. 477 de la LEC exige que el recurso se funde en la infracción de norma sustantiva, a fin de que el tribunal de casación –y, previamente a su decisión, las partes recurridas- conozca la razón por la que la recurrente entiende que se ha vulnerado el ordenamiento jurídico sustantivo y pueda ejercer la función nomofiláctica –o de protección del derecho- que es la esencia del recurso de casación –Auto del TS de 6 de mayo de 2008 (recurso 584/2004): "*Esta Sala … ha circunscrito este recurso al examen de la corrección jurídica de las normas referidas al fondo del asunto, esto es, a la cuestión sustantiva o material que constituye el objeto del proceso, según es inherente a su función nomofiláctica*"-.

TERCERO.- En la providencia dictada por esta Sala en fecha 13 de enero pasado se puso de relieve que el recurso podía incurrir en causas de inadmisión, ya que la parte

recurrente no expresaba el o los preceptos normativos del derecho aragonés que consideraba infringidos por la sentencia objeto del recurso.

La parte recurrente ni siquiera ha estimado oportuno cumplir el trámite de alegaciones, mientras que el Ministerio Fiscal y la representación de la Comunidad Autónoma instan la inadmisión.

Inadmisión que procede, ya que resulta necesario que en el escrito de interposición del recurso además de expresarse clara e inexcusablemente la infracción legal que se pretenda denunciar, con cita de los concretos y correspondientes preceptos legales de derecho sustantivo que se estimen infringidos por el Tribunal de apelación, y se describa también el interés casacional, que en este caso no se expresa, el cual ha de estar directamente relacionado con la infracción legal denunciada, de manera suficientemente clara y precisa como para poder ejercer adecuadamente el control de la admisión.

CUARTO.- El recurso de casación, dada su función nomofiláctica o de defensa y protección del ordenamiento jurídico, ha de fundarse necesariamente en la infracción de norma legal, a tenor del art. 477.1 de la ley procesal.

Como expresa el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Primera del TS de 30 de diciembre de 2011, apartado I, 6, es causa de inadmisión del recurso de casación "*La falta de indicación en el escrito de interposición del recurso de la norma sustantiva, la jurisprudencia de la Sala Primera del TS o el principio general del Derecho infringidos -que ha de hacerse en el encabezamiento o formulación de cada uno de los motivos en los que se funde el recurso o deducirse claramente de su formulación sin necesidad de acudir al estudio de su fundamentación- o la indicación de norma, jurisprudencia o principio general del Derecho que no sea aplicable al fondo del asunto, a tenor de la ratio decidendi de la sentencia recurrida*."

Tal acuerdo ha sido objeto de aplicación en reiteradas resoluciones del alto tribunal, entre ellas en Auto de 4 de diciembre de 2012.

En el caso de autos no se menciona norma alguna como motivo del recurso de casación. Las alegaciones formuladas en el escrito de recurso se dirigen, más que a sostener la infracción normativa, a modificar las conclusiones sobre los hechos realizadas en la sentencia impugnada, sin respetar la valoración de la prueba, lo que no puede constituir el objeto del recurso de casación. En su caso, estas invocaciones deberían ser realizadas por el cauce de infracción procesal y al amparo de lo prevenido en el art. 469 de la LEC, cauce procesal que no se ha utilizado en este caso.

QUINTO.- El recurso incurre así en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.2º LEC, en relación con los arts. 481.1 y 477.1, es decir, de interposición defectuosa por falta de técnica casacional.

Lo expuesto conduce, de conformidad con lo establecido en el artículo 483.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la inadmisión a trámite del recurso de casación formulado y consiguiente declaración de firmeza de la sentencia recurrida."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 19 de febrero de 2016. Responsabilidad del Consejo Rector y Gerente de Cooperativa. Actuación negligente. Ocultación y falta de transparencia. Grado de culpa exigible**

"PRIMERO.- La S. C. A. V. de la O. , domiciliada en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), promovió acción social de responsabilidad de un miembro del Consejo Rector de la misma, en concreto de su Presidente D. José Antonio A. A., al amparo de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, y del Director Gerente D. Ángel M. C. conforme al artículo 28.2 de los Estatutos de la Cooperativa, que señala para este cargo el mismo régimen de responsabilidad que el previsto para el Consejo Rector. Se solicitaba la condena solidaria de ambos al pago de 1.287.309,66 euros.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda con declaración de las costas de oficio.

El fundamento tercero de la sentencia estudia la regulación legal de la responsabilidad de los miembros del Consejo Rector de las cooperativas en el artículo 42 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón, destacando que este precepto la exige *"por su actuación maliciosa, abuso de facultades o negligencia grave"*, en tanto que la Ley de Cooperativas de ámbito nacional, solo de aplicación supletoria, se remite a la Ley de Sociedades de Capital, que en el artículo 236.1 de su Texto Refundido declara la responsabilidad de sus administradores *"por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo"*, lo que resulta más riguroso que en la ley aragonesa pues en ésta solo habrá responsabilidad por su actuación maliciosa o abuso de facultades, que implica una intención activa y voluntaria, o por negligencia cualificada como grave, no bastando la mera falta de diligencia de un ordenado comerciante (negligencia simple).

SEGUNDO.- El fundamento cuarto de la sentencia de primera instancia contiene una detallada descripción de los hechos que, atendiendo a la prueba practicada, considera probados:

"CUARTO.- HECHOS PROBADOS. CONDUCTA REALIZADA POR EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COOPERATIVA.

La parte actora considera que JOSE-ANTONIO y ANGEL-MIGUEL son responsables y deben responder de la cantidad reclamada en este procedimiento por hacer consentido y alentado la generación de una deuda en la COOPERATIVA omitiendo dar la necesaria información al resto del Consejo Rector y a la Asamblea de COOPERATIVA, además de no adoptar oportunas cautelas para impedir el incremento de la misma.

JOSE ANTONIO fue Presidente de la COOPERATIVA desde el 8 de octubre de 2002 hasta el 7 de octubre de 2010, mientas que MIGUEL ANGEL ha sido gerente de la misma

durante más de treinta años, hasta el año 2013 (documentos 1 a 4 de la contestación de ANGEL MIGUEL).

En relación a los hechos manifestados en la demanda aducidos en sustento de su pretensión, y en atención a la valoración de la prueba practicada ha quedado probado que:

- El gerente controlaba los saldos deudores existentes en la COOOPERATIVA e informaba regularmente al resto de órganos de la COOPERATIVA, especialmente al Consejo, como así lo regula la Ley –artículo 41 LCA y 28 Estatutos los estatutos- (documento 1 de la demanda), y lo confirma en su declaración ANGEL MIGUEL, y se ha expresado sin contradicción en las testifícales.

- S, SLU, (D en adelante) era socia de la COOPERATIVA como han reconocido todas las partes y se comprueba con la documental, si bien no era un socio que aportara producto alguno a la COOPERATIVA.

- D era una empresa dedicada al transporte que poseía una importante flota de camiones, sus vehículos repostaban en la COOPERATIVA desde hace más de 10 años. En el 2006 la empresa empezó a retrasar los pagos. En el Libro Mayor se refleja que D pasó de tener un saldo deudor en 2004 de 19.757,64 euros a tener en el año 2010 un saldo de -1.016.619 euros (documento 2 de la demanda).

- Ha quedado probado que era una practica habitual pedir a los no socios de la COOPERATIVA un aval bancario en garantía del pago del precio de los posibles saldos deudores que se podían generar en el suministro de combustible, como así declaran tanto los demandados como los miembros del Consejo Rector y se revela con la documental (documentos 3 a 5 de la demanda).

-ANGEL MIGUEL como gerente participaba de las reuniones del Consejo rector para informar de la gestión cotidiana de la COOPERATIVA, como así han manifestado los testigos que han comparecido en juicio y que fueron miembros del Consejo Rector de la COOPERATIVA. Sin embargo, no consta en ningún acta que informara de la situación del saldo deudor mantenido por D, pues en ningún acta del Consejo entre el año 2008 a 2010 se recoge tal extremo como tampoco aparece en las de la Asamblea (documento 7, actas de la Asamblea desde 2007), pese a se una cuestión relevante y de importancia que de haberse tratado se reflejaría en las mismas. No obstante, no todo lo que se trataba en las reuniones del Consejo se redactaba en el acta, ni se solían dar nombres de los deudores, sin embargo, los testigos que eran miembros del Consejo Rector de la COOPERATIVA en el tiempo de los hechos, indican sin contradicciones y de forma espontánea aportando detalles, que no se les informó en ningún momento, puesto que de haberlo hecho hubieran tomado medidas e informado a la Asamblea al ser una cuestión lo suficientemente importante.

- Como se ha indicado conforme a la información suministrada por el Libro Mayor, el saldo deudor de D en la COOPERATIVA aumentó de 672.446,50 euros en el año 2009, a

1.016.619. El aumento había sido considerablemente mayor al de los años anteriores, dicho dato era patente en abril de 2010 ya que contable y fiscalmente los ejercicios de la COOPERATIVA comienzan el 1 de abril de cada año. Anteriormente D también alcanzó niveles de deuda altos que aminoró considerablemente, lo cual generó cierta confianza en la sociedad.

- Ante tal incremento los demandados actuaron unilateralmente, pues todos los testigos han manifestado que desconocían las actuaciones que llevaron a cabo el Presidente y el Gerente de la COOPERATIVA para garantizar o asegurar el pago de la deuda que han quedado acreditadas, y que son:

1. El 27 de abril de 2010 hubo reconocimiento notarial de deuda en escritura pública efectuado por D por una cantidad de 974.734,79 euros obligándose a devolver la misma mediante pagos mensuales de determinada cantidad más intereses. Además O. se constituyó en fiador personal solidario de la deuda sin beneficio de excusión, orden o división, y se constituyó una hipoteca sobre una finca de O. cuyo valor a efectos de subasta era de 1.031.621,25 euros, aunque dicha finca ya se hallaba gravada con dos hipotecas para responder de dos cantidades que sumaban más de 800 mil euros (documentos 12).

2. Un mes más tarde, el 27 de mayo de 2010 se amplió ante notario en escritura pública la cantidad afianzada en 454.734,79 euros, constituyendo O. una nueva hipoteca sobre un bien cuyo valor a efectos de subasta era de 522.965,56 y sobre el que pesaban tres hipotecas cuyo importe de las cargas era superior a 900 mil euros (documento 13).

Sin embargo, pese a que pudieran resultar insuficientes tales medidas, no se prueba o indica otras medidas más eficaces que se podían haber tomado en aquellos momentos para asegurar la cantidad debida. No obstante, era posible parar el incremento de la cantidad debida por D no suministrándole más combustible.

Sin perjuicio de que la obtención de garantías para el pago de la deuda fue una actuación positiva y favorable, pese a su constatada ineficacia, sin embargo, es reprochable el procedimiento por el que ambos demandados obtuvieron dichas garantías al no actuar con transparencia.

Los demandados fueron conocedores de la deuda con anterioridad a que los órganos de la COOPERATIVA fueran informados, a pesar de ello no informaron de forma inmediata a ninguno de ellos. Con la prueba practicada no es posible determinar con exactitud cuando tuvieron conocimiento efectivo de la situación. No obstante ANGEL MIGUEL por razón de su cargo debió estar informado del curso de la deuda de D en todo momento. Sin embargo, ambos demandados sin el conocimiento, y sin informar al Consejo o a la Asamblea de la existencia de la importante deuda, la gestionaron por su cuenta, obstaculizando tomar otro tipo de medidas que en ningún caso serían de su competencia.

- *Ha quedado probado que el 7 de abril de 2010 por iniciativa de JOSE-ANTONIO y ÁNGEL se tomó un acuerdo en el Consejo Rector por el que se facultaba al Presidente de la COOPERATIVA a obtener notarialmente reconocimientos de deuda y garantías personales y reales de devolución de las mismas, y a otorgar aplazamiento de las deudas, dicho acuerdo se recoge en el Acta de Consejo (bloque documental 6 de la demanda), y un certificado del mismo se adjunta a las escrituras de reconocimiento y garantía de deuda de D que días después se firmaron. Los demandados que instaron la toma del acuerdo como declaran los testigos sin contradicción, no manifestaron que solicitaban la modificación del acuerdo para la adopción de las medidas indicadas, ello no obsta para que el acuerdo se tomara voluntariamente por el Consejo Rector el cual posteriormente no ha sido impugnado, siendo que el contenido del acuerdo no es perjudicial para la sociedad. Dicho acuerdo facultó el Presidente para tomar garantías de la deuda unilateralmente y de forma regular.*

- *Tras la toma de las indicadas garantías, en menos de seis meses, la deuda incrementó en 527.564,04 euros, D libró pagarés para su pago que no fueron cobrados a su vencimiento (documentos 15 a 27 de la demanda).*

- *JOSE-ANTONIO cesó en el cargo de Presidente en octubre de 2010, sustituido por MARIANO , el Gerente se acogió a un régimen de prejubilación por contrato de relevo contrastándose un nuevo gerente JOSE ENRIQUE..*

- *El 7 de octubre de 2010 hubo una Asamblea en la que se preguntó por la deuda de D, los demandados respondieron de manera vaga y poco precisa, como se ha puesto de manifiesto con las testificales que han sido coincidentes en ese punto, además ello provocó que algunos socios requirieran notarialmente información sobre tal cuestión (documento 29). Ello evidencia que tanto el Presidente como el Gerente trataron de ocultar la información que acreditadamente manejaban.*

- *La empresa D presentó concurso voluntario (nº 268/2011) de acreedores tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Zaragoza. En el que se ha dictado Auto de apertura de la fase de liquidación (documentos 32 a 36 de la demanda). Sin que entre noviembre de 2010 hasta la solicitud de concurso se iniciaran contra ella actuaciones judiciales por la COOPERATIVA.*

Se concluye a la vista de los acontecimientos que fue ideado por los demandados un plan para que pudiesen garantizar o tomar medidas frente a la importante deuda existente de D sin que la COOPERATIVA tuviese información, al menos dada por ellos, de la situación. Ambos demandados actuaban en connivencia, ello se desprende del hecho de que las escrituras notarialmente primero fueron firmadas por ANGEL-MIGUEL y posteriormente ratificadas por JOSE-ANTONIO, siendo este el facultado para la firma, y aquel el que por su cargo debía conocer los saldos deudores. Por ello modificaron el acuerdo del 1984 en el Consejo para que el Presidente pudiese obrar unilateralmente sin requerir autorización de otro órgano, ello ha quedado confirmado puesto que el mismo día, el 27 de abril de 2010, que se firmó la escritura notarial en la que se reconocía la deuda y se otorgaban las garantías por D, se celebró una reunión del Consejo en la que

nada se mencionó de las actuaciones llevadas por los demandados, ni sobre las garantías de la deuda, ni sobre la deuda en sí existente, pues así manifiestan los testigos. Tampoco se mencionó en el acta de la reunión del Consejo, pues debe considerarse que al ser un tema de tal relevancia de haberse tratado se hubiera mencionado en la misma. Asimismo, tampoco al tomarse el acuerdo del Consejo de 7 de abril de 2010, consta que se anunciara la intención inmediata de servirse de dicha autorización para gestionar la deuda de D. A mayor abundamiento, en la Asamblea de octubre de 2010 los demandados no dieron información de forma clara a la Asamblea, asumiendo ambos, como confirman los testigos, la certeza del conocimiento pleno del asunto D. Todo ello indica que los dos fueron conscientes del problema de la deuda con anterioridad considerable, y no uno u otro, como tratan de evidenciar los demandados. No sólo porque ANGEL por razón de su cargo estaba al tanto de la existencia de tal deuda, como reconoce, sino que también JOSE ANTONIO conocía su existencia, no hay que olvidar que a pesar de los hechos acreditados, JOSE ANTONIO en el acto de conciliación que precedió a este procedimiento alegó que conoció la existencia de la deuda cuando cesó en su cargo en la COOPERATIVA (documento 38 de la demanda), lo cual contradice lo manifestado en este procedimiento y lo reflejado en los documentos 12 y 13 de la demanda.

Sin embargo, no debe obviarse que el Consejo, a pesar de no ser informado, era consciente de la existencia de importantes deudas que terceros mantenían con la COOPERATIVA, pues se evidencian en los documentos contables y se había facultado voluntariamente a su Presidente para la gestión de las mismas.

Si las medidas tomadas por los demandados hubieran resultado óptimas ninguna responsabilidad se le exigiría por lo que resulta en parte, más un reproche por el resultado obtenido en la gestión que por la actuación llevada a cabo, puesto que tal autorización suponía dejar en sus manos la gestión del cobro de las deudas, lo cual no implica que no debieran informar."

Así pues, la actora responsabilizaba a los demandados por haber permitido a la entidad S S.L.U., socio de la Cooperativa, no productor sino cliente para su aprovisionamiento de combustible para sus vehículos, la acumulación de una desmesurada deuda que llegó en el año 2010 a 1.016.619 euros. Pues, aunque los demandados, sin dar cuenta a la Cooperativa, intentaron limitar el riesgo y obtuvieron algún afianzamiento mediante hipotecas y avales personales que resultarían insuficientes, permitieron que continuara el suministro de combustible, alcanzando la deuda el importe reclamado.

TERCERO.- Después del anterior relato de hechos la sentencia examina los requisitos legalmente previstos para la exigencia de responsabilidad a los administradores (nexo causal, actuación maliciosa, abuso de facultades y negligencia grave).

Se parte de que la actora exige la responsabilidad, esencialmente, por la ocultación de la existencia de la deuda a los órganos de la Cooperativa, que habría quedado

acreditada, así como por la pasividad durante un tiempo en la adopción de medidas y la toma de medidas tardías e inapropiadas sin competencia para ello.

Y señala a continuación los datos que atenúan su actuación reprobable, que en todo caso debe resultar maliciosa, abusiva, o gravemente negligente, y que rompen el nexo de causalidad entre su actuación y el daño causado. Expone así tales datos:

- *En primer lugar, la deuda fue generada por un tercero: la mercantil D, la cual nunca ha sido perseguida judicialmente por la COOPERATIVA, pese a que señale la COOPERATIVA que era su intención antes de que D solicitara el concurso voluntario.*

- *D era socio de la COOPERATIVA y la responsabilidad sobre la gestión total de la deuda ocasionada por él no puede recaer exclusivamente, ni aún parcialmente de manera significativa, sobre los demandados por diversas razones:*

1. *D ha sido socio de la COOPERATIVA al menos diez años. Si bien como empresa de transporte no aportaba producto alguno a la COOPERATIVA. El consumo que realizaba en la COOPERATIVA resultaba muy beneficioso pues eran cantidades considerables – últimos tiempos unos cien mil euros al mes-. Se ha indicado y reconocido que en principio no dio problemas con el pago, y que era una de las empresas de transporte más importante a nivel local, lo cual generó una confianza en la COOPERATIVA de solvencia. Todo ello implica que no sólo los demandados sino que cualquier responsable hubiera pensado que la falta de pago era una circunstancia temporal y salvable.*

2. *D no había aportado aval en la COOPERATIVA. El aval era exigible en todo caso a los no socios. En principio la demandante menciona que D no era socio, ello manifiesta el desconocimiento por parte de la COOPERATIVA de sus componentes o de las circunstancias en las que se encuentra cada uno de ellos, incluso tras preparar la demanda, pues como se ha acreditado D era socio. En cualquier caso no puede apreciar la falta de diligencia de los demandados por no exigir aval a dicha sociedad que garantice el pago de suministro, ya que nada se acredita sobre la razón de que tal exigencia deba recaer directamente sobre ellos. Además durante al menos diez años D ha sido socio y en los primeros años no existió incidencia relevante en cuanto al pago de los suministros. Cualquiera podía haber solicitado o manifestado algo sobre la exigencia de aval sin que nada se haya dicho ni conste. Por otra parte, se han reconocido otros supuestos en los que tampoco se había exigido un aval. A mayor abundamiento, la exigencia de aval era una práctica usual no un requisito indispensable, por lo que no se puede exigir responsabilidad por ello a los demandados ni mucho menos el pago de lo debido por dicha circunstancia.*

3. *Previamente a que se incrementara la deuda en la forma en que lo hizo en el último año habían existido retrasos en el pago. La cantidad debida por los suministros aumentó porque la empresa había crecido exponencialmente, generando más deuda.*

4. *La demandante ha indicado que en 2004 la cantidad debida al cierre del ejercicio era de 19.757,64 y en 2010 llegó a ser de 1.016.619. En seis años la deuda fue creciendo de forma considerable, sin que nadie en la COOPERATIVA manifestara algo al respecto. La COOPERATIVA estaba organizada, anualmente se formulaban cuentas auditadas en las que pese a que no reflejaran separadamente la deuda de D se indicaba el conjunto de las cantidades adeudadas a la COOPERATIVA en la parte de Activo – deudores comerciales- (documento 8, 9, 10 y 11 de la demanda). Sin embargo, ninguna advertencia o salvedad se menciona en las auditorias efectuadas, lo cual no es imputable a los demandados ya que nada se ha probado al respecto. Así también, la cantidad debida por la mercantil se reflejaba en cada año en el libro mayor de la COOPERATIVA como prueba, y existía información contable disponible para el Consejo, la Asamblea y demás personas.*

5. *En las actas del Consejo Rector consta, y así han declarado las partes y los testigos, que los auditores comparecían en los Consejos y daban explicaciones y hacían las aclaraciones solicitadas de los informes realizados (grupo documental 5 de la demanda). Posteriormente las cuentas se aprobaban por la Asamblea. Sin embargo, los auditores según manifestaban los propios miembros que componían el Consejo Rector ni en 2009 y 2010, ni con anterioridad, informaron sobre D, por lo que ello también conduce a debilitar el nexo de causalidad que une los hechos realizados por los demandados con el daño producido.*

   Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, los miembros del Consejo Rector tenían oportunidad de informarse de cualquier asunto económico, y por tanto no ampararse en la presunta "confianza ciega" depositada en el Gerente y Presidente, lo cual puede resultar negligente, si bien tanto los demandados, como el propio sistema de la COOPERATIVA no facilitaron que conocieran el alcance del asunto.

6. *Asimismo, la existencia de una deuda no era absolutamente desconocida pues en 2008 el socio de la COOPERATIVA, IGNACIO M., como se ha reconocido, preguntó por la situación de los deudores del gasóleo. Además la mayoría de los testigos reconocen que habían oído rumores, en los últimos tiempos de la deuda de D, si bien desconocían la suma real adeudada, pero nadie actuó ni preguntó de manera forma y efectiva. Incluso el Secretario del Consejo Rector que firmó las mencionadas escrituras y que tuvo la posibilidad de tener conocimiento previo de la situación, ha manifestado en juicio que leía lo que firmaba por encima a causa de la confianza que tenía en los demandados. Ello también contribuye junto con los demás datos expuestos a la ruptura del nexo causal, pues el desconocimiento de la situación no se produjo exclusivamente por la falta de comunicación de los demandados.*

   Todos los miembros del Consejo Rector tienen la obligación de desempeñar su cargo no sólo con buen fe sino con la diligencia de un ordenado empresario, por lo que aunque la deuda de D no apareciera separadamente en la documentación contable, la misma se contenía en el conjunto de la cantidad que se adeudaba a la sociedad, no pudiéndose amparar ante tales datos de endeudamiento en la permanencia

voluntaria en la ignorancia de los demás miembros del Consejo Rector justificándose en la confianza depositada en la actuación del Presidente y del Gerente.

7. *el 17 de mayo de 2010 se solicitó la documentación referente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sección de gasoil de la COOPERATIVA de los ejercicios 2007 7 2008, posteriormente se solicitó que se incluyese en el Orden del Día de la Asamblea lo referente a la Cuenta de Perdidas y Ganancias (documento 30 de la demanda).*

8. *Además, el sistema de cobro del combustible en la COOPERATIVA existente en el momento de los hechos de la demanda no era el más adecuado, así en juicio se ha declarado tanto por el actual Presidente y Gerente de la COOPERATIVA que se ha cambiado de sistema, utilizando el pago por tarjeta para evitar vasos como el que nos ocupa.*

9. *Por otra parte no hay que olvidar que gran parte de la deuda, y por tanto su alarmante incremento se produjo en pocos meses, existiendo durante años retrasos en el pago del suministro como se ha reconocido. En los primeros meses del año 2010 ante la situación de impago alarmante, los demandados, si bien no informaron al Consejo Rectos actuaron previamente legitimados por este.*

10. *Ha quedado acreditado que los demandados durante los meses primeros meses del 2010 ocultaron la gravedad de la deuda de D, no su existencia. Si bien para remediarla, de manera opaca, realizaron actuaciones tendentes a paliar la misma. Las medidas y aseguramientos tomados para garantizar el pago de la deuda entraban dentro de la normalidad y coherencia. Si embargo se les reprocha a los demandados además de no haber informado a la COOPERATIVA, el no haber procedido al corte de suministro, o el haberse extralimitado en sus funciones. Al respecto hay que indicar en primer lugar, que si bien no fue apropiado la manera en que se obtuvo el acuerdo del Consejo Rector el 7 abril de 2010 por el que se facultaba al Presidente a que pudiera exigir las garantías, los demandados lo hicieron con un fin beneficioso para la COOPERATIVA, para garantizar el pago de la deuda de D, no por tanto en contra del interés social. Como ya se ha indicado D como socio y cliente había generado confianza durante años en su capacidad de pago, además de dejar grandes benéficos, como así se ha indicado en distintas ocasiones en juicio y manifiesta de forma expresa en juicio el consultor fiscal-Víctor Sebastián-, y así se reflejó en el acta de la Asamblea de 31 de enero de 2011. en base a dicha apariencia, y al volumen de la empresa, no se le daba importancia a las deudas que iba generando, salvo en el 2010 cuando se observó la magnitud considerable de la misma. ANGEL MIGUEL ha manifestado en juicio de forma coherente, y reconociendo en parte que su actuación fue tardía, que "se les fue de las manos la situación". Los testigos interesados en depurar responsabilidades en la COOPERATIVA como son Jesús C., José Miguel G. o Diego C., ratifican esa versión de forma idéntica reproduciendo dicha explicación que les fue dada en su momento por ANGEL MIGUEL. Reconocer y excusarse en que "se les fue de las manos" muestra por una parte, que asume que conocía plenamente la situación, y no el resto, y por tanto quien pudo actuar; y por otra parte, que su actuación si bien no fue la*

mas adecuada no fue intencionada, actuando en la manera que estimó más oportuna confiando en el pago de la misma.

11. *Asimismo, la COOPERATIVA pese a considerar negligente la actuación del ANGEL MIGUEL, ha permitido que siguiera desempeñando sus fundones a tiempo parcial, sin apartarlo del cargo, en el que continuó hasta su completa jubilación en el año 2013, por lo que la COOPERATIVA no ha actuado en defensa de sus propios intereses. Sin olvidar que ÁNGEL MIGUEL en treinta años ha ejercitado su cargo sin reproche destacable alguno (documento 4 y 5 de la contestación de MIGUEL ANGEL).*

12. *A mayor abundamiento, la COOPERATIVA una vez enterada de la situación de la deuda, conociendo la envergadura de misma, aunque no su concreta cuantía no actuó inmediatamente. La COOOPERATIVA no reclamó la deuda judicialmente al deudor pudiendo hacerlo desde octubre de 2010, momento en el que efectivamente se conoció la situación de gravedad por la Asamblea, hasta el 2 de septiembre de 2011 momento en la que la mercantil D fue declarada en concurso (documento 32 y siguientes de la demanda). Además dio D la oportunidad de abonar los plazos de pago negociados por los demandados, y no sólo eso sino que como se acredita en el Acta de la Asamblea de 31 de enero de 2011 (grupo documental 7) se accedió a una nueva propuesta de D de pago por la que se rebajaba considerablemente el importe de las cuotas que debía pagar mensualmente y se aumentó el plazo para la total devolución de las cantidades debidas. Además, consta en Acta que no consideraron oportuno tomar la medida de embargar al socio deudor. En definitiva, posteriormente la COOPERATIVA tras conocer la deuda de D actuó de manera más liviana que los demandados en cuanto a la exigencia de las garantías tomadas, por lo que no puede reprochar a estos una actuación gravemente negligente en la gestión de la deuda, ni la falta de rapidez en la toma de medidas. No puede imputarles la omisión de medidas aseguramiento de la deuda concretas, especificas, incluso oportunas pues posteriormente la COOPERATIVA las suavizó. Tampoco la falta del hipotético corte de suministro meses antes puede considerarse negligencia grave por el curso precipitado de los acontecimientos, por no ser ellos competentes para acordarlo, si bien va asociado a la falta de información que hubiera posibilitado en su caso, tomar ese tipo de medidas con anterioridad.*

13. *A mayor abundamiento, todo lo expuesto hay que valorarlo teniendo en cuenta las especiales circunstancias de una COOPERATIVA que tiene más de 2.500 clientes y factura alrededor de 6 millones de euros al mes-*

    La demandante de forma imprecisa indicó que podía existir interés por parte del demando JOSE-ANTONIO por el cargo de Presidente que este ostentaba en M, ya quien dicha entidad financiaba a D, aduciendo que el demandado para favorecer que D cumpliese con los compromisos con dicha entidad se habría comportado de manera negligente en la gestión de la deuda. Sin embargo, nada al respecto se ha acreditado, además de que tomó medidas para el cobro de la deuda que fueron tácitamente confirmadas por la COOPERATIVA con la actuación llevada por la

misma. Las operaciones llevadas a cabo por los demandados no aparecen regidas por la deslealtad que supone el favorecimiento, como se ha insinuado, del socio.

La acción de responsabilidad subjetiva ejercitada contra los demandados por las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de su cargo, exige de tres requisitos para que nazca la obligación de reparar: En primer lugar, en cuanto a la acción u omisión llevada a cabo por los demandados: a la vista de lo expuesto hay que señalar que la antijuridicidad de la conducta de los demandados, como el no dar información oportuna durante algunos meses a los órganos de la COOPERATIVA, o no actuar con total transparencia en la toma de medidas oportunas, que por otra parte en nada se acredita que los mismos saliesen beneficiados en la gestión, no alcanza el grado de negligencia exigido en la Ley la cual que exige un plus a la mera negligencia. En segundo lugar, la realidad del daño para la COOPERATIVA se ha acreditado, si bien el causante directo es u n tercero –la mercantil O- la gestión de demandados influía no en el origen del daño sino en su persistencia. En tercer lugar, en cuanto el nexo causal hay que decir que, aún considerando que existió negligencia en la gestión de los demandados pues como se probado realizaron actuaciones reprochables en el ejercicio de su cargo, existe una ruptura en el nexo causal por el que no se puede hacer responsables a los demandados de la deuda generado por la mercantil O. Para considerar una conducta culposa no sólo hay que atender a la diligencia exigible de persona, tiempo y lugar (artículo 10104 Código civil) sino además al sector del tráfico o de la vida social en la que la conducta se desarrolla y proyecta. En este caso la conducta no ha alcanzado un grado de antijuridicidad considerable para hacer responsables a los demandados, tampoco existe una objetivación de la culpa en la normativa que le es aplicable, ni son ellos los causantes directos del daño, así también el posterior actuar de quien les exige la responsabilidad y las especiales circunstancias concretas que presenta la COOPERATIVA en el momento en el que se generó la deuda, que han sido expuestas, rompen en todo caso dicho nexo causal.

En conclusión, no puede apreciarse la responsabilidad de los demandados por la que deba hacerse responsable a los mismos de la deuda no satisfecha por D.

Como se ve, en el último apartado anterior la sentencia resume los aspectos que le llevan a considerar que se rompe el nexo de causalidad entre la actuación de los responsables y el daño: 1.- En cuanto a su actuación u omisión, por no dar información oportuna de la situación a los órganos de la Cooperativa, o no actuar con total transparencia en la toma de medidas, no alcanza el grado de negligencia exigido por la ley; 2.- Se ha acreditado la realidad del daño, si bien la gestión de los demandados influía no en su origen sino en su persistencia; 3.- Aun considerando que existió negligencia en la gestión de los demandados, hay ruptura del nexo causal pues hay que atender a la diligencia exigible y al sector del tráfico o de la vida social en la que la conducta se desarrolla, no siendo ellos los causantes directos del daño, y también a tener en cuenta la posterior actuación de la Cooperativa, incluso más suave que la de los demandados en la gestión de la deuda. Todo ello rompía, según la sentencia, el nexo causal.

CUARTO.- Interpuesto recurso de apelación por la Cooperativa, la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial la confirmó. Las razones expuestas para ello coinciden con las del Juzgado pues, tras examinar la regulación del artículo 42 de la Ley 9/1998, de Cooperativas de Aragón, concluye en la misma exigencia en la actuación de los administradores de *"abuso de facultades, casi intencional, caracterizada por una absoluta falta de diligencia, de incomprensible despreocupación en el ejercicio de las funciones encomendadas, requiriéndose una conducta maliciosa, como dice expresamente el texto legal. Una culpa leve, o de gravedad media, por simple descuido, sin especial relevancia, no dará lugar al nacimiento de aquella responsabilidad, por disposición expresa de la Ley que requiere aquella intensidad agravada."*

No aprecia la sentencia en el caso concreto tal conducta, con el grado de negligencia exigido y, además, pone especial énfasis en que, a pesar de ser conocida la deuda de T , nadie en la Cooperativa se preocupó de la misma ni de que fuera exigida su pronta devolución.

La sentencia atiende la impugnación de la parte demandada relativa a las costas de la primera instancia, que habían sido declaradas de oficio, pues tal declaración no sería ajustada a la ley. Pero argumenta que se podía haber solicitado la enmienda de tal declaración por error flagrante, y que ya la sentencia del Juzgado razonaba que las dudas de hecho o de derecho concurrentes justificaban la no condena en costas, criterio adoptado por el artículo 394 LEC, *in fine*, por lo que en tal sentido debía aclararse aquella declaración.

La Cooperativa solicitó aclaración/complemento de la sentencia por haber omitido la específica petición subsidiaria de su escrito de apelación de que se condenara a los demandados al pago de la suma de 527.564,04 euros, por haber seguido suministrando combustible a la cooperativa deudora después del reconocimiento de deuda con pacto de pago aplazado claramente inferior al valor del producto suministrado. Fue denegado el complemento solicitado porque se había desestimado la demanda con la extensa argumentación de no haber quedado suficientemente probado que los demandados obraran con la conducta maliciosa, abuso de facultades, o negligencia grave que la ley exige para declarar la responsabilidad, lo que resulta de aplicación también al supuesto particular de la petición subsidiaria, englobada en la general, sin que en la demanda se hubiera hecho petición sobre esta cuestión.

QUINTO.- El primer motivo del recurso de casación denuncia la infracción del artículo 42 de la Ley 9/1998, de Cooperativas de Aragón, de 22 de diciembre, sobre la responsabilidad de los miembros del Consejo Rector, que resultaría de aplicación igualmente al Gerente por aplicación del artículo 28.2 de los Estatutos de la Cooperativa, que le señala el mismo régimen de responsabilidad que el del Consejo Rector.

La recurrente reconoce que el régimen de responsabilidad de los administradores en el artículo 42 de la Ley de Cooperativas resulta más benévolo que el de las sociedades de capital, pues solo les será exigible en los casos de actuación con dolo, abuso de facultades o negligencia grave, excluyendo la culpa leve o levísima, pero entiende que debe

interpretarse conforme a la regla del artículo 3 del Código civil, con arreglo a la realidad social de los tiempos y atendiendo a su espíritu y finalidad. Por ello, teniendo en cuenta que los avances de todo orden facilitan la gestión de las sociedades y las tareas de control y supervisión, la diligencia exigible a un administrador no puede ser la misma que en el año 1951 pues las conductas que entonces pudieran considerarse leves o meramente negligentes pueden ser calificadas hoy como gravemente negligentes.

Reconoce también la recurrente que el Consejo Rector de la Cooperativa es un órgano no profesional conformado por socios agricultores, si bien el Presidente, que era además presidente de la Caja , no era una persona lega en asuntos de índole económico-financiero, y en cuanto al gerente señala que era un profesional, responsable de la administración de la Cooperativa y obligado al control del tráfico normal de la misma. La actuación de ambos habría resultado negligente al permitir el extraordinario incremento de la deuda de D sin dar la debida información a los órganos de gobierno de la Cooperativa, además de obtener por su cuenta unas garantías que resultaban ilusorias y, sobre todo, seguir suministrando con posterioridad combustible a la deudora por importe de 527.564,04 euros.

Dadas las anteriores circunstancias, y teniendo por acreditada la negligencia en las sentencias de instancia, discrepa la recurrente de su calificación como no grave, además de considerar que se ha apreciado indebidamente la ruptura del nexo causal. En este punto el recurso reexamina ampliamente los hechos y las circunstancias tenidos en cuenta por la sentencia, y considera que solo son recogidos parcialmente, pues otros habrían sido omitidos.

Estas discrepancias se refieren nuevamente a la actitud de los administradores en la renegociación de la deuda y en la constitución de avales ilusorios e ineficaces, también en la ocultación de datos que –se afirma en el recurso- no permitían al Consejo Rector detectar la deuda, y en la decisión de seguir suministrando combustible que difícilmente podría ser pagado. Finalmente, trata la recurrente de reafirmar su conclusión de que tal actuación incurría en negligencia grave por el hecho de que una conducta como la descrita sin duda daría lugar –en su opinión- a responsabilidad en los casos de ser exigida por los acreedores, por lo que no se entiende que igualmente no se considere así cuando son los mismos socios los que exigen responsabilidad.

Dada la extensa y exhaustiva descripción de los hechos en la sentencia del Juzgado, acogida por la de la Audiencia, y la amplia valoración de los mismos y de las circunstancias que han llevado a ambas sentencias a no apreciar la calificación de gravedad suficiente en la actuación de los responsables, no cabe pretender en el recurso extraordinario de casación la revisión de tales hechos y circunstancias. Su valoración en ambas instancias resulta muy matizada, precisamente para deslindar el grado de culpa exigible, que en el caso de la ley aragonesa exige un *plus* sobre la del ordenado comerciante, o la menos estricta en las sociedades de capital, de incumplimiento de los deberes inherentes al desempeño del cargo.

No se niega en ambas instancias la negligencia, sobre todo por la ocultación de la gravedad de la deuda y por la falta de transparencia en su negociación pero, al mismo tiempo, se valora que tal actuación pudo y debió ser conocida por los miembros del Consejo Rector, que podían tener sospechas de la situación pero dejaron que fuera gestionada por el presidente y por el gerente concediendo poder expreso para ello. Y, además, que su actuación en la renegociación de la deuda fue todo lo diligente que permitían las circunstancias, incluso al continuar el suministro de combustible al deudor, como demostraría el hecho de que posteriormente los nuevos órganos rectores suavizaron las condiciones para posibilitar el pago de la deuda.

En definitiva, la matizada valoración dada por las sentencias de instancia a las circunstancias de hecho debidamente descritas, no puede ser considerada como irracional, ilógica o arbitraria, pues, al contrario, ha resultado cuidadosa para deslindar adecuadamente el grado de culpa exigible a los administradores en un caso como el presente. Tal valoración, puede no resultar conforme a los intereses y a la propia percepción de la Cooperativa recurrente, pero no permite modificar la de la sentencia recurrida. Por lo tanto, este motivo del recurso debe ser rechazado.

SEXTO.- El motivo segundo del recurso pretende analizar la misma responsabilidad que se quiere exigir al Director Gerente. Como indica la recurrente, el artículo 41 de la Ley de Cooperativas de Aragón señala la competencia de este cargo en los asuntos concernientes al giro o tráfico normal de la cooperativa, y el artículo 28.1 de los Estatutos de la Cooperativa remite, en cuanto a su responsabilidad, a la de los miembros del Consejo Rector.

La recurrente alega que esta responsabilidad, como ya ha sido analizada para el presidente de la cooperativa, deriva para el gerente de su obligación de control de los asuntos relativos al tráfico ordinario y de la información debida al Consejo Rector, que se afirman incumplidas, y en el exceso de sus facultades al permitir la continuidad en el suministro de combustible al deudor a pesar de la deuda anterior impagada.

Nada se añade a lo dicho anteriormente sobre la responsabilidad de los administradores en general, y no hay dato del que se deduzca que la decisión de seguir suministrando combustible al deudor fuera exclusivamente suya. En consecuencia, debe estarse a lo dicho en el fundamento anterior y rechazar por ello este motivo del recurso.

SEPTIMO.- Finalmente, el tercer motivo del recurso alega infracción del artículo 1103 del Código civil que, permitiendo a los tribunales moderar la responsabilidad por negligencia en el cumplimiento de toda clase de obligaciones, debe posibilitar igualmente que, apreciada la culpa del deudor y del acreedor, se produzca la compensación de culpas o la primacía de una de ellas.

Se trata de la alegación de una cuestión nueva, no suscitada antes en ningún momento, que solo por tal motivo debe ser rechazada. Aunque no fuera así, habiendo sido negada por la sentencia recurrida la responsabilidad con el grado exigido por el artículo 42

de la Ley de Cooperativas, no cabe compensación pues falta el presupuesto primero: la responsabilidad de los administradores en el grado legalmente exigible.

En consecuencia, este motivo debe ser igualmente rechazado y, en definitiva, desestimado el recurso y confirmada la sentencia recurrida."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 24 de febrero de 2016. Recurso de casación. Incompetencia funcional**

"**PRIMERO**.- En el trámite de admisión del recurso de casación, la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo. Por lo que se refiere al primer extremo, a tenor del artículo 478. 1, párrafo 2º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil corresponde a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales Civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad. El artículo 1 de la Ley 4/2005 de 14 de junio sobre la casación foral aragonesa dispone que La Sala de lo Civil y Penal del tribunal Superior de Justicia de Aragón conocerá de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto con otros motivos, en infracción de las normas del Derecho Civil aragonés.

En el recurso se invoca como infringido (además de otros preceptos de derecho común) el artículo 3 del CDFA. Pero para determinar la competencia de la Sala no basta la mera invocación formal de un precepto aragonés como vulnerado, sino que se requiere que la norma foral de referencia sea aplicable a la resolución de la controversia y de las cuestiones implicadas en ella, es decir, tenga una efectiva relación con la cuestión debatida pues, en otro caso, podría el litigante escoger a su arbitrio el Tribunal competente para el examen de un recurso de casación. El ATS del Pleno del TS de 11/11/2015 expresa: *El examen de la competencia funcional para conocer del recurso de casación es previo a cualquier pronunciamiento sobre su admisibilidad, sin perjuicio de que la invocación indebida de una u otra norma pueda ser valorada a fin de evitar que la parte recurrente determine la competencia para conocer del recurso imponiendo su propio criterio al de la ley*. Ello es congruente con la naturaleza no dispositiva de las normas sobre competencia.

SEGUNDO.- Pues bien, en el presente caso es patente que la exigencia referida (fundamento del recurso en la infracción de norma aplicable al objeto del pleito) no concurre. Versando la litis sobre cumplimiento de contrato, el artículo 3 del CDFA no hace al caso, y de hecho se invocó en el recurso de apelación "a mayor abundamiento", consistiendo la actual queja de la parte sobre la falta de motivación, en la sentencia, del por qué no se aplica. Lo que el precepto ordena es que es la voluntad de los sujetos la que debe prevalecer, salvo que consista en algo imposible, o contravenga la Constitución o normas imperativas. De ahí que esta Sala ha recordado en ocasiones anteriores que tiene actualmente un único sentido: es expresión de la libertad de pacto o disposición. Pero lo que en el recurso se alega es que las modificaciones en la obra no se realizaron conforme a lo pactado. Y en este mismo sentido se arguye en el escrito de alegaciones a la providencia del pasado veintisiete de enero, donde se señala que el objeto de la presente litis consiste en determinar si se ha dado o no cumplimiento de un contrato entre partes. Ello evidencia lo artificioso de la invocación del precepto.

En consecuencia, y no incluyéndose en el recurso otros motivos por infracción de norma aragonesa, ha de concluirse que esta Sala carece de competencia funcional para conocer del recurso de casación interpuesto y, en atención a esa falta de competencia, no puede este Tribunal decidir sobre la admisibilidad de aquel, al ser competente para ello la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (artículo 56.1º LOPJ). Procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 LEC, abstenerse de conocer disponiendo la parte recurrente del plazo de cinco días para la correcta interposición del recurso."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de febrero de 2016. Recurso de casación. Ausencia de fundamentación. Recurso por infracción procesal. Motivación**

"PRIMERO.- Recurso de casación.

Es necesario reproducir aquí los argumentos de inadmisibilidad ya expuestos en la providencia de fecha 27 de enero de 2016.

Como se decía, falta en el recurso de casación una fundamentación suficiente sobre la infracción del ordenamiento jurídico alegada, en relación con el derecho fundamental cuya vulneración se invoque o con la norma, jurisprudencia o principio general del Derecho aplicable al caso que se denuncie como infringido (artículo 481.1 LEC), así como falta en el escrito de interposición del recurso de la razonable claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado (artículo 481.1 y 3 LEC).

El recurso de casación tiene una función nomofiláctica, o de control de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico, y ante ello la parte que recurre ha de expresar, cuando afirma la infracción de un precepto legal, el motivo por el que considera que esa norma, en concreto, ha sido infringida, bien por inaplicación, por aplicación indebida o por interpretación errónea. La necesaria claridad en la exposición del motivo deriva no solo de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, sino también del necesario ejercicio del derecho de defensa que corresponde a la parte contraria, la cual ha de tener claro conocimiento de la infracción que se denuncia.

El recurrente, en sus alegaciones a la providencia, manifiesta que las argumentaciones de los recursos de casación e infracción procesal "se solapan porque dada su naturaleza pueden vertebrar tanto uno como otro motivo". Y eso, precisamente, es lo que no es posible ni admisible, puesto que se trata de recursos distintos, sujetos a motivos tasados (arts. 469 y 477 LEC), de manera que los motivos y argumentaciones del recurso por infracción procesal en modo alguno pueden servir, mediante una remisión íntegra, para fundamentar el recurso de casación. En el recurso de casación discutido no estamos ante simple referencia a alguna cuestión o argumentación propia de la infracción procesal, sino ante una remisión directa e íntegra a lo alegado en éste. Así, en el de casación se recoge: "ÚNICO.- Se reiteran y dan por reproducidos para el presente motivo las alegaciones literales del primer motivo".

Parecería que ambos recursos son intercambiables, y que lo que se dice en uno sirve, sin más reelaboración, para el otro. Por mucha especialidad que pudiera tener este caso, que no la tiene, el recurso es inadmisible desde el punto de vista de la técnica casacional.

Como se decía en la providencia, no corresponde a esta Sala reelaborar el recurso -delimitando lo que corresponde a la casación o a la infracción procesal- supliendo una actuación que corresponde al recurrente, ya que ello exigiría una singular actividad discursiva por parte de este Tribunal que le está vedada.

SEGUNDO.- Recurso por infracción procesal, interpuesto al amparo del art. 469.2 LEC, por vulneración del art. 218.2 LEC.

En primer lugar, debe indicarse que la falta de admisión del recurso de casación aboca a la inadmisión del recurso por infracción procesal en todo caso, puesto que para la admisión de este último es requisito indispensable la interposición y admisión del primero, conforme dispone la disposición final decimosexta 1.5ª LEC, que no admite el recurso por infracción procesal en solitario.

A mayor abundamiento, y en relación al motivo del recurso, fundado en el art. 218.2 LEC, por entender que la sentencia ha infringido el deber de motivación, es menester reproducir lo ya expuesto en la providencia señalando las posibles causas de inadmisión."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 18 de marzo de 2016. Recurso de casación. Inadmisión. Introducción de hechos nuevos. Principio de proporcionalidad. Criterio ponderativo**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo, según dispone el artículo 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta Sala es competente para conocer del recurso de casación interpuesto, a tenor del artículo 478, núm. 1º, párrafo 2º, de la mentada Ley procesal, ya que corresponde "*a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales Civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad*", y a estos efectos competenciales puede entenderse que el recurso de casación interpuesto se refiere a la vulneración de derecho civil aragonés, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá acerca de su admisibilidad.

SEGUNDO.- El recurso de casación tiene naturaleza de recurso extraordinario, tendente a revisar si la sentencia dictada en segunda instancia por una Audiencia Provincial ha infringido el ordenamiento jurídico aplicable al caso. Como expresa el Auto del TS de 6 de noviembre de 2012 (recurso 1880/2011), *Conviene recordar en este punto que tales exigencias derivan de la propia naturaleza de este recurso y de su carácter especialmente restrictivo y exigente (SSTC 7/89 y 29/93), como esta Sala ha declarado con reiteración en la aplicación del art. 1707 de la LEC de 1881, por ello se encuentra implícita en el artículo 481.1 de la LEC 1/2000, de manera que este precepto impide la admisión, además de aquellos recursos carentes de fundamentación, también de aquellos en los que la parte, con cumplimiento aparente de los requisitos formales -denuncia de infracción sustantiva y exposición más o menos extensa de alegaciones- sólo pretende someter al Tribunal sus propias conclusiones sobre la controversia, pero no una verdadera infracción sustantiva".*

El art. 477 de la LEC exige que el recurso se funde en la infracción de norma sustantiva, a fin de que el tribunal de casación –y, previamente a su decisión, las partes recurridas- conozca la razón por la que la recurrente entiende que se ha vulnerado el ordenamiento jurídico sustantivo y pueda ejercer la función nomofiláctica –o de protección del derecho- que es la esencia del recurso de casación; así expresa el Auto del TS de 6 de mayo de 2008 (recurso 584/2004): "*Esta Sala … ha circunscrito este recurso al examen de la corrección jurídica de las normas referidas al fondo del asunto, esto es, a la cuestión sustantiva o material que constituye el objeto del proceso, según es inherente a su función nomofiláctica*"-.

TERCERO.- En la providencia dictada por esta Sala en fecha 19 de febrero de 2016 la Sala puso de relieve, respecto del primer motivo de recurso de casación, que el mismo se

funda en la vulneración del art. 82, apartados 1, 2 y 3 del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA), alegando que la sentencia de la Audiencia no ha tenido en cuenta el criterio de la proporcionalidad al fijar la contribución a los gastos de asistencia a los hijos, pero lo hace sin respetar los hechos probados en las instancias, en cuanto a los recursos económicos de ambos litigantes.

El Ministerio Fiscal y la parte recurrida muestran su conformidad con la objeción expresada en dicha providencia; por su parte la recurrente insiste en la admisibilidad del motivo, invocando que dicha parte no pretende una tercera instancia, con revisión o nueva valoración de la prueba, sino que se realice una valoración de todas las pruebas practicadas a lo largo del procedimiento, expresando que la sentencia de la Audiencia Provincial no ha tenido en cuenta determinados aspectos, como son: a) la reincorporación a la actividad laboral de la Sra. V.; b) su dedicación profesional en los años anteriores al matrimonio; c) la cuantía del plan de ahorro; d) la cantidad que el recurrente Sr. Z. ingresa anualmente, que es una cantidad bruta y no líquida.

Los argumentos expresados en estas alegaciones no hacen sino corroborar que la parte recurrente articula el motivo de recurso de casación como si se tratara de una tercera instancia, tratando de introducir nuevos elementos probatorios para la fijación de los hechos, de los que extraer las consecuencias jurídicas en cuanto a la aplicación de la norma sustantiva y la declaración de derecho contenida en el fallo. Los hechos a que se refiere la recurrente o han sido ya considerados en la sentencia de que discrepa, o no se declaran acreditados, pero en todo caso estas cuestiones exceden del contenido y alcance de un recurso de casación.

Además de lo expuesto es de considerar, como expone el Ministerio Fiscal en su informe a la Sala, que la determinación de la cuantía de la pensión alimenticia a favor de los hijos y a cargo del padre, que la Audiencia fija en 400 euros mensuales, es una cuestión sujeta al principio de proporcionalidad, cuya aplicación a cada caso es competencia de los juzgadores de instancia y no revisable en casación, salvo que la decisión de la instancia sea arbitraria o ilógica, lo que no concurre en este caso, en el que la Audiencia ha ponderado las circunstancias concurrentes y ha explicado su decisión en los fundamentos jurídicos.

CUARTO.- El segundo motivo denuncia la vulneración del art. 83 del CDFA en cuanto a la asignación compensatoria, y en su desarrollo la parte recurrente también argumenta sin respetar los hechos probados en cuanto a los recursos económicos de los litigantes, singularmente en cuanto a los de la Sra. V. En este punto el Ministerio Fiscal insta también la inadmisión, aun partiendo de que no ha de ser considerado como parte al carecer de legitimación por no afectar a la persona o bienes de los hijos del matrimonio. La parte recurrida, en representación de la Sra. V., también insta la inadmisión.

Es procedente inadmitir este segundo motivo, y con él la totalidad del recurso, conforme a lo establecido en el art. 483.2. 2º de la LEC, tanto por las razones expresadas en cuanto a la falta de respeto a la resultancia fáctica, como por la irrevisabilidad en sede casacional de las cuestiones sujetas a la fijación cuantitativa y ponderativa de los tribunales de instancia.

Al efecto esta Sala ya tiene declarado, entre otras en Sentencia 27/2013, de 1 de julio, con cita de jurisprudencia del más alto tribunal español, "que el Tribunal Supremo ha destacado, entre otras en sentencia de 4 de noviembre de 2010 , que «En cuanto a la posibilidad de revisar en casación las conclusiones alcanzadas por la AP a partir de la valoración que le merecen esas circunstancias del artículo 97 CC , debe recordarse que esta Sala, aunque en relación con la decisión de fijarla con carácter temporal o vitalicio, ha señalado (SSTS de 9 de octubre de 2008, RC núm. 516/2005 y 17 de octubre de 2008, RC núm. 531/2005) , ambas mencionadas por la más reciente de 28 de abril de 2010, (RC núm. 707/2006), que "las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la pensión, ya en el de justificar su carácter vitalicio, habrán de ser respetadas en casación siempre que aquellas sean consecuencia de la libre y ponderada valoración de los factores a los que se refiere de manera no exhaustiva el artículo 97 del Código Civil y que han de servir tanto para valorar la procedencia de la pensión como para justificar su temporalidad, siendo posible la revisión casacional únicamente cuando el juicio pronóstico sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia".

En el caso de autos la fijación de una asignación compensatoria de 100 euros mensuales durante dos años entre dentro de los ámbitos de decisión del tribunal de instancia, que no aparece como arbitrario y no está por ello sometido al control casacional.

QUINTO.- La inadmisibilidad del recurso de casación determina que el motivo por infracción procesal habrá de ser igualmente inadmitido, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final 16ª.1, 5ª, de la LEC, y a la jurisprudencia recaída en su aplicación, entre otras en Auto de la Sala Primera del TS de 30 de marzo de 2004, a cuyo tenor la viabilidad de este último recurso está subordinada a la recurribilidad en casación de la Sentencia dictada en segunda instancia, conforme a lo taxativamente previsto en la Disposición final 16ª, apartado 1, párrafo primero y regla 5ª, párrafo primero, de la LEC."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11 de abril de 2016. Recurso de casación. Inadmisión. Interés casacional. Modalidad. Infracción procesal. Nueva valoración de la prueba**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considera competente, sobre la admisibilidad del mismo, según dispone el artículo 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo que se refiere al primer extremo, no ofrece duda la competencia de este órgano jurisdiccional, pues a tenor del artículo 478, núm. 1º, párrafo 2º, de la mentada Ley procesal, corresponde "a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales Civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad", y examinado el escrito de interposición vemos que en él se denuncia infracción de los artículos 80 y 76.3.b) del Código de Derecho Foral de Aragón.

SEGUNDO.- Tal como se indicó en la providencia de fecha 25 de febrero de 2016, en el recurso interpuesto no se identifica la modalidad del recurso de casación que se interpone, al limitarse el recurrente a mencionar en la primera de sus alegaciones, sin más razonamientos, el art. 477.2 LEC y los arts. 2.2, 3.1 y 3.3 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, de la casación foral aragonesa.

El primero de ellos, el art. 477.2 LEC contempla los tres supuestos diferentes que justifican el recurso de casación contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en segunda instancia: cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, por razón de la cuantía y por existir interés casacional.

Auque el recurrente no indica expresamente la concreta modalidad en que fundamenta el recurso, la posterior mención a los artículos de la Ley 4/2005, de casación aragonesa, parece limitar el recurso interpuesto a los supuestos de existencia de interés casacional, a los que se refiere el precepto citado por el recurrente (art. 2.2 Ley 4/2005).

No obstante, que un recurso presente interés casacional puede deberse a motivos diferentes, contemplados en el art. 3 de la Ley 4/2005. Por razones de congruencia y contradicción procesal la parte recurrente debe indicar claramente en el encabezamiento o formulación del motivo en cuál de ellos se funda la admisibilidad del recurso interpuesto, ya que la simple mención a los apartados 1 y 3 el referido precepto no resulta suficiente, puesto que en ellos se contemplan supuestos en los que la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Superior de Justicia de Aragón o del Tribunal Supremo, o no existe dicha doctrina (art. 3.1 Ley 4/2005); o en los que la sentencia recurrida aplica normas de Derecho civil aragonés que no llevan cinco años en vigor y no existe doctrina jurisprudencial (art. 3.3 de la mencionada Ley 4/2005).

Por otra parte, en los concretos motivos de casación segundo (alegación cuarta) y tercero (alegación quinta), únicos en los que parece hacerse alguna referencia a criterios jurisprudenciales de esta Sala, el recurrente se limita a citar cuatro sentencias en el primero de ellos, y una en el segundo, sin fijar la doctrina jurisprudencia que contienen, y sin razonar el cómo, cuándo y en qué sentido ha sido vulnerada la doctrina de cada una de ellas por la sentencia recurrida.

Limitarse a indicar en esos motivos que esta Sala ha establecido el carácter general o preferente de la custodia compartida, y el excepcional de la individual cuando resulte más conveniente para el interés del menor, con la simple mención de las sentencias, no puede entenderse que cumpla dicha finalidad, puesto que esa referencia no es más que la propia dicción del precepto que se entiende infringido (art. 80 CDFA) que, como es lógico, ha sido reproducida en numerosas sentencias de esta Sala.

Estos defectos no constituyen una mera infracción formal, de carácter subsanable, porque afectan a la esencia del propio recurso, en cuanto obligan al Tribunal a suplir la actividad argumentativa de la parte recurrente para determinar qué concreta modalidad del recurso de casación interpone o, suponiendo que se interpone por vulnerar la sentencia recurrida la doctrina jurisprudencial de esta Sala, determinar cual es ésta y en qué modo ha sido vulnerada. Con ello este órgano incumpliría el principio de congruencia y colocaría a la contraparte en situación de evidente indefensión.

Por otra parte, y como ya se señaló en la providencia, los arts. 80 y 76.3.b) del Código de Derecho Foral de Aragón que se entienden vulnerados por la sentencia recurrida, de fecha 22 de diciembre de 2015, ya llevan más de cinco años en vigor, puesto que venían recogidos, con idéntica redacción, en la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres (BOE 22 de junio de 2010), que entró en vigor el 22 de septiembre de 2010 y posteriormente se integró en el CDFA. Por tanto, en ningún caso se podría alegar para fundamentar la existencia de interés casacional el supuesto previsto en el art. 3.3 Ley 4/2005.

Al respecto cabe indicar que la inicial flexibilidad con la que esta Sala ha venido valorando la identificación por el recurrente de los motivos en los que basa la existencia del interés casacional, a efectos de admisión del recurso, al amparo del art. 3.3 de la Ley 4/2005, sobre la casación foral aragonesa, en los casos en que se aplican normas del Derecho civil aragonés que llevan menos de cinco años en vigor, debe ir reconduciéndose una vez que dichas normas han superado el límite temporal de vigencia establecido por el legislador y se ha asentado ya una doctrina jurisprudencial sobre las mismas.

Por todo lo expuesto, no indicando el recurrente la concreta modalidad de recurso que interpone, ni habiendo expresado y justificado la doctrina de la Sala supuestamente infringida, tampoco queda justificado el interés casacional, como exige el artículo 481.1 LEC, por lo que debe ser inadmitido el recurso de casación a tenor de lo supuesto en el artículo 483.2. 1º y 2º del mismo texto procesal.

TERCERO.- A mayor abundamiento, entrando a conocer sobre la justificación de los concretos motivos de casación alegados, en el primero (alegación tercera), se afirma la aplicación indebida del art. 80 CDFA en relación con los arts. 217 y 218 LEC, referidos estos últimos a la carga de la prueba y congruencia y motivación de las sentencias, respectivamente.

Como ya se señaló en la providencia, el motivo no puede ser admitido, al incurrir en la cita de preceptos heterogéneos que generan ambigüedad o indefinición sobre la infracción alegada (artículo 481.1 LEC), puesto que se alegan normas de derecho sustantivo junto a normas procesales. De hecho el motivo parece destinado, más bien, a fundamentar un recurso por infracción procesal.

Si lo que el recurrente pretende es fundamentar su impugnación en cuestiones de carácter procesal como las reglas de distribución de la carga de la prueba, o la motivación o congruencia de la sentencia, debería haberla formalizado mediante la articulación del correspondiente motivo de infracción procesal.

CUARTO.- Como segundo y tercer motivo (alegaciones cuarta y quinta), se entiende infringido el art. 80 CDFA, aduciendo la inaplicación del carácter preferente de la custodia compartida y la aplicación indebida del carácter excepcional de la custodia individual a favor de la madre (art. 80 CDFA).

Los dos motivos de casación alegados por el recurrente se limitan a denunciar la valoración errónea de la prueba realizada por la Audiencia Provincial en su resolución, sin que se haya articulado motivo de infracción procesal por valoración arbitraria o irracional.

Bajo la apariencia de centrar dichos motivos en la infracción del art. 80 CDFA, el recurrente vuelve a plantear la controversia ante este Tribunal, como si fuese una tercera instancia, valorando nuevamente los hechos y las pruebas practicadas a través de su propio prisma. Así, en el tercero de los motivos realiza una valoración de la prueba respecto de cada uno de los factores a los que debe atender el Juez para decidir sobre la custodia, recogidos en el art. 80.2 CDFA. Y en el cuarto motivo, el recurrente se centra en valorar el informe del gabinete psicosocial, que ha sido objeto de amplio estudio en la sentencia recurrida.

Como afirma el TS en Auto de 6-11-2012, recurso 1880/2011, "*Conviene recordar en este punto que tales exigencias derivan de la propia naturaleza de este recurso y de su carácter especialmente restrictivo y exigente (SSTC 7/89 y 29/93), como esta Sala ha declarado con reiteración en la aplicación del art. 1707 de la LEC de 1881, por ello se encuentra implícita en el artículo 481.1 de la LEC 1/2000, de manera que este precepto impide la admisión, además de aquellos recursos carentes de fundamentación, también de aquellos en los que la parte, con cumplimiento aparente de los requisitos formales - denuncia de infracción sustantiva y exposición más o menos extensa de alegaciones- sólo pretende someter al Tribunal sus propias conclusiones sobre la controversia, pero no una verdadera infracción sustantiva*".

Ni el recurrente, ni el Ministerio Fiscal, favorable a la admisión del recurso por estos dos motivos, desvirtúan en sus alegaciones lo expuesto, a juicio de este Tribunal. El primero se limita a indicar que no ataca la valoración de la prueba, sino las consecuencias jurídicas que se extraen de los hechos obrantes en los autos. El segundo, tras aducir una serie de consideraciones por las que entiende se debe incentivar la recurribilidad de las sentencias sobre custodia compartida, considera que el informe emitido por la psicóloga del juzgado y la opinión de los hijos menores constatan la custodia compartida. Estos dos factores han sido objeto de estudio y valoración tanto por la sentencia de primera instancia como por la dictada en apelación, por lo que el recurso pretende convertir a esta Sala en una tercera instancia que valore nuevamente la prueba.

Por lo expuesto, procede inadmitir también el recurso por esta segunda causa, al amparo del art. 483.2.2ª, en relación con el artículo 477.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

QUINTO.- El cuarto motivo (alegación quinta) debe ser inadmitido por las razones ya expuestas en la providencia, al citarse como infringido el art. 76.3.b) CDFA, siendo este un precepto genérico, a modo de principio informador, que se limita a establecer la igualdad de los padres respecto de los hijos menores de edad en sus relaciones familiares.

El Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 30 de diciembre de 2011, determina la inadmisibilidad cuando en el recurso se denuncie "*La acumulación de infracciones, la cita de preceptos genéricos o la cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo que generen la existencia de ambigüedad o indefinición sobre la infracción alegada (artículo 481.1 LEC)*"."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 22 de abril de 2016. Recurso de casación. Declaración de paternidad. Prueba. Inadmisión**

"PRIMERO.- La sentencia dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial que ha sido recurrida desestima la pretensión de la demandante sobre atribución de autoridad familiar, guarda y custodia y fijación de pensión respecto de la menor María Fernanda N. B. La desestimación de sus pretensiones la hizo la sentencia recurrida porque no ha quedado acreditada la paternidad del demandado que se dice es padre de la menor.

SEGUNDO.- En su recurso la parte sostiene que el demandado sí es el padre y que así consta inscrito en el Registro Civil. Pero al hacer tal afirmación pasa por alto que, como indica la sentencia recurrida, la constancia del nombre del padre en la inscripción de nacimiento de la menor fue hecha a los efectos exclusivos identificadores. Esto es, no sirve de acreditación de la paternidad. En su escrito de alegaciones sobre admisión del recurso insiste en que debe estarse a la presunción de paternidad del demandado derivada de lo inscrito en el Registro Civil.

TERCERO.- Con lo expuesto y como se indicó en la providencia dictada el día 18 de marzo de 2016, no cabe sino concluir que previo al establecimiento de las medidas que se interesan respecto de la menor es objeto del recurso de casación la declaración de estar probada la paternidad. Esta pretensión de pronunciamiento probatorio está excluido del recurso de casación por aplicación del artículo 477 de la Ley Enjuiciamiento Civil, por lo que procede la inadmisión del recurso planteado."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 3 de junio de 2016. Recurso de casación. Identificación y justificación del interés casacional. Inadmisión**

"**PRIMERO.**- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considera competente, sobre la admisibilidad del mismo, según dispone el artículo 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo que se refiere al primer extremo, a tenor del artículo 478.1, párrafo 2º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil corresponde a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales Civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad. El artículo 1 de la Ley 4/2005 de 14 de junio sobre la casación foral aragonesa dispone que La Sala de lo Civil y Penal del tribunal Superior de Justicia de Aragón conocerá de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto con otros motivos, en infracción de las normas del Derecho Civil aragonés. Examinado el escrito de interposición vemos que en él se denuncia infracción de los artículos 76.2, 81.3 y 81.4 del Código de Derecho Foral de Aragón, por lo que ha de declararse la competencia de esta Sala.

SEGUNDO.- Tal como se indicó en la providencia del pasado 11 de mayo, en el escrito de la parte no se identifica la modalidad del recurso de casación que se interpone, al limitarse aquella a manifestar que lo hace "al amparo del artículo 477.3 de la LEC". Este precepto, como el artículo 3 de la Ley 4/2005 de casación foral aragonesa, contempla diferentes supuestos por los que se entiende que un recurso presenta interés casacional. Lo habrá si la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Superior de Justicia de Aragón o del Tribunal Supremo dictada en aplicación de normas del derecho civil aragonés, o no existe dicha doctrina en relación con las normas aplicables (art. 3.1 Ley 4/2005); cuando la sentencia recurrida resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales (art. 3.2 Ley 4/2005); o en los que la sentencia recurrida aplica normas de Derecho civil aragonés que no llevan cinco años en vigor y no existe doctrina jurisprudencial relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

Por imperativos de congruencia y contradicción procesal la parte recurrente debe indicar claramente en la formulación del motivo en cuál de los supuestos se funda la admisibilidad del recurso interpuesto y justificarlo, sin que esa falta pueda subsanarse al evacuar el trámite previsto en el artículo 483.3, pues la identificación y justificación del interés casacional han de producirse, inexcusablemente, en el escrito de interposición del recurso de casación, y su omisión o deficiente observancia en él es insubsanable en trámites ulteriores, como es el de alegaciones a la posible inadmisibilidad del recurso. Aunque no fuera así, se observa que lo que la parte aduce ahora es, en cuanto al primer

motivo, oposición a una sentencia el Tribunal Constitucional; en el segundo motivo no se alega en puridad infracción de la jurisprudencia sino que el plazo fijado para el uso de la vivienda excede el que en la práctica suele acordarse; y nada se indica a propósito del tercer motivo.

Por todo lo expuesto, no indicando el recurrente la concreta modalidad de recurso que interpone, no queda justificado el interés casacional, como exige el artículo 481 LEC, por lo que debe ser inadmitido el recurso de casación a tenor de lo dispuesto en el artículo 483.2. 1º y 2º del mismo texto procesal.

TERCERO.- Lo anterior bastaría para no admitir a trámite el recurso, de acuerdo con lo postulado por el Ministerio Fiscal y la contraparte.

A mayor abundamiento, entrando a conocer sobre la justificación de los concretos motivos de casación formulados, vemos que en el primero se alega infracción del artículo 76.2 del CDFA, en relación con los artículos 16.1, 39.2 y 39.4 de la CE y con el 14 de la Convención de los derechos del niño. Pues bien, como se expresó en la providencia por posible inadmisibilidad, por un lado el motivo se centra en cuestiones de hecho que no se atienen a las fijadas en la sentencia recurrida (así, por ejemplo, se dice que "no hay ninguna prueba que justifique un solo viaje de mi mandante a Argelia en los últimos 18 meses", o que la hija "discute con su madre constantemente"), sin que previamente se haya planteado motivo alguno de infracción procesal. Por otro lado, afirma que el régimen de custodia limita la libertad de creencias de la hija, lo que le lleva a postular como infringidos preceptos reguladores de tal cuestión. Pero lo afirma sin base fáctica establecida en la sentencia que pudiera sustentarlo, por lo que en efecto, suscita una cuestión jurídica nueva y ajena al objeto del proceso. Y en cuanto a los motivos segundo y tercero, no se articula, como sería necesario, un razonamiento sobre la supuesta vulneración de los preceptos del artículo 81.2 y 81.3, sino que se postula la solución que, a entender de la parte, sería más conveniente para la relación familiar, como si de una tercera instancia se tratase. Falta, por tanto, la razonable claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado.

El Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 30 de diciembre de 2011, determina la inadmisibilidad cuando en el recurso se denuncie "*La acumulación de infracciones, la cita de preceptos genéricos o la cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo que generen la existencia de ambigüedad o indefinición sobre la infracción alegada (artículo 481.1 LEC)*".

En suma, a juicio de este Tribunal, la parte no desvirtúa en sus alegaciones lo expuesto en la aludida providencia de 11 de mayo, por lo que procede inadmitir también el recurso por esta segunda razón, al amparo del art. 483.2.2ª, en relación con el artículo 477.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 6 de junio de 2016. Recurso de casación. Identificación y justificación del interés casacional. Inadmisión**

"PRIMERO.- Los motivos del recurso de casación presentado se basan, sustancialmente, en la vulneración del artículo 82 del Código de Derecho Foral Aragonés. Fundado el recurso presentado en la alegada infracción de normas de Derecho Civil Aragonés es competencia de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el conocimiento de la impugnación que se efectúa, lo que procede declarar así conforme a los artículos 478 y 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con la Ley de Aragón 4/2005 de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa.

SEGUNDO.- La vía procedimental de acceso al recurso alegada por la parte recurrente es la recogida en el artículo 477.2 3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con concreción del interés casacional en el hecho de no llevar en vigor más de cinco años la norma cuya aplicación se considera infringida. Como se indicó en la providencia del día 22 de abril de 2016, y se ha sostenido reiteradamente por esta Sala (en el caso más reciente, por auto de 25 de mayo de 2016, en Recurso de Casación 16/16), el plazo de cinco años de vigencia de la norma cuestionada no es el de la publicación del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA en adelante), ya que éste era un texto de refundición de normas anteriores. En concreto, en el caso presente, el artículo 82 del CDFA recoge una previsión legal que estaba recogida de modo idéntico en la Ley de Aragón 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, que entró en vigor el día 8 de septiembre de 2010 (no el 23 de septiembre de 2010, como por error se recogió en la providencia antes citada).

Por tanto, procede la inadmisión del motivo en lo que se fundaba en la entrada en vigor de la norma aplicable dentro de los cinco años anteriores a la presentación del recurso.

TERCERO.- El recurrente indica asimismo como motivo de interés casacional que no existe doctrina de este Tribunal respecto de la cuestión en que fundamenta su escrito de recurso. Los razonamientos que contiene el escrito de recurso, al amparo de la posible infracción de la proporcionalidad prevista por el artículo 82 del CDFA, exponen realmente una serie de cuestiones relativas realmente a cuestiones de hecho a apreciar sólo y exclusivamente en el caso de que se trata, y que llevan a la parte a interesar, finalmente, que esta Sala haga una integración de los hechos tenidos en cuenta por la sentencia recurrida. Con ello, la cuestión realmente planteada no es si existe doctrina jurisprudencial sobre la cuestión jurídica de la proporcionalidad legalmente exigida, sino si en este caso concreto, previa nueva valoración de los hechos por esta Sala, cabe entender que debe ser otra la decisión a adoptar.

Por tanto, siendo la pretensión de causa y finalidad fáctica, no cabe considerarla dirigida a completar ausencia de doctrina jurídica sobre la materia ni, por tanto, es hábil

para fundamentar la admisión del recurso por la vía del interés casacional previsto en el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de junio de 2016. Recurso de casación e infracción procesal. Interés casacional. Igualdad procesal y prohibición de indefensión. Inadmisión**

"PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 484.1 LEC, en el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo.

Presentado recurso de casación y también extraordinario por infracción procesal contra sentencia dictada por órgano judicial con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón, con fundamento el de casación en infracción de normas del Derecho civil aragonés (artículo 82.2 del Código del Derecho Foral de Aragón), la competencia para su conocimiento corresponde a esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, en relación con el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 478.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Respecto al recurso extraordinario por infracción procesal, es igualmente competente este órgano jurisdiccional según lo dispuesto en el régimen transitorio señalado en la disposición final decimosexta, apartado 1, regla 1ª, de la misma, si se interpone por los motivos previstos en su artículo 469 respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477. En este caso el recurrente interpone este recurso extraordinario al amparo del artículo 469.1.2º y 4º LEC, por infracción de los artículos 216, 217.2 y 3 LEC, en relación con el artículo 218, por error en la valoración de la prueba y falta de motivación, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE.

Conforme a lo previsto en el artículo 1, y en el artículo 2.2 en relación con el artículo 3.3 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, la resolución será susceptible de recurso de casación, según lo señalado en el párrafo segundo anterior, en el caso de presentar el asunto interés casacional y fundarse en infracción de normas del Derecho civil aragonés.

SEGUNDO.- Tratándose de recurso de casación interpuesto al amparo del artículo 477.3 LEC y artículos 2 y 3.1 la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, es decir, por presentar su resolución interés casacional, debe comprobarse si se cumple tal requisito.

Como se puso de manifiesto en la providencia de 4 de mayo de 2016, como justificación del interés casacional se transcribían en el escrito de recurso los tres apartados del citado artículo 3 pero no se concretaba cual de ellos amparaba el recurso.

En el escrito de alegaciones a la anterior providencia la parte recurrente hace referencia al apartado 1 del artículo 3, pero no concreta si es por oposición de la sentencia recurrida a doctrina de esta Sala o del Tribunal Supremo en aplicación de normas del

Derecho civil aragonés, o por no existir dicha doctrina en relación con las normas aplicables.

La justificación del interés casacional y su correcta expresión en el recurso viene exigida por el principio de igualdad procesal de las partes y la prohibición de indefensión, de forma que se permita a la parte recurrida la perfecta identificación del objeto y de la motivación del recurso, así como de la doctrina jurisprudencial supuestamente infringida. Por ello, no habiendo sido expresada y justificada la doctrina de la Sala, o del Tribunal Supremo, o la ausencia de doctrina supuestamente infringida, no queda tampoco justificado el interés casacional, como exige el artículo 481.1 LEC, por lo que debe ser inadmitido el recurso de casación a tenor de lo supuesto en el artículo 483.2.2º y 3º del mismo texto procesal.

TERCERO.- En cuanto al recurso de casación, se puso de manifiesto en la citada providencia de 5 de mayo que en la sentencia de primera instancia y en la de apelación se tuvieron en cuenta las necesidades del menor y los ingresos del padre. En el escrito de alegaciones insiste el recurrente en que no se han tenido en cuenta la disminución de sus ingresos, pero expresamente indica la sentencia recurrida (fundamento tercero) los que percibía en el momento de fijarse la pensión alimenticia y los actuales, considerando que la pensión de 210 euros mensuales es asumible cuando se perciben ingresos superiores al salario mínimo interprofesional.

En definitiva, se pretende la revisión de la adecuación de la pensión alimenticia del hijo al principio de proporcionalidad que, como esta Sala ha expresado reiteradamente, es función que corresponde a los tribunales de instancia, no revisable en casación salvo en los supuestos de falta de lógica o arbitrariedad, lo que no se da en este supuesto.

Por ello, el motivo de casación resulta inadmisible conforme a lo dispuesto en el artículo 483.2.2º en relación con el artículo 477.1 de la LEC.

CUARTO.- Inadmitido el recurso de casación por los motivos expresados, debe inadmitirse, sin más trámites, el recurso extraordinario por infracción procesal (Disposición final 16ª.1, regla 5ª, párrafos primero y segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil).”

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 16 de junio de 2016. Recurso de casación e infracción procesal. Exigencias formales. Vía casacional elegida. Normativa dispar. Hechos declarados probados**

"PRIMERO.- Esta sala no puede sino mostrar su acuerdo con el Ministerio Fiscal en que en una materia tan relevante como lo son todas las cuestiones que afectan a menores la forma más óptima de dar cumplida satisfacción a las exigencias que se derivan del art. 24 CE es el pronunciamiento de una decisión de fondo, y no de inadmisión.

Pero para que ello pueda suceder es preciso un mínimo rigor técnico del recurso que individualice las cuestiones sobre las que haya de darse respuesta en la sentencia, y el presente caso falta tal elemental precisión en el escrito de interposición del recurso, y tal falta no ha sido suplida por el Ministerio Público, que se aquietó a la sentencia de ambas instancias, y no informó en la apelación, ni formuló recurso de casación en su día por infracción del art. 118 del CDFA que cita en la primera de las alegaciones formuladas a la providencia de esta sala de 25 de mayo de 2016.

SEGUNDO.- De acuerdo con una constante doctrina jurisprudencial los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, se hallan sometidos a ciertas exigencias formales que se traducen, entre otras, en la necesidad de indicar con claridad y precisión la norma que se pretende infringida y en la imposibilidad de acumular por acarreo argumentos inconexos determinantes de la falta de la razonable claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado (en este sentido, sentencias núm. 965/2011, de 28 de diciembre, 957/2011, de 11 enero de 2012 , 185/2012, de 28 de marzo y 557/2012, de 1 de octubre).

Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en el art. 481 LEC, el escrito de interposición ha de expresar el supuesto, de los previstos en el art. 477.2 LEC conforme al que se pretende recurrir la sentencia. El incumplimiento de dicha exigencia supone el de los requisitos que ha de observar el escrito de interposición que el art. 483.2 LEC establece como una de las causas de inadmisibilidad (ATS de 23 de abril de 2013 Recurso: 161/2012).

Por lo demás, tampoco admite el recurso de casación el desconocimiento de los hechos que han sido declarados en la instancia sin haberlos impugnado por vía adecuada de la infracción procesal, como se dice en los AATS de 4 de febrero de 2014, Rec 3255/2012, o 8 de octubre de 2013, Rec 22/2013, el último de los cuales razona:

"El motivo segundo incurre en la causa de inadmisión de falta de respeto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida, al fundarse explícitamente en hechos distintos a los declarados probados, y falta de respecto a su ratio decidendi (art. 483.2.2º LEC , en relación con el art. 477.1 LEC)"

TERCERO.- La primera de las razones expuestas cómo óbice a la admisión del recurso de casación en la providencia del pasado 25 de mayo consistía en que no se justificaba la vía casacional, porque la alusión general a la *materia objeto de recurso* no

parecía incluida en ninguno supuestos establecidos en el art. 2 de la L 4/2005, de 14 de junio sobre la casación foral aragonesa.

Nada de lo que se alega por la recurrente desvirtúa la providencia, pues sigue sin indicar cuál es la vía casacional que pretende utilizar para discutir la resolución impugnada por tal recurso extraordinario, pues en la alegación primera se contienen generalidades sobre la infracción de una diversidad de normas que la recurrente considera aplicables al acaso, lo que en todo caso serviría para fundamentar el recurso de casación, en ningún caso para esclarecer la vía casacional cuya omisión se puso oportunamente de manifiesto a la parte.

CUARTO.- Las demás causas de inadmisión sobre cuya concurrencia se advertía a la recurrente eran la cita de normas dispares, y aún de normas derogadas, y la falta de respeto a los hechos declarados probados en la sentencia de primer grado.

Los alegatos presentados por la parte sobre tales causas de inadmisión inciden en los mismos defectos que el escrito de recurso, se citan de nuevo sin orden alguno una pluralidad de normas jurídicas sin aclarar a esta sala la concreta norma de las citadas que se considera infringida y el porqué de tal infracción.

Asimismo, el escrito de alegaciones se halla repleto de razones que tienen como único fundamento la discrepancia sobre la concurrencia de la situación de hecho valorada en la instancia que condujo a la declaración de desamparo que es objeto de controversia, y las cuestiones de hecho se hallan extramuros del recurso de casación, conforme a la constante doctrina jurisprudencial que queda más arriba señalada.

En consecuencia, procede la inadmisión del recurso de casación."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 30 de junio de 2016. Recurso de casación. Falta de quebranto de preceptos aragoneses. Incompetencia funcional. Tribunal Supremo**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación, la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo. Por lo que se refiere al primer extremo, a tenor del artículo 478. 1, párrafo 2º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil corresponde a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales Civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad. El artículo 1 de la Ley 4/2005 de 14 de junio sobre la casación foral aragonesa dispone que La Sala de lo Civil y Penal del tribunal Superior de Justicia de Aragón conocerá de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto con otros motivos, en infracción de las normas del Derecho Civil aragonés.

En el recurso se invocan como infringidos los arts. 94, 160 y 161 del Código Civil, así como los arts. 39 y 24 de la Constitución Española. Como puede verse, no se menciona precepto alguno de derecho aragonés.

En el trámite de alegaciones, tanto el Ministerio Fiscal, como la parte recurrente, manifiestan que la competencia corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

En consecuencia, ha de concluirse que esta Sala carece de competencia funcional para conocer del recurso de casación interpuesto y, en atención a esa falta de competencia, no puede este Tribunal decidir sobre la admisibilidad de aquel, al ser competente para ello la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (artículo 56.1º LOPJ). Procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 LEC, abstenerse de conocer disponiendo la parte recurrente del plazo de cinco días para la correcta interposición del recurso."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 6 de julio de 2016. Recurso de casación y por motivo de infracción procesal. Exigencias formales. Norma infringida. Hechos probados. Via casacional. Inadmisión**

"PRIMERO.- De acuerdo con una constante doctrina jurisprudencial los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación se hallan sometidos a ciertas exigencias formales que se traducen, entre otras, en la necesidad de indicar con claridad y precisión la norma que se pretende infringida y en la imposibilidad de acumular por acarreo argumentos inconexos determinantes de la falta de la razonable claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado (en este sentido, sentencias núm. 965/2011, de 28 de diciembre, 957/2011, de 11 enero de 2012 , 185/2012, de 28 de marzo y 557/2012, de 1 de octubre).

Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en el art. 481 LEC, el escrito de interposición ha de expresar el supuesto, de los previstos en el art. 477.2 LEC, y en el caso de la casación foral de los establecidos en el art. 3 L 4/2005 de la Comunidad Autónoma de Aragón, conforme al que se pretende recurrir la sentencia. El incumplimiento de dicha exigencia supone el de los requisitos que ha de observar el escrito de interposición que el art. 483.2 LEC establece como una de las causas de inadmisibilidad (ATS de 23 de abril de 2013 Recurso: 161/2012).

Por lo demás, tampoco admite el recurso de casación el desconocimiento de los hechos que han sido declarados en la instancia sin haberlos impugnado por vía adecuada de la infracción procesal, como se dice en los AATS de 4 de febrero de 2014, Rec 3255/2012, o 8 de octubre de 2013, Rec 22/2013, el último de los cuales razona:

> *"El motivo segundo incurre en la causa de inadmisión de falta de respeto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida, al fundarse explícitamente en hechos distintos a los declarados probados, y falta de respecto a su ratio decidendi (art. 483.2.2º LEC , en relación con el art. 477.1 LEC)"*

SEGUNDO.- En la providencia en la que pusimos de manifiesto a las partes que podían ser apreciadas causas de inadmisión de los recursos por motivo de infracción procesal y de casación señalábamos como primer obstáculo la falta de indicación en el escrito de interposición de la vía de casación utilizada, pues si bien contiene una mención general al interés casacional, lo hace incluyendo dos argumentos incompatibles, como son la inexistencia de doctrina de este tribunal y la infracción de la misma.

Pues bien, las alegaciones presentadas por el recurrente no alzan tal obstáculo, pues aún cuando con un criterio amplio pasáramos por alto que se haya alegado conjuntamente la existencia de jurisprudencia que ha sido contradicha por la sentencia recurrida, y al mismo tiempo la inexistencia de dicha jurisprudencia, en cualquier caso, no acierta la parte recurrente a evidenciar cual es el la cuestión jurídica sobre la que se habría producido el desconocimiento de la jurisprudencia existente o que se halla huérfana de ella.

A tal efecto no podemos dejar de señalar que carece de toda fuerza esclarecedora el alegato ahora expresado por el recurrente en el trámite de audiencia:

> *En consecuencia entiende esta parte que existe jurisprudencia al respecto, pero en el caso de que no exista, pues las sentencias se refieren a servidumbre de paso y la nuestra de pastos, pues no la habrá.*
>
> *Es decir esta parte alega cualquiera de los dos motivos, que para nosotros uno al menos debe estimarse y elección del tribuna*

En el segundo de los apartados de nuestra providencia señalábamos la confusión en un motivo de casación de cuestiones procesales, de valoración de la prueba y de fondo, así como la mención por acarreo sin la necesaria separación de normas heterogéneas.

Pues bien, tampoco aquí los alegatos vertidos por la parte en el trámite abierto por dicha providencia desvirtúan aquella apreciación inicial, pues carece de explicación alguna al respecto. Por el contrario, se insiste en hacer expresa mención en el recurso de casación a la valoración de prueba documental y testifical –hasta 17 páginas del recurso por motivo de casación se dedican a explicar la prueba-, con lo que se reitera el defecto señalado, y, por otra parte, no se da explicación alguna de las razón por la que en un mismo motivo de casación se invocan normas del CC, del CDFA y de la LEC, e incluso se hace una breve alusión a la doctrina de los actos propios."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 7 de julio de 2016. Recurso de casación. Via casacional elegida. Vulneración de jurisprudencia. Inadmisión**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo.

Por lo que se refiere al primer extremo, debe declararse la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer del recurso de casación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 478, núm. 1, párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 1 de la Ley 4/2005 de las Cortes de Aragón, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa. Conforme a dichos preceptos corresponde a esta Sala conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil aragonés. Y examinado el mismo aparece que se funda en infracción de los artículos 80.2, 72.2 y 82 del CDFA.

SEGUNDO.- De las dos causas que hacen posible apreciar interés casacional conforme el artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la parte recurrente concreta en su escrito de alegaciones que la elegida es la de entender que la sentencia recurrida ha contradicho jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Como se indicó en la providencia que puso en conocimiento de las partes la posible inadmisión del recurso de casación, la falta de expresión en el momento de presentación del recurso de la vía utilizada determina per se la inadmisión del recurso.

Cabe, además, considerar que, aun definida ahora la vía elegida de infracción de jurisprudencia, lo cierto es que ni el recurso de casación ni el escrito de alegaciones indican qué concreta doctrina jurisprudencial se considera realmente infringida, ya que no se determina con precisión qué pronunciamiento judicial es ahora desatendido, pues la parte se limita a transcribir parcialmente sentencias de esta Sala sin exposición concreta de en qué parte o partes son contradichas y por qué apartado o apartados de la sentencia recurrida."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 8 de julio de 2016. Recurso de casación. Interés casacional. Tiempo en vigor del precepto. Doctrina jurisprudencial. Nueva valoración de los hechos. Inadmisión**

"PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 484.1 LEC, en el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo.

Presentado recurso de casación contra sentencia dictada por órgano judicial con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón, con fundamento el de casación en infracción de normas del Derecho civil aragonés (artículo 83 del Código del Derecho Foral de Aragón), la competencia para su conocimiento corresponde a esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, en relación con el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 478.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Conforme a lo previsto en el artículo 1 y en el artículo 2 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, la resolución será susceptible de recurso de casación, según lo señalado en el párrafo segundo anterior, en los casos de cuantía superior a tres mil euros o imposible de calcular, y en el caso de presentar el asunto interés casacional, en todos los casos siempre que se funde en infracción de normas del Derecho civil aragonés.

SEGUNDO.- Se trata en el presente supuesto de recurso de casación interpuesto por interés casacional, según el apartado quinto de los requisitos del escrito de interposición del recurso, que se justificaba porque el artículo 83 del CDFA, alegado como infringido, llevaba menos de cinco años en vigor y porque la sentencia contradecía jurisprudencia de esta Sala.

Se puso de manifiesto en la providencia de 10 de junio de 2016 que el artículo 83 del CDFA llevaría más de cinco años en vigor en el momento de su aplicación por la sentencia recurrida. En su escrito de alegaciones a la anterior providencia insiste la parte recurrente en que el artículo 83 CDFA habría entrado en vigor en la fecha en que lo hizo el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, que aprobó el Texto Refundido de las leyes civiles aragonesas, sin tener en cuenta que el precepto alegado es el artículo 9 de la Ley 2/2010, de 26 de mayo de igualdad de las relaciones familiares ante la ruptura de la convivencia de los padres, que entró en vigor a los tres meses de su publicación. La refundición de las leyes no implica la nueva entrada en vigor de los preceptos sustantivos contenidos en las leyes refundidas, por lo que los cinco años habrán de computarse desde la entrada en vigor de aquéllas.

No obstante, el artículo 3.3 de la Ley 4/2005 permite la alegación de no llevar la norma más de cinco años en vigor siempre que no exista doctrina jurisprudencial relativa

a normas anteriores de igual o similar contenido. Esta Sala ha dicho reiteradamente que la asignación compensatoria tiene, en lo sustancial, igual naturaleza jurídica que la pensión compensatoria del artículo 97 del Código civil, y de hecho la parte recurrente alega conjuntamente la infracción de este último y del artículo 83 CDFA, y existe abundante jurisprudencia sobre el artículo 97 Cc., de plena aplicación en relación a la cuestión planteada.

Nada decía la parte recurrente, para justificar el interés casacional, sobre la concreta doctrina jurisprudencial que resultaría contraria a la aplicación de la norma por la sentencia recurrida, pues se limitaba a dar una lista de sentencias de esta Sala y del Tribunal Supremo, sin comentario alguno. Ahora trata de hacerlo, extemporáneamente, en su escrito de alegaciones a la providencia de 10 de junio, refiriéndose al desequilibrio patrimonial entre las partes y al momento a tener en cuenta para concretar tal desequilibrio, sin que sea aceptable que la parte rehaga en esta fase su recurso de casación.

La justificación del interés casacional y su correcta expresión en el recurso viene exigida por el principio de igualdad procesal de las partes y la prohibición de indefensión, de forma que se permita a la parte recurrida la perfecta identificación del objeto y de la motivación del recurso, así como de la doctrina jurisprudencial supuestamente infringida. Por ello, no habiendo sido expresada y justificada la doctrina de la Sala, o del Tribunal Supremo, o la ausencia de doctrina supuestamente infringida, no queda tampoco justificado el interés casacional, como exige el artículo 481.1 LEC, por lo que debe ser inadmitido el recurso de casación a tenor de lo supuesto en el artículo 483.2.2º y 3º del mismo texto procesal.

TERCERO.- En cuanto al recurso de casación, se puso de manifiesto en la citada providencia de 10 de junio que no cabía tratar de hacer una nueva valoración de los elementos tenidos en cuenta en la sentencia recurrida para fijar la cuantía y duración de la asignación compensatoria, por ser competencia de los tribunales de instancia, no revisable en casación salvo en los supuestos de irracionalidad, falta de lógica o arbitrariedad. No se justificaba en tales términos el recurso de casación, ni de las alegaciones a la providencia de 10 de junio de 2016 se desprende que la sentencia recurrida, y la de primera instancia en cuanto era asumida y confirmada por la de apelación, hayan incurrido en tales defectos en la valoración de los criterios que señala el artículo 83 CDFA para la fijación de la asignación compensatoria."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 8 de julio de 2016. Recurso de casación. Vía de acceso. Interés casacional. Nueva valoración de los hechos**

"PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 484.1 LEC, en el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo.

Presentado recurso de casación contra sentencia dictada por órgano judicial con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón, con fundamento el de casación en infracción de normas del Derecho civil aragonés (artículo 82.1 y 82.2 del Código del Derecho Foral de Aragón), la competencia para su conocimiento corresponde a esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, en relación con el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 478.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Conforme a lo previsto en el artículo 1 y en el artículo 2 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, la resolución será susceptible de recurso de casación, según lo señalado en el párrafo segundo anterior, en los casos de cuantía superior a tres mil euros o imposible de calcular, y en el caso de presentar el asunto interés casacional, en todos los casos siempre que se funde en infracción de normas del Derecho civil aragonés.

SEGUNDO.- Se trata en el presente supuesto de recurso de casación interpuesto por interés casacional, según el apartado 4º del escrito de interposición del recurso, aunque después se transcribe íntegramente el artículo 477 LEC sin distinguir entre los tres supuestos del artículo 477.2 que permiten el recurso. También se transcribe íntegramente el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, es decir, por presentar su resolución interés casacional, por lo que debe comprobarse si se cumple tal requisito.

Como se puso de manifiesto en la providencia de 4 de mayo de 2016, como justificación del interés casacional se transcribían en el escrito de recurso los tres apartados del citado artículo 3 pero no se concretaba cual de ellos amparaba el recurso.

En el escrito de alegaciones a la anterior providencia la parte recurrente confunde la vía de acceso al recurso de casación (la cuantía o el interés casacional) con la fundamentación del mismo (que ha de basarse en infracción de normas del Derecho civil aragonés), e insiste en afirmar que en los motivos de fondo se ha alegado infracción del artículo 82.1 y 82.2 del CDFA, pero no concreta cuál de los supuestos del artículo 3 de la Ley 4/2005 justifica el interés casacional.

La justificación del interés casacional y su correcta expresión en el recurso viene exigida por el principio de igualdad procesal de las partes y la prohibición de

indefensión, de forma que se permita a la parte recurrida la perfecta identificación del objeto y de la motivación del recurso, así como de la doctrina jurisprudencial supuestamente infringida. Por ello, no habiendo sido expresada y justificada la doctrina de la Sala, o del Tribunal Supremo, o la ausencia de doctrina supuestamente infringida, no queda tampoco justificado el interés casacional, como exige el artículo 481.1 LEC, por lo que debe ser inadmitido el recurso de casación a tenor de lo supuesto en el artículo 483.2.2º y 3º del mismo texto procesal.

TERCERO.- En cuanto al recurso de casación, se puso de manifiesto en la citada providencia de 10 de junio que, tanto en lo referente a las nuevas cargas familiares como a las necesidades de los hijos y las circunstancias económicas de la madre, la parte recurrente pretende una nueva valoración de los hechos, sin respetar los acreditados en la sentencia y su valoración, lo que, tratándose de la aplicación del principio de proporcionalidad, como esta Sala ha expresado reiteradamente, es función que corresponde a los tribunales de instancia, no revisable en casación salvo en los supuestos de falta de lógica o arbitrariedad, que no se da en este supuesto."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 8 de septiembre de 2016. Recurso de casación. Vía de acceso. Alegación de infracción de preceptos genéricos**

"PRIMERO.- En la providencia de fecha 14 de julio de 2016 señalábamos como posible motivo de inadmisión del recurso de casación que no hacía indicación de la vía casacional que se hacía valer.

En contestación a dicha cuestión, la parte recurrente indica en sus alegaciones que cumplió con dicha exigencia al hacer mención al artículo 2.2 L 4/2005 de Aragón, pero como indica el MF en sus alegaciones, el recurrente no señala cuál de los tres supuestos en que el art. 3 L 4/2005 de Aragón permite el recurso por interés casacional previsto en aquél apartado, cada uno de los cuáles se halla sujeto a distintas exigencias.

De acuerdo con lo previsto en el art. 481 LEC, el escrito de interposición ha de expresar el supuesto, de los previstos en el art. 477.2 LEC (art. 2 y 3 L 4/2005 de Aragón) conforme al que se pretende recurrir la sentencia. El incumplimiento de dicha exigencia supone el de los requisitos que ha de observar el escrito de interposición que el art. 483.2 LEC establece como una de las causas de inadmisibilidad (ATS de 23 de abril de 2013 Recurso: 161/2012).

En consecuencia, procede la inadmisión del recurso por la razón expuesta en el primero de los apartados de la citada providencia.

SEGUNDO.- El segundo de los posibles motivos de inadmisión a que hacíamos mención en la providencia de 14 de julio consistía en que no decía en qué aspectos la sentencia recurrida producía infracción de los mismos, pues se hacía referencia tan sólo a la contradicción de ésta resolución con la doctrina sentada en otras resoluciones anteriores de la misma audiencia.

Pues bien, la cuestión debatida es el tiempo del período vacacional que la hija común de los contendientes, cuya custodia es atribuida individualmente a la madre, ha de pasar con el padre.

Los artículos que se citan como infringidos son el art. 75.2 CDFA y art. 80.1 CDFA.

El primero de ellos es de claro carácter general, pues como su mismo epígrafe indica trata tan solo del objeto y la finalidad perseguida por el legislador en la sección que se ocupa de regular los efectos de la ruptura de la convivencia de los padres con hijos a cargo, por lo que no se alcanza como puede ser infringido a los efectos casacionales, dada la constante doctrina jurisprudencial que rechaza la alegación de infracción de preceptos genéricos como motivo de casación.

Por su parte, el segundo de los preceptos que se citan como infringidos establece la necesidad de que en caso de custodia individual ha de fijarse un régimen que garantice el ejercicio de las funciones propias de la autoridad familiar, y no se justifica la razón por la

que la distribución igualitaria o del 40% y del 60% del tiempo vacacional puede suponer infracción de la citada norma, pues tal determinación se halla dentro de las facultades discrecionales que corresponde a los tribunales de instancia, y en modo alguno se arguye que la decisión adoptada sea absurda o arbitraria, como indica el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones.

En consecuencia, procede la inadmisión del recurso conforme al art. 483.2.2 LEC por no cumplir el escrito de interposición los requisitos establecidos, para los distintos casos, en la ley."

***** Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 15 de septiembre de 2016. Propiedad horizontal. Servidumbre de tubería. Normativa aplicable. Sistema de fuentes y derecho interterritorial**

"PRIMERO.- La cuestión planteada en lo que ahora interesa se constriñe a resolver sobre la pretensión deducida por Dª María del Carmen, propietaria del piso … calle G., contra la mercantil B., que lo es del piso superior, … del mismo inmueble, a fin de que se declarare que dicha demandada ha alterado y agravado considerablemente la servidumbre de tubería de desagüe que soportaba aquélla por la ejecución de una obra de remodelación integral del piso superior, que incluía una nueva canalización del desagüe que discurría inicialmente por el falso techo del inferior. Pretensión cuyo fundamento jurídico se hacía recaer en los arts. 7 CC, 543 CC y 538 CDFA, a los que la demandada opuso las normas sobre servidumbres contenidas en los arts. 553 a 558 y 581 CDFA.

Los hechos, que no son objeto de disputa mediante el pertinente recurso por infracción procesal, son expuestos en la sentencia recurrida del siguiente modo:

> <<El segundo punto, el más dudoso en términos jurídicos, es que donde antes pasaba un tubo de fibrocemento ahora hay estructura de desagüe, de una doble "y" que recoge ahora un potencial y mayor caudal de las aguas residuales, pasando a ocupar un mayor volumen del falso techo del 3º izda y privativo de éste. Es esta ocupación el quid del proceso.
>
> El informe del Sr. G precisa con claridad la polémica: "la discusión es, pues, qué volumen o cantidad de espacio en el falso techo inferior se ocupa con esta instalación".
>
> Debe precisarse que es un volumen privativo. Se ha sustituido una instalación obsoleta de fibrocemento por una de PVC que ofrece mayores garantías de estanqueidad y mejores prestaciones. En ese informe, (folio 263) y en su ampliación (f. 394 y 395) con relación a la situación preexistente (primera foto, f. 263, que sin ser la que es objeto de autos, puede representar una idea de la situación preexistente), se desvela la ocupación de un mayor volumen secuente a la colocación de esa estructura de tuberías.
>
> […]
>
> Pero la nueva estructura, intrusión en bovedillas aparte, guarda desproporción con la verosímilmente preexistente y conlleva la ocupación de un volumen privativo que no tiene el deber jurídico de soportar el propietario del piso inferior.>>

La sentencia de primer grado desestimó dicha pretensión con base a los artículos 556 CDFA, 558 CDFA Y 581 CDFA arguyendo que:

<<Sobre la servidumbre, debemos estar a lo dispuesto en los arts. 556 a 558 CDFA y fundamentalmente, a lo establecido en el art. 581 del mismo, que debe interpretarse en la forma que indica el art. 3 del CC, atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, su espíritu y finalidad de las mismas. A la vista de la pericial del Srs. G, cuyo informe debe prevalecer frente al del Sr. N por los motivos anteriormente expuestos, la servidumbre de la red de saneamiento no se ha visto agravada pora las obras de la demandada. El perito afirma en su informe que no se produce un cambio sustancial de la situación anterior, porque todas las instalaciones del edificio pasan por el techo del piso inferior, se ha renovado la instalación persistente con materiales actuales y mejores prestaciones, además considera que la instalación se ha hecho en un hueco del falso techo que no afecta al uso del piso inferior.>>

Por el contrario, la de apelación da lugar al recurso acudiendo a lo dispuesto en el art. 7 LPH en los siguientes términos:

<<Dispone el art. 7 de la LPH que "el propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad."

La posibilidad de modificar el departamento privativo tiene pues ese límite de que no se perjudique a otro propietario. Y aquí el perjuicio acaece: se ocupa, en razón a esa estructura de tuberías un volumen y espacio privativo que excede lo que verosímilmente existía previamente, un único tubo. La modificación sería tolerable si se hubiera cambiado ese tubo, aunque fuera de un mayor diámetro. Pero la nueva estructura, intrusión en bovedillas aparte, guarda desproporción con la verosímilmente preexistente y conlleva la ocupación de un volumen privativo que no tiene el deber jurídico de soportar el propietario del piso inferior. Por tanto la parte demandada tendrá que dar otra solución a la recogida de esas aguas residuales, de forma que se mantenga de manera equivalente la situación preexistente.>>

El primero de los motivos de casación va dirigido a discutir la aplicación de la norma que sirve de fundamento a la decisión del tribunal de apelación, pues afirma que supone infracción de las reglas de determinación de la norma aplicable contenidas en los arts. 1.2 CDFA (sistema fuentes del derecho civil de Aragón) y arts. 10.1 y 13 CC (normas de derecho interterritorial).

El segundo de los motivos de casación afirma infracción del art. 581 CDFA en relación con el art. 556 a 558 CDFA, por cuanto sostiene que la actuación sobre el desagüe respeta las reglas sobre servidumbres explicitadas en dichas normas.

SEGUNDO.- Primer motivo de casación. Selección de norma aplicable. Sistema de fuentes y derecho interterritorial.

Sostiene el motivo que la sentencia recurrida ha quebrando las reglas que gobiernan la determinación de la norma aplicable, pues la existencia de derecho civil propio impide la aplicación del art. 7 LPH seleccionado por la sala de apelación para la decisión del conflicto, y ello por infracción de normas de carácter y naturaleza diferente: las relativas al sistema de fuentes del derecho civil de Aragón (art. 1.2 CDFA), y las que regulan la convivencia de los diferentes derechos civiles existentes del territorio nacional (art. 10.1 y 13 CC). En puridad las dos infracciones debieron haber sido articuladas a medio de diferentes motivos, dada la falta de homogeneidad que es de apreciar entre ellas.

En cuanto al derecho interterritorial, es de señalar que el derecho civil propio de las Comunidades Autónomas es fragmentario, en tanto que no ocupa todo este ordenamiento, sino tan solo el que supone conservación, modificación y desarrollo de sus derechos civiles, forales o especiales (art. 149.1.8ª CE), por lo que no puede darse conflicto de leyes entre este derecho y el estatal en aquellos ámbitos del derecho civil al que no alcanza el derecho propio.

Es el caso que, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, la aragonesa no dispone en su ordenamiento civil de regulación sobre propiedad horizontal, por lo que los conflictos que surjan en el seno de estas han de entenderse sujetos a la LPH, L 60/1996, de 21 de julio, como norma especial establecida para la regulación de esta forma de copropiedad.

Pues bien, no es discutido que el edificio en cuestión se halla dividido en la forma prevista en el art. 396 CC y arts. 1 y 2 LPH, por lo que su régimen jurídico es el que se ocupa de esta copropiedad especial, que desplaza al resto del ordenamiento civil, que sería de aplicación tan solo con carácter supletorio (Art. 396 CC, art. 2 LPH y SSTS nº 44/2008, de 23 de enero; 398/2009, de 28 mayo; nº 306/2013, de 25 de abril, sentencia esta última que confirma la SAP de Teruel nº 222/2009; y nº 725/2014).

En este sentido es de especial claridad la STS 221/2005 de 17 de Marzo de 2005 -con criterio que sigue la posterior STS nº 115/2007- que se expresa en los siguientes términos:

> << En definitiva, la posible discusión sobre la aplicación de la Ley general a las comunidades, que tengan los requisitos del régimen de Propiedad Horizontal, carece actualmente de sentido, como ha aclarado el artículo 2 de la Ley 8/1999, de 6 de Abril, de modificación de la Ley 49/1960, de 21 de Junio; pues este precepto suple cualquier laguna legal, de tal forma que, de manera categórica, se puede concluir indicando que las repetidas normas son de carácter imperativo>>

Y el de autos es un conflicto propio de los que surgen en los inmuebles en copropiedad horizontal. De lo que se trata es de la modificación por la demandada de los elementos del edificio, por lo que no podemos aceptar la afirmación que el recurrente desliza en el

desarrollo del segundo motivo de que la sentencia de apelación haya desviado el debate desde *la servidumbre forzosa de acceso a red general a una mera cuestión de ocupación de finca ajena*. No se trata de una cuestión de servidumbre predial entre fundos separados pertenecientes a distintos propietarios, sino de la más compleja relación que surge entre los copropietarios en comunidad horizontal de un edificio construido de acuerdo con una singular y concreta disposición de sus diferentes elementos, que ha de ser respetada por todos los comuneros, y cuya modificación por uno de ellos en palabras de la STS 306/2013:

> <<[…]está sujeta a un doble requisito: a) la obligación de los propietarios de respetar los elementos comunes (artículo 9 LPH) y la consiguiente imposibilidad de realizar obras que comporten su modificación sin obtener el acuerdo unánime de la Junta de Propietarios exigida para la validez de los acuerdos que impliquen aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad o en los estatutos (artículo 16 LPH , en relación con el artículo 11 LPH aplicable en estos autos, y el artículo 12 LPH); b) como exige expresamente el artículo 7 LPH , que no se menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores o se perjudiquen los derechos de otro propietario (STS 17 de enero 2012).>>

En consecuencia, la sentencia de apelación no ha infringido las normas de conflicto de leyes que indica el motivo (Arts. 10.1 y 13 CC) al haber resuelto de acuerdo con la regulación contenida en la LPH.

Tampoco es de apreciar infracción del sistema de fuentes establecido en el art. 1 CDFA, pues la falta de regulación de la propiedad de inmuebles divididos en régimen de comunidad horizontal en esta Comunidad Autónoma justifica la entrada de la ley estatal que se ocupa de ellos.

Procede, por tanto, la desestimación del motivo.

TERCERO.- El segundo de los motivos de casación sostiene la infracción del art. 581 CDFA en relación con los arts. 556 a 558 CDFA.

En primer lugar, hemos de señalar que, como motivo de casación que es, el estudiado no puede discutir las afirmaciones de hecho realizadas por la sentencia recurrida, en particular la conclusión alcanzada por la Sala de apelación de que la modificación de su sistema de desagüe por el recurrente ha supuesto la invasión de un mayor volumen del espacio privativo del actor que la instalación originaria lo que supone un perjuicio para el actor.

En segundo lugar no podemos dejar de resaltar tampoco la contradicción que implica afirmar como norma aplicable la contenida en el art. 581 CDFA, que tiene por objeto la constitución de una servidumbre legal de desagüe a favor de la propiedad que *carezca de acceso a una red general de saneamiento o suministradora de agua, energía, tecnologías de la información y las comunicaciones y otros servicios*, al tiempo que se afirma que *en el caso dicha servidumbre no es 'ex novo' sino que ya estaba constituida*; y

ello porque la segunda afirmación elimina el presupuesto de hecho de aplicación del primero.

La actora en su demanda y la sentencia de primer grado en su fundamentación acuden a las normas rectoras de las servidumbres, mientras que la Sala de apelación, como vimos, se basa en la legislación especial de propiedad horizontal, y el motivo lo que pretende es reconducir el debate al ámbito en que fue resuelto en la primera instancia.

Es cierto que la jurisprudencia ha admitido la constitución de servidumbres y la aplicación supletoria de las normas que las rigen en el marco de la relaciones existentes entre comuneros en régimen de propiedad horizontal más allá de las establecidas en el art. 9.1.c LPH (STS 390/2014), pero para que pueda ser exigida una servidumbre legal, como lo es la de desagüe regulada en el art. 581 CDFA que se invoca en el motivo, es necesario que se den el caso los presupuestos de tipicidad indicados en la norma que la establece, y que no sean contrarias al régimen aplicable al inmueble sujeto a la ley especial, título constitutivo incluido, ni se invoquen con intento de eludirlo, dado el carácter imperativo que la jurisprudencia que ha quedado reseñada le ha reconocido. De ahí que la servidumbre legal de paso haya sido rechazada para resolver el espinoso problema del gravamen que ha de soportar un comunero en los supuestos de instalación de ascensor por falta del presupuesto de enclavamiento contemplado en el art. 564 CC (SSTS 351/2014 y 357/2014).

Si ello es así, difícilmente puede ser llamado el art. 581 CDFA a la solución del conflicto, pues, como paladinamente reconoce el recurrente en la exposición de las razones en que se basa el motivo, el piso de su propiedad privativa ya dispone de una conexión a las red común de desagüe, y es presupuesto de hecho para la aplicación de dicho artículo la inexistencia de tal conexión previa, lo que excluye la posibilidad de que el mismo haya sido infringido por la sentencia cuestionada.

Sin duda por ello, el recurrente afirma la infracción de dicha norma en relación con otros preceptos del Código que se ocupan del contenido de las servidumbres, como son los artículos 556, 557 y 558 CDFA, pero no explica en cambio el recurrente la razón por la que extrae de dichos preceptos la facultad de hacer las variaciones en su sistema de desagüe que afectan a la configuración física del inmueble y las instalaciones con las que cuenta con incremento de ocupación de la propiedad privativa perteneciente al dueño del piso inferior por donde la servidumbre discurre con perjuicio para este.

Ninguna de dichas normas permite al dueño de la finca dominante hacer modificación alguna que agrave la servidumbre en contra de lo dispuesto en el art. 543 CC, de aplicación supletoria de acuerdo con el art. 1.2 CDFA, conforme al que:

> <<El dueño del predio dominante podrá hacer, a su costa, en el predio sirviente las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre, pero sin alterarla ni hacerla más gravosa>>.

Por el contrario, del conjunto de dichos preceptos tan solo se desprende el derecho al y uso mantenimiento de la servidumbre en los términos en que se hallaba establecida, y la exigencia de su ejercicio de modo menos incómodo y lesivo para la finca sirviente sin perjuicio de su utilidad para el dominante, y es este sentido puede ser citada la sentencia de esta Sala nº 36/2014 en la que decíamos, con la finalidad de fijar el alcance de los preceptos generales sobre la servidumbres contenido en el CDFA, lo que sigue:

> <<En la regulación del CDFA el artículo 557 (ejercicio civiliter) exige un ejercicio de las servidumbres de la forma más adecuada para obtener la utilidad de la finca dominante y, a su vez, del modo menos incómodo y lesivo para la finca sirviente. El artículo 558 permite al titular de la finca dominante la realización, a su costa, de las obras necesarias para el uso y la conservación de la servidumbre, impidiendo al titular de la finca sirviente (apartado 4) la realización de ninguna obra que perjudique o dificulte el ejercicio de la servidumbre. El artículo 560 permite al propietario de la finca sirviente, si el ejercicio de la servidumbre le resulta excesivamente gravoso o incómodo, exigir las modificaciones que crea convenientes en la forma y el lugar de la prestación de la misma, siempre que no disminuyan su valor y utilidad.>>

Por ello, dichas normas no pueden servir de fundamento para excepcionar el régimen establecido en art. 7 LPH aplicado por la sentencia cuestionada, pues coinciden con él en impedir al recurrente cualquier alteración en los elementos del edificio que puedan perjudicar la propiedad de la actora.

En consecuencia, procede también la desestimación de este segundo motivo.”

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 20 de septiembre de 2016. Recurso de casación. Falta de indicación del interés casacional. Nueva valoración de la prueba**

"PRIMERO.- La sentencia recurrida es susceptible de recurso de casación por haber sido dictada por la Audiencia Provincial en segunda instancia. Y dado que el motivo del recurso de casación presentado se basa en la vulneración de norma de derecho civil aragonés por posible infracción de los artículos 76.2, 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, además de los artículos 39.2 y 4 de la Constitución, el conocimiento del recurso presentado es competencia de esta Sala de lo civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, lo que procede declarar así conforme a los artículos 478 y 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 1 de la Ley de Aragón 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa.

SEGUNDO.- Observada, entre otras posibles causas de inadmisión del recurso, la falta de indicación por la parte del interés casacional alegado se puso de manifiesto el posible motivo de inadmisión a las partes para alegaciones.

Al evacuar dicho trámite, la parte recurrente, respecto de la concreta cuestión de en qué caso de los previstos en el artículo 477 apartado 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil indicaba que se encontraba el recurso, en la alegación SEGUNDA del escrito presentado indica al respecto que "Asi el interés casacional de esta parte es la de contradecir la sentencia recurrida en virtud de la corriente jurisprudencial, puesto que esta ha quedado infringida en la aplicación que se ha realizado en las sentencias dictadas". En sustento de tal afirmación, recoge la cita de diversas sentencias de esta Sala respecto de la preferencia legal que en la legislación aragonesa se atribuye a la custodia compartida de los menores respecto de la individual, pero no concreta qué doctrina especifica, y distinta de la considerada ante los hechos concretados de cada caso, entiende realmente infringida.

Siendo el recurso acto procesal de la parte, al recurrente corresponde la carga de determinar con la debida precisión qué doctrina de este tribunal es la que no ha sido respetada en el dictado de la sentencia impugnada, sin que baste a tal efecto la mera consignación de consideraciones generales hechas en sentencias previas sobre las normas a observar, pues tales expresiones de conceptos genéricos no alcanzan a concretar si realmente la resolución combatida contradice o no lo sostenido jurisprudencialmente por esta Sala.

TERCERO.- Como también se indicó en la providencia de traslado para alegaciones sobre posible inadmisión del recurso, se observó que la parte fundaba su impugnación en la distinta valoración de la prueba que él hace respecto de la que contiene la sentencia de la Audiencia Provincial. Esta observación se reafirma a la vista del contenido del escrito presentado, que evidencia que el fundamento real del recurso es la pretensión de que la Sala de Casación se pronuncie sobre el alcance real de la dificultad del padre para atender a las hijas por su incompatibilidad laboral, y sobre la incidencia que

debe tener en la resolución final el informe pericial practicado por el equipo psicosocial. Con ello, la lectura de la verdadera causa y pretensión contenida en el motivo del recurso evidencia que no se reclama tanto la adecuada aplicación de norma sustantiva como, en realidad, la modificación de los elementos probatorios y la resultancia fáctica tenidos en cuenta por la senencia recurrida para dar lugar a la aplicación de las normas que se invocan en apariencia como razón del recurso.

Debe así concluirse que, siendo fundamento real del recurso la pretensión de la parte de que se efectúe nueva valoración de la prueba, queda la impugnación fuera del ámbito del recurso de casación, concretado por el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tan solo a aquellos casos en que se alegue la infracción de normas jurídica sustantiva."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 21 de septiembre de 2016. Recurso de casación. Justificación del interés casacional. Doctrina vulnerada. Norma infringida. Claridad expositiva**

"PRIMERO.- Al evacuar el trámite de alegaciones por posible causa de inadmisión, la parte recurrente, respecto de la falta de justificación del interés casacional, indica que la sentencia impugnada se opone a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y además resuelve puntos sobre los que hay sentencias contradictorias con otras Audiencias Provinciales, y que también es contradictoria a jurisprudencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En el recurso aludió a sentencias de las AAPP de Pontevedra, Coruña y Murcia, y a otra del Tribunal Supremo, dictadas todas ellas en aplicación de normas de derecho común. Mas, con independencia de que el interés casacional solo podría apreciarse en caso de oposición de la sentencia a doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (artículo 3 de la Ley de casación foral aragonesa) no expresa la razón (cómo, por qué y en qué sentido) por la que entiende que la sentencia ahora recurrida se opone a lo señalado en las sentencias de este Tribunal y, en consecuencia, no ha justificado la presencia de interés casacional en la resolución del recurso. Es decir, no acierta la parte recurrente a señalar cual es la cuestión jurídica sobre la que se habría producido el desconocimiento de la jurisprudencia existente.

Siendo el recurso acto procesal de la parte, al recurrente corresponde la carga de determinar con la debida precisión qué doctrina de este tribunal es la que no ha sido respetada en el dictado de la sentencia impugnada, sin que baste a tal efecto la mera invocación de sentencias cuyo pronunciamiento hubiera satisfecho al recurrente. El incumplimiento de dicha exigencia supone el de los requisitos que ha de observar el escrito de interposición y que el art. 483.2 LEC establece como una de las causas de inadmisibilidad. A este respecto el Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2011 sobre "Criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario de infracción procesal" señala como supuesto de inadmisión en lo referido al recurso de casación, "la falta de justificación de los supuestos que determinen la admisibilidad de las distintas modalidades del recurso de casación (artículo 481.1 LEC).

SEGUNDO.- Como se indicó en la providencia de traslado para alegaciones sobre posible inadmisión del recurso, citándose como infringido el artículo 69 del CDFA, la parte desarrolló el motivo en torno a los artículos 142 y 152 del Cc, haciendo hincapié en que, con arreglo a este último debió declararse extinguida la obligación de alimentos. Ahora, en sus alegaciones, afirma que "No se aplica CORRECTAMENTE el artículo 69 CDFA dado que aún a pesar de que queda acreditado en los hechos de la sentencia dictada en primera instancia que la demandante ha abandonado sus estudios por decisión propia, y que trabaja, no se aplica correctamente el artículo 69 dado que se establece la extinción de la pensión de alimentos en el momento en el tiempo normalmente requerido o el hijo tuviera recursos propios para mantenerse".

No es el escrito de alegaciones por posible inadmisión, vía apta para subsanar los defectos de que pueda carecer el escrito de recurso. Pero es que, además, no respeta la base de hechos de la sentencia, que declaró acreditado que la demandante carecía de trabajo e ingresos y, en consecuencia, la situación de necesidad y sobre cuya base fijó la obligación de abono de cantidad "en concepto de alimentos", tal como literalmente se dice en el fallo.

De acuerdo con una constante doctrina jurisprudencial los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, se hallan sometidos a ciertas exigencias formales que se traducen, entre otras, en la necesidad de indicar con claridad y precisión la norma que se pretende infringida y en la imposibilidad de acumular por acarreo argumentos inconexos determinantes de la falta de la razonable claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado (en este sentido, sentencias núm. 965/2011, de 28 de diciembre, 957/2011, de 11 enero de 2012 , 185/2012, de 28 de marzo y 557/2012, de 1 de octubre)."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 26 de octubre de 2016. Rec urso de casación. Infracción de norma aplicable. Falta de justificación de la recurribilidad de la sentencia**

"PRIMERO.- De acuerdo con una constante doctrina jurisprudencial, el recurso extraordinario de casación se halla sometido a ciertas exigencias formales que se traducen, entre otras, en la necesidad de indicar con claridad y precisión la norma que se pretende infringida.

Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en el art. 481 LEC, el escrito de interposición ha de expresar el supuesto, de los previstos en el art. 477.2 LEC, y en el caso de la casación foral de los establecidos en los arts. 2 y 3 Ley 4/2005 de la Comunidad Autónoma de Aragón, conforme al que se pretende recurrir la sentencia. El incumplimiento de dicha exigencia supone el de los requisitos que ha de observar el escrito de interposición que el art. 483.2 LEC establece como una de las causas de inadmisibilidad.

El presente recurso ni se funda en infracción de norma aplicable a la cuestión objeto del proceso, ni justifica la recurribilidad de la sentencia frente a la que se plantea aquel.

SEGUNDO.- En trámite de alegaciones a la providencia en la que pusimos de manifiesto a las partes que podían ser apreciadas dichas causas de inadmisión el Ministerio Fiscal y la contraparte han estimado que procede declarar la inadmisibilidad del recurso, en tanto que la parte recurrente ha dejado precluir dicho trámite.

Ante ello, y no habiendo quedado desvirtuada aquella apreciación inicial, procede la inadmisión del recurso de casación, de acuerdo con lo prevenido en el art. 483.2.2º y 3º LEC."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 28 de octubre de 2016. Recurso de casación. Incidente de oposición a la formación de inventario. Indeterminación de la cuantía. Falta de claridad y orden en alegación de preceptos supuestamente infringidos**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo, según dispone el artículo 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta Sala es competente para conocer del recurso de casación interpuesto, a tenor del artículo 478, núm. 1º, párrafo 2º, de la mentada Ley procesal, ya que corresponde "*a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales Civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad*", y a estos efectos competenciales puede entenderse que el recurso de casación interpuesto se refiere a la vulneración de derecho civil aragonés, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá acerca de su admisibilidad.

SEGUNDO.- La providencia dictada en fecha 7 de octubre pasado ponía de relieve, en primer lugar, la no fijación de la cuantía del proceso, lo que es relevante dado que la parte recurrente invoca la cuantía como vía para interponer el recurso de casación.

La determinación de la cuantía del proceso ha de hacerse en la demanda, conforme al art. 253 de la LEC, ajustadamente a las reglas establecidas en el art. 251 de la misma ley procesal, y es carga de las partes su fijación. En Este caso dicha fijación no se ha realizado en las instancias. Sin embargo, en el caso presente puede entenderse que la cuantía de las cuestiones planteadas en el recurso supera la cantidad de 3.000 euros, por lo que tendría acceso a la casación conforme a lo establecido en el art. 2.1 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa.

TERCERO.- En segundo lugar se cuestionaba en la providencia indicada la recurribilidad en casación de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, ya que ha recaído en un incidente de oposición a la formación de inventario en procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial. En este tipo de procesos, la Sala ha venido siguiendo el criterio, mantenido por el Tribunal Supremo, de la irrecurribilidad, al considerar que se trata de una sentencia de apelación en un incidente que no constituye una segunda instancia, por lo que no es incardinable en el supuesto de hecho del art. 477 de la LEC. En este sentido el Auto de 15 de febrero de 2013 allí mencionado.

Pero es de constatar un cambio de criterio en el Tribunal Supremo, que aparece en Autos de 9 de marzo, 6 de julio y 28 de septiembre de 2016, conforme a los cuales *"... la doctrina de la irrecurribilidad queda superada a partir de la sentencia del Pleno de esta Sala de 21 de diciembre de 2015, en el recurso de casación nº 2459/2013, en el que se*

plantea cual es el procedimiento adecuado para las reclamaciones entre cónyuges por razón del régimen económico matrimonial tras la disolución de éste, que recoge expresamente, en su fundamento de derecho cuarto: "2ª) Dentro del libro IV de la LEC, dedicado a los procesos especiales, el capítulo II del título II regula el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial (arts. 806 a 811), pero comprendiendo en realidad dos procedimientos diferentes, el de formación de inventario (arts. 808 y 809) y el de liquidación en sentido estricto (art. 810), con una variante más para el régimen de participación (art. 811). 3 ª) De lo anterior se sigue que la formación de inventario para determinar el activo y el pasivo de la comunidad matrimonial precede a la liquidación del régimen económico matrimonial, porque no es sino hasta concluido el inventario cuando cualquiera de los cónyuges « podrá » solicitar la liquidación (art. 810.1 LEC), lo que significa, a su vez, que la determinación del activo y el pasivo de la comunidad matrimonial no exige necesariamente una petición de liquidación como se alega en el motivo."

La prioridad del procedimiento especial para la liquidación del régimen económico matrimonial sobre el juicio ordinario y la consideración de que el primero comprende en realidad dos procedimientos diferentes, el de formación de inventario (arts. 808 y 809) y el de liquidación en sentido estricto (art. 810) desvirtúan en gran medida la naturaleza incidental de la sentencia que pone fin al procedimiento de inventario".

CUARTO.- En todo caso, y aunque pudiera entenderse recurrible en casación la sentencia recaída en este proceso, el presente recurso de casación no puede superar el trámite de admisión, pues en el motivo único se denuncia la infracción de los arts. 83 a 193 y 210 al 270 del Código de Derecho Foral Aragonés (CDFA), sin la debida claridad y separación.

Como tiene declarado el Tribunal Supremo, el recurso de casación tiene naturaleza de recurso extraordinario, tendente a revisar si la sentencia dictada en segunda instancia por una Audiencia Provincial ha infringido el ordenamiento jurídico aplicable al caso. El art. 477 de la LEC exige que el recurso se funde en la infracción de norma sustantiva, a fin de que el tribunal de casación –y, previamente a su decisión, las partes recurridas- conozca la razón por la que la recurrente entiende que se ha vulnerado el ordenamiento jurídico sustantivo y pueda ejercer la función nomofiláctica –o de protección del derecho- que es la esencia del recurso de casación; así expresa el Auto del TS de 6 de mayo de 2008 (recurso 584/2004) que: "*Esta Sala … ha circunscrito este recurso al examen de la corrección jurídica de las normas referidas al fondo del asunto, esto es, a la cuestión sustantiva o material que constituye el objeto del proceso, según es inherente a su función nomofiláctica*"-.

Y en este sentido el Acuerdo no jurisdiccional de 30 de diciembre de 2011 de la Sala Primera del alto tribunal ha establecido, como criterio de inadmisibilidad, *"La acumulación de infracciones, la cita de preceptos genéricos o la cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo que generen la existencia de ambigüedad o*

indefinición sobre la infracción alegada (artículo 481.1 LEC)"; supuesto que concurre en el caso de autos.

La parte recurrente ha tratado en el escrito de alegaciones de precisar el contenido del motivo único del recurso de casación, pero es de tener presente que el objeto de este trámite de alegaciones es dar oportunidad a las partes para que se pronuncien sobre las posibles causas de inadmisión, no sustituir el escrito de interposición del recurso."

*** **Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 28 de octubre de 2016. Recurso de casación. Falta de concreción del interés casacional. Doctrina infringida. Exigencia de pronunciamiento directo sobre resultado probatorio**

"PRIMERO.- La sentencia recurrida es susceptible de recurso de casación por haber sido dictada por la Audiencia Provincial en segunda instancia. Y dado que el motivo del recurso de casación presentado se basa en la vulneración de norma de derecho civil aragonés por posible infracción de los artículos 76.2, 80.2 del Código del Derecho Foral de Aragón aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, (CDFA) el conocimiento del recurso presentado es competencia de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, lo que procede declarar así conforme a los artículos 478 y 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 1 de la Ley de Aragón 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa.

SEGUNDO.- Observada, entre otras posibles causas de inadmisión del recurso, la mezcla de normas heterogéneas, sustantivas y procesales, en la formulación del recurso, indica al respecto el recurrente que el precepto infringido es el artículo 80.2 del CDFA. Esta concreción del precepto sustantivo citado por la parte recurrente mantiene, sin embargo, la incorrecta cita en el motivo de recurso de normas relativas al fondo de la cuestión con una norma de carácter estrictamente procesal, como lo es el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regulador de la carga de la prueba.

TERCERO.- Frente a la falta de concreción puesta de manifiesto a la parte de si el interés casacional se fundamentaba en oposición a doctrina de esta Sala o en la existencia de sentencia contradictorias dictadas por las Audiencias Provinciales, se alegó por la recurrente que el interés casacional se basa en la cita de una sola sentencia de esta Sala recogida en su escrito, que considera de aplicación al caso específico.

Al respecto, se observa que la sentencia indicada por el recurrente y parcialmente transcrita en su recurso recoge mención tan solo de la razón por la que la custodia compartida puede ser más beneficiosa que la individual. Siendo el recurso acto procesal de la parte, al recurrente corresponde la carga de determinar con la debida precisión qué doctrina de este Tribunal es la que no ha sido respetada en el dictado de la sentencia impugnada, sin que baste a tal efecto la mera consignación de consideraciones generales hechas en sentencia previa, pues tales expresiones de conceptos genéricos no alcanzan a concretar si realmente la resolución combatida contradice o no lo sostenido jurisprudencialmente por esta Sala. Y en este caso la generalidad del criterio sustentado en la sentencia citada de esta Sala es de una generalidad que no es luego concretada por la parte a su aplicación al caso específico de autos, en el que el debate principal versa sobre si se dan o no las razones legales para entender que haya habido un cambio de circunstancias que aconseje el cambio del tipo de custodia.

CUARTO.- Por último, la argumentación desarrollada en el motivo de recurso se funda en contradecir las conclusiones probatorias obtenidas en la sentencia recurrida al

estudiar pruebas practicadas y concluir si debe reputarse o no que haya habido variación de las circunstancias que dieron lugar al establecimiento de las medidas iniciales reguladoras del divorcio de los litigantes. Así se puso de manifiesto a la parte recurrente, que en su escrito de alegaciones insiste en tal cuestión, ya que indica que a su juicio la Sala no puede ser ajena a los hechos de que trae causa el presente recurso.

Tal petición exige un pronunciamiento directo sobre el resultado probatorio obtenido en la sentencia de instancia, lo que es ajeno al objeto del recurso de casación, previsto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tan solo para revisión del derecho sustantivo aplicable, y no para decidir de nuevo sobre las circunstancias fácticas concurrentes en la cuestión litigiosa."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 7 de noviembre de 2016. Recurso de casación. Infracción de doctrina jurisprudencial. Revisión de la valoración de la prueba encubierta**

"PRIMERO.- Dictada sentencia por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza el día 12 de julio de 2016, se articula por la parte demandada recurso de casación con invocación de la procedencia de interponerlo por infracción de doctrina jurisprudencial de esta Sala. Es decir, aunque no sea citado por la parte, al amparo de lo establecido en el número 3º del apartado segundo del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 3 de la Ley de Aragón 4/2005, de 14 de junio, sobre casación foral aragonesa, por existencia de interés casacional, y con fundamento en la infracción del artículo 82.1.2.3. del Código de Derecho Foral de Aragón (CDFA). En consecuencia con tal causa y contenido del recurso, corresponde la competencia para resolver sobre su admisión y, en su caso, resolución, a esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 478 de la Ley de Enjuiciamiento citada.

SEGUNDO.- El recurso indica como vía casacional la infracción de doctrina jurisprudencial, pero luego, en su desarrollo, se limita a la cita de dos sentencias que parten de supuestos de hecho y situación jurídica que, a falta de la necesaria especificación que corresponde hacer a la parte recurrente, no guardan relación con el caso de autos, ya que una de las sentencias que cita partía de la cuestión de no haber sido valorados los recursos económicos de las partes, y la otra de que no habían sido tenidos en cuenta todos los parámetros legalmente previstos para fijar la pensión por alimentos al hijo menor, y ninguna de tales consideraciones son de apreciar en el caso presente, en el que la sentencia recurrida sí valora los recursos económicos de ambas partes y los parámetros concurrentes, tanto de modo directo como por remisión a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia.

TERCERO.- La invocación del principio general de proporcionalidad establecido en el artículo 82 del CDFA como infringido por la sentencia impugnada encubre, en realidad, que la parte no se muestra conforme con la valoración hecha en la resolución respecto de los ingresos y gastos que tienen los progenitores y el hijo menor, y pretende realmente que se valore por esta Sala si ha habido o no cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al tiempo del establecimiento de la pensión a abonar por la parte recurrida en concepto de alimentos del hijo de los litigantes, así como a la incidencia que diversos factores han podido tener en los ingresos a percibir por parte del obligado a prestar la obligación de alimentos.

Esta petición exige un pronunciamiento directo sobre el resultado probatorio obtenido en la sentencia de instancia, y la conclusión que, en el ámbito de su decisión discrecional y fundada, corresponde sólo a los tribunales de instancia, y que, por tanto, es ajeno al objeto del recurso de casación, previsto en el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tan solo para revisión del derecho sustantivo aplicable, y no para decidir de nuevo sobre las circunstancias fácticas concurrentes en la cuestión litigiosa."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 11 de noviembre de 2016. Recurso de casación. Incidencia en cuestiones probatorias**

"PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 484.1 LEC, en el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo.

Presentado recurso de casación contra sentencia dictada por órgano judicial con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón, con fundamento en infracción de normas del Derecho civil aragonés (artículos 328, 509-510, 511, 512-514, y otros, del Código del Derecho Foral de Aragón), junto con preceptos del Código civil, la competencia para su conocimiento corresponde a esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, en relación con el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 478.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Conforme a lo previsto en los artículos 1, 2.1 y 2.2 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, la resolución será susceptible de recurso de casación, en los términos indicados también en el párrafo segundo anterior, cuando la cuantía exceda de 3.000 euros o sea imposible de calcular (2.1) o, en los demás casos, cuando la resolución del asunto presente interés casacional, debiendo fundarse en infracción de normas del Derecho civil aragonés.

SEGUNDO.- Se pusieron de manifiesto en la providencia de 19 de octubre de 2016 transcrita en los antecedentes las posibles causas de inadmisión en relación con:

a).- La vía de acceso al recurso de casación.

Afirma la parte recurrente en su escrito de alegaciones a la providencia que, a pesar de la falta de concreción en el escrito de recurso, se quería referir a la inexistencia de doctrina del TSJ de Aragón sobre la aplicación de la legítima cuando se producen malos tratos de los legitimarios hacia su progenitor, en base a pruebas sobre unos hechos que no han sido valorados en su justo término.

No tiene en cuenta el recurrente que el fundamento principal de la sentencia recurrida para desestimar el recurso de apelación no es lo relativo a los malos tratos sino a la existencia de *animus donandi* en el causante para defraudar los derechos de los legitimarios, lo que llevó a la anulación de las donaciones por causa ilícita. Además, pretende que la doctrina de la Sala se centre en los supuestos malos tratos por no haber sido valorados "*en su justo término*", pero no ha interpuesto recurso por infracción procesal para la revisión de la valoración de la prueba, por lo que en ningún caso cabe que la sentencia examine tal cuestión, ni puede ser ése el interés casacional que permita el acceso al recurso de casación.

Concurre por ello el motivo de inadmisión previsto en el artículo 483.2.2º en relación con el artículo 481.1 y el 481.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

b).- En relación con el primer motivo del recurso de casación afirma la parte recurrente en el escrito de alegaciones que se excedió en la cita de normas de derecho común y que se debería valorar el mal trato psicológico como asimilable al mal trato de obra que debe conducir a la desheredación de quien los causa.

Nuevamente, además de incidir en cuestiones de prueba, no tiene en cuenta que el motivo de la sentencia recurrida para la anulación de las donaciones del causante no es lo relativo a los malos tratos sino la causa ilícita de tales disposiciones.

Por ello, incurre en causa de inadmisibilidad del artículo 483.2.2º, en relación con el artículo 477.1 LEC.

c).- Respecto al segundo motivo del recurso de casación: Aclara el recurrente en su escrito de alegaciones que pretende salvar el 50% de los bienes donados por no haberse aplicado las normas sobre la legítima, volviendo nuevamente sobre los malos tratos de los hijos del causante.

Ha de insistirse en que lo resuelto en la sentencia recurrida no versa sobre la posible infracción cuantitativa de la legítima sino en la nulidad, no inoficiosidad, de las donaciones del causante.

Incurre por ello en causa de inadmisibilidad del artículo 483.2.2º, en relación con el artículo 477.1 LEC.””

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 16 de noviembre de 2016. Recurso de casación. Infracción de normas heterogéneas. Falta de concreción del interés casacional. Revisión de la valoración de los medios de prueba**

"PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 484.1 LEC, en el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo.

Presentado recurso de casación contra sentencia dictada por órgano judicial con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón, con fundamento en infracción de normas del Derecho civil aragonés (artículos 80.2 y 80.4 del Código del Derecho Foral de Aragón), la competencia para su conocimiento corresponde a esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, en relación con el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 478.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Conforme a lo previsto en los artículos 1, 2.1 y 2.2 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, la resolución es susceptible de recurso de casación, en los términos indicados también en el párrafo segundo anterior, cuando la cuantía exceda de 3.000 euros o sea imposible de calcular (2.1) o, en los demás casos, cuando la resolución del asunto presente interés casacional, debiendo fundarse en infracción de normas del Derecho civil aragonés.

SEGUNDO.- Como se expuso en la providencia de 19 de octubre de 2016, en el primer motivo del recurso de casación se alegaba infracción de normas heterogéneas, como principios de carácter general, error en la valoración de la prueba y normas sustantivas, lo que incumpliría la necesaria separación de unas y otras infracciones en los distintos motivos, bien de infracción procesal o bien de casación.

En su escrito de contestación, que contiene una sola alegación para responder a las objeciones presentadas a los tres motivos del recurso, incide el recurrente en el mismo defecto, que centra en el artículo 80.4 del CDFA sobre los criterios relativos a la no separación de hermanos.

Concurre por ello el motivo de inadmisión previsto en el artículo 483.2.2º en relación con el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- Respecto al motivo segundo del recurso, se ponía de manifiesto que el recurrente ignoraba la valoración de la prueba sobre los motivos de la sentencia recurrida para atribuir la custodia de la menor al padre. En el escrito de alegaciones se reproduce alguna sentencia del Tribunal Supremo en la que, precisamente, se incide en que la revisión de la valoración de los medios de prueba solo cabe por la vía del correspondiente motivo de infracción procesal, que no ha sido propuesto por la parte recurrente.

Y nuevamente insiste en combatir la conclusión de la sentencia recurrida en relación con el artículo 80.4 CDFA, precisamente para justificar la conveniencia de la custodia conferida al padre al margen de que ello implique la separación de hermanos, en este caso de un solo vínculo, lo que no implica discriminación alguna, frente a lo que parece sugerir el recurrente.

Concurre igualmente el motivo de inadmisión previsto en el artículo 483.2.2º en relación con el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CUARTO.- En relación con el motivo tercero, como se dijo en la providencia se reproducían los juicios de valor de la parte recurrente sobre la valoración de la prueba para justificar su propia interpretación de los apartados 2 y 4 del artículo 80, y así lo reproduce en su escrito de alegaciones.

Por ello, concurre igualmente el motivo de inadmisión del artículo 483.2.2º en relación con el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 21 de noviembre de 2016. Recurso de casación. Interés casacional por falta de doctrina jurisprudencial sobre una norma con menos de cinco años en vigor. Fijación del concreto importe de la pensión alimenticia**

"PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considera competente, sobre la admisibilidad del mismo, según dispone el artículo 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo que se refiere al primer extremo, no ofrece duda la competencia de este órgano jurisdiccional, pues a tenor del artículo 478, núm. 1º, párrafo 2º, de la mentada Ley procesal, corresponde "a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales Civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad", y examinado el escrito de interposición vemos que en él se denuncia infracción de los arts. 82.1 y 2 y 79.1 del Código de Derecho Foral de Aragón.

SEGUNDO.- Vía de acceso al recurso de casación.

Tal como se indicó en la providencia de fecha 21 de octubre de 2016, en el recurso interpuesto se alega que no existe doctrina jurisprudencial de esta Sala en aplicación del art. 82. 1 y 2 CDFA.

Como se ha indicado en la providencia, el art. 3.3 de la Ley 4/2005 sobre la casación foral aragonesa exige, para entender que existe interés casacional por falta de doctrina jurisprudencial sobre una norma, que ésta no lleve más de cinco años en vigor, situación que no concurren en el presente caso, puesto que el actual art. 82.1 y 2 CDFA venía recogido, con idéntica redacción, en la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad de las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres (BOE 22 junio de 2010), que se integró en el CDFA. Y lo mismo cabe decir del actual art. 79.1 CDFA.

Por ello, concurre el motivo de inadmisión previsto en el art. 483.2.2º y 3º LEC, en relación con el art. 481.1 y 3 del mismo texto legal.

TERCERO.- Motivo del recurso de casación.

Como fundamento del recurso de casación el recurrente entiende infringido el art. 82, números 1 y 2 CDFA, por considerar que la pensión de alimentos fijada no se corresponde con sus ingresos y situación económica.

Esta Sala ya ha establecido reiteradamente, con referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas su sentencia nº 721/2011, de 28 de octubre de 2011, recurso 926/2010), referida al principio de proporcionalidad del artículo 146 del Código civil, que *"corresponde a los tribunales que resuelven las instancias y no debe entrar en él el*

Tribunal Supremo a no ser que se haya vulnerado claramente el mismo o no se haya razonado lógicamente con arreglo a la regla del art. 146, de modo que la fijación de la entidad económica de la pensión y la integración de los gastos que se incluyen en la misma, entra de lleno en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que constituye materia reservada al Tribunal de instancia, y por consiguiente, no puede ser objeto del recurso de casación".

Y ese mismo criterio ha de seguirse en la interpretación del artículo 82.1 y 2 del CDFA, sin que pueda el recurrente sustituir el criterio judicial por el propio. Así se recoge, entre otras, en la STSJA de 20 de abril de 2016 (recurso de casación 63/2015). En el presente caso se considera que la fijación del concreto importe de la pensión de alimentos a favor de los hijos menores efectuado por la Audiencia Provincial no debe ser objeto de una nueva valoración en casación, puesto que no se aprecia que la resolución recurrida sea ilógica o arbitraria, supuestos en los que se entendería vulnerado el precepto."

*** **Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 23 de noviembre de 2016. Recurso de casación. Falta de indicación de la vía casacional. Falta de razonable claridad expositiva. Discusión de la conclusión fáctica**

"PRIMERO.- Cinco fueron las posibles causas de inadmisión que señalamos en la providencia de 3 de noviembre de 2016.

La primera ellas, que el recurso no indicaba qué concreta vía casacional de las contempladas en el art. 2 L 4/2005, sobre casación foral aragonesa, hacía valer, pues nada indicaba al respecto el escrito de interposición.

De acuerdo con lo previsto en el art. 481 LEC, el escrito de interposición ha de expresar el supuesto, de los previstos en el art. 477.2 LEC conforme al que se pretende recurrir la sentencia. El incumplimiento de dicha exigencia supone el de los requisitos que ha de observar el escrito de interposición que el art. 483.2 LEC establece como una de las causas de inadmisibilidad (ATS de 23 de abril de 2013 Recurso: 161/2012), y tal defecto no es subsanable en el trámite establecido en el art. 483.3 LEC, como ha indicado, entre otros muchos, el ATS de a 28 de enero de 2015 dictado en el RC 562/2014.

La subsanación del defecto puesto de manifiesto es lo que pretende el recurrente en sus alegaciones, en las que dice que interpone el recurso por interés casacional con fundamento en que *la jurisprudencia del TSJ tiene extraordinaria importancia en la tarea de revitalizar nuestro Derecho civil aragonés y complementarlo*, y más adelante, que la sentencia de segunda instancia *se opone a la doctrina jurisprudencial de esta Sala del TSJ de Aragón y resuelve cuestiones sobra las que existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.*

Lo dicho conduciría ya a estimar la concurrencia de esta primera causa de inadmisión por la falte inicial de la indicación de la vía casacional, pero es que además, tampoco en sus alegaciones indica el apelante con claridad cual de los tres posibles supuestos establecidos en el art. 3 L 4/2005 es el que pretende hacer valer, y lo razonado en el desarrollo del recurso tampoco evidencia que concurra ninguno de ellos, pues se limita a citar por su fecha 5 sentencias de esta Sala a las que atribuye la decisión de que la asignación compensatoria en disputa *no tiene en lo sustancial una naturaleza y finalidad diferente a la señalada por el art. 97 CC*, para a continuación mencionar diferentes SSTS que tratan sobre la pensión compensatoria, y sentencias de las AA de Córdoba, Valladolid y Orense en las que se hace aplicación del mismo precepto.

Esto es, ni se indica con precisión las resoluciones que podrían haber sido infringidas, ni se expone la doctrina sentada en ellas que haya sido contradicha por otra contraria acogida en la sentencia de primer grado.

Por ello ha de ser estimado que procede la inadmisión por esta causa.

SEGUNDO.- Lo mismo cabe decir de las causas 2 y 3.

Los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, se hallan sometidos a ciertas exigencias formales que se traducen, entre otras, en la necesidad de indicar con claridad y precisión la norma que se pretende infringida y en la imposibilidad de acumular por acarreo argumentos inconexos determinantes de la falta de la razonable claridad expositiva para permitir la individualización del problema jurídico planteado (en este sentido, sentencias núm. 965/2011, de 28 de diciembre, 957/2011, de 11 enero de 2012 , 185/2012, de 28 de marzo y 557/2012, de 1 de octubre), y todo ello articulado en un solo posible motivo de casación que acoge nuestro derecho en el art. 477.1 LEC, *la infracción de normas jurídicas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso.*

Pese a ello, el recurrente interpone el recurso mediante un escrito que no se halla articulado en motivos en los que se indique con claridad cual es la norma jurídica infringida y la razón de por qué se entiende que lo ha sido, por el contrario, en el se expresan diversas alegaciones en las que se mezclan cuestiones de hecho y de derecho y se cita doctrina sentada por los más variados tribunales como son el TS y diversas AAPP radicadas fuera de esta Comunidad Autónoma.

Procede la inadmisión por esta causa

TERCERO.- Tampoco han sido desvirtuadas, sino que se incide de nuevo en la falta, las causas que enumeramos como 4 y 5.

El recurso de casación no admite el desconocimiento de los hechos que han sido declarados en la instancia sin haberlos impugnado por vía adecuada de la infracción procesal, así se ha dicho en multitud de resoluciones, como son los AATS de 4 de febrero de 2014, Rec 3255/2012, o 8 de octubre de 2013, Rec 22/2013, el último de los cuales razona:

> <<El motivo segundo incurre en la causa de inadmisión de falta de respeto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida, al fundarse explícitamente en hechos distintos a los declarados probados... (art. 483.2.2º LEC , en relación con el art. 477.1 LEC)>>.

Pese a ello, la mayor parte de las alegaciones vertidas en el recurso de casación se hallan dirigidas precisamente a discutir la conclusión fáctica alcanzada por la sala en orden a determinar la capacidad económica del recurrente.

Procede la inadmisión por esta causa."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de noviembre de 2016. Recurso de casación. Infracción de preceptos no propios de derecho civil especial de Aragón. Falta de competencia**

"PRIMERO.- Con carácter previo a decidir sobre la admisión del recurso de casación presentado debe valorarse la posible competencia propia de esta Sala para resolver sobre la impugnación formulada para, cabe adelantarlo ahora, concluir que resulta incompetente este órgano judicial para decidir cualquier cuestión relativa al recurso presentado, por las razones que a continuación se expondrán.

La competencia de la Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia para conocer de los recursos de casación les viene atribuida por el artículo 73.1.a) la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en relación con el artículo 478.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y artículo 1 de la Ley de Aragón 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa) en los casos en que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas de Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad.

Pues bien, en el presente caso, la sentencia recurrida fundamentó su decisión en las previsiones contenidas en los artículos 146, 1319 y 1362 del Código Civil, y el recurrente en la regulación del artículo 146 del mismo Código Civil. De modo que esta ausente cita de precepto alguno propio del derecho civil especial de la Comunidad Autónoma de Aragón que haya sido aplicado o que se considere infringido por la parte.

En consecuencia con tal falta de alegación de haber sido vulnerado precepto propio del derecho aragonés, debe concluirse que, conforme resulta de las normas arriba citadas, carece de competencia esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para resolver la cuestión, lo que debe declararse así, con la consecuencia inmediata de no proceder que esta Sala dicte acuerdo alguno relativo a posible admisión o no del recurso de casación o a la designación de Abogado y Procurador por turno de oficio pretendida por el recurrente.

SEGUNDO: En el caso de que concurran los presupuestos necesarios para que pueda ser presentado recurso de casación, la competencia para conocer de él corresponderá al Tribunal Supremo, por lo que procede acordar la devolución del procedimiento al órgano judicial que dictó la sentencia impugnada, ante el cual la parte dispondrá del plazo de cinco días indicado por el artículo 62.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y contado desde la notificación de la presente, para poder presentar en forma el recurso de casación, si a su derecho conviniera."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 12 de diciembre de 2016. Recurso de casación. Falta de claridad del interés casacional. Inadmisión consiguiente recurso por infracción procesal**

"PRIMERO.- Como ya se indicó en la providencia dictada el día 24 de octubre de 2016, la parte recurrente no expone si la razón de amparar el recurso en el interés casacional se fundamenta en la falta de doctrina de este Tribunal o en la contradicción de la ya fijada. En su escrito de alegaciones no es aclarada tal cuestión, pues en él se limita el recurrente a indicar que el interés casacional pretendido se basa en una pretensión de "declarar el derecho en aras de la justicia de los casos futuros, como en el presente caso". Y, tras la reproducción parcial de una sentencia de esta Sala, concluye haciendo manifestación sobre si las conclusiones de la sentencia recurrida son distintas de lo acreditado y probado en los documentos y declaraciones de los demandados-recurrentes.

Queda, por tanto, incólume la apreciación que se hizo en la providencia de referencia, pues no se concreta la base del interés casacional alegado, además de hacerse luego referencia extemporánea a cuestiones probatorias que no son objeto del recurso de casación que recoge el artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- En la misma providencia se indicó que el recurso era confuso, sin que sobre esta cuestión exponga el escrito de alegaciones manifestación alguna. En consecuencia con ello, queda sin aclararse si el motivo de recurso de casación es lo indicado por la parte en el sexto de los antecedentes del escrito de recurso o si es que finalmente no interpone tal recurso, ya que, al exponer los motivos, se refieren sólo al de infracción procesal, en el que, por demás, se hace referencia a una sentencia distinta de la ahora recurrida.

TERCERO.- En consecuencia con lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 483.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la inadmisión a trámite del recurso de casación formulado, lo que conlleva también la inadmisión del recurso por infracción procesal también interpuesto, y consiguiente declaración de firmeza de la sentencia recurrida."

***** Auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 21 de diciembre de 2016. Recurso de casación. Pretensión de nueva valoración probatoria. Recurso por infracción procesal. Motivación de la sentencia**

"PRIMERO.- Respecto del recurso de casación.

1.- En relación al primer motivo de casación, en el que se estima infringido en el art. 80.6 CDFA, la parte recurrente sigue insistiendo en sus alegaciones en que el procedimiento penal no termina hasta que se produce la extinción de la pena. Como ya se indicó en la providencia, la doctrina de esta Sala, recogida, entre otras, en la sentencia de 2 de julio de 2013 (recurso de casación 7/2013), en atención a la propia redacción del precepto, limita la aplicación del mismo a los procesos pendientes en los que no ha recaído sentencia, puesto que, cuando se dicta ésta, corresponde al juez penal decidir sobre las medidas más adecuadas en interés del menor.

2.- Respecto del segundo motivo de casación, que afirma la vulneración del art. 80.2 CDFA, debe inadmitirse por pretender una nueva valoración probatoria.

Como señala el Ministerio Fiscal en sus alegaciones, la sentencia recurrida realiza una valoración conjunta de la prueba y de las circunstancias de hecho concurrentes en los litigantes y en sus hijos para entender que la custodia compartida es el régimen más conveniente para el interés de los hijos menores. Esta valoración no puede ser desvirtuada mediante un examen parcial de alguna circunstancia valorada de forma diferente por el recurrente.

SEGUNDO.- Respecto del recurso por infracción procesal.

En primer lugar, debe indicarse que la falta de admisión del recurso de casación aboca a la inadmisión del recurso por infracción procesal en todo caso, puesto que para la admisión de este último es requisito indispensable la interposición y admisión del primero, conforme dispone la disposición final decimosexta 1.5ª LEC, que no admite el recurso por infracción procesal en solitario.

A mayor abundamiento, y en relación al primer motivo del recurso, fundado en el art. 218.2 LEC, por entender que la sentencia ha infringido el deber de motivación, es menester reproducir lo ya expuesto en la providencia señalando las posibles causas de inadmisión, puesto que la sentencia no puede calificarse de inmotivada.

En el segundo motivo también se alega la infracción del art. 218.2 LEC por falta de motivación. Como ya se ha indicado, la sentencia recurrida está suficientemente motivada. Más bien, a través de este motivo la parte recurrente pretende realizar una nueva valoración probatoria. Esta pretensión debe ser rechazada puesto que, en modo alguno, la valoración probatoria efectuada en sentencia puede calificarse como ilógica, absurda o arbitraria."

2.2. Interpretación doctrinal

En este apartado damos noticia de los libros y artículos de los que hemos tenido conocimiento a lo largo del año 2016:

A Obras generales, manuales, panorámicas y revistas

1. Manuales y obras generales de Derecho aragonés

SERRANO GARCÍA, José Antonio y BAYOD LÓPEZ, Mª del Carmen: *Lecciones de Derecho civil: Familia*, Kronos Editorial, Zaragoza, Septiembre 2016, 547 págs.

SERRANO GARCÍA, José Antonio y BAYOD LÓPEZ, Mª del Carmen: *Lecciones de Derecho civil: Sucesiones por causa de muerte*, Kronos Editorial, Zaragoza, Noviembre 2016, 436 págs.

2. Manuales y obras generales de Derecho foral

URRUTIA BADIOLA, Andrés M. (Director/Coordinador): *La Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho civil vasco. Comentarios breves, texto de la Ley, antecedentes legislativos y formulario notarial*. Academia Vasca de Derecho y Dykinson, Bilbao, 2016, 551 págs.

VV.AA.: *El Derecho Civil Vasco del siglo XXI. De la Ley de 2015 a sus desarrollos futuros*. Jornadas celebradas en Bilbao los días 2 y 3 de noviembre de 2015. Edita el Parlamento Vasco. Colección de informes y documentos. Serie Maior. Bilbao, 2016, 775 páginas.

GALICIA AIZPURUA, Gorka (Coord.) y GIL RODRÍGUEZ, Jacinto (Dir.): *Manual de Derecho civil vasco*. Atelier, 2016, 446 págs.

3. Panorámicas

DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús: "Presente y futuro del Derecho aragonés. El Derecho civil", en VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 21 a 41.

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Lorenzo: "Presente y futuro del Derecho público aragonés", en VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 43 a 57.

4. Revistas

VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, 338 págs.

Sesión I: Sesión extraordinaria con motivo del 25 aniversario del Foro de Derecho Aragonés. Homenaje a los hispanistas suecos estudiosos de los Fueros: Gunnar Tilander y Max Gorosch (ponentes: José Antonio Escudero López y Antonio Pérez Martín);

Sesión II: 25 años del Foro de Derecho Aragonés: presente y futuro del Derecho aragonés (ponentes: Jesús Delgado Echeverría y Lorenzo Martín-Retortillo Baquer; colaborador: Jesús Morales Arrizabalaga);

Sesión III: Espacios naturales protegidos: ¿oportunidad o limitación de derechos? (ponente: María Martínez Martínez; coponentes: Joaquín Guerrero Peyrona y Santiago Pablo Munilla López);

Sesión IV: Reglamento sucesorio europeo y Derecho interregional (ponente: Francisco de Paula Puig Blanes; coponentes: Juan María Díaz Fraile y José Javier Pérez Milla);

Sesión V: Seguros de vida, fondos de pensiones e instrumentos de previsión en el régimen económico matrimonial y la sucesión por causa de muerte (ponente: Luis Alberto Marco Arcalá; coponentes: Fernando Félix Alonso Andrío y José Antonio Montón del Hoyo).

B Monografías y artículos

1. Temas comunes a todos los Derechos forales

1.1. La codificación civil y los Derechos forales.

FERRER VANRELL, María Pilar: "La codificación civil y la llamada "cuestión foral" en Baleares". Discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares. *Boletín de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Islas Baleares*, núm. 13, 2012, pags. 85-181.

1.2. La codificación de los Derechos forales.

"Congresos de Derecho Gallego. Conclusiones", incluidas en el Libro de los *250 años del Colegio Provincial de abogados de A Coruña*, editado por el propio Colegio en 2010, págs. 302 a 380.

1.3. Problemas de Derecho interregional

DÍAZ FRAILE, Juan María: "El certificado sucesorio europeo. Especial referencia a sus efectos y a su condición de título inscribible en el Registro de la Propiedad", en VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 173 a 195.

PÉREZ MILLA, José Javier: "El Reglamento 650/2012, de 4 de julio de 2012, y los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente entre territorios españoles", en VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 197 a 232.

PUIG BLANES, Francisco de Paula: "Cuestiones esenciales que plantea en la práctica el Reglamento 650/2012 con especial referencia al Derecho interregional", en VV.AA.: *Actas*

del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 127 a 172.

PUIG BLANES, Francisco de Paula: *Crisis de familias trasnacionacionales y Derecho civil de Aragón: ideas esenciales*. Nún. 56 de la Colección El Justicia de Aragón. Zaragoza, 2016, 222 págs.

2. Estudios de fuentes e historia del Derecho e instituciones del Reino de Aragón

MORALES ARRIZABALAGA, Jesús: "La renovación de los estudios sobre el Derecho aragonés histórico después de Tilander", en VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 59 a 68.

MORALES ARRIZABALAGA, Jesús: *Pacto, Fuero y libertades. El estilo de gobierno del reino de Aragón, su mitificación y uso en narraciones constitucionales.* Derebook, Zaragoza, 2016, 142 págs.

3. Aragón: desde los Decretos de Nueva Planta hasta el momento presente

DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús: "*Las comisiones de Derecho civil. La experiencia aragonesa*", en VV.AA.: *El Derecho Civil Vasco del siglo XXI. De la Ley de 2015 a sus desarrollos futuros*. Jornadas celebradas en Bilbao los días 2 y 3 de noviembre de 2015. Edita el Parlamento Vasco. Colección de informes y documentos. Serie Maior. Bilbao, 2016, págs. 609 a 639 (= en *RDCA*, 2015-2016).

VICENTE Y GUERRERO, Guillermo: "*Sobre la cobertura doctrinal que posibilitó la revisión de la nueva planta en Aragón. La Crisis legal de Franco de Villalba"*, Estudio Preliminar a la edición de la *Crisis legal*, bajo la dirección del autor, por el Justicia de Aragón, en Zaragoza el año 2016, págs. 7 a 28.

4. Persona y familia

4.1. Relaciones entre ascendientes y descendientes

AREGO CASADEMUND, Luis Ignacio: "*Argumentos legales y jurisprudenciales para demandar la custodia compartida según el Código Civil, tras la anulación de la Ley Valenciana de custodia compartida*", en Diario La Ley, Nº 8885, 2016.

AYERRA MICHELENA, Kepa: *Derecho civil vasco de familia. Comentario crítico a la ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores*. Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2016, 455 págs.

GETE-ALONSO Y CALERA, María del Carmen y SOLÉ RESINA, Judith: *Custodia compartida. Derechos de los hijos y de los padres*. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, 508 págs.

GÓMEZ MEGÍAS, Ana María: "*La doctrina del TS sobre guarda y custodia compartida: sentencias clave*", en *Diario La Ley*, Nº 8734, 1, 2016.

LACRUZ MANTECÓN, Miguel L.: *Convivencia de padres e hijos mayores de edad*. Ed. Reus, Monografías de la Colección Jurídica General, Madrid, 2016, 303 págs.

4.2. Régimen económico conyugal

ALONSO ANDRÍO, Fernando Félix: "*Seguros de vida, fondos de pensiones e instrumentos de previsión en el régimen económico matrimonial y la sucesión por causa de muerte*", en VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 295 a 310.

MARCO ARCALÁ, Luis Alberto: "*Seguros de vida, fondos de pensiones e instrumentos de previsión en el régimen económico matrimonial y la sucesión por causa de muerte*", en VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 21 a 41.

MONTÓN DEL HOYO, José Antonio: "*Seguros de vida, fondos de pensiones e instrumentos de previsión en el régimen económico matrimonial y la sucesión por causa de muerte. Cuestiones relativas a su tributación*", en VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 311 a 326.

4.3. Viudedad

CALATAYUD SIERRA, Adolfo: *El derecho expectante de viudedad: su necesaria reconsideración*. Discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación leído el día 28 de junio de 2016 y contestación al mismo de Elena Zabalo Escudero. Depósito Legal: Z 900-2016. 143 págs.

5. Derecho de bienes

5.1. Derecho de bienes en general

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María: *Espacios naturales protegidos: ¿Oportunidad o limitación de derechos?*, en VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 71 a 98.

C Obras auxiliares

1. Juristas y escritores

ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio: "*Gunnar Tilander y Max Gorosch*", en VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 7-12.

PÉREZ MARTÍN, Antonio: "*Gunnar Tilander y Max Gorosch*", en VV.AA.: *Actas del los XXV Encuentros del Foro de Derecho Aragonés* (Zaragoza-Teruel, 2015), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, págs. 13-17.

2. Ediciones de formularios y documentos de aplicación del Derecho.

GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, *Antología de documentos de Derecho civil histórico aragonés (1423-1798)*, Núm. 57 de la Colección El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2016, 253 págs.

LÓPEZ SUSÍN, José Ignacio, MAZANA PUYOL, Javier y MARTÍNEZ TOMEY, Miguel: *Formularios de escrituras notariales en castellano y aragonés según el Código del Derecho Foral de Aragón*, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2015, 147 págs.

LÓPEZ SUSÍN, José Ignacio: "*Lengua y escrituras notariales en Aragón, un viaje de ida y vuelta*", en LÓPEZ SUSÍN, José Ignacio, MAZANA PUYOL, Javier y MARTÍNEZ TOMEY, Miguel: *Formularios de escrituras notariales en castellano y aragonés según el Código del Derecho Foral de Aragón*, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2015, págs. 1 a 25.

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS

El examen del estado de aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico-público aragonés se realiza en este Informe especial a través del examen de la situación de los problemas de constitucionalidad que afectan a normas aragonesas o a normas estatales por relación con las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía (punto 1 del Informe) y del análisis de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en las que se aborda la adecuación al ordenamiento jurídico de normas de derecho público aragonés, objeto propio de estudio en este apartado.

Finalmente, en un epígrafe específico se da noticia de los libros y artículos sobre Derecho Público aragonés de que hemos tenido conocimiento durante 2016.

1. SENTENCIAS DICTADAS DURANTE 2016 EN LAS QUE SE DECLARA LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE NORMAS DE DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS

Se realiza una reseña de diferentes resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en las que se ha suscitado por vía directa o indirecta el estudio de adecuación a derecho de normas aragonesas y en las que se ha concluido con su anulación.

1.- Tribunal Superior de Justicia de Aragón, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Sentencia núm. 210/2016, de 28 de abril.

Suelo y ordenación urbana: Acuerdo del Ayuntamiento de Jaca, de 16-01-2016, por el que se aprueba con carácter definitivo la modificación del plan parcial del sector de suelo urbanizable "Badagüás I" y por el que se modifica el art. III.2.7 de las Ordenanzas del Plan Parcial. Motivos de impugnación: no estar suficientemente motivada la justificación y necesidad de la modificación, no estar basada ésta en el interés general, vulneración del principio de igualdad. Estimación del recurso.

"II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

PRIMERO

El informe del Consejo Provincial de Urbanismo.

Como ha quedado indicado la aprobación de la modificación separándose del informe del Consejo no es un motivo de impugnación. Se explica en demanda, se utilizan sus argumentos para fundar la contrariedad a derecho de la Modificación, pero no se cita como causa de nulidad. Hemos de decir que el propio acuerdo del Consejo indicaba - según la redacción vigente en aquella época la aplicación del art. 78.2.b) de la Ley 3/2009 (LARG 2009, 283) que decía:

2. Las modificaciones se realizarán ordinariamente por el procedimiento aplicable para la aprobación de los correspondientes planes, salvo en el caso del plan general, cuyas modificaciones aisladas se llevarán a cabo, sin perjuicio de lo establecido en los artículos siguientes, conforme al procedimiento regulado en el artículo 57 para los planes parciales de iniciativa municipal, con las siguientes especialidades:

a) La competencia para emitir el informe corresponderá al Consejo de Urbanismo de Aragón, o al Consejo Provincial de Urbanismo, conforme a lo establecido en el artículo 49.1.

b) El informe del órgano autonómico competente, comunicado dentro de plazo, será vinculante para el municipio.

Por tanto es claro que en aquél momento el municipio, cualquiera que fuera su población, pues la norma era una especialidad del procedimiento ordinario de informe, debía seguir el informe que era vinculante, al haber sido resuelto en plazo.

Pero reiteramos no es un motivo de impugnación y además la norma fue reformada estableciendo un procedimiento distinto en los apartados 2 y 3 del art. 78 por la Ley autonómica 4/2013, de 23 de mayo (LARG 2013, 200), por lo que nada debemos indicar al respecto.

SEGUNDO

El control de la potestad de planeamiento urbanístico.

Este Tribunal tiene reiteradamente dicho (por todas STSJ AR de 29 de marzo de 2012 (PROV 2012, 147481) -373/2012[sic]-): Y es que, en efecto, es incuestionable que la Administración en el ejercicio de sus facultades de planificación urbanística, tanto en la formulación de los Planes de Ordenación como en su revisión o modificación ostenta la prerrogativa del "ius variandi", prerrogativa que, como declara el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de junio de 1998 (RJ 1998, 5433) "concede a la Administración una libertad de actuación normativa que desde luego, no puede cubrir una actuación arbitraria o carente de lógica, puesto que como bien sabemos tal libertad o facultad discrecional es el instrumento que ha de encauzar del modo más perfecto posible el logro de la satisfacción del interés general o público, que en definitiva es el elemento legitimador del ejercicio de esa discrecionalidad, y siempre en armonía con los intereses de los particulares de modo que, éstos se vean afectados negativamente en la menor medida de lo posible dentro de ese contexto de la prevalencia del interés general". Siendo reiterada la doctrina jurisprudencial, de la que son exponentes las sentencias de 27 de febrero de 1997 (RJ 1997, 1297) y 19 de mayo de 1998 (RJ 1998, 3855) , que afirma que "en el ejercicio del "ius variandi", que compete a la Administración urbanística en la ordenación del suelo, es materia en la que actúa discrecionalmente, que no arbitrariamente y siempre con observancia de los principios contenidos en el artículo 103 de la Constitución (RCL 1978, 2836) ; de tal suerte que el éxito alegatorio argumental, frente al ejercicio de tal potestad en casos concretos y determinados, tienen que basarse en una clara actividad probatoria que deje bien acreditado que la Administración ha incurrido en error, o al margen de la discrecionalidad, o con alejamiento de los intereses generales a que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad, o la estabilidad, o la seguridad jurídica, o con desviación de poder o falta de motivación en la toma de sus decisiones". Afirmándose en la más reciente de 30 de noviembre de 2011 que las potestades urbanísticas de planeamiento "se caracterizan, en todo caso, como

potestades discrecionales que permiten un margen de apreciación por la Administración y que requiere, para no ser calificado su ejercicio como arbitrario, que se efectúe de modo motivado, consecuentemente con el deber de la Administración de explicar formalmente el contenido de su actividad que favorece su fiscalización en Derecho por los Tribunales de Justicia y en aras a satisfacer el interés general para velar por los bienes e intereses subyacentes en los artículos 47 y 103 de la Constitución .

En este caso el Tribunal a la vista de la Memoria e informes considera que no está suficientemente motivada la justificación y necesidad de la modificación del Plan Parcial y que no está basado en el interés general y que puede ser contrario al principio de igualdad.

La única justificación que se establece en el expediente para la modificación del Plan Parcial que en resumen otorga para cerrar terrazas y patios (cuerpos volados) y para construir elementos auxiliares un 10 % más de edificabilidad y ocupación, que han existido peticiones para legalizar o regularizar este tipo de construcciones cuando el promotor había agotado la edificabilidad y que se trata de una petición sin incidencia urbanística, de microurbanismo, se califica en la contestación a la demanda.

Pues bien la Sala entiende que en absoluto es justificable la modificación de la Ordenanza del Plan Parcial que es objeto de recurso. El mero hecho de que existan construcciones ya realizadas y de que algunos propietarios, -en el expediente constan dos peticiones- quieran hacerlas no justifica que exista motivo para modificar la Ordenanza. La mera voluntad de los propietarios en cerrar porches y terrazas no puede justificar la aprobación de una norma que modifica el cómputo de edificabilidad. El hecho de que el promotor agotase la edificabilidad, -como por otra parte ocurre en prácticamente la totalidad de las promociones privadas, por un mero sentido comercial-, tampoco justifica que con posterioridad haya que dar la posibilidad de edificar un 10 % más de lo que prevé el Plan General. Fundadamente porque no se ha indicado siquiera cual es la razón relevante para ello, no existe un motivo fundado que haga necesaria esa modificación. Y desde luego este motivo no puede ser que el promotor no haya previsto cubrir patios o hacer construcciones auxiliares, dentro del techo edificable.

No hay por tanto -o no se ha acreditado- interés general en la justificación. Desde luego no lo es, como se dice en el expediente, la mera toma del acuerdo político, por los concejales. Que haya sido acordado por la Corporación no lo convierte en interés general.

Por otro lado hay un evidente y no justificado trato desigual al aprobar esta modificación. No se justifica en el expediente porqué ha de incrementarse la edificabilidad en un 10 % en esta Urbanización y no en otras. Desde luego no puede ser justificarse en las edificaciones en rehabilitación o en edificios en el casco consolidado -como se dice en el expediente- que tienen otras necesidades evidentemente distintas. Existen otras muchas urbanizaciones -de similar tipología que la del Plan Parcial impugnado- que también podrían legítimamente suscitar ese incremento de edificabilidad. La única justificación expresa es la magnitud, justificación que parece volverse en contra del que la esgrime, pues cuanto mayor es la edificabilidad otorgada,

mayor también será el perjuicio a la correcta ordenación urbanística. En este caso según el Consejo hay un aumento de edificabilidad de 11.600 m2, lo que evidentemente no es puede ser calificado de "microurbanismo".

Sin entrar en más consideraciones, procede anular la modificación del Plan Parcial objeto del recurso.

TERCERO

De conformidad a lo dispuesto en el art. 139 de la LRJCA (RCL 1998, 1741), deben imponerse las costas causadas a las demandadas en el proceso, con el límite por todo concepto de 1.500 euros a cada parte demandada.

III. FALLO.

ESTIMAR EL PRESENTE RECURSO Nº 56/2013 Y EN CONSECUENCIA:

PRIMERO

DECLARAR NO SER CONFORME A DERECHO EL ACUERDO PLENARIO OBJETO DEL RECURSO.

SEGUNDO

HACER EXPRESA IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS DEL PRESENTE RECURSO A LAS DEMANDADAS CON EL LÍMITE ALUDIDO.”

2.- Tribunal Superior de Justicia de Aragón, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª (de refuerzo de la 2ª). Sentencia núm. 392/2016, de 22 de septiembre.

Administración Local: personal al servicio de las corporaciones locales: Ayuntamiento de Cuarte de Huerva: proceso selectivo para la provisión definitiva con carácter laboral de tres plazas de limpiador: convocatoria: vulneración del principio de jerarquía normativa: regulación contraria a las normas de carácter básico estatal. Nulidad procedente.

"FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia de 24 de septiembre de 2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Zaragoza , recaída en Procedimiento Abreviado 182/2013, estimó el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno en Aragón contra el Acuerdo de 24 de abril de 2013 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), que había convocado proceso selectivo mediante concurso oposición libre para la cobertura definitiva con carácter laboral fijo de tres plazas de limpiador; y contra el Acuerdo de 10 de junio de 2013 de la misma Junta de Gobierno Local que rechazó el requerimiento de anulación del acuerdo anterior que formuló el 13 de mayo de 2011 la Delegación del Gobierno en Aragón.

Interpusieron recurso de apelación la representación del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y las de los codemandados D. José y Dª Magdalena .

SEGUNDO

La demanda de la Delegación del Gobierno en Aragón, representada y defendida por el Abogado del Estado, había impugnado el proceso selectivo para la provisión definitiva con carácter laboral fijo de tres plazas de limpiador/a a tiempo parcial, convocado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva de 24 de abril de 2013, porque contravenía los artículos 23 de la ley 17/2012, de 27 de diciembre (RCL 2012, 1763 y RCL 2013, 235) , de Presupuestos Generales del Estado para 2013, y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril (RCL 2007, 768) , del Estatuto Básico del Empleado Público (RCL 2015, 1695 y 1838) (EBEP). El primero de los artículos porque impedía que durante el ejercicio 2013 el sector público incorporara nuevo personal con carácter definitivo; y el segundo porque, aunque frente a dicha prohibición se permitía la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo de ejercicios anteriores, como en este caso la del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva del año 2009 (BOPZ de 21 de julio de 2009 ampliada en la publicada por el BOPZ de 1 de septiembre),

ésta habría caducado por el transcurso de tres años según lo previsto en el artículo 70 de la Ley 7/2007 (EBEP).

La sentencia ahora recurrida concreta el objeto de debate en determinar si el plazo de tres años establecido en el artículo 70 del EBEP para la ejecución de las ofertas de empleo público ha de considerarse plazo "esencial", pues si así fuera la convocatoria de las plazas de referencia no podría considerarse ejecución de un proceso selectivo correspondiente a una oferta "vigente" de ejercicios anteriores. Considera que nos encontramos ante un claro plazo esencial, dada la literalidad del artículo 70.1 del EBEP , atendiendo a su interpretación gramatical: "En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años".

Llega a tal conclusión haciendo suyos los argumentos de la sentencia nº 159/2014, de 2 de septiembre de 2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza que, a su vez, acoge los argumentos de la sentencia de 5 de junio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recurso 207/2013 .

Estima la sentencia que la interpretación del artículo 70 del EBEP sostenida por la Abogacía del Estado no es forzada pues es una interpretación literal, acorde con el precepto. Y que la Ley 17/2012, de Presupuestos para 2013, responde a la coyuntura política existente y a competencias exclusivas del Estado sin que, visto lo dispuesto en el artículo 149.1.13 de la Constitución , pueda afirmarse que la actuación administrativa enjuiciada vulnere el acceso a los cargos públicos (artículo 23 CE (RCL 1978, 2836)). Finalmente, distingue entre el plazo para convocar y el plazo para resolver los procesos selectivos, pues las sentencias invocadas por las partes demandadas para argumentar sobre el plazo no esencial de tres años para la ejecución de los procesos se refieren a los ya iniciados cuya ejecución se extiende en el tiempo, pero en el caso enjuiciado se trata del plazo inicial para convocar.

TERCERO

Los recursos de apelación interpuestos por el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y por la representación de las dos personas que accedieron a las plazas convocadas alegan, en lo esencial, que yerra la sentencia en la interpretación del plazo del artículo 70.1 del EBEP (RCL 2015, 1695 y 1838) como esencial, pues resulta contraria al artículo 23.2 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) (derecho fundamental de los ciudadanos de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos).

Argumentan en este sentido que el retraso de la Administración en el desarrollo de los procesos selectivos no puede ir en perjuicio de este derecho fundamental pues, si por el transcurso de los tres años se deja sin efecto la oferta de empleo, resultarían perjudicadas las personas participantes en el proceso y, como en este caso, de quienes superaron el proceso y obtuvieron el correspondiente nombramiento. Este mecanismo de caducidad automática podría ser utilizado de forma torticera por la Administración dejando transcurrir el plazo señalado para convocar, con la consiguiente vulneración del citado derecho fundamental de los ciudadanos.

El mero retraso en el desarrollo de los procesos selectivos no podría tener como consecuencia la pérdida de efecto de los instrumentos de planificación de los recursos humanos, pues el plazo señalado en el artículo 70.1 del EBEP sería un mandato dirigido a la Administración para evitar la dilación excesiva en la ejecución de los procesos selectivos, pero su incumplimiento no puede dar lugar a la anulación de los mismos (sentencia 5376/2011, de 11 de noviembre, de la Audiencia Nacional), impidiendo la cobertura de las plazas vacantes, presupuestadas y ofertadas, lo que resultaría gravoso para los afectados y para los intereses generales al impedirse la culminación de los procesos selectivos y la cobertura de las plazas vacantes.

La representación del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva argumenta también que la OEP del Ayuntamiento del año 2009 no ha sido invalidada y ha surtido plenos efectos, pues sería exigible una expresa declaración de caducidad, y que la prohibición de incorporar personal conforme al artículo 23.1 de la Ley 17/2012 no afectaría a las plazas de personal interino, además de que en el concreto caso de Cuarte de Huerva la cobertura de las plazas de limpiador/a ha supuesto una reducción del gasto público, según el informe emitido por el Interventor del Ayuntamiento, por lo que la verdadera finalidad del recurso estimado no habría sido evitar el incremento del gasto público.

La representación de D. José , además de algunos de los anteriores argumentos, incide en que el plazo del artículo 70.1 del EBEP no sería de caducidad sino un mandato dirigido a la Administración para evitar la dilación indebida de los procesos de selección, pero que, conforme al artículo 63.3 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , su infracción sólo implicaría la anulabilidad cuando lo imponga la naturaleza del término o plazo, lo que no sucede en el presente caso.

La representación de Dª Magdalena insiste en la interpretación del plazo del artículo 70.1 del EBEP como un mandato e indicación del legislador a la Administración, sin que su superación implique la anulabilidad del acto, y argumenta también que la impugnación de la convocatoria del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva resultaba selectiva y, por último, señala los efectos dañosos de la anulación tanto para los trabajadores que superaron el proceso como para el propio Ayuntamiento y los intereses generales por la posible reclamación de responsabilidad patrimonial y la necesidad de contratar los servicios con empresa externa.

Por su parte, la Administración recurrida rechaza que los recursos de apelación se limiten a reproducir los argumentos de la instancia en vez de realizar la crítica de la sentencia impugnada, y se centra en que la convocatoria impugnada vulnera lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 17/2012 , de prohibición de incorporar nuevo personal, salvo excepciones como la del artículo 70.1 del EBEP cuando se trate de ejecución de procesos selectivos de ofertas de empleo público de ejercicios anteriores, que también resultaría infringido pues habría sido excedido el plazo de tres años señalado en el mismo al haberse efectuado la convocatoria transcurrido el mismo, lo que sería distinto al supuesto en que el proceso convocado en plazo se hubiera superado en su desarrollo. El plazo del artículo 70.1 sería, como se deduce de su interpretación literal, improrrogable, y su carácter imperativo ("en todo caso...deberá") lleva a la conclusión de que su incumplimiento no es una mera irregularidad no invalidante sino un supuesto de

anulabilidad. La interpretación lógica y la sistemática llevarían a la misma conclusión.

CUARTO

Según hemos señalado, la impugnación de la convocatoria por la Delegación del Gobierno en Aragón se fundamenta en que la misma infringiría lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 17/2012 que taxativamente dispone: "A lo largo del ejercicio 2013 no se procederá en el sector público delimitado en el artículo anterior...a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de empleo Público de ejercicios anteriores..." .

Y, según la parte actora, la excepción indicada no se daría en el presente caso al tratarse de una convocatoria del año 2013 para la ejecución de la oferta de empleo público del año 2009, por lo que había transcurrido el plazo de tres años señalado en el artículo 70.1 del EBEP (RCL 2015, 1695 y 1838) , conforme al cual: "En todo caso la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años".

La sentencia recurrida hace suyos los razonamientos de la sentencia 159/2014, de 12 de septiembre de 2014, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Zaragoza , en cuanto recogía los argumentos contenidos en la sentencia 380/2014, de 5 de junio (PROV 2014, 216730) , recurso 207/2013, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia .

Dicha sentencia, que resolvió anular las convocatorias de plazas de técnicos en la Universidad de La Coruña, tras la cita literal del artículo 23.1.1 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre (RCL 2012, 1763 y RCL 2013, 235) , de Presupuestos Generales del Estado para 2013, explica la razón de ser de dicho precepto: "En consecuencia, dicho precepto prohíbe con carácter general durante 2013 la incorporación de nuevo personal de administración y servicios en las Universidades, de modo que estarían proscritas las convocatorias de plazas de que trata este litigio. Y ello porque de llevarse a cabo las convocatorias impugnadas se comprometerían directamente fondos públicos, superando las limitaciones presupuestarias comunes a todo el territorio nacional, y no se tendrían en cuenta los criterios de contención del gasto público que emana de aquel artículo 23.1.1 de la Ley 17/2012 ."

A continuación la sentencia del TSJ de Galicia argumenta, como consta transcrito en la sentencia ahora recurrida, que no cabe la ejecución intemporal de las ofertas de empleo público ni al amparo del artículo 18.4 de la Ley 30/1984 (RCL 1984, 2000 , 2317 y 2427) que exigía que se ejecutase la oferta de empleo público en una anualidad, ni al amparo del artículo 70.1 de la Ley 7/2007 (EBEP) que exige su ejecución dentro del plazo improrrogable de tres años.

Más adelante la sentencia del TSJ de Galicia establece una regla de interpretación del artículo 70.1 del EBEP en relación con el artículo 23.1.1 de la Ley 17/2012 : "De otra parte, hay que tener en cuenta que la derivada de la ejecución de procesos selectivos

correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores constituye una norma excepcional en el artículo 23.1.1 de la Ley 17/2012 , y, con arreglo al artículo 4.2 del Código Civil (LEG 1889, 27) , las normas excepcionales no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas, de modo que la excepción de aquel artículo 23.1.1 de la Ley 17/2012 no puede interpretarse de manera que permita cualquier convocatoria de procesos selectivos referidos a plazas comprendidas en OEPs anteriores, porque ello iría en contra del espíritu de la propia norma, que exige la contención del gasto público y por eso está contenida en normativa presupuestaria."

Así pues, la interpretación restrictiva de la norma excepcional impide su aplicación fuera de los supuestos específicamente previstos, en este caso la convocatoria de las plazas en el plazo " improrrogable" de tres años.

Ante la alegación de la autonomía universitaria para justificar la legalidad de las convocatorias, afirma la sentencia, con cita de otra anterior de la misma Sala, nº 863/2013, de 11 de diciembre, que "no puede convertirse en una patente de corso para escapar de cualquier control o supervisión, máxime cuando nos movemos en el marco de normas de carácter básico estatal a tenor de lo previsto en los artículos 149.1.13 y 156.1 del texto constitucional".

Así pues, el punto de partida del artículo 23.1.1 de la Ley 17/2012 , norma de carácter básico estatal como recuerda la sentencia del TSJ de Galicia, sería la prohibición taxativa ("no se procederá...a la incorporación de nuevo personal") al sector público de incorporar nuevo personal a lo largo del ejercicio 2013, salvo que se trate de ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público anteriores. Al margen del examen de las excepciones al que nos referiremos luego, la contravención a dicha prohibición comportaría, sin duda, la anulación de cualquier convocatoria dirigida a la contratación de nuevo personal.

Y para determinar el alcance de la salvedad (que se trate de ejecución de procesos correspondientes a ofertas anteriores), habrá de comprobarse si la convocatoria correspondiente se ajusta a la norma que regula la ejecución de las ofertas de empleo, que es el artículo 70 del EBEP . La Sala del TSJ de Galicia rechaza que se pueda interpretar dicho precepto de manera que permita cualquier convocatoria de procesos referidos a ofertas anteriores "porque ello iría en contra del espíritu de la propia norma, que exige la contención del gasto público y por eso está contenida en norma presupuestaria" . Por ello concluye que "no opera la excepción relativa a la ejecución de procesos selectivos correspondientes a OEPs de ejercicios anteriores, por lo que la aplicación del artículo 23.1.1 de la Ley 17/2012 ha de llevar a la anulación de las convocatorias impugnadas".

Los mismos criterios y la misma conclusión llevan a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Madrid, Sección 7ª, en su sentencia nº 671/2015, recurso 856/2014 , a anular las Órdenes de 28 de abril de 2014 de la Comunidad de Madrid que convocaban pruebas selectivas para el ingreso en distintos cuerpos funcionariales correspondientes a ofertas de empleo público de los años 2005 y 2007. El

núcleo de la cuestión debatida es igual al que ahora nos ocupa, esto es, la consecuencia del incumplimiento del plazo de tres años señalado en el artículo 70 del EBEP , para decidir (fundamento jurídico cuarto) "si se trata (o no) de un plazo esencial para hacer operar la excepción a la prohibición general del artículo 21.1 de la Ley 22/2013 (RCL 2013, 1843 y RCL 2014, 300) , de Presupuestos Generales del Estado para el 2014", que contiene igual prohibición que la Ley 17/2012 para el ejercicio 2013.

La sentencia, en desacuerdo con el argumento de la Comunidad de Madrid sobre la naturaleza del plazo, alegando que no sería de caducidad en aplicación del artículo 63.3 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , dice: " El sintagma «en todo caso», con el que comienza el último inciso del artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público a interpretar, va seguido más adelante de la expresión «plazo improrrogable». El uso correcto del lenguaje -criterio de interpretación gramatical - esto es, el canon de interpretación literal, no nos permite considerar inútil y dejar de lado el especificativo «improrrogable» que cualifica el plazo, reforzada por su aplicación a todos los supuestos denotada por el sintagma inicial. Por el contrario, con la semántica de la frase queda significada la imposibilidad de ejecutar ofertas de empleo una vez extravasado el margen temporal señalado. Y de ahí, la inaplicación de la regla general de que el incumplimiento de los plazos solo constituye una irregularidad no invalidante, que, por lo demás, tiene como excepción los casos en que así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Por tanto, el plazo de tres años, desde la óptica del artículo 63.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común , constituye un plazo esencial.

La consecuencia de esta interpretación literal del artículo 70 del EBEP , que en nuestro caso excepcionaría la aplicación tajante del artículo 23 de la Ley 17/2012 , es la imposibilidad de ejecutar ofertas de empleo una vez trasvasado el margen temporal señalado, porque no cumple el requisito de ser aplicable sólo si cumple todos los requisitos legales expresamente previstos para poder hacer valer la excepción, en particular el plazo de tres años. Y así lo entendemos en nuestro caso pues se ha excedido el plazo que hubiera permitido aplicar la excepción.

La sentencia citada amplía su argumentación sobre el plazo de tres años: No se trata de ponderar, como se pretende por las recurridas, las consecuencias del incumplimiento del plazo con la regla general de validez de los actos administrativos realizados fuera de plazo, sino de subsumir la condición de aplicación del precepto, porque el expresado margen de tres años no tiene el valor de una directriz para evitar la dilación excesiva de los procesos selectivos, sin consecuencias jurídicas anudadas a su incumplimiento, o que la consecuencia fuera la de la responsabilidad de la Administración por funcionamiento anormal."

Y a continuación expone la sentencia que el artículo 18 de la Ley 30/1984 , antecedente del artículo 70 del EBEP , señalaba el plazo del año para celebrar las convocatorias pero no establecía la improrrogabilidad del plazo, lo que permitía ejecutar la oferta más allá de los plazos establecidos. Pero, continúa : " al fijarse ahora un límite temporal en los términos notados debe entenderse que constituye el plazo para el ejercicio de la potestad de convocatoria de las plazas correspondientes, que de no ejercerse invalida

sobrevenidamente la oferta impidiendo que puedan realizarse las convocatorias. No se nos escapa que la intención pretendida a través del inciso examinado, introducido en la tramitación parlamentaria de la Ley, cumple con una finalidad, la de terminar con la temporalidad en el empleo público, pero también es verdad que las ofertas de empleo público determinando las plazas que se pretenden cubrir de modo definitivo obedece a la evaluación de las necesidades de personal, y esa previsión de las necesidades puede perder actualidad porque el transcurso del tiempo influye, desde luego, en las necesidades de recursos humanos, lo que significa, para nuestro caso, que no cabe la ejecución intemporal de las ofertas de empleo público."

La sentencia da respuesta también a la alegación, también efectuada en el caso que nos ocupa, de encontrarse los puestos ocupados por interinos: " Por último, el hecho de que los puestos convocados se encuentren cubiertos casi en su totalidad por personal interino no justifica la provisión de las plazas de modo definitivo con el argumento de que no tendría ningún efecto positivo desde la perspectiva del control del déficit. Por el contrario, el alcance de la prohibición se extiende a todas las formas de ingreso y rige, incluso, para los procesos de consolidación de empleo y es indiferente que los puestos convocados estén ocupados por personal interino porque la existencia de interinos no justifica la provisión de las plazas de modo definitivo y el gasto temporal se convertiría en estructural."

Este argumento, que compartimos igualmente, nos lleva a rechazar la alegación realizada en nuestro asunto por la representación del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. De igual forma, el argumento específico de que la contratación efectuada supone incluso un ahorro para el Ayuntamiento, no atiende a que resulta imposible particularizar en cada caso el resultado económico de una contratación u otra, lo que llevaría a la práctica de pruebas específicas si así se aceptara, pues se trata de contrataciones contrarias a norma básica estatal de control del déficit que no admite otras excepciones que las tasadas, siempre que se cumplan los requisitos que exige la norma excepcional.

La misma Sala y Sección del TSJ de Madrid, en su sentencia nº 193/2016, de 3 de marzo, recurso 268/2014 , anula la convocatoria en Resolución de 28 de mayo de 2012 de plazas de los cuerpos docentes universitarios. Rechaza, en primer lugar, el argumento de la Universidad de que la convocatoria constituía un acto firme y consentido pues no había sido impugnado. Tal argumento ha sido igualmente esgrimido en el caso que nos ocupa por la representación del Ayuntamiento de Cuarte de Hueva.

Admitiendo la razonabilidad de dicho argumento, la Sala del TSJ de Madrid recuerda que el Tribunal Supremo ha admitido en ocasiones la impugnación a través de los actos de aplicación, aun a título de excepción y en aquellos casos en que era evidente la nulidad de algunos de sus extremos o su ilegalidad y trascendencia (STS de 27 de febrero de 2009, casación 9260/2004 , y de 18 de mayo de 2012, casación 3013/2008 , y STC 107/2003).

Señala a continuación que la normativa que nos ocupa ha sido dictada sobre las bases del artículo 149.1.13 ª y 156.1 de la Constitución , teniendo el carácter de norma básica

estatal. Lo que impone comprobar si la convocatoria implica, o no, una quiebra de dichas normas básicas, que establecen reglas con vocación de aplicación uniforme en todo el territorio nacional pues resulta obvio -sigue la sentencia- que la legislación básica del Estado no puede dejar de ser aplicada, de modo que si la expresada convocatoria es nula de pleno derecho, el acto por el que se nombra a una determinada persona será también nulo. Y continúa: "...los preceptos citados no permiten convocar todas las plazas que se tengan por conveniente con tal de que se respete el equilibrio presupuestario, sino que imponen la congelación de la oferta de empleo público toda vez que no se está analizando el estado de las cuentas de la Universidad sino el cumplimiento de una norma básica del Estado, siendo claro que dicha norma básica establece la congelación de la oferta de empleo público...". Se responde así también al argumento del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva sobre la afectación de sus cuentas teniendo en cuenta un tipo u otro de contratación.

La citada sentencia concluye que la convocatoria infringe el principio de jerarquía normativa al efectuar una regulación contraria a unas normas de carácter básico estatal, que no puede dejar de ser aplicada. Y finaliza afirmando que no se puede amparar la legalidad de una actuación en actos plenamente ilegales, encontrándonos ante un supuesto de nulidad absoluta previsto en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992 , aunque no se hubieran recurrido las bases, y esta nulidad de pleno derecho comunica sus efectos a la resolución impugnada y al nombramiento correspondiente.

Estimamos que, conforme a los argumentos y razonamientos expuestos, deben ser desestimados los recursos de apelación y confirmada íntegramente la sentencia recurrida.

QUINTO

No procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional , por considerar que concurren dudas de derecho que justifican su no imposición.

F A L L A M O S

PRIMERO

.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE CUARTE DE HUERVA, D. José y Dª Magdalena contra la sentencia de fecha 24 de septiembre de 2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza , que confirmamos.

SEGUNDO

.- Sin imposición de costas.”

3.- Tribunal Superior de Justicia de Aragón, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Sentencia núm. 45/2016, de 27 de enero.

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES: Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación y Funcionamiento de Infraestructuras Radioeléctricas del Ayuntamiento de Huesca. Regulación de aspectos técnicos de las instalaciones de telecomunicaciones y en materia sanitaria: improcedencia por ser competencia exclusiva del Estado. Exigencia de informe favorable de la Comisión Municipal de Urbanismo: vulneración del principio de competencia y del ordenamiento jurídico: anulación procedente.

"II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

PRIMERO

Nulidad de la Ordenanza al no haber recabado el Ayuntamiento el preceptivo informe sectorial contemplado en el *art. 26 de la Ley General de Telecomunicaciones* **.**

Esta cuestión ha sido resuelta por el F.J. Segundo de la STS de 24 de febrero de 2015 (RJ 2015, 4066) , en la que se resuelve recurso de casación contra Ordenanza similar a la actual, interpuesto por la operadora aquí también recurrente que dice:

Mediante el mismo se impugna la Sentencia en cuanto que confirma los artículos de la Ordenanza que se relacionan a modo de submotivos, y como primer submotivo se impugna la Sentencia por infracción del artículo 26.2 de la LGTel al no haberse recabado por el Ayuntamiento el informe que tal norma prevé. Dicho precepto, en efecto ordena que «los órganos encargados de la redacción de los distintos instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recabar de la Administración General del Estado el oportuno informe sobre las necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran » . Al respecto hay que tener presente:

1º La Sentencia recurrida desestimó tal motivo de impugnación sobre la base de la Sentencia de esta Sala de 22 de marzo de 2011 (RJ 2011, 5747) (recurso de casación 1845/2006) dictada con arreglo a la anterior la ley de telecomunicaciones. En tal Sentencia se decía que la ley no define lo que entiende por "instrumentos de planificación territorial o urbanística" y añade que si bien puede haber ordenanzas municipales sobre regulación de la instalación de redes de comunicaciones, que formalmente no se presenten como instrumentos de planeamiento urbanístico, si embargo requerirán tal informe si de hecho contienen una regulación tal que en la práctica, califiquen suelo.

2º La Sentencia de instancia rechazó tal motivo de impugnación al no dar razones la recurrente de por qué entiende que la Ordenanza es un instrumento, siquiera

complementario, de la ordenación urbanística cuando lo cierto es que en su artículo 11 se remite al Plan General para la determinación de los elementos y equipos de los sistemas de radiocomunicación. De esta manera -añade- la implantación de esas infraestructuras debe acomodarse a la clasificación y del suelo según el Plan y no a delimitaciones de esa clase introducidas por la Ordenanza .

3º Se desestima este motivo de casación pues la recurrente no contradice lo razonado por la Sentencia. Se basa en las Sentencias de esta Sala de la Sección 5ª, que cita -de 9 y 22 de marzo de 2011 , recursos de casación 3037/2008 y 1845/2006 , respectivamente- y de las que se deduce, precisamente, lo que razona la Sentencia impugnada: que será preceptivo ese informe cuanto las ordenanzas sean verdaderos instrumentos de planeamiento o de ordenación urbanística, siquiera complementario. Sin embargo, de nuevo, no razona, en qué medida la Ordenanza recurrida en la instancia habría incurrido en ese exceso.

En el presente caso la Ordenanza que es análoga a la vista por el Tribunal Supremo, tampoco planifica urbanística la ciudad de Huesca, por lo que no existe el defecto procedimental que se indica en demanda.

SEGUNDO

Falta de competencia del Ayuntamiento para regular en materia de telecomunicaciones aspectos técnicos de las instalaciones de telecomunicaciones y en materia sanitaria.

Esta Sala ha acogido este motivo en Sentencia de 19 de noviembre de 2015 (PROV 2015, 302710) , frente a una modificación de esta misma Ordenanza del año 2013, concretamente la modificación de los arts. 6.3 y 6.4 y siguiendo doctrina del Tribunal Supremo indica:

Expuestas las posiciones de las partes, el recurso deberá ser estimado, habida cuenta el tenor de los apartados impugnados del artículo 6 de la Ordenanza, y el criterio establecido por la Sala Tercera en su sentencia del Pleno de la Sala de 11 de febrero de 2013 (RJ 2013, 3098) .

Efectivamente, el tenor de los apartados 3º y 4º del citado precepto reza del siguiente modo: "6.- Criterios para la instalación de los equipos

3. Se procurarán aplicar los umbrales recomendados y todo lo indicado en las recomendaciones, tanto a nivel estatal como internacional, y, más en concreto, a lo indicado en la resolución número 1815, de 27 de mayo de 2011 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Aquellos casos en los que no sea posible cumplir este requisito deberá justificarse, presentando documentación al respecto.

4. De manera análoga al anterior punto, se procurarán aplicar las distintas recomendaciones y normativas respecto a la ubicación, características y condiciones de funcionamiento de las estaciones radioeléctricas para minimizar los niveles de emisión

sobre espacios sensibles, como escuelas, centros de salud, hospitales, parques públicos, residencias, institutos, etc.). Aquellos casos en los que no sea posible cumplir este requisito deberá justificarse, presentando documentación al respecto." .

Y como se desprende del Preámbulo de la Ordenanza, la regulación que contiene pretende ser desarrollo de competencias municipales de urbanismo - artículo 25.2 d) LRBRL -, patrimonio histórico-artístico -artículo 25.2 c)-, protección del medio ambiente -artículo 25.2 f)- y salubridad pública -artículo 25.2 h)-.

Examinado el tenor literal de los apartados impugnados, podrá comprobarse que la remisión concreta a la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a la que hace expresa referencia, determina la asunción por la Ordenanza, normativizándola, de unos concretos umbrales de emisión de radiaciones que vienen establecidos en la Recomendación y que, hasta ese momento, carecen de fuerza normativa. En definitiva, que la regulación municipal impugnada, aunque expresada en términos tan débiles como se plasman en dichos apartados -"...se procurará..."-, excede sobradamente y puede encontrar difícil justificación en competencias municipales como las invocadas. De un modo u otro, con mayor o menor intensidad, se introducen nuevos umbrales de emisión de radiaciones que excede de las propias competencias para adentrarse en terreno de exclusiva competencia estatal, tal y como la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de tratar ya en la antedicha sentencia, reproducida parcialmente en el escrito de demanda.

Menos justificación tiene y más se evidencia el exceso regulatorio en el que incurre la Administración demandada cuando, pese a que se limita a decir que se procurará seguir las indicaciones contenidas en tal recomendación, añade que, en todo caso, habrá de justificarse documentalmente la imposibilidad de cumplimiento de la misma. Ciertamente mediante los preceptos impugnados no se hace de obligado cumplimiento -por Administración que carece de competencia para ello- lo que es mera recomendación, pero sí que se impone un concreto deber de actuación en supuestos en que no sea posible seguir, observar por mejor decir, los umbrales y límites recomendados.

Por consiguiente, ni la Administración demandada puede regular materias a su competencia, ni siquiera aunque se limite a reproducir la normativa estatal en la materia, como dice la Sala Tercera en su sentencia de 11 de febrero de 2013 (RJ 2013, 3098) de constante referencia, ni puede decirse que los apartados impugnados se limiten a introducir una mera recomendación, pues impone un concreto deber de actuación por referencia al cumplimiento o incumplimiento de los umbrales de emisión recomendados. En definitiva, el Ayuntamiento al regular del modo en que lo hace la materia en cuestión, se excede en sus competencias, pues no puede encontrar amparo y sustento en ellas lo regulado, invadiendo competencias exclusivas del Estado en materia de telecomunicaciones y protección del dominio público radioeléctrico.

De este modo, y por todo lo anterior, el recurso ha de ser íntegramente estimado, procediendo la anulaciónde los apartados 3º y 4º del artículo 6 de la Ordenanza impugnada.

El mismo razonamiento llevó al Tribunal Supremo a anular la exigencia de la mejor

tecnología disponible en la STS reiterada de 24 de febrero de 2015 (RJ 2015, 4066) cuando dice:

Como segundo submotivo se impugna la Sentencia de instancia al confirmar los artículos 4 y 12.2 que ordenan que los proyectos deberán justificar y, por tanto, emplear, la utilización de la mejor tecnología disponible, técnica y económicamente viable. Tal submotivo se estima por las siguientes razones:

1º La Sentencia se basa en que las características de las instalaciones no son extrañas a la competencia municipal sobre seguridad y ornato de edificaciones, protección del paisaje o entorno, luego tal exigencia es proporcional para la protección de los intereses públicos cuya tutela corresponda al Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias en esas materias; tampoco invade las competencias estatales del artículo 149.1.21ª de la Constitución .

2º La recurrente basa este motivo de casación en que la obligación de justificar que el operador va a emplear la tecnología más avanzada para minimizar el impacto visual debe exigirse bajo el cumplimiento del principio de neutralidad tecnológica, por el cual se deja a las operadoras la libertad de elegir las soluciones tecnológicas que más les convengan. Los preceptos impugnados se extralimitan en sus competencias al adentrarse de lleno en el ámbito de las telecomunicaciones y cita así las Sentencias de esta Sección de 24 de abril de 2012 , de 31 de mayo , 7 y 12 de junio de 2013 (recursos de casación 1598/2007 , 4398/2011 y 4689/2010 respectivamente) en relación con el artículo 149.1.21ª de la Constitución , porque la Sentencia impugnada no menciona expresamente el respeto a los parámetros técnicos fijados por el Estado.

3º Se estima este motivo pues aunque no se hace una crítica al razonamiento de la Sentencia, sin embargo las Sentencias de esta Sala y Sección antes citadas sustentan la anulaciónde la exigencia de la justificación de la mejor tecnología cuando la Ordenanza en cuestión no salva los criterios fijados por el Estado respecto del nivel tecnológico, que es a quien compete establecer un régimen uniforme en esta materia; esa falta de precisión genera incertidumbre, cosa que no ocurriría si la Ordenanza impugnada se fundase claramente en la normativa estatal, lo que no es el caso, razón por la que se estima en este punto el recurso de casación.

Y por ello y por el mismo motivo han de anularse el art. 1.1 en cuanto hace mención a "se realice con todas las garantías de seguridad", así como los arts. 6.1 a) y b) que no son sino criterios ya expuestos en el R.D. 1066/2001 (RCL 2001, 2415, 2597; RCL 2002, 1033 y 1059) y por tanto nulos por redundantes y por que no es el Ayuntamiento competente para su adopción y art. 6.3 y 6.4 umbrales y espacios sensibles.

No encuentra sin embargo motivo este Tribunal para anular el art. 17. 3.4 y 7 de la Ordenanza que dice:

Artículo 17.- Documentación a presentar con la solicitud de licencias Las solicitudes de licencias se presentarán por triplicado en el Registro del Ayuntamiento por cualquiera de los medios legalmente establecidos, acompañada de la siguiente documentación: A) Para la licencia de obras de la instalación: 1. Documento que acredite el cumplimiento de las

obligaciones tributarias que determinen las Ordenanzas Fiscales correspondientes en lo relativo al pago de tasas para la solicitud de licencia. 2. Copia del título habilitante para el ejercicio de la actividad de acuerdo con la legislación de telecomunicaciones. 3. Acreditación de la presentación ante el órgano competente por razón de la materia de la solicitud de autorización del proyecto técnico de las instalaciones radioeléctricas, o en su defecto, siempre que no se viable dicha acreditación, Declaración Jurada de haberla realizado. 4. Copia de la ficha resumen de datos de la instalación aportada en dicho proyecto, incluyendo potencia y diagrama de emisión. 5. Declaración del compromiso de mantener la instalación en perfectas condiciones de seguridad, así como el compromiso de desmantelamiento de las instalaciones una vez hayan dejado de estar en servicio. 7. Proyecto técnico por triplicado, firmado por técnico competente, conforme a la normativa actual de construcción y el Código Técnico de la Edificación, incluyendo como mínimo la siguiente documentación:

Y ello por la sencilla razón de que no existe motivo alguno por el que deba anularse la simple exigencia documental de haber pedido u obtenido del órgano competente la autorización y proyecto, que evidentemente no es lo mismo que autorizar técnicamente el mismo. Tampoco considera la Sala sea contrario a la comprobación necesaria de la licencia la aportación del Proyecto técnico.

Por los mismos motivos tampoco considera este Tribunal sea contrario a derecho lo exigido en el apartado 1.3 de la Disposición Transitoria Primera cuando dice:

1.3. En el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de esta Ordenanza, todas las instalaciones existentes, independientemente de los plazos de los apartados anteriores, deberán acreditar el cumplimiento de los límites de referencia del RD 1066/01 (RCL 2001, 2415) , con la copia de la última certificación exigible presentada al Ministerio de Industria

Pues no es lo mismo exigir una documentación presentada ante el órgano competente que decidir la validez de los requisitos técnicos.

TERCERO

Ámbito de aplicación espacial de la Ordenanza.

Impugna el art. 2.2 cuando dice:

2. Quedan excepcionadas de la aplicación de esta Ordenanza: A) Antenas catalogadas de radio aficionados. B) Antenas receptoras de radiodifusión y televisión. C) Equipos y estaciones de telecomunicación para la defensa nacional, seguridad pública y protección civil, en las condiciones convenidas al efecto por el Ayuntamiento y el órgano titular.

Pues bien esta cuestión también ha sido resuelta por la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2015 (RJ 2015, 4066) en su fundamento jurídico decimosegundo cuando dice:

El artículo 2.4 excluye del ámbito de aplicación de la Ordenanza « los equipos y

estaciones de telecomunicación para la Protección Civil, las adscritas a la Defensa Nacional, al sistema de navegación aérea, a la seguridad pública y, en general, a cualesquiera servicios de análoga naturaleza», si bien añade que el Ayuntamiento valorará positivamente que los de esos equipos y estaciones «intenten regular sus emisiones y condiciones a los límites contemplados en esta ordenanza ». Se desestima la demanda en tal punto por las siguientes razones:

1º En los folios 79 y 80 de la demanda se aborda la impugnación de tal precepto y que se basa en la infracción del artículo 14 de la Constitución pues no advierte razón que justifique la exención de tales instalaciones a los límites de emisión del Real Decreto 1066/2001 (RCL 2001, 2415, 2597; RCL 2002, 1033 y 1059) .

2º El trato distinto que recoge la Ordenanza tiene su base en lo previsto en el artículo 4 de la LGTel., y cuya regulación queda reservada al Estado (artículo 4.1 de la LGTel). La ***Ordenanza*** *se limita a constatarlo, si bien añade el inciso final antes expuesto.*

CUARTO

El uso compartido de las instalaciones.

Está regulado en el art. 14 de la Ordenanza que dice:

Artículo 14.- Compartición de infraestructuras En materia de compartición de Infraestructuras, los operadores deberán respetar lo estipulado en el artículo 30 de la Ley General de Telecomunicación de 2003 . En particular: 1. Se promoverá la compartición de infraestructuras, sobre todo en suelo no urbanizable y bienes de titularidad municipal, siempre y cuando sea técnica, contractual y económicamente viable y sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos materiales y procedimentales prevenidos por la normativa sectorial estatal en materia de telecomunicaciones para el uso compartido de instalaciones. 2. En los bienes de titularidad municipal, podrá ser obligatoria la compartición de emplazamientos salvo que la operadora pueda justificar que la misma no es técnicamente viable 3. En espacios de titularidad privada, la compartición no será condición para la concesión de la licencia, no obstante a la vista de los Planes de Implantación presentados por las distintas operadoras, el Ayuntamiento podrá solicitar a las mismas, cuando soliciten licencia, que justifiquen la inviabilidad técnica, contractual y económica de la compartición. La compartición de infraestructuras de telecomunicaciones, como posible técnica reductora del impacto visual producido por estas instalaciones, será, en todos los casos, objeto de un estudio individualizado. La intervención del Ayuntamiento en este ámbito salvaguardará los principios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación.

Como se ve y a diferencia de lo que se expone en demanda en este precepto no se impone la compartición de infraestructuras, salvo en bienes municipales, cuestión que está suficientemente justificada por la titularidad del mismo y que además sino es viable técnicamente puede excluirse. De hecho en bienes de titularidad privada la no compartición no es motivo para no dar la licencia. Solo cuando el plan de implantación lo

exiga y por lo tanto por motivos de ordenación urbanística podrá exigirse a salvo una vez más de que no sea viable técnicamente.

Por todo ello y a la vista de lo razonado por el Tribunal Supremo en el Fundamento jurídico cuarto de la Sentencia de 24 de febrero de 2015 (RJ 2015, 4066) , no ve motivo la Sala para su anulación. En la indicada Sentencia se dice:

El siguiente motivo de casación se refiere a la confirmación de los artículos 4.2 y 12.2 en cuanto al llamado "uso compartido". El primero exige que en el supuesto de instalaciones en demarcación no urbana, los proyectos deben justificar la imposibilidad de compartir otras infraestructuras existentes en el entorno; el segundo exige, en esa línea, que los equipos -aparte de justificar la mejor tecnología- deben «lograr el mejor tamaño y complejidad de la instalación y permitir así la máxima reducción del espacio visual» . Tal submotivo se desestima por las siguientes razones:

1º La Sentencia de instancia confirma ambos preceptos pues los considera conformes con el ejercicio de las competencias municipales sobre urbanismo y protección del medio ambiente (Ley vasca 3/1998 de 27 de febrero, sobre protección del medio ambiente y la Ley vasca 2/2006 de 30 de Junio de suelo y urbanismo); añade que las características de las instalaciones (morfología o diseño, tamaño o volumen, etc.) no son extrañas a la competencia municipal sobre seguridad y ornato de edificaciones, protección del paisaje o entorno, luego no infringe el artículo 149.1.21ª de la Constitución .

2º La recurrente en casación alega que el uso compartido de las instalaciones de telecomunicación sólo puede imponerlo el Estado, previa audiencia al interesado y de manera motivada; un ayuntamiento no puede exigirlo pues infringiría el artículo 30 LGTel, invadiría competencias exclusivas del Estado e infringiría la Directiva 90/388/CEE (LCEur 1990, 775) , de 28 de junio, que impone a los Estados miembros la obligación de garantizar a los operadores la prestación de servicios de telecomunicaciones y la supresión de todas las restricciones en lo que se refiere al uso de infraestructuras suministradas por terceros y al uso compartido de infraestructuras.

3º La recurrente cita a tal efecto, aparte de la Sentencia del Tribunal Constitucional 8/2012 (RTC 2012, 8) , la de esta Sección de 27 de mayo de 2013 (RJ 2013, 4540) (recurso de casación 747/2007) según la cual los ayuntamientos no pueden atribuirse la decisión última sobre compartición de emplazamientos ni uso compartido de infraestructuras; sí pueden, motivadamente y mediante informes, por razón de la tutela intereses medioambientales o urbanísticos, entender que procede la compartición, pero quien lo decide es el Estado de forma ponderada recogiendo los informes sectoriales de otras Administraciones: se garantiza cooperación en una competencia concurrente.

4º Sin embargo se desestima este motivo pues mezcla dos aspectos: quién es competente para imponer el uso compartido y hasta qué punto es admisible. En cuanto a éste último, el uso compartido en sí es una restricción admisible que puede imponerse (cf. artículo 30.4 LGTel.), y que es admisible se explica porque en otro caso no se entendería que se permita su imposición, sólo que quien puede imponerla es el Estado.

5º La Ordenanza exige que en caso de instalaciones en una demarcación no urbana, si

se trata de proyectos de instalación no compartida, acompañen justificante de que le resulta imposible al operador compartir otras infraestructuras ya existentes. Con esto la ***Ordenanza*** *fomenta la compartición, lo que está en la línea del artículo 30.1 LGTel. según el cual « Las Administraciones públicas fomentarán la celebración de acuerdos voluntarios entre operadores para la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructuras situadas en bienes de titularidad pública o privada ».*

6º En consecuencia, los artículos cuestionados en la instancia parte de la premisa de que un operador presente un proyecto sin haber previsto compartir ubicación ni instalaciones y como lo general es que se fomente la compartición, es por lo que se le exige que justifique que no es posible. Cosa distinta es la imposición de la compartición, algo ajeno al supuesto de hecho que regula la Ordenanza , cuya competencia corresponde a la Administración del Estado, pero tal extremo -que es en el que centra la actora su recurso- no es el supuesto ahora enjuiciado. Por lo demás, este tipo de previsiones se han confirmado por este Tribunal, valga como cita la más reciente Sentencia de 8 de marzo de 2013 (RJ 2013, 3311) (recurso de casación 5778/2005).

QUINTO

La retirada de instalaciones en el momento del cese de la actividad.

El art. 19.3 de la Ordenanza dice:

3. En los supuestos de cese definitivo de la actividad o existencia de elementos de la instalación en desuso, el titular de la licencia o, en su caso, el propietario de las instalaciones deberá realizar las actuaciones necesarias para desmantelar y retirar los equipos de radiocomunicación o sus elementos, restaurando el estado anterior del terreno, la construcción o edificio que sirva de soporte a dicha instalación.

La STS de 24 de febrero de 2015 (RJ 2015, 4066) en su fundamento Séptimo entiende que no debe anularse un precepto idéntico y dice:

Se impugna también la Sentencia de instancia en cuanto que confirmó el artículo 25, referido a la retirada de instalaciones o de alguno de sus elementos, en los supuestos de cese definitivo de la actividad o de los elementos de las mismas que no se utilicen. Se desestima tal submotivo por las siguientes razones:

1º Según la Sala de instancia, lo que la Ordenanza prevé es que la retirada procede por resultar inservibles o técnicamente inoperantes y no de forma temporal o reversible; añade que así interpretada esa obligación no es lesiva para los derechos del operador amparados por el título de propiedad de las instalación y autorización para su funcionamiento.

2º La recurrente se limita a sostener que la Sala confirma un precepto que contraviene la autonomía de la voluntad y que sólo si antes del cese hay un acto que lo ordene, se retirarían esos elementos pues puede darse el caso de que unilateralmente o por contrato decida el cese por un tiempo.

3º Este submotivo carece de fundamento cuando se basa, precisamente, en las propias razones que la Sentencia emplea para confirmar la Ordenanza : es conforme a Derecho porque lo que prevé es la retirada cuando las instalaciones son « inservibles o técnicamente inoperantes y no de forma temporal o reversible ». En este sentido no se trata de esperar a que haya un previo requerimiento -que podrá venir como consecuencia de un supuesto de ejecución forzosa- sino de que el operador asuma la obligación de retirar esos equipos en los supuestos antes citados.

4º Este Tribunal tiene dicho (cf Sentencia de 12 de junio de 2013 (RJ 2013, 4893) , recurso de casación 4689/2010) que este tipo de previsiones normativas se insertan y son coherentes en el reparto competencial entre el Estado y los municipios en la defensa, por parte de estos, de los intereses que les son propios como son los urbanísticos y medioambientales. Además en esa misma Sentencia se dijo a la aquí recurrente que este tipo de previsiones no invade el ámbito de las relaciones entre particulares, luego no afecta a su libre autonomía al no adentrarse en la forma en que debe procederse a la retirada.

SEXTO

El informe favorable de la Comisión Municipal de Urbanismo:

Dice el art. 9.7 de la Ordenanza.

Será preciso el informe favorable de la Comisión Municipal de Urbanismo para la instalación de los elementos y equipos objeto de este artículo en todo el término municipal.

Para la recurrente no puede dejarse en manos de una Comisión informativa la concesión o no de una licencia.

Y en este punto tiene razón la recurrente pues este precepto, vulnera lo dispuesto en el art. 82 y 83 de la Ley 30/1992 (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) , pues sólo pueden ser vinculantes los informes exigidos por la Ley, lo que no es el caso. Como hace el Tribunal Supremo en la Sentencia citada en demanda de 16 de julio de 2008 debe anularse la palabra favorable. En la Sentencia se dice:

El último y tercer motivo alega la infracción del principio de competencia en relación con el art. 4.3 .b) de la Ordenanza que se refiere a que "será preciso el informe favorable de la Comisión Municipal del Patrimonio Histórico Artístico , para la instalación de los elementos y equipos objeto de este artículo, en todo el término municipal".

Según el motivo el Ayuntamiento impone una exigencia que no está prevista ni en la legislación general de telecomunicaciones ni tampoco en la legislación de patrimonio histórico artístico y, además, lo hace con carácter general para toda la ciudad y lo encomienda a la Comisión Municipal que sólo tiene competencias cuando se trate de determinados aspectos que tengan que ver con la protección del patrimonio histórico artístico .

La Sentencia de instancia en cuanto a esta cuestión mantuvo que: "En cuanto a la pretendida supresión del artículo 4 apartado 3 letra b) que exige, para la autorización de las instalaciones el informe favorable de la Comisión municipal del Patrimonio Histórico Artístico para la instalación de los elementos y equipos objeto de este artículo en todo el término municipal, hay que poner de relieve que, tal y como se ha expuesto en la doctrina referida, al tener potestad los Ayuntamientos, de establecer condiciones para instalación de antenas y redes de comunicaciones y contemplar exigencias y requisitos para la mencionada instalación es claro que el referido informe es una condición lícita y dentro de las competencias municipales que pueden determinar potestativamente los límites de control que hayan de ejercer cuyo fin es que el Planeamiento se desenvuelva de acuerdo con las prescripciones legales. Por tanto deberá rechazarse la oposición en relación a ese extremo".

En este caso el motivo ha de prosperar. Y no tanto por que se vulnere por el precepto el principio de competencia como se afirma, (lo que sería la consecuencia última) ya que, aún pudiendo ser excesiva la pretensión de que en todo caso informe la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico Artístico , nada se opone a que dentro de la preservación de esas competencias municipales se pueda contar con ese informe en relación con esas instalaciones, sino porque lo que se exige es que ese informe sea favorable, de modo que se convierte en vinculante para el otorgamiento o no de la licencia de manera que se priva al órgano competente para decidir acerca del otorgamiento o denegación de la autorización del ejercicio de su competencia de forma que en caso de que el informe sea desfavorable quien habrá decidido la denegación habrá sido la Comisión Municipal del Patrimonio Histórico Artístico , y no el órgano que ostenta la competencia.

Ese precepto por tanto vulnera los arts. 82 y 83 de la Ley 30/1992 , cuando establecen el primero de ellos que "A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. 2 . En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita". Y añade el art. 83 que: "Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes".

Y en este caso no puede deducirse del precepto cuestionado que ese informe favorable siendo como es preceptivo al considerarse preciso, sea vinculante porque la competencia es irrenunciable, y de tener ese valor el informe dejaría en manos de un órgano consultivo la decisión que compete exclusivamente al órgano al que la norma se la concede.

En consecuencia se anula de ese inciso b) del número 4, del art. 3 la palabra favorable.

SÉPTIMO

Sobre la utilización de la solución constructiva que mejor contribuya a la minimización del impacto visual.

Por los mismos motivos por los que se ha anulado los arts. 6.1, 6.3 y 4 en el Fundamento Jurídico Segundo, ha de anularse el art. 6.2 que dice:

2. En las instalaciones se deberá utilizar la solución constructiva que mejor contribuya a la minimización del impacto visual y medioambiental.

Y ello porque como dice el Tribunal Supremo en la reiterada Sentencia hay una invasión de competencias y una verdadera confusión entre impacto ambiental y exigencia técnica y debe haber un régimen unitario en la materia.

OCTAVO

La renovación o sustitución de instalaciones.

El art. 20 dice:

Artículo 20.- Renovación y sustitución de las instalaciones Estarán sujetas a los mismos requisitos establecidos en la presente ordenanza para la primera instalación la renovación o sustitución completa de una instalación y la reforma de las características constructivas de la misma que hayan sido determinantes para su autorización, así como la sustitución de alguno de sus elementos por otro de características diferentes a las autorizadas.

A parte de que nada se dice en la contestación a la demanda para defender la validez de este precepto, no puede confirmarse una exigencia como la que aquí se impone desconociendo dos extremos especialmente relevantes. No pueden exigirse los mismos requisitos para una sustitución técnica que los exigidos para la primera autorización. Y en cualquier caso, como venimos reiterando la competencia para autorizar ese cambio técnico la tendría las autoridades sectoriales y no las municipales, si no existe motivo urbanístico que lo imponga. Algo que en el precepto, ni se menciona.

NOVENO

El régimen sancionador.

Considera que son contrarios a derecho los siguientes preceptos.

El art. 24.1.1 letra c): Considera infracción grave C) Incumplimiento de la obligación de presentar ante el Ayuntamiento un Plan de Implantación que contemple el conjunto de todas sus instalaciones radioeléctricas dentro del término municipal, así como las posibles modificaciones del mismo.

Lo razona la recurrente por su carácter no vinculante.

Partiendo de la competencia del municipio para tipificar conductas y sancionarlas (ver el FJ Noveno de la Sentencia tantas veces reiterada de 24 de febrero de 2015 (RJ 2015, 4066)), hemos de indicar que no debe restarse relevancia a la naturaleza informativa del

Plan de implantación que tiene una importancia especial para la autorización de distintas antenas y sobre todo para el conocimiento de la necesidad de otras. Por lo ello esta Sala no ve motivo -dada la necesidad de su presentación- para anular esta infracción.

El art. 24.1.2 a), b) y c) fijan como infracciones leves.

1.2. Leves: A) El incumplimiento de los plazos de adecuación, de las instalaciones existentes, establecidos en la presente Ordenanza. B) Presentación fuera de plazo al Ayuntamiento las modificaciones o actualizaciones del contenido del Plan de Implantación. C) La no presentación de la justificación a la que se refiere el artículo 14.3.

Tampoco entiende la Sala haya de anularse ninguna de estas infracciones, pues no hemos anulado ninguno de las exigencias de fondo en que se basan. Adecuación de las instalaciones, modificación del Plan de implantación y compartición de infraestructuras.

DECIMO

De conformidad a lo dispuesto en el art. 139 de la LRJCA , no se infieren méritos para hacer expresa imposición de las costas causadas al ser estimado en parte el recurso.

III. FALLO.

ESTIMAR PARCIALMENTE EL PRESENTE RECURSO Nº 245/2012, Y EN CONSECUENCIA:

PRIMERO

DECLARAR NO SER CONFORME A DERECHO LOS SIGUIENTES PRECEPTOS DE LA ORDENANZA RECURRIDA ART. 1.1 CUANDO DICE "SE REALICE CON TODAS LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD", ART. 6.2, 6.3, 6.4, ART. 9.7 EL TÉRMINO "FAVORABLE" Y ART. 20. CONFIRMANDO EL RESTO DE LA ORDENANZA RECURRIDA.

SEGUNDO

NO HACER EXPRESA IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS DEL PRESENTE RECURSO.”

4.- Tribunal Superior de Justicia de Aragón, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Sentencia núm. 438/2016, de 29 de septiembre.

AGRICULTURA: bases definitivas y acuerdo de concentración parcelaria de la zona de Calcón (Huesca), subperímetro de Ibieca, Aguas y Liesa. Impugnación de su aprobación: procedencia por menor valor de las fincas de reemplazo respecto de las aportadas. Anulación procedente.

"FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso-administrativo la Orden de 26 de febrero de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desestimatoria de recurso de alzada frente a la Resolución aprobatoria de las Bases definitivas y el Acuerdo de concentración parcelaria de la zona de Calcón (Huesca), subperímetro de Ibieca, Aguas y Liesa.

Dicha resolución, rechaza la pretensión impugnatoria del propietario recurrente, frente a la resolución aprobatoria de las bases definitivas y del acuerdo de concentración parcelaria antedichos, por la cual se pretendía una lesión superior a un sexto, con la consiguiente petición de rectificación de lo adjudicado mediante un nuevo reemplazo. Y la Administración demandada ahora lo rechaza por entender que no ha quedado justificada dicha lesión, concluyendo en que la adjudicación se realizó conforme a las bases definitivas de la concentración.

SEGUNDO

La representación procesal del Sr. Alfredo , parte recurrente, entiende que ha sido objeto de un agravio comparativo, respecto de los demás propietarios, dada la mayor calidad y valor de la explotación aportada a la concentración que el lote de reemplazo, cifrando el agravio en cuantía superior a la sexta parte del valor de aquéllas. Así resulta del informe pericial en que sustenta su pretensión, en el que se aplica el método comparativo y analítico, que, como se ha encargado de decir ya el Tribunal Supremo, es perfectamente válido y aplicable. De este modo, entiende que habrán de declararse nulas las bases con las consecuencias previstas en el apartado segundo del artículo 218 de la LRYDA o, subsidiariamente, para el caso en que finalmente la lesión no resulte ser superior a un sexto del valor de las fincas aportadas, tendrá derecho a la correspondiente indemnización compensatoria del desvalor entre las aportadas y las de reemplazo, que también reclama.

El Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, Administración demandada, se opuso al recurso interpuesto de contrario y terminó suplicando la desestimación del recurso y la condena en costas de la parte recurrente. En síntesis, entendió que la valoración de las fincas ha seguido en todo caso el método fijado en las Bases definitivas. De este modo, por aplicación de los módulos y tipos de calificación acogidos en las mismas, resulta la inexistencia de lesión. El principio de unidad de método, de inexcusable aplicación, lleva a la inviabilidad de una lesión pretendidamente superior al límite establecido en el artículo 218 de la LRYDA, cuantificada por aplicación de un método de cálculo diferente, en concreto el previsto en la Ley Urbanística para el suelo no urbanizable, método y Ley ésta que no está contemplada como aplicable a las valoraciones que han de realizarse en los procesos de concentración parcelaria.

TERCERO

Expuestas las posiciones de las partes en los términos anteriormente relatados, algunas consideraciones generales deben realizarse sobre la naturaleza y sentido de los procesos de concentración parcelaria, a la luz de la Jurisprudencia sobre la cuestión. Así, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sec. 4ª, de 17 de diciembre de 2008, dictada en el recurso nº 4326/2006 , podrá ayudarnos en tal tarea cuando viene a decir lo siguiente: " Así y siguiendo la doctrina establecida en las Sentencias de esta Sala y Sección de 4 de noviembre de 2003, recurso de casación núm. 6344/1999 y 15 de junio de 2004, recurso de casación núm. 1744/2002 , y según resulta de nuestra reiterada doctrina "el régimen peculiar de impugnación de los acuerdos de concentración parcelaria establecido en el artículo 218 de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario es un reflejo de la complejidad de intereses presentes en acuerdos de esta naturaleza y de la existencia de un principio esencial de conservación de la nueva ordenación legal de la propiedad que informa la regulación legal de la concentración y se ajusta a los siguientes principios: A) Los acuerdos de concentración parcelaria sólo son susceptibles de recurso contencioso- administrativo, según el artículo 218 de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario , en dos casos: a) por vicio en el procedimiento - que debe tener carácter sustancial-; b) por lesión en la apreciación del valor de las fincas en más de la sexta parte. B) En la medida en que este régimen de impugnación puede comportar limitaciones al acceso a los Tribunales, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución, debe ser objeto de una interpretación conforme a ésta, fundada en una consideración flexible de tales restricciones, en todo caso subordinadas a la justicia material y a la efectividad del acceso a los tribunales.

C) En cuanto al primero de los citados aspectos -limitación de la impugnación a vicios formales- su fundamento radica, como recogen las sentencias, entre otras, de 4 de noviembre de 1988 y 6 de noviembre de 1981 , en que en materia de concentración parcelaria el ordenamiento regulador establece un sistema de garantías escalonado, en el que primero se fija un procedimiento para la determinación de las bases y, una vez firmes éstas y efectuadas las operaciones técnico- materiales correspondientes, la impugnación del acuerdo aprobatorio se ve limitada a los supuestos de infracción de las

formalidades o vulneración de las bases rectoras, pues este escalonamiento en fases determina la previa fijación de las bases, cuya firmeza - artículo 197 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario - es trámite preclusivo para que la Administración pueda adoptar, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, el acuerdo de concentración.

D) La inamovilidad de las bases una vez firmes no ha obstado, sin embargo, para que esta Sala considere que para el cálculo de la lesión económica derivada de la diferencia de valor entre las fincas aportadas y las atribuidas como consecuencia del acuerdo de concentración puedan tenerse en cuenta criterios no recogidos en las bases dado que, de acuerdo con el artículo 173 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario , la concentración de las propiedades y la equivalencia en las sustituciones son los grandes principios inspiradores de la institución parcelaria contemplada, atemperados por la satisfacción del interés público en la estabilidad de la concentración (sentencias de 15 de junio de 1984 y 7 de febrero de 1990).

En efecto, el artículo 200.2 de la Ley, al disponer que el acuerdo de concentración se ajustará estrictamente a las bases, ordena tener en cuenta, en la medida en que lo permitan las necesidades de la concentración, las circunstancias que, no quedando reflejadas en la clasificación de tierras, concurran en el conjunto de las aportaciones de cada participante.

E) La condición para ello, sin embargo, es que tales criterios resulten conformes con las bases o no se opongan a las mismas y sean uniformes, pues las sentencias de 7 de abril de 1983 y 7 de junio de 1996 declaran que han de utilizarse los módulos o coeficientes y tipos de calificación acogidos en las bases definitivas como denominadores comunes para todas las fincas afectadas por la concentración en las operaciones para hallar si existe lesión en la apreciación del valor de las fincas, pues así resulta de la obligatoriedad legal que tienen dichas bases tanto para la Administración como para los titulares de las fincas afectadas y del propósito y finalidad que las inspira, en el que es esencial la unidad de método para la estimación de la totalidad y cada uno de los terrenos incluidos en la concentración para no romper el equilibrio económico o "equivalente de la ecuación".

F) En cuanto al segundo de los citados aspectos -lesión de la sexta parte- esta Sala ha venido insistiendo en la necesidad de una interpretación restrictiva y conforme a la Constitución del citado precepto.

La sentencia de esta Sala de 5 de febrero de 1985 (como recuerda la sentencia de 17 de febrero de 1990) declara que tal limitación de acceso a los Tribunales de Justicia tiene que ser objeto de una interpretación restringida, que posibilite al máximo lo que es común en la defensa de estos derechos e intereses no sometidos a limitación alguna. Siguiendo esta línea, en la sentencia de 6 de diciembre de 1985 (que el recurrente cita como del Tribunal Constitucional , sin duda inducido a error por una inexactitud en la transcripción padecida en la sentencia de esta Sala de 14 de octubre de 1996) esta Sala ha matizado el reiterado artículo 218 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario en el sentido de que, según que la lesión exceda o no del sexto del valor de las fincas aportadas, establecido con arreglo a las bases aprobadas, las consecuencias serán distintas, pues mientras que la lesión alcance o supere el citado sexto del valor señalado determinará

una rectificación en la concentración efectuada con arreglo al párrafo segundo del expresado artículo 218 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario , y si no alcanza este límite sólo dará origen a una compensación que restablezca el principio de igualdad entre lo aportado y lo recibido concretado en el apartado a) del art. 173 de la referida Ley ".".

En el mismo sentido, siguiendo la doctrina sentada por la Sala Tercera, nos hemos pronunciado nosotros, como no podía ser de otro modo, en nuestras sentencias de 13 de julio de 2012 (PROV 2012, 275760) (rec. nº 117/10), 2 de mayo de 2013 (PROV 2013, 205978) , (rec. nº 124/2010), ó, más recientemente, 12 de febrero de 2014, (rec. nº 190/2008).

CUARTO

En definitiva, se trata de un procedimiento dividido en fases sucesivas, de evolución no simultánea, de suerte que mientras cada una de las fases en que se divide el proceso no esté culminada, no cabe acceder a la siguiente. Del mismo modo, rige el principio de unidad de método en las valoraciones y, por otra parte, no puede venirse a alterar la totalidad del proceso, a través de la discusión, en el momento final del Acuerdo de concentración, de una determinada y concreta valoración particular del propietario reclamante, con base en un método valorativo que pueda resultar incompatible con el resultante de unas bases definitivas que han podido quedar firmes y consentidas.

Ahora bien, con ser cierta la posición de la Administración demandada en el presente supuesto, de igual modo, debe advertirse que, como se desprende de la sentencia parcialmente transcrita en el fundamento de derecho anterior, la inamovilidad de las bases no tiene un carácter absoluto para la Jurisprudencia, de suerte que caben y deben tenerse en cuenta criterios y elementos no recogidos en las bases que permitan una más adecuada y ajustada valoración de las fincas siempre que no se opongan o resulten incompatibles con las bases.

Añadido a lo anterior, se está impugnando en el presente supuesto, no sólo el Acuerdo de concentración, sino que, por la vía de la lesión en cuantía superior a un sexto del valor de las aportadas, se está impugnando, siquiera sea indirectamente, las bases definitivas que son aprobadas en el y por el mismo acto administrativo.

De este modo, debe advertirse la circunstancia de que, como viene a sostener la recurrente en su demanda, la Sala Tercera ha admitido la viabilidad del criterio valorativo de capitalización de rentas contenido en la legislación urbanística, en su sentencia de 30 de marzo de 2013, (rec. 477/2011), sec. 4 ª. Como se dice en ella: "Tanto el artículo 173, como el 218 del Texto Refundido de la Ley de la Reforma y Desarrollo Agrario se refieren al "valor" de las fincas aportadas y de las de reemplazo para apreciar el cumplimiento del imperativo de la igualdad del mismo en unas y otras y en vedar en todo caso una eventual desigualdad que suponga un perjuicio de la sexta parte con respecto al valor de las primeras, pero sin que se fije en la propia Ley la forma específica de fijación de aquellos valores, que por lo tanto se dejan a las normas técnicas y de

experiencia que conduzcan a una razonable y veraz expresión de la realidad de los mismos." . De este modo, la legislación urbanística contempla la aplicabilidad del método de capitalización de rentas en supuestos de valoraciones en el seno de un proceso de concentración parcelaria, ciertamente, pero tampoco la prohíbe; como de igual modo, y por lo que viene a decir la Sala Tercera, conforme a lo reproducido ahora aquí, de lo que se trata es de evitar en todo caso situaciones de desigualdad valorativa, sin indicar concretamente el método aplicable.

En definitiva, es posible la aplicación del método de capitalización de rentas -que es el empleado en este caso concreto-, porque no se descarta su aplicación, y, además, de lo que se trata es de evitar o sanar situaciones de desigualdad valorativa, más que de la aplicación de un concreto método u otro. Más si se tiene en cuenta el dato de que en realidad lo que se está poniendo en cuestión son, como aquí sucede, unas bases definitivas que no tuvieron en cuenta determinados criterios que, finalmente, han conducido a una lesión superior a un sexto del valor de las fincas aportadas. Así pues, una cosa es que deba observarse el principio de unidad de método, y que las valoraciones sean iguales para todos los propietarios, conforme a lo fijado en las bases definitivas, y que tal principio valorativo permita la perpetuación de situaciones de desigualdad valorativas que, desde luego y de manera principal, como se ha visto, es lo que proscribe el Legislador e impone como principal objetivo a evitar.

QUINTO

Dicho lo anterior, bastará con realizar un atento examen de las periciales obrantes en autos, en particular de la pericial judicial, para comprobar el dato objetivo de la sensiblemente diferente calidad de las fincas de reemplazo recibidas en comparación con las aportadas por el recurrente.

Efectivamente, se calcula el menor valor de las fincas de reemplazo, respecto de las aportadas, en un 17Ž15% del valor de éstas, porcentaje superior, por lo tanto, a la sexta parte de su valor. Y allí se viene a decir además que la valoración realizada conforme a las bases de la concentración no ha tenido en cuenta determinadas particularidades derivadas de la propia configuración física de las fincas -aportadas y de reemplazo- que han de influir necesariamente en la productividad de las mismas y, por consiguiente también, en su propio valor. El propietario recurrente entregó tierra llana y recibió a cambio terrenos, en unas ocasiones, que presentan la existencia de simas que se desarrollan continuamente -parcela nº 594, del polígono 3, donde se han detectado hasta seis puntos con problemas de hundimiento durante la visita, dice el perito- y que, por el regadío tienden a empeorar; y en otras ocasiones, que se encuentran a diferentes alturas, presencia de muros, existencia de taludes o ribazos.

De este modo, no es sólo un problema de compatibilidad del método valorativo empleado por el perito, sino de que, más bien, las bases no han tenido en cuenta, como debieron, elementos y criterios que influyen en la valoración, de suerte que generaron, al descuidarlos, una desigualdad proscrita por la Ley.

Lo anterior, habrá de conducir inexorablemente a la estimación del recurso interpuesto, con la consiguiente declaración de nulidad del acuerdo impugnado, imponiéndose una rectificación de la concentración realizada, mediante una nueva atribución de parcelas al recurrente que compense y se ajuste al valor de las aportadas, conforme con y dentro de los límites que establece el artículo 218.2 de la LRYDA.

SEXTO

La estimación del recurso determina, conforme a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJCA (RCL 1998, 1741) , la expresa condena en costas a la Administración demandada, si bien que, en uso de la facultad que otorga el artículo 139.3 del citado texto legal , limitadas, por todos los conceptos, a la suma de 1.500 euros por cada una de las partes que se hubieran opuesto a la demanda. Por todo lo cual,

FALLAMOS

Que ***DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS*** *, el recurso contencioso-administrativo nº 79/2014, interpuesto por la Procuradora Dña. María Josefa Cabeza Irigoyen, en nombre y representación de D. Alfredo , frente a la Orden de 27 de febrero de 2014 objeto de este recurso y, en consecuencia, se declare nulo y sin efecto el acuerdo de 7 de febrero de 2013 del Director General de Desarrollo Rural del Servicio Provincial de Huesca de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón, por el que se aprobaron las bases definitivas y el acuerdo de concentración parcelaria de Calcón-subperímetro de Ibieca, Aguas y Liesa (Huesca), que* ***SE ANULA, CONDENANDO*** *a la Administración demandada a efectuar una rectificación de la concentración realizada, mediante una nueva atribución de parcelas al recurrente que compense y se ajuste al valor de las aportadas por el recurrente, todo ello con expresa condena en costas a la Administración demandada, en los términos establecidos en el último fundamento de derecho de esta sentencia."*

5.- Tribunal Superior de Justicia de Aragón, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª). Sentencia núm. 136/2016, de 23 de marzo.

Función pública: oferta de empleo público: omisión de la elaboración por la Administración: no inclusión de todas las plazas servidas por funcionarios interinos: vulneración del derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos: nulidad procedente.

"FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La entidad recurrente, ……, a través de su representación procesal, impugna la desestimación por silencio de la reclamación de 8 de noviembre de 2014, ante el Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se solicitó que se elabore, en la forma legalmente establecida y, posteriormente se apruebe por el Gobierno de Aragón el decreto correspondiente a la Oferta de empleo público de 2014, de manera que se garantice el respeto fundamental al acceso a la función pública de los ciudadanos y la inactividad normativa el Gobierno de Aragón por no aprobar un decreto de Oferta de empleo público de 2014, en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sostiene, en esencia, que se vulnera el derecho fundamental al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, previsto en el artículo 23.2 de la C.e . cuando en el año 2014 el Gobierno de Aragón no realiza, conforme es su obligación según el artículo 70 del EBEP (RCL 2007, 768) , oferta de empleo público general en la que se incluyan todas las vacantes cubiertas con interinos. No se cumple, ni con el derecho fundamental vulnerado ni con su requerimiento de elaboración de oferta general de empleo público, mediante ofertas parciales o sectoriales, en los términos en que se ha desenvuelto la actuación administrativa, mediante los Decretos 217 y 218/2014. De este modo entiende que la falta de aprobación de oferta en el ámbito de la administración general constituye un supuesto de inactividad administrativa que lesiona el derecho de los ciudadanos, inactividad que ha de quedar sometida al control jurisdiccional que debe amparar los derechos de los ciudadanos.

En el primer Otrosí digo solicita que si el fallo de la Sentencia depende de la aplicación del concepto "tasa de reposición de efectivos" utilizado en el art. 21. Uno, 2 y 3 de la Ley estatal 36/2014 de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y del art. 31.5 de la Ley Aragonesa 13/2014 de 30 de diciembre de Presupuestos de la comunidad Autónoma de Aragón para 2015, se plantee cuestión de inconstitucionalidad de las citadas normas legales por vulnerar el derecho de igualdad en las funciones o cargos públicos establecido en el art. 23.2 de la Constitución .

SEGUNDO

El Ministerio Fiscal formuló alegaciones considerando conveniente que el Gobierno de Aragón ha de dictar un Decreto en el que se incluya toda la oferta de empleo público del año 2014, correspondiente al ámbito de toda la Administración general, tal y como se desprende de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010, sec. 7 ª, en la que se anuló el Decreto Aragonés 67/2007, de 8 de mayo, por no incluir las plazas de los funcionarios interinos en la OEP para el año 2007.

La Letrada del Gobierno de Aragón alegó, alegó, en primer lugar, causa de inadmisibilidad del artículo 69 c) de la LJCA (RCL 1998, 1741) , en relación con los artículos 25 y 29 del citado texto legal , habida cuenta que no puede considerarse que existe desestimación por silencio del requerimiento formulado por la entidad recurrente con fecha de 8 de noviembre de 2014, ni una inactividad, pues el Gobierno de Aragón, respondió a tal requerimiento mediante dos Decretos, 217 y 218/2014, de 16 de diciembre, por los que aprobó sendas ofertas de empleo público en el ámbito del personal docente no universitario y en el ámbito sanitario, respectivamente. En cuanto al fondo, sostiene que no existe en el EBEP (RCL 2007, 768) obligación alguna de aprobar un único decreto de oferta de empleo público. Asimismo, entendió que el Gobierno de Aragón se encuentra, en todo caso, sujeto a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre (RCL 2013, 1843 y RCL 2014, 300) de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que fija una tasa de reposición de efectivos de un 10%, considerando que tal porcentaje comprende también las plazas ocupadas por funcionarios interinos. Tales alegaciones llevaron a la Administración demandada a suplicar la inadmisión o, en su caso, la desestimación del recurso interpuesto.

TERCERO

Expuestas las posiciones de las partes, habremos de resolver, obligadamente en primer lugar, sobre la causa de inadmisibilidad planteada por la Letrada del Gobierno de Aragón.

En este particular, atendidas las razones en que se sustenta tal alegación, el Ministerio Fiscal sostuvo que, pese a convenir con aquélla que no ha habido desestimación por silencio, lo cierto es que la pretensión o acción judicial de la parte recurrente, esto es, una única oferta general de empleo público, no se ha cumplido, de suerte que la acción judicial o pretensión objeto del proceso, sigue imprejuzgada, pues no está todavía resuelta por sentencia definitiva de esta Sala.

La entidad recurrente, por su parte, vino a rechazar también la causa de inadmisibilidad formulada por la Administración demandada, dado que ésta no ha aprobado OEP en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de 2014.

Pues bien, atendidos los términos en que se plantean las respectivas posiciones de las

partes en la presente controversia, diremos que los presupuestos de hecho en que se sostiene la pretensión de la entidad recurrente, consisten en que a su requerimiento de 8 de noviembre de 2014 por el que se pretendía de la Administración demandada la aprobación del Decreto correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2014, se contestó por aquélla mediante dos Decretos, el 217 y 218, ambos de 2014, de 16 de diciembre, por los que, respectivamente, se aprobaba la Oferta de Empleo Público para 2014, en el ámbito de personal docente no universitario, y en del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud. De ese modo, no se ha publicado Oferta en el ámbito de la Administración General, de suerte que, por tal motivo, no se ha incluido ninguna plaza vacante dotada presupuestariamente, desempeñada por funcionarios interinos. Extrae así la recurrente la conclusión de que se ha vulnerado el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, previsto en el artículo 23.2 de la C.e ., porque considera que el artículo 70 del EBEP (RCL 2007, 768) impone a la Administración el deber de elaborar y publicar una Oferta de Empleo Público, única, anualmente y, por otra parte, que ha de comprender en todo caso, las plazas cubiertas por funcionario interino. En definitiva, como quiera que existe un elevado número de plazas cubiertas por interino, no es disponible para la Administración su inclusión en Oferta, deviniendo obligada ésta anualmente por su existencia. En tanto que la Administración aprueba ofertas sectoriales, y deja de aprobar oferta en sector administrativo en el que existe un número elevado de plazas servidas por funcionario interino, vulnera el artículo 23 de la C.e . y deja de cumplir el requerimiento efectuado por la recurrente, lo cual constituye la desestimación presunta y/o la inactividad de la Administración que ahora se combate.

CUARTO

Como la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dicho reiteradamente -mediante, entre otras, su sentencia, de la sec. 4º, de 2 de abril de 2013, rec. 5720/2011 -, " Las sentencias de este Tribunal Supremo de 8 y 15 de julio de 2008 , 25 de mayo de 2010 o 3 de enero de 2013 , entre otras , dictadas respectivamente en los recursos de casación 5245/2005 , 6388/2005 , 4377/2008 y 5273/2011 , recuerdan como doctrina constitucional reiterada una que afirma que la aplicación razonada de las causas de inadmisibilidad debe responder a una interpretación de las normas procesales acorde con la Constitución y realizada siempre en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental que consagra el artículo 24.1 de la misma, huyendo, pues, de toda apreciación de inadmisibilidad que pueda calificarse de rigorista, o de excesivamente formalista, o que implique una clara desproporción entre los fines que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican. Desde esta perspectiva, la seguridad jurídica, la confianza que preservan las causas de inadmisibilidad, no ampara tampoco la que estamos analizando, pues la CAM, en un supuesto como aquél, no pudo verse sorprendida por el hecho de que el 29 de abril de 2010 se presentara en su Registro General un escrito de la UCM en que le requería para el cumplimiento de lo acordado en el Plan.".

De este modo, si prudentemente ha de apreciarse la concurrencia de causa de

inadmisibilidad, a los efectos de preservar la debida observancia de los contenidos que impone el artículo 24 de la C.e ., a efectos del ofrecimiento de una debida tutela judicial efectiva, adecuada a las condiciones y términos en que se plantea la controversia en cada caso, con mayor prevención habrá de acometerse la tarea de tal apreciación cuando de un procedimiento especial de protección de derechos fundamentales se trata, como sucede en este caso.

Así pues, no parece que podamos concluir en la existencia de un supuesto de inactividad de la Administración. Lo que, en el fondo, se plantea es la obligación -so riesgo de vulneración del artículo 23.2 de la C.e .- de la Administración de aprobar oferta de empleo público mientras existan plazas vacantes cubiertas por interino, y procesalmente es enfocado, identificando la actuación combatida como si de una inactividad del artículo 29.1 de la LJCA (RCL 1998, 1741) , pese a la existencia de dos Decretos del Gobierno de Aragón, que son contestación al requerimiento efectuado previamente por la entidad recurrente.

Y para que pueda prosperar tal enfoque, a criterio de la Sala, ha de existir, por una parte, una previa obligación legal en tal sentido, que no exija actuación previa de la Administración, y, por otra parte, que de tal obligación legal se derive un derecho para el reclamante con un contenido prestacional concreto y determinado que deba ser satisfecho mediante una también concreta actuación administrativa en tal sentido. Efectivamente, la Sala Tercera ha venido diciendo -por todas en su reciente sentencia de la sec. 3ª de 6 de julio de 2015, rec. 3164/2014 que "... la sentencia de esta Sala, Sección 7ª, de 24 de julio de 2000 (recurso contencioso-administrativo 408/2009) -cuya doctrina reitera luego la sentencia de la misma Sección 7ª de 8 de enero de 2013 (casación 7097/2010)- en la que quedan señalados los requisitos exigidos para que pueda ser acogida la pretensión fundada en la inactividad administrativa que regula el artículo 29.1 de la de la Ley reguladora de esta Jurisdicción . Allí se explica que en los casos en que -como aquí sucede- no se pretende el cumplimiento de una obligación nacida de un acto o contrato sino derivada directamente de una disposición general, " (...) para que pueda prosperar la pretensión se necesita que la disposición general invocada sea constitutiva de una obligación con un contenido prestacional concreto y determinado, no necesitado de ulterior especificación y que, además, el titular de la pretensión sea a su vez acreedor de aquella prestación a la que viene obligada la Administración, de modo que no basta con invocar el posible beneficio que para el recurrente implique una actividad concreta de la Administración, lo cual constituye soporte procesal suficiente para pretender frente a cualquier otra actividad o inactividad de la Administración, sino que en el supuesto del artículo 29 lo lesionado por esta inactividad ha de ser necesariamente un derecho del recurrente, definido en la norma, correlativo a la imposición a la Administración de la obligación de realizar una actividad que satisfaga la prestación concreta que aquél tiene derecho a percibir, conforme a la propia disposición general».".

Es conocido el dato de que el artículo 23.2 de la C.e . es un derecho de configuración legal y es dudoso que pueda resolverse a limine, como pretende la Administración demandada al formular la causa de inadmisibilidad que abordamos ahora, sobre la existencia de una obligación legal que pese sobre la Administración, por la previa

existencia de un determinado derecho a prestación concreta por el ciudadano en la línea de lo exigido, que emanaría directamente del texto constitucional, pues, prima facie, cabría pensar con sólido fundamento en que nos encontramos, precisamente, ante la cuestión que en el fondo se está debatiendo. Esto sería suficiente para, precisamente por lo cuestionable del planteamiento, rechazar la concurrencia de la causa de inadmisibilidad planteada por la Administración en su escrito de contestación a la demanda.

En segundo lugar, por concluir con el examen de los óbices procesales al conocimiento del fondo del asunto, sí habremos de pronunciarnos de manera más clara y rotunda en el sentido de entender que estamos ante una desestimación presunta de un determinado requerimiento solicitud, cuando, siquiera sea en parte, no merece concreta respuesta por parte de la Administración destinataria de aquélla. Es lo que aquí sucede cuando se solicita de la Administración la publicación de una OEP general para el año 2014, y se contesta con dos Decretos de oferta sectorial -ámbito educativo, por una parte, y, por otra, ámbito sanitario-, que abarca oferta alguna en el ámbito de la Administración General. Parece clara la desestimación presunta de la solicitud formulada, al menos parcialmente, ofreciendo, por consiguiente, fundamento adecuado para la admisión del recurso interpuesto, más cuando de la protección de un derecho fundamental se trata. Por lo tanto, habrá de entrarse a examinar el fondo del asunto, en los términos en que aparece planteada la cuestión. Las causas de inadmisibilidad opuestas deben se rechazadas ahora.

QUINTO

Pues bien, en cuanto al fondo, la cuestión que se plantea es si vulnera el artículo 23.2 de la C.e . la negativa -tácita, por omisión- de la Administración a la elaboración de la correspondiente Oferta de Empleo Público -general o sectorial, siendo esto indiferente- cuando existen plazas dotadas presupuestariamente, es decir, ya existentes, servidas por funcionarios interinos.

En realidad, la cuestión es una variante de otra ya resuelta por esta Sala en numerosas ocasiones, y en particular, de la resuelta por nuestra sentencia de 9 de diciembre de 2015, cuando veníamos a decir que la Administración infringe el artículo 23.2 de la C.e . cuando no incluye en su OEP todas las plazas servidas por funcionarios interinos, apreciando además en la citada que tales plazas no estaban afectadas por la limitación de porcentaje alguno de tasa de reposición establecida en ley de presupuestos.

Si entendíamos entonces que la Administración, so pena de vulneración del citado precepto constitucional, debe incluir en su Oferta de Empleo Público todas las plazas servidas por funcionario interino, sin limitación alguna, con mayor razón habremos ahora de concluir en que la Administración debe, por idéntica razón, elaborar Oferta de Empleo Público desde el momento en que se detecta y conoce que existen plazas dotadas por funcionarios interinos. Efectivamente, en nuestra sentencia de 9 de diciembre de 2015, rec. 119/15 , decíamos lo siguiente, por referencia a otra anterior sentencia también

nuestra de 10 de febrero de 2012 :

"La demanda que plantea la parte actora pretende que se declare la nulidad de los Decretos 83/2011 y 133/2011 que modifica el anterior del Gobierno de Aragón, por entender que vulneran el artículo 23.2 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) , pues, con independencia de las infracciones de legalidad ordinaria que aduce, pero que no son objeto del anterior recurso, entiende que también deberían haber sido objeto de la Oferta de Empleo Público las plazas vacantes dotadas presupuestariamente que figuran en las relaciones de puestos de trabajo y que están cubiertas por personal interino y por trabajadores temporales eventuales. Con la anterior pretensión muestra su disconformidad la Administración demandada y su conformidad el Ministerio Fiscal.

El caso aquí analizado ha sido analizado y resuelto respecto al ejercicio presupuestario correspondientes al año 2007, por el Tribunal Supremo que en sentencia de 29/10/2010 tiene declarado: "Entrando en el análisis del recurso planteado por ….se alega por esta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1 d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , la vulneración de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Constitución Española de 1978 .

Ha de acogerse este motivo de casación por las razones siguientes: En primer lugar, como sostiene la recurrente, el derecho de acceso al empleo público es un derecho fundamental de configuración legal, tal como expresamente dispone el artículo 23.2 de nuestra norma constitucional. Pues bien, ha sido en desarrollo de ese derecho constitucional de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, que el Estatuto Básico del Empleado Público (RCL 2007, 768) dispone en su artículo 10.4 que: "En el supuesto previsto en la Letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento, y si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización" y en el apartado 1 de este precepto se dispone que: "Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera".

Por su parte, el artículo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón sostiene que "las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios".

La claridad de estos preceptos no dejan duda de la ilegalidad de acuerdo impugnado, en este punto, al que restringe la recurrente el recurso de casación, y único en el que podemos entrar en consecuencia. Ahora bien, la cuestión es si nos encontramos ante una simple ilegalidad, o por el contrario la misma afecta al derecho fundamental. Y hemos de admitir que así es, pues no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos. Frente a dichos preceptos no cabe admitir los argumentos de la

Administración recogidos en la sentencia de que el hecho de no sacar todas las plazas de interinos se debía a la razón de mejorar los procesos selectivos futuros, impidiendo que bajara la calidad de los seleccionados y que en el futuro no pudieran haberse ofertas públicas, al no existir vacantes. Pero ello ocurrirá si los Tribunales calificadores no cumplen con el rigor de la exigencia de la capacidad y mérito necesario a la hora de seleccionar, no teniendo porque cubrirse todas las vacantes en el mismo proceso de selección.

Tampoco cabe alegar motivos económicos y de autoorganización, pues, las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos. En consecuencia, lo que no puede alegarse es el incumplimiento de la ley, cuando es clara y preciso, en desarrollo precisamente del derecho fundamental alegado por los recurrentes".".

SEXTO

Y en respuesta al alegato de la Administración demandada relativo a la limitación que pesa por vía de ley de presupuestos relativa a porcentaje de tasa de reposición de efectivos y su aplicación y extensión a empleo público ya creado y servido por funcionarios interinos, en el fundamento de derecho segundo de la sentencia de 9 de diciembre de 2015 , antes citada, decíamos lo siguiente:

"SEGUNDO: La prohibición de incorporación de nuevo personal y el establecimiento de una tasa de reposición prevista en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2015, no afecta a la obligación de incluir los puestos ocupados por interinos.

Como es de ver el único motivo de impugnación efectuado por la Administración autonómica es la existencia de esta prohibición de incorporación de nuevo personal en la Ley 36/2014 (RCL 2014, 1741 y RCL 2015, 403) de Presupuestos del Estado de 2015 al que se remite la Ley 13/14 de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Para la defensa de la Administración autonómica, las leyes de Presupuestos desplazan la vigencia de los preceptos de las leyes funcionariales que obligan a incluir las plazas ocupadas por interinos en la siguiente Oferta de Empleo Público.

Esta cuestión ya fue resuelta por este Tribunal en la Sentencia aludida de 10 de febrero de 2012 , para desestimarla. Decíamos en aquella Sentencia:

Pues bien, a tenor de la anterior doctrina es obvio que la administración demandada vulneró el principio de igualdad en el acceso de la función pública, al omitir en el oferta de empleo público la relación de las vacantes cubiertas por personal interino sin que pueda inferirse conclusión distinta de Leyes de Presupuestos Estatal y Autonómica, y así la Ley de Presupuestos 11/2010 de 29 de diciembre de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de Aragón en su artículo 31.5 dice: "La Oferta de empleo público se regirá por lo dispuesto, con carácter básico en esta materia, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2011" y la Ley 39/2010 de 22 de diciembre (RCL 2010, 3233) de Presupuestos Generales del Estado para el 2011 prevé en su artículo 23 uno bajo el

epígrafe de "Oferta de Empleo Público y otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades del personal" "Durante el año 2011, el número total de plazas de nuevo ingreso de personal de sector público delimitado en el artículo anterior será, como máximo, igual al 10% de la tasa de reposición de efectivos y se concretará en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Dentro de este límite, la Oferta de empleo público incluirá los puestos y plazas desempeñados por personal interino por vacante, contratado o nombrado con anterioridad, excepto aquellos sobre los que exista reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se decida su amortización. No se tomarán en consideración a efectos de dicha limitación las plazas que estén inmersas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico de funcionario Público", sin que a tenor de la doctrina que emana de la sentencia del Tribunal Supremo referida pueda sostenerse que exista identidad entre la oferta de plazas de nuevo ingreso para el sector público que, como máximo será el 10% de la tasa de reposición de efectivos, con la Oferta de empleo público de las plazas cubiertas por personal interino, que con arreglo a los preceptos legales y doctrina enunciada deben ser incluidas, sin que la Administración a tenor de lo expuesto pueda aducir motivos económicos y de autoorganización para no dar cumplimiento a lo anterior.

Por tanto y como informa el Ministerio Fiscal, la interpretación correcta de esta norma prohibitiva es que las plazas vacantes y ocupadas por interinos, no deben de quedar afectadas por esta prohibición, ni deben de estar dentro de la tasa de reposición. Y ello por la sencilla razón -como ya decía el Tribunal Supremo en las Sentencias citadas y se reitera en la demanda- de que no hay motivo económico que lo avale, pues las plazas están dotadas presupuestariamente y no se da por tanto la justificación de la limitación de la Ley de Presupuestos que no es otra que el ahorro y el no incremento del déficit público.

Es más. Si la Sala ya entendió que no era aplicable esta limitación a la vista de la Ley de Presupuestos para el año 2011, que contenía la expresión Dentro de este límite, la Oferta de empleo público incluirá los puestos y plazas desempeñados por personal interino por vacante, contratado o nombrado con anterioridad, excepto aquellos sobre los que exista reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se decida su amortización, tanto más ocurre si se aplica el art. 21 de la Ley de Presupuestos para el año 2015 (en igual sentido los arts. 23 de la Ley 2/2012 de Presupuestos para el 2012 , art. 23 de la Ley 17/2012 para el año 2013 , art. 21 de la Ley 22/2013 (RCL 2013, 1843 y RCL 2014, 300) para el año 2014) en cuyo tenor literal, ni siquiera se sostiene esta previsión de que dentro de este límite se incluyen los puestos desempeñados por interinos. Quiere decirse que aplicando en su literalidad la Ley de Presupuestos del año 2015, que a diferencia de las normas de Presupuestos de 2011 ya no indica que "dentro de este límite se incluirán los puestos y plazas desempeñados por interinos" no es posible sostener que la prohibición de contratar y la tasa de reposición deben de incluir a los puestos ocupados por interinos. Estos puestos se incluirán siempre, fuera de los puestos que constituyen la tasa de reposición. A sensu contrario así lo entiende la STSJ de Castilla La Mancha de 23 de julio de 2015 y otras dictadas con la misma doctrina.

Esta Tribunal -al momento de redactar la presente resolución- ha tenido a la vista las Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2013 y de 2 de diciembre de 2015 , que abordando este problema sostienen que no son contrarias al art. 23.2 de la Constitución dos Ofertas de empleo público estatales en las que la Administración vinculada por la prohibición de incorporar nuevo personal considera que la obligación establecida por el art. 10.4 del EBEP (RCL 2007, 768) , queda desplazada por lo dispuesto en la Ley de Presupuestos.

Pues bien incluso a la vista de lo razonado por el Tribunal Supremo, este Tribunal Superior sigue considerando que debe estimarse la demanda al concluir que no incluir en la Oferta de empleo público las plazas funcionariales ocupadas en el Presupuesto anterior por interinos, no sólo vulnera el ya reiterado art. 10.4 del EBEP y el art. 7.4 de nuestra ley de función pública, sino también constituye una practica contraria al principio de igualdad en el acceso a las funciones públicas, pues como decía la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 "pues no hay mayor negación del derecho consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos" y entiende este Tribunal se vulnera este precepto constitucional, en este concreto caso de oferta de empleo público por los siguientes argumentos adicionales:

1º) El propio Tribunal Supremo dice que estas Sentencias no contradicen la Sentencia de 29 de octubre de 2010 . No hay por tanto un cambio de criterio y ello porque ha de aplicarse esta doctrina dentro del periodo temporal y territorial de aplicación. Simplemente dice que no es aplicable al doctrina de la Sentencia de 2010 a los supuestos enjuiciados en el año 2013 y en el año 2015. E indica:

Del mismo modo debemos manifestar que la sentencia del TS, de 29 de octubre de 2010 (RJ/2010/8233), no es aplicable al supuesto de autos, por referirse a un Decreto autonómico y a 'funcionarios y empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Aragón", al tiempo que se trata de un recurso, el de la instancia, seguido por el procedimiento especial de Protección de los Derechos Fundamentales de la persona.

En el recurso anterior, el 2210/2007, se trataba por otra parte, de delimitar si los funcionarios afectados de la Comunidad Autónoma de Aragón tenían derecho a que se ofertaran y por tanto se anunciaran las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos, equiparando los dos grupos de funcionarios.

A mayor abundamiento, aquella Oferta de Empleo Público no se encontraba limitada, como acontece ahora, por una norma de superior rango, cual es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que impide expresamente" incorporar nuevo personal en el sector público", a excepción de un 10% e la tasa de reposición en determinados sectores.

Por tanto, de dicha sentencia se deduce que la doctrina contenida en la sentencia de 29 de octubre de 2010 , rec..ordinario nº 2448/2008, no es aplicable al caso, ya que en el supuesto contemplado en ésta se resolvía sobre un supuesto en que la OEP de la Comunidad de Aragón que no se ajustaba a la normativa de función pública de la misma aplicable en aquel momento, lo que no es nuestro caso. Por el contrario, en la STS de 20-

11-2013 se determina que ".....ha de estarse al marco regulador del período controvertido" así como a ". . . que si el poder legislativo en uso de sus facultades decidió que los Cuerpos funcionaria/es al servicio de la Administración de Justicia no debían ser objeto de convocatoria de plazas, a ello debemos estar".

2º) No considera este Tribunal que el juicio de inferencia establecido en las aludidas Sentencias por el Tribunal Supremo, cuando indica que la prohibición de incorporación de nuevo personal, desplaza la obligación que tiene la Administración de incorporar las plazas ocupadas por interinos sea favorable a una interpretación adecuada al art. 23.2 de la Constitución , teniendo en cuenta que existiendo diferentes interpretaciones de la norma, siempre ha de acogerse la más favorable al ejercicio de ese derecho.

En primer lugar porque como ya ha razonado este Tribunal en las Leyes de Presupuestos de 2011 y anteriores se establecía que dentro de este límite se incluirán las plazas ocupadas por interinos, algo que ahora no se dice. Si en esta Ley de Presupuestos, no se obliga a este cómputo de plazas obligado es concluir que ahora esta limitación no afecta a la obligación de los arts. 10.4 del EBEP y art. 7.4 de la Ley de función pública de Aragón.

En segundo lugar porque no se vulnera la Ley de Presupuestos, dado que no hay incorporación de nuevo personal. La sistemática establecida en la norma estatal y autonómica es clara, salvo que la propia norma presupuestaria así lo diga -y ya hemos visto que aquí no-, en el mismo momento en que se cubre una plaza por interino la misma deja de estar vacante para considerarla incluida en la oferta y como dice la norma, o se incluye en la oferta o se amortiza.

En tercer lugar porque no se ataca el fin fundamental de la norma que es el ahorro público. Es más como se dice en la demanda es menos oneroso para la Administración convocante incluir la plaza en la Oferta de Empleo Público que mantenerla ocupada por un interino, que -como ocurre en tantas ocasiones-, devenga retribuciones por antigüedad, que no tiene el nuevo funcionario.

Y en cuarto lugar pero no por ello menos relevante, porque la interpretación que se sostiene de estas Sentencias del Tribunal Supremo, no son respetuosas con el derecho de igualdad en el acceso al servicio público. Si la Administración amparándose en esa prohibición de incorporación de nuevo personal, no tuviese la obligación de incorporar las plazas de interinos, estaría -como también se dice en la demanda-, desnaturalizando la estructura de nuestro sistema de incorporación en condiciones de mérito e igualdad a la función pública, permitiendo que el personal interino se mantengan indefinidamente en su puesto de trabajo, sin permitir que adquiera la condición de funcionario quien tiene más mérito y capacidad y así lo acredita en un proceso en condiciones de igualdad. Piénsese que con esa interpretación del Alto Tribunal, bastaría con cubrir todas las plazas con personal interino, además sin límite en cuanto a su incorporación, con lo que se conseguiría no solo evitar incluirlas en la siguiente Oferta de empleo público, sino incluso convirtiendo en ordinaria la provisión por interino, cuando es claramente extraordinaria. No puede olvidarse que los preceptos que este Tribunal considera que son vulnerados (art. 10.4 EBEP y art. 7.4 de la Ley de Función Pública de Aragón), obligan a

la Administración a incluir estas plazas, no tanto por motivos económicos, sino para evitar el abuso de esta figura de interinaje. Abuso que entiende este Tribunal viene favorecido por la interpretación de las normas que hace el Tribunal Supremo.

Por todo ello, procede estimar la demanda en este punto, sin que sea preciso plantear la cuestión de inconstitucionalidad que se solicita." .

Todo lo anterior conduce a la estimación de la demanda en los términos en que es planteada la pretensión de la actora, conforme al suplico de la misma.

SÉPTIMO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1, de la Ley Jurisdiccional , procede imponer las costas del presente recurso a la parte demandada, al estimarse íntegramente la demanda y no apreciar la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición, si bien al amparo de la facultad prevista en el apartado tercero de dicho artículo, se determina que el importe de las mismas no podrá rebasar la cantidad de 1.500 euros.

Por todo lo cual,

FALLAMOS

*Que **DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS** , el recurso contencioso-administrativo - procedimiento de protección de derechos fundamentales- nº 44/2015 interpuesto por la Procuradora Dña. María Soledad Gracia Romero, en nombre y representación de la entidad...., frente a la desestimación presunta de su solicitud de 8 de noviembre de 2014, al Consejero de Hacienda y Administración Pública, que **ANULAMOS** , por vulnerar el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, **CONDENANDO** a la Diputación General de Aragón a que apruebe Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2014, en el ámbito de la Administración General, con expresa condena en costas a la Administración demandada, en los términos expuestos en el último fundamento de derecho de esta sentencia."*

2. INTERPRETACIÓN DOCTRINAL DEL DERECHO PÚBLICO ARAGONÉS

Damos noticia de los libros y artículos de los que hemos tenido conocimiento durante 2016:

- *Derecho y políticas ambientales en Aragón*. Salamero Teixidó, Laura. Revista Catalana de Dret Ambiental, 2016.

- *Jurisrprudencia ambiental en Aragón*. Salamero Teixidó, Laura. Revista Catalana de Dret Ambiental, 2016.

- *Oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y vacantes desempeñadas por funcionarios interinos: entre la obligación de incluirlas todas, la prohibición de hacerlo y el derecho fundamental de acceso: (a propósito de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 9 de diciembre de 2015).* Canal Fernández, Luis. Actualidad administrativa, 2016.

- *Crónica legislativa de Aragón. Primer Semestre de 2016*. García Fernández, Fernando. Revista de Llengua y Dret, 2016.

- *El sistema electoral a las Cortes de Aragón: las elecciones de mayo de 2015 en su contexto.* Arruego Rodríguez, Gonzalo. Revista general de derecho constitucional, 2016.

- *Una breve historia del Estatuto de Autonomía de Aragón en materia de aguas.* Castro Marquina, Gonzalo. Revista Aragonesa de Administración Pública núm. 47-48 (2016).

- *Una apuesta por las políticas sociales en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016.* Carrero Manero, Olga. Revista Aragonesa de Administración Pública núm. 47-48 (2016).

- *El marco normativo de la transparencia para las entidades locales aragonesas.* Sanmartín Mora, María Asunción. Anuario Aragonés del Gobierno Local 7 , (2015). Publicado en 2016.

ACTUACIONES CONDUCENTES A LA DIFUSIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARAGONÉS

Las actividades realizadas por la Institución a lo largo de 2016 en este apartado han sido las siguientes:

1º.- Programa de ayudas

Continuación del programa de ayudas a la matriculación en el Curso monográfico de Derecho Aragonés, impartido por la Universidad de Zaragoza, Cátedra de Derecho Aragonés José Luis Lacruz Berdejo, a través de la Escuela de Práctica Jurídica.

2º.- Becas para el estudio del ordenamiento jurídico aragonés

En el 2016, se declaró desierta esta beca.

3º.- Publicaciones sobre Derecho Aragonés

* Actas de los Vigesimoquintos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, en el que se recogen las ponencias de las sesiones celebradas durante los martes del mes de noviembre y primero de diciembre del año 2015, sobre los temas siguientes:

- *Homenaje a los hispanistas suecos estudiosos de los Fueros: Gunnar Tilander y Max Gorosch.* Por D. José Antonio Escudero y D. Antonio Pérez Martín.

- *25 años del Foro de Derecho Aragonés: presente y futuro del Derecho Aragonés.* Por D. Jesús Delgado Echeverría y D. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer.

- *Espacios naturales protegidos: ¿oportunidad o limitación de derechos?* por Dª. María Martínez Martínez, D. Joaquín Guerrero Peyrona y D. Pablo Munilla López.

- *Reglamento sucesorio europeo y derecho interregional.* Por D. Francisco de Paula Puig Blanes, D. Juan María Díaz Fraile y D. Javier Pérez Milla..

- *Seguros de vida, fondos de pensiones e instrumentos de previsión en el régimen económico matrimonial y la sucesión por causa de muerte.* Por D. Luis Alberto Marco Alcalá, D. Fernando Félix Alonso Andrío y D. José Antonio Montón del Hoyo.

* Nº 56 de la colección del Justicia, "*Crisis de familias transnacionales y Derecho civil de Aragón: ideas esenciales*", cuyo autor es D. Francisco de Paula Puig Blanes.

* Nº 57 de la colección del Justicia, *"Antología de documentos de Derecho civil histórico aragonés (1423-1798)"*, cuyo autor es D. Manuel Gómez de Valenzuela.

* Nº 58 de la colección del Justicia, *"El derecho de abolorio en Aragón"*, cuyo autor es D. Emilio Latorre Martínez de Baroja.

4º.- Foro de Derecho Aragonés.

En el mes de septiembre de 2016 se firmó por la Institución El Justicia de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación, la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, el Ilustre Colegio de Abogados de Huesca, el Ilustre Colegio de Abogados de Teruel, el Ilustre Colegio Notarial de Zaragoza, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Aragón y el Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza, el convenio de colaboración para la celebración de los «Vigesimosextos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés», que tuvieron lugar en cuatro sesiones durante el mes de noviembre, con el siguiente programa de ponencias:

- Día 8 de noviembre de 2016 en Zaragoza: *Elogio del periodista cabal,* por D. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer.

- Día 15 de noviembre de 2016 en Zaragoza: *Régimen jurídico de las comunidades y sociedades privadas de montes,* por D. José Luis Argudo Périz, D. David Arbués Aísa y D. Miguel Temprado Aguado.

- Día 22 de noviembre de 2016 en Zaragoza: *El Derecho Foral Aragonés ante el alzheimer",* por D. Armando Barreda Hernández, D. Daniel Bellido Diego-Madrazo y D. Francisco Javier Hernáiz Corrales.

- Día 29 de noviembre de 2016 en Huesca: *La sucesión legal a favor de la Comunidad Autónoma de Aragón,* por D. Miguel Lacruz Mantecón y D. Vitelio Manuel Tena Piazuelo.

Actualmente se está preparando la edición de las Actas con el contenido de las Ponencias.

5º.- Revista Aragonesa de Derecho Civil

Esta revista, de periodicidad semestral, está editada por la Institución Fernando el Católico dentro de la Cátedra "Miguel del Molino", y comenzó su andadura en 1995. La revista está dirigida por D. Jesús Delgado Echeverría, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza y Director de la cátedra "Miguel del Molino". Su Consejo Asesor está integrado por una nutrida representación de todas las profesiones jurídicas aragonesas. La Institución del Justicia de Aragón está también presente en el citado Consejo.

6º.- Revista Aragonesa de Administración Pública.

Esta revista, de periodicidad semestral, está editada por el Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y dirigida por el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, D. Fernando López Ramón. El Justicia de Aragón colabora con la misma formando parte de su Consejo de Redacción.

7º.- Otras actuaciones.

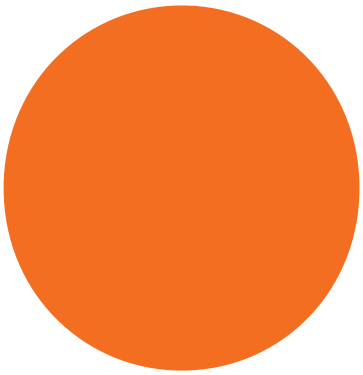
Dentro de este apartado incluimos la participación de esta Institución en las "*XIV Jornadas de la Constitución: el papel de las fuerzas armadas en la Constitución*". (Organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y el Justicia de Aragón).

La jornada tuvo lugar el día 12 de diciembre de 2016.

Las Ponencias fueron las siguientes:

- "El papel de las fuerzas armadas en la Constitución de 1978". D. Luis Lanchares Dávila, General de Brigada. General Director de la Academia General Militar.

- "La Constitución de 1978 y la ordenación de la defensa en España". D. Roberto Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Santiago de Compostela



TELÉFONO GRATUITO
DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS:
900 210 210

OFICINAS DE ATENCIÓN:
Zaragoza: c/ Don Juan de Aragón, 7
Huesca: Avda. Santo Grial, 2, 5ª planta (lunes y martes)
Teruel: c/ San Vicente de Paúl, 1 (lunes y martes)

www.eljusticiadearagon.es
informacion@eljusticiadearagon.es